

COLECCIÓN **K** movimiento



A CONTRACORRIENTE de la hegemonía conservadora

Beatriz Stolorowicz

Espacio crítico Ediciones



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOC-MILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades



ITACA

A CONTRACORRIENTE de la hegemonía conservadora

Beatriz Stolowicz

COLECCIÓN  movimiento

Espacio crítico Ediciones



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades



ITACA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector general, Enrique Fernández Fassnacht
Secretaria general, Iris Santacruz Fabila

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO

Rector, Salvador Vega y León
Secretaria de Unidad, Patricia E. Alfaro Moctezuma

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Director, Jorge Alsina Valdés y Capote
Secretario Académico, Carlos Alfonso Hernández Gómez
Jefe de la sección de publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa Carranza

CONSEJO EDITORIAL

José Luis Cepeda Dovala (presidente) / Ramón Alvarado Jiménez
Roberto M. Constantino Toto / Sofía de la Mora Campos
Arturo Gálvez Medrano / Fernando Sancén Contreras

COMITÉ EDITORIAL

Jaime Osorio Urbina (presidente)
Verónica Alvarado Tejeda / Aleida Azamar Alonso
Anna María Fernández Poncela / Felipe Gálvez Cancino
Ignacio Gatica Lara / Laura Patricia Peñalva Rosales
Alberto Isaac Pierdant Rodríguez / Carlos Andrés Rodríguez Wallenius
José Alberto Sánchez Martínez / Araceli Soní Soto

Asistencia editorial, Varinia Cortés Rodríguez

ISBN: 978-607-477-837-3

Primera edición para México: 29 de noviembre de 2012
DR © Universidad Autónoma Metropolitana

Primera edición para Colombia: Bogotá, abril de 2012.

© Espacio Crítico – Centro de Estudios, Bogotá

© El autor. Todos los derechos reservados.

Editores: Jairo Estrada Álvarez, Jesús Gualdrón Sandoval

ISBN: 978-958-46-0353-1

Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso del editor.

Diseño y diagramación
Tatianna Castillo Reyes

UAM-Xochimilco
Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud
Coyoacán, CP. 04960, México DF.
pubcsh@correo.xoc.uam.mx

Impreso en Editorial Itaca, México D.F.
Piraña 16 Colonia Del Mar Del. Tláhuac México D.F.



- 09 Prefacio
- 13 El “posneoliberalismo” y la reconfiguración del capitalismo en América Latina
- El nuevo momento latinoamericano
 - Veinte años de “posneoliberalismo”
 - La reconfiguración capitalista
 - La reestructuración de la sociedad*
 - La utilidad de lo social*
 - La importancia del Estado y la reconfiguración del poder*
 - Un punto de llegada
 - Nuevas interrogantes
- 39 Gobernabilidad como dominación conservadora
- I. Gobernabilidad como democracia: intencionalidad y confusiones
 - II. El argumento conservador
 - III. La estrategia de gobernabilidad en América Latina
 - Transformaciones económico-sociales*
 - Manejo de conflictos*
 - Transformaciones valóricas*
 - Control mediante las prácticas del sistema político*
 - IV. Pactos para una democracia “viable”
 - V. ¿Gobernabilidad “progresista”?

- 59 Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política
- Introducción
 - Gobernabilidad como versión de democracia
 - Autonomía de la política y transición
 - Modernización política o neo-oligarquización
 - Gobernabilidad e ingobernabilidad en América Latina
 - La gobernabilidad como regionalización de la política
 - Una reflexión final
- 89 La izquierda, el gobierno y la política: algunas reflexiones
- El crecimiento de la izquierda
 - “Corporativismo” popular y gobiernos de izquierda
 - Gobiernos locales, democratización y gobernabilidad
 - Izquierda y democracia
- 125 Democracia gobernable: instrumentalismo conservador
- Marxismo latinoamericano y democracia
 - Liberalismo y democracia
 - Gobernabilidad: dominación conservadora
 - La democracia gobernable
 - La crisis de la democracia gobernable
 - Perspectivas y desafíos
- 155 El desprestigio de la política: lo que no se discute
- El problema
 - La política como parlamentarismo
 - Parlamento sin democracia*
 - Parlamentarismo como mediación*
 - Parlamentarismo como control*
 - La instauración de regímenes liberales en América Latina
 - La política de izquierda en los marcos de la gobernabilidad conservadora
 - Contradicciones en los escenarios de gobernabilidad
 - Crisis de representación: un origen, dos direcciones
 - Las falsas contradicciones en las críticas actuales
 - Aclaraciones finales

- 185 Lo social y lo político: desafíos urgentes de las luchas populares en América Latina
- Aclaración previa
 - Las paradojas de la nueva coyuntura
 - El impacto de la crisis argentina
 - La vastedad de la crisis social y política latinoamericana
 - Las estrategias dominantes: neoinstitucionalismo, neocolonialismo y represión
 - Stiglitz: salvar al sistema
 - Lo social y lo político: discrepancias, coincidencias, responsabilidades
- 217 América Latina: estrategias dominantes ante la crisis
- La crisis política en el origen
 - Las **propuestas** neoinstitucionales del Banco Mundial
 - El neoinstitucionalismo realmente existente
 - Una reflexión final
- 247 La izquierda latinoamericana: gobierno y proyecto de cambio
- Una nueva realidad latinoamericana
 - Especificidades del contexto político en que actúa la izquierda
 - Lo local en debate
 - Gobiernos y elecciones
 - Unas palabras finales
- 271 Apuntes para pensar la autonomía universitaria hoy
- 283 La tercera vía en América Latina: de la crisis intelectual al fracaso político (fragmento)
- La batalla de ideas aún perdida
 - De los dos demonios al tercerismo
 - Antiestatismo y estatismo
- 299 La izquierda latinoamericana y las encrucijadas del presente
- La mirada
 - Una compleja dualidad

Rutas y ritmos
Nuevo cambio de escenario
Encrucijadas para la izquierda

313 La izquierda que gobierna en América Latina: elementos para un balance político

1. ¿Izquierda realmente existente?
2. La heterogeneidad de la izquierda latinoamericana
3. La “amplitud” de los gobiernos de izquierda

La influencia del posliberalismo de derecha

La dualidad gubernamental y sus límites

4. Dirección y ritmo de los cambios
5. Instituciones, participación y poder social
6. La izquierda necesaria y el partido
7. Entre el ser y el deber ser, un balance abierto

351 Los desafíos del pensamiento crítico

363 El debate actual: posliberalismo o anticapitalismo

La actualidad de Rosa Luxemburgo
No era un debate táctico
El capitalismo se reforma
Cuando se convirtió en un debate táctico
El posliberalismo
El neodesarrollismo posliberal
Posliberalismo o anticapitalismo

Prefacio

Mi amigo y colega de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Jairo Estrada Álvarez, es quien me ha impulsado a navegar hacia esta aventura. De no ser por él, nunca me habría propuesto reunir algunos trabajos que han sido publicados en distintos países y momentos, productos de más de una década de investigación y reflexión.

Para quienes no hacemos filosofía política abstracta –que sólo está exigida por su coherencia interna–, sino que estamos empeñados en estudiar y tratar de explicar(nos) la realidad y procesos de Nuestra América compartiendo los anhelos de emancipación de nuestros pueblos, asomarnos a la historicidad de nuestro propio quehacer constituye un desafiante ejercicio de autocrítica.

Nos confronta con lo que hemos pensado, afirmado o sugerido en el devenir de los procesos; muchas veces cuando éstos no han develado sus rasgos constitutivos ni sus articulaciones y siempre antes de contar con la certidumbre de los resultados, pero intentando descubrir las tendencias. Da cuenta de la evolución de nuestro propio proceso de conocimiento, de sus aciertos y falencias. Y al mismo tiempo refresca la memoria sobre las complejidades y desafíos para la acción y para la abstracción cognitiva en cada momento histórico, en advertencia contra el fácil expediente de las racionalizaciones a posteriori.

Todo trabajo es un abordaje particular de la totalidad compleja, cuyo logro en expresar sus principales rasgos no está asegurado de antemano. No obstante esa probable limitación de los aquí seleccionados, el ejercicio emprendido

permitió una aproximación a esta apasionante realidad latinoamericana: de vertiginosos cambios en las coyunturas, con temas y problemas nuevos, en las que, sin embargo, se asoman entre la enjundia de acontecimientos profundas líneas de continuidad.

Pese a lo reveladora que ha sido para esta autora la tarea de reunir estos trabajos, cabe interrogarse si esta somera retrospectiva tendría algún interés para el eventual lector o lectora de estas páginas. Desconozco la respuesta. Pero con el deseo de compartir con honestidad estos momentos de los últimos quince años de investigación, he propuesto un ordenamiento de los mismos que trascienda lo testimonial y permita, en cambio, abonar a una reflexión de más largo plazo sobre nuestra región. Compartiendo la premisa metodológica de que desde las estructuras y fenómenos complejos es posible conocer mejor sus antecedentes históricos y partes constitutivas, y no a la inversa, este volumen comienza con el más reciente texto de 2011 que intenta una síntesis del proceso de las dos últimas décadas. Para, desde este mirador más actual, recorrer de manera cronológica los momentos de análisis con que se fueron abordando.

En diálogo crítico con esa historicidad, se han introducido algunos comentarios que han sido señalados con asteriscos para no alterar las notas originales. No se ha podido resolver satisfactoriamente la desventaja que tiene toda compilación de trabajos que están dirigidos a distintos públicos y contextos, que es la repetición de ideas o de ilustraciones empíricas. Cuando ha sido posible suprimir la repetición de citas o referencias contenidas en trabajos precedentes, esto ha sido señalado invitando a dirigirse a esas primeras apariciones.

Oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorriente de lo aceptado. La conocida afirmación de Marx de que las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad, es menos tautológica de lo que parece y más difícil de demostrar de lo que se cree. Ideas que parecen obvias, lógicas, naturales, expresadas con palabras que todos usan para nombrar lo que “es”. Un léxico que legitima la semántica que los poderosos socializan como sentido común, y que predetermina desde

dónde se piensa la realidad, incluso para cuestionarla. Las ideas dominantes arraigan a través de procesos sociales que hacen “creíble” el modo como se les nombra, y condicionan las conductas. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas. No para descalificar a los oprimidos y sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores.

Con frecuencia esta árida responsabilidad intelectual y política se confunde con el pesimismo. El conocimiento no es pesimista ni optimista, persigue la objetividad. El pesimismo o el optimismo son el modo como hacemos frente a sus consecuencias prácticas, resignándonos a ellas o buscando superarlas. El empeño por estar a contracorriente de la hegemonía conservadora es, a su manera, una forma de lucha por la emancipación. Y es nuestra aspiración.

Beatriz Stolowicz

Ciudad de México, noviembre 2011.

El “posneoliberalismo” y la reconfiguración del capitalismo en América Latina (2011)*

El nuevo momento latinoamericano

Al terminar la primera década del siglo XXI nos encontramos en un momento complejo en América Latina, para el que no alcanzan las arengas o las expresiones de deseo. Sin perder de vista las grandes posibilidades de disputa de proyectos que se han abierto en la región, parecen confirmarse las inquietudes que señalábamos a finales de 2007 sobre los gobiernos de izquierda¹, cuando decíamos que en estos procesos en construcción “el movimiento no lo es todo” –rebatiendo a Bernstein– y que es decisiva su dirección; que la derecha ha puesto todos sus recursos económicos, políticos, militares y simbólicos para disputar y definir esa dirección, y que queda por saber si las fuerzas que aspiran a la igualdad y a la emancipación humana la disputarán efectivamente. Un requisito para ello es tener claro cuál es el terreno de la disputa.

En el último lustro, las discusiones sobre América Latina se centraron en esas nuevas experiencias de gobierno, como es lógico con gran entusiasmo, al punto de que llegó a ponerse de moda parafrasear de que se trata de un “cambio de época”. Los triunfos electorales de la derecha se consideraban una excepción, no muy bien explicada, y a veces endosada a un atávico ultraizquierdismo. Al finalizar la década, produce cierto desconcierto comprobar las falencias de tales apreciaciones volitivas. El avance de la derecha franca

* Las tesis de este trabajo fueron presentadas en el VII Seminario Internacional Marx Vive: *América Latina en disputa. Proyectos políticos y (re)configuraciones del poder*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 29 de octubre de 2010.

1 En: “La izquierda que gobierna en América Latina: elementos para un balance político”, Beatriz Stolowicz (Coord.), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Bogotá, Ediciones Aurora, 2007 (en este volumen).

en algunos países, los signos de estancamiento en la captación del electorado por la izquierda donde ya gobierna y un reflujo en los impulsos de cambio han conducido a replantear los análisis sobre la región.

Sobre todo en los anteriores cinco años, dado el carácter inédito de la coyuntura por el protagonismo popular y por su contenido ético, los análisis sobre América Latina se centraron en la democratización de los regímenes políticos y en los procesos constituyentes allí donde gobierna la izquierda y el centroizquierda. En su mayoría se trató de análisis eminentemente superestructurales, en los que se asimiló aparato de Estado a poder de Estado, y se atribuyó autonomía a lo político dejando fuera el análisis estructural de la reproducción económica y de las clases (aunque, a veces, esto último se ha asomado implícitamente bajo la forma de un posibilismo político). Por lo cual se desestimó que cada modelo económico exige un determinado modelo político y social, que éste no puede ser pensado al margen de aquél, más allá de la retórica o los liderazgos carismáticos.

En un segundo plano quedaron los análisis originados en los países donde, desde hace mucho tiempo, se ejecuta la estrategia para estabilizar política y socialmente la reestructuración capitalista neoliberal. Situados necesariamente en una temporalidad más prolongada y en una más clara articulación analítica entre economía y política, desde estos análisis era posible observar fenómenos análogos a los de algunos de los procesos progresistas. Pese a lo cual, era difícil la interlocución.

Ahora empieza a haber un terreno común de preocupación sobre el patrón de acumulación primario-exportador extractivista y financierizado bajo dominio transnacional, que es impulsado, garantizado y financiado por los Estados latinoamericanos. Que salvo contadas excepciones o matices, y por eso muy valiosas, se ejecuta en todos los países de la región, a pesar de las diferencias sociopolíticas o incluso explotando la legitimidad mayor de los gobiernos de izquierda o centroizquierda para ejecutarlo.

Aunque la convergencia de preocupaciones es más reciente, el fenómeno no es nuevo. Tiene más de una década que, tras las crisis financieras (particularmente las de 1995 y 1997), masas de capital excedente en riesgo de desvalorización en la especulación buscan reciclarse en la acumulación por desposesión² con asiento territorial, tanto en el saqueo de recursos natu-

2 La categoría *acumulación por desposesión* ha sido acuñada por David Harvey,

rales como en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; y que buscan recuperar la acumulación ampliada mediante la construcción de infraestructura –de más lenta rotación pero asegurada por el Estado–, que a su vez potencia la acumulación por desposesión con el abaratamiento de la extracción de esas riquezas naturales. No olvidemos que la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica) y el Plan Puebla Panamá (ahora Proyecto Mesoamérica) tienen ya una década (desde 2007 directamente articulados por la pertenencia de Colombia a ambos).

Lo nuevo es que también donde gobierna la izquierda o el centroizquierda el capital transnacional haya encontrado condiciones óptimas de estabilización en la crisis capitalista, pues además lo logra con legitimación política.

Es nuevo, además, que en varios de esos países este patrón de acumulación –con los cambios institucionales, políticos y sociales que le son consustanciales– sea promovido a nombre de un “nuevo desarrollo”, con el despliegue de una retórica “neo-desarrollista” que explota las reminiscencias simbólicas del viejo desarrollismo redistribuidor latinoamericano, que en nada es similar. Donde gobierna la derecha se ejecutan esas mismas líneas estratégicas y sus políticas aunque no se les adose el rótulo de “neodesarrollismo”.

Lo nuevo, empero, no ha surgido por generación espontánea. Por el contrario, sostengo la tesis de que estamos asistiendo a un punto de llegada de realización exitosa de la estrategia dominante ejecutada desde hace veinte años para estabilizar y legitimar la reestructuración del capitalismo en América Latina, planteada por sus impulsores como “posneoliberalismo”.

Varias de las interrogantes sobre el devenir de los proyectos comúnmente denominados alternativos, y sobre su efectiva capacidad de disputa, encontrarían respuestas más claras en referencia o contrastación con esa estrategia dominante, en cuanto a qué tanto significan una ruptura o apuntan a ello. Para lo cual es necesario trascender el tiempo corto de lo electoral, que sobredetermina los análisis y las dinámicas de los proyectos de cambio en la región, y elevar la mirada a una más larga duración.

aludiendo a la práctica permanente en la reproducción capitalista actual de lo que Marx llamó *acumulación originaria*, como signo del nuevo imperialismo.

Veinte años de “posneoliberalismo”

Desde comienzos de la década de 1990, la estrategia para estabilizar la reestructuración capitalista neoliberal en América Latina fue planteada oficialmente en tres etapas sucesivas: una primera de “ajuste, estabilización e inicio”; una segunda de “profundización de las reformas estructurales”, y una tercera etapa de “consolidación de las reformas y restauración de los niveles de inversión”³. La primera etapa, de demolición del patrón de acumulación anterior y sus instituciones, se había ejecutado en los anteriores años setenta y ochenta bajo dictaduras militares y autoritarismos civiles; la segunda y tercera etapas debían implementarse ya bajo las “nuevas reglas del juego” de regímenes representativos, *democracias*. La idea de una sucesión estaba más claramente inspirada en Chile, donde la demolición del patrón de acumulación había sido completada bajo la dictadura de Pinochet. En otros países, en lugar de una sucesión debieron superponerse etapas, como por ejemplo en Brasil y México, superponiendo también la retórica correspondiente a cada una. Con una mirada retrospectiva, cabe inquirir si la tercera etapa de “consolidación de las reformas y restauración de los niveles de inversión” no estaría siendo ejecutada, en la primera década del siglo XXI, por algunos de los nuevos gobiernos *progresistas*.

Definidos los objetivos, al mismo tiempo se iba formulando la estrategia para avanzar ese camino, cuyas líneas maestras encaraban las dimensiones políticas, institucionales y sociales para dar seguridad a la profundización de la reestructuración capitalista, para estabilizarla y legitimarla. Esa estrategia multidimensional fue impulsada desde 1990 por la “nueva” Cepal neoestructuralista, por el BID presidido por el ex cepalino Enrique Iglesias⁴, y en la segunda mitad de los noventa también por el Banco Mundial con Joseph Stiglitz como Economista Jefe y con el colombiano Guillermo Perry como Economista Jefe para América Latina y

3 Las tres etapas fueron formuladas en 1990 por el chileno Marcelo Selowsky, Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en: “Stages in the Recovery of Latin America’s Growth”, *Finance and Development*, junio de 1990, pp. 28-31.

4 Las líneas maestras de la estrategia “posneoliberal” están presentes en el documento de la Cepal: *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa* (1990), y con mucha mayor precisión en el trabajo de Enrique V. Iglesias, entonces presidente del BID: *Reflexiones sobre el desarrollo económico. Hacia un nuevo consenso latinoamericano* (1992).

el Caribe⁵. Por encarar aquellas esferas de acción que el economicismo de mercado neoclásico no contemplaba discursivamente, desde un comienzo se presentó como “posneoliberal”. Se autodefinió como “superación del neoliberalismo” pero al mismo tiempo contraria al “populismo” (en realidad, de lo que definían por tales). Para ello, sus intelectuales e ideólogos cuestionaron algunos postulados doctrinarios del liberalismo económico, que a su entender debían ser corregidos –nunca negados–, por lo cual en términos doctrinarios era estrictamente un pos-liberalismo; que se expresó como corrección –nunca negación– de los postulados ultraliberales sobre el Estado y del ultraindividualismo sociopolítico.

Desde el sistema, en las voces de grandes empresarios, políticos e intelectuales se multiplicaron las expresiones de crítica al “neoliberalismo” (tal como lo definían). Ya en 1996, Norbert Lechner decía: “En los años noventa América Latina entra en una ‘fase post-neoliberal’. El neoliberalismo está agotado como propuesta innovadora...”⁶. Aquellas expresiones fueron recogidas oficialmente por la Cumbre de las Américas de 1998, realizada en Santiago de Chile. Pese a la retórica, lo allí aprobado no fue anti-liberal, ni post-neoliberal, sino las líneas para estabilizar la reestructuración capitalista cuando se observaban signos de crisis de gobernabilidad en la región.

Debe aclararse, una vez más, que el término “posneoliberal” fue acuñado desde el sistema –no por esta autora– y que conforme a su origen es utilizado en este trabajo. Lo interesante es que el término “posneoliberalismo” fue siendo socializado en el seno de la “izquierda moderna” o “nueva izquierda”. Abonando a la confusión, en el último lustro, el término “posneoliberalismo” es utilizado para denominar los proyectos de los gobiernos de izquierda y centroizquierda, como un camino que apenas se estaría recorriendo. De manera reiterada he planteado la inconveniencia de utilizar el mismo término, acuñado por los dominantes, para denominar o caracterizar a proyectos opuestos y supuestamente antagónicos. Con el correr de los años, es dable pensar que quizás no se ha tratado solamente de una escasa imaginación lingüística.

5 El manifiesto posneoliberal para América Latina del Banco Mundial es el célebre **Más allá del Consenso de Washington** (1998).

6 Norbert Lechner, “Estado y Sociedad en una perspectiva democrática”, Flacso-México, 1996 (**verso**) página electrónica.

La *posneoliberal* es una concepción estratégica lúcida y compleja; que no ve a las democracias como un peligro contra la continuación de la reestructuración capitalista, sino como una oportunidad para construir consensos moderados a favor de las llamadas reformas económicas, para lo cual la política y la democracia debían ser instrumentos de gobernabilidad, y desde luego de integración institucionalizada de la izquierda que ya avanzaba electoralmente.

La estrategia exige pasar por las reformas estructurales –similares al decálogo de Williamson pero presentadas como una iniciativa endógena– para “aprovechar las ventajas de la globalización mediante la exportación de lo más abundante”. Está planteada retóricamente como una transición desde ventajas comparativas ortodoxas o “espurias” a una ulterior “competitividad auténtica”, que inevitablemente debía ser impulsada por el capital transnacional por su aporte financiero, tecnológico y por su acceso a mercados. Para captar esa inversión extranjera se debía garantizar un buen clima de negocios, ganancias más atractivas, seguridad jurídica, estabilidad financiera y bajo déficit fiscal, y pagar la deuda. Se requería un mayor activismo estatal para fortalecer al sector privado, y para ello era necesaria la reforma del Estado para hacerlo “chico pero eficaz”. Esa –dizque– transición obviamente requería reducción del salario real y alto desempleo: plataforma desde la cual se legitiman las acotadas políticas sociales para reforzar la gobernabilidad.

La apelación al Estado y esta dimensión “social” son los signos distintivos del “posneoliberalismo” para presentarse como progresista y hasta de izquierda. La estrategia planteaba que en el corto plazo se implementara el asistencialismo focalizado hacia la extrema pobreza para absorber tensiones sociales por la (primera) “década perdida”, que de paso iría liquidando la cultura de derechos sustituyéndola por una degradada cultura mendicante agradecida. Pero el posneoliberalismo se planteaba lograr a más largo plazo una reestructuración social profunda, que fuera el sustrato para gestar consensos sociales en torno a la reestructuración capitalista.

Esas líneas maestras fueron los objetivos inamovibles del “posneoliberalismo” a lo largo de estos veinte años. Pero el modo de ejecutarlas variaría de acuerdo a las condiciones concretas en cada país, y en la región en función de las exigencias globales del capitalismo. Lo fundamental era, y ha sido, la combinación de esas esferas de acción de

modo que, cuando hubiera problemas en una, las otras los compensaran; por ejemplo, si fallaba la legitimidad del sistema político o la credibilidad de la democracia, las políticas sociales focalizadas o un mayor activismo gubernamental debían compensarlo para neutralizar conflictos y construir consensos pasivos o activos; o a la inversa: con alta legitimidad política podrían avanzarse las “reformas económicas” con menor “gasto” en las otras esferas. Su ejecución requería mayor percepción política, flexibilidad y pragmatismo, metafóricamente designados con expresiones como “un traje a la medida”, o como “proyectos en marcha” o “trabajos en curso”.

Los posneoliberales aparecían como los cuestionadores de la tecnocracia, cuando sólo se había establecido una división del trabajo de modo que los tecnócratas decían qué era lo inevitable y los neo-políticos el cómo hacerlo con mayor eficacia y legitimidad. “Neo-políticos” porque economistas y técnicos “posneoliberales” se convirtieron en los nuevos expertos y teóricos de la política, de la democracia y la gobernabilidad, conjuntamente con la vieja *clase política*. Para viabilizar cada una de las nuevas acciones, así como los cambios de énfasis o de peso específico de cada esfera respecto a las demás según las circunstancias, un ejército de intelectuales fue colocando las nuevas “agendas temáticas” y sus respectivas retóricas bajo máscaras teoréticas⁷. De manera particular es necesario destacar que han sido los ideólogos del sistema los que fueron imponiendo las definiciones sobre el “neoliberalismo”, que las fueron cambiando en distintas coyunturas, de tal suerte que la estrategia dominante pudo presentarse como “alternativa” a sí misma en varios momentos o fases⁸. Bajo líneas comunes a toda la región como trasfondo, perfectamente identificable en las temáticas que fueron determinando las orientaciones de las ciencias sociales en cada coyuntura –y las réplicas del llamado pensamiento crítico, fatigadamente contestatario–, en cada país fueron distintos los énfasis asignados según las realidades sociopolíticas específicas. Esta aparente asincronía desaparece cuando se consideran las

7 Ese pragmatismo táctico explica, en buena medida, que la estrategia no pudiera aprehenderse en su diseño total, sobre todo en sus fases iniciales. Una revisión retrospectiva de las temáticas, las acciones impulsadas y los debates echaría luz sobre los momentos tácticos de la estrategia dominante.

8 Por economía de espacio, para ver los cambios de definiciones sobre el neoliberalismo remito a mi trabajo “El debate actual: posliberalismo o anticapitalismo” (en este volumen).

tendencias comunes en una más larga duración, que hoy se reconoce en la convergencia de preocupaciones provenientes de países con gobiernos llamados progresistas y con gobiernos de derecha.

Esto no significa que esta estrategia dominante y conservadora (aunque se presente como progresista) no tenga que enfrentar resistencias y conflictos, ni quiere decir que su ejecución no acumule contradicciones y hasta frenos o retrocesos en determinadas coyunturas y en determinados países. Hay una dialéctica que no puede desconocerse. Sin embargo, en estos veinte años hemos observado la gran capacidad de adecuación táctica, de cambio en el uso de los instrumentos, de modificación discursiva en la ejecución de la estrategia dominante. Al punto de convertir en “oportunidad” las contradicciones que la propia estrategia genera para, como decía, presentar una siguiente fase como alternativa a sí misma.

La reconfiguración capitalista

La ejecución –en sus particulares combinaciones– de las líneas maestras de la estrategia para estabilizar la reestructuración capitalista en nuestra región avanzó pese a que América Latina ha sido puntal de los rechazos y luchas contra el neoliberalismo. Avanzó, incluso o precisamente, porque se hizo a nombre de ir más allá del neoliberalismo. Los pasos dados desde hace veinte años están mostrando su materialización en el presente.

Los usos conservadores de la política institucional mediante una democracia gobernable han sido materia de análisis por parte de esta autora en distintos trabajos, a los que remito, cuya materia debe pensarse como una esfera funcional respecto a las demás, de enorme importancia. Desde esa perspectiva debe pensarse, también, el significado de los cambios o ajustes de los regímenes políticos con los triunfos electorales de la izquierda o el centroizquierda, como asimismo se ha sugerido en otros trabajos.

En contraste con los vaivenes previsibles de los regímenes políticos por las variaciones electorales –esas “reglas del juego” útiles para construir consensos, también sobre las reglas del juego–, el objetivo de reestructuración de la sociedad tiene una dimensión más profunda y de largo aliento para estabilizar al capitalismo en su fase histórica actual.

La reestructuración de la sociedad

La reestructuración social “posneoliberal” se monta sobre la demolición del patrón de acumulación anterior y de sus relaciones sociales e institucionales. El desempleo y el empobrecimiento son concebidos como la “oportunidad” para emprender esa reestructuración y lograr su legitimación. Ella tiene por objetivo central disolver a los sujetos colectivos de la pugna distributiva, desde luego los populares. Pero a diferencia del discurso “neoliberal” ortodoxo sobre la libertad individual, el “posneoliberal” apunta a que la flexibilización y la precarización laborales, la tercerización mediante pequeñas y medianas empresas (pymes) y el autoempleo sean aceptados como medios legítimos para acceder a la “equidad”.

El posneoliberalismo busca legitimar a la “democracia de propietarios” neoliberal. Esa sociedad patrimonialista de individuos “propietarios” de algo que intercambian en el mercado “como si fueran libres e iguales”, es decir, sin impedimentos formales para acceder a los bienes, servicios, actividades o profesiones excepto por lo que acrediten poseer (recursos monetarios o “capital humano”); en la que desaparece la condición asalariada *formal* (derechos jurídicos individuales y colectivos, regulaciones) para convertir a los trabajadores en “empresarios” que gestionan individualmente su reproducción, individuos responsables por su destino que “invierten” en su seguridad (“costos de oportunidad”, seguros de salud, fondos de pensiones, etc.) con recursos de su fondo de consumo salarial o que está en manos del Estado vía impuestos, y que va a parar al capital privado que gestiona esos fondos de ahorro y seguros. Los posneoliberales “corrigen” los defectos del mercado mediante el discurso y el método social-liberales de la *equidad como igualdad de oportunidades*: sólo a los discapacitados y muy pobres se les proporciona, mediante subsidios o asignaciones, un mínimo no igual ni permanente que los transforma en poseedores de capital humano (capacidades y habilidades empleables), para que puedan incorporarse al mercado y también formar parte de la democracia de propietarios. Hasta aquí el posneoliberalismo no se distancia en términos prácticos de la ortodoxia neoliberal que incluye expresamente políticas focalizadas de “atención a la pobreza”, las que profundizan permanentemente la desigualdad aunque puedan sustraer temporalmente a algunos de la inanición. Sin embargo, el discurso de la

equidad social-liberal presenta al asistencialismo como un vehículo para la afirmación de la autonomía y la creatividad individuales intercambiables en el mercado. De este modo se gesta una nueva concepción de “justicia en la sociedad como equidad”. John Rawls es el mentor por excelencia.

En sus diseños maestros, la estrategia posneoliberal para disolver a los sujetos populares de la pugna distributiva plantea, asimismo, otras líneas de acción que discursiva o doctrinariamente cuestionan las concepciones liberales o social-liberales fincadas en el individuo. Esas otras líneas de acción, por el contrario, reivindican la utilización de **organizaciones intermedias** (entre el individuo y el Estado) para la gestión limitada de la sobrevivencia o la convivencia. Las que, al mismo tiempo, están planteadas como antídoto para el debilitamiento de los mecanismos de control y gobernabilidad ante expresiones anómicas generadas por la dispersión individualista. Este aspecto de la vasta estrategia para la estabilidad de la dominación abreva en las orientaciones del proyecto neoconservador elaborado en las décadas de los setenta y ochenta, y que adquiere identidad “posneoliberal” en los noventa con el **comunitarismo**.

A nombre de “rescatar al individuo solitario del neoliberalismo e ir al encuentro con la comunidad perdida”, la reestructuración de la sociedad se complementa y legitima mediante la gestación de un **microcorporativismo conservador** de múltiples funciones: a) mantiene dispersos a los sujetos populares de la pugna distributiva, no cuestiona la distribución de la riqueza, pero permite gestionar limitados recursos para la sobrevivencia o para la convivencia: una suerte de **pobreza acompañada**; b) invisibiliza la desigualdad bajo la imagen de la diversidad pluralista, arropada, entre otros, por el manto del multiculturalismo; c) no incide en las decisiones del sistema político ni del Estado pero es percibido como “participación” y “empoderamiento”. Es el instrumento para una cohesión social (“capital social”) que parecería imposible.

Si al social-liberalismo se lo asocia con las acciones gubernamentales “distributivas”, por su retórica al comunitarismo social-conservador se lo asocia con el reinado de la “sociedad civil”. Pero no ya con la sociedad civil liberal de individuos, sino la sociedad civil de los grupos y las comunidades. No ya con la “racionalidad instrumental”, sino con la “moralidad” y la “solidaridad” grupal. No ya con el pragmático horizonte del costo-beneficio, sino con la subjetividad del “reconocimiento”.

Poca atención se presta a que, en medio de su potente retórica filosófica, los comunitaristas sostienen que la teoría neoclásica, aunque reduccionista, ha sido insuperada (¿insuperable?) para mantener los necesarios equilibrios para el crecimiento económico, que debe ser complementada y nunca negada. Pero la carga filosófica y sociológica de su argumentación hace aparecer a los comunitaristas como categóricos opositores del liberalismo, lo cual potencia su eficacia ideológica para permear el campo de las “alternativas”. Y les permite aparecer como pensamiento crítico en el ámbito de las ciencias sociales, pues su argumentación aparentemente desplaza el reinado absoluto de la economía neoclásica con el reingreso de la sociología y la antropología, de las matemáticas con los estudios culturales. La apelación a Durkheim y a Karl Polanyi se pone de moda, y las elaboraciones de conservadores como Peter Berger, Robert Putnam, Amitai Etzioni, Michael Novak o Frances Fukuyama aparecen como referentes de una *tercera vía*.

El comunitarismo conservador se presenta como una expresión de un posmodernismo nostálgico de lo premoderno (cercano a los *tories* o *los viejos whigs*). En América Latina, toma forma en el *solidarismo* de la doctrina social de la Iglesia, en el socialcristianismo; que reelabora sus conceptos de “buen vivir”, de la “función social de la propiedad” (o “responsabilidad social empresarial”), de “precio justo” y otros, cuestionando al “liberalismo” pero para fundamentar la moralidad del capitalismo; además de ser la Iglesia oficial protagonista central en la ejecución de la estrategia comunitarista. Por eso no es casual que la fase de demolición “neoliberal” se hiciera con Friedman, y que la de estabilización “posneoliberal” se haga con Hayek.

Junto al asistencialismo individualizado, en América Latina se crean múltiples organizaciones comunitarias, que adoptan la forma desde cooperativas y asociaciones solidaristas hasta universidades interculturales. Algunas de esas organizaciones, como se ha comprobado, han cumplido y cumplen funciones contrainsurgentes⁹. Este mundo comunitario y solidarista está rodeado por un entramado de “gestores” en el que encuentra trabajo e ingresos

⁹ Es el caso de las Asociaciones Solidaristas en Centroamérica, establecidas por ley como una asociación de colaboración entre patrón y trabajadores que prohíbe explícitamente la existencia de un sindicato; las Cooperativas Convivir de Colombia, origen de organizaciones paramilitares, o las recientemente creadas Ciudades Rurales en Chiapas, México.

la clase media profesional, que participa en la reestructuración de la sociedad y se convierte en intelectual orgánico del proyecto.

Al mismo tiempo, las concepciones y prácticas comunitaristas conservadoras cumplen un papel fundamental en la reconfiguración del mundo del trabajo, por ejemplo, en la implementación de las formas *toyotistas* de producción y explotación: trabajo en equipo, con autocontrol de los trabajadores, en los círculos de control de calidad; aumento de la productividad mediante los estímulos morales del “reconocimiento” y de “dar voz”; sentimiento de pertenencia a la empresa, concebida como una “comunidad de trabajo y de corresponsabilidad” en la que todos son “asociados”. Para esta reconfiguración de la producción y de las relaciones laborales, la estrategia posneoliberal acepta y hasta promueve entre las organizaciones intermedias un cierto tipo de sindicato afín, “participativo” y “propositivo”¹⁰, que se haga cargo de promover el aumento de la productividad y la asunción por parte de los trabajadores del interés de la empresa (del capital). Con lo cual, frente al neoliberalismo ortodoxo que repudia al sindicalismo, el posneoliberalismo aparece como progresista.

La flexibilización y precarización del trabajo, consustanciales a la contrarrevolución neoliberal, adoptan nuevas formas “comunitarias” que las encubren y hasta legitiman; por ejemplo, la constitución de cooperativas que en realidad descentralizan la producción de la empresa madre, en las que la relación laboral y de explotación queda encubierta por la ilusión de la propiedad común, facilitando la autoexplotación de los trabajadores y el ahorro de gastos sociales o exenciones fiscales al capital. Empresas capitalistas registradas como cooperativas que en realidad tercerizan la producción de otras; o “cooperativas” que son empresas capitalistas para la contratación precaria de trabajo (o “maquila de nómina”), y hasta para dar “servicios sindicales”. Este es el mundo de las *pymes* promovido por el posneoliberalismo como alternativa de autoempleo y de horizontalidad comunitaria, que en una alta proporción es instrumento para la precarización laboral, indicando cuál es el verdadero contenido de la propaganda de que “las pymes crean empleo”¹¹.

10 Remito a los fundamentales estudios del brasileño Ricardo Antunes sobre ese nuevo sindicalismo. Desde mi investigación, considero que los fundamentos ideológicos y prácticas que lo caracterizan están íntimamente conectados a la estrategia conservadora comunitarista para el control social y la gestación de consensos.

11 El presidente de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Francisco dos Reis, en la reunión de economistas en La Habana, en marzo de

La utilidad de lo social

La “vocación social” del posneoliberalismo se hizo explícita en las modalidades que adoptó, tempranamente, como *Economía social de mercado* en Chile con los gobiernos de la Concertación desde 1990; como *Estado social de derecho* en Colombia tras el consenso constituyente en 1991; y como *Liberalismo social* en México, promovido por Carlos Salinas de Gortari desde diciembre de 1988 y que oficializó en 1992 como doctrina de gobierno. El Programa Nacional de Solidaridad de Salinas, presentado en diciembre de 1988, fue precursor de la reconfiguración posneoliberal de la sociedad combinando asistencialismo y organización comunitaria, en perfecta sintonía con el solidarismo del Vaticano, con el que el gobierno restableció relaciones diplomáticas (rotas desde 1867). Las distintas denominaciones dan cuenta de la esfera priorizada para articular y legitimar la estrategia, asunto muy interesante que no puede ser tratado aquí. Y a esta altura de nuestro análisis ya no debería llamar la atención que estos tres casos paradigmáticos de posneoliberalismo temprano, de explícita “vocación por lo social”, hayan exhibido una potente capacidad para cooptar a sectores de izquierda, para transformar conservadoramente a la sociedad, y para lubricar la entrega de la administración del Estado a la derecha tradicional.

El “Estado social” posneoliberal, al tiempo de “reformarse”, obtuvo el apoyo de los empresarios quienes *altruistamente* comprendieron que, además de su razón “moral”, el gasto social tiene una utilidad económica. El *progresismo posneoliberal* se convirtió así en un gran negocio capitalista.

Los empresarios proveen los servicios sociales que el Estado ya no provee pero financia, con lo cual transfiere parte del fondo de consumo de los trabajadores y de los consumidores pobres –que no deducen impuestos– directamente a la acumulación de capital. En algunos rubros, el Estado incluso disminuye su gasto con el cofinanciamiento de los ahora llamados usuarios o clientes, bajo el criterio de la “corresponsabilidad”. El campo de lo social es el que materializa la “asociación Estado-mercado-sociedad” (el “hogar público” de Daniel Bell, el “tercer sector”). Con esa asociación, los pobres y las capas medias financian a los extremadamente pobres; el gran capital acumula legitimado por sus servicios para el “nuevo bienestar”; y los gobiernos ganan clientelas electorales. Se produce el milagro de que “todos

2010, reconoció que la derecha y el capital tienen “ganado y neutralizado” al sector.

ganan”, aunque el capital se concentra y aumenta la desigualdad. Este es uno de los fundamentos de los acuerdos de “unidad nacional” impulsados recientemente en Chile por el presidente Sebastián Piñera y en Colombia por el presidente Juan Manuel Santos. Otros acuerdos tácitos de unidad nacional están en la agenda de gobiernos *progresistas*, por ejemplo en Uruguay.

Un apartado especial requeriría el análisis de lo local como espacio de articulación de las distintas esferas en la estrategia posneoliberal. Es el *locus* de la asociación Estado-mercado-sociedad; de la “gestión social” de las organizaciones no gubernamentales; de la “participación” y “empoderamiento” comunitaristas y solidaristas. Viabiliza la “descentralización” (desconcentración en realidad) del Estado que resigna la provisión de funciones sociales al capital, al mismo tiempo que concentra las decisiones económicas en el Banco Central y en el ministerio de Hacienda (el “bunker hegemónico”, como lo ha caracterizado Jaime Osorio). Es el espacio de menor resistencia para la acumulación por desposesión transnacional, bautizado como espacio “glocal”. Es, además, con todos esos componentes, la escuela posneoliberal en la que la izquierda comienza a aprender el nuevo sentido de lo público, de la “gobernanza”, de un nuevo “estilo de gobernar”, que aplicará en los ámbitos nacionales cuando triunfa electoralmente. La omnipresencia del BID financiando proyectos locales de gobiernos progresistas es un indicador de su función estratégica.

La importancia del Estado y la reconfiguración del poder

Tanto por su apelación a lo social como por la importancia explícitamente asignada al Estado, es que la estrategia de estabilización capitalista se presenta como pos-neoliberal. Para algunos, serían los dos rasgos típicos de la socialdemocracia. O de su versión modernizada como Tercera Vía, una “nueva izquierda” con su santo y seña: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

El Estado es un actor central como soporte institucional y material de todos los aspectos de la estrategia, haciendo un uso intenso de sus potestades coercitivas. Este es el reino del neoinstitucionalismo. A éste se le conoce principalmente por las multiplicadas funciones gubernamentales para garantizar la gobernabilidad mediante políticas públicas: la *governance* para

la *governability*. La *good governance*, que han traducido como gobernanza, se mide por su eficacia para garantizar control social y crear consensos pasivos y activos, y por transferir riqueza al capital. Pero, cuando hablamos de neoinstitucionalismo, es de la mayor importancia la función estatal instituyente, mediante el uso intensivo del derecho positivo para convertir en *Estado de derecho* la estrategia de acumulación por desposesión. El despojo es legalizado, todo se hace con la ley, y con un activo poder judicial que sanciona su no cumplimiento.

El Estado “posneoliberal” acentúa su función subsidiaria: por una parte, financiando al capital –que no invierte ni arriesga– con recursos frescos, exenciones y privilegios fiscales, servicios gratuitos e infraestructura, en permanente modalidad de zona franca; por otra parte, dándole todo tipo de seguridad jurídica y política: contratos muy largos, garantías para la remisión de ganancias al exterior, garantías de que no será afectado por expropiaciones ni conflictos laborales, etcétera.

Esta activa función del Estado al servicio del capital fue planteada desde 1996 bajo la fórmula de la “posprivatización”¹²: las asociaciones público-privadas. Que operan en todo: en la construcción de infraestructura, en los servicios sociales (ahora también en la educación superior), en la explotación de las riquezas naturales. En relación a estas últimas, el Derecho cumple una importante función estableciendo la distinción entre derecho de propiedad y derecho de uso, permitiendo la explotación privada aunque se mantenga la propiedad estatal sobre las mismas, sea porque por razones políticas no se han privatizado o incluso cuando han sido renacionalizadas. En el último lustro se han promovido específicas leyes de asociación público-privada que, con independencia de los escenarios políticos, institucionalizan de manera permanente esta función estatal subsidiaria; la transferencia de recursos públicos mientras duran los contratos, al margen de decisiones parlamentarias o gubernamentales; y la “nacionalización” jurídica del capital transnacional, que ya no requiere apelar a organismos internacionales de resolución de controversias.

Este es el entramado institucional para el depredador patrón de acumulación primario-exportador extractivista financiarizado en manos del gran capital; que está basado en vastos monocultivos transgénicos; en

12 Guillermo Perry, *La larga marcha* (1996), Banco Mundial, 1998.

minería sobre todo a cielo abierto; en la explotación de energéticos como petróleo, gas, hidroelectricidad; en la expropiación de biodiversidad; y en la construcción de un sistema multimodal de transporte y comunicación para abaratar su extracción. Actividades, todas, que exigen el control del territorio, con el despojo a pueblos, campesinos, pequeños propietarios y comunidades indígenas, para lo que operan la militarización y el paramilitarismo cuando es necesario. Este patrón extractivista está conectado con la especulación financiera (así como ésta con las funciones “sociales”).

Al servicio de lo cual, las asociaciones público-privadas alcanzan también a las que habían sido definidas como esferas exclusivas del Estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza. La seguridad, que era una función privativa del Estado, también es provista por privados con financiamiento público, en la función policial, cárceles y funciones militares.

En países con gobiernos progresistas, donde estas transformaciones institucionales al servicio del gran capital se presentan como parte de un “nuevo desarrollo” y del “interés nacional”, sus implicaciones son desatendidas y se prioriza el balance positivo del “modelo” en la reactivación económica de corto plazo: porque produce empleos temporales; donde son exigidos impuestos, produce recursos fiscales para volcar al asistencialismo social; crea una nueva fracción burguesa contratista con el Estado en servicios periféricos al gran capital (que no es precisamente una nueva burguesía nacional pues comparte los objetivos del capital transnacional, del cual es satélite económica e ideológicamente); así como beneficia a un segmento profesional en tareas técnicas, de mercadeo, administración y dirección. Por estricto interés económico, estos disímiles segmentos y clases sociales dan apoyo político a los gobiernos “neodesarrollistas”.

La imagen de presidentes ejerciendo un poder bonapartista por encima de todas las clases, beneficiando a todas y recibiendo de todas su adhesión, cual personificación de la unidad nacional, lejos de hacer pensar en un momento de “equilibrio estático catastrófico entre fuerzas con poder orgánico equivalente” (Gramsci)¹³, hace pensar más bien en la subordinación

13 Sobre la conceptualización de Antonio Gramsci sobre el cesarismo o bonapartismo, véase *Cuadernos de la cárcel*, tomo 5, México, Ediciones Era, 1981, pp.65-68. Actualmente no estamos en un momento análogo a aquél, durante la Revolución Mexicana, en el que Álvaro Obregón emprendió reformas laborales y dio espacios de poder estatal a los trabajadores de la Confederación Regional Obrera de México (CROM), organización que él promovió para limitar la fuerza de los sindicatos independientes,

o absorción de una de las fuerzas por la o las otras. Debe tenerse presente que la estrategia posneoliberal avanzó más allá donde se debilitó a la izquierda como fuerza de horizonte anticapitalista y donde se debilitó la independencia de las organizaciones populares clasistas; avanzó más donde se destruyeron conquistas y derechos sociales y políticos más a fondo o donde impactó más el empobrecimiento, y que es desde la profundidad de esa sima que lucen mucho más las acciones sociales de los gobiernos; asimismo debe tenerse en cuenta que los logros del posneoliberalismo se miden por la elevación de las ganancias capitalistas y por el aumento del conservadurismo en la sociedad. No es, precisamente, una equivalencia de fuerzas con el capital sobre las que se coloca por encima, como árbitro, el presidente.

Tanto en esos países “neodesarrollistas” con gobiernos progresistas, como en aquellos en los que se ejecuta la estrategia sin esa carga discursiva, está produciéndose una reconfiguración de la sociedad y del ejercicio del poder capitalista con efectos de largo plazo, que además no podemos explicar con los conceptos tradicionales de la teoría política. Por una parte, se rompe con los fundamentos del Estado liberal moderno que formalmente establece, para su universalización, la separación entre lo público y lo privado; tanto así, que el concepto de corrupción pierde sentido. No se trata solamente de que no haya autonomía relativa del Estado, sino de un nuevo patrimonialismo con el que lo privado domina de manera directa, abierta y legitimada a lo público. Por ello, las asociaciones público-privadas no son sinónimo de economía mixta. Con el posneoliberalismo estamos ante una especie de *Estado neo-oligárquico transnacionalizado de derecho*, abiertamente orientado al gran capital (transnacional), incluso cuando financia lo social. El cual mantiene la envoltura de las formas liberales, como elecciones periódicas y tres poderes, pero que son subordinadas al capital por el “interés nacional del desarrollo” (que es desnacionalizador) y acotadas por la juridización de la política y la economía.

En algunos de nuestros países, este Estado comparte las características del viejo Estado oligárquico en cuanto a que la clase que

imponerles condiciones a las distintas fracciones de la burguesía que querían controlar al Estado, y para que los Batallones Rojos de la CROM combatieran a las tropas de la División del Norte comandadas por Pancho Villa. Ese equilibrio de fuerzas construido bonapartistamente a cambio de la subordinación funcional de la CROM, por la que al poco tiempo los trabajadores pagaron con creces.

domina económicamente es también la fracción reinante en el Estado –para utilizar un concepto de Poulantzas–, tanto en los partidos representados en el parlamento como en la alta burocracia. La pregunta que cabe hacerse es si bajo la estrategia posneoliberal, que tiene como eje el control de la sociedad y de la política, el Estado cambiaría su naturaleza porque la fracción reinante proviniera de otras clases o grupos sociales. La democratización del régimen político o cambios de personal en el aparato estatal no son suficientes para analizar el balance de poder, sin desconocer la importancia que aquéllos pueden tener para modificar el poder del capital.

También estamos ante una reconfiguración de la dominación en términos de mediaciones sociales, que las hay. En varios de nuestros países se han destruido las mediaciones tradicionales en la relación política de clases pero se han construido otras mediaciones para la gobernabilidad. Aunque sean bien distintas a las clásicas, si producen gobernabilidad significa que no es un “Estado fallido”, como falazmente se ha caracterizado al mexicano. Las políticas asistencialistas cumplen una función de mediación. La legitimación del poder se hace también mediante el tema de la seguridad: la inseguridad es inducida y explotada para validar el ejercicio de la fuerza pública y privada. Se han construido nuevos enemigos, algunos muy difusos, no sólo el llamado terrorismo que alude asimismo a luchas sociales contra el despojo capitalista, sino también, por ejemplo, las epidemias. En México, la población del Distrito Federal, la más crítica y politizada del país, en abril de 2009 se sometió voluntariamente a un estado de sitio por la AH1N1. La manipulación de la inseguridad se hace bajo los fundamentos de una nueva doctrina de seguridad nacional garante de los derechos del capital, ahora civil o democrática. La cual vuelve a dar creciente protagonismo a las fuerzas armadas en la defensa del orden capitalista, pese a que con las democracias supuestamente habían regresado a sus cuarteles.

El “cambio de época” que se proclamó como caracterización del nuevo momento latinoamericano aludía también a un debilitamiento imperialista en la región. Aunque estamos en un momento incomparable en la historia latinoamericana por el número de expresiones gubernamentales de mayor distanciamiento respecto al gobierno de Estados Unidos, surge también la necesidad de revisar las valoraciones que se han hecho durante los últimos años sobre los grados de subordinación o de autonomización respecto del imperialismo, pensadas sólo desde la diplomacia. A partir de reduccio-

nismos analíticos sobre el imperialismo, concebido últimamente sólo como una relación de dominio de un Estado sobre otro, se ha perdido de vista que el imperialismo es esencialmente el dominio molecular del capital financiero (por tal entiendo la fusión potenciada de todas sus formas de reproducción y concentración), que utiliza el poder de sus Estados para su penetración territorial, para la exportación de capital, de mercancías y tecnología, para la apropiación de riquezas naturales y de plusvalía. Visto así, el “neodesarrollismo” no implica una disminución del poder imperialista, sino lo contrario. El peso internacional y geopolítico de las “economías emergentes” (como Brasil en nuestra región) también tiene que ver –aunque no solamente– con que el capital trasnacional se expande a través de asociaciones y fusiones triangulando desde esos espacios geográficos y soportes estatales, mediante los cuales cambia de “bandera”, lo que le facilita la negociación política y el aprovechamiento de las prerrogativas multilaterales regionales.

Un punto de llegada

Sostengo la tesis de que estamos asistiendo a un punto de llegada en la estrategia dominante impulsada desde hace veinte años para estabilizar y legitimar la reestructuración capitalista, cuyo objetivo ha sido convertir a América Latina en un espacio ventajoso, seguro y estable para la reproducción del capital; por ende, un espacio de estabilización del capitalismo, en crisis cada vez más frecuentes.

Salvo algunos países como México, la región se destacó por “resistir” mejor los embates de la crisis que estalló en 2008. Se benefició con el aumento de los precios de las materias primas y de los energéticos que exporta. En algunos países con gobiernos progresistas, las mayores mediaciones políticas y las presiones electorales impulsaron a esos gobiernos a mantener el ritmo de “gasto social”, lo que atenuó los efectos de las crisis para los trabajadores y consumidores pobres; aunque, donde se constata un aumento de sus ingresos, su situación no mejoró en el balance de la distribución de la riqueza, que sigue concentrándose¹⁴. El aumento del consumo individual,

14 Pese a que Venezuela depende todavía de la extracción de petróleo, no sigue la lógica ni la estrategia “posneoliberal” en los términos descritos, y se observan mejoras en la redistribución de la riqueza hacia las mayorías: el Coeficiente de Gini (distribución

en casi todos los países, es sobre todo con endeudamiento. Para contener la caída del crecimiento, se intensificaron los megaproyectos de infraestructura y la inversión transnacional en las actividades extractivistas de exportación. El gran beneficiado con estos éxitos coyunturales fue y sigue siendo el gran capital transnacional, sea de origen externo o con semilla criolla (empresas *translatinas*), con efectos benéficos para sus socios locales y las fracciones de clase media periférica. Son los éxitos esgrimidos como aval a las orientaciones actuales, pero estas brisas frescas incuban duras tempestades.

La reconfiguración del poder capitalista en nuestra región se acompaña con la gestación de una nueva hegemonía burguesa. Ésta se expresa en la legitimación del *neodesarrollismo transnacional*, que es como prefiero denominarlo; en la legitimación de una concepción del Estado como soporte material e institucional de ese neodesarrollismo transnacional; y en la legitimación de una reestructuración social a nombre de un “nuevo bienestar”, que no está fincado en derechos colectivos universales sino en la peculiar igualdad de oportunidades que hemos descrito. Estas tendencias y sus ideas hegemónicas son mucho más visibles donde gobierna la derecha y en algunos países con gobiernos progresistas, pero presionan para imponerse también donde gobierna la izquierda. Hasta qué punto lo han logrado, es una medida de la disputa de proyectos.

Una manifestación de esa nueva hegemonía burguesa es que, en la época de mayor crítica e interpelación al capitalismo por sus devastadores efectos sobre la humanidad y el planeta, en América Latina se piensa fundamentalmente desde el punto de vista del capital. En muchos casos, también es así cuando se habla de socialismo. Esto no sorprendería en el siglo XIX, cuando se entendía al socialismo como el movimiento mismo del capitalismo con algunas reformas sociales, ni sorprendería a Schumpeter que esperaba que un “socialismo responsable” garantizara el desenvolvimiento sin sobresaltos del capital. Pero tendrá que hacernos reflexionar sobre las metamorfosis del llamado pensamiento crítico. En particular, sobre la efectiva influencia del “posneoliberalismo” en la definición de alternativas.

de ingresos) pasó de 0.4865 en 1998 a 0.3898 en 2010 según el Instituto Nacional de Estadísticas, ubicando a Venezuela en el país de menor desigualdad de la región (exceptuando a Cuba).

Nuevas interrogantes

La función del “posneoliberalismo” para la estabilización y legitimación de la reestructuración (neoliberal) del capitalismo justifica interrogarse si tiene sentido establecer una diferenciación entre posneoliberalismo y neoliberalismo, puesto que sus objetivos son los mismos. El problema al que nos enfrentamos va más allá pues, además de la interrogante anterior, habría que preguntarse si conceptual y descriptivamente conviene seguir hablando de neoliberalismo, o bajo cuáles precisiones. Ya que “neoliberalismo” no constituye una categoría de análisis ni un concepto con eficacia descriptiva invariante, y sobre sus diversos usos se ha montado la ofensiva hegemónica dominante.

Como he apuntado en un trabajo de 2009¹⁵, el posneoliberalismo es al neoliberalismo como lo son las “reformas” emprendidas por el capitalismo para estabilizar sus “revoluciones” (contrarrevoluciones) o reestructuraciones. Es parte de su consolidación pero no es idéntico en los medios y, sobre todo, en los argumentos doctrinarios.

La “reforma” estabilizadora posneoliberal se hace apelando a la *oposición en tríada*, que le permite presentarse como el “tercero progresista”. Se trata de una *revolución pasiva* que recoge discursivamente las demandas de los opositores del neoliberalismo, y les expropia su lenguaje, vaciándolo de contenido transformador. El posneoliberalismo asume la “crítica al neoliberalismo” para “corregirlo”, al tiempo que rechaza al marxismo, y presenta como pensamiento progresista las elaboraciones neoconservadoras. Lo grave es que los argumentos y acciones “anti-neoliberales” elaboradas por el neoconservadurismo pueden confundirse con el discurso y con algunas de las prácticas históricamente asociadas con aspiraciones emancipatorias, y han avanzado en desnaturalizar algunas de sus formas organizativas, sus contenidos y objetivos. No sólo los neutralizan, sino que los convierten en engranajes de la hegemonía de los dominantes.

Neoliberalismo y posneoliberalismo no son sucesivos movimientos pendulares de corrección de excesos para retomar el equilibrio (como “progreso”), como lo formula la *teoría del péndulo* elaborada desde el capitalismo para explicar su devenir. Esa “teoría” oculta que tras cada corrección

15 “El debate actual: posliberalismo o anticapitalismo” (en este volumen).

se produce una mayor concentración y centralización del capital, que crea nuevas contradicciones y crisis. La tarea incesante de la reproducción capitalista es derribar o eludir las “barreras” que el propio capital pone. En ciertas épocas, al hacerlo ha llegado a producir reestructuraciones que modifican cualitativamente toda la reproducción capitalista. No es éste el caso.

En los *Grundrisse* Marx exponía esta idea, que he sintetizado en el citado trabajo de 2009, y que reproduzco extensamente para apoyar mi argumentación. Marx consideraba al capitalismo como una “fuerza destructiva” de todo lo que lo limita, por lo tanto “revolucionaria”, que derriba todas las barreras que se le presentan: la naturaleza, los territorios, las necesidades humanas, las leyes, las costumbres. “Por primera vez, la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil; cesa de reconocérsele como poder para sí; incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece sólo como artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producción”. E irónicamente lo reafirmaba así: “*Hence the great civilising influence of capital*”. Pero esas barreras no son superadas realmente –continúa– porque con su expansión universal los capitales vuelven a ponerlas, con nuevas contradicciones: “La universalidad a la que tiende sin cesar, encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cierta etapa del desarrollo del capital harán que se le reconozca a él como la barrera mayor para esa tendencia”. La tendencia a las crisis de sobreproducción es consustancial a la naturaleza del capital a “saltarse las barreras”, porque necesita constantemente “plustrabajo”, “plusproductividad” y “plusconsumo”. Pero el plusconsumo está en contradicción con el plustrabajo que crea plusvalor: el capitalista ve a los otros asalariados como consumidores, pero con los suyos busca reducir el trabajo necesario y con ello su fondo de consumo. El capital rompe permanentemente “las proporciones” por la “coerción a que lo somete el capital ajeno”, es decir, la competencia. El consumo insuficiente del plusproducto significa que esas fuerzas productivas son superfluas. Por eso, la tendencia expansiva del capital es un constante “poner y sacar fuerzas productivas”: la “tendencia universal” del capital es a ponerlas, del lado de la oferta (libre cambio), y ésta se enfrenta a la “limitación particular” del consumo insuficiente del plusproducto, que busca sacar fuerzas productivas, “ponerles un freno con barreras externas y artificiales, por medio de las costumbres, leyes, etc.” (o *regulaciones*, como se

dice actualmente). Pero el capital busca romper nuevamente esas barreras y vuelve a crear fuerzas productivas superfluas (desvalorización), y una vez más tiene que enfrentarse a una “disciplina que le resulta insoportable, ni más ni menos que las corporaciones”. Por eso, dice Marx: “en contra de lo que aducen los economistas, el capital no es la forma absoluta del desarrollo de las fuerzas productivas”¹⁶.

En estas décadas, el capitalismo ha demostrado capacidad para derribar o eludir barreras, que lo ha hecho con pragmatismo y flexibilidad, combinando prácticas que se justifican desde distintas vertientes doctrinarias o teóricas del pensamiento burgués. La estrategia posneoliberal ha buscado eliminar barreras políticas, sociales, institucionales y de “creación de espacio”¹⁷, despejando el camino para que el capital avance sin obstáculos. Es así que cada éxito “posneoliberal” permite un avance “neoliberal”, no es en rigor “volver” al neoliberalismo. De ahí la confusión que provoca la simultaneidad de discursos aparentemente opuestos.

A la primera pregunta sobre si tiene sentido diferenciar al posneoliberalismo del neoliberalismo, es posible responder que si se parte de la reproducción capitalista (explotación-despojo-dominación) como unidad de análisis, no sería necesario abordar de manera particular sus diferencias discursivas o tácticas, que hacen a la totalidad compleja de la reproducción capitalista. Pero dada la función del posneoliberalismo en la *revolución pasiva* en América Latina, no podemos obviar esas especificidades que favorecen el reforzamiento de la hegemonía de los dominantes. Lo cierto es que esta primera pregunta tiene su propio reverso: si los objetivos neoliberales se llevan a cabo con acciones y concepciones que formulan críticas al liberalismo y a la teoría neoclásica que le es consustancial, hasta qué punto es conveniente seguir hablando de “neoliberalismo”, al menos en los términos con que hoy se hace.

16 *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)* 1857-1858, Tomo I, México, Siglo XXI Editores, 1971, pp. 362-367 y 402.

17 David Harvey analiza la dinámica capitalista actual y aborda, al mismo tiempo que esta autora (2009), el tópico de la eliminación o elusión de “barreras” y las nuevas que va poniendo en la búsqueda de un crecimiento medio de 3 por ciento, señalando específicamente las ambientales, de mercado, de ganancias, de reconfiguración espacial de la geografía de la producción. Ésta incluye tanto el acceso a materias primas y fuerza de trabajo barata, como nuevos espacios para que el Estado financie al capital y establezca arreglos institucionales para asegurar los flujos de capital y la acumulación. Véase *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*, Oxford University Press, 2009.

El terreno analítico está minado por las distintas definiciones de “neoliberalismo” a partir de políticas económicas o postulados doctrinarios; que ensombrecen la caracterización del neoliberalismo como la contrarrevolución capitalista dirigida a derribar como principal barrera el poder relativo alcanzado por el trabajo frente al capital y el descenso de la tasa de ganancia, para lo cual tuvo que derribar también las barreras espaciales, políticas, institucionales y culturales, con el fin de restaurar un ilimitado poder de clase de los capitalistas. Son ya cuatro décadas de demolición-reestructuración con ese objetivo. Y tal como lo estamos viendo con el manejo de la crisis capitalista, por ahora no se avizora una forma de reproducción del capitalismo distinta. La mayor concentración y centralización del capital que ya se ha producido en estos años de crisis pondrá de manera potenciada nuevas barreras ambientales, energéticas, de materias primas, de consumo, de ganancias, de producción geográfica del capital, etc., como dice Harvey. Para derribarlas o eludir las, el capital exigirá mayor subordinación y dependencia de América Latina, generando mayores contradicciones sociales y políticas, y una previsible conflictividad en ascenso, la que en sí misma será una nueva barrera a derribar o eludir por el capital. Las soluciones de fuerza están a la orden del día, y allí está la militarización de nuestra región, no sólo por Estados Unidos sino también por los ejércitos nacionales bajo una nueva doctrina de seguridad nacional civil.

Pero no sabemos de qué otras maneras las fuerzas del capital buscarán eliminar o eludir las nuevas barreras. Lo vivido en estas décadas no autoriza subestimar la capacidad de la clase dominante para encontrar formas de hacerlo. Esto plantea serios desafíos para detectar a tiempo tales “innovaciones”, para reducir el desfase entre los procesos sociohistóricos y su adecuada interpretación para potenciar la resistencia y el avance de nuestros pueblos.

Las últimas dos décadas debieran enseñarnos que la conservación del capitalismo se persigue con una diversidad de fuentes doctrinarias y teóricas, y que en este sentido no hay un “pensamiento único”. También es útil asimilar que los objetivos capitalistas compartidos se llevan a cabo bajo formas distintas, que exigen un permanente estudio concreto de la realidad concreta. La prédica ética no alcanza. Pero para que esas formas sean inteligibles en tanto mecanismos de dominación, no puede perderse de vista los procesos profundos que las exigen, articulan y modifican; es decir,

la unidad de análisis debe ser la reproducción capitalista, y como horizonte epistémico y político el anticapitalismo. Es éste el que finalmente puede evitar las limitaciones contestatarias (de contestación a una permanente iniciativa dominante), consustanciales a la carencia de horizonte propio. Sólo así será fundamento de contrahegemonía, y no solamente crónica de lo ya ocurrido.

Cuando se habla de gestar contrahegemonía, también es necesario replantear sus alcances y contenidos. Ya no se trata sólo de superar las concepciones de las élites económicas, políticas e intelectuales, o el individualismo en sus distintas manifestaciones. La hegemonía de los dominantes también se realiza mediante la manipulación de formas de organización y prácticas populares “antiliberales”, con formatos similares a los emancipatorios pero con contenidos y objetivos de subordinación. El esfuerzo contrahegemónico posiblemente produzca rispideces que no contemplábamos tiempo atrás.

Asumir que estamos ante un punto de llegada exitoso de la compleja y lúcida estrategia dominante no es una opción por el pesimismo, sino una condición para no dilapidar las posibilidades de disputa de proyectos que se abrieron en la región por las luchas populares.

Gobernabilidad como dominación conservadora (1995)*

I. Gobernabilidad como democracia: intencionalidad y confusiones

A simple vista, América Latina es un caldo de cultivo para la ingobernabilidad. Una creciente descomposición social es producida por el crimen organizado desde los sectores dominantes, que además del narcotráfico, roban y estafan a los países, pisotean las leyes, mienten descaradamente. La delincuencia de los poderosos es una virtud oficial que se socializa como anomia. Pero la ingobernabilidad también se origina en la creciente insatisfacción de demandas, no precisamente producidas por el crecimiento exponencial de las expectativas generadas por las dinámicas del desarrollo –como pretende Huntington¹–, sino por las carencias más elementales de las mayorías latinoamericanas.

La conflictividad social y la anomia demandan un fortalecimiento extremo de la autoridad para conservar este orden de exclusión social. Si puede admitirse que ingobernabilidad y autoritarismo tienden a correlacionarse, ello no autoriza a establecer, en cambio, una identificación entre gobernabilidad y democracia. Es sorprendente observar la penetración de la lógica que identifica gobernabilidad con democracia, tanto en los análisis de las ciencias sociales como en la concepción y práctica política de sectores que explícitamente cuestionan al neoliberalismo y que declaran aspiraciones democráticas. No es una simple moda, sino un dato exitoso de la ofensiva

* Versión corregida de la ponencia presentada en el XX Congreso Latinoamericano de Sociología (Ciudad de México, octubre 1995). Publicada en Hernán Yanes (Coord.) *El mito de la gobernabilidad, Quito*, Trama, 1997; y en Darío Salinas (Coord.) *Problemas y perspectivas de la democracia en América Latina*, México, Universidad Iberoamericana -Triana- Asociación Latinoamericana de Sociología, 1999.

1 Samuel Huntington, *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1992.

ideológica dominante. De manera creciente, la búsqueda de gobernabilidad ha sustituido a la discusión y las búsquedas sobre la democracia. La equiparación que se realiza entre estabilidad (gobernabilidad) y democracia parece olvidar que un sistema democrático y en constante democratización puede ser poco estable, que un sistema estable puede ser antidemocrático y, también, que un sistema corporativo, fundado en principios de equidad social, puede obtener su estabilidad más por el hecho mismo de la equidad que por los mecanismos de regulación y control de que dispone.

Para cuestionar la lógica mencionada es necesario discutir ambos problemas, el de la gobernabilidad y el de la democracia. En cuanto al primero, debe reconocerse que tiene múltiples dimensiones:

1. La gobernabilidad, es decir, la situación en que un gobierno logra una cuota suficiente de obediencia de parte de los gobernados para ejecutar efectivamente su función, es un resultado concreto de la relación entre gobernantes y gobernados, lo que en sí mismo no refiere a un régimen político específico. Naturalmente, es de mayor complejidad en el contexto democrático, en el que la obediencia no puede producirse por recursos autoritarios, aunque existan mecanismos de control. El análisis de la obediencia como resultado corresponde metodológicamente al nivel de la coyuntura.
2. La búsqueda de hacer gobernable a una sociedad es una práctica dominante habitual y se expresa en una estrategia específica. Su éxito es también materia del análisis coyuntural. Pero sus contenidos son los que permiten evaluar el carácter de la dominación.
3. Los logros de gobernabilidad, con ser una búsqueda de todo gobierno, no implican una práctica unívoca de los gobernantes. Deben ser comprendidos desde un análisis, también coyuntural y concreto, de la práctica de los gobernados; afirmación obvia que se deriva del punto anterior, pero que suele estar ausente en las reflexiones sobre la política, muy contaminadas con lógicas institucionalistas mecánicas (y demasiado familiares en los estudios actuales de la ciencia política).
4. El problema de la gobernabilidad es una materia y objeto del análisis de las ciencias sociales que aparece fundamentalmente en contextos críticos para la dominación, con gran presencia desde finales de los años sesenta en los países centrales, y desde los ochenta en

América Latina. En nuestra región ocupa un lugar privilegiado por su frecuencia de aparición y por sus usos articuladores de los análisis de lo político. Como objeto de estudio forma parte del debate teórico. Por su función articuladora de las formas de pensar lo social y lo político es materia tanto de debate epistemológico como de una sociología del conocimiento, y del debate ideológico y político.

Por lo expuesto, la discusión sobre la gobernabilidad no puede darse en abstracto. Preguntarse cuáles son las posibilidades de que una sociedad no esté acosada por los conflictos, la anomia y la desobediencia, y de que el gobierno gobierne con eficacia y eventualmente con legitimidad, exige observar en concreto las condiciones de reproducción de esa sociedad y esa dominación dadas. Sólo a partir de esto podrá reconocerse si se trata de una sociedad democrática.

Pero el problema de la democracia es más complejo –huelga decirlo– que el fenómeno jurídico del régimen, más aún en las condiciones actuales de América Latina. Un punto de partida explicativo de los problemas de la democracia es la relación contradictoria entre ésta y el capitalismo, que no es abstracta sino histórica y concreta.

La democracia es una forma de relación social y política que permite a los miembros de una sociedad acceder a los bienes materiales y culturales por ella generados, lo cual se logra por una capacidad decisoria mayoritaria en relación con dichos productos sociales. El capitalismo implica, en cambio, la apropiación privada de los mismos. Las formas e intensidad de esa contradicción son un fenómeno histórico, que remite a las modalidades concretas de la reproducción capitalista y de las relaciones políticas. Ni tiene validez general plantear en abstracto las posibilidades ilimitadas de desarrollo democrático en el capitalismo, ni negarlas en lo absoluto. Sin embargo, el hecho no disuelve la contradicción.

Al hablar de las condiciones de la democracia, entonces, debemos recordar que en el capitalismo el concepto de excedente es una función del capital (de su acumulación privada), y no es, en cambio, un dato de las posibilidades y potencialidades históricas concretas de una sociedad –limitadas sólo por su grado de desarrollo– para disponer socialmente de la riqueza. Esta diferencia es una de las claves de la confrontación clasista sobre la democracia que, por lo tanto, no es una concepción neutra, aunque la fuerza

hegemónica del liberalismo le haya permitido expropiar los derechos de universalidad de la utopía democrática moderna.

De allí que la democracia sea concebida, bien como un instrumento de regulación política (administración) de las posibilidades y condiciones de reproducción del sistema capitalista, o bien como un proceso político conducente a ampliar las potencialidades sociales de emancipación creciente (democratización). Ambas perspectivas –coexistentes– presumen la diversidad de grupos sociales e intereses, incluso opuestos. El reconocimiento y la canalización institucionales de las potencialidades de estos proyectos opuestos, como heterogeneidad legítima, ha sido el resultado de un fortalecimiento de los grupos subalternos, que se expresó en una práctica estatal, y que implicó una alteración de la política liberal sustentada en la noción abstracta de individuos consumidores.

Por otro lado, sin un afán estructuralista, es necesario reconocer que los éxitos del paradigma político liberal corresponden tendencialmente a una fase expansiva del capital, que bajo ciertos patrones de acumulación permitió una mayor generación de excedentes y flexibilidad en su distribución. Las dinámicas concentradoras propias de ese mismo proceso expansivo, por un lado, y la ampliación de la democracia, por otro, son la esencia de la tensión crítica de la sociedad capitalista, en la que economía y política no son variables independientes. Es, al menos, ingenuo, pretender autonomías entre apropiación social de excedentes y acumulación privada de capital. En América Latina, bajo las actuales condiciones, su relación es excluyente y constituye uno de los obstáculos esenciales para la democratización.

Estas son claves analíticas para problematizar la democracia. No reconocerlo es, en sí, un problema ideológico, una postura frente al capitalismo y su dominación. Las buenas intenciones o, dicho de otro modo, las confusiones bien intencionadas, que de hecho son una expresión subalterna de las ideas dominantes, en todo caso, no modifican la cuestión.

Son formas de ideologización, desde las más burdas que proclaman el fin de la historia; las que ocultan el problema aduciendo que también el “socialismo” ha sido incapaz de resolver los problemas de la democracia –la carencia de soluciones alternativas no hace desaparecer el meollo de la contradicción señalada– y que por lo mismo convalidan un posibilismo conformista; hasta las más sofisticadas construcciones teóricas que pretenden una neutralidad social del fenómeno democrático, resol-

viéndolo en meros tecnicismos (son análisis atractivos, muchas veces, por su enjundia descriptiva –se está hablando de ideologización, no de esquizofrenia– y por su aparente eficacia pragmática). La obstrucción de opciones alternativas por un falseamiento de la realidad es una modalidad de reforzamiento del orden dominante, un fortalecimiento de la hegemonía en sentido gramsciano. Por ello, el debate no es estrictamente teórico, es político en cuanto refiere al poder.

Sustituir esta discusión –rípida, por cierto, en las actuales condiciones regionales– por el problema de la gobernabilidad, es una postura conservadora. Sustituir la discusión de cómo disminuir la desigualdad y la exclusión sociales como fuente de conflictos por la de cómo controlar los conflictos, implica mantener el *statu quo* –profundamente antidemocrático– y legitimar las prácticas dominantes.

II. El argumento conservador

Siempre es útil aclarar los usos del término conservador o conservadurismo. Como adjetivo, da cuenta de una conducta caracterizada por la defensa del *statu quo*, a la que se le opone habitualmente el progresismo como proclividad al cambio. Como sustantivo, el conservadurismo refiere a una corriente del pensamiento capitalista surgida en el siglo XVIII, animada por sus diferencias con el liberalismo materializado en la Revolución Francesa.

Simplificando por el momento el análisis, es importante reconocer que tanto el conservadurismo como el liberalismo han sido corrientes conservadoras en cuanto a sus metas de “conservación” del sistema capitalista.

Sus énfasis y diferencias doctrinarias se sitúan en el modo de realizarlo: en el conservadurismo, el principio de autoridad es el factor cohesionador de la sociedad, asumida como comunidad articulada por valores tradicionales (orden, familia, propiedad) e incluso trascendentes, como el origen divino de la autoridad; para el liberalismo, mediante un orden social constituido por un agregado individual que se articula y cohesionan racionalmente con la libre concurrencia de intereses individuales (mercado), fundados en la libertad de posesión (propiedad), garantizada ésta por un Estado subsidiario. La democracia representativa es, para el liberalismo, la forma política que vincula el interés privado

individual (ciudadanos) con el ejercicio público (Estado) de salvaguarda de las libertades de la ciudadanía (Estado de derecho); éste, considerado como realización de la igualdad.

La igualdad social no está contemplada, naturalmente, en ninguna de estas dos concepciones. Para el conservadurismo ni siquiera es un problema a justificar, y menos legitimar, por lo que se presenta como un pensamiento capitalista mucho más transparente (lo que ha conducido a terrenos temáticos comunes con el marxismo, naturalmente colocados en las antípodas de la justificación o crítica, respectivamente, de los fundamentos del orden capitalista). El liberalismo ha debido construir numerosas ficciones ideológicas para sostener la noción de igualdad como principio legitimante de la propiedad. Esa fue la razón por la que debió modificar su concepción de democracia censitaria original por una ampliación del reconocimiento público de intereses subalternos –luchas sociales mediante– configurando una concepción global de lo político que contrarrestara el impacto, sobre el poder de clase, de la reducción en la práctica de las diferencias entre igualdad jurídica e igualdad social.

En cuanto conservación del orden capitalista, las doctrinas no tienen una existencia propia al margen de la práctica social, la que depende menos de las doctrinas o fundamentos ideológicos que de las condiciones concretas en que se puede realizar la dominación. Los énfasis en unos u otros principios doctrinarios han tenido que ver con esas condiciones históricas y, según las circunstancias, los mismos sujetos han apelado a unos u otros, o combinándolos (liberalismo económico con conservadurismo político, anti-liberalismo económico con liberalismo político).

Esta aclaración tiene como fin situar la calificación de concepciones y actores, en concreto con relación al problema de la gobernabilidad.

Se atribuye al conservadurismo (sustantivo) la proclividad a discutir los problemas de gobernabilidad en las sociedades democráticas. Sin embargo, encontramos en el campo liberal el mismo tipo de preocupaciones, lo que indica un denominador común conservador (adjetivo) para plantearse el problema de la democracia cuando está cuestionada la dominación, más allá de que se le sazone con una parafernalia discursiva.

Como exponente típico del conservadurismo, a mediados de la década de los setenta, la Comisión Trilateral puso énfasis en que la democracia genera una crisis de autoridad (dominación), que resulta en ingobernabilidad.

Observaba que el reconocimiento público de crecientes intereses plurales ha producido una doble situación. Por una parte, la mayor intervención del Estado como mediador de conflictos de intereses (clasistas) ha reducido su capacidad para imponer una concepción única del orden social –situación calificada como anómica, por impedir la socialización unívoca de los valores dominantes–, lo que le ha restado eficacia para imponer dicho orden. Por otra parte, esa pluralidad social exhibe un nivel creciente de demandas, en circunstancias en que el sistema tiene una capacidad declinante para poder satisfacerlas. Naturalmente, esto ocurre proporcionalmente a los procesos de apropiación y acumulación privadas de excedentes. Según la Trilateral, esta situación produce frustración, que se revierte contra el Estado en forma de menor credibilidad, lo que le resta eficacia institucional. Ello se agrava –decían– por la acción de los partidos, sostenes de la democracia representativa, que fincan su competencia electoral en los compromisos de satisfacción de demandas. El Estado, compelido a satisfacerlas por encima de las posibilidades económicas tolerables, sufre un desajuste fiscal que provoca inflación, factor de mayor inestabilidad.

Así, según la Trilateral, una sociedad democrática ingobernable tiende a producir un círculo vicioso de ingobernabilidad, lo que equivaldría a decir que una democracia representativa que produzca democratización tenderá a disminuir la capacidad dominante: “El corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque en cierta medida, gobernable y democracia son conceptos en conflicto. Un exceso de democracia significa un déficit en la gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente”².

Con su habitual transparencia ideológica, el conservadurismo reconoce que democracia y gobernabilidad no sólo no son lo mismo, sino que son contradictorias. Más adelante discutiré si en una perspectiva progresista o democrática ellas podrían hacerse identificables. Distintos autores, como Claus Offe³, sostienen que en la medida en que la lógica de la gobernabilidad implica reforzar el orden sistémico más que el reconocimiento de la

2 Comisión Trilateral, “La gobernabilidad de la democracia”, México, *Cuadernos Semestrales del CIDE* núm. 2-3, 1977-1978, p. 385.

3 Claus Offe, “Ingovernabilidad. Sobre el renacimiento de teorías conservadoras de la crisis”, en *Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Sistema, 1988.

diversidad, es esencialmente un mecanismo de control realizado en función de proteger los intereses de la dominación. Precisamente porque asumimos la discusión sobre la gobernabilidad de manera concreta en la realidad actual en América Latina, con un orden dominante profundamente excluyente y antidemocrático, es que sostenemos que los propósitos de gobernabilidad refuerzan la dominación conservadora.

Las estrategias de gobernabilidad sugeridas por la Trilateral⁴ abarcan una globalidad de direcciones que, como veremos luego, son verificables en las estrategias seguidas hoy en América Latina:

- a. Se demandan transformaciones valóricas que recompongan un “interés general” en torno a la concepción conservadora de orden, autoridad, seguridad, propiedad, y que permitan reducir las tendencias “hedonistas”⁵ que sobrecargan de demandas al sistema (como veremos después, la traducción latinoamericana de ello es la legitimación de la pobreza); en este plano, se le asigna un papel fundamental a la educación como “el sistema productor de valores más importantes en la sociedad”, así como a los medios de comunicación, que deben reproducir los valores sistémicos, único parámetro de “objetividad e imparcialidad”.
- b. Se debe buscar un reforzamiento de los sentimientos de pertenencia sistémica a nivel internacional que fortalezca la percepción de “amenazas” como factor aglutinador del espíritu de cuerpo junto al Estado y sus aparatos coercitivos (en su momento la Guerra Fría, hoy el narcotráfico).
- c. De fundamental importancia es el reforzamiento de los canales de control institucional y corporativo que permitan reducir la participación autónoma, con especial papel de las élites partidarias, sindicales, etc., como organizadoras de un consenso pro-sistema (“pactos”) y de una dosificación de la respuesta clientelística (los mentados umbrales críticos de los que se habla hoy en América

4 Las expresiones entrecomilladas y en cursiva que se incluyen a continuación son citas del Informe referido, *op. cit.*

5 Véanse Irving Kristol, *Memorias de un Neoconservador*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1986; y Daniel Bell, *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Alianza / Conaculta, México, 1989.

Latina), como modo de impermeabilizar a la democracia frente a las demandas sociales: “El control institucionalizado es menos peligroso que el liderazgo personal y carismático”⁶; asimismo, se persigue el reforzamiento del Poder Ejecutivo para reducir los riesgos de representación de intereses que “irresponsablemente” puedan filtrarse en el parlamento bajo las presiones electorales.

- d. En el plano económico se demanda un crecimiento sin inflación, que no se oriente a una distribución generalizada pues ésta produce demandas exponenciales futuras, sino que exista una asignación de recursos focalizada a sostener el crecimiento (y la acumulación).
- e. Socialmente, se plantea la necesidad de debilitar a la clase media y sus canales de movilidad social –como la educación– cooptando de ella a las fracciones que se amolden “al patrón de desarrollo”. En efecto, se trata de debilitar a uno de los indicadores fundamentales de los avances democratizadores, que representan la atenuación de las polarizaciones sociales.
- f. Una condición básica es establecer una nueva relación trabajo–capital, interviniendo directamente en las formas de organización del trabajo para reducir la incidencia de los trabajadores en “decisiones cruciales que afectan la producción, la productividad y las condiciones del trabajo”. Se plantea afectar la capacidad colectiva de negociación “obrero–administrativo”, mediante la fragmentación y competencia entre los trabajadores.

Por otra parte, como decíamos, el problema de la gobernabilidad de la sociedad en el sistema capitalista no se lo formulan sólo los que doctrinariamente se identifican con el conservadurismo. Los liberales de los países desarrollados también se cuestionan: “...por qué la modernidad avanzada –que pretende haber resuelto democráticamente las antinomias entre legitimidad y eficacia– es precisamente la causa específica de los problemas de ingobernabilidad que dificultan la buena marcha de [las] sociedades”⁷. Por

6 Este mismo temor ha sido manifestado recurrentemente por Guillermo O'Donnell en sus reflexiones sobre la democracia delegativa: “¿Democracia delegativa?”, Montevideo, *Cuadernos del* CLAEH, 1992.

7 Xavier Arbós y Salvador Giner, *La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial*, Madrid, Siglo XXI, 1993.

ello sugieren, entre las estrategias de gobernabilidad, desarrollar pactos que permitan enfrentar: “el paro crónico y el coyuntural, los efectos de desindustrialización y la reindustrialización, la inestabilidad política producida por el pluripartidismo y, sobre todo, por la polarización ideológica, la presencia de gobiernos débiles a causa de su naturaleza minoritaria o de mayoría reducida, la existencia de fisuras religiosas, étnicas, lingüísticas o culturales en determinados países, y la posición precaria de los países pequeños en el contexto internacional [...] la ‘paz social’ (en otras palabras y en este sentido, la gobernabilidad en las relaciones capital-trabajo) para conseguir las condiciones de competitividad necesaria”⁸.

Como se observa, el problema de la gobernabilidad o de la estabilidad no involucra exclusivamente el ámbito institucional. La ingobernabilidad no es, tampoco, expresión exclusiva de un desajuste institucional, y menos de un vacío de poder, aunque sí de una crisis de dominación pues en su etiología son fundamentales los conflictos no admisibles para el sistema.

Al igual que la democracia, la gobernabilidad está directamente condicionada por lo económico, pero bajo lógicas opuestas. La lógica democrática presume que lo económico es materia de negociación y de decisiones mayoritarias, y hace énfasis en una mayor equidad como condición de la estabilidad del sistema. La lógica de la gobernabilidad, por el contrario, busca la estabilidad del sistema sin modificar la realidad económica y social, tomada como un dato a preservar, enfatizando en los mecanismos de control sobre cualquier participación que pueda alterar las condiciones de explotación y dominación, que pueden ser estables aunque no sean legítimas.

En términos coyunturales, es evidente que no hay una relación mecánica entre situación económica y comportamiento político, trátase de periodos normales o críticos. Pero no puede negarse que una mayor democratización sustantiva de la sociedad es un factor de mayor legitimidad y estabilidad, con menores necesidades de control político. América Latina es, evidentemente, la situación contraria.

8 *Ibid.*, p. 46.

III. La estrategia de gobernabilidad en América Latina

A los efectos de esta discusión, presupongo conocidos los rasgos esenciales del neoliberalismo en América Latina, que no se limita a las políticas macroeconómicas sino a cambios profundos en la estructura social y en la configuración del poder en la región, orientado a privilegiar la acumulación del gran capital en contexto de crisis económica, a costa de una brutal exclusión social⁹.

El objetivo de controlar los conflictos generados por sus devastadores efectos, o bien de impedir que se manifiesten, o de funcionalizarlos en términos que permitan mantener este orden de desigualdad e injusticia, se realiza a todos los niveles de la realidad social. Es una estrategia global que se sostiene en los efectos disgregadores del neoliberalismo y que construye mediaciones políticas e ideológicas legitimadoras. Esa globalidad en los mecanismos de gobernabilidad puede observarse en los siguientes ejemplos (que no agotan la complejidad del fenómeno).

Transformaciones económico-sociales

Estas transformaciones originan, por sí mismas, conductas individualistas y conservadoras en los conglomerados populares, que reducen la emergencia de acciones colectivas y la capacidad de cuestionamientos reales al orden de desigualdad. La liberación del mercado de trabajo (“flexibilización laboral”) libera al capital de las regulaciones conquistadas por las luchas sociales. Crece la competencia entre los trabajadores (incluso regionalmente); aumenta su disposición a la desvalorización de su fuerza de trabajo y su subordinación al capital para conservar la fuente de empleo; se individualiza la negociación salarial debilitando la influencia sindical.

El desempleo arroja a vastos sectores sociales hacia formas alternativas de supervivencia (comúnmente llamadas “trabajo informal”) que desvalorizan la fuerza de trabajo familiar, sin espacios colectivos para su defensa, perdiéndose la capacidad de ejercer presión sobre el

⁹ Para una discusión seria, véase Pedro Vuskovic, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, México, CIIH-UNAM, 1993.

Estado. Se agudizan las conductas individualistas y los mitos de “nuevos empresarios”¹⁰, produciendo una regresión en sus experiencias y grados de conciencia clasista, y una creciente marginalidad política. En el caso particular de los sectores medios expulsados de la actividad estatal, por su calificación poco flexible para la reinserción laboral, éstos sufren profundos desajustes psicológicos, tendencias al ostracismo y al individualismo.

El desempleo incrementa las conductas delictivas de los pobres y con ello la percepción de inseguridad, haciendo a la sociedad más proclive a formas de privatización de las acciones coercitivas y más permisivas con las prácticas autoritarias. Dentro de ciertos límites manejables, la anomia social facilita el control.

La imposición de pautas de consumo suntuario (y el abaratamiento de muchos productos) induce a los sectores empobrecidos a consumirlos, para lo cual deben reducir aún más sus medios de reproducción básicos (como calidad alimentaria, gasto en salud, vivienda, educación, información), que aumenta su condición dependiente y marginal, y refuerza una actividad económica especulativa y parasitaria.

La emigración de fuerza de trabajo reduce las presiones sobre el sistema. Se refuerzan los factores y valores de expulsión. En algunos países emigran los trabajadores calificados, probablemente de mayor experiencia y conciencia previa, y las nuevas generaciones de trabajadores tienen más socializados los valores del modelo, desbalanceando aún más los perfiles ideológicos de la clase. La emigración de sectores marginales da una válvula de escape a las presiones delictivas.

Manejo de conflictos

No obstante que los cambios económico-sociales señalados disminuyen los niveles de conflictividad, la polarización de la estratificación social no permite su contención absoluta. La estrategia de gobernabilidad busca aislarlos, tratándolos como particularidades, explotando su especificidad para impedir que se articulen en una noción de lo popular. Me refiero a los conflictos étnicos, religiosos, generacionales y de género, entre otros, que

10 Hernando de Soto, *El otro sendero*, Lima, El Barranco, 1986.

reciben un tratamiento diferenciado que va desde cooptaciones y programas focalizados hasta represiones abiertas. Como resultado se refuerzan las competencias por espacios y acceso a bienes y servicios; se confronta a jubilados contra trabajadores activos, a indígenas contra campesinos, estudiantes contra maestros, adultos contra jóvenes, pobres contra más pobres. Se utilizan las búsquedas gregarias (comunitarias, barriales) para modificar su sentido, subordinándolas a prácticas clientelísticas de corto alcance en cuanto a responsabilidad pública, bajo el argumento de “respeto a la autogestión”.

Transformaciones valóricas

Constituyen una clave refundacional de las perspectivas y conductas sociales, orientadas a reforzar la sumisión, la resignación, el egoísmo, la pasividad.

Además de las señaladas, las actuales ofensivas ideológicas destruyen los valores de soberanía frente al discurso de la globalización, obstruyendo la creencia en la viabilidad de proyectos nacionales, soberanos y antiimperialistas.

Se asimila la noción de modernidad a una forma particular de modernización (neoliberal), en la que se descalifica el bienestar y la realización humanas y se sustituyen por la eficiencia como un concepto vacío de contenidos sociales; se busca legitimar la competencia fagocitaria como principio de superación personal; y se impone una unidireccionalidad hacia la preservación de los objetivos capitalistas, destruyendo la voluntad transformadora bajo el peso de un cortoplacismo temeroso ante el futuro incierto, que se convierte en pragmatismo.

Se ejerce un intenso control sobre los ámbitos de producción ideológica mediante decisiones institucionales autoritarias o por un reforzamiento de la autocensura por las expectativas de acceso a los pequeños privilegios que generan las políticas de cooptación. Con la creciente mercantilización de la producción intelectual, especialmente la académica, se imponen temáticas y orientaciones bajo criterios de mercado y se fomenta el estudio desarticulado de lo casuístico o microsocioal, buscando obstaculizar la aprehensión de la realidad.

Uno de los efectos visibles es la legitimación de la pobreza, manipulando las vivencias sociales y las transformaciones valóricas:

Manipulación de la conciencia de ser pobre, en forma de transformarla en una conciencia que privilegie el valor de ser libre por sobre la condición de pobreza: una libertad cuyo ejercicio queda circunscrito a los límites más cercanos a la supervivencia o condición de vida mínima. Libertad individualista que se defiende con la renuncia a todo empeño colectivo por ejercer presiones, una libertad que reivindique lo privado como negación de los espacios sociales organizados y que, por lo mismo, no puede servir para ejercer presión real sobre el sistema económico. Los sujetos que surgen en este contexto se caracterizan por la conciencia mínima de todo: mínimas necesidades, mínimas demandas, por lo tanto mínimas presiones.¹¹

Control mediante las prácticas del sistema político

El control político no se realiza exclusivamente mediante mecanismos institucionales formales, sino que abarca desde las pautas valóricas, las reglas del juego del sistema político, hasta el manejo institucional, las prácticas representativas, etcétera.

En términos valóricos se impone una conceptualización de la democracia de élites¹²; de autonomía absoluta de lo político respecto de lo económico, con la que se pretende desconocer la naturaleza política de las prácticas económicas socialmente excluyentes y concentradoras del capital y la función económica de las prácticas políticas que permiten ejercer control y legitiman el *statu quo*; se conceptualiza la participación y la ciudadanía como instrumentos de validación pasiva (electoral) de las decisiones de las élites; se diluye el concepto de poder en el de régimen; se

11 Hugo Zemelman, “La democracia latinoamericana ¿un orden justo y libre? (discusión sobre algunos dilemas coyunturales: notas conceptuales)”, Mimeo, p. 22.

12 “Como teoría realista de la política –dice Norberto Bobbio respecto de la teoría de las élites– mantiene firme la tesis de que el poder pertenece siempre a una minoría, y de que la única diferencia entre un régimen y otro radica en la existencia o inexistencia de minorías en competencia recíproca. Ideológicamente, por el hecho de haber nacido como reacción contra el temido advenimiento de la sociedad de masas, y por lo tanto no sólo contra la democracia sustancial sino también contra la democracia formal, su principal función histórica, que de ninguna manera se ha agotado, consiste en denunciar cada vez las siempre renovadas ilusiones de una democracia integral”. Norberto Bobbio, “Teoría de las élites”, en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, *Diccionario de Política* tomo I, México, Siglo XXI, 1988, p. 599.

sobredimensiona lo procedimental y se descalifica lo sustantivo en cuanto a la representación de intereses.

Las reglas del juego del sistema excluyen el tema económico como materia de debate y negociación. Ese es el restringido marco en el que se concibe el pluralismo, admitido sólo como matiz de principios rectores únicos. Cualquier intento de acción independiente de los subalternos o sus representaciones se asume como bloqueos al sistema. La concentración de las decisiones económicas en el Ejecutivo, muchas veces con reformas constitucionales sin apelación al electorado, son negociadas con las élites políticas en los parlamentos al margen de la sociedad.

Además de un creciente uso patrimonialista del Estado para disponer impunemente de recursos para la cooptación electoral, mediante complejas ingenierías electorales se busca que el sistema de representación no represente fielmente a las mayorías subalternas y que los juegos representativos pasen sólo por los partidos que exhiben fidelidad al sistema. Se cooptan élites mediante sueldos y prebendas personales e institucionales; se buscan pactos entre partidos –con exclusión de las organizaciones sociales subalternas o con élites sindicales no representativas– que comprometan a los actores a respetar las reglas del juego y faciliten la marginación de actores independientes. En la identificación de democracia con estabilidad, se realizan chantajes políticos basados en el peligro autoritario. Se explotan las experiencias traumáticas del terror dictatorial, manteniéndolas siempre vivas con las prácticas autoritarias que abarcan todos los planos de la vida social y con la creciente militarización de la política, induciendo a autocensuras para la confrontación al capital y para asumir el cambio social profundo que implica avanzar en los procesos reales de democratización.

El problema de la eficacia estatal, caballito de batalla para demonizar las funciones mediadoras y redistributivas del Estado, queda exclusivamente reducido a la privatización de las empresas y servicios públicos. Además de lo que significa en términos de concentración del poder económico, las insatisfacciones sociales ante la mala calidad y altos costos de los servicios ya no adicionan exigencias y demandas al Estado, dejando en indefensión a la población frente al capital privado.

IV. Pactos para una democracia “viable”

La lógica sistémica coloca los pactos como el *desiderátum* democrático. Como las reglas del juego para admitir actores en los privilegios del sistema excluyen cualquier acción que afecte al orden dominante, el acceso a dicho usufructo exige postergar indefinidamente a una “segunda transición” los problemas esenciales de la democracia. Sólo se admite restituir o consagrar un Estado de derecho restringido a los privilegiados y advenedizos del modelo, mientras las mayorías subalternas son convertidas en “ciudadanía de baja intensidad”, como dijera Weffort¹³. El control sistémico es mañosamente confundido con el consenso democrático. Los “actores democráticos” que cuestionan a ciertos conservadores socializan los principios conservadores. Se siguen al pie de la regla los consejos para construir un “autoritarismo democrático”¹⁴ que garantice la tranquilidad de los dominantes. En esta “primera” transición, que es asumida finalmente como la democracia posible, se considera decisivo que:

...se alcance, de algún modo, una transacción entre los intereses de clase, a fin de reasegurar a la burguesía que sus derechos de propiedad no correrán peligro en un futuro inmediato. Y a los trabajadores y otros grupos de asalariados que a la larga se satisfarán sus demandas de mejores remuneraciones y de justicia social. [Para lo cual] A la izquierda se le requiere no hacer un uso pleno de su ventaja simbólica inmediata y sacrificar, o al menos posponer por un periodo indefinido, su objetivo de una transformación que lleve a una “democracia avanzada”.¹⁵

Partidos que no representen intereses sociales adversos a lo que las reglas del juego permiten, e ingenierías electorales *ad hoc*, serán eficaces si se contribuye a un fortalecimiento de la derecha y centro-derecha, en el supuesto de que con eso se le hace un favor a la izquierda moderada (esa sí tolerable) de no tener que “lidiar” con los problemas económicos y sociales y “no desgastarse”. A la espera de que llegue el “momento oportuno”, los

13 Francisco Weffort, *Qual democracia?*, Sao Paulo, Schwartz, 1992.

14 Un manual de las nuevas corrientes se encuentra en Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas* Vol. 4, Buenos Aires, Paidós, 1991.

15 O'Donnell y Schmitter, *op. cit.*, pp. 77-78 y 102.

partidos antisistema se vuelven sistémicos, se separan de las masas y de sus intereses (política vs. economía) y se ocupan de controlar las expresiones de conflictos y la pluralidad social para proteger a la democracia. En tanto que se concentra el poder de los grandes grupos económicos que, como una nueva oligarquía, ejercen directamente el poder político, la ciudadanía –que recupera o adquiere sus derechos formales– es debilitada, disgregada y marginada. La indiferencia o rechazo de esta ciudadanía hacia las prácticas de las élites se califica como “desafección política”, que en términos de gobernabilidad es un mal menor siempre que no se traduzca en rebeldías contra el sistema o en iniciativas propias que cuestionen a los representantes. Por otra parte, la tremenda inseguridad de los más pobres a perder lo poco que tienen hace aflorar conductas conservadoras y los convierte en presa fácil de las manipulaciones políticas y electorales. Los votos de los marginados políticos no deciden ni logran representar sus intereses, pero dan gobernabilidad. Así se ha “renovado” la democracia latinoamericana. Mientras la “segunda transición” no ocurre y se logra gobernabilidad, la dominación excluyente se conserva.

V. ¿Gobernabilidad “progresista”?

Muchos de los actores e intelectuales que promueven y participan de estas modalidades de concertación admiten adjetivar como conservadora a la gobernabilidad sólo atendiendo a las restricciones electorales, como si el sistema político fuera un agregado de partes independientes no condicionadas por los objetivos –ya mencionados– del poder, y se pudieran reducir los problemas de la gobernabilidad a la eficacia y legitimidad de las instituciones y normas de representación. Sin cuestionar los demás condicionamientos de una verdadera representación, esas posturas, en el fondo, critican al sistema por no concederles un mayor acceso a sus beneficios. No trascienden la concepción de democracia de élites.

Otros análisis que sí se plantean la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente pretenden enfrentar con “realismo” –más bien fatalismo e incluso cierta complicidad– al contexto neoliberal, planteando generar medidas “compensatorias” a la ciudadanía, pero “sin llegar al límite

de la ruptura de la racionalidad estructural”¹⁶. ¿Acaso es posible avanzar en una distribución más equitativa de la riqueza sin afectar el orden estructural? La concepción de una “governabilidad progresista”, que proponen ciertos autores, es considerada próxima al “incrementalismo democrático” que, sin salirse de los requerimientos de la gobernabilidad sistémica, pudiera revertir las tendencias más excluyentes del sistema social, aunque ocurrieran efectos del “tipo túnel”, es decir, desfases temporales entre los compromisos y su realización, que serán admisibles si los actores sociales y el Estado ofrecieran garantías de cumplimiento. Además de una ingenuidad sin asideros en cuanto a la credibilidad de los “compromisos” de los poderosos en la región, estas posiciones supondrían que las profundas regresiones excluyentes en la naturaleza del capitalismo latinoamericano serían el producto de “voluntades perversas”, aisladas y coyunturales, reversibles por una negociación elitista.

Planteamientos de este tipo obligan a interrogarse sobre cuáles son las condiciones concretas en un país para que la gobernabilidad sistémica pudiera abrir espacios para la “progresista”, cuando, precisamente, cualquier avance democratizador es un atentado a la estabilidad de este orden social excluyente y, por lo mismo, es para los grandes intereses un factor de ingovernabilidad. Conocidas las tendencias generales en la región, las posibilidades son por demás dudosas. Sin embargo, no se puede desconocer que existen diferencias en las posibilidades de logros democratizadores específicos en los distintos países en función de ciertas diferencias en la estructura de poder y el tipo de dominación, en los grados de exclusión y marginalidad, en la fuerza social y política de los actores populares y su correlación para hacer cumplir acuerdos (e incluso para llegar a la mesa de negociación) y en los objetivos reales que ellos se propongan.

¿No es acaso esta última problemática la que constituye el meollo de los procesos de democratización? Si en realidad éstas fueran las preocupaciones verdaderas, ¿por qué plantear la discusión de lo democrático bajo el discurso de la “governabilidad con adjetivos”, cuando su concepción y usos condicionan precisamente la adscripción a los objetivos contrarios de

16 Gerónimo de Sierra, “Sobre los problemas de (in)governabilidad en el proceso de desarrollo uruguayo: un enfoque sociopolítico”, en *Políticas de Estado: estrategias de mediano y largo plazo. La dimensión económica y política*, Montevideo, Instituto Fernando Otorgués-Trilce, 1993.

la intención señalada? Aquello de “dar la batalla en su propio terreno” sólo es válido si se demuestra no compartir el terreno que se quiere cuestionar. Igual que los que en aras de entender –para combatir– al neoliberalismo quedaron atrapados en su lógica, las discusiones sobre la democracia deberían tomar distancia conceptual real del discurso dominante, si en verdad buscan cuestionarlo. Claro que esto requiere imaginación, precisión teórica, riqueza de lenguaje y una postura no difusa ante el problema –aunque objetiva– para entender los condicionamientos, limitaciones y posibilidades en los procesos de democratización. Realismo no es, necesariamente, adaptación, ni política ni cognoscitiva.

Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política (1997)*

Introducción

En América Latina hay una creciente apelación a la política, y más precisamente a “la voluntad política”, como antídoto a las evidentes crisis de legitimidad de los gobiernos y los sistemas políticos, cuyo origen principal está en los efectos sociales del neoliberalismo.

Se convoca a la política justamente cuando en amplios sectores sociales se le percibe como un medio inútil para resolver sus problemas reales. El desprestigio de la política institucional no representaría motivo de tanta preocupación entre sus actores privilegiados si la pérdida de legitimidad se expresara sólo como desinterés o apatía; pero en los últimos años la ineficiencia de las prácticas de mediación ha llegado a cuestionar la eficacia del sistema político para preservar la estabilidad del sistema, en una realidad de creciente conflictividad social.

En consecuencia, el discurso de la gobernabilidad ha ocupado el escenario político. No sólo es esgrimido por los sectores dominantes y sus representantes, preocupados por conservar las condiciones políticas de la reproducción de la estrategia neoliberal, en lo que coinciden los *think tanks* del sistema mundial, sino que además amalgama la reacción corporativa de la clase política en defensa de su espacio de existencia y de sus privilegios.

El discurso de la gobernabilidad se presenta como la defensa del sistema representativo y, “por lo tanto”, de la democracia, a partir de lo cual delimita la lógica de la política: la acción política requerida, y la única admitida, es la que otorgue estabilidad tanto a las instituciones y a los actores que determinan su funcionamiento, como a las metas que el sistema persigue

* Publicado en *Política y Cultura*, núm. 8, México, Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, primavera 97.

y a las reglas del juego para lograrlas. En abstracto, esto corresponde de manera natural a la funcionalidad de cualquier sistema político y no representaría mayor novedad. Si, además, en un mismo nivel de abstracción y sin mayores consideraciones, se equiparara cualquier sistema representativo con la democracia, esta discusión carecería de todo sentido y se podría aceptar que la creciente apelación a la política es un signo de mayor democratización, como lo asumen muchos de los análisis académicos. Pero hay un cambio radical de significados cuando se pasa de la abstracción a la realidad, especialmente a la latinoamericana actual. El análisis de lo político a partir de la realidad, además de ser un requisito indispensable para distinguir discursos e intenciones, es el que permite afirmar que la política a la que se apela en América Latina responde al objetivo de los sectores dominantes de impedir que la participación produzca cambios en el orden social y económico actual, persiguiendo también que este orden se legitime en el hecho mismo de la integración política al sistema.

En síntesis, este trabajo se propone discutir cómo las estrategias de gobernabilidad que dominan la acción política en la región no sólo no conducen a un desarrollo democrático, sino que, por el contrario, persiguen la conservación del orden más desigual y excluyente socialmente –y, por lo tanto, antidemocrático– que se ha dado bajo regímenes representativos en la historia moderna latinoamericana. La discusión cobra relevancia, además, porque la concepción de gobernabilidad de los sectores dominantes, que es la de la conservación del “buen orden”, ha logrado incidir en el pensamiento y las conductas de muchas dirigencias sociales y políticas, incluso las que manifiestan rechazo a las consecuencias sociales del neoliberalismo y que declaran aspirar y luchar por la democracia. Se cumple lo que señalaba Juan Rial hace varios años:

La percepción de (in)governabilidad se da “desde arriba” y se liga a la percepción que realizan las élites (la comunidad política, la clase dirigente, los grupos de intelectuales) y a los manejos oligárquicos (autoritarios) a los que se recurre para lograr la tan ansiada eficiencia. Discursivamente se trata, en términos de Bakhtin, de una iniciativa monologal que algunos miembros de la comunidad política intentan transformar en dialogal, aunque reservando al Príncipe –en el sentido maquiavélico– al Soberano –en el de Schmitt– la potestad de la propuesta.¹

1 Juan Rial, “Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay”, México, *Revista*

El objeto de este análisis exige explicitar las siguientes consideraciones metodológicas:

1. En los Estudios Latinoamericanos, el análisis de los fenómenos políticos condensa el nudo metodológico de la disciplina, porque la perspectiva regional se debe construir a partir de realidades de la mayor especificidad. En lo que se refiere a la democracia, las diferencias nacionales en cuestiones como la desigualdad social y la concentración del ingreso y el poder, la fuerza relativa de los actores sociales y políticos, su incidencia en el sistema político, sus prácticas y cultura política, indican una diversidad que no puede desconocerse, aunque ello no impide observar tendencias regionales con notables similitudes.
2. Los fenómenos políticos no son lo mismo que los análisis sobre la política, aunque estén relacionados. La política refiere a los actores políticos y a sus relaciones concretas, no a lo que los analistas piensan sobre la política, lo que suele ocurrir *post facto*. Debe recordarse que las ideas se convierten en ideología (es decir, en condicionamientos de las conductas) por la existencia de sujetos que en su práctica las internalizan y socializan, además de que las ideas mismas son un producto social. Este trabajo atiende principalmente a las opiniones y comportamientos de los actores políticos, que naturalmente se cotejan con las interpretaciones de las ciencias sociales, no porque éstas sustituyan a los primeros, sino porque el plano de la teoría, en su especificidad, es también una expresión de la realidad. Por límites de espacio no es posible incluir las fuentes documentales y discursivas políticas en las que se basa el análisis; sólo se utilizan algunas con fines ilustrativos.
3. Las categorías teóricas son instrumentos de análisis de la realidad que no tienen contenidos conceptuales únicos, ni éstos cumplen la misma función explicativa en contextos distintos a los que les dieron origen. Por lo tanto, la incorporación de categorías al discurso político sin explicitar sus contenidos conceptuales implica un uso ideológico de las mismas, que es necesario desentrañar.

Esto es relevante para la discusión sobre la gobernabilidad como principio articulador de la política, con lo que comienza este trabajo, seguido de un análisis de las circunstancias en las que ello ocurrió en América Latina y de las estrategias de gobernabilidad que existen y se promueven en la región, así como sus efectos sobre los procesos de democratización, con lo que se finaliza.

Gobernabilidad como versión de democracia

El tema de la gobernabilidad no es nuevo teóricamente. De hecho, remite al viejo problema de la relación entre gobernantes y gobernados, en el que la gobernabilidad es el resultado de lograr la obediencia de los gobernados para que el gobierno gobierne con eficacia. La legitimidad no es una cualidad intrínseca a la gobernabilidad, ya que un régimen autoritario también puede hacer a la sociedad gobernable; aunque la legitimidad, obviamente, facilita el resultado. Lo que convoca un mayor interés analítico es la gobernabilidad como búsqueda, como estrategia –que tiene por objetivo la eliminación, el control o la funcionalización de conflictos considerados como disfuncionales (“ingobernabilidad”) para el equilibrio sistémico–, por lo que puede exigir de reconstrucción de las dinámicas sociales y políticas, aunque como categoría tiene un limitado vuelo analítico por su carácter descriptivo y por el hecho mismo de partir del equilibrio en el análisis de lo social.

Con una presencia notable en los análisis académicos y en los discursos políticos en América Latina, la gobernabilidad adquiere una diversidad de significados por el nivel de conflictos al que se alude², pero con el común denominador de ser asimilada a la democracia, concebida también como equilibrio. Esto último es lo que asimismo explica el abuso calificativo de los conflictos como “ingobernabilidad”, que muchas veces corresponde más a intenciones políticas de control y preventivas que a un hecho real.

El análisis de la relación gobernantes-gobernados se encara por lo general de un modo reduccionista bajo la lógica dicotómica Estado-sociedad

2 Se refieren indistintamente a la gubernamentalidad (racionalidad y eficacia de las técnicas de gobierno y el grado de gobierno), como relación armónica de poderes del Estado, como credibilidad de la autoridad, como eficacia de la elegibilidad, como equilibrios macroeconómicos, como estabilidad política y “no violencia”, etcétera.

civil, en la que, incluso, el Estado es reducido a gobierno. De allí que predominen los análisis institucionalistas que dejan de lado todos los otros aspectos de la realidad social en los que se logra la subordinación de los gobernados, es decir, el problema más amplio de la dominación, que en principio es la que explica la relación conflictiva entre democracia y gobernabilidad a partir del propio dilema de la dominación en cuanto a tener que abrir y ampliar la representación de intereses sociales heterogéneos, e incluso antagónicos, para legitimarse. Por eso la búsqueda de gobernabilidad aparece vinculada a la democracia no como sucedánea, sino como su propia cristalización.

Muchas de las discusiones sobre gobernabilidad y democracia llegan a un punto muerto porque soslayan que la esencia conflictiva de la democracia en el capitalismo es la de cuánta participación de los explotados en defensa de sus intereses puede admitir el sistema para preservar la acumulación privada; qué tanto pueden optar los ciudadanos entre proyectos de sentido público alternativos. En América Latina, donde la reproducción del capitalismo requiere de una agudización extrema de la desigualdad y la pobreza, la ampliación de la democracia es a todas luces un obstáculo para la dominación y, por lo tanto, toda forma de democratización es contraria a la gobernabilidad.

La manera de entender las relaciones entre democracia y gobernabilidad depende de la concepción que se tenga de la democracia, que –aunque se pretenda lo contrario– no es neutra. Asumo la democracia como una forma de relación social y política que permite a los miembros de una sociedad acceder a los bienes materiales y culturales por ella generados, lo cual se logra por una capacidad decisoria mayoritaria en relación con esos productos sociales. La democracia, por lo tanto, es un proceso de creciente emancipación humana (democratización) que inevitablemente está asociado –como condición y como resultado– a una mayor igualdad social. El carácter inacabado de la democracia, en ese sentido, no impide tener parámetros y referencias para calificar a una sociedad de democrática o no. Si bien las libertades individuales y públicas son una condición fundamental, lo democrático de una sociedad no se limita a ellas, sino que anida en las capacidades de la mayor parte de la población para decidir con autonomía. La igualdad social como condición necesaria para la democracia no es sólo un asunto ético o “normativo”, sino la posibilidad misma de la realización de las libertades individuales, que no se logran solamente por la individuación

jurídica. Una sociedad profundamente desigual, como la latinoamericana, que concentra la capacidad de decisión en una estrecha minoría, deja a la mayoría sin poder ejercer las libertades liberales, aunque estén consagrados jurídicamente los mecanismos institucionales para ejercerlas.

Distinta es la concepción de la democracia como instrumento de regulación política (administración) de las condiciones de reproducción capitalista. Como se sabe, el sentido emancipatorio de la democracia en el liberalismo primigenio era autorreferido y se tornó una concepción conservadora una vez que la burguesía conquistó el poder: la democracia nació siendo excluyente, censitaria. El sufragio universal fue resultado de luchas sociales de masas. Su ingreso a la política institucionalizada obligó a reforzar los mecanismos para controlarlas social y políticamente, para que, en una sociedad desigual en lo económico y social, una mayor igualdad política no permitiera afectar al poder. Por ello, un aspecto clave de la democracia en el capitalismo es el problema de la representación de intereses.

La formulación schumpeteriana, sintetizada por distintos autores en cuanto a que la democracia es un subproducto de un método competitivo de reclutamiento de líderes³, expresa el nudo de la cuestión: la democracia es concebida como una estrategia para dirigir el conflicto a través de la cooperación y el entendimiento entre las cúpulas dirigentes, operando como un espacio de mediación donde se filtran las demandas de los distintos sectores de la sociedad, con el fin de disminuirlas hasta el punto en que puedan ser aceptadas por el sistema político y satisfechas por el Estado como políticas públicas. Para esta concepción, la política debe ser funcional a la acumulación de capital, a la que se considera la variable independiente. El papel de los líderes o representantes ha mostrado ser una variable dependiente de aquélla en cuanto al carácter de la representación.

En la “era dorada del capitalismo” (1947-1973)⁴, una mayor distribución de la riqueza fungió como factor social de mediación y legitimación que permitió opacar los ribetes de control del modelo político. En aquellas condiciones de expansión capitalista que permitían atenuar el conser-

3 Joseph Schumpeter, *Capitalismo socialismo y democracia (1942)*; Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia* (1987) (Parte 1: El debate contemporáneo), Madrid, Alianza Editorial, 1991. Y en una perspectiva crítica, véase a C.B. Macpherson, *La democracia liberal y su época* (1982), Madrid, Alianza Editorial, 1991.

4 Eric Hobsbawm, *Historia del siglo XX*, Madrid, Grijalbo, 1996.

vadurismo⁵ político e intelectual, los teóricos liberales de la democracia admitieron que una mayor igualdad social es condición necesaria⁶, aunque no suficiente, para estabilizar el sistema, e incluso se aceptó una dosis de conflicto controlado como factor de legitimidad. Como señala Claus Offe, las contradicciones entre democracia y capitalismo pudieron limarse y hacerse compatibles cuando se dieron gradualmente dos principios mediadores: a) el Estado de bienestar keynesiano en un contexto de auge económico, en el que el capitalismo disponía de un margen relativamente alto para satisfacer un número considerable de demandas económicas, y b) una versión específica de democracia, en la que la igualdad política y la participación de masas se hizo compatible con la economía de mercado, con conflictos de clases más atenuados, sobre la base de que la aceptación por parte de los trabajadores de las dinámicas del capital se correspondiera con la protección de niveles mínimos de vida, derechos sindicales y derechos democráticos liberales. Es decir, se trataba de un tipo específico de capitalismo capaz de coexistir con la democracia, en la medida en que la participación de las masas no ponía en riesgo el poder⁷.

El carácter de las élites como pequeños grupos que deciden en función de sus propios intereses, por sí y ante sí, se modificó de hecho cuando esos intereses no sólo pudieron coincidir con los de sus representados formales, sino incluso con los de otros grupos de interés en cuanto a metas económicas y sociales comunes. Los acuerdos no sólo expresaban consensos activos en sus contenidos, sino que en ellos participaban actores sociales y políticos con fuerzas relativas no tan dispares como para poder imponerse concesiones mutuas⁸. La estabilidad de la democracia en el capitalismo coincidió

5 Uso la expresión conservador o conservadurismo como adjetivo, en el sentido de una conducta defensora del *statu quo*; no en cuanto sustantivo, que alude a la corriente del pensamiento capitalista que surge en el siglo XVIII en oposición al liberalismo materializado en la Revolución Francesa.

6 Se puede señalar, entre varios, a Seymour Martin Lipset, *El hombre político. Las bases sociales de la política* (1959), México, Red Editorial Iberoamericana, 1993; Robert Dahl, *La poliarquía. Participación y oposición* (1971), México, Red Editorial Iberoamericana, 1993; y también de Dahl: *La democracia y sus críticos* (1989), México, Paidós, 1992.

7 Claus Offe, "Contradicciones de la democracia capitalista". México, *Cuadernos Políticos* núm. 34, octubre-diciembre de 1982.

8 Guardando las proporciones, tal vez podría hacerse un paralelismo con el periodo antioligárquico y desarrollista latinoamericano.

con su capacidad de representación y satisfacción de intereses de grupos sociales diversos (lo que no disolvió las relaciones capitalistas de poder, pero atenuó las contradicciones).

Pero deberíamos atender a la relativización que sugiere Hobsbawn de este periodo “de las mayores transformaciones económicas, sociales y culturales de la humanidad”, en cuanto a su carácter “tal vez anómalo” en la historia del capitalismo⁹.

Desde mediados de los setenta, la crisis del capitalismo que transforma en excluyente su propia reproducción respecto de mayores niveles de igualdad social, hizo volver por sus fueros conservadores al liberalismo, incluso a modo de exorcismo espectacular. Al igual que en la economía, el equilibrio político se busca por la contracción de las demandas. El papel de las élites neo-liberales, particularmente en América Latina donde lo conservador en la crisis tiene grado superlativo, es el de ejercer el control social y político sobre las masas para garantizar su permanente subordinación a una sociedad que las excluye. Ése es el rasero para medir la eficacia del sistema político. Su eficiencia depende de la capacidad para generar nuevos mecanismos para que la dominación se realice con amplios márgenes de legitimidad. Como veremos, es precisamente la ausencia de esa capacidad lo que produce la crisis del sistema político que tanto preocupa a sus actores privilegiados.

El equilibrio político en sociedades sumamente heterogéneas y fragmentadas sitúa a las élites como constructoras de un consenso por arriba¹⁰ que despeje un cierto “consenso básico”¹¹ por abajo –aunque éste sea pasivo y no exprese más que una forma de subordinación a la dominación–, con el cual el problema de la democracia se pueda reducir al del “consenso procedimental”; centrado en el cómo y no en el qué, pues en relación con éste, el éxito de la política se mediría por haber logrado una cierta homogeneidad valórica y política entre las cúpulas sociales y políticas integrantes de la élite. Entonces, la democracia se convierte en una simple

9 Hobsbawn, *op. cit.*, p.18.

10 Como señala Arendt Liphart, la estabilidad política se obtiene por mecanismos de integración sistémica en los que “el consenso se busca no en el nivel de abajo sino en el nivel de liderazgo al enlistar el apoyo de personalidades claves de todos los grupos sociales más importantes”. *Democracia en las sociedades plurales* (1977), México, Prisma, 1988, p.140.

11 Sartori, *op. cit.*, p.123.

búsqueda de las formas, fines libres de significado, es decir, un juego¹². Las reglas del juego sustituyen a la democracia, son la democracia.

Para el liberalismo nuevo, la posibilidad de confrontar opciones distintas de sociedad no sólo no es el objeto de la democracia¹³ sino que, más aún, el juego competitivo que convierte la política en mercado exige que en la competencia se arriesgue poco; que “las ofertas políticas” tiendan a nivelarse para poder competir y las ventajas sean más que nada éxitos de *marketing* (es el papel de los medios de comunicación). La “participación” de los ciudadanos es la del consumidor individual “racional” que en el acto electoral decide qué consumir, supuestamente prodigando premios y castigos. El momento “social” de la “participación” es la opinión pública¹⁴, que, como ocurre actualmente, puede ser perfectamente pasiva y cada vez más asociada a una pantalla de televisión y un módem.

Gobernabilidad y democracia pueden aparecer como lo mismo, porque esto a lo que se llama democracia, antes que serlo, es gobernabilidad, dominación funcional. Será precisamente la crisis capitalista, y su crisis de dominación a partir de la incapacidad de las élites para controlar los conflictos, y el hecho de que la economía sea cada vez más un factor de inestabilidad política, los que desde mediados de los setenta conduzcan a sobrevalorar el componente de control político del modelo: “El corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque en cierta

12 Dice Umberto Cerroni: “...suprimido el objeto del horizonte del conocimiento social, la búsqueda, replegada en sí misma como búsqueda de las formas, se compromete en fines libres de significados: juega”, en *Política* (1986), México, Siglo XXI, 1992, pp. 32-33.

13 Bobbio no comparte esta concepción de democracia sin alternativas: “para una definición mínima de la democracia no basta ni la atribución del derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número alto de ciudadanos ni la existencia de reglas procesales como la de mayoría (o en el caso extremo de unanimidad). Es necesaria una tercera condición: es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra”. *El futuro de la democracia* (1984), México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p.15. Sin embargo, al privilegiar la discusión jurídico-institucional sobre la de los condicionamientos capitalistas, no aborda la cuestión de qué tipo de alternativas se toleran, como para que la democracia no sea sólo la posibilidad de “alternancia” de gobiernos, sino también de proyectos sociales incluso antagónicos.

14 Muchos científicos sociales ya han constatado que los estudios de opinión son un excelente negocio.

medida, gobernable y democracia son conceptos en conflicto. Un exceso de democracia significa un déficit en la gobernabilidad, una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente¹⁵.

La lógica de la gobernabilidad, porque es la de la dominación, es conservadora, al margen del régimen político de que se trate. En el debate actual hay quienes la adjetivan diferenciadamente como “conservadora” o “democrática”, para justificar, en el segundo caso, su uso como sinónimo de democracia, lo que es incorrecto. Primero, porque mientras la lógica de la democracia admite la negociación y decisiones de cambio en los fundamentos del orden social, en el contexto de la crisis capitalista y en el modo como se manifiesta en América Latina, la gobernabilidad las excluye. Es un mecanismo de control de conflictos, no de su procesamiento. Segundo, si se le usa en su acepción de estabilidad política, no debe olvidarse que estabilidad política y estabilidad del sistema político democrático no son lo mismo. No hay mayor estabilidad política que bajo el terror de Estado dictatorial, que elimina toda expresión de conflictos y hasta a los sujetos conflictivos mismos. Mientras que los sistemas políticos democráticos que han logrado su mayor permanencia son los que han permitido la expresión más orgánica de las visiones y proyectos alternativos existentes en el seno de su sociedad.¹⁶ Tercero: el eje de la gobernabilidad es el respeto a las reglas del juego establecidas, sin cuestionar quién las establece y con qué fines. Como ocurre en América Latina, si las reglas del juego del sistema contribuyen a reproducir la desigualdad y la exclusión sociales al inhibir y bloquear toda acción contraria a ello, esas mismas reglas del juego son el mayor obstáculo para el desarrollo de la democracia, por lo que no puede apelarse a unas y otra simultáneamente. Quienes esgrimen la “gobernabilidad democrática” parten de la idea de un “incrementalismo democrático” en los marcos de la gobernabilidad sistémica; es decir, generar medidas “compensatorias” a la ciudadanía pero

15 Informe de la Comisión Trilateral *La gobernabilidad de la democracia.*, op.cit, p. 385. La similitud entre las estrategias de gobernabilidad planteadas por la Trilateral y las que se desarrollan en América Latina, las analizo en el trabajo “Gobernabilidad como dominación conservadora”, 1995 (en este volumen).

16 Que la lógica del poder de clase impone un techo a estos desarrollos y que han sido los propios dominantes quienes han llegado a destruir esos mismos sistemas políticos democráticos (Chile, 1973), es un hecho que no invalida la constatación anterior, sino que reafirma, justamente, la discusión sobre las contradicciones entre capitalismo y democratización.

“sin llegar al límite de la ruptura de la racionalidad estructural”¹⁷, lo que en América Latina hoy es un contrasentido.* La identificación *sustantiva* o *adjetiva* entre gobernabilidad y democracia es de carácter conservador porque, en la primera, desde la intención misma, la democracia que se mimetiza es la de élites o de equilibrio. La segunda, como se ha dicho, porque en su resultado implica la subordinación a reglas del juego antidemocráticas.

La difusión de estas visiones en América Latina permite constatar una hegemonía teórica y política conservadora, pero eso no basta para explicar por qué ocurrió, lo que discutiremos enseguida.

Autonomía de la política y transición

La reducción de la política a método de construcción de consensos procedimentales, como se ha dicho, conduce a vaciar la representación político-electoral de significados sustantivos en materia de representación de intereses. La política se autonomiza de lo social y se convierte en el escenario del voluntarismo, el terreno donde debe predominar el deseo de llegar a acuerdos, al margen de la naturaleza e implicaciones sociales de los mismos; es el reinado de la “deseabilidad democrática”¹⁸, donde democracia es consenso procedimental pragmático despojado de todo lo que peyorativamente se califica como “normativo”.

El pragmatismo en política se impuso bajo la lógica de la transición. Desde los años ochenta, América Latina se ha convertido en el escenario de la “transición permanente”, cuyo signo ha sido la recomposición de los sistemas políticos; unos –la mayoría– desde regímenes dictatoriales, y otros como “modernización liberal” (o “neo”) desde los viejos corporativismos estatales.

17 Gerónimo de Sierra. “Sobre los problemas de (in)governabilidad en el proceso de desarrollo uruguayo: un enfoque sociopolítico”, en *Políticas de Estado: estrategias de mediano y largo plazo. La dimensión económica y política*, Montevideo, Instituto Fernando Otorgués-Trilce, 1993.

* Esta afirmación requiere una precisión: si la compensación satisficiera las carencias estaría en contradicción con la racionalidad estructural; pero si sólo cubre mínimos para los límites de la sobrevivencia no la afectan. E incluso más: explotando las condiciones de miseria, obtienen adhesiones clientelares que legitiman la racionalidad estructural, como se indica más adelante en este trabajo.

18 Manuel Antonio Garretón, “La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución” (1988), *Estudios Públicos* núm. 42, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, otoño de 1991, pp.101-133.

Entre los primeros, excepcionalmente fue la restauración del anterior sistema político (Uruguay) o una cuasi restauración (Chile)¹⁹; en Brasil se trató de una construcción nueva después del larguísimo *impasse* dictatorial que destruyó el viejo corporativismo; en Argentina fue el reingreso de los viejos actores políticos a unas reglas del juego de notable intermitencia histórica, mientras que en Paraguay la política de representación sigue inventándose. Entre los segundos, el caso más típico es México.

La lógica de la transición es la de la “incertidumbre”. Incertidumbre sobre la posibilidad de establecer una “poliarquía” o lo que también es llamado “democracia formal”, cuando existen “enclaves autoritarios” y una “débil cultura política liberal” (entendida en su versión elitista actual). Pero lo que esencialmente explica las incertidumbres es el hecho constantemente minimizado de que en América Latina no se dan las elementales condiciones socioeconómicas necesarias que los teóricos del pluralismo han reconocido como requisitos para legitimar la democracia²⁰.

La incertidumbre es lógicamente razonable cuando la “salida” de las dictaduras fue concebida por los sectores dominantes como una estrategia eficaz para que, en condiciones de profunda desigualdad social y pobreza, la vuelta a regímenes representativos y Estados de Derecho no implicara una apertura de compuertas para el estallido de conflictos, que amenazaran la continuación de las mismas –o peores– políticas neoliberales que fueron impuestas bajo la represión dictatorial. Una incertidumbre razonable porque para amplios sectores de latinoamericanos la reconquista de la libertad se asociaba a la aspiración de mejorar sus condiciones de vida y a la justicia social. El objetivo de profundizar la reestructuración capitalista neoliberal bajo nuevas relaciones políticas hacía imperioso que las mayorías explo-

19 En Chile sigue vigente la Constitución pinochetista de 1980 y en el Congreso hay nueve senadores designados. Para seguir los debates actuales al respecto, véase *El Mercurio Internacional*, Santiago de Chile, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1996, p.4.

20 Dahl es quien, de hecho, diferencia democracia formal (poliarquía) de “democracia integral”, ubicando en la primera atributos en materia de libertades públicas e individuales (derecho de asociación, expresión, información, elecciones libres periódicas, etc.), frente a la segunda, que es considerada como el tipo ideal difícilmente alcanzable. Nunca Dahl reconoce que su ideal es inalcanzable porque su horizonte de visibilidad es el capitalista. Sartori ni siquiera mira más allá de “lo que existe”. La dicotomía democracia formal-sustantiva es inadecuada, a condición de que los derechos liberales formales se hagan reales al ser ejercidos plenamente por la mayoría de la sociedad, lo que supone mayor igualdad social.

tadas subsumieran sus demandas económicas y sociales a sus intensas aspiraciones de libertad y a la preservación de los nuevos regímenes. Durante bastante tiempo esto se logró exitosamente, explotando los efectos del terror y la permanencia de las fuerzas armadas como actores políticos. Las transiciones parecieron ofrecer la evidencia empírica de que la política es autónoma de la economía, pues cambió el régimen aunque se mantuvieron las condiciones de explotación. Lo que fue facilitado por una importante renovación de la derecha en el sentido de poder pasar de la represión más brutal a la negociación como forma de dominación. La confianza de los subalternos hacia las posibilidades de la negociación política creció en los casos en que, para borrar la imagen de connivencia con los militares, esta derecha renovada²¹ fue capaz de renunciar momentáneamente a sus exigencias de acumulación salvaje, a cambio de que se adoptara esta nueva concepción de democracia.

Conseguido el nuevo *look democrático*, aquélla recuperó rápidamente la coherencia clasista de sus objetivos capitalistas: los reajustes y *shocks* neoliberales fueron más violentos incluso que antes. En la nueva coyuntura, la capacidad de resistencia autónoma popular había sido debilitada con las políticas de concertación que funcionaban bajo la regla de que cualquier acción colectiva popular significaba bloqueos antidemocráticos al sistema. Y por si quedaba alguna duda sobre la necesidad de preservar el régimen por encima de cualquier demanda social, las amnistías a las fuerzas armadas dejaron prácticamente intacto el recurso de chantaje político bajo la amenaza de recurrencias dictatoriales.

Así se impuso la lógica de “las dos transiciones”. La “primera transición” fue asumida definitivamente como la democracia posible, que fincaba su “consolidación” en la hiperestabilidad política y social. Una vez que se “consolidara la democracia” iba a ser posible, en otro momento indefinido, iniciar la “segunda transición” hacia una democracia económico-social. Estabilidad política para el crecimiento, que en algún momento éste produciría derramas hacia los menos favorecidos.

Parte importante de los intelectuales latinoamericanos adscribieron al encumbramiento “realista” de la lógica de las dos transiciones y repi-

21 Analizo la “nueva derecha” latinoamericana en otros trabajos como “Teoría y práctica de la nueva derecha latinoamericana”, ponencia al Congreso de ALAS de La Habana, 1991, y “Gobernabilidad o democracia: perspectivas de la izquierda, ofensiva ideológica de la derecha”, *Estudios Latinoamericanos*, México, en prensa.

tieron con pocos matices los planteos de Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter en el sentido de que era decisivo que:

se alcance, de algún modo, una transacción entre los intereses de clase, a fin de reasegurar a la burguesía que sus derechos de propiedad no correrán peligro en un futuro inmediato, a los trabajadores y otros grupos de asalariados que a la larga se satisfarán sus demandas de mejores remuneraciones y de justicia social [para lo cual] A la izquierda se le requiere no hacer un uso pleno de su ventaja simbólica inmediata y sacrificar, o al menos posponer por un periodo indefinido, su objetivo de una transformación que lleve a una “democracia avanzada”.²²

Hoy en día, después de varios procesos electorales, considerados como el parámetro democrático, los gobernantes latinoamericanos se vanaglorian de “la consolidación de la democracia”²³. Sin embargo, la “segunda” transición no comienza. Se dice que es porque hay crisis de gobernabilidad. Y que ésta se da porque hay desigualdad y pobreza, pero ello no es suficiente para proponerse entrar en la segunda transición. A lo sumo, se promueven políticas focalizadas.

La otra modalidad de transición permanente que permite explotar la incertidumbre y los consensos entre élites es la llamada “modernización”: América Latina entró por fin a la modernidad económica, pero está rezagada en la modernidad política; ésta se convertirá en “la” meta política para superar el “subdesarrollo”.

Modernización política o neo-oligarquización

El dogma liberal de la modernización parte de la modernización económica, que es concebida como privatización de las funciones estatales y fortalecimiento del mercado; y presume sus reflejos políticos al considerar que aquélla resulta en una “dispersión del poder” que se traduce en un “pluralismo político”. Como lo expresa Milton Friedman,

²² Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, pp.77-78. Citado también en “Gobernabilidad como dominación conservadora”, *op. cit.*

²³ Véase *Declaración de Viña*, VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, 11 de noviembre de 1996.

El liberal, por esencia, teme a la concentración del poder. Su objetivo es preservar el máximo grado de libertad posible para cada individuo, teniendo en cuenta que la libertad de un hombre no debe interferir con la de otro. Piensa que para conseguir ese objetivo, el poder tiene que estar diseminado. Le parece sospechoso que se asignen al Estado funciones que se podrían realizar a través del mercado [...] El poder del Estado debe estar disperso [...] La organización económica es importante como medio para el fin de la libertad política, por sus efectos sobre la concentración o dispersión del poder. La clase de organización económica que produce libertad económica directamente, es decir, el capitalismo competitivo, produce también libertad política porque separa el poder económico del poder político, y de esta forma permite que el uno contrarreste al otro.²⁴

Su derivación en pluralismo político es presentada por Robert Dahl del siguiente modo:

Debido a sus necesidades intrínsecas, la economía avanzada y las estructuras que la apoyan distribuyen automáticamente los resortes y las distinciones políticas entre una gran variedad de individuos, grupos y organizaciones. La educación, los ingresos, el status y el prestigio dentro de cada grupo de especialistas, el acceso a las asociaciones, el pertenecer a las élites o ser uno de sus expertos, todo ello forma parte de los resortes y distinciones políticas; resortes y cualificaciones que pueden utilizarse como trampolín para obtener mejoras para uno mismo, para el grupo o para la organización. Grupos y asociaciones generan un impulso imperioso hacia la autonomía, lealtades internas y de grupo, y complejas pautas de adhesiones y cismas. Cuando surgen desavenencias, cosa inevitable, el acceso a los resortes políticos hace posible que los individuos y grupos no tengan que recurrir al empleo de la coacción y de la amenaza para solucionar el conflicto, e insistan, en cambio, en algún tipo de negociación [...] el obtener, en suma, el consenso de forma diametralmente opuesta a los métodos de coacción o del ejercicio del poder de manera unilateral.²⁵

Esta concepción de la modernización política logró influir de manera importante en países como México, cuyo sistema político no cumple con suficientes atributos liberales, sobre todo en materia de competencia electoral, y creó expectativas políticas que en muchas ocasiones velaron los rechazos al neoliberalismo, al que se llegó a tolerar como un “mal necesario”. Partiendo de la dicotomía Estado-sociedad civil, no pocos académicos y

24 Milton Friedman, *Capitalismo y libertad* (1962), cit. por Harald Beyer, “Selección de escritos políticos y económicos de Milton Friedman”, en *Estudios Públicos* núm. 60, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, 1995, pp. 431-484.

25 R. Dahl, *La poliarquía*, *op. cit.*, pp. 78-79.

políticos confiaron en que la privatización de numerosas funciones económicas y sociales del Estado y el debilitamiento del corporativismo estatal trasladaran al sistema de partidos mayor capacidad de incidencia en las decisiones políticas, como mediadores de una “sociedad civil fortalecida y ciudadanizada”. Y si bien las expectativas no se satisficieron en lo primero, todavía se asume la segunda parte de dicho razonamiento con una sobrevaloración de los organismos no gubernamentales como materialización de pluralismo político.

Detrás del debate sobre la modernización está la constatación, más que la explicación, de que en América Latina lo “tradicional” no cede lugar a lo “moderno”. Habría que empezar por decir que la teoría liberal de la modernización, con sus visiones dicotómicas, es un pobre instrumento para entender la realidad social, además de que parte de supuestos teóricos y empíricos falsos.

El primero consiste en confundir “privatización” con “socialización”. En una sociedad dividida en clases y en la que el capital observa los grados de concentración y centralización de los latinoamericanos (datos que deliberadamente no considera el liberalismo), esa privatización se convierte en “concentración” y no en dispersión del poder. No sólo se refuerza el poder de los grandes propietarios pues se apropian de numerosas actividades económicas y sociales del Estado, sino que además lo hacen con absoluta impunidad. La liquidación de las formas estatales de mediación social elimina cualquier posibilidad de restricción o control por parte de los grupos subalternos al capital (una de ellas fue el corporativismo, que implicaba negociaciones económicas y sociales mediadas por el Estado).

Segundo, se comete un grave error al considerar como idénticos el Estado, el gobierno y el poder. La desconcentración de alguno de los dos primeros (reforma neoliberal del Estado) no es la dispersión del tercero, como tampoco la crisis del sistema político significa necesariamente la crisis del Estado y menos la del poder. En América Latina el poder se sustenta en una alianza dominante, numéricamente pequeña pero muy poderosa, entre los grandes grupos económicos transnacionalizados, la clase política usufructuaria del poder, los aparatos represivos policiales y militares, las cúpulas del narcotráfico, las fracciones beneficiarias del modelo y las fracciones más conservadoras de la sociedad (entre las que se encuentran los medios

de comunicación)²⁶, que en su mayoría no pertenecen al ámbito estatal y sí, en cambio, a la sociedad civil, que está integrada tanto por dominados como por dominantes. Con las privatizaciones estos últimos refuerzan su dominio económico y su capacidad de decisión política, que la ejercen con y contra el Estado. Por lo tanto, lejos de ocurrir una dispersión del poder, éste se concentra en una nueva oligarquía que ejerce directamente el poder económico y político. La recurrencia de prácticas tradicionales es una derivación de la modernización económica neoliberal, que requiere de formas de dominación excluyentes, rasgo propio de la dominación oligárquica.

El “subdesarrollo político” latinoamericano no es precisamente una manifestación de excesiva injerencia popular en las decisiones públicas, como pretende hacer creer la derecha con la ideologización del populismo²⁷, sino por el contrario, es un signo de sometimiento y control de los subalternos. Y menos aún que “el subdesarrollo” sea “responsabilidad de la izquierda”, como pretende el aspirante a ideólogo de la derecha fundamentalista liberal, Álvaro Vargas Llosa, quien atribuye a las perversiones históricas de la izquierda el que en América Latina haya

empresarios sobreprotegidos de toda competencia, que deben su fortuna a mercados cautivos, a barreras aduaneras, a licencias otorgadas por el burócrata, a leyes que lo favorecen; una oligarquía de políticos clientelistas para quienes el Estado cumple el mismo papel que la ubre de la vaca para el ternero; una oligarquía sindical ligada a las empresas estatales, generalmente monopólicas, que le conceden ruinosas y leoninas convenciones colectivas; y, obviamente, una enredadera de burócratas crecida a la sombra de este corrupto Estado benefactor.²⁸

Se oculta deliberadamente que debido a esas condiciones de privilegio, que permitieron un uso patrimonial del Estado, esos mismos

26 Eduardo Ruiz Contardo, “Crisis, descomposición y neo-oligarquización del sistema político en América Latina”, *Política y Cultura* núm. 5, México, UAM-Xochimilco, otoño 95, pp. 69-87.

27 La prédica apunta a descalificar como “populista” toda acción política que asuma los intereses populares, ocultando que el populismo fue una alianza policlasista dirigida por la burguesía contra el poder de la vieja oligarquía. Menos aún es una crítica al estilo chapucero de los caudillos, que es perfectamente tolerado por el *establishment*, de lo cual hay sobrados ejemplos en gobernantes deportistas, modelos de televisión, galanes y cantantes.

28 Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, *Manual del perfecto idiota latinoamericano*, México, Plaza & Janes Editores, 1996, p.114.

actores se convirtieron en los protagonistas de la modernización neoliberal y de la neo-oligarquización del sistema político que resulta de ello.

El análisis de la política, como fenómeno al margen del problema del poder, conduce a otra forma frecuente de reduccionismo analítico como es la personalización de la explicación, situándola en la voluntad individual de los gobernantes. Por eso se les reclama “falta de voluntad política” y se les acusa de “errores” –cuya solución sería el recambio de élites–, en lugar de atribuir sus conductas a una racionalidad política coherente, aunque resulte en lo contrario para la sociedad. En este punto, y ante el panorama latinoamericano, no se puede dejar de reconocer que las diferencias morales y políticas de los gobernantes no son para nada indiferentes, pero no bastan para explicar los grados en que se ha dado la fusión personal de las burocracias gubernamentales con los grandes intereses capitalistas transnacionales (incluidas las cúpulas del narcotráfico). Los países en los que esa fusión se da con mayor intensidad son, en general, los que han carecido de contrapesos populares significativos en la historia de conformación de sus Estados y sus sistemas políticos, lo que ha permitido toda clase de impunidad en el manejo de lo público.

La lógica de la “modernización” del sistema político que circunscribe la política a obtener mayores espacios para las élites “de oposición” –en un marco de gobernabilidad– sin que exista construcción de fuerza política que sustente la capacidad de negociación, termina haciendo de los consensos un juego de mayor subordinación, que incluso puede agudizar la impunidad neo-oligárquica.

Gobernabilidad e ingobernabilidad en América Latina

Los déficits conceptuales para analizar el problema de la gobernabilidad no son menores que los del estudio mismo de dichas prácticas, a las que el sistema político debe legitimar para “preservar la democracia”. El análisis concreto de la gobernabilidad en la región debe atender a tres aspectos del fenómeno que están dialécticamente vinculados: 1) los éxitos de las prácticas dominantes que han permitido hacer compatible el sistema representativo con la desigualdad y la exclusión sociales, así como lo que significa en términos de democratización; 2) los síntomas de agotamiento

de estas estrategias, y 3) las búsquedas de renovación de las estrategias de gobernabilidad en que está empeñada la clase política y el carácter que ello le asigna a la política.

Por cuanto la gobernabilidad es el resultado exitoso del ejercicio de la dominación, la obediencia de los dominados no se genera exclusivamente en el ámbito institucional. Éste, más bien, es reflejo del conjunto de relaciones sociales y políticas en las que se produce la subordinación.

En este sentido, debe reconocerse que durante más de una década ha habido indudables logros políticos e ideológicos del sistema al haberse socializado la gobernabilidad como democracia, impuesto el neoliberalismo y sus “verdades” como única opción capitalista posible y haberla convertido en una articulada y omnipotente visión del mundo, abonada por la crisis del socialismo. No obstante que entre las décadas de los ochenta y noventa crecieron la pobreza y la desigualdad, ello no implicó en ningún país de la región peligro alguno para la consolidación del modelo ni para las relaciones de poder. Al contrario, han sido las transformaciones económicas y sociales producidas por la reestructuración capitalista en curso las que han mantenido disgregados a los millones de latinoamericanos afectados por el neoliberalismo, impotentes para defender organizadamente sus intereses.

La gobernabilidad tiene un sustento social en las nuevas relaciones entre trabajo y capital, que no sólo han fortalecido económica y políticamente al capital, sino que han incidido en los comportamientos sociales y políticos de los explotados. La “flexibilización laboral” –que libera al capital de todas las trabas sociales conquistadas en décadas de luchas sociales– y el desempleo generan niveles de inseguridad de tal magnitud y de competencia entre los propios trabajadores, incluso regionalmente, que los obliga a aceptar la desvalorización de su fuerza de trabajo y su subordinación al capital. Conservar las fuentes de empleo significa que los trabajadores deban ser los primeros en preocuparse porque los empresarios obtengan ganancias a partir de su productividad, ante lo cual los sindicatos pueden ser presentados como los peores enemigos de los trabajadores.

Esto, aunado a las crecientes masas de explotados que desarrollan formas alternativas de sobrevivencia, es el sustrato de la multiplicación de conductas individualistas y conservadoras en los conglomerados populares, lo que reduce la emergencia de acciones colectivas y la capacidad de cuestionamientos reales al orden de desigualdad. Se producen francas

regresiones en sus experiencias y grados de conciencia clasista y una creciente marginalidad política que facilita todo tipo de manipulaciones. El tan criticado –por “tradicional”– clientelismo se revitaliza incluso en sus manifestaciones más degradantes, cuando la pobreza, como único horizonte, reduce al mínimo todas las expectativas que hacen a la condición humana. Junto a la apatía política que ello provoca, esa misma degradación social es la que permite hacer pasar por “políticas sociales” a focalizados gastos de esmirriada cuantía, por los que compiten pobres contra pobres. Son pobres, también, los que roban y asaltan a otros pobres, y también son pobres los que terminan aplaudiendo las prácticas crecientemente autoritarias en defensa de la propiedad y, en su marginación política, renunciando a todo empeño colectivo por ejercer presiones. Desde luego que ello no ha impedido la manifestación de conflictos, a veces numerosos, pero en general aislados, y, por lo mismo, ineficaces para modificar la realidad.

A pesar de la disgregación social, es cierto que se observan distintas formas gregarias de resistencia, como son algunas manifestaciones étnicas, generacionales o de género, entre otras, que algunos análisis identifican como la emergencia de “una nueva sociedad civil” e incluso como un signo de pluralismo democrático, pues funcionarían como múltiples instancias de gestión y participación. Aunque a muchas de ellas se les tolera una mayor expresividad que a las de tipo clasista, también son controladas o funcionalizadas en un sentido de gobernabilidad. Se les busca aislar como particularismos explotando su especificidad para impedir que se articulen en una noción de lo popular, dándoseles un tratamiento diferenciado que va desde cooptaciones y programas focalizados de corte clientelístico, para su control corporativo, hasta represiones abiertas. Éste también es un campo de competencias de y en la “sociedad civil” por espacios y acceso a bienes y servicios. En cuanto a que se conviertan en núcleos alternativos de participación y decisión, mucho depende del estrato social al que pertenezcan; los más pobres y excluidos lo son en todos sus roles y espacios²⁹.

Pero también la clase media acusa efectos disgregadores por la nueva realidad social. Desplazada de las tradicionales actividades vinculadas al

29 La mujer pobre no puede “gestionar” el alimento de sus hijos ni logra incidir ante las instituciones en su educación formal; es impotente ante la especulación de los intermediarios de servicios y difícilmente tendrá tiempo y energías para hacer frente a las arbitrariedades de la autoridad, menos aún para informarse, si es que sabe leer.

Estado, golpeada por el empobrecimiento y la inseguridad económica y con una difícil reinserción laboral, tiende con mayor facilidad al ostracismo, al individualismo y a conductas conservadoras, siendo mucho más reactiva a la manipulación de sus frustraciones, que muchas veces redundan en su cooptación por el sistema y en la neutralización de su potencialidad política crítica.

Éste es el escenario social de la gobernabilidad. Quienes la identifican con la democracia terminan por legitimar la pobreza como condición para su existencia y como tributo a su estabilidad. Ésta es la ciudadanía de la democracia, una verdadera ciudadanía de baja intensidad, como señalara Francisco Weffort³⁰.

Para los que adscriben a la democracia de élites, la alienación a millones de latinoamericanos de los atributos esenciales del ciudadano no es un obstáculo para la democracia, porque esa concepción ha invertido el *locus* de su realización: el actor privilegiado de la democracia no es la ciudadanía, sino los líderes partidarios integrados o vinculados a las cúpulas del poder. Los espacios que la política tiene como poder de decisión pasan por ellos, no por aquélla.

Así ha sido siempre para los partidos del sistema. Lo nuevo a considerar es que esa lógica ha sido internalizada por muchos de los partidos de izquierda y centro izquierda³¹, a los que se busca integrar no como la izquierda “en el sistema” sino como la izquierda “del sistema”, como pares a los que se les tolera en la medida en que acepten las reglas del juego y a los que se premia por ello con las prebendas y privilegios de que gozan los elegidos.

Esas reglas determinan que el consenso procedimental no tenga por objetivo, como se dice, “el respeto a las reglas de la democracia”, como la de mayoría, sino más bien el de aceptar la condición fundamental de la gobernabilidad: que el *locus* de las decisiones económicas está en otra parte³². El uso ideológico del discurso de la globalización permite establecer

30 Francisco Weffort. *Qual Democracia?*, Sao Paulo, Editora Schwartz, 1992.

31 El deterioro o el desinterés por las estructuras de base no sólo es imputable a las condiciones generales adversas para la participación o la militancia.

32 Michel Camdessus, director del FMI, es categórico: “...cualquiera que sea el color político de un gobierno tiene que encarar la realidad y buscar los mejores métodos para optimizar el crecimiento y la prosperidad colectiva. Me parece que en todos los países del mundo, para los dirigentes de izquierda, de derecha o del centro, las opciones no pueden ser muy numerosas. Pueden introducir matices interesantes, pero dentro de una disciplina de respeto al mercado, de apertura internacional y de equilibrio y

los parámetros del “realismo político”: renunciar a cualquier acto de voluntad para transformar la realidad económico-social.

La clase política define en esos términos su función en el sistema: esencialmente de control político, más que de mediación. Así contribuye a la gobernabilidad y a la neo-oligarquización del sistema político.

Pero también con ello desacredita la política ante amplios sectores sociales. ¿Es esto condición suficiente para una crisis de gobernabilidad? La crisis de legitimidad no lo es si no deriva en expresiones de contrapoder, es decir, en fuerza política capaz de hacer retroceder a la que poseen los que detentan el poder.

La ineficiencia gubernamental, por ejemplo, en la que se concentran muchos de los análisis, no es condición suficiente de ingobernabilidad. Es indudable que un gobierno incapaz de hacerse cargo de la sobrevivencia de la gente, de su educación, de su seguridad y de las mínimas garantías jurídicas, contribuye a potenciar la desobediencia de los gobernados e incorpora elementos críticos a una dominación eficaz. Pero no todas las formas de desobediencia y anomia impiden el logro de las metas dominantes (la concentración del capital, del ingreso y del poder y la exclusión de las mayorías de las decisiones económicas y políticas fundamentales). La desesperación y el canibalismo sociales en general no han logrado cuajar en fuerzas políticas capaces de modificar la realidad.

La apatía política, por sí misma, tampoco da cuenta de crisis de gobernabilidad, antes bien la refuerza. Para la democracia de élites, la apatía, el abstencionismo electoral, por ejemplo, es un buen signo de “desdramatización de la política”, de que se apuesta poco y se demanda poco. Distinto es si el alejamiento de la política institucionalizada, más que apatía, es rechazo a los partidos y una búsqueda de formas autónomas de representación de intereses, no controlables por el sistema partidario. En varios países como Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay este nuevo fenómeno ha provocado la reacción de la clase política mediante el estigma del “corporativismo”³³.

disciplina macroeconómicas sin las cuales las economías van al abismo”. Entrevista en el semanario *Búsqueda* núm. 860, Montevideo, 12 de septiembre de 1996, p.60.

33 La representación de intereses grupales (corporativos) ha sido legitimada por la democracia liberal cuando ésta era capaz de mediar entre ellos (véase S. M. Lipset, *El hombre político, op. cit.*), cosa que hoy no ocurre. La ideologización consiste en confundir el corporativismo social con el estatal con el fin de descalificarlo. Se oculta,

Un signo de amenaza a la gobernabilidad es el crecimiento electoral de la izquierda y del centroizquierda, verificable en varios países y que les ha permitido acceder a gobiernos municipales (Argentina, Brasil, El Salvador, México, Uruguay, Venezuela).

Es destacable el hecho de que se haya buscado la integración de la izquierda al sistema para neutralizarla, pero al mismo tiempo eso le haya proporcionado mayores posibilidades de competencia electoral. En su crecimiento electoral se combinarían varias causas y explicaciones. Entre otras, por una parte, porque en algunos países la izquierda representa la acumulación de una reserva moral y política de décadas de lucha por la democracia y la justicia social; porque, junto con ello, o por separado, después de algunos recambios gubernamentales vividos como continuismo, conserva aún el beneficio de la duda. También se debe en algunos casos a la tozudez de las bases partidarias que no renuncian a luchar por cambios.

En algunos casos, como los del Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y el Frente Amplio en Uruguay, el reconocimiento a gestiones gubernamentales honestas y eficaces se ha plasmado en crecimiento electoral y reelección de los gobiernos municipales y los proyecta hacia objetivos nacionales. Pero introduce desafíos de mediano plazo.

Para la izquierda misma, la competencia electoral se legitima ya no como potencialidad sino como viabilidad, tentándola a entrar en la lógica del mercado político, lo que la induce a “renovar” sus prácticas políticas y el sentido de la representación, a desperfilarse programáticamente para constituirse en una oferta electoral de más amplio consumo. La “renovación”, a su vez, le redunda en una mayor tolerancia por parte de la derecha, que la condiciona a asumir los términos del consenso como políticas de Estado.

además, que el corporativismo estatal en América Latina no fue un equilibrio de clases, aunque el predominio del capital se dio en una modalidad mucho más inclusiva y, por supuesto, no liberal. Basta un ejemplo: “El Parlamento aprobó por abrumadora mayoría las políticas definidas por las autoridades de la enseñanza. Si eso como ‘debate nacional’ para los sindicatos no es suficiente [...] ¿qué es lo que plantean? ¿cambiar el sistema democrático representativo por otro en que las corporaciones tengan capacidad para definir políticas del Estado? Si es así, convendría que recordaran que hace algunas décadas ese sistema lo aplicó un señor que acabó colgado en un farol en una plaza de Milán: se llamaba Benito Mussolini”. Claudio Paolillo, “Nefastas consecuencias”, *Búsqueda* núm.835, Montevideo, 14 de marzo de 1996, p.15.

Los efectos de corto y mediano plazo de la “cohabitación” con gobiernos nacionales de signo contrario, aún están por verse.

Por esa razón, el crecimiento electoral por sí mismo tampoco es condición suficiente para hablar de crisis de gobernabilidad (aunque esto sea el caballito de batalla de las campañas electorales de la derecha), a menos que ese crecimiento electoral represente el aumento de la fuerza política de una fuerza social contraria a los intereses dominantes.

Las prácticas de la derecha para integrar la izquierda al sistema, para controlarla y de paso legitimarla, tienen una dialéctica política compleja. Significa abrir los “candados” que las legislaciones electorales mantuvieron cerrados. Pero al mismo tiempo, comporta un riesgo que le obliga a hacer mucho más sofisticada la ingeniería electoral, para que en el *toma y daca* la derecha no pierda³⁴. Si en algunos casos las reformas han introducido cambios que jurídicamente permitirían un avance democratizador (como la elección de Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, México) que podría ser visto como un riesgo para la gobernabilidad, no hay certeza de que ello ocurra. Pues en el marco de las negociaciones cupulares para la reforma política en los casos señalados, la izquierda y el centroizquierda han subordinado a ellas todo lo demás, lo que pudiera redundar en una desacumulación de fuerza política que incluso en el mediano plazo afectara su fuerza electoral³⁵.

34 En Uruguay, ante el peligro real de que el Frente Amplio triunfe a nivel nacional en 1999, la derecha de ambos partidos tradicionales promovió el sacrificio de algunos mecanismos de la Ley de Lemas que históricamente le habían garantizado su predominio electoral, a cambio de incorporar la norma de la segunda vuelta para bloquear a la izquierda. Lo sacrificado, sin embargo, había perdido ya su funcionalidad política. Los dos años de negociaciones le significaron a la izquierda problemas internos considerables, incluida la renuncia de su presidente histórico, el general Líber Seregni. En México existe la hipótesis de que los avances en la negociación electoral se hicieron sobre la base de aislar el fenómeno zapatista a una dimensión exclusivamente regional. Inicialmente se presionó para generar el consenso, como ilustra el sugerente título de primera plana del periódico *La Jornada* del 28 de octubre de 1996: “Reforma electoral. Advierte el PRI que usará la *ley de la democracia* si no hay consenso” (resaltado en el original). Pero la disposición consensual se rompió tras el triunfo de la oposición en los municipios más poblados del Estado de México.

35 El empate técnico en el plebiscito uruguayo del 8 de diciembre de 1996 podría deberse a que el líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, rompió con el encorsetamiento de las negociaciones e independizó la campaña política, por lo que naturalmente fue objeto de las más violentas acusaciones de populista.

No cualquier forma de participación política es capaz de conducir a un cambio democratizador que altere la impunidad neoliberal; algunas, incluso, pueden postergarlo si se mantienen en la lógica de la gobernabilidad.

Pero debe reconocerse que la misma impunidad neoliberal ha provocado tales niveles de descomposición social, política y moral, que por acumulación cuantitativa de realidades conflictivas podría modificarse cualitativamente la capacidad de control sistémica. Éste ya es un hecho reconocido y parcialmente admitido a nivel regional por las élites del sistema, que muestran una dosis elevada de preocupación.

La gobernabilidad como regionalización de la política

El año 1996 ha sido prolífico en foros internacionales de discusión sobre la gobernabilidad en América Latina como una meta de acción regional. Ello confirma, en principio, que la gobernabilidad es más que un asunto de eficiencia gubernamental circunscrito al contexto del Estado nacional y que compromete las dimensiones más amplias de la dominación a nivel sistémico.

Destacan tres: uno organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otro por el presidente uruguayo Julio Ma. Sanguinetti y el más reciente de la VI Cumbre Iberoamericana de presidentes. Su denominador común es el reconocimiento de que las cosas no marchan bien para la gobernabilidad.

El BID se concentra en criticar el desempeño de los gobiernos de la región en materia de políticas sociales focalizadas y advierte sobre su impacto negativo en la estabilidad política. Convoca a que se incrementen los “programas sociales” sin alterar las políticas económicas, tarea nada fácil y que requiere de intelectuales orgánicos del modelo más imaginativos³⁶; para ello se crea el Instituto de Desarrollo Social (INDES). La economista colombiana Norah Rey de Marulanda, su directora, define claramente el objetivo: “Para el diseño y aplicación de las políticas sociales se requieren especialistas, de la misma forma que la reforma económica contó con numerosos economistas que se perfeccionaron en prestigiosas universidades

36 *Desafíos socioeconómicos de América Latina en los umbrales del siglo XXI: la respuesta del BID*, Washington DC, febrero de 1996. Cfr. *Búsqueda* núm. 835, Montevideo, 14 de marzo de 1996, pp.20-21.

y llegó la hora de formar cuadros”, lo que ya empieza a reflejarse en las currículas universitarias de la región.

El foro que indica un cambio se realizó en Montevideo los días 6 y 7 de septiembre de 1996 con el tema *Nuevos caminos de América Latina*, organizado por el presidente Sanguinetti y al que asistieron catorce notorios invitados³⁷ que discutieron a puerta cerrada una ponencia del sociólogo francés Alain Touraine, en la que presenta seis hipótesis de análisis sobre América Latina. Ellas se pueden resumir así: la modernización económica condicionada por la globalización –que se acepta como necesaria– ha producido niveles de pobreza y desigualdad que no permiten la modernización política; las prácticas políticas tradicionales producen una crisis del sistema político que genera ingobernabilidad; enfrentar esta crisis exige devolver al Estado roles de control sobre la economía, pues el crecimiento no deriva automáticamente en desarrollo; sin la recuperación de ciertos niveles de desarrollo no será posible lograr una inserción estable de la región al sistema capitalista globalizado. La conclusión: se necesita controlar el mercado, fortalecer el sistema político y los juegos de mediación; es decir, redimensionar la política:

Pero es igualmente necesario que América Latina limite, en lo posible, la transición liberal, creando una nueva forma de control social y político de la economía. En términos elementales, la principal dificultad con que se enfrenta el continente sería ésta: lograr casi simultáneamente dos transformaciones aparentemente contradictorias: entrar en el liberalismo y, al mismo tiempo, salir de él [...] Es necesario agregar que si los neopopulismos fracasaron, el neoliberalismo también conduce a graves peligros cuando se reduce a un pilotaje desde el exterior que acarrea una acentuada dualización social y la ingobernabilidad porque la autonomización de la vida económica, condición de la modernización, es también su principal obstáculo, dado que las sociedades latinoamericanas son heterogéneas, marcadamente

37 Alain Touraine, Julio Ma. Sanguinetti (presidente de Uruguay), los ex presidentes Felipe González (España) y Belisario Betancur (Colombia), Jordi Pujol (presidente de la Generalitat de Catalunya), Michel Camdessus (director general del FMI), Enrique Iglesias (presidente del BID), Ricardo Lagos (ministro de Obras Públicas de Chile), Fernando Zumbado (director regional del PNUD), Manuel Marín (vicepresidente de la Comisión Europea), Helio Jaguaribe (decano del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de Brasil), Luciano Martins (asesor de la presidencia de Brasil), Natalio Botana (investigador argentino) y Germán Rama (director de la ANEP de Uruguay). En el marco del evento quedó constituido el Círculo Montevideo como un espacio de debate con una agenda de reuniones periódicas. Cfr. la versión íntegra de la ponencia en *Búsqueda* núm. 859, Montevideo, 5 de septiembre de 1996, pp.50 y 64.

desigualitarias social y regionalmente, y están marcadas por la debilidad de todos los actores sociales, debido a la dependencia que estos actores sociales han tenido siempre respecto al Estado o al capital extranjero [...] las posibilidades de desarrollo en este momento dependen más de condiciones políticas y sociales que de condiciones económicas.

Y concluye su ponencia señalando que: “Se trata de reconstruir los núcleos endógenos de desarrollo de los que habló Fernando Fajnzylber. Este proceso es difícil y corre serios riesgos de fracasar en la mayoría de los casos, lo que llevaría, ya sea a nuevas presiones populistas, ya sea a enfrentamientos sociales abiertos. Esto confirma la hipótesis más general de las aquí formuladas: la prioridad en América Latina es de lo político por sobre lo económico y social”.

Debe llamar la atención que se abra un foro con tales invitados para calificar al neoliberalismo como responsable de las crisis políticas y que se discutan algunos de sus mitos ideológicos. Que lo diga Alain Touraine no sería lo sorprendente, sino que Julio María Sanguinetti lo invite para hacerlo. No es difícil deducir que hay preocupación entre algunos políticos del sistema por sentirse maniatados por la inflexibilidad de los tecnócratas, así como que se estarían buscando formas para recuperar, desde el Estado, cierta capacidad de maniobra para ganar legitimidad.

La agenda temática allí discutida no parece ser incidental, pues reaparece en el foro de mayor resonancia sobre la gobernabilidad, la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Santiago y Viña del Mar, Chile, entre el 7 y el 11 de noviembre de 1996. Como todas las de su tipo, la Declaración de Viña del Mar es una pieza retórica, de transacciones diplomáticas entre posturas no sólo disímiles sino antagónicas, como son las de Cuba y sus pares iberoamericanos, que en nada reflejan las conductas de tan pintoresco elenco gubernamental latinoamericano ni las realidades de sus respectivos países.

Sin embargo, tiene un valor indicativo sobre la reiteración de temáticas y diagnósticos que empiezan a aparecer a nivel sistémico en la región. Cabe mencionar que la declaración definitiva es un documento mucho más pobre y conservador que la versión preliminar propuesta por el gobierno chileno³⁸. A pesar de las diferencias, la declaración oficial reconoce los efectos políticos

38 Versión preliminar de circulación restringida fechada el 4 de abril de 1996.

de la desigualdad y la exclusión sociales, señala críticas a las políticas desarrolladas; replantea la relación mercado-Estado, demandando del segundo una mayor intervención correctora, y, en la misma línea del BID, la promoción de políticas sociales focalizadas:

La gobernabilidad democrática supone también transformaciones sociales, económicas y culturales profundas que conduzcan a disminuir las desigualdades y los problemas de exclusión social. En este punto corresponde a nuestros Estados una importante e intransferible función. [p.2]

...En este contexto, el tema de la igualdad de oportunidades se plantea con fuerza en la agenda pública, más aún cuando la aplicación de políticas y de prácticas inadecuadas agravó los problemas sociales existentes [p.6; en este punto la versión preliminar decía: “más aún cuando la aplicación de políticas neoliberales extremas agravó los problemas sociales existentes”].

...En Iberoamérica existe actualmente una comprensión más amplia de los agentes del desarrollo y de las políticas públicas [...] la creación de más y mejores empleos, y la promoción de la igualdad de oportunidades, no son exclusivas del sector público o del sector privado.³⁹

La Declaración aborda el obstáculo clave para las estrategias de gobernabilidad: la falta de credibilidad de la política sistémica.

Elevar la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social [...] reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de [las] agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos [...] para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población (p.8).

Aunque considerando su origen el diagnóstico expresa cambios, la perspectiva de las dos transiciones sigue estando presente. En **Nuestro compromiso** los gobernantes prometen “crear las condiciones necesarias para aumentar los niveles de equidad social, consolidar las bases socioeconómicas que harán posible una democracia integral” (p.13).

La gobernabilidad como estrategia regional va más allá de las recomendaciones. Se establecerán acuerdos de cooperación policial y judicial para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero, el

³⁹ Versión oficial de la *Declaración de Viña*.

tráfico de armas y las imprecisas “otras formas de delincuencia organizada internacional” (p.5) y, entre otros aspectos, “encomendamos el estudio para la implementación de una Red Iberoamericana de Gobernabilidad, como un instrumento técnico para el intercambio de experiencias nacionales vinculadas al tema” (p.21).

¿Qué significan estos cambios de discurso? Atrás de la retórica, una aguda percepción de amenaza. Es difícil saber si se están esbozando los primeros signos de una iniciativa de la derecha para elaborar y dirigir una estrategia de dominación capitalista con inflexiones posneoliberales*, respondiendo a las urgencias de la clase política. Pero es difícil imaginar que el capital financiero transnacional que comanda la globalización subordine sus intereses propios a una lógica más general de preservación del sistema. De existir estas dos lógicas, no es descabellado presumir un aumento de los conflictos intra-dominantes. Lo que queda en evidencia es que, incluso por esa razón, para la derecha la agenda del presente es la del reforzamiento del control de conflictos con un sobredimensionamiento del protagonismo de la política.

Una reflexión final

El intento por desnudar los usos conservadores de la política no pretende negar la necesidad de “hacer política”. Por el contrario, lo que en América Latina se observa es que se hace poca política, si por ella entendemos representación y competencia de los intereses diversos existentes, posibilidad de optar por proyectos de sociedad alternativos y existencia de fuerzas sociales con autonomía de decisión y voluntad de ejercerla.

La política a la que se apela para la gobernabilidad sistémica, que contribuye a la reproducción de esta “época de catástrofes” con que termina

* Cuando en 1997 formulé la interrogante de si se estaría pensando en una estrategia dominante con “inflexiones posneoliberales” no conocía el documento del presidente del BID, Enrique V. Iglesias, *Reflexiones sobre el desarrollo económico. Hacia un nuevo consenso latinoamericano* de 1992 (escasamente difundido hasta el presente), en el que formula los lineamientos de la estrategia “posliberal” pero sin denominarla así. Todavía no se publicaban los documentos del Banco Mundial para ir “más allá del Consenso de Washington”, ni la oficialización de su temática en el llamado Consenso de Santiago. La hipótesis, formulada a partir de los indicios arrojados por la investigación, resultó ser correcta.

el siglo para los latinoamericanos, es la *no-política* para la democratización de la región, que sólo puede realizarse si despliega su potencialidad transformadora.

Gramsci señalaba cuál es la clave de la política: “Si se admite que con cualquier actitud que se adopte se le hace siempre el juego a alguien, lo importante es buscar por todos los medios hacer bien el propio juego, esto es, de vencer netamente”⁴⁰. La pregunta que se deriva es política para qué. Las dinámicas sociales y algunos de sus reflejos políticos parecen adelantarse a este debate, que en buena parte de la región sigue postergándose.

40 Antonio Gramsci, “El partido político”, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*, México, Juan Pablos Editor, 1975, p.50.

La izquierda, el gobierno y la política: algunas reflexiones (1998)*

Este ensayo no es de conclusiones. La complejidad y riqueza de las experiencias que se tratan en este volumen no buscan ni permiten “concluir” los análisis sino abrir la reflexión, especialmente sobre algunos problemas que involucran al quehacer político de la izquierda en los contextos actuales, que además de trascender a su desempeño gubernamental, condicionan, incluso, la potencialidad de estas mismas experiencias.

Ello conduce a situarnos en los escenarios de la “democracia gobernable”¹, esta forma conservadora de administrar políticamente la reproducción del capitalismo excluyente y salvajemente explotador, conocido como neoliberal.

Esta perspectiva analítica difiere, en cierto modo, de la que reflexiona el problema de la izquierda desde la izquierda misma, pensándolo, en cambio, desde los condicionamientos políticos e ideológicos, contradicciones e interlocuciones que establecen las fuerzas defensoras del orden dominante para impedir el desarrollo de fuerzas sociales y políticas capaces de cuestionarlo realmente, pero que le son necesarias como factor de legitimación. Perspectiva que permite atender a problemas muchas veces no visualizados por la izquierda, la que se percibe a sí misma como actor pero no como objeto de dominación.

* Este trabajo cierra el libro coordinado por esta autora: *Gobiernos de izquierda en América Latina: el desafío del cambio*. México, UAM Xochimilco-Plaza y Valdés, 1999. En el libro son analizadas, por distintos autores, las experiencias de Chile, Cuba, Brasil, Uruguay, Venezuela, El Salvador y México.

1 He analizado más ampliamente esta temática en otros trabajos como, por ejemplo, “Gobernabilidad como dominación conservadora” (en este volumen); en “Democracia y gobernabilidad: perspectivas de la izquierda, ofensiva ideológica de la derecha”. *Estudios Latinoamericanos*. núm. 7, Segunda época, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 1997; y “Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política” (en este volumen).

Lo anterior significa rescatar la dimensión relacional de la política, es decir, que todos y cada uno de los actores sociales y políticos se configuran no sólo por lo que aspiran a ser sino por lo que los otros los condicionan a ser o hacer, lo cual no tiene, obviamente, un sentido unidireccional. Permite entender cuánto de lo que piensa y hace la izquierda es el resultado del ejercicio de la dominación, pero, también, explica la fuerza política de los sectores dominantes, su mayor o menor influencia ideológica, sus logros o fracasos, su impunidad o limitaciones, por la capacidad y fuerza de los dominados para modificar aquellas conductas y posiciones de dominio, sustentadas, no debemos olvidarlo, en el control sobre los procesos económicos y sociales fundamentales. Y conduce, asimismo, a entender la política como confrontación de fuerzas, un problema de poder correlativo que trasciende lo político-partidario (reduccionismo analítico muy en boga hoy), que es solamente *una* de las expresiones institucionales de las dimensiones más amplias de las relaciones de fuerza política. Es en estas últimas, por el contrario, en las que situaremos el análisis de la nueva realidad de la izquierda y sus proyecciones, atendiendo particularmente a la relación entre los triunfos electorales y la nueva experiencia de gobiernos municipales, con la gestación de la fuerza política capaz de realizar el proyecto de transformación social que se propone la izquierda, en el contexto de las estrategias conservadoras de gobernabilidad de este fin de siglo latinoamericano.

En ese marco, resulta de la mayor importancia el tema de las transformaciones ideológicas vividas por la izquierda a causa de la nueva etapa del capitalismo mundial y la crisis del socialismo, de su forma de asimilar sus propias experiencias de derrotas políticas, represión y debilitamiento producidas por la ofensiva contrarrevolucionaria de los setenta y ochenta, y a las que se adiciona, como un aspecto particular de la nueva coyuntura, las que surgen de su nueva posición de administrador público.

Las limitaciones de este trabajo no permiten encarar exhaustivamente la multiplicidad de temas y problemas que nacen de esta forma de ver la realidad actual de la izquierda, permitiéndonos, solamente, apuntar casi indicativamente a unos pocos de ellos. El orden de su tratamiento difiere de la clásica exposición académica, para los fines de debate que aquí nos proponemos.

El crecimiento de la izquierda

El crecimiento electoral de las fuerzas contrarias al neoliberalismo, expresado en los votos a la izquierda, es uno de los aspectos más relevantes (y menos estudiados) en el análisis sociopolítico en la región, sobre todo si consideramos que hace menos de diez años se pontificaba sobre el fin de la izquierda a nivel mundial tras la arrolladora ofensiva refundacional capitalista y la crisis del socialismo soviético.

Cabe interrogarse, en consecuencia, en qué medida el crecimiento electoral de la izquierda indica el debilitamiento correlativo del poder de los sectores más conservadores del capitalismo. Es indudable que asistimos al desgaste de la credibilidad del discurso neoliberal al evidenciarse, con inusitada celeridad, la falsedad de algunos de sus ejes retóricos. El desastre estrepitoso de nuestras economías, con sus impactos ya observados a escala mundial, permite cada vez más hablar de la crisis del neoliberalismo, pero no porque éste haya fracasado en sus verdaderos objetivos de recuperación de las tasas de acumulación del gran capital y de concentración de la riqueza –que han sido de lo más exitosos–, incluyendo en ellos los costos sociales que le son intrínsecos y que de ninguna manera son “externalidades”, sino, precisamente, porque sus objetivos y políticas son contradictorios con el desempeño sano de cualquier economía y son un factor de desmembramiento social.

El caudal de rechazo a las políticas económicas desembocó en el crecimiento electoral de la izquierda. Pero deberíamos ser cautelosos con pensar en la derrota política e ideológica del capitalismo conservador, fundamento de las importantes fortalezas de la derecha, pues ha penetrado en profundidad en las estructuras mentales, en los parámetros epistemológicos, en las concepciones sobre la política y hasta en las relaciones interpersonales, cuyos cambios son de más lento procesamiento y, además, se convierten en instrumentos privilegiados para reforzar las posiciones dominantes en la crisis.

El avance de la izquierda, obviamente, no es sólo un “dato electoral”: expresa un cambio político. No obstante, la alteración del escenario de partidos no se corresponde con un fortalecimiento equivalente de la posición de los grupos explotados ni con una crisis evidente de los mecanismos de dominación. Si bien los triunfos electorales de la izquierda abren la

posibilidad de frenar la cinética devastadora del neoliberalismo, y en eso radica su gran potencialidad transformadora en las actuales coyunturas, ello requiere no sólo modificar las políticas económicas que se reflejan en las Cuentas Nacionales, sino también la enorme responsabilidad de reconstruir la sociedad, su tejido conjuntivo, su moralidad colectiva e individual, las instituciones que lo favorecen, su desarrollo cultural.

La cuestión a debatir es si estos triunfos electorales expresan y aportan, por sí mismos, la fuerza política suficiente para encarar el reto.

La izquierda avanza electoralmente cuando las sociedades latinoamericanas no han logrado revertir del todo la despolitización inducida por las estrategias dominantes conservadoras. Aunque el hecho mismo de decidirse a votar por la izquierda podría constituir el punto de inflexión de esta tendencia, el acto de votar no dice de la existencia de una equivalente **voluntad colectiva organizada para incidir en las relaciones de poder**, es decir, **de fuerza política**. La gente está cansada de las arbitrariedades del poder, de no ser tomada en cuenta, de un Estado al servicio de los privilegios, de la inseguridad económica y personal. En una proporción considerable de la decisión del voto a la izquierda existe una confianza, dada en préstamo, por aquellos que después de experimentar el cierre de toda posibilidad de lograr cambios en su situación, gobierno tras gobierno “democrático”, deciden apostarle al único actor político que aún es pasible del beneficio de la duda en un sistema político en el que creen muy poco. La esperanza en la política institucional, como el vehículo posible de generar algún cambio, le devuelve cierta credibilidad al sistema representativo. Pero ésta es frágil y muy condicionada a que los nuevos depositarios del voto no traicionen las expectativas de la gente. Significativamente, es el voto crítico al orden social imperante el que le da respaldo a la institucionalidad que la derecha dice defender contra las expresiones conflictivas críticas y que, en aras de la hiperestabilidad política, ha deteriorado y desprestigiado sistemáticamente.

La existencia de un porcentaje considerable de **voto castigo** es un fenómeno bastante común que atraviesa a distintas clases y grupos sociales, pero con un peso específico distinto en la composición del voto a la izquierda en las distintas experiencias. En Uruguay, El Salvador y Brasil, los avances electorales corresponden a un proceso más largo de consolidación de la izquierda como opción política con importante influencia en las diversas manifestaciones de organización y luchas sociales. En estos países, entre

la opción electoral y la adscripción política y orgánica a un proyecto, las distancias son menores que en México y Venezuela: en estos últimos, el voto castigo pesa mucho más en la conducta electoral.

Como se sabe, el voto “en contra” es muy inestable e impresionable. Para satisfacerse requiere de resultados rápidos y notorios, es poco proclive a percibir procesos y, también, es más fácilmente manipulable. En estos casos, los logros visibles de la gestión de gobierno son de gran importancia para convocar adhesiones electorales más permanentes. Pero promover un proceso de politización real en estos conglomerados bastante circunstanciales no es responsabilidad que pueda recaer exclusivamente en el gobierno, sino que involucra los objetivos y tareas más amplias del partido político.

La escasa discusión en la izquierda sobre la relación y diferencias entre fuerza electoral y fuerza política denota una insuficiente reflexión sobre el papel de los avances electorales en la construcción del proyecto de transformación de la sociedad. No obstante las diferencias entre países que señalábamos antes, en general, se subestima el problema de la construcción de fuerza política, incluso para el desempeño electoral mismo. Por un lado, parece suponerse que, de manera espontánea, los objetivamente afectados por el modelo económico y dominante, que la izquierda cuestiona, seguirán votando por ella. Por otro lado, la escasa atención al problema referido se explica desde una sobreestimación de los procesos electorales como esencia misma de la política, cobrando más importancia la ampliación de las garantías electorales que la gestación de la fuerza capaz de impedir los abusos del poder, incluso en las instancias comiciales. No está en discusión la importancia y necesidad de la lucha por ampliar jurídicamente los espacios de representación ante la inequidad producida por las complejas ingenierías electorales que generan la subrepresentación de los intereses subalternos y que, también en este plano, reproducen los privilegios del poder. Pero debe recordarse que los avances políticos de las fuerzas democráticas, en algunos países, se han logrado *a pesar* de la estrechez legal y, a la inversa, marcos jurídicos más abiertos no han sido condición suficiente para el avance político de las fuerzas progresistas. Para ilustrarlo podríamos decir que la abstención electoral es una circunstancia que facilita los intentos de fraude, pero el abstencionismo no se derrota sólo con reformas electorales. Los cambios jurídicos, por sí mismos, no generan los cambios políticos: fenómenos tan diversos como la cultura política, la capacidad organizativa,

las perspectivas y voluntad de cambio social, entre otros, moldean las conductas electorales.

La asimetría entre fuerzas electoral y política es un hecho innegable en todas las experiencias analizadas: representaciones parlamentarias numerosas y gobiernos de izquierda en importantes centros urbanos no han sido obstáculos para que prosperen reformas económicas regresivas de la seguridad social, de las legislaciones laborales, subordinaciones crecientes a poderes transnacionales, la impunidad de los grandes propietarios, la destrucción de la educación pública, un creciente autoritarismo y el aumento de la pobreza. La cuestión es quiénes entre los votantes por la izquierda están dispuestos a dar batallas organizadas y efectivas en todos estos ámbitos de confrontación política permanente.

Pero también está pendiente el análisis de la relación entre fuerza electoral y fuerza social, cuestión que se vincula al problema de la representación de intereses y que está mediada por la fuerza política. ¿A qué sectores de la sociedad representa la izquierda?

Aun con la continuidad declarativa en cuanto a la voluntad de representar a los “intereses mayoritarios”, la izquierda latinoamericana de los noventa observa diferencias respecto a esa otra época destacable en su crecimiento –los años sesenta y setenta– cuya más clara expresión se dio en el caso chileno. Era la crisis del capitalismo desarrollista; se tenían como referentes los avances de la revolución cubana y los logros sociales del socialismo europeo y soviético; se confrontaba una estructura de poder basada en un patrón de acumulación con mayor peso de lo productivo, con grandes sectores asalariados organizados. Las alianzas sociales que daban sustento al accionar de la izquierda eran tal vez numéricamente menos amplias, pero su identidad clasista les otorgaba una mayor radicalidad en cuanto a la profundidad de las transformaciones sociales a las que se aspiraba (lo que no debe confundirse con la cuestión de las formas de lucha, en las que intervienen elementos ideológicos pero muy especialmente circunstancias políticas). La identificación con los explotados –fundamentalmente la clase obrera– y con las capas medias asalariadas, con un explícito sentido anticapitalista, acotaba con claridad los objetivos sociales y las definiciones políticas de la izquierda.

El nuevo capitalismo ha alterado sustancialmente las estructuras sociales: el predominio de la circulación libre del capital financiero

(globalización) por sobre las actividades productivas, más los cambios tecnológicos, con la consiguiente desaparición de grandes conglomerados de la clase obrera; la dispersión espacial de las relaciones capital-trabajo; las nuevas modalidades en la explotación directa e indirecta del trabajo, en las que se confunden las relaciones de dependencia capitalista que siguen subordinando a trabajadores formalmente independientes, con su aparente conversión en pequeña propiedad²; la estratificación económica y social de la clase media; los procesos de desplazamiento de la pequeña propiedad por la concentración y centralización del capital, etcétera, todos ellos, con sus respectivos y complejos cambios ideológicos.

Los afectados por el capitalismo neoliberal amplían el espectro social que puede representar la izquierda, pero también hacen más difusos los objetivos de transformación o el orden de prioridades.

En diversos análisis, la izquierda ha reconocido que los cambios que propone los hará dentro del capitalismo. No ha sido elocuente en explicar si es debido a que hoy no existen condiciones para realizar profundas transformaciones anticapitalistas –hecho por demás evidente– o porque ha renunciado definitivamente a ellas. Ambas opciones no afectan sus posibilidades de acción a corto plazo y menos sus posibilidades electorales, pero condicionan el sentido de su acción. Hasta ahora, la tensión entre la representación social y el “gobernar para todos” (como versión del “interés general”) no ha acarreado conflictos insolubles en las experiencias municipales. Pero distinto será de acceder a un gobierno nacional: la experiencia chilena enseña que las decisiones que involucran más directamente las relaciones de propiedad capitalista, no sólo son más complejas sino que requieren de definiciones muy precisas en relación a la fuerza social que representa la izquierda y a la constitución de los sujetos sociales del cambio.

En las actuales circunstancias, el espectro social que puede apoyar electoralmente a la izquierda parece ser mucho más amplio que el que sostendría su proyecto de transformación de la sociedad, que para producir cambios reales no sólo debe ofrecer una nueva ética pública o cambios de políticas económicas específicas, sino que inevitablemente deberá atacar las

2 Para una perspectiva crítica de lo que se denomina “sector informal urbano”, véase de José Javier Contreras, *Enfoque crítico de las teorías del sector informal urbano en América Latina*, 1996, tesis de Maestría en la Facultad de Economía de la UNAM.

fuentes capitalistas de desigualdad y pobreza. Pero el problema no es sólo del universo social representado como objeto de transformación, sino el de su capacidad organizativa y de lucha, es decir, de su constitución en sujeto de cambio, actualmente muy debilitado y con una notable disgregación.

Las indefiniciones que subsisten en estas cuestiones se expresan en lo errático de las políticas de alianzas. El acercamiento al mundo empresarial, hacia eventuales triunfos electorales nacionales, es un hecho necesario para mejorar las posibilidades de gobierno; pero pareciera ocupar más su atención que la que le otorga a la construcción o reconstrucción del actor popular. Éste, muchas veces, existe en forma paralela al accionar de los partidos: América Latina es hoy un escenario de múltiples formas de resistencia popular, de intentos de organización y luchas diversas que, sin embargo, por su desarticulación, no logran incidencia política suficiente y están siempre en peligro de desgaste, agotamiento o desaparición. Por lo demás, muchos de esos sectores, que reconocen a los partidos de izquierda con representación parlamentaria como la única opción electoral posible, no responden necesariamente a la convocatoria política de dichos partidos.

Paradójicamente, cuanto más se acerca la izquierda al gobierno más prescindente es, orgánicamente, de la política de gestación de organizaciones populares, lo que es bastante evidente en relación a las sindicales, estudiantiles, universitarias, campesinas o de asalariados rurales, de jubilados, etcétera. Si algunas de éstas se mantienen como instrumentos de resistencia, carecen de la eficacia que obtendrían de estrategias de articulación de lo popular. La desperfilación del actor popular –en tanto actor– se refleja en el discurso mismo de la izquierda, en el que queda diluido como parte de una imprecisa y difusa “sociedad civil” –el amplio universo a gobernar– sólo diferenciado por la intencionalidad social del gobierno y, parcialmente, por el protagonismo ciudadano que se aspira a generar. No sólo se cercena una parte esencial del análisis de la fuerza política, sino que se atenta contra la posibilidad misma de construir ciudadanía.

“Corporativismo” popular y gobiernos de izquierda

La satisfacción de las demandas populares constituye uno de los núcleos más sensibles moral y políticamente de los que enfrenta la izquierda al ac-

ceder al gobierno, y uno de los de más difícil resolución en las actuales coyunturas.

La cuestión determinante de que resolver la extraordinaria acumulación de carencias sociales requiere de políticas económicas y sociales radicalmente distintas en el largo plazo, y de que, además, el ámbito municipal tiene limitada capacidad de incidencia sobre los núcleos fundamentales de decisión para esas transformaciones, no evita que quienes se sienten representados socialmente por la izquierda esperen cambios en su vida en el corto plazo y que las urgencias de las necesidades no se acompañen adecuadamente con las condiciones y los tiempos necesarios para producirlos.

A pesar de estos obstáculos, los pasos dados en tiempos tan breves son realmente destacables. Con honestidad, eficacia y eficiencia en la gestión, con la democratización de los servicios y los recursos públicos y con el desarrollo del cogobierno democrático como catalizador, los gobiernos de izquierda tienen logros considerables en la satisfacción de un conjunto de aspectos urbanos que tienen incidencia en la calidad de vida de los sectores populares. Incluso pueden observarse desempeños interesantes frente a cierto tipo de demandas populares originadas en prácticas corruptas y clientelísticas de los gobiernos anteriores: por ejemplo, los grupos de interés que usufructuaron de los vínculos políticos con los gobiernos, llegando a formarse, en algunos casos, verdaderas mafias que se apropiaron de importantes parcelas de funciones estatales y de espacios públicos y que generaron vastas redes de dependencia laboral y subordinación política de sectores populares, a los que manipulan para presionar a los gobiernos.

Hay que anotar, con todo, que siendo ésta una rica experiencia en la cual la izquierda puede abreviar para proyectar una lógica de gestión y relacionamiento social más allá de lo municipal, da la impresión de no haber trascendido demasiado de los equipos de gobierno, por su débil presencia en los análisis y reflexiones partidarias e, incluso, en las ciencias sociales.

La relación con las demandas salariales, en cambio, se presenta como un terreno de más complejo procesamiento por la connotación ideológica que tiene para la izquierda representar el papel de “patrón”. Quien reconoce la legitimidad de las demandas salariales en general, pero que se enfrenta al hecho de que las variadas iniciativas gubernamentales para mejorar

las condiciones de trabajo e ingresos de sus empleados no obtienen por respuesta una conducta de trabajo, responsabilidad y servicio.

El fenómeno está presente en casi todas las experiencias, a pesar de las diferentes características de los sindicatos, que van desde aquellos que pertenecen a las estructuras orgánicas de los partidos desplazados de los gobiernos por la izquierda, los que responden a relaciones clientelísticas de larga data con los anteriores partidos gobernantes, hasta los que son independientes e, incluso, una parte considerable de sus integrantes se identifica políticamente con la izquierda³. Y si bien el fenómeno no es nuevo, porque con sus especificidades se le planteó al gobierno de la Unidad Popular en Chile y sigue siendo un elemento de preocupación en Cuba, la armonización de la justicia laboral con la exigencia de resultados parece bastante más difícil en los contextos actuales de devastación económica, social y valórica producida por el neoliberalismo.

El procesamiento político de este fenómeno comienza a proyectarse en las reflexiones de la izquierda sobre el tipo de relacionamiento que tendría como gobierno nacional con los sindicatos públicos e, inadvertidamente, con los sindicatos en general. El tema empieza a trascender la saludable asunción de la eficacia y eficiencia como requisitos indispensables en la gestión gubernamental de la izquierda, hacia la configuración de una visión crítica sobre el problema sindical, que se expresa como cuestionamiento al “corporativismo”.

La obligación del gobierno de exigir a los trabajadores responsabilidad y servicio está fuera de toda discusión⁴. En ello la izquierda enfrenta la cultura heredada de décadas de gestiones estatales clientelísticas y corruptas y de decreciente responsabilidad social. A lo que se agrega los fenómenos más recientes de los impactos morales del neoliberalismo, con la exacerbación

3 Considerando este último caso, una tensión similar suele encontrarse en las universidades públicas dirigidas por académicos progresistas y de izquierda.

4 Aunque, a la hora de fincar responsabilidades por la ineficiencia, también debería sopesarse la incidencia de otros factores como los problemas de dirección, sometida ésta a evidentes aprendizajes y a los efectos de las cuotas partidarias sobre la misma, que no siempre reflejan la mejor decisión en materia de gestión. Asimismo, el fuerte peso de los salarios en los presupuestos públicos debería valorarse con relación a la disminución de la magnitud absoluta de los últimos por las políticas económicas neoliberales, y limitados, además, tanto por sistemas impositivos regresivos como por las diversas formas de expropiación de recursos desde el Estado central; y también en relación con la disminución relativa de los recursos frente al aumento de responsabilidades sociales del gobierno.

del individualismo y la pérdida de referentes colectivos y solidarios, al punto de que en algunos países se observa la desintegración del tejido social.

Es estrictamente verdadero que parte de las demandas de los trabajadores, bastante estridentes a veces, no son realmente legítimas en cuanto ocultan irresponsabilidades hacia el trabajo, que otras se formulan sin considerar cuánto afectan a otros sectores populares, y que muchas son materialmente imposibles de satisfacer. Sin embargo, más allá de los conflictos y obstáculos que le acarrearán al gobierno (objetivamente “su gobierno”), la izquierda debería revalorar lo que denomina corporativismo. No sólo por rigor teórico e histórico, sino porque la sobrevivencia o persistencia de grupos sociales dispuestos a defender sus intereses, aun con el particularismo con que se expresan, es una señal de un reservorio de capacidad de resistencia a las acciones regresivas del capitalismo, que se debe justipreciar. Sin esa capacidad o voluntad de resistencia es imposible encarar cualquier cambio consistente, del mismo modo que el desarrollo democrático requiere de una cultura del reclamo.

Esta discusión sólo cobra sentido cuando se tiene presente que las estrategias hegemónicas neoliberales tuvieron y tienen como objetivo el debilitar las capacidades de resistencia y oposición social a la reestructuración capitalista conservadora, lo que se persigue con la disolución de los sujetos cuestionadores y demandantes mediante la fragmentación y debilitamiento de toda forma de organización colectiva. Donde hubo dictaduras, fue con la represión. Pero lo más exuberante y sofisticado de esta estrategia se ha desplegado en la **democracia**. Entenderlo desde la acción deliberada de los sectores dominantes ayudaría a buscar los caminos y sentidos para una acción de sentido opuesto, reestructora de los lazos solidarios, del espíritu colectivo y, con ello, de responsabilidad social más allá de las necesidades y demandas particulares. La contrahegemonía se construye, no se da espontáneamente; menos aún ante una ofensiva de la derecha que sigue desplegándose.

Los más claramente afectados por esa estrategia han sido los sindicatos, debilitados desde la relación de trabajo misma por la llamada flexibilización laboral. Fenómeno al que los ideólogos neoliberales presentan como el resultado inevitable de una cinética de fuerzas impersonales, intangibles, que obligan a destruir todas las conquistas laborales por el bien mismo de los trabajadores, sin lo cual, ellos serían las víctimas

propiciatorias del retroceso económico. Pero en la estrategia para disgregar a los trabajadores organizados también se ha involucrado a las instituciones formales y no formales de la política, transformando las instancias de mediación en diques para contener las demandas populares, función que ha caracterizado al sistema político latinoamericano toda vez que ha excluido de sus reglas del juego aquellas “formas de hacer política” que implican confrontación de intereses sociales, con lo cual se ha reducido al mínimo la capacidad de representación y presión política de los trabajadores.

El arrinconamiento social y político de los actores populares, que de suyo ha producido transformaciones en sus conductas, se ha buscado legitimar con una manipulación de la conciencia sobre sus necesidades, buscando disminuir el nivel de sus demandas. A lo anterior debe agregarse el efecto demostración de las escandalosas conductas delictivas de los grupos de poder que se traduce en anomia y descomposición social, configurando un entramado de transformaciones valóricas que, en conjunto, han producido una regresión en las experiencias y grados de conciencia clasista y una creciente marginalidad política en vastos sectores populares.

Cuando la izquierda llega al gobierno, no sólo tiene ante sí la hercúlea meta de mejorar las condiciones materiales de los más afectados por cinco lustros de neoliberalismo, sino que para poder lograrlo debe contribuir a restañar el estado moral y cultural de las principales víctimas de estas décadas. Que así se reconocen, como los más postergados, y por lo mismo, esperan ser, también, los más compensados. El gobierno de nuevo tipo que se propone realizar la izquierda es, como en muchos otros aspectos, un componente muy importante de esta gran tarea cultural. Pero ésta ciertamente lo trasciende y es parte ineludible de las complejas estrategias de transformación que debe encarar la fuerza política más allá de su gestión de gobierno.

A diferencia de la escasa influencia que tienen otras experiencias del gobierno sobre el partido, en el tema laboral la visión del administrador tiende a imponerse. En sus proyecciones *gobierno de izquierda-sindicatos*, el meollo de la cuestión radica en hasta qué punto la izquierda promueve la organización y participación popular –que siempre presionará por más cambios– o la tiende a acotar a las posibilidades que pueda ofrecer el gobierno. Al menos en este aspecto, conviene recordar la crítica que se ha hecho al “socialismo real” por la incidencia de los mecanismos de control en la frustración del proceso de cambio.

Para el gobierno el problema no es sencillo pues debe resolver sus funciones perentoriamente, mientras los cambios culturales y la democratización y maduración de las organizaciones sindicales, que debe promover la izquierda, es de largo plazo. Pero la acción del administrador, para no ser tecnocrática, deberá contener la visión más general de los procesos y sus tiempos, aunque a diario tenga que encarar y solucionar los conflictos. Será esa visión la que le permita encontrar los mecanismos más adecuados para ir avanzando, sin caer en la negación misma de la legitimidad de toda organización sindical. Los equilibrios, en los procesos de cambio, son siempre inestables. Es el caso de la inarmonía entre demandas y políticas públicas (estas últimas vinculadas a los recursos materiales y humanos con que se cuenta o se espera tener): la subordinación de las primeras a las segundas conduce a la larga a la constricción de lo necesario a lo posible, cuando lo posible –sin cambiar las correlaciones de fuerzas sociales y políticas– es verdaderamente estrecho. La relación inversa es propia de una voluntad de transformación, no obstante que se persiga la mayor adecuación coyuntural entre ambas a fin de hacer viable la gestión misma de gobierno. La tensión entre estabilidad y cambio, de siempre difícil resolución, es mucho más que un asunto técnico o administrativo. En esto radica una de las claves para discutir el complejo problema de la gobernabilidad.

Empero, la percepción de la relación conflictiva ha contribuido a que algunos sectores de izquierda coincidan nominalmente –en el rechazo al corporativismo– con las más variadas posturas políticas e ideológicas; porque es, como en tantos otros ejemplos, una de las categorías de análisis que tiene una enorme diversidad de contenidos conceptuales no explícitos y que, por lo mismo, es materia de una burda ideologización que permite imponer las visiones dominantes.

En los análisis y debates políticos y académicos, al hablar de corporativismo encontramos, al menos, los siguientes significados o alusiones: a) la subordinación institucional obligatoria al Estado (o más bien al gobierno) de las organizaciones sindicales, con su consecuente verticalismo y falta de independencia frente al poder político y al capital; b) el corporativismo “autoritario”, en clara alusión al fascismo, como sometimiento a través de organizaciones funcionales subordinadas a un Estado capitalista totalitario; c) el corporativismo “social” o “liberal”, que a través de negociaciones formalmente voluntarias pero de obligatoriedad política entre capital y

trabajo, mediadas por el Estado, decide las políticas salariales y de ingresos en el capitalismo en expansión, con formalización jurídica de los acuerdos; d) cualquier forma de negociación económica tripartita entre sindicatos, empresarios y Estado, en la que, sin haber ninguna forma de sujeción institucional o política de los actores, el solo hecho de que el Estado actúe como atemperador y regulador de las relaciones laborales para proteger los derechos legales de los trabajadores, signifique algún tipo de limitación al capital; e) por extensión, el liberalismo conservador denomina corporativismo a toda forma de expresión organizada de defensa de intereses populares, sean sindicales o no, de lo que quedan excluidas las organizaciones empresariales, nunca vistas como corporativas sino exclusivamente como grupos de presión⁵; f) también se llama corporativismo al particularismo “gremial” de algunos sindicatos que no contemplan las necesidades e intereses de otros sectores, incluso populares; g) se califica de corporativas, asimismo, a las conductas que expresan lealtades de grupos que ilegítimamente ocultan situaciones de corrupción, de irresponsabilidad e ineficiencia, propias de las estructuras organizacionales burocratizadas, etcétera.

Entre los distintos sectores de la izquierda latinoamericana hay un mosaico de posturas que refieren a fenómenos distintos: en algunos casos se da como crítica al particularismo y escasa conciencia política (conciencia de clase, al fin) de ciertos sectores populares; en otros, como crítica al corporativismo estatal, o sea, a los mecanismos de control institucionalizado del Estado sobre las organizaciones populares; pero existen también algunas posturas, que se incluyen en el campo de la izquierda, que critican al corporativismo en cuanto mera defensa de intereses, pues tienen cercanía con las lógicas sistémicas de gobernabilidad que privilegian la estabilidad por sobre cualquier demanda de cambio que pueda generar conflictos. La crítica de la derecha al corporativismo es notablemente tramposa pues bajo una supuesta crítica liberal al fascismo se opone, en realidad, a toda forma de presión económica de los trabajadores.

Esta *mala palabra* requiere ser resignificada. En primer lugar, la historia social moderna es la del desarrollo de la organización corporativa de los sectores populares, en función de la defensa de sus intereses. Ésta tiene una legitimidad intrínseca en la lucha por la igualdad y posee el mérito histórico

5 La historia de esto es tan larga como la *Ley Le Chapelier* de 1791, en Francia.

de haber sido el factor esencial de los cambios progresistas en la historia del capitalismo. Por lo demás, la constitución de actores, la organización social, sólo se ha gestado en torno a la defensa de los intereses grupales.

Su legitimidad social no puede negarse ni siquiera cuando llegó a ser controlada desde el Estado. Se puede coincidir en que cualquier forma de organización popular controlada por el poder coarta su capacidad transformadora y que, si bien en el corto plazo permite un mejor posicionamiento económico de los sectores explotados, en la medida que reduce su independencia política, es un obstáculo para el desarrollo democrático de un país. En efecto, en los casos en que el movimiento sindical ha sido plenamente clasista, es decir, que ha cuestionado el orden de explotación capitalista, que ha buscado aliarse con y promover el desarrollo de otras organizaciones populares y que ha confrontado al poder, su propia existencia ha favorecido el desarrollo de una ciudadanía mucho más madura, hecho que los liberales no admiten.

La organización popular en torno a los intereses propios, aun limitada en su potencialidad política, no carece de legitimidad toda vez que anima la búsqueda de mayor igualdad. Las luchas populares en la mayor parte de los países de América Latina han tenido esa característica y forman parte de la larga historia de resistencia y cambio en la región. La falta de articulación de muchas de ellas y de potencialidad política ha sido, más bien, responsabilidad de una izquierda sin estrategia.

La oposición liberal al corporativismo estatal se argumenta desde la defensa de la libertad individual, pero sin cuestionar la subordinación social y política del trabajo al capital, en lo que enfatiza la crítica socialista. El rechazo neoliberal al corporativismo como tal –en virtud del “interés general”– no es, obviamente, el cuestionamiento al excesivo particularismo de los sindicatos, sino la justificación ideológica para negar cualquier negociación o concesión económica en general, tanto más cuanto derive en un compromiso público político o legal.

Esta inflexibilidad actual del capital se diferencia de las posturas de otras épocas, en las que el sindicalismo llegó a ser tolerado como instrumento de mediación necesario para ejercer control social, al permitir negociar con unos pocos dirigentes y no con una masa dispersa e indisciplinada. El Estado de Bienestar keynesiano se constituyó bajo la doble lógica de una amplia distribución del ingreso a cambio de la fidelidad de los trabajadores organizados

hacia los objetivos de expansión capitalista, que pudieron ser compartidos durante el período de la segunda posguerra. Ello fue posible porque la reproducción ampliada del capital estaba asociada directamente a la reproducción social (producción y consumo en masa). No obstante, fue la existencia de esos sindicatos lo que obligó a una mayor distribución de la riqueza que la que los propietarios hubieran realizado de no existir esas presiones.

El capitalismo actual es incompatible con los sindicatos, sean más gremialistas o clasistas, en tanto mecanismos de resistencia a las nuevas condiciones de explotación. Junto con los sindicatos se fueron liquidando todas las formas de mediación que vehiculizaran demandas no aceptadas por el sistema, incluidos los partidos mismos, que dejaron de actuar como representantes de intereses subalternos. Y si bien esto fue determinante para el logro de los objetivos neoliberales, lo cierto es que obligó a numerosos sectores populares a buscar caminos distintos para lograr satisfacer sus necesidades o para presionar por cambios, como tomas de tierras, asaltos a supermercados, etc., que el sistema reprime calificándolas por su ilegalidad.

Curiosamente, en los últimos tiempos es la derecha misma quien reconoce que en la liquidación de las instancias de mediación radican algunos de los síntomas de ingobernabilidad del sistema, por carecer de mecanismos eficientes de control de una masa desesperada y dispersa. No es casual que, desde mediados de los noventa, una preocupación de los organismos financieros internacionales sea la de refuncionalizar algunos instrumentos de mediación para recuperar el control sobre la sociedad, conscientes de que “[de no cambiar] la voluntad política para asignar los recursos necesarios, podría llevar hasta 400 años el erradicar la pobreza extrema en algunas naciones de América Latina y el Caribe”⁶, y que no hay cuerpo social que lo aguante.

Esas estrategias incluyen a los sindicatos siempre y cuando lleguen a administrar la protesta popular. Por eso se financian y promueven, sobre todo en las universidades privadas, cursos para dirigentes sindicales y sociales en los que se busca socializar las concepciones dominantes de

6 Declaraciones de Nora Lustig, asesora principal y titular de la Unidad sobre Pobreza y Desigualdad del BID, recogidas en la nota de agencias fechada en Washington el 20 de mayo de 1998: “Sin **voluntad política**, llevará 400 años erradicar la pobreza en AL y el Caribe”, *La Jornada*, México, 21 de mayo de 1998, p. 54.

eficiencia económica, de las cualidades liberales de la privatización de las relaciones capital-trabajo, de su lógica de gobernabilidad.

No es casual, tampoco, que actualmente se promuevan reformas a la legislación del trabajo en las que, a diferencia de las visiones dominantes de hace algunos años, que negaban cualquier forma de organización sindical, hoy se admitan algunas como instrumentos de gobernabilidad. Para ello, comienzan a aparecer propuestas para replantear el papel del Estado en las relaciones capital-trabajo: con la misma prescindencia en la negociación económica para compensar las debilidades de los trabajadores, pero asumiéndose como árbitro, en el ámbito judicial, de los conflictos privados entre capital y trabajo⁷.

Es llamativo que estas visiones comiencen a tener cabida en algunos proyectos de reforma laboral de la izquierda, que contaminados por las experiencias traumáticas del control gubernamental sobre los sindicatos (como en México), rechazan cualquier tipo de negociación tripartita por “corporativa”. En lugar de encarar la necesaria reconstrucción del Estado como expresión de los diversos intereses sociales y de hacerse cargo de la imprescindible democratización de los sindicatos, se pretende conquistar la independencia de los trabajadores convirtiéndolos en litigantes privados, sin considerar la desigualdad de condiciones que en ese *status* tienen frente al capital y la indefensión a que ello da objeto. Asimismo empiezan a prosperar en la izquierda propuestas de reformas legislativas que no obstante sus declaradas intenciones de atenuar la impunidad del capital adquirida con las “desregulaciones” laborales, así como delimitar algunos resabios jurídicos del clientelismo político ejercido, durante décadas, por los

7 A propósito de estas nuevas orientaciones, el BID ha señalado que la “debilidad de los sindicatos es un obstáculo para avanzar (hacia un régimen de protección que dependa más de los arreglos contractuales entre las partes y menos de las leyes de Estado). Los gobiernos enfrentan desafíos fundamentales. De un lado, promover los derechos básicos de la organización sindical y negociación colectiva, para que grupos más amplios de trabajadores gocen del amparo de la organización laboral. De otro, tienen que reducir su intervención en el proceso de negociación y en las instancias de conflicto entre las empresas y los trabajadores. La promesa de intervención es a menudo una invitación al conflicto, ya que entran en juego consideraciones políticas que oscurecen y dificultan los procesos de negociación”. De un artículo de Gustavo Márquez, editado en el boletín de la oficina del economista jefe del BID, Ricardo Haussman, citado en: “El BID procura fortalecer las organizaciones sociales como nexo entre políticos y ciudadanos”. *Búsqueda*, Montevideo, 26 de marzo de 1998, p. 11.

gobiernos de derecha, están imbuidas de un anti-corporativismo a ultranza, acrítico y peligrosamente conservador.

En síntesis, estamos frente a tres órdenes de problemas que no deben confundirse: 1) la transformación de la cultura estatal, que incluye, pero no solamente, la improcedencia de las relaciones paternalistas para definir las relaciones funcionales en el empleo; 2) el combate al primitivismo político que afecta a los sindicatos y otras organizaciones sociales, que encuentra su caldo de cultivo en la exclusión social y que compromete el papel transformador de los actores sociales y políticos; 3) la legitimidad de la representación organizada de los intereses populares para la democratización de la sociedad. Ellos no pueden encararse indiferenciadamente desde la lógica del “administrador”, que comporta el peligro de convertir a la izquierda en dique de contención para cambios profundos (sin los cuales los objetivos viables en el corto plazo tenderán a agotarse), y tampoco desde una acrítica perspectiva histórica y teórica sobre el “corporativismo”, que abra el flanco a las visiones de la derecha que niegan la legitimidad de las demandas y la organización popular.

Mientras la izquierda no sea capaz de diferenciar sus funciones sociales y políticas como partido y gobierno –sin que ellas lleguen a ser autónomas ni contradictorias–, habrá enormes dificultades para avanzar en un campo de reflexión creativa que disminuya los riesgos del aprendizaje por ensayo y error.

Gobiernos locales, democratización y gobernabilidad

Los gobiernos locales son, actualmente, un ámbito de disputa entre los más diversos intereses políticos: para la izquierda es una de las más factibles vías de acceso al gobierno, pero también ocupa un lugar de importancia en las estrategias dominantes de gobernabilidad.

Obviamente, no es un tema nuevo. Los gobiernos locales han sido, tradicionalmente, un espacio de distribución de cuotas de poder entre los sectores dominantes y, hasta cierto punto, un pintoresco ámbito del caudillismo y caciquismo latinoamericanos.

Sin perder esa característica “tradicional”, desde comienzos de los ochenta el tema municipal se inscribe en las políticas “modernizadoras”

neoliberales, ocupando un lugar importante en la reforma del Estado que acompaña la reestructuración del capitalismo latinoamericano. La descentralización gubernamental (más bien desconcentración) que se consagra jurídicamente en prácticamente todos nuestros países⁸, fue presentada, inicialmente, sobre todo como un componente de la modernización administrativa, a la que se definía principalmente por criterios de eficiencia financiera. Pero en esta década, con el acicate de los avances electorales de la izquierda, aparece destacada en el discurso dominante como un dato de los avances de la democracia, hasta el punto de calificársela como una “**revolución democrática silenciosa**”⁹. Independientemente del carácter de cada gobierno local y de la sustancia de su gestión, la descentralización es definida como bastión de la “democracia de abajo a arriba”¹⁰, en el entendido de que ha generado una distribución del poder. Con esta formulación coincide la izquierda al referirse a su experiencia de gobierno municipal. Esta coincidencia es aparente, pero sólo es desentrañable a la luz de las concepciones de democracia en que se sustenta.

Empecemos por recordar que el objetivo central de la reforma neoliberal del Estado¹¹ es el de plasmar institucionalmente los cambios en el poder relativo de las clases ocurridos en estas décadas a favor del capital, en que la participación estatal se caracteriza por una altísima intervención

8 En Chile, la descentralización municipal se consagra en la Constitución pinochetista de 1980, que es, seguramente, la experiencia más radical de institucionalización territorial de la desigualdad social. En Ecuador y Perú las reformas jurídicas empiezan en 1979; en Venezuela se aprueba la nueva ley municipal en 1978. En Colombia el proceso se inicia en 1980 y se completa en 1986; en El Salvador la nueva ley municipal es de 1983; en Bolivia se inicia el proceso de reforma en 1985 y se concreta en 1992; en Argentina se dan las primeras reformas en 1983 y en Brasil se incorpora a la Constitución de 1988. Véase más información en el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Cooperación Política para la Descentralización del Estado*, 1997. Para Chile, la colección de la revista *Estudios Públicos*, publicada por el Centro de Estudios Públicos en Santiago.

9 Véase el informe de la Primera Conferencia Interamericana de Alcaldes “Caminos para el Desarrollo de la Gobernación Municipal”, convocada bajo los auspicios del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y la Federación de Municipalidades del Istmo Centro Americano (FEMICA), realizada en Washington, D.C. entre el 14 y el 16 de noviembre de 1994.

10 *Ibidem.*

11 Un rico aporte a este debate lo hace Carlos Vilas en “La reforma del Estado como cuestión política”, en *Política y Cultura*, núm. 8, México, Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco, primavera 1997.

pública para proteger, apoyar y financiar a los grandes intereses privados (en algunos casos, la simbiosis es completa) y un sistemático desmantelamiento de sus funciones redistributivas. Esta reforma del Estado convierte en asunto público el interés del gran capital y expulsa del ámbito público los intereses de la mayor parte de la sociedad. Contrariamente a la retórica neoliberal, el poder no se dispersa, por el contrario, se concentra en una oligarquía moderna (grandes grupos económicos transnacionalizados, la clase política usufructuaria del poder, los aparatos represivos policiales y militares, las cúpulas del narcotráfico, las fracciones beneficiarias del modelo y los sectores más conservadores de la sociedad (entre ellos, los medios de comunicación)¹², que ejerce directamente el poder económico y el dominio político mediante el uso patrimonial del Estado, pero también desde fuera, e incluso, contra él.

La descentralización neoliberal se inscribe en los objetivos de reducir al máximo las presiones y demandas populares sobre el Estado, en aras de la gobernabilidad de un sistema con mínima disposición para atenderlas y satisfacerlas. En este sentido, una de sus funciones principales es la de manipular el nada “silencioso” crecimiento de los índices de pobreza, cuyas dimensiones llegan a ser reconocidas como un factor de ingobernabilidad. Esta década es testigo del despliegue de políticas focalizadas hacia la extrema pobreza, que si bien no atacan sus causas ni el aumento de la pobreza, apuntalan los intentos de disgregación y control social. Los gobiernos locales son un vehículo preferencial¹³ para la instrumentación de esas acciones, que cuentan con el apoyo de los organismos financieros internacionales. Las políticas focalizadas permiten mantener, a muy bajo costo, formas muy controladas de clientelismo político con el que se manipulan las necesidades de los pobres. Pero también reproducen la atomización de la sociedad, con un movimiento simultáneo de debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y de promoción de organizaciones de objetivos particularistas y duración generalmente intermitente o fugaz. El desplazamiento de

12 Véase Eduardo Ruiz Contardo, “Crisis, descomposición y neo-oligarquización del sistema político en América Latina”, México, *Política y Cultura*, núm.5, Otoño 1995.

13 “Los gobiernos locales son el bastión gubernamental de la lucha contra la pobreza [...] Son los Alcaldes los que dan la cara frente al ciudadano que exige el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado”, discurso de César Gaviria, Secretario General de la OEA, ante la Primera Conferencia Interamericana de Alcaldes “Caminos para el Desarrollo de la Gobernación Municipal”, antes citada.

los movimientos populares por una constelación de “organismos no gubernamentales” apunta a la configuración de una “sociedad civil” sin referentes clasistas y con una fragmentada capacidad de presión¹⁴.

Es la sociedad civil adecuada para la democracia que concibe la derecha para administrar políticamente la reproducción del capitalismo excluyente.

Se trata de la especie de democracia liberal que desde los años cuarenta esgrimieron los liberales conservadores contra sus principales adversarios: el socialismo y el Estado de Bienestar, para resguardar el orden capitalista del espíritu más igualitarista o redistribuidor que ambas experiencias difundían en el pensamiento social de la posguerra y que alcanzó no sólo a los sectores populares y a la intelectualidad sino también a fracciones burguesas y burocracias estatales. Se buscaba reordenar las relaciones políticas de modo que no llegaran a afectar los objetivos de crecimiento y acumulación capitalistas, sustrayéndolos no sólo de la deliberación política en general, sino, y principalmente, de la que permite la incidencia de fuerzas contrarias al orden dominante: desplazar las concepciones de democracia asociada al desarrollo social, autonomizando la política de los fenómenos económicos.

El modelo sustituto de democracia es el *elitista*,¹⁵ que reduce el fenómeno democrático a un método competitivo de reclutamiento de líderes, quienes, a través de la cooperación y entendimiento cupular, operan como un filtro a las demandas de los distintos sectores de la sociedad con el fin de disminuirlas hasta el punto en que puedan ser aceptadas por el poder económico y satisfechas por el Estado como políticas públicas, produciendo el equilibrio (governabilidad) sistémico¹⁶. La democracia es solamente

14 La laxitud conceptual con la que se trata el fenómeno de las ONG a partir de lo “no gubernamental” permite que todo quepa en ellas, desde emprendimientos empresariales hasta organizaciones de representación social, pasando por una infinita gama de formas asociativas gestoras de recursos; desde las más altruistas, a las de intereses más utilitarios que negocian el acceso individualizado a limitados recursos económicos y políticos.

15 Véase el interesante análisis de C.B. Macpherson, *La democracia liberal y su época* (1977), Madrid. Alianza Editorial, 1991.

16 Joseph Schumpeter fue quien expuso con mayor amplitud esta noción de democracia en su libro *Capitalismo. Socialismo y Democracia*, escrito en 1942 y con un capítulo agregado en 1946: “La democracia es un *método* político, es decir, un cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas –legislativas y administrativas– y por ello no puede constituir un fin en sí misma independientemente de las decisiones a que dé lugar en condiciones históricas dadas. Y éste debe ser el punto de partida para todo intento de definirla (p. 312). ...Ante todo, con arreglo al criterio que hemos adoptado, la democracia no significa ni puede significar que

el método que hace funcionar el mercado político, un instrumento de administración política del orden sistémico¹⁷, en el que el sistema de partidos es la parte oferente y quien regula al mercado mediante reglas del juego muy precisas en cuanto a lo que es admisible o afecta su gobernabilidad.

Los impulsores de este modelo reconocen que el entendimiento entre cúpulas tiende a lograrse cuando se arriba a un acuerdo básico sobre la naturaleza del orden social. En los contextos de referencia de este modelo de origen, los acuerdos podían sustentarse en objetivos eventualmente compartibles entre los distintos sectores de una sociedad en expansión económica y que –aun desigualmente– distribuía beneficios para las mayorías. En la realidad actual de América Latina, en que tres cuartas partes de su población son excluidas por el orden social, el consenso sólo puede ser excluyente. Por eso, la afirmación de Schumpeter de que “el método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social” (p. 378) evidencia todavía más las connotaciones reaccionarias de los objetivos consensuales de los epígonos latinoamericanos; tanto más, cuanto más pobres y desiguales son los países.

El consenso, para la derecha, equivale a desarmar todo cuestionamiento consistente al orden capitalista: la democracia elitista admite la alternancia de gobiernos, no de proyectos sociales. El “pluralismo democrático”, es decir, la aceptación de los diversos actores en calidad de pares en el sistema político, está condicionado a un consenso y concertación

el pueblo gobierna efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de las expresiones ‘pueblo’ y ‘gobernar’. La democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarle. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición añadiendo otro criterio identificador del método democrático, a saber: la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado. Ahora puede expresarse un aspecto de este criterio diciendo que la democracia es el gobierno del político (p. 362). ...método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos [los políticos] adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (p. 342). Buenos Aires, Folios, 1972.

17 En 1944, Friedrich von Hayek señalaba que la democracia “es esencialmente un medio, un instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual”, *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p.101.

unidireccionales hacia los intereses dominantes, que acotan la política a la inviolable regla del juego de “no politizar la economía”¹⁸.

En los nuevos tiempos, la derecha orienta parte importante de sus energías políticas a ganar a la izquierda como el interlocutor en los consensos excluyentes, a integrarla en la nueva *clase política* –como pequeño grupo endogámico– en torno a las cuestiones procedimentales y al disfrute condicionado de los beneficios bastante generosos que otorga el sistema a los *elegidos*. Para la derecha, una medida de la “consolidación de la democracia” es la transformación del liderazgo político de izquierda en conducta elitista: la participación en los pequeños grupos que deciden en función de sus propios intereses, por sí y ante sí, que se sienten más obligados a los acuerdos inter-partidarios que a representar los intereses y la voluntad de sus representados. Para ser aceptada como par en el sistema político, como integrante del *partido transversal*¹⁹ que define las políticas de Estado, la izquierda es presionada a moderar y frenar las presiones populares y sus expresiones conflictivas. Paradójicamente, las libertades civiles y políticas, indudablemente conquistadas por las luchas populares, son “ofrecidas” por la derecha como valor de cambio del “método democrático” de equilibrio dentro de sus parámetros de gobernabilidad.

Posiblemente en esa “oferta de libertades” radique todavía la fuerza de atracción de la “democracia sin democratización”, aunque su prolongación excesiva termina por debilitarla. La “desdramatización de la política”, ese objetivo deseable para la gobernabilidad, ha ido calando socialmente como descrédito hacia “los políticos” –todos, sin importar su signo– y la política, tan lejanos y ajenos a una cotidianeidad cada vez más dramática. Las *virtudes* de una sociedad *liberal modernizada* (plural²⁰, pragmática, indivi-

18 Como dice Carlos Monsiváis: “por politización [...] entienden el uso innoble de la política en su contra [...] Hacerlo sería alevoso y descortés”, en “La naturaleza nunca es suficiente”, México, *Proceso*, núm. 1142, 20 de septiembre de 1998, p. 9.

19 La noción del partido transversal fue acuñada en Chile a partir de la Concertación. Véase la entrevista “Enrique Correa insiste en Partido Transversal”, *El Mercurio internacional*, Santiago, 30 de mayo de 1996, p4.

20 Los teóricos del “pluralismo social” conciben una sociedad individualizada en la que cada uno de sus miembros establecen múltiples identidades equivalentes en cada una de las interrelaciones sociales definidas por sus diversos roles, espacios sociales en los que toman algún tipo de decisión y, por tanto, ejercen una cuota de poder. El poder está disperso entre innumerables tomadores de decisiones, que, en tanto tales, son iguales entre sí. La condición social no interesa para explicar por qué hay algunos que deciden en todos los ámbitos sociales a los que pertenecen y otros invariablemente no deciden

dualista y desafecta a la participación) son funcionales al modelo conservador de democracia si neutralizan a los grupos sociales demandantes y cuestionadores, no si llegan al grado de negar la legitimidad de la democracia gobernable y, con ello, su capacidad de control social; en particular, cuando la supuesta apatía política conduce a buscar formas de participación y lucha por fuera de los ámbitos admitidos por el sistema político.

Precisamente porque está cuestionado su ámbito de acción, sobre los efectos de ingobernabilidad provocados por la democracia gobernable tienen hoy más conciencia los políticos que los tecnócratas del sistema²¹. Ante ello, los gobiernos locales aparecen como la posibilidad de recuperar la función conservadora de la política: legitimar al sistema sin alterar sus condiciones de reproducción económica.

Los neoliberales dicen reconocer en el gobierno local el mérito de acercar el gobierno al ciudadano porque le permite incidir en aquellas cuestiones que le son sentidas e inmediatas, como los servicios urbanos, la seguridad y, en algunos casos, la salud y la educación. En condiciones determinadas, puede ser cierto. Pero es indudable que el anclaje a lo local lo mantiene alejado de la toma de decisión en las políticas económicas

nada. Que la mujer pobre, por ejemplo, no pueda “gestionar” el alimento de sus hijos ni logre incidir ante las instituciones en su educación formal; que es impotente ante la especulación de los intermediarios de servicios y difícilmente tendrá tiempo y energías para hacer frente a las arbitrariedades de la autoridad, menos aún para informarse, si es que sabe leer, es una cuestión secundaria.

- 21 La preocupación por el desprestigio de la política y los políticos ha tenido relevancia en varios foros regionales. Por ejemplo, la Declaración de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Viña del Mar, Chile, 1996, p. 8) señala que “Eleva la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social [...] reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en selección de los liderazgos [...] para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población”. La VII Cumbre (Isla Margarita, Venezuela, 1997) retorna el tema señalando que: “La tarea de los partidos no se agota en el acto comicial. Su función también debe ser la de instrumentos de comunicación recíproca entre los órganos del Estado y la sociedad [...] como articuladores y agregadores de demandas sociales...”. Se les convoca, para ello, a conformar “opciones que orienten el debate y la vida pública [...] al diseño de nuevas formas de participación de los ciudadanos donde las opiniones sociales puedan manifestarse más espontáneamente, y servir de punto de referencia a la actuación de los gobernantes”. Pero no se deja duda en cuanto a que los límites de las definiciones programáticas de los partidos deben corresponder a la necesidad de que “refuercen su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la economía mundial...”. Véanse puntos 34-36 de la Declaración Oficial.

y sociales fundamentales, que le son tan o más vitales que muchas de competencia local. En la formulación de estas últimas puede haber cierta participación ciudadana. Aquéllas son innegociables y están fuera de la competencia de lo político.

Los estrechos márgenes de decisión en la democracia gobernable no sólo se dan en los espacios municipales; como hemos visto, afectan al propio sistema político y a los partidos, especialmente los de izquierda, que, no obstante tener una representación parlamentaria suficiente para influir en un conjunto de acciones estatales, no inciden en las decisiones económicas fundamentales, las que seguirán fuera de su órbita. La estructura de poder se mantiene incólume, pero la política, los políticos y el sistema representativo pierden credibilidad y, concomitantemente, su capacidad de mediación y control social y político.

El objetivo de recuperar la legitimidad del sistema representativo, sin modificar las fronteras de la política, encuentra en el ámbito municipal un instrumento idóneo²². En esta década, el promedio de votación en América Latina sigue oscilando en torno al 50 por ciento de los habilitados, pero una mayor cercanía con los temas y con los candidatos moviliza en las elecciones municipales algunos puntos porcentuales más. Es interesante constatar que en algunos de los comicios en que ganó la izquierda (por ejemplo, México), cuando las diferencias de votos fueron considerables, se obtuvieron por una mayor afluencia de votantes motivados por la expectativa de cambio.

Las elecciones municipales son funcionales si legitiman el sistema representativo, no si modifican las ecuaciones político-electorales nacionales. Por eso no deben coincidir en el tiempo con las elecciones presidenciales. Algunas recientes reformas constitucionales (como en Uruguay) se dirigieron a evitar el riesgo de que un aumento de los votos a nivel municipal le den a la izquierda los márgenes para un triunfo nacional.

22 La importancia de los gobiernos locales para recuperar la legitimidad de los sistemas representativos estuvo en la agenda de la citada Primera Conferencia Interamericana de Alcaldes de 1994. De nuevo es César Gaviria, un político, quien indica la necesidad del “reconocimiento de la autonomía local, la participación y el control directo de los ciudadanos en las decisiones y en la gestión” como “principios que en nuestra opinión deben constituir la carta de navegación de las municipalidades de América y la preocupación de las Organizaciones Internacionales y la Banca Multilateral si queremos avanzar en América Latina hacia la consolidación de la democracia y el establecimiento de condiciones de gobernabilidad que recuperen la legitimidad de los sistemas políticos”, *op. cit.*

Para algunos analistas, estas estrategias de gobernabilidad son episodios de la ingeniería político-electoral que no ponen en cuestión el desarrollo democrático porque se dan en un intenso marco de negociación entre partidos. Que ello ocurra en contraposición con una esfera económica excluyente sin negociación ni visiones alternativas posibles, no se ve como obstáculo para afirmar que la democracia avanza. Los negociadores de la izquierda suelen ser bastante receptivos a esa imagen, y no sin cierta razón, pues los que antes propiciaron su exterminio ahora dialogan y hasta buscan acuerdos. Pero, además, porque sectores considerables de la izquierda han internalizado la lógica de la política como mercado, con bastante proclividad a privilegiar la competencia electoral (y mucho de lo que supone en pragmatismo) sobre otras formas de construcción de fuerza política; han incorporado bastante acríticamente la cultura del consenso en los términos impuestos por los sectores conservadores; han llegado a privilegiar los objetivos de gobernabilidad por sobre los de democratización; y como parte de un mismo proceso, la derecha pudo erosionar la claridad de sus proyectos tras estrechar los horizontes de visibilidad del cambio, dando como resultado que se confunda adaptación con realismo²³.

Por todo lo anterior, destacan varias de las experiencias de gobiernos municipales de izquierda que han tenido éxito en transitar por derroteros diferentes a los que inducen las estrategias políticas de la derecha, señaladamente los casos de Montevideo y Porto Alegre. En contraposición a la política cupular, se ha promovido un ejercicio real “desde abajo” en el que la participación de la gente en las decisiones de gobierno integra la dimensión económico-social a las relaciones políticas. La descentralización no se ha concebido para disminuir la responsabilidad estatal sobre el conjunto de la población sino para asignarle los contenidos de su gestión. La elección de los equipos responsables del cogobierno, tanto a nivel territorial como en áreas funcionales, se ha hecho procurando la erradicación del

23 Michel Camdessus, director del FMI, expresa esta idea de imposibilidad de alternativas: “cualquiera que sea el color político de un gobierno tiene que encarar la realidad y buscar los mejores métodos para optimar el crecimiento y la prosperidad colectiva. Me parece que en todos los países del mundo, para los dirigentes de izquierda, de derecha o del centro, las opciones no pueden ser muy numerosas. Pueden introducir matices interesantes, pero dentro de una disciplina de respeto al mercado, de apertura internacional y de equilibrio y disciplina macroeconómicas sin las cuales las economías van al abismo”. Entrevista en *Búsqueda* núm. 860, Montevideo, 12 de septiembre de 1996, p. 60.

caciquismo partidario con la incorporación no subordinada al gobierno de la población afectada. Se ha buscado el consenso, mas no por la exclusión de intereses representados, sino procurando su integración a través de debates abiertos, acuerdos y compromisos mutuos en los que el gobierno actúa como contralor y garante de su cumplimiento: la horizontalidad reduce el espacio a las manipulaciones clientelares propias de una relación vertical con demandantes aislados. La participación directa, como constructora de la nueva relación Estado-sociedad, ha sido un factor democratizador del ejercicio del poder en la medida en que ha trascendido el ámbito de la consulta y promovido la organización colectiva más permanente de la sociedad. Esta concepción de democracia directa difiere radicalmente de la que hoy llegan a admitir algunos ideólogos de la derecha, que sólo la aceptan en el ámbito y para la temática locales –no en el nacional– como mecanismo de legitimación, mediante formas de consulta individualizadas (por ejemplo, las electrónicas) de modo tal que no alteren la atomización de la sociedad. Y a diferencia de las lógicas de mercado con que opera el sistema político, las crecientes adhesiones electorales a este tipo de experiencias de gobierno parecen haberse logrado, más que por un desperfilamiento de la “oferta política”, por su claridad.

Por experiencia directa o por efecto demostración, estos gobiernos han aportado importantes ejemplos de una nueva institucionalidad en materia de Estado de derecho y de servicio público, educando y estimulando mayores niveles de exigencia en la población, hasta el punto de colocarse estos temas en la agenda política nacional de la competencia electoral. La sustancia democratizadora, de justicia social, de los gobiernos, también influye en otras regiones ampliando las expectativas para emularlas.

El entusiasmo que generan estas experiencias como verdadera alternativa democratizadora, que dicen más que tantos discursos y debates pseudocientíficos, no debe impedirnos una observación objetiva de la tensión entre su potencialidad transformadora y su funcionalidad para las estrategias conservadoras de gobernabilidad.

En cuanto a lo primero, el balance hartamente positivo de varias de las experiencias, algunas avaladas con crecimientos electorales (importante pero no único criterio para valorar los logros), no debe obnubilar el hecho bastante evidente de su limitada incidencia en la reconstrucción del tejido social, en la transformación valórica y conductual de las sociedades

involucradas en la nueva relación gobernantes-gobernados. El peso de la participación en el cogobierno municipal tiene, todavía, una mayor trascendencia cualitativa que cuantitativa. Y habría que reflexionar si las temáticas locales en torno a las que se participa permiten cruzar la frontera del entorno inmediato hacia una politizada visión de la sociedad y el país. Si la “democracia desde abajo” es insular, puede dejar inalterados los balances de poder y no afectar a las estrategias conservadoras de gobernabilidad.

De todas maneras, como es propio de las lógicas dominantes, estas experiencias son vividas como un peligro real, lo que es verificable en las agresivas campañas de desprestigio de que son objeto, al servicio de lo cual están los medios de comunicación. Sin embargo, no deja de llamar la atención el umbral de tolerancia a la “cohabitación política” con la izquierda, notablemente superior al de épocas anteriores, que no se explica solamente por el *aggiornamento* de la derecha: ése no es tal a la hora de aislar o reprimir a militantes –incluso de ese mismo partido– que luchan por derechos laborales, por tierra para los campesinos, por derechos indígenas o por defender la educación pública; y tampoco lo es cuando los mismos gobiernos de izquierda traspasan los límites de lo admitido al afectar privilegios propietarios.

Los gobiernos de izquierda pueden ser tolerados y hasta financiados internacionalmente a condición de no alterar la gobernabilidad del sistema, es decir, si se inscriben en la funcionalidad de cualquier gobierno local, como administradores de la crisis. En ese marco, hasta sus logros pueden ser bienvenidos, pues la buena administración de las grandes concentraciones urbanas puede ayudar a atemperar la insatisfacción y la conflictividad social; y también, porque al absorber porcentajes altos de la población, logros en salud, alimentación, empleo, inversión productiva, etc., compensan los déficits nacionales y mejoran los indicadores “macro”, que la derecha exhibe como propios.

El devenir en uno y otro sentido de estas experiencias también está condicionado por una realidad política bastante compleja en la izquierda. Al observar simultáneamente las dinámicas parlamentarias –que han tendido a desanimar la participación organizada de la sociedad o la han tratado de circunscribir a las exigencias del consenso entre partidos– y las de los gobiernos municipales –en los términos ya descritos–, existe la sensación de estar ante “dos izquierdas”, lo que se manifiesta al interior de la fuerza política como competencias de liderazgos que disputan los “capitales polí-

ticos”. No está del todo claro si estas experiencias democráticas de nuevo tipo lograrán modificar las políticas conservadoras o si, por el contrario, tienden a ser absorbidas por ellas pasados los primeros períodos refundacionales de los nuevos gobiernos. Es indudable que su permanencia y proyección dependen del desempeño electoral que tenga la izquierda. El *cómo ganar votos* pone en contradicción las dos visiones que coexisten en las dirigencias, lo que suele inmovilizar a la fuerza política y alejarla de sus objetivos de transformación y, eventualmente, de sus mismos objetivos electorales.

A pesar de cuánto puedan conspirar estos avatares en el desempeño electoral de la izquierda y en el devenir de su proyecto, no debe olvidarse que hay una variable difícil de controlar: el cansancio y hartazgo de la gente, que puede dar sorpresas. La derecha lo sabe, por eso no baja la guardia. El horizonte de visibilidad necesario para encarar esta dialéctica política, en todo caso, exige trascender las lecturas autorreferidas.

Izquierda y democracia

Paradójicamente, producto de los nuevos tiempos, hoy vuelve a ponerse bastante de moda declararse de izquierda o buscar ser la izquierda del sistema político.

Diez años atrás, declararse de izquierda era estar en el campo conservador y defender al neoliberalismo era ser radical. Ahora, para distanciarse del desprestigio político del neoliberalismo, mas no del capitalismo, el cálculo electoral ha llevado a muchos, acostumbrados a los movimientos “oportunos”, a desandar el camino hacia la derecha y emprender un corrimiento hacia el centro, es decir, moverse hacia la izquierda. Pero, ¿qué es ser de izquierda?

Las definiciones no abundan porque los incómodos y comprometedores debates ideológicos de la modernidad son evitados y descalificados. Ahora, el punto medio de encuentro del todavía reivindicado fin de las ideologías, es la democracia. Por fin, todos son democráticos: la derecha, que dice haberlo sido siempre, y que en defensa de las instituciones la destruyó, reprimió y asesinó; la izquierda, a la que se le admite su loable intento de conversión. Lo caricaturesco del asunto forma parte de los nuevos

estilos de la ofensiva conservadora, que una vez más llena los vacíos en el debate ideológico.

Parece sensato terminar este trabajo discutiendo dos cuestiones importantes: qué es ser de izquierda y cuál es esa “nueva” relación de la izquierda con la democracia (la que mantiene la derecha con ella fue analizada páginas atrás).

Para avanzar en la primera, hay evidencias suficientes como para cuestionar la utilidad explicativa de las llamadas geometrías políticas. No obstante que esa óptica tiene la cualidad de expresar el carácter relacional de la política, considerando a los actores específicos con sus contradicciones concretas, carece de contundencia teórica para explicar lo esencial de estas contradicciones, para trascender los niveles declarativos de las microcoyunturas.

Pareciera haber más coincidencias para definir a la derecha que a la izquierda, pero es más intuitivo que conceptual. En general se apunta a identificar a lo más tradicional de la derecha, asociándola a la represión, al conservadurismo, la intolerancia y al oscurantismo cultural, fijándola en ciertas concepciones doctrinarias. Pero es infrecuente que se le identifique a partir de su posición sistémica, específicamente, desde los condicionamientos políticos de la dominación capitalista. Cuando son éstos, precisamente, los que explican a la ideología de derecha como asimilación simbólica de la experiencia histórica concreta, que tamiza las visiones filosóficas más generales del *deber ser* social. De ahí que términos como conservador o liberal suelen ser intercambiables como sustantivo y adjetivo, atendiendo al sello que la práctica dominante concreta le imprime a las adscripciones doctrinarias.

El común denominador del pensamiento y las conductas de derecha, independientemente de su origen filosófico troncal, es la asunción de *la desigualdad como el motor ineludible del buen funcionamiento social, en cuya exacerbación se concibe la recuperación del dinamismo del sistema capitalista*. Cuando la reproducción capitalista requiere de mayor exclusión social o política, en el pensamiento burgués tienden a ser predominantes las visiones más claramente de derecha, las que naturalmente se trasladan a los grupos o fracciones sociales hegemónizados por aquél.

Las solas geometrías políticas no permiten explicar por qué en nuestra región, a pesar de las diferencias y particularidades nacionales, las fracciones dominantes asumen una postura común en objetivos y contenidos

simbólicos. Frente a estas similitudes originadas en la naturaleza sistémica de su posición dominante, las fuerzas de izquierda, en cambio, observan diferencias importantes: el hecho de que la izquierda de un sistema partidario pueda asemejarse más al centro de otro o estar más a la derecha que éste, no es sólo una complicación metodológica del análisis comparativo, sino que plantea diferencias cualitativas en cuanto a sus objetivos de transformación y a su desarrollo como factor de contrapoder. Como *alter ego* de la derecha, la profundidad con que se asume el problema de la igualdad, en sus más diversas manifestaciones²⁴, es un criterio de distinción y definición de la izquierda. De ello no se desprenden imperativos maximalistas en términos políticos tácticos, sino un contenido esencial de su concepción social.

Si en algunas épocas –bastante excepcionales– el capitalismo pudo ser compatible con mayores niveles de igualdad e inclusión, dando lugar a una mayor diferenciación ideológica en el mundo de los propietarios, por el contrario, esta etapa del desarrollo capitalista se realiza con la exacerbación de la desigualdad, estrechando las identidades ideológicas del sistema en torno al pensamiento de derecha. La simbiosis entre neoliberalismo y *deseabilidad anti-igualitaria* expresa los contenidos ideológicos del modo de existencia actual del capitalismo: un capitalismo rechazado²⁵.

Surgela interrogante, entonces, de si se puede ser hoy consistentemente antineoliberal sin cuestionar al capitalismo. Esto nos sitúa en el complejo debate para ubicar a la izquierda en el vasto espectro social y político que rechaza el fundamentalismo excluyente del *modelo*. En América Latina, el rechazo a la pobreza y la desigualdad extrema es el campo de coincidencias progresistas desde las cuales caminar hacia los cambios; pero no es idéntico a la aspiración de igualdad, que implica la voluntad de remoción de las fuentes profundas de la desigualdad.

24 Eric Fromm describe el concepto de igualdad del siguiente modo: “todos son iguales en cuanto a aquellas capacidades humanas básicas como las vinculadas con el goce de la libertad y la felicidad. Significa, además, como consecuencia política de esa igualdad básica, que ningún hombre deberá ser usado para los fines de otro hombre, ningún grupo para los fines de otro grupo. Cada hombre es un universo para sí mismo [...] Su meta es la realización de su ser, incluyendo aquellas mismísimas peculiaridades que son características de él y que lo hacen diferente a los demás. La igualdad es así la base para el desarrollo total de las diferencias, y su resultado es el desarrollo de la individualidad”. *La condición humana actual*, Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 23.

25 El concepto de rechazación expresa un sentido direccional hacia los valores o prácticas que se fundan en la exacerbación de la desigualdad. El concepto es aplicable a modificaciones socioeconómicas, políticas e ideológicas.

Hay quienes prefieren hablar de equidad. Pero debe advertirse que en cuanto la equidad significa una distribución proporcional, debe explicitarse cuál es el criterio de relevancia de la proporcionalidad. Por ejemplo, la proporcionalidad de los intercambios en el mercado capitalista hace de la equidad una relación desigual. La equidad, como disfrute de igualdad de oportunidades, requiere de procesos previos de nivelación, es decir, de grados ineludibles de igualdad social, en la que “el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos”²⁶. Es esta vocación emancipatoria la que hace a la izquierda esencialmente democrática.

En la izquierda se discute actualmente, con un sentido autocrítico, un cambio de actitud hacia la democracia, en cuanto a sustituir una visión instrumentalista de la misma por la de concebirla como un fin en sí mismo. Esta visión dicotómica no permite ver la doble naturaleza que posee la democracia: como fin y como medio. Como punto de llegada en perpetuo discurrir, la democracia resulta en crecientes niveles de emancipación humana puesto que consiste en la capacidad y la posibilidad de que la sociedad, mayoritariamente, decida sobre su vida. Como proceso emancipatorio siempre inacabado, la democracia es una utopía, que –como dice Eduardo Galeano– sirve para avanzar. Pero asimismo es un tipo de relaciones políticas con las cuales transitar ese camino y, en ese sentido, es también un instrumento.

La democracia liberal aporta ciertas condiciones valiosas para establecer relaciones políticas más abiertas (libertades individuales, de expresión, asociación, representación, etc.). Pero ellas por sí solas no resuelven todas las formas de desigualdad en el capitalismo; de no existir la lucha por la igualdad en todos los espacios relacionales para modificar las condiciones de poder, por el contrario, permiten su reproducción. Cuando las diferencias sociales son de gran magnitud, la lucha por la igualdad es una condición *sine qua non* para dar sentido y eficacia a las libertades públicas liberales, que deben coexistir con el conflicto social y político. Por eso el problema es mucho más complejo que una simple disquisición dicotómica de un “antes” y un “después” en la relación de la izquierda con la democracia.

26 K. Marx, *Manifiesto del partido comunista*, en *Obras Escogidas*, tomo 1, México, Eds. de Cultura Popular, s.f., p. 50.

Esta es la razón por la que no es aceptable la tipología generacional de la izquierda latinoamericana que preside el análisis de sus transformaciones recientes, diferenciando una izquierda “estalinista” antes de 1959, “guerrillera” en los sesenta y “democrática” desde los ochenta²⁷. Su rigor explicativo es escaso ya que nace de un reduccionismo analítico sobre las vías o *formas de lucha*, en las que –como se señalaba anteriormente– intervienen elementos ideológicos, pero de manera determinante, o por lo menos equivalente, circunstancias sociales y políticas. Además de debilidad teórica, esta perspectiva denota un gran desconocimiento histórico.

En primer lugar, el *tipo ideal*, en cada etapa, simplifica la heterogeneidad de visiones ideológicas, experiencias organizativas, influencia política y modos de acción que han existido en las distintas fuerzas de izquierda en la región, anteriormente mucho más diferenciadas que en el presente. Por ejemplo, antes de los años sesenta no es demostrable la hegemonía soviética en todas las fuerzas de izquierda, pues existían importantes partidos socialistas no alineados con el PCUS, partidos comunistas con posiciones en conflicto –como las que estableció Mariátegui–, una incipiente influencia maoísta, etcétera. La adscripción a la guerrilla, tras la revolución cubana, es mucho menor al apoyo político que ésta recibió: surgieron en casi todos los países movimientos guerrilleros, de gran notoriedad por la virulencia con que fueron combatidos por la derecha, pero de desigual –y generalmente escasa– influencia política en los movimientos populares. La participación de la izquierda en los sistemas representativos, como criterio para calificarla de “democrática”, es incompatible con una visión seria de la variedad de luchas democráticas que hay en nuestra región; pero tampoco tiene rigor histórico pues en las otras “etapas” hubo importantes experiencias de participación electoral de la izquierda, aunque debe reconocerse que ésta es hoy una realidad abrumadoramente predominante.

¿Desde cuál de estas múltiples experiencias se infieren las visiones ideológicas típicas en la izquierda latinoamericana? Tal vez el más claro denominador común haya sido la receptividad a la idea del desarrollo nacional difundida en la segunda posguerra, aunque su procesamiento ideológico y sus expresiones estratégicas fueron muy diversos. En el

27 Esta tipología ha tenido bastante difusión en numerosos análisis sobre y de la izquierda en América Latina, e incluso fue mencionada en uno de los discursos inaugurales del VI Foro de Sao Paulo, en San Salvador, en julio de 1996.

diagnóstico del subdesarrollo se coincidió en el espíritu anticapitalista y antiimperialista y, sobre todo después de la revolución cubana, en concebir al socialismo como la única alternativa efectiva de desarrollo nacional en América Latina. Pero incluso en estas coincidencias, las concepciones sobre las alianzas sociales, la relación de los partidos con las masas, las vías de lucha, etc., fueron muy diversas²⁸.

¿Estaban ausentes, en todas estas definiciones, los valores democráticos? En términos de lucha por la igualdad y la emancipación, no. Predominaba una visión crítica sobre la democracia liberal como instrumento político de desarrollo social, que, por lo demás, era excepcional como modalidad institucional real de la política en la mayor parte de los países. Lo que hubo de desarrollismo (industrialización, crecimiento urbano, mejoría en las condiciones sociales de los sectores urbanos modernos y una persistente marginación de los grupos sociales que no participaban en el modelo de sustitución de importaciones, como los campesinos e indios) se dio, en general, en contextos autoritarios y de estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que el discurso liberal era, ya, francamente conservador. Las experiencias de Uruguay, Chile y Costa Rica, particularmente, en las que los valores liberales progresistas tuvieron una mayor presencia en los derroteros de los sistemas políticos, son realmente minoritarias. La prolongada estabilidad institucional de estos sistemas políticos se debió a que permitieron la expresión más orgánica de las visiones y proyectos alternativos existentes en el seno de la sociedad (no a la ausencia de conflictos políticos), pero el techo a estos desarrollos provino esencialmente de los propios sectores dominantes. En los otros países, estas expresiones alternativas estaban considerablemente cerradas.

La izquierda de los ochenta y los noventa no *descubre* sus aspiraciones democráticas en su mayoría, *descubre* una modalidad específica de democracia liberal, en la que, por primera vez, la mayor parte de la derecha latinoamericana *descubre* la utilidad de la negociación política para reproducir su dominación. Y por primera vez, también, la izquierda carece de una opción política alternativa.

28 Véase el interesante estudio de Ricardo Yocelvezky, "La ideología del desarrollo nacional en las ciencias sociales latinoamericanas", *Política y Cultura*, núm. 8, México, Departamento de Política y Cultura. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, primavera 97.

Lo que muchos sectores de la izquierda han comprendido es que el modelo de socialismo en el cual proyectaban sus aspiraciones democráticas no ha sido el adecuado para avanzar consistentemente en la emancipación humana, la que no se realiza automáticamente con la igualdad económica. Pero el tributo pagado por esas vulgarizaciones teóricas, dogmatismos ideológicos y usos arbitrarios del poder, por la gran distancia existente entre los objetivos socialistas de igualdad, humanitarios, de justicia, con las prácticas de quienes reclamaban la representatividad del proyecto, paradójicamente, no le conducen a replantear y enriquecer su perspectiva de construcción de una sociedad igualitaria, como realización plena de la democracia. El vacío que queda, naturalmente, es deliberadamente llenado por la democracia liberal, sólo que en su versión más conservadora. En el espejo de aquellos fracasos, para sectores considerables de la izquierda, el rescate de la utopía democrática pareciera sólo limitarse a la negación del socialismo y a la resignación a detenerse en un tipo de relaciones políticas que le abre más espacios a ella, como parte reconocida en el sistema político, que a la mayor parte de la sociedad: no puede perderse la sensibilidad de mirar la destrucción social producida en esos marcos de relación política, en la abrumadora mayoría de nuestros países.

Porque la izquierda ha luchado por mayor igualdad social y política es que se ha ganado, en buena medida, el espacio político-institucional que posee ahora. Con él puede potenciar el derecho de la sociedad a mayor democracia, como medio y como fin. Pero si la izquierda encuentra en las relaciones políticas del presente el *desiderátum* de su existencia, habrá cercenado su demostrada vocación democrática. Y en ello no podrá encontrar culpabilidades “externas”, que si en algo influyeron, ha sido por las propias debilidades ideológicas y políticas de la izquierda latinoamericana.

Después del difícil aprendizaje de que los cambios pueden darse en un sentido regresivo, bien vale la pena analizar la realidad con bastante ojo crítico. La izquierda sigue siendo la única alternativa moral en nuestro continente, avanza en aprendizajes y, a pesar de todas las adversidades, muestra que puede y sabe gobernar. Pero los desafíos del cambio social que requieren nuestras sociedades no pueden dar tregua al conformismo ni a la adaptación al conservadurismo de la época. En el derecho a la esperanza de nuestros pueblos está su reto.

Democracia gobernable: instrumentalismo conservador (2000)*

No hay tema de reflexión más permanente que el de la democracia, porque su desarrollo es un proceso histórico siempre inacabado. Pero en América Latina, donde desde los años noventa por primera vez todos los países tienen regímenes democrático-liberales, el tema padece de síntomas paradójicos: cuanto más se consolida la democracia peor vive la gente, y cuanto más se reflexiona sobre el asunto menos se aclara por qué. Los análisis no pasan de las descripciones sin explicaciones, pues los parámetros conceptuales que se presumen como adecuados no concuerdan con la realidad. Para quienes comulgan de manera complaciente con esta realidad, el problema ni siquiera existe como tal porque niegan en la democracia atributos de desarrollo social. Entre quienes sí creen en esos atributos, muchas de sus críticas a “esta” democracia no llegan a superar el plano ético, de denuncia, mientras que las alternativas que se piensan en la práctica no lo son, pues quedan en la dimensión cuantitativa de “más o menos de lo mismo”.

La democracia como problema no es una novedad, pues es inherente a la contradicción entre capitalismo y democracia, entre desigualdad social e igualdad política, que ha marcado la historia no sólo del debate sobre la democracia sino de su propia realización. Pero hoy plantea a los latinoamericanos desafíos analíticos y políticos inéditos, cuando esa

* Este trabajo fue presentado como ponencia en el II *Seminario Internacional Marx vive. ¿Cuál capitalismo? ¿Cuál alternativa?*, en la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, noviembre 8-10 de 2000. Publicado en: *Cuadernos de Nuestra América* Vol. XIV, núm.28, La Habana, Centro de Estudios sobre América, julio-diciembre 2001; *Vigencia y actualización del marxismo en el pensamiento de Rodney Arismendi*, Montevideo, Fundación Rodney Arismendi, septiembre de 2001; *Estudios Latinoamericanos*, Nueva Época, Año VIII, núm. 15, México, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enero-junio 2001; Jairo Estrada Álvarez (Comp.), *Sujetos políticos y alternativas en el actual capitalismo*, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 2003.

contradicción adquiere rasgos antitéticos pues la noción de mayorías es asimismo la de exclusión. Nunca ha tenido mayor vigencia la identificación del desarrollo de la democracia con la superación del capitalismo, pero, a la vez, nunca ha tenido tanta urgencia el construir caminos de avances democráticos en este capitalismo salvaje, porque hacen a la sobrevivencia misma de la gente.

Lo que no constituiría nada extraordinario para una visión dialéctica de la realidad, se ha convertido hoy en el nudo gordiano para quienes se proponen transformarla. Porque el tema de la democracia es una de las zonas oscuras del pensamiento social y político latinoamericano, en el que se constata el carácter dominante de las ideas de quienes dominan en la sociedad, lo que dice, obviamente, de las insuficiencias del pensamiento crítico en nuestra región. Razón suficiente para empezar desde allí la reflexión para desentrañar cómo se ha impuesto la concepción más conservadora de la democracia liberal como la noción general de democracia, que ha permitido dar legitimidad política y aceptación ideológica al orden social más antidemocrático que haya existido en la época moderna de nuestra región. Tarea nada sencilla en pocas páginas, cuando a la vez tenemos que analizar la crisis creciente de esa democracia sin que haya una crisis equivalente de las ideas dominantes.

Marxismo latinoamericano y democracia

Desde hace algunos años, en América Latina escuchamos la afirmación –incluso desde sectores izquierdistas– de que la izquierda de nuestro continente nunca ha sido consecuentemente democrática porque bajo influencia del marxismo ha tenido una visión instrumentalista de la democracia; y que sería recién ahora, con su renovación ideológica (el abandono del marxismo), que habría conquistado esa virtud al ver a la democracia como un fin en sí mismo. Esta afirmación es refutable por múltiples razones.

Si algo ha caracterizado al marxismo desde sus orígenes, es la identificación de la *democracia* con la *emancipación humana*, como un *fin* en perpetuo discurrir que para realizarse requiere, como condición y como desarrollo, la igualdad social. Por ello el socialismo se constituye en la utopía

democrática más radical, que busca la construcción de “una asociación en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos”, en palabras del *Manifiesto*.

Pero en la perspectiva emancipadora (democracia como fin) la democracia, en tanto que un tipo de relaciones políticas, también es un medio por el cual transitar ese camino y no habría porqué atribuirle un sentido peyorativo a la noción de instrumento político. El emotivo reconocimiento de Marx a la Comuna de París como un bello intento popular de construcción democrática dentro del capitalismo, atestigua esta visión dialéctica de emancipación-instrumento político o fin-medio, y que con una enorme riqueza, aún bastante incomprendida, elaborará Gramsci años después.

La democratización de una sociedad se mide por la capacidad que tienen las mayorías para decidir con autonomía sobre su presente y su futuro. La conquista de esa capacidad de decisión, que requiere de y produce mayor igualdad social, hace necesario –entre otros cambios– transformar las condiciones y espacios formales y no formales de institucionalización del poder con los que se reproduce la subalternidad. Pero la acción en ese nivel específico de la política, para ser realmente democratizadora, no es cualquier lucha política sino la que reintegra economía y política, la que reduce la escisión entre el “productor” y el “ciudadano”, la que reduce su desigualdad.

Ambos, una *participación con verdadera capacidad de decisión y mayor igualdad*, son los dos elementos de carácter vinculante entre democracia como fin y como medio. En ambos está implícito un problema ético, el de los valores y las prácticas democráticas, pero en ambos también se plantea un problema de poder, de relaciones de poder. Quienes cuestionan déficits en la izquierda en el primer aspecto (que los hay) pero eluden el segundo, tampoco están pensando en construir democracia.

El supuesto del “instrumentalismo” de la izquierda latinoamericana no logra sostenerse ni por su experiencia histórica ni por sus concepciones teóricas.

Se debe empezar por decir que a pesar de la gran heterogeneidad en visiones ideológicas, experiencias organizativas, influencia política y modos de acción, por sus valores y fines de lucha por la emancipación y la igualdad, la izquierda latinoamericana ha sido siempre una fuerza esencialmente democrática. En un continente en el que el desarrollo capitalista relativo alcanzado por algunos países representó mejoras en las condiciones de vida sólo para algunas fracciones urbanas modernizadas y mantuvo en la marginación a

millones de campesinos e indios, el contenido anticapitalista y antimperialista de la lucha de la izquierda tuvo un profundo carácter democrático.

En términos de su experiencia histórica, difícilmente se podría caracterizar a la izquierda como “instrumentalista” respecto a la democracia liberal cuando ésta ha sido excepcional como modalidad real de la política en la región. Fuera de algunos países como Chile, Uruguay y Costa Rica, antes de la década de los setenta la política latinoamericana ha transitado por regímenes autoritarios –algunos de ellos de tipo corporativo– o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que el discurso liberal fue francamente conservador. Por el contrario, fueron los contextos no democrático-liberales los que abonaron en amplios sectores de la izquierda la negación de la democracia burguesa como instrumento y el peso de las prácticas políticas por otros medios, desde las guerrillas (desde antes, pero más todavía después de la revolución cubana) a acciones políticas marginales y hasta lógicas corporativas. Tal vez las únicas izquierdas que poseyeron una más clara experiencia de acción política en el marco de la democracia liberal fueron la chilena y la uruguaya (con sus propias heterogeneidades internas), en las que su estrategia de constitución de sujetos sociales con independencia de clase y objetivos políticos anticapitalistas profundizaron el desarrollo más democrático de esos sistemas políticos: si hubo instrumentalismo, indudablemente éste tuvo el sentido de cambio que lo articula a la democracia como fin. En esas experiencias nacionales no fue el accionar de la izquierda el que debilitó la institucionalidad democrática; por el contrario, fueron los sectores dominantes que, ante la imposibilidad de seguir utilizando el régimen representativo para reforzar la dominación y los valores capitalistas, lo destruyeron.

Tampoco por su concepción teórica puede atribuirse un instrumentalismo democrático a la izquierda latinoamericana. Fuera de esas excepcionales experiencias políticas en el marco del sistema representativo, la izquierda latinoamericana no desarrolló una concepción autónoma de la democracia como medio. Y esto, más que una virtud, es en realidad una enorme debilidad, que en parte explica las limitaciones que exhibe hoy la izquierda de toda la región al tener que hacer política en el marco de la democracia liberal actual¹.

1 Y aun en las que hubo mayor desarrollo de una concepción autónoma de la democracia

No hubo teorización de la democracia política como un escenario específico de la lucha de clases, como *medio de cambio*, con la que se confrontara teórica y políticamente la visión dominante de la democracia como *medio de conservación*. Los marxistas latinoamericanos carecieron de una visión alternativa a la justificación teórica e ideológica y al modelo práctico que elaboró ampliamente la burguesía para construir equilibrios en sociedades de conflicto de clase, porque desecharon la sociología política como campo de conocimiento científico mediante el simple trámite de considerar a la sociología como una ciencia burguesa, dejando al estructural-funcionalismo la hegemonía. Fueron excepcionales los dirigentes políticos y muy pocos los intelectuales de la izquierda que conocieran y entendieran los desarrollos gramscianos en esta materia. Aunque la obra de Gramsci fue publicada en América Latina antes que en varios países europeos, esto ocurre en la década de los sesenta (una de las pioneras fue la revista cubana *Pensamiento Crítico*) y fue una literatura muy marginal.

Salvo excepciones, la producción intelectual se concentró en los problemas del Estado con una visión economicista de la superestructura como “reflejo”, sin desarrollos del problema más vasto de la dominación y de las mediaciones. Fueron en general visiones reduccionistas del Estado a su carácter de aparato de clase, muy distantes de la perspectiva marxista del Estado como cristalización de las relaciones de fuerza existentes en la sociedad, perdiéndose la riqueza analítica marxiana de la *autonomía relativa del Estado*; o del *estado ampliado* o *bloque histórico* gramsciano, que analiza el ejercicio de la dominación (*hegemonía*) atendiendo a los fenómenos institucionales e ideológicos no sólo como “reflejo” sino como escenarios de la lucha de clases que poseen una fuerza material en la organización de las relaciones de poder. En esas ausencias teóricas se explica la escasa atención al problema de los intelectuales y muy específicamente al papel de la Universidad pública, en lo que con muy escasas excepciones² la izquierda latinoamericana tampoco elaboró una visión teórica y estratégica propia.

como medio, hoy se observan desaprendizajes que dicen de regresiones que merecen análisis especiales del peso de las derrotas políticas en sus conceptualizaciones actuales.

2 Entre esas excepciones destacan las elaboraciones teóricas sobre los intelectuales y la universidad de dos secretarios generales de partidos como Rodney Arismendi del Partido Comunista del Uruguay y Clodomiro Almeyda del Partido Socialista de Chile, sin olvidar los aportes de José Carlos Mariátegui varias décadas antes.

Por *propio* no aludo solamente a la independencia ideológica de clase, sino también a la especificidad latinoamericana como sustrato sociohistórico de la conceptualización de las categorías de análisis. La gran excepción es el aporte de los científicos sociales marxistas a la teoría de la dependencia, que poco o casi nada influyó en las concepciones partidarias³.

Sin embargo, la llamada renovación ideológica que exhiben con orgullo muchos sectores de la izquierda no ha producido una superación de esas carencias teóricas originadas en un marxismo dogmático y frecuentemente vulgarizado por los partidos. Por el contrario, al negar el marxismo, estos sectores sucumben a las visiones hegemónicas del liberalismo, con una incapacidad profunda para distinguir entre el discurso universal-abstracto de la democracia liberal y su realización histórico-concreta como ejercicio de dominación capitalista. Cuando la izquierda latinoamericana descubre la democracia, en realidad descubre la *democracia gobernable*, la realización histórica más conservadora de la democracia liberal. En una desnaturalización teórica adicional, su creciente adscripción a las visiones del estructural-funcionalismo y a las teorías liberales pluralistas inhabilita a esos sectores de izquierda para entender los problemas de la dominación y el poder desde el marco institucional. Y cuando creen descubrir una visión más compleja del Estado, lo hacen bajo la dicotomía liberal que autonomiza política de economía, con la paradoja de que ello les sucede cuando el Estado neoliberal latinoamericano exhibe la mayor regresión en términos de autonomía relativa respecto al poder de clase.

Esas carencias analíticas, que impiden a la izquierda enfrentar teórica y prácticamente su nueva realidad de amplia presencia institucional con la autonomía necesaria para convertirla en factor de cambio, nada tienen que ver con la crisis del socialismo. Son problemas y carencias propias, de larga data, que en lugar de ser asumidas críticamente, han pretendido resolverse tirando al niño con el agua de la tina. La tragedia convertida en farsa: la izquierda no se “renueva” por haber aprendido de la dolorosa experiencia

3 También hay un importante aporte marxista a los estudios de las historias nacionales de América Latina, pero muchos carecen de elaboraciones teóricas para replantear la unidad de análisis del modo de producción en la perspectiva de las especificidades del capitalismo latinoamericano. Varias generaciones de izquierdistas desconocen el libro pionero de Sergio Bagú *Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina*, publicado por primera vez en 1946 y sólo reeditado en 1992 en México (por Grijalbo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).

para avanzar teóricamente, sino por haber sucumbido a la hegemonía prácticamente incontestada de la ideología del capitalismo más puro y duro.

Liberalismo y democracia

La asimilación de democracia liberal a democracia en general (“sin adjetivos”) que hoy predomina, se ha construido sobre la mitificación del liberalismo como la doctrina democrática por excelencia. Esa tergiversación de la historia obliga a las siguientes precisiones:

1. El liberalismo, en tanto proyecto político de la burguesía, no nació como una doctrina democrática; entre uno y otra hay un desfase temporal de más de un siglo y medio. El Estado liberal (formación de gobierno por elección, parlamento y división de poderes) no nació como Estado democrático.
2. La democracia apareció como problema histórico cuando se hizo evidente la contradicción entre el discurso universalista del liberalismo y la desigualdad social real, la que la burguesía no atacó con su propia emancipación política y que además reprodujo bajo nuevas condiciones al convertirse en clase dominante.
3. Cuando la burguesía liberal comenzó a encarar el problema de la democracia no lo hizo como un fin en sí mismo, sino como un instrumento político para regular la participación de los dominados que presionaban para decidir sobre los asuntos públicos. La máxima liberal de “un hombre, un voto” como realización de la emancipación política del individuo tenía como dedicatoria a los propietarios, y fue puesta en práctica con un modelo político en los hechos oligárquico –la democracia censitaria– referido a una *sociedad civil* excluyente: la soberanía popular no incluyó en el universo ciudadano a los no-propietarios, las mujeres y los jóvenes. Las ampliaciones de este universo soberano, como sabemos, no ha sido virtud de la burguesía liberal sino conquistas de los excluidos. Por el contrario, aquélla consagró la exclusión en un constitucionalismo conservador reificado con el desplazamiento de la soberanía al imperio de la ley “justa por naturaleza”. Sólo cuando el capitalismo monopolista requirió del

Estado nacional la burguesía fue proclive a considerar las demandas de sufragio universal⁴ para los varones, recién concretado hacia finales del siglo XIX, y para las mujeres muchas décadas después.

4. El liberalismo político progresista ha sido desde el siglo XIX un fenómeno eminentemente intelectual de sectores medios. Como portadores convencidos de los principios libertarios e igualitarios de la Ilustración, fueron sensibles a las condiciones de explotación y desigualdad capitalistas que quedaron desnudadas por los procesos de conciencia, organización y lucha independientes de la clase obrera. La influencia y vínculo de estos intelectuales liberales progresistas sobre y con las prácticas políticas de la burguesía es desigual e inconstante⁵, y sus coherencias o inconsistencias intelectuales han dependido de la radicalidad de su crítica al capitalismo como fuente de frustración de los principios ilustrados. Sus coherencias intelectuales y éticas los acercaron habitualmente a la izquierda.
5. Las mayores o menores aperturas a la participación política de los explotados admitidas por la burguesía han dependido de las condiciones históricas de la acumulación capitalista (de expansión o contracción), con sus diferencias temporales y espaciales; y ellas explican las mayores o menores contradicciones entre el liberalismo económico y el liberalismo político. Y no está de más recordar que la burguesía no siempre apeló a sus modelos políticos liberales para ejercer la dominación.
6. El grado de legitimidad de las formas de dominación política de la burguesía ha sido siempre una expresión de las fuerzas relativas entre las clases; originadas en las contradicciones específicas en el plano económico-social, pero también en las fuerzas relativas en la disputa por la socialización de las representaciones de cada clase sobre lo que es la sociedad (y/o lo que se espera que sea), es decir, como disputa ideológica. El vigor histórico del liberalismo, más allá de los avatares de sus concreciones políticas, está, precisamente, en su función ideologizadora de la realidad, consagrada en la disociación

4 Ver las interesantes y polémicas reflexiones de Immanuel Wallerstein en *Utopística o las opciones históricas del siglo XXI*, México, Siglo XXI Eds., 1998.

5 Ver el sugerente libro de Crawford Brough Macpherson, *La democracia liberal y su época*, Madrid, Alianza, 1982.

conceptual entre los fenómenos socioeconómicos y los políticos, así como en su ahistoricismo y empirismo microsical. Pero este vigor histórico no es una función del desarrollo de la democracia.

7. Los mayores desarrollos democráticos en el capitalismo, con la concomitante ampliación de las libertades y derechos individuales postulados por el discurso liberal, han tenido lugar cuando el liberalismo ha estado en retirada como concepción burguesa de organización económica y social, y ello ocurrió como producto de un cambio en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo favorable a este último.

A qué se le llama liberalismo: distingamos entre el discurso progresista con que la burguesía se hizo del poder, respecto de su naturaleza conservadora como dominación burguesa. Pero el discurso liberal mantuvo su eficacia ideológica porque logró convertir sus ficciones de carácter justificatorio en una teoría realista, que “describe” a la sociedad capitalista como un mercado en el que poseedores jurídicamente libres tejen lo social en intercambios racionales maximizadores del beneficio individual, lo que los convierte en iguales. Es en el fetichismo de la representación liberal de la sociedad en el que se sustenta la fuerza ideológica del discurso. Cuya eficacia es inversamente proporcional a la fuerza intelectual y política de la crítica marxista del capitalismo.

Si hoy asistimos a la más contundente victoria histórica del liberalismo –que en América Latina es la primera– no es sólo por la derrota del trabajo infligida por la contrarrevolución del capital sino también porque, en sociedades desgarradas por la desigualdad social, la ficción ideológica liberal se ha socializado como sentido común, y lo que es peor, como ciencia social.

Los retrocesos actuales vienen a reforzar las confusiones teóricas que se fueron gestando en América Latina respecto al liberalismo. Existen razones históricas por las que, cada vez que en nuestra región se piensa en el liberalismo, sólo se le asocia a las manifestaciones ilustradas y libertarias del discurso y no como proyecto político conservador de la burguesía en el poder. Ello es así porque en América Latina el liberalismo ha sido fundamentalmente un típico fenómeno intelectual de clase media, incluso anterior a la constitución de la burguesía. Como proyecto político antioligárquico se realizó en alianzas de los sectores medios y populares que, si bien creó las condiciones para la gestación de una burguesía moderna local, en general

no eliminó la impronta oligárquica del capitalismo latinoamericano. El Estado capitalista moderno que se configuró en los excepcionales triunfos políticos frente a la oligarquía, tampoco fue típicamente liberal. De ahí que el liberalismo político haya permanecido en el imaginario social como un movimiento progresista con metas inacabadas, por realizar.

Lo anterior explica el azoro de buena parte del pensamiento crítico ante este liberalismo duro y puro, cuya sustancia conservadora aparece en esa crítica como adjetivo de una perversión inexplicable. El gran activismo ético de los críticos contrasta con su parálisis política, originada entre otras razones por la debilidad intelectual: la crítica a “este” liberalismo no es la crítica del liberalismo en tanto forma histórica de ejercicio de la dominación burguesa; se cuestiona a la “democracia realmente existente” pero no se hace la crítica histórica y política de la democracia liberal, que sigue apareciendo (sobre todo después de la crisis del llamado socialismo soviético) como la democracia en general.

Gobernabilidad: dominación conservadora

El renacimiento liberal aparece como una necesidad dominante cuando la crisis del capitalismo, que estalla entre 1968 y 1973, hace incompatible la recuperación de las tasas de acumulación con la distribución del ingreso, con la que el capitalismo central se había expandido. Liberar al capital implicó liquidar la fuerza relativa del trabajo, una recomposición profunda del poder.

Ser contemporáneo de la transformación de una época en otra tiene sus dificultades y sus ventajas. Las primeras consisten en que en las coyunturas no se ven con facilidad las tendencias de largo plazo. Pero hay ventajas porque se pueden percibir los cambios históricos como producto de acciones sociales concretas. Sin embargo, los análisis sobre las transformaciones vividas durante los últimos 25 años todavía oscilan entre las teorías conspirativas de lo micro y la metafísica de lo macro. El avance conservador no puede explicarse por conspiraciones particulares, pues emana de las dinámicas propias de la reproducción capitalista, como *necesidad* sistémica y no como políticas coyunturales que puedan cambiar sin modificar la naturaleza del capitalismo en su fase histórica actual. Pero tampoco puede

desconocerse que la reproducción del capitalismo sólo parece un fenómeno *natural* después de que se fijan las relaciones sociales en correspondencia con esas *necesidades*. Y la gestación de las nuevas relaciones no tiene nada de natural, es producto de prácticas dominantes concretas; así como su aceptación requiere de ofensivas ideológicas específicas hasta lograr que el nuevo *ser* social se convierta en el *deber ser*. Sólo entonces “la fuerza de los hechos” es una potencia ideológica que permite que la ideología dominante aparezca como realismo.

El triunfo liberal (o neo) nada tiene de metafísico, porque la liberalización del capital es un hecho político, sin manos invisibles nacionales ni internacionales (la “globalización” es la ideologización del imperialismo convertida en realismo); requirió del desmantelamiento gradual del Estado de Bienestar en los países centrales del capitalismo y del terror de Estado en América Latina: a los trabajadores de los países dependientes las nuevas *necesidades* del capitalismo les representó y representa expropiaciones crecientes por partida triple: mediante la sobreexplotación del trabajo, con la redistribución negativa del ingreso en tanto consumidores individuales y como deudores nacionales⁶. Sólo con una gran violencia estatal se podían frenar las resistencias populares en un continente surcado por luchas anticapitalistas y antiimperialistas en ascenso.

Las ideas conservadoras de este neoliberalismo fueron producidas varias décadas antes de que se convirtieran en ideología dominante por los intelectuales orgánicos del capitalismo que tuvieron claridad en que el período del Estado de Bienestar era “un momento anómalo”⁷ del capitalismo, un mal necesario coyunturalmente, pero que en una nueva crisis cíclica introduciría factores extraeconómicos que dificultarían una

6 Fenómeno que planteó Ruy Mauro Marini en *Dialéctica de la Dependencia*, en 1973. México, Ediciones Era Serie Popular, 1974. Significativamente, en aquel momento parecía una argumentación extremista que no contemplaba matices sociales o contratendencias nacionales. Pero resultó premonitoria.

7 Eric Hobsbawn califica a los “años dorados” de la expansión de la posguerra como un período anómalo en la historia del capitalismo: el modelo de producción en masa sobre la base del consumo en masa no sólo es resultado económico de la “destrucción creativa” de la Segunda Guerra, sino porque la competencia más moral que económica con la Unión Soviética lleva a construir un modelo social atractivo para los sectores obreros sobre los que tienen gran influencia los partidos socialistas y comunistas; y también es anómalo por la apertura de la burguesía hegemónica y sus intelectuales hacia los problemas de la igualdad social. Véase *Historia del siglo xx*. Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1995.

salida eficaz y eficiente de la misma. Las ideas conservadoras de liberales como Schumpeter*, Von Hayek, Von Mises, Friedman y otros tardaron varias décadas para imponerse (más en Europa⁸ que en Estados Unidos) hasta que dieron el sustento ideológico para la recomposición de la dominación.

En 1975 la Comisión Trilateral⁹ las recogía como bandera política al plantear el problema de la ingobernabilidad de la democracia en el Estado de Bienestar. En realidad, lo que se hacía ingobernable en la nueva etapa capitalista era una sociedad organizada sobre la base del reconocimiento público de los intereses organizados de los trabajadores, con incidencia no sólo en la distribución del ingreso sino también en la producción y las condiciones de trabajo; con un Estado mediador de conflictos clasistas sin capacidad para imponer una concepción única del orden social, función de control debilitada cuando los intereses de capital y trabajo ya no convergían en torno a la expansión capitalista a cambio de beneficios sociales; una clase media educada acostumbrada a la movilidad social ascendente, y partidos que fincaban su competencia electoral en sus compromisos de satisfacción de demandas que “irresponsablemente” se filtraban en el parlamento.

Para hacer compatible la democracia con la gobernabilidad, es decir, para impedir que la democracia interfiera con los intereses capitalistas (ingobernabilidad), la Trilateral impulsó una transformación profunda de la sociedad para hacerla menos demandante, junto a un cambio en las relaciones políticas para reforzar el control sobre los conflictos que surgieran ante la negativa del sistema de convertir las demandas sociales en políticas públicas.

La identificación de la ingobernabilidad como crisis de autoridad (dominación) es coherente con la noción de *gobernabilidad* (*governability*) como la estabilidad política que se obtiene con la obediencia de los gobernados. Que no es lo mismo que *gobernación* o *gubernamentalidad* (*governance*), que refiere a las técnicas, racionalidad y grados de gobierno. Dos órdenes de fenómenos vinculados pero que no son vinculantes. No es casual que en América Latina se les traduzca indistintamente

* En términos doctrinarios, Schumpeter no es un liberal sino un conservador. Pero es él quien formula el modelo de democracia liberal conservadora que denomino democracia gobernable.

8 Véase al respecto a Claus Offe, *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, México, Alianza-Conaculta, 1990.

9 Informe de la Comisión Trilateral *La gobernabilidad de la democracia*. Publicada en *Cuadernos Semestrales* del CIDE, núm.2-3, México, 1977-1978.

como gobernabilidad, creando una confusión que diluye la connotación conservadora de la misma.

El problema de la gobernabilidad no es nuevo como tampoco lo es el de la dominación, sea ésta con legitimidad o no. Las dictaduras latinoamericanas construyeron la gobernabilidad que requería el neoliberalismo para imponerse. Cuando éstas dejaron de garantizar la estabilidad política, el problema de la gobernabilidad adoptó la forma de la democracia gobernable. Aunque por sí mismo el tema de la gobernabilidad tiene poca monta teórica más allá del problema del equilibrio, lo relevante son los procesos políticos e ideológicos que hacen posible que hoy se identifique gobernabilidad con democracia. Porque si la estabilidad de la dominación capitalista (gobernabilidad) se obtiene al impedir que la política intervenga sobre las cuestiones económicas que quedan sólo reservadas a la soberanía del capital, en países donde la desigualdad y la pobreza son la condición mayoritaria, la búsqueda de gobernabilidad es más que una estrategia dominante conservadora, es francamente reaccionaria. Que la democracia pueda jugar ese papel de garante del *statu quo* y tenga legitimidad en sociedades como las latinoamericanas, implica no sólo la transformación de la concepción que se tiene sobre la democracia, sino un cambio fundamental en la sociedad para transformar a sus actores políticos en funcionales al sistema.

En nuestra región, las estrategias de gobernabilidad han tenido un éxito indudable que nada tiene de metafísico. Por ello, además de la necesidad de desenmascarar los actos de prestidigitación en que se convirtió la teoría para presentar la democracia como gobernabilidad, el estudio de ésta cobra sentido en tanto se reconstruyan las estrategias desplegadas para producir la estabilidad política en sociedades escindidas y con una potencialidad conflictiva enorme, lo cual remite al estudio de las relaciones dominantes-dominados, siempre concretas. Ahora me detendré en estos cambios producidos en la sociedad que han originado las transformaciones políticas, las que analizaré en el siguiente apartado.

Tras los logros obtenidos a sangre y fuego, el éxito de las estrategias de gobernabilidad en América Latina desde los años ochenta radica en un conjunto de transformaciones sociales que por sí mismas disminuyen los obstáculos para el funcionamiento libre e impune del capital, a la par de

haberlas presentado no sólo como un fenómeno inevitable sino también como necesario para la expansión de la democracia, y por lo mismo, deseable.

Esto se ha hecho socializando una representación de la sociedad como mercado, como un agregado de individuos sólo vinculados por el intercambio de mercancías, que se realiza a precios fijados libremente por la oferta y la demanda. Como la libertad de la sociedad es la del mercado, ella se garantiza con el retiro de la intervención estatal en la regulación del mercado, lo que ocurre con la privatización de sus funciones económicas. Esta privatización produciría una dispersión del poder¹⁰, que se distribuiría horizontalmente entre la sumatoria de individuos que conforman la sociedad civil. Éstos, en sus múltiples relaciones individuales o microsociales son tomadores de decisiones, ejercen el poder. Este es el fundamento de las **teorías pluralistas**, que afirman que la privatización económica es la esencia de la **modernización** que conduce a la libertad y a la democracia al crear múltiples poderes equivalentes (**poliarquía**¹¹), no importando que entre esos tomadores de decisiones hay unos que deciden en todas partes y otros que no deciden nada, que son parias por doquier.

Además de llamar la atención sobre la falsedad del supuesto de que la privatización de las funciones estatales signifique una dispersión del poder en un mercado (sociedad civil) constituido por poderes tan disímiles como el trabajo y el capital, más aún en los grados de concentración y centralización actuales –que en lugar de socializar el poder lo concentra aún más–, hay que insistir en que esta representación de la “sociedad de mercado” no es sólo un artilugio ideológico liberal, sino que es un objetivo político a perseguir. La sociedad deseable para el neoliberalismo es la que ha dispersado a las clases y grupos sociales objetivamente contrarios al capital, que los ha disuelto en relaciones de competencia individualista, erigida en virtud libertaria. Las mínimas agregaciones sociales que un modelo de sociedad así puede contemplar son las de las interrelaciones primarias y a lo sumo los pequeños grupos de interés microgestores de bienes y servicios. Cada cierto tiempo, este poder ejercido “pluralmente” como sociedad civil se refiere al ámbito

10 Milton Friedman, *Capitalismo y libertad* (1962), en Harald Beyer, “Selección de escritos políticos y económicos de Milton Friedman”, *Estudios Públicos* núm. 60, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, 1995.

11 Robert Dahl, *La poliarquía. Participación y oposición* (1971), México, Red Editorial Iberoamericana, 1993; y *La democracia y sus críticos* (1989), México, Paidós, 1992.

público como *sociedad política*, una sumatoria de ciudadanos aislados que eligen a sus gobernantes; con esa activación periódica del mercado político se completaría la democracia.

Al pasar del nivel de las representaciones al de la realidad, se constata cómo la transformación de las relaciones económicas son el punto de partida para la constitución de una sociedad gobernable, pues originan conductas individualistas y conservadoras en los conglomerados populares, que reducen la emergencia de acciones colectivas y la capacidad de realizar cuestionamientos reales al orden de desigualdad. La liberalización del mercado de trabajo (“flexibilización laboral”) que libra al capital de las limitaciones jurídicas conquistadas por las luchas sociales, hace crecer la competencia entre los trabajadores (incluso regionalmente); aumenta su disposición a la desvalorización de su fuerza de trabajo y su subordinación al capital para conservar la fuente de empleo; se individualiza la negociación salarial debilitando la influencia sindical. El desempleo arroja a vastos sectores hacia formas alternativas de sobrevivencia individualizada (común y mal llamadas “sector informal”), que desvalorizan la fuerza de trabajo familiar, sin espacios colectivos para su defensa y sin capacidad para ejercer presión sobre el Estado, con lo que se producen regresiones en sus experiencias y grados de conciencia clasista y una creciente marginalidad política. Los sectores medios se estratifican, con fracciones satélites del capitalismo especulativo muy conservadoras, y los expulsados de la actividad estatal, debido a su calificación poco flexible para la reinserción laboral sufren profundos desajustes psicológicos, tendencias al ostracismo y al individualismo. La imposición de pautas de consumo suntuario (con el abaratamiento de muchos productos) induce a los sectores empobrecidos a consumirlos con un desplazamiento adicional de sus necesidades básicas (calidad alimenticia, salud, vivienda, educación, información), lo que aumenta su condición dependiente y marginal y refuerza las actividades económicas especulativas y parasitarias.

El desempleo y la pobreza incrementan las conductas delictivas de los pobres y con ello la percepción de inseguridad, haciendo a la sociedad más proclive a formas de privatización de las acciones coercitivas y más permisiva con las prácticas autoritarias. Dentro de ciertos límites manejables, la anomia social facilita el control. Los factores y valores de expulsión se refuerzan sobre todo entre los jóvenes y entre trabajadores calificados desempleados

(probablemente de mayor experiencia y conciencia previas), cuya emigración actúa como válvula de escape a las insatisfacciones sociales.

Aunque estas transformaciones sociales disminuyeron los niveles de conflictividad durante varios años, la polarización de la estratificación social no permite su contención absoluta. Las estrategias de gobernabilidad se orientan a aislar los conflictos tratándolos como particularidades (étnicos, religiosos, generacionales o de género, entre otros) y explotando su especificidad para impedir que se articulen en una noción de lo popular. El tratamiento diferenciado va desde cooptaciones y programas focalizados hasta represiones abiertas. Las agregaciones microsociales (comunitarias, barriales) son manipuladas para reforzar prácticas clientelísticas sin mayor alcance en cuestionamientos de tipo sistémico, en lo que puede radicar la funcionalidad de lo “local” para la gobernabilidad conservadora¹². Y en ese mismo plano de la *deseabilidad dispersiva* se encuentran las organizaciones no gubernamentales, unidades preferenciales de la poliarquía. Aunque muchas de las que así se denominan son en realidad movimientos sociales, la renuncia a identificarlos como tales habla de la influencia ideológica del liberalismo.

La sumisión, la resignación, el egoísmo y la pasividad no son sólo consecuencias de estas transformaciones sociales, sino también valores promovidos para reproducir esos cambios. El bienestar sustituido por la posesión (aunque sólo sea de la propia persona); los derechos sociales sustituidos por el consumo de servicios; el desarrollo humano transformado en competencia fagocitaria: “excelencia”; el temor ante el futuro incierto convertido en pragmatismo conservador. Estos son los valores de la llamada “posmodernidad”, supuesto virtuosismo cultural que defienden y reproducen vastos sectores de intelectuales, ahora orgánicos de la dominación conservadora, sólo para lo cual tienen utilidad las universidades públicas aparte de operar institucionalmente como mecanismos de control social y político de sus propias comunidades. El valor de la desigualdad como el factor más dinámico del desarrollo social es la consagración del liberalismo como pensamiento de derecha.

12 Discuto la relación entre lo local y la gobernabilidad en “La izquierda, el gobierno y la política. Algunas reflexiones” (en este volumen).

La *sociedad de la inseguridad* sirve como bandera de la derecha para ganar elecciones y para revivir las teorías políticas del individualismo posesivo en clave hobbesiana¹³, para hacer del Estado muy poco más que el guardián de la propiedad. La reforma neoliberal del Estado se legitima porque su “minimización” conduciría a la modernización social y política y a mayor democracia. Que en realidad sólo sea mínimo en sus responsabilidades sociales y se maximice en su intervención a favor del capital, es una de las tantas desmitificaciones de los supuestos liberales que necesitan hacerse, incluso para rescatar a los espíritus honestamente democráticos que han sucumbido a ellos al considerarlos “alternativa” a los autoritarismos corporativizados.

La democracia gobernable

Desde la lógica funcionalista, lo que los subsistemas económico, social y cultural no alcancen a producir en materia de gobernabilidad, debe ser completada por el de la política, cuya función primordial es impedir desequilibrios entre lo que se demanda al sistema (*inputs*) y lo que éste ofrece a través del Estado como políticas públicas (*outputs*). Esta concepción del sistema político tampoco es novedosa; lo es, en cambio, la exacerbación de los contenidos conservadores de la política en sociedades en las que el sistema, es decir el capital, nada está dispuesto a dar frente a la magnitud inédita de necesidades insatisfechas. Y cambia de manera radical el carácter de la representación política, pues ésta no puede traducir intereses en demandas, lo que asigna a los partidos una función primordial de control político sobre el desborde conflictivo que la miseria produce en América Latina a pesar de las transformaciones analizadas anteriormente.

El modelo de democracia representativa (liberal) que se ajusta al objetivo conservador de liberar a la economía de las intervenciones políticas, es uno de los tantos aportes de los intelectuales liberales conservadores en la década de los cuarenta. La democracia deja de ser el espacio de procesamiento legal y legítimo de intereses sociales diversos, como hasta algunos

13 Thomas Hobbes, *Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*. (1651), México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Además, C.B. Macpherson, *La teoría política del individualismo posesivo* (1962), Barcelona, Fontanella, 1979.

liberales progresistas llegaron a entenderla, para reducirse sólo a un método de formación de gobierno y de administración¹⁴ de las relaciones políticas.

Los ciudadanos sólo participan para elegir al reducido grupo de líderes que tomarán las decisiones por la ciudadanía, delegando en ellos la soberanía. La opinión de los ciudadanos sobre las decisiones tomadas por las élites podrán ser emitidas como aval o rechazo al reelegirlas o cambiarlas en cada acto electoral, único momento en que los ciudadanos recuperan la soberanía.

Las élites políticas construyen los equilibrios mediante consensos entre sí, que es la única forma que puede adoptar la política democrática, consensos hacia los intereses dominantes y no confrontación de proyectos de sociedad distintos. Porque no hay alternancia de proyectos, los consensos presuponen acuerdos estructurales básicos, que incluyen naturalmente la convicción de que los asuntos económicos son privativos del mercado. Al existir esos consensos básicos, las diferencias sólo pueden ser de carácter procedimental y sólo en esa medida las diferencias son negociables, concertables.

En suma, los partidos se limitan a ser la instancia de reclutamiento de las élites. El reclutamiento se realiza a través del juego de la oferta y la demanda, con los atributos de libertad de todo mercado: oferentes en libre competencia y consumidores también libres igualados solamente en la posesión de la ciudadanía: el mercado político es perfectible con reformas electorales, sin que ello modifique la naturaleza de su funcionamiento. La política es *marketing* periódico y concertación fuera de los tiempos de la competencia, allí se acaba el asunto de la política.

Este modelo de democracia liberal sintetiza tres tipos de visiones conservadoras que fueron acuñándose desde finales del siglo XIX: a) el rechazo al principio de soberanía popular frente a los riesgos que ésta implica para la dominación del capital tras la consagración del sufragio universal¹⁵; b) las teorías sobre las élites, que a partir de la descripción de las prácticas políticas de los sistemas parlamentaristas¹⁶ las convierten en preceptos normativos debido a su eficacia en el control político, y c) el balance positivo que hacen los

14 Friedrich von Hayek, *Camino de servidumbre* (1944), Madrid, Alianza, 1990.

15 Véase, por ejemplo, de Gaetano Mosca, *La clase política* (1896, 1923), México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

16 Robert Michels, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* (1911, 1925), Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

conservadores del impacto del parlamentarismo sobre los grandes partidos obreros (como el inglés y el alemán desde finales del siglo XIX) como medio que los integra al sistema y desnaturaliza sus objetivos de cambio radical anticapitalista. Esta síntesis de visiones antiliberales se refuncionaliza en el liberalismo conservador de nuevo tipo, cuya formulación más clara la hace Joseph Schumpeter, un economista¹⁷. Macpherson la denomina modelo de **democracia pluralista elitista de equilibrio**¹⁸, que se convertirá en el modelo de democracia liberal en general¹⁹.

Este es un modelo político para producir gobernabilidad, lo cual explica que en las perspectivas conservadoras se identifique gobernabilidad con democracia. Esta identificación también la hacen muchos de los críticos del neoliberalismo, no sólo en términos nominales sino también conceptuales: ven en cada conflicto un riesgo para la democracia, porque también a ella la ven como equilibrio. Las visiones hegemónicas actuales son una regresión, respecto incluso de perspectivas liberales como las de un Lipset²⁰, quien reconocía la democracia política como la forma regulada de procesar el cambio social, es decir, cuya estabilidad no se mide por la ausencia de conflictos sino por su capacidad para procesarlos institucionalmente, lo que implica reconocer la legitimidad de la representación de los distintos intereses existentes en la sociedad. Naturalmente que estas visiones de un liberalismo más democrático son sustituidas por las de un liberalismo muy conservador. Pero hasta el mismo Schumpeter advertía que el “método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social”²¹.

¿Por qué en América Latina se impone este modelo de democracia, desde los años ochenta, cuando la lucha contra las dictaduras y contra el autoritarismo civil ha tenido como protagonistas centrales a los movimientos populares y de izquierda? Hay una explicación en la naturaleza de la transición, que no supone la derrota de la derecha militar y civil, aunque

17 Joseph A. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942), Buenos Aires, Ed. Folio, 1972.

18 *La democracia liberal y su época, op. cit.*

19 Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia* (1988), México, Alianza, 1991. Dos tomos.

20 Seymour Martin Lipset. *El hombre político. Las bases sociales de la política* (1959), México, Rei, 1993.

21 J. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia, op. cit.*, p.378.

le obliga a un **aggiornamento** político al sustituir la represión abierta por la negociación para mantener la gobernabilidad. Con ese fin se acuñó –con el concurso de muchos intelectuales– la lógica de las **dos transiciones**: primero la transición política que daría la estabilidad necesaria para el crecimiento económico, y éste, por “derrama”, permitiría iniciar, en un momento indefinido, la segunda transición hacia la “democracia social”.

Ciertamente, en los primeros años hubo resistencias populares a la separación de democracia y bienestar social, aunque fueron progresivamente eliminadas con las transformaciones descritas arriba; pero hubo también una gran predisposición para aceptar esas nuevas reglas del juego político debido al trauma social sufrido con el terrorismo dictatorial. Los chantajes permanentes sobre recurrencias autoritarias, que fueron institucionalizados con las amnistías e impunidad a las fuerzas represivas, orillaron a la población a subordinar sus aspiraciones de igualdad a la conservación de la libertad. Y éste ha sido un método recurrente para neutralizar rechazos y conflictos.

Pero como la política es un fenómeno relacional, una parte central de la explicación está en las prácticas y concepciones políticas de los partidos de izquierda. Como es comprensible, el solo hecho de recuperar las libertades públicas y privadas fue un logro democrático trascendente, vital, que explica la subsunción inicial de toda consideración crítica acerca de las formas y contenidos de la democracia; en particular esto pesó mucho en las dirigencias de izquierda, que después de haber sido el objeto central del terror de Estado, fueron muy sensibles a la percepción de ser tratados como pares en el sistema político. Ello no justifica, empero, que el cambio de su situación lo procesaran con un sentido autorreferido que terminó, en muchos casos, en irresponsabilidad social y política: falta total de crítica sobre las reglas del juego que se le impusieron como condición para su incorporación al sistema político; confusión sobre el alcance de cada conquista de espacios institucionales que, siendo muchas veces para los grupos dirigentes, se percibieron e hicieron percibir como avances del pueblo. La izquierda no entendió nunca que esas reglas del juego exigían que transformara sus liderazgos (de amplio reconocimiento social) en conducta elitista, es decir, que formaran parte de los pequeños grupos de líderes políticos que deciden por sí y ante sí a nombre de la sociedad.

La izquierda sucumbió a estas prácticas por sus propias debilidades conceptuales, entre otras, la de no comprender la diferencia que hay

entre ser una izquierda que actúa en el parlamento o ser una izquierda parlamentaria, o dicho de otro modo, entre ser la izquierda *en* el sistema o la izquierda *del* sistema. Pero también porque sucumbió a la coerción chantajista de la derecha que sancionó como “bloqueos a la democracia” todo aquello que no implicara un consenso en torno a sus propios intereses, al tiempo que llevó a cabo cooptaciones elitistas vía privilegios, a las que fueron sensibles muchos políticos de izquierda.

La adopción de esas visiones y conductas políticas fue haciéndose más evidente conforme la izquierda comenzó a crecer electoralmente en la década de los noventa, una coyuntura histórica que no supo interpretar. El impacto social de la segunda generación de ajustes neoliberales, más profundos que los de las dictaduras en términos de empobrecimiento social y más permanentes por su institucionalización con la reforma del Estado, conmovieron a una población desarmada para su defensa clasista frente al capital, que buscó por la vía electoral el cambio, votando a la izquierda.

Por primera vez ésta llega a gobernar²² en numerosos municipios, incluidas varias capitales, con lo cual ingresa a un escenario inédito y muy contradictorio para los partidos, que quedan disociados entre un parlamentarismo tradicional y un accionar innovador como gobierno comprometido con la gente y sus problemas. Éstas son experiencias muy positivas en términos de democratización de las relaciones gobernantes-gobernados, en los contenidos sociales de las gestiones y en sus esfuerzos para promover la participación colectiva (al mismo tiempo que ésta es desalentada por los partidos). Con diferentes grados de avance y consolidación, estas gestiones producen mejorías en la calidad de vida urbana y en servicios sociales, aunque, por sus esferas de competencia, los cambios producidos a nivel local no alcanzan a modificar los problemas socioeconómicos fundamentales de una población que sigue empobreciéndose. Aunque son procesos de avance democratizador de indudable importancia por su potencialidad para la recomposición relacional y valórica del tejido social y de la fuerza política popular, están limitados por el desempeño

22 Analizo estas experiencias en “La izquierda, el gobierno y la política. Algunas reflexiones” (en este volumen). Las tendencias generales que se analizan contemplan las diferencias y matices de experiencias de cada país, la naturaleza de la fuerza política y electoral de cada uno, las historias nacionales y estatales, el desarrollo orgánico y político de cada partido, etcétera. Las especificidades no afectan las generalizaciones, lo que dice de la fuerza de penetración de estos cambios en concepciones y conductas.

político de los partidos, en una suerte de contradicción perversa: para profundizar los cambios iniciados como gobiernos se necesita seguir ganado elecciones, y para lograrlo la izquierda sucumbe a las prácticas de la política como mercado. Lo que conlleva su desperfilamiento programático y una proclividad a sofocar las luchas populares para evitar que deriven en conflictos. El objetivo de ganar fuerza electoral bajo esas reglas del juego le produce pérdidas de fuerza social y política real, lo que en ocasiones la lleva a perder lo conquistado como fuerza electoral o, en el mejor de los casos, le impone techos a su crecimiento.

La mimetización de la izquierda como partido sistémico, y la constatación de que una mayor presencia en los ámbitos institucionales (gobiernos, parlamento) no conduce a mejorar las condiciones de vida, provoca el desencanto de vastos sectores populares hacia la política institucionalizada, no como apatía sino como rechazo activo; lo que incluye juicios muy críticos a los partidos de izquierda con representación electoral.

Entre la frustración y las expectativas de cambio coyunturales, el sistema representativo tiene una credibilidad inconstante, pero con una franca tendencia en declive. Son los signos críticos de la democracia gobernable.

La crisis de la democracia gobernable

Los primeros en advertir un escenario de crisis fueron los sectores dominantes a mediados de la década pasada. El primer síntoma de que el modelo político tenía problemas es el rechazo a los partidos de la derecha mediante la opción electoral por la izquierda. El abstencionismo electoral, que en América Latina nunca descendió en promedio del 50 por ciento y que es el producto funcional de las estrategias de gobernabilidad, sólo se abate cuando la izquierda aparece como opción, haciendo peligroso el juego de exclusión social con inclusión electoral.

Para recomponer la imagen de sus gobiernos y partidos²³ la derecha trata de compensar el desprestigio de las “instituciones democráticas” con acciones puntuales contra la corrupción y el “crimen organizado”,

²³ Que es diagnosticado, por ejemplo, en varias de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes y Jefes de Gobierno, como la de Viña del Mar (Chile) en 1996 y la de la isla Margarita (Venezuela) en 1997.

encarcelando a varios políticos y uno que otro oficial del ejército (el uso patrimonial del Estado que requiere el neoliberalismo es obviamente la causa, aunque es intocable); también se hacen algunas reformas al Poder Judicial para reforzar su imagen de independencia.

Pero el desprestigio de la política y las instituciones corre paralelo al de las políticas económicas. Son más bien éstas las que caracterizan a las críticas crecientes al neoliberalismo (hay más críticas al modelo económico que al modelo político), que se expresan en los debates como necesidad de alternativas.

Para enfrentar el desprestigio del “modelo”, la derecha exhibe una notable iniciativa para elaborar un discurso renovado con el que trata de apropiarse de las críticas al neoliberalismo, de modo de refuncionalizarlas como aceptación al capitalismo. Con ese fin crea nuevos “centros de opinión” (*think tanks*)²⁴ para vanguardizar las “alternativas”, que aparecen cuestionando los excesos del mercado y su incapacidad para resolver las “externalidades” que produce, como la pobreza, a partir de lo cual convoca a una participación más activa del Estado en políticas focalizadas para combatirla. Para esas políticas, *lo local* y las ONG son espacios y herramientas privilegiadas²⁵. Los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, BID, FMI y hasta la misma OCDE) dedican sus informes a convertir estas “inquietudes” en recomendaciones oficiales²⁶. Todo ello con el concurso permanente de la socialdemocracia europea: primero la española y luego la inglesa, que le da forma de programa político con su Tercera Vía²⁷. Más recientemente, economistas y juristas conforman la corriente del *neoinstitucionalismo*²⁸, que propone reformas a las instituciones formales

24 En 1996 se crea el *Círculo Montevideo* y aparecen varios grupos de ex presidentes e intelectuales latinoamericanos trabajando en este sentido.

25 Véase, por ejemplo, el informe de la Primera Conferencia Interamericana de Alcaldes “Camino para el desarrollo de la gobernación municipal”, convocada por el Banco Mundial, la OEA, el BID y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), en noviembre de 1994.

26 Sólo por citar uno de entre tantísimos, mencionemos el último de la OCDE *Desarrollo más allá de la economía. Informe 2000, Progreso económico y social en América Latina*.

27 Véase Anthony Giddens. *La Tercera Vía*. México, Oikos, 1997.

28 Entre varios, véase, por ejemplo, de René Villarreal “Hacia una economía institucional de mercado”, y de Pieder Könz “Estado de derecho para el desarrollo sostenible: reflexiones sobre la brecha institucional latinoamericana”, publicados

e informales para garantizar el buen funcionamiento del mercado sin modificar las políticas macroeconómicas.

Otro signo de crisis sobre el que advierte la derecha, es lo que denomina “el crecimiento de la democracia antiliberal”, o lo que algunos intelectuales han llamado las “democracias delegativas” en alusión a nuevos caudillismos políticos que diluyen el papel del sistema de partidos; inadmisibles, pues, según los ideólogos de la gobernabilidad, las élites partidarias deben ser las únicas depositarias de la delegación de las decisiones. Como se sabe, las alharacas a propósito de la reelección de Alberto Fujimori en Perú se esfumaron tan pronto como demostró que su fundamentalismo era neoliberal y pronorteamericano, lo mismo que Carlos Menem en Argentina. En realidad, fueron el ascenso político y la elección de Hugo Chávez en Venezuela lo que desató las más furibundas diatribas de la derecha, pues no sólo se desestructura el sistema tradicional de partidos, sino que se hace con un proyecto social y político antineoliberal. No es la institucionalidad representativa la que realmente les preocupa, que en Venezuela se consagra en la nueva Constitución, sino que la representación política reintegre la dimensión económico-social.

En años recientes hay un cambio cualitativo en la crisis de la democracia gobernable: el modelo político es cada vez más ineficaz como instrumento de control sobre la recomposición sostenida de las luchas populares que se observa actualmente en todos los países. Lo que comienza como crisis de credibilidad, empieza a ser percibido como crisis de dominación. Un indicador de esto es el recurso cada vez más frecuente de la represión abierta como mecanismo de gobernabilidad.

Puede parecer extraño que sea ahora que la derecha perciba riesgos a su dominación mayores que cuando la izquierda empezó a conquistar gobiernos. Pero es comprensible a la luz de los efectos contradictorios que tuvieron los triunfos electorales de la izquierda. Obviamente, significaron una pérdida política para la derecha al reducirle los espacios e instrumentos de patrimonialismo estatal, necesario tanto para el mantenimiento de privilegios económicos como para la cohesión clientelar de sus apoyos. Por ello reacciona con vehemencia con todo tipo de bloqueos financieros,

por el boletín electrónico del Instituto de Investigaciones sobre la Gobernabilidad del PNUD, julio 2000.

políticos e institucionales, y arremete con estructuras corporativas mafiosas contra los gobiernos de izquierda, cuya resistencia y logros en estas parcelas estatales son una verdadera hazaña.

Sin embargo, el peligro de avance de la izquierda disminuye si ésta funciona bajo las reglas del juego del sistema –como ha ocurrido– o si su gestión gubernamental se concreta a ser una administración honesta y eficiente. Porque ello no es condición suficiente para que esas cualidades se proyecten en una mayor fuerza política, lo que depende de todo su accionar político. Se equivoca el estructural-funcionalismo cuando establece una correlación mecánica entre eficiencia y legitimidad. De hecho, en todos los países donde gobierna la izquierda, gestiones honestas y eficientes no fueron suficientes para generar la fuerza necesaria para enfrentar las políticas económicas y sociales más regresivas, y sus logros no siempre pudieron contrarrestar los rechazos políticos cosechados por el tradicionalismo de sus partidos; tampoco han garantizado fuerza electoral, que se ha perdido o ha alcanzado techos a su crecimiento.

Para la derecha, lo más preocupante es que la integración de la izquierda al sistema no redunde en el control de los conflictos sociales. Muchas de las luchas populares emergen hoy al margen de la convocatoria política de los partidos de izquierda, e incluso en reacción contra ellos por sus prácticas políticas. Empieza a configurarse una izquierda no partidaria con bastante capacidad de convocatoria social que está por fuera de la influencia del liderazgo político de los partidos, aunque en esas luchas participan muchos de sus militantes de base.

Son un factor importante de enfrentamiento a los intereses dominantes, aunque debe señalarse que la enorme energía social que se observa puesta en movimiento en la región todavía no logra condensarse en una fuerza política de magnitud equivalente, por los grados de dispersión que aún existen entre muchas de esas luchas y por la desarticulación de ellas con las de los partidos. No obstante esas deficiencias, la recomposición popular es un proceso innegable y ascendente. Son las luchas estudiantiles en defensa de la Universidad pública, como en México, Brasil, Argentina, El Salvador o Nicaragua; que se vinculan con las de pobladores y trabajadores contra la privatización de los recursos naturales, como en Cochabamba (Bolivia), Costa Rica y El Salvador; o con las de los empleados públicos y otros sindicatos, como en Brasil, Colombia, República Dominicana y Uruguay; de

desempleados junto a pobladores, como las de varias provincias argentinas; luchas de asalariados rurales y campesinos, como en Brasil, Bolivia, Paraguay y Honduras; movimientos indígenas, como en México, Ecuador y Chile; movimientos por la soberanía territorial, como en Vieques (Puerto Rico) y Panamá. Son acciones que empiezan a vincularse continentalmente, como el movimiento que se está gestando contra la agresión imperialista del *Plan Colombia* o como el Grito de los Excluidos; algunas tienen proyección internacional, como las de los sindicatos de empresas transnacionales o como las de los trabajadores de las maquiladoras nicaragüenses con la Federación Mundial de Sindicatos Textiles y, en una dimensión más amplia, con movimientos de los países centrales, como los de Seattle, Washington, Davos y Praga contra los organismos financieros internacionales.

El nuevo escenario transforma las estrategias de gobernabilidad de la derecha. Las prácticas de control con legitimidad por medio de la democracia gobernable van siendo desplazadas con las de la represión directa, con el ejército y la policía en la calle. Pero también se reprime por medio de la institucionalidad, con un papel destacado del poder judicial, en lo que se ha denominado la *judicialización de la represión*. A los estudiantes en huelga se les reprime bajo cargos de *despojo de bienes públicos* y *peligrosidad social*, como ocurrió con el Consejo General de Huelga de la UNAM en México, y se pretende hacerlo en este momento como *despojo* contra los estudiantes secundarios en Uruguay. Se les imputa el delito de *turbación de la posesión* a los desempleados de Mar del Plata (Argentina) que hacen un plantón en la Catedral y también de *despojo* al de las enfermeras en la plaza principal de la ciudad de Monterrey (México). A las huelgas sindicales se les derrota poniéndolas fuera de la ley, como a la de la Volkswagen de México, y también con el concurso judicial se ha buscado desarmar la lucha de los Sin Tierra en Brasil. Son *atentados al orden público* las manifestaciones callejeras, y *asonadas* los bloqueos de carreteras.

Que el Estado de derecho sea utilizado como arma de represión y para excluir del espacio público a los sectores populares, no debe llamar a sorpresa. Atribuir a priori al Estado de derecho una moralidad de justicia es caer en la lógica del derecho natural. Toda legalidad que se aplica como obligación civil es Estado de derecho, aunque sea profundamente autoritaria y socialmente injusta, y por lo tanto, como todas las prácticas institucionales, debe ser un objetivo de transformación democrática. Que ese proceso pase por

exigir el cumplimiento de las libertades y derechos públicos e individuales que se han visto obligadas a reconocer las Constituciones liberales para universalizar una dominación particularista (lo cual ha ocurrido siempre que los desiguales han reclamado su situación), es parte de la dialéctica de la lucha política.

Perspectivas y desafíos

Lo primero que salta a la vista es cuán poco le duró el *aggiornamento* político a la derecha. Basta comparar los discursos de algunos de sus personajes para ver cómo vuelven por sus fueros: los *enemigos* convertidos en *adversarios* de nuevo son *enemigos*. No son veleidades ni falta de “voluntad política”, es su conciencia capitalista dominante. La democracia liberal le sirve si da estabilidad política a los intereses capitalistas, que en América Latina quiere decir explotación y ganancias salvajes. Si no, es un instrumento desechable. Y ésta no es una constatación de última hora, es una historia tan antigua como el liberalismo y la contradicción entre capitalismo y democracia.

Como ha sido siempre, la democracia es una conquista y una construcción popular. A la izquierda latinoamericana le ha faltado una visión madura y dialéctica para enfrentar la muy compleja relación entre *institucionalidad* y *cambio*. Si las instituciones de la democracia liberal le han permitido una acción política con resguardo legal, lo que abre un conjunto de posibilidades para su desarrollo, también la constriñen a una legalidad y a unas reglas del juego que obstaculizan el cambio, pero que quedan legitimadas con la propia participación de la izquierda en esos ámbitos institucionales. Simultáneamente, en cuanto esas mismas instituciones hacen de las libertades individuales y públicas un derecho jurídico que debe preservarse, para hacerlo se debe confrontar a quienes, para mantener los privilegios reconocidos legalmente, están dispuestos a negar esa legalidad.

La disyuntiva no está entre resignarse a participar en las instituciones bajo sus reglas del juego y quedar integrado al sistema, o simplemente negar toda participación institucional. Se debe participar en las instituciones, porque si no existen las condiciones históricas para negarlas y construir otras con fines y propósitos realmente emancipatorios, es necesario tratar de transformarlas en su existencia actual, pero tomando en cuenta lo que

decía Gramsci: “Si se admite que con cualquier actitud que se adopte se le hace siempre el juego a alguien, lo importante es buscar por todos los medios de hacer bien el propio juego, esto es, de vencer netamente”²⁹.

“Hacer bien el juego de uno” comienza por comprender que la política no se origina en las instituciones, sino que, por el contrario, ellas la expresan y la reproducen, son una resultante de fuerzas. Del mismo modo que son una expresión de fuerza política los valores que amalgaman a las instituciones. Darle una direccionalidad democratizadora a la práctica institucional, reformarla en un sentido democrático, requiere fuerza. Y lo sustantivo de esta fuerza se genera fuera de las instituciones formales de la democracia representativa, aunque desde allí pueda reforzarse.

Es esa construcción de la fuerza política necesaria para democratizar nuestros países, lo que da sustancia a la noción de democracia como medio. La transformación institucional es, al mismo tiempo, la transformación de las relaciones sociales y políticas que le dan origen. Dicho de otro modo, la lucha por la democracia es una lucha de poder en todos los ámbitos donde éste se origina, se ejerce y reproduce: en la contradicción capital-trabajo; en las configuraciones, las prácticas y los fines de las instituciones del Estado, entre las que se incluyen las que por medios formales y no formales procesan las relaciones políticas como fenómeno público (sistema político); en los ámbitos de creación y socialización de ideas y valores que condicionan las conductas sociales, con sus instituciones formales y no formales, que van desde las educativas, la producción teórica y artística, los medios de difusión y las iglesias, y hasta las mismas prácticas económico-sociales que poseen una función ideológica fundamental. La lucha democrática en todos estos ámbitos e instituciones adopta formas específicas como lucha política, pero no están escindidas. No entenderlo así es un signo de subalternidad. En esa comprensión la derecha lleva mucha ventaja.

La izquierda ha conquistado mayores espacios para influir democráticamente desde las instituciones, hecho enormemente positivo. La fuerza electoral de la izquierda, sin embargo, no es equivalente a su fuerza política, y éste es también su desafío para convertir los espacios institucionales en escenario para el cambio; esto sólo es posible si se confronta a la derecha

29 Antonio Gramsci, “El partido político”, en *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. México, Juan Pablos Eds., 1975, p.50.

y se le disminuye su fuerza, también, incluso, para defender a las instituciones representativas de sus reacciones liquidacionistas.

Cualquier avance realmente democrático hace presumible escenarios cada vez más conflictivos y respuestas represivas. Si por evitar estas reacciones no se enfrenta a la derecha, la violencia de todos modos estallará como efecto de la desesperación de la gente ante la violencia cotidiana a que está sometida con su miseria. Lo único que puede disminuir la violencia antidemocrática de los dominantes y preservar los espacios de libertades conquistados para avanzar sobre otros, es la fuerza con que cuente el pueblo. No es una disyuntiva entre pesimismo u optimismo, es el único realismo posible.

En América Latina, éstos son hoy los términos de la disputa democrática, como fin y como instrumento de cambio opuesto al instrumentalismo conservador dominante: un proyecto de poder, de gestación de fuerzas sociales y políticas para construir igualdad social. Un proyecto democrático supone claridad analítica y construcciones sociales. No se empieza de cero y existe una enorme potencialidad, pero que para ser transformada en realidad acusa demasiadas insuficiencias en ambos requisitos. Estos son los retos actuales de la izquierda, si ésta es coherente con su papel histórico de fuerza emancipadora.

El desprestigio de la política: lo que no se discute (2002)*

El problema

Casi es un lugar común reconocer el desprestigio actual de la política, de los partidos y de los políticos. El fenómeno es común a toda América Latina a pesar de las diferencias observables en las realidades políticas entre los países. Una primera manifestación de este desprestigio es el rechazo al elitismo político, que se expresa en afirmaciones como “todos los políticos son iguales”, “se representan a sí mismos”, “no luchan por ideas sino por prebendas”, “se han alejado de la gente”. Hay en estas expresiones de rechazo un fuerte componente ético, que descalifica a los políticos de manera personal y, por extensión, a la política en general.

Es un cuestionamiento compartible ante el cual no cabe la neutralidad, entre otras razones, por las trágicas consecuencias políticas que tiene. Pero cuando nos encontramos ante un fenómeno de tal grado de generalidad, la personalización del mismo no basta para explicarlo, y menos aún para tratar de transformarlo. Es necesario llegar a explicaciones sólidas que vayan más allá de las enjundias descriptivas con que se plantean las críticas actuales.

Cabría preguntarse si es algo verdaderamente novedoso que existan en América Latina prácticas políticas como las que hoy se cuestionan. La respuesta es negativa, pues entre el sector mayoritario de la clase política latinoamericana éstas han sido sus prácticas habituales. La historia de los partidos tradicionales en América Latina ha sido la de la manipulación clientelista, los acuerdos cupulares entre las fracciones dominantes

* Publicado en *Política y Cultura* núm.17, México, Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, primavera (abril) 2002. Y en *Ciencia Política* núm.1, Bogotá, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, enero-junio 2006.

y la demagogia y, con escasas excepciones, la del enriquecimiento personal o empresarial a partir de los cargos públicos. Hoy hay un mayor cuestionamiento a estas prácticas políticas tradicionales por dos razones: primera, porque se impuso la idea de que ellas eran achacables a los “populismos”¹ latinoamericanos y que sólo con la modernización liberal de los sistemas políticos serían eliminadas, lo cual no sólo no ocurrió sino que se agravó; segunda, porque la política tradicional se amparaba en políticas estatales desarrollistas que realizaban una relativa distribución del ingreso, sobre todo a los sectores medios urbanos, que atemperaban la percepción de la política institucional como botín de una élite, como hoy se la percibe.

El desprestigio de los partidos puede vincularse a la crisis de representación que éstos tienen respecto a los intereses de vastos sectores de la población latinoamericana; y esto ocurre, precisamente, cuando se han generalizado en la región los sistemas representativos liberales, identificados como *la democracia*, pero que son funcionales a la reproducción de un capitalismo cada vez más explotador y excluyente.

Lo novedoso es que un componente de la modernización neoliberal de los sistemas políticos sea la creciente presencia en ellos de varios partidos de izquierda, que llegan a ganar elecciones de gobiernos locales y a aumentar considerablemente sus representaciones parlamentarias. La izquierda gana elecciones porque amplios sectores cuestionan al neoliberalismo pero, paradójicamente, esta izquierda desarrolla su representación de intención crítica bajo las reglas del juego que garantizan la estabilidad política de la reproducción capitalista neoliberal.

Los éxitos del sistema dominante en inducir la integración de varios de estos partidos de izquierda a sus concepciones y reglas del juego, ya sea como vocación o prácticas parlamentaristas, hacen que el rechazo se haga extensivo a los de izquierda (“todos son iguales”). Y tal vez éste sea el componente más irritante y frustrante para amplios sectores de la propia

1 Uso el entrecomillado porque la prédica de la derecha liberal oculta que el populismo ha sido una política burguesa de alianzas policlasistas con las cuales encaró la lucha antioligárquica de las primeras décadas del siglo XX y la modernización capitalista desarrollista que le siguió. El capitalismo actual no admite dichas alianzas con fracciones populares y por eso los neoliberales construyen la leyenda negra del populismo como el horror plebeyo de izquierda al cual anatemizar, como su *alter ego*, cuando en realidad fueron ellos sus protagonistas directos. Nunca fue una política de izquierda en la región.

izquierda respecto de “la política”, por lo que toman distancia de los partidos con representación parlamentaria.

En los últimos años, estos sectores de izquierda no partidaria han comenzado a tener una presencia política importante y se han reorganizado en diferentes movimientos y organizaciones sociales, que se van cohesionando en torno a dos elementos comunes: su lucha contra el neoliberalismo y su negación de la política y de los partidos, en un plano de contradicción dicotómica entre lo social y lo político², al punto de que se habla de una “izquierda social” en contraposición a una “izquierda partidaria”.

Los rechazos de la primera a la segunda no constituyen todavía una crítica consistente, porque no logran superar los parámetros analíticos e ideológicos dominantes de la política. Se niega la política en general, a partir del supuesto de que esto que observamos hoy como la “política realmente existente” es su única forma de existencia posible. De igual manera, se niegan los partidos en general, a partir del supuesto de que “así son” los partidos. Es una visión ahistórica que hace tabla rasa de experiencias previas diferentes y que no se interroga por las causas de los cambios. La carencia de autocríticas serias sobre la crisis de la izquierda tras las derrotas políticas en la región, sobre las repercusiones de la crisis del llamado socialismo real, y sobre las verdaderas limitaciones teóricas por rectificar, abona que sean las críticas burguesas a los partidos de izquierda las que se impongan.

Lo que debe reconocerse es que, más allá de sus limitaciones conceptuales, el cuestionamiento a los partidos ha tenido un impacto considerable. En general, todos incorporan ese asunto en sus discursos. En el caso particular de los de izquierda, el acuse de recibo se acompaña de la constatación empírica del alejamiento político de amplios sectores de sus bases sociales tradicionales³. Pero tampoco esto está propiciando análisis autocríticos consistentes, fundamentados en una revisión profunda de sus concepciones sobre la política.

2 El distanciamiento entre los partidos de izquierda y las organizaciones sociales fue una constatación asumida en los debates del X Encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP), en La Habana (diciembre de 2001). El documento que el FSP envió al II Encuentro del Foro Social Mundial, en Porto Alegre (enero-febrero 2002), invitando a encarar la “socialización de la política y la politización de lo social”, expresa una sensibilidad que aún no se refleja en análisis teóricos y políticos equivalentes.

3 Esto se observa hoy en partidos como el de la Revolución Democrática en México (PRD), pero también está presente con otra intensidad en las discusiones del Frente Amplio (FA) de Uruguay, por mencionar algunos.

A lo sumo, entre los sectores partidarios más sensibles a esta problemática se hacen declaraciones en términos de *voluntad política* para buscar el acercamiento con los sectores sociales. Pero hay otros grupos de los mismos partidos que fundamentan su diagnóstico en retrasos en los procesos “modernizadores” encarados ya por los partidos, como si se necesitara aún “más de lo mismo”.

En estas falencias tanto en las críticas como en las autocríticas, lo que emerge es el enorme desconocimiento que hay entre la izquierda sobre lo que es el *liberalismo como proyecto político conservador de la burguesía en el poder*. Todavía se asocia el liberalismo fundamentalmente con las manifestaciones ilustradas y libertarias del discurso antioligárquico, enarbolado por algunos intelectuales y políticos, que quedó en el imaginario político latinoamericano como un pendiente histórico virtuoso. Y esto ha sido así, entre otras razones, porque en América Latina el liberalismo no ha sido el modelo político predominante hasta la década pasada⁴.

Antes de los años setenta, el sistema representativo liberal era excepcional: sólo en Chile, Uruguay, y en menor medida en Costa Rica, tuvo una existencia prolongada y con legitimidad social. En el resto de los países, la generalidad ha sido la de regímenes autoritarios dictatoriales o de tipo corporativo, o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que las elecciones y los parlamentos no eran más que una fachada republicana. Y por ello, en la mayor parte de la región, las luchas políticas de los dominados (y la conquista de libertades liberales) se desarrollaron al margen de las lógicas y prácticas representativas liberales: desde las guerrillas (anteriores a la Revolución Cubana, como en el caso colombiano, y más ampliamente después de 1959), a acciones políticas marginales y hasta formas corporativas.

Si para muchas izquierdas latinoamericanas la acción política en el marco de la democracia liberal es una experiencia inédita, las circunstancias actuales les plantean retos teóricos y políticos mucho mayores; pues se trata del modelo más conservador de democracia liberal, la *democracia gobernable*, cuya finalidad es la de administrar y legitimar políticamente el orden social más antidemocrático que haya tenido América Latina, con niveles de desigualdad social y regresiones excluyentes incomparables.

4 Analizo con mayor amplitud estas cuestiones en “Democracia gobernable: instrumentalismo conservador” (en este volumen).

La crisis de representación que acusan los partidos de izquierda tiene como trasfondo los cambios en la estructura social originados por el nuevo capitalismo, que ha modificado las formas de existencia de los grupos sociales que busca representar: la clase obrera industrial ha perdido peso específico en el mundo de los explotados; éste, además, está diversificado y disperso económica y socialmente; las diferenciaciones entre los sectores medios, así como la existencia de nuevos sectores afectados por el capitalismo neoliberal, replantean las alianzas sociales que definen el campo de *lo popular*.

No hay suficientes estudios que arrojen claridad en estas cuestiones, pero también hay bloqueos epistemológicos que impiden encararlas. Parte importante de la izquierda latinoamericana ha sucumbido a la hegemonía ideológica del liberalismo conservador, que ha transformado sus concepciones sobre la sociedad, el Estado, la política y la democracia, afectando sus objetivos y prácticas políticas.

Dadas las limitaciones de espacio, a estas últimas cuestiones dedicaré el análisis de este trabajo: cómo la adopción de las concepciones y prácticas políticas liberales ha facilitado la subordinación de la izquierda a las reglas del juego de la democracia gobernable, lo que condiciona su capacidad política de representar los intereses de los sectores sociales que demandan la transformación de la realidad actual.

Para aportar a una discusión en este sentido, se hace una breve reflexión sobre el *parlamentarismo* como una práctica política de integración a los objetivos dominantes en el marco de la democracia liberal; las transformaciones que el sistema representativo ha tenido en los distintos contextos capitalistas, con funciones de *mediación* en los períodos de expansión, o de *control* social y político cuando los objetivos de acumulación capitalista son antagónicos a la incorporación de intereses subalternos en las políticas públicas, como ocurre hoy en el marco de la democracia gobernable. A continuación se analizan las condiciones políticas específicamente latinoamericanas que dan lugar a la imposición de este modelo conservador de democracia, en el que participan los partidos de izquierda; los nuevos escenarios creados con el crecimiento electoral de estos partidos y los efectos contradictorios que les genera. Y se finaliza con una reflexión sobre algunas de las contradicciones contenidas en las críticas de izquierda a los partidos y la política.

La política como parlamentarismo

El parlamentarismo alude a dos fenómenos distintos en el modelo político liberal: a una forma de gobierno, y, también, a una concepción y prácticas que acotan la política al ámbito institucional, bajo reglas que garantizan que la representación de intereses diversos no ponga en riesgo la dominación capitalista.

En América Latina, un dato de la hegemonía liberal es el grado en que la mayoría de los partidos que participan en el sistema representativo aceptan las premisas en las que se fundamentan las concepciones parlamentaristas. Entre ellas pueden señalarse, por ejemplo: a) la idea de que el Estado es una unidad homogénea, producto de un pacto social entre iguales (ante la ley y como propietarios libres en el mercado), cuando el Estado es la cristalización institucional de relaciones de dominación entre desiguales; y que sólo se aproxima a una representación más vasta de la diversidad social cuando los dominados logran imponer sus intereses en el ámbito público; b) la idea de que sólo se realiza política a través del parlamento cuando, en realidad, *política* es toda forma de confrontación de fuerzas por ampliar el poder propio y disminuir el de los otros, lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida social; c) la idea de que la política significa consenso, cuando en una sociedad de clases (y con el grado de desigualdad de fuerzas a favor del capital como hoy existe en la región), el consenso sólo puede ser resultado de la subordinación voluntaria de los dominados; d) la idea de que la única función de los partidos es la de ser el vehículo para la selección de las élites que establecerán el consenso en el ámbito institucional, en lugar de concebir a los partidos como instrumentos de gestación de fuerza política en todos los ámbitos de la vida social; e) o la idea de que la democracia sólo tiene por finalidad formar gobiernos a través del sistema representativo y administrar en el sistema político las relaciones de poder existentes sin modificarlas, en lugar de concebir la democracia como un proceso de ampliación de las capacidades de decisión de la mayor parte de la sociedad, lo que implica como punto de partida y punto de llegada (en perpetuo discurrir) una mayor igualdad social.

Desde finales del siglo XIX, estas concepciones contrapuestas marcan el debate político sobre las posibilidades que tienen los sectores explotados y dominados de incidir en las instituciones de un Estado que condensa el poder de clase de la burguesía. Una perspectiva histórica de largo aliento

señala límites indudables en ese sentido. Hay ricas experiencias que indican que es posible que los sectores dominados puedan hacer valer su fuerza social y política, de manera independiente, para transformar las instituciones en términos que les sean más favorables para avanzar en objetivos democratizadores, es decir, de mayor igualdad social. Pero también hay experiencias históricas que indican que, en los límites, la burguesía ha solido destruir las instituciones de participación política legal de los dominados.

Los procesos políticos tienen una dialéctica que depende de las circunstancias y de la relación de fuerzas entre los actores. Sin embargo, la perspectiva histórica tiene importancia estratégica porque establece parámetros de previsión de posibilidades. O, al menos, permite objetivar las formas de dominio ideológico encubiertas tras el pragmatismo. Esa perspectiva histórica es la que puede contribuir a observar en el parlamentarismo algunas causas consistentes del desprestigio de la política.

Parlamento sin democracia

El parlamentarismo surge a finales del siglo XVII en Inglaterra, como un modelo de organización estatal basado en la división de poderes y en una creciente injerencia del parlamento sobre la función de gobierno, que le permite a la burguesía en ascenso limitar el poder absolutista, así como establecer formas de alianza y negociación con las fracciones propietarias aristocráticas que están en un franco proceso de aburguesamiento. Es un modelo de régimen estatal que permite la conciliación de intereses propietarios y la estabilidad política requerida para la expansión capitalista.

El parlamento funciona inicialmente sólo como un factor de contrapeso al poder monárquico en el Ejecutivo y, en un proceso posterior, interviene de manera directa en la administración del gobierno mediante la elección del primer ministro. En esta forma de organización estatal, los partidos tienen por única función ser el vehículo de acceso al manejo de la cosa pública (que tardará un siglo en ser bajo la forma de república), a través del parlamento. Son partidos exclusivamente de propietarios, de los grupos dominantes, pues sólo éstos constituyen la sociedad política⁵.

5 Sólo en el interregno jacobino de la Revolución Francesa (1792-1795), la exclusión

Este modelo de Estado parlamentario *no democrático* es el Estado liberal que logra imponerse hasta finales del siglo XIX. La “república parlamentaria” francesa se instaura sobre la derrota y masacre de los obreros que se levantaron en 1848 contra la monarquía de Luis Felipe. La II República se libera de todo vestigio real o simbólico de la “república social” y, en el parlamento, las fracciones burguesas comparten la administración política del Estado, dejando atrás sus diferencias doctrinarias: liberalismo y conservadurismo se fusionan en “el partido del orden”⁶ de la burguesía expansiva. Ni el golpe de Luis Bonaparte elimina esa función del parlamento que, desde entonces –al decir de Guizot– es identificado como “la democracia”⁷.

La idea de que el parlamento es el ámbito de la política por excelencia procede de la antigua idea liberal del Estado como contrato, desde Hobbes y Locke. Así, el Estado es el producto de un consenso social que se materializa en las leyes, que son el ámbito de la soberanía; en el parlamento, la sociedad política renueva y perfecciona el consenso. Puesto que se parte de la noción de que la sociedad está constituida por individuos iguales ante el Estado, el consenso presupone la homogeneidad de intereses, lo que, en efecto, era

política de los sectores no propietarios (ciudadanos pasivos) impuesta por la democracia censitaria disminuye con la incorporación de los varones no propietarios mayores de 35 años. En Inglaterra, recién en 1832 hay una primera reforma política, pero es hasta los años sesenta de ese siglo en que ésta realmente significa alguna apertura representativa. John Stuart Mill es uno de sus exponentes. Véase *Consideraciones sobre el gobierno representativo*, México, Gernika, 1991.

- 6 Las ilusiones parlamentaristas de la pequeña burguesía socialdemócrata de la Montaña, que cede a la presión del *partido del orden* en términos de desmovilizar sus fuerzas y sus alianzas con los sectores populares, lo que permite que aquél la desbanque, es lo que lleva a Marx a hablar de “cretinismo parlamentario”: “... aquella peculiar enfermedad que desde 1848 viene haciendo estragos en todo el continente, el *cretinismo parlamentario*, enfermedad que aprisiona como por encantamiento a los contagiados en un mundo imaginario, privándoles de todo sentido, de toda memoria, de toda comprensión del rudo mundo exterior ...”. En “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, *Obras Escogidas*, Moscú-México, Editorial Progreso-Ediciones de Cultura Popular, s.f., p.148.
- 7 Conservador antidemocrático militante, Guizot reconoce en el parlamento un instrumento útil para garantizar el “orden” y alejar el “caos” de los movimientos democratizadores populares. Véase *De la democracia en Francia* (1849), reproducido en *Lecturas básicas de Historia y Sociedad*, UAM-Xochimilco. Carl Schmitt lo señala como el principal defensor del parlamentarismo a mediados del siglo XIX. Lamentablemente, no localicé el texto de Guizot *Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe*, que cita Schmitt en *Sobre el parlamentarismo* (1926), Madrid, Tecnos, 1996, p.43.

empíricamente demostrable en un parlamento en el que sólo estaban los grupos dominantes.

En el siglo XIX, la unidad abstracta del Estado (Hegel)⁸, que el parlamento representa, tiene como principio de homogeneidad a la nación, esa entidad que se construye desde entonces y da fundamento al Estado liberal. El sistema representativo es, por lo tanto, el que realiza políticamente a la nación⁹. La delimitación del Estado nacional coincide con la asignación de la ciudadanía política como un atributo de inclusión-exclusión de la nación frente a los otros Estados.

En cualquiera de esas fundamentaciones, la sociedad civil (individuos aislados iguales ante la ley) se transforma en un ente público, político, sólo a través del parlamento, el *locus* exclusivo de la política. Mediante el sistema representativo, los partidos son el vínculo entre esa sociedad (de intereses homogéneos) y el Estado (unidad suprema de esos intereses). He aquí el fundamento del *parlamentarismo* como *concepción de la política* (y no sólo como forma de Estado). Del principio de homogeneidad se deduce el principio de la política como *intercambio de opiniones* solamente, nunca como conflicto de intereses. Despojada por la teoría liberal de cualquier connotación social, y establecida como materialización de la unidad nacional, la política es también transformada en una esfera autónoma que sólo existe en el Estado.

Parlamentarismo como mediación

Desde las últimas décadas del siglo XIX, y particularmente a partir de 1918, cuando los enormes partidos obreros europeos conquistan el sufragio universal (masculino), la democracia representativa se transforma en un fenómeno de masas y pluriclasista, introduciendo inéditos desafíos a la dominación burguesa: la necesidad de *mediaciones*.

A la burguesía la obliga a aceptar en el ámbito público algunos intereses de los dominados, lo cual multiplica la potencialidad política de estos sectores. Pero, al mismo tiempo, la burguesía logra someter a los

8 Cfr. Los comentarios de Regis de Castro Andrade, "Sociedad, política, sujeto: variaciones sobre un viejo tema" en Norbert Lechner, *Qué significa hacer política*. Lima, DESCO, 1982.

9 Véase John Stuart Mill, *op. cit.*

partidos obreros a los valores y reglas del sistema político, consumando su integración al mismo. Con ello se liquida su peligrosidad anticapitalista.

Las formas de mediación son siempre instrumentos para reproducir la dominación, legitimándola ante fuerzas contrarias importantes. Pero, al mismo tiempo, esos espacios de mediación posibilitan la participación de los dominados. Si ésta es independiente política e ideológicamente, la democratización que resulta de la mediación forma parte del desarrollo autónomo de los dominados, hasta generar contradicciones insalvables para la dominación. Pero si se hace de manera subordinada, no obstante las conquistas económicas o sociales que se obtengan, la dominación se refuerza. Éste es el complejo campo de contradicciones y posibilidades políticas que hace a la democracia liberal, y que coloca desafíos ineludibles para los sectores dominados.

Tras su ruptura con los marxistas, y al calor de las reformas sociales que conquistan en el parlamento, los partidos de la II Internacional se asimilan a la lógica del parlamentarismo. Parten de la premisa de que el crecimiento económico y la disposición del capitalismo para distribuir parte de los excedentes (los dos fundamentos del consenso parlamentario) son la naturaleza misma del sistema¹⁰. En aquel entonces la expansión económica lo permitía, aunque cincuenta años más tarde se comprobaría que la distribución del ingreso no es consustancial al capitalismo. Las reformas sociales, como mecanismo de mediación, le permiten al Estado recomponer su unidad con la inclusión de esos intereses subordinados y convertirlos en derechos (universales por definición), con lo cual el parlamento se consagra como el símbolo del interés nacional. Y nacionalistas se hacen los partidos obreros. Son estas regresiones políticas las que cuestiona Rosa Luxemburgo, y no un rechazo genérico a toda reforma¹¹.

Al calor de las reformas y de los notables crecimientos electorales de los partidos socialdemócratas, aparece un fenómeno realmente nuevo: la competencia por los electores. Ésta provoca cambios en todos los partidos, tanto en sus plataformas políticas como en sus estructuras organizativas,

10 Véase de Eduard Bernstein, *Socialismo evolucionista. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*. S.l., Fontamara, 1972.

11 Rosa Luxemburgo, *Reforma o revolución* (1899). México, Grijalbo (Colección70), 1967. La dicotomía entre reforma y revolución, que años después caracteriza a algunas posturas de izquierda, es producto de una vulgarización descontextualizada de aquella discusión.

acompañados de una progresiva burocratización (aunque ello no afecta aún la función mediadora de los partidos). A partir de la agregación de intereses sociales diversos, los partidos burgueses se hacen nacionales; concomitantemente, crean estructuras organizativas permanentes para enfrentar a las poderosas organizaciones obreras. Por su parte, estas últimas les disputan a la clase media y la pequeña burguesía, para lo cual tienden a diluir el carácter clasista inicial de sus programas.

Estas grandes estructuras exigen la profesionalización de los políticos y la búsqueda de financiamiento por el Estado. Tras esta “conquista”, todos se transforman en partidos estatales, que reciben parte del presupuesto público; y con ello, crece la pérdida de independencia de los partidos obreros.

Mientras éstos conservan su implantación clasista en los sindicatos, la burocratización del partido no se traduce aún en un desprendimiento elitista de sus representantes. Max Weber, quien reconoce en el parlamentarismo un instrumento útil para la integración política a los objetivos capitalistas, lamenta el peso de clase que aún tiene el accionar parlamentario del partido obrero alemán, puesto que todavía son las “maquinarias partidarias” las que determinan los candidatos y sus programas. Su intención política no puede ocultarse, ni siquiera con el argumento aristocratizante en el sentido de que, con esos “simples” obreros, el parlamento dejó de ser la “galería de talentos” que una vez fue como fiel representante del *orgullo del ser alemán*. En 1918, Weber ya se había declarado liberal¹².

En realidad, es Robert Michels¹³ quien deduce la burocratización y elitización de los partidos obreros del parlamentarismo en sí, y no como un simple reflejo de la burocratización del Estado, como plantea Weber. La formulación de su famosa *ley de hierro* de la oligarquización inevitable de las organizaciones se encuadra en ese contexto de la política parlamentaria¹⁴. A la que, por cierto, ve con ojos críticos por la desnaturalización que produce en el partido obrero alemán, al que todavía pertenece. Y en buena medida

12 Max Weber, “Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y los partidos” (1918) En *Escritos Políticos*, Madrid, Alianza, 1991.

13 Robert Michels, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* (1915) dos tomos, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

14 La elitización de los sindicatos también es producto de los consensos entre capital y trabajo con que se fundamentan los consensos políticos.

esto explica que su rechazo a la política liberal le conduzca a simpatizar posteriormente con el corporativismo político. Para Michels, la elitización proviene precisamente de la dinámica de consenso en el parlamento, que produce la autonomización de los representantes obreros respecto de las decisiones políticas del partido, y que incluso hace que la bancada parlamentaria sea la que busque imponerle la línea política, de acuerdo a los requerimientos del consenso.

La absolutización de esta *ley* (toda organización conduce inevitablemente al elitismo) es parte del arsenal ideológico liberal para negar la compatibilidad de la participación en el parlamento con la persistencia de un perfil clasista independiente del partido de izquierda, lo que conduce, por extensión, a crear escepticismo respecto a la organización misma. Por supuesto que se obvian las críticas que ya Gramsci realizaba al respecto¹⁵.

Parlamentarismo como control

Tres décadas después, el tema de las élites es retomado por los ideólogos liberales conservadores, quienes hacen la apología del elitismo en tanto instrumento de estabilización política del sistema.

Joseph Schumpeter¹⁶ destaca la utilidad que ha tenido el parlamentarismo como mecanismo integrador de los partidos socialistas al sistema. Sin embargo, considera que la democracia representativa debe ser replanteada: la influencia de la política sobre la economía será insostenible cuando el capitalismo entre en una fase de crisis (significativamente, él la prevé en el momento de la gran expansión). Señala que el peligro no se encuentra sólo en la incidencia obrera en los procesos productivos y distributivos, sino que, peor aún, los funcionarios de la burguesía han hecho suyos valores proclives a la igualdad social.

Para vacunar al capitalismo de intervenciones que alteren el proceso de acumulación –particularmente en momentos de contracción– la democracia debe despojarse de su *función social* y limitarse a ser un método

15 Antonio Gramsci es enfático en diferenciar centralismo democrático de centralismo burocrático en función de querer cambiar la realidad o mantener la dominación. Véase “El partido político”, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. México, Juan Pablos, 1975.

16 Joseph Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942 y 1946), dos tomos. Madrid, Orbis, 1983.

de formación de gobiernos; y los partidos, a ser los proveedores de las élites para el consenso. El consenso es producto de un acuerdo estructural básico. Al existir dicha coincidencia en los objetivos económicos, éstos pueden ser despejados del ámbito político para situarse en el único ámbito que debe decidir sobre lo económico: el mercado. Si el parlamento, como eje del sistema político, funciona en términos de consenso, las únicas diferencias serán de tipo procedimental, como también lo plantea un liberal conservador como Giovanni Sartori¹⁷. Con partidos que no guardan diferencias programáticas fundamentales, la elección de las élites se realiza mediante una oferta política que atraparé a los consumidores (votantes), atrayéndolos por las técnicas de mercadeo (*marketing*). Como la “sustancia” (ideológica y programática) de la mercancía de los oferentes no es realmente distinta a causa del consenso estructural básico, la diferencia estará en la imagen del producto que se venda.

Tras el estallido de la crisis capitalista de fines de los sesenta del siglo pasado, y la imposición del modelo neoliberal para contrarrestarla, los ideólogos capitalistas (por ejemplo, la Comisión Trilateral¹⁸) retoman el modelo de la democracia de élites como la solución política para la crisis de gobernabilidad en los países centrales, a la que caracterizan como de “exceso de demandas”; para ello es necesario debilitar a la clase media y a las organizaciones sindicales. Y para una América Latina surcada por movimientos rupturistas de claro contenido anticapitalista, recomiendan los golpes de Estado como medida quirúrgica inmediata para eliminar cualquier resistencia al capital. Una vez consumada, el modelo democrático a implantar¹⁹ será el que acabamos de describir, cuya finalidad será garantizar una dominación políticamente estable (gobernabilidad), que las dictaduras ya no eran capaces de lograr.

Sólo que habrá un *detalle*, y es que en las condiciones de América Latina, de enorme desigualdad y pobreza, ese consenso estructural básico no existe como fundamento de las expectativas democráticas de los sectores populares. Y cabe anotar que el propio Schumpeter señalaba que “[este]

17 Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia*. (1987) dos tomos, México, Alianza-Patria, 1991.

18 Comisión Trilateral, *La gobernabilidad de la democracia*. México, Cuadernos Semestrales núm.2-3, CIDE, 1977-78.

19 La caída de las dictaduras se acelera por las resistencias populares, pero el modelo de restauración del régimen representativo lo impone la derecha neoliberal.

método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social”²⁰.

Por lo tanto, la democracia liberal, como método de gobernabilidad, tiene que resolver varios obstáculos: 1) construir los consensos entre las élites, para lo cual necesita desarrollar políticas de integración sistémica de la izquierda antineoliberal, además de transformar sus liderazgos en un sentido elitista (el parlamentarismo será un método útil); 2) lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda políticas. Como esta última está definida, para amplios sectores, por aspiraciones de mayor igualdad social y contraría los objetivos de acumulación capitalista (que son los que determinan el tipo de ofertas en términos de políticas públicas), el equilibrio debe resolverse con una contracción de las demandas, objetivo nada sencillo en sociedades en las que la mayoría de la población está al borde de la sobrevivencia. Para lograrlo, la estrategia se dirige simultáneamente a: a) destruir a los sujetos demandantes en tanto tales, mediante su dispersión económica y social y su subordinación ideológica; b) al sistema de partidos le corresponde ejercer la función de control social y político sobre los sujetos demandantes, tanto para que disminuyan su niveles de reclamo como para que no estallen conflictos. Se trata de una función que modifica sustancialmente el papel de la representación. He aquí pistas para explicar el distanciamiento entre algunos partidos de izquierda latinoamericanos y los sectores sociales que declaran representar.

La instauración de regímenes liberales en América Latina

En la década de los noventa, el escenario liberal representativo en la región se completa sin excepción, tanto para los países que salen de dictaduras o guerras civiles, como para los que transforman sus sistemas políticos en sentido liberal dentro del mismo régimen, como México.

Las “transiciones hacia la democracia” construyen el entramado institucional y político de los *shocks* neoliberales, los llamados “reajustes estructurales”, que llevan a cabo los gobiernos *democráticos* desde el inicio de esa década, mucho más profundos que los de las dictaduras.

²⁰ Joseph Schumpeter, *op. cit.*, p.378.

Las transiciones operan con diferentes intenciones clasistas entre los actores contrarios a la dictadura. Todos coinciden en la conveniencia de reconstruir las instituciones representativas y los espacios de negociación política, así como en la instauración de las libertades liberales básicas eliminadas mediante el terror de Estado. Hay fracciones burguesas que se pliegan al rechazo a la dictadura porque quedaron fuera de los ámbitos de decisión, y la democracia la quieren para reconquistarlos, a fin de dar seguridad a sus intereses a futuro. En la perspectiva de los asalariados, el autoritarismo ha sido causa principal de su empobrecimiento, quieren erradicar a uno con otro. De hecho, fueron sus luchas las que aceleraron la transición; para los grupos de poder había quedado claro que las dictaduras ya no eran útiles para mantener a raya a los asalariados, ello debía lograrse con la legitimidad de un nuevo régimen.

La reconstrucción institucional, como núcleo de las concertaciones, dio cabida a la sobrerrepresentación de las posturas liberales sobre la *deseabilidad negociadora* como un fenómeno autónomo de las determinaciones sociales y económicas. El hecho de que, con la excepción de Nicaragua, en toda América Latina se lograra el cambio de régimen por negociaciones civiles-militares, parecía abonar a la justeza y el realismo de esas concepciones.

Un poder militar que no había sido derrotado, también reforzó la idea de preservar los avances institucionales –que se observaban frágiles ante la actividad incesante de los militares– y de subsumir las demandas que pudieran ser irritantes. Se llamaba al “realismo” de los actores populares para lograr una “*construcción ordenada de la democracia política*”, en palabras de Francisco Delich:

Es en esta especial situación en la que pienso, el encuentro en un terreno común, coexistiendo la dictadura y la democracia, y sus respectivos actores, para separarse *luego* radicalmente, pero dejando huellas profundas en el estilo y en la práctica política [...] La construcción del poder democrático implica la recuperación de las formas democráticas: ambos suponen el ejercicio de la democracia en el interior de los propios actores políticos sin ninguna duda pero, sobre todo, la consolidación de un espacio político definido por reglas aceptadas por todos los participantes y cuya legitimidad arranca desde su punto más ilegítimo, aquel del espacio común con la dictadura. [...] el espacio definido en el encuentro entre esta dictadura y la

política define también los actores políticos, y lo son aquellos –únicamente aquellos– que quieren o pueden situarse en el interior de este espacio.²¹

El “luego” suponía que habría dos transiciones sucesivas, una consolidando las instituciones, y otra en la que los actores harían prevalecer “su estilo”, ¿acaso sus intereses? O bien, sus subjetivas formas de entender la democracia, “tan válidas unas como otras”, en un mundo que no es más que “representación”, “símbolos”²². La teoría del todo se vale.

En todo caso, las reglas del juego de ese “espacio común” terminaron por ponerlas los militares, los empresarios y sus partidos, que nunca dejaron “de hacer política” aun por fuera de las instituciones estatales. Norbert Lechner suponía que, en democracia, el dominio directo del capital sobre la política cambiaría al “repolitizarse la política”, lo que no fue así, como es evidente²³. Pero había que esperar sin despertar al monstruo.

Guillermo O’Donnell y Phillippe C. Schmitter sostenían que era decisivo que

se alcanzara de algún modo, una transacción entre los intereses de clase, a fin de reasegurar a la burguesía que sus derechos de propiedad no correrán peligro en un futuro inmediato, a los trabajadores y otros grupos de asalariados que a la larga se satisfarán sus demandas de mejores remuneraciones y de justicia social [para lo cual] A la izquierda se le requiere no hacer un uso pleno de ventaja simbólica inmediata y sacrificar, o al menos posponer por un periodo indefinido, su objetivo de una transformación que lleve a una “democracia avanzada”.²⁴

La *segunda* transición nunca llegó, pues en esa *primera* se establecieron los términos del consenso a favor de dar confiabilidad al capital hasta que todo estuviera calmado. La derecha se ocupó de demostrar que no había llegado el momento para exigencias. Cualquier demanda social, salarial o laboral fue considerada un “bloqueo” al sistema. Cualquier demanda de

21 Francisco Delich, “Teoría y práctica política en situaciones de dictadura”, en Norbert Lechner (ed.) *Qué significa hacer política*, Lima, DESCO, 1982, pp.146-147. Cursivas de la autora.

22 Javier Bonilla, “De marxismos y democracia”, en *Capítulo Sociológico* núm. 2 del semanario Jaque. Montevideo, 31 de mayo de 1985, pp.1-3.

23 Norbert Lechner, *op. cit.*, p.22.

24 Guillermo O’Donnell y Phillippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol.4 (1986). Buenos Aires, Paidós, 1991, pp. 77-78.

juicio a los violadores de derechos humanos fue desterrada con todo tipo de chantajes autoritarios y desafueros de parlamentarios de izquierda, que al exigirlo “atentaban” contra la “estabilidad democrática”. Todavía Pinochet disfruta de esos principios fundantes de la democracia representativa en Chile, al igual que el resto de sus colegas de armas en los demás países, que ahora rehacen sus estrategias de “seguridad” con funciones policiales y en los cánones del terrorismo *bushoniano*.

Preservado el deseado orden, los gobiernos *democráticos* tuvieron escenarios de impunidad para profundizar la reestructuración capitalista neoliberal. El desempleo y los bajos salarios son refuncionalizados para quebrar los mecanismos organizativos y legales de defensa de los trabajadores (la llamada flexibilización laboral); se manipula el subempleo en un sector “informal” escasamente demandante y muy despolitizado; se traduce la miseria en inseguridad, y ésta en una población proclive a un Estado crecientemente represivo. Una mezcla de decepción política con fatalismo social arroja a amplios sectores de la población latinoamericana a los brazos del individualismo, el conformismo y la pasividad. Los sectores dominantes llevan a cabo una poderosa ofensiva ideológica y de chantaje económico para concretar la conversión de los intelectuales al fundamentalismo liberal. Sólo así la doctrina encaja con la realidad...*realismo puro*. La *segunda* transición se aleja cada vez más, la *primera* fue exitosa en los términos requeridos por la dominación capitalista.

La política de izquierda en los marcos de la gobernabilidad conservadora

Se puede coincidir en que esta democracia no es peor que las dictaduras, bastó vivirlas para conocer la diferencia. Pero esta es también una valoración con distintas entonaciones clasistas, porque es difícil convencer a los numerosísimos sectores que se encuentran en los límites de la sobrevivencia de que ahora están mejor. No lo creen así los indígenas, los campesinos expropiados, los niños que mueren por enfermedades curables, estén en *situación de calle* o en el seno de sus familias, los jóvenes desempleados que son perseguidos con la presunción de su culpabilidad intrínseca, o los trabajadores baleados y encarcelados en las protestas. Y tampoco da su aval a esta democracia más del 50 por ciento de los electores que no acuden a las

urnas (en el promedio latinoamericano), más los que se suman sin siquiera haberse registrado como electores²⁵.

No obstante, estamos ante aperturas políticas indudables, que han convertido a los anteriores *enemigos* en los *adversarios* actuales. Razón suficiente para entender que numerosos sectores partidarios de izquierda, que fueron los objetivos principales del terror de Estado, aceptaran inicialmente las nuevas reglas del juego político. Pero no trataron o no pudieron modificarlas; y, peor, convirtieron la adaptación en teoría, en justificación de sus conversiones ideológicas.

Las expectativas de Delich, señaladas arriba, no se cumplieron: para ser tratados como pares, muchos representantes de izquierda se sometieron a las exigencias de la derecha en términos de desprenderse de sus compromisos sociales y adoptar las “prácticas políticas” y los “estilos” exigidos para integrarse al círculo de los que negocian. Pero no se trata solamente de carreras desenfrenadas por cargos y prebendas, generosamente ofrecidas para lograr su cooptación, que es el aspecto visible de la crítica que hoy se hace a los partidos; aun para las excepciones en cuanto a las prebendas, hay también la aceptación del papel por cumplir en el sistema político.

Se ha aceptado (por convicción o resignación) que la política no puede incidir sobre la economía. Ya sea porque muchas de las decisiones económicas se han concentrado en el poder ejecutivo, como por subordinación a la estrategia de la *profecía autocumplida de la globalización*: no se pueden contrariar las leyes del mercado, se renuncia a tomar decisiones²⁶, *ergo*, los

25 El abstencionismo no es un simple indicador de apatía, sino también de rechazo: para las elecciones parlamentarias en Chile del 14 de diciembre de 2001, 2.19 millones de jóvenes no se inscribieron en el registro electoral; más de un millón de votantes se abstuvo y casi 900 mil anulaban su voto o lo depositaron en blanco; en total, casi un 45% de los ciudadanos mayores de 18 años. (Datos en Gustavo González, “La derecha se acerca, la transición se aleja”, corresponsal en Santiago de semanario *Brecha*. Montevideo, 21 de diciembre de 2001, p.41). Aunque si el rechazo no se expresa como rechazo activo, puede ser funcional a los objetivos de la gobernabilidad. Abel Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana, presidente electo en la segunda vuelta en Costa Rica, en abril de 2002, lo expresó con claridad: “el elevado abstencionismo se dio porque los costarricenses confían en el sistema democrático. Creo que ese 40% de abstencionismo significa que vivimos en la democracia.” *La Jornada*, México, 8 de abril de 2002, p. 29.

26 La única excepción registrada es el referéndum ganado contra parte importante del articulado de la ley de privatización de empresas públicas en Uruguay, en 1992, que ha permitido conservarlas, invertir en ellas y hacerlas muy eficientes.

embates del capital transnacional de origen foráneo o criollo se multiplican sin poder frenarlos.

El consenso al que se convoca a la izquierda se dirige exclusivamente a respetar los intereses del capital, “en aras de empleo y salarios”. Sólo que hasta ahora nadie ha podido demostrar que ésa sea la intención del gran capital especulativo y sobreexplotador.

Algunos partidos de izquierda dedican buena parte de sus esfuerzos para negociar con la derecha “políticas de Estado”, subsumiendo para ello las movilizaciones propias.

La negociación, en efecto, es parte de las relaciones políticas entre fuerzas comparables. Ése no es el objeto de mi crítica, sino que no se entienda que, entretanto no se modifiquen las correlaciones de fuerza sociales que se expresan y cristalizan en las instituciones, sólo el gran capital es el que define las políticas de Estado: sean los rescates bancarios por crisis de origen fraudulento, las políticas fiscales regresivas, o la política exterior, en los que Estado y gobierno quedan fusionados bajo el interés neoliberal. Pretender negociar sin fuerza es tanto como legitimar la subordinación. Los partidos no sólo representan diferencias de votos: los que representan el interés capitalista tienen detrás toda la estructura de poder (empresarios, fuerzas armadas y policiales, burocracias estatales y partidarias, medios de comunicación, cúpulas de la Iglesia y narcotráfico), mientras que la izquierda debe construir permanentemente su fuerza social, y ello no se hace desmovilizándola para negociar.

Ha calado hondo en varios partidos de izquierda que los conflictos sociales son dañinos para la democracia, y de este modo se sitúan en las lógicas conservadoras de la gobernabilidad. Hay numerosos ejemplos de iniciativas de lucha de organizaciones sindicales o estudiantiles que son consideradas “inconvenientes” porque cierran la posibilidad de “diálogo” con la derecha^{27*}. Y, en verdad, ésta actúa con rigor para demostrar que no negocia con los parlamentarios que no están dispuestos a disociar esa

27 Una experiencia en ese sentido fue la huelga estudiantil en la UNAM de 1999. No es seguro que la conjunción de esfuerzos hubiera garantizado una victoria, pero sí hubiera disminuido las posibilidades de derrota.

* Pasados los años es posible observar que la derrota del movimiento estudiantil, de la cual no pudo recuperarse como organización, no fue tal en términos de varias de sus conquistas perdurables.

función con la de organizadores sociales: valga el más reciente ejemplo de la expulsión de Evo Morales del parlamento boliviano²⁸.

Durante algunos años, los partidos de la izquierda parlamentaria lograron incidir en la reducción de movimientos “disruptivos” a la estabilidad política. Hoy en día han sido rebasados²⁹, y por eso están dejando de ser considerados útiles para la gobernabilidad, son crecientemente aislados en la negociación parlamentaria, o incluso son objeto de ataques en los que dejan de ser adversarios para volver a convertirse en enemigos.

Contradicciones en los escenarios de gobernabilidad

La realidad latinoamericana es tan lacerante que, a pesar de los esfuerzos dominantes y de las subordinaciones ideológicas y políticas de algunos partidos de izquierda, es prácticamente imposible impedir que las demandas populares se expresen de alguna manera. Con el voto a la izquierda, nuevos sectores populares buscaron salidas a su pauperización por un camino distinto al de la lucha frontal con el capital, pues ésta ha sido infructuosa ante la inflexibilidad capitalista. En la década pasada, la izquierda ganó gobiernos municipales o estatales y en general amplió sus representaciones parlamentarias³⁰.

Con ello se abrió una dialéctica compleja entre rechazo y legitimación de lo electoral como eje de la acción política, que no siempre fue correctamente interpretada. Lo primero que debe reconocerse es que los triunfos electorales no suponen una validación social de las prácticas parlamentarias; muy por el contrario, manifiestan adhesión a un accionar político no

28 El dirigente aymara fue expulsado del Congreso boliviano el 24 de enero de 2002, por encabezar el movimiento de cocaleros en el Chapare.

29 La marcha convocada por la central obrera en Uruguay hacia Punta del Este para reclamar contra la política económica, a fines de enero de 2002, fue cuestionada inicialmente por sectores del Frente Amplio. A pesar de las amenazas del gobierno, la movilización preparatoria de las bases sindicales, frenteamplistas y otros sectores terminó por decidir la adhesión: fueron 15 kilómetros de automóviles, camiones de redilas y autobuses llenos de gente. Véase información en semanario *Brecha* núm. 843, Montevideo, 25 de enero de 2002.

30 El análisis de estas experiencias está en el libro que coordino y del que soy coautora: *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, UAM-X-Plaza y Valdés, 1999.

acotado por las lógicas sistémicas. En buena parte del voto a la izquierda hay expectativas claramente clasistas³¹. En segundo lugar, hay avances electorales que derivan de firmes arraigos sociales de varios partidos, procesos anteriores de acumulación de fuerza social y política que se condensan como fuerza electoral. Tales los casos del Partido de los Trabajadores en Brasil (1989), el Frente Amplio en Uruguay (1989) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (1997). Aun sin contar con arraigos sociales equivalentes a los anteriores, los triunfos electorales del Partido de la Revolución Democrática en México (1997) y el de Causa R en Venezuela (1990) son también reconocimientos a la participación de esos partidos en las luchas sociales. En tercer lugar, los crecimientos electorales que se verificaron en elecciones posteriores, en todos esos países, fueron motivados por un grado elevado de aprobación a las gestiones de gobierno y no por éxitos de *marketing*. A pesar de las guerras declaradas por los partidos de la derecha, de los bloqueos presupuestales desde los gobiernos centrales, e incluso de dificultades originadas en la inexperiencia, en general la izquierda demostró saber gobernar con un sentido democrático y con vocación de servicio. En algunos casos, se avanzó en la gestación de ciudadanías gobernantes³², con formas originales de participación, que dieron fuertes bases de apoyo a los gobiernos, mucho más que a los partidos como tales.

En cualquier caso, se observa cómo, a partir de estas experiencias, en los partidos conviven al menos dos lógicas políticas completamente distintas y hasta antagónicas: formas de hacer política apegadas a la población, en el caso de los gobiernos; y otras más comprometidas con las lógicas parlamentaristas³³.

La potencialidad renovadora de las experiencias de gobierno sobre el partido no parece haberse concretado. Persiste un divorcio que, en parte, se debe a la autonomización que reclaman los equipos de gobierno. Pero

31 Algunas frustraciones en las expectativas de naturaleza clasista provienen de la dificultad para distinguir esferas de competencia entre los ámbitos de gobierno, puesto que a los locales se les reclama cambios que radican en los niveles gubernamentales centrales.

32 La más relevante y exitosa es la experiencia brasileña del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, que hoy se extiende a todo el Estado de Rio Grande do Sul, en el que también el PT ganó las elecciones.

33 En el PT, el FA y el FMLN convive, también, la presencia partidaria en organizaciones sindicales y universitarias, haciendo más compleja la identidad del partido. Estos arraigos de masas son antídotos a las tendencias liberales, aunque no siempre logren imponerse como línea general del partido.

las concepciones partidarias electoralistas conservan fuerza porque los gobiernos enfrentan un dilema: para que sus proyectos puedan madurar en el largo aliento, dependen de que se sigan ganando elecciones. Es decir, dependen de las estructuras y prácticas partidarias que han sido más descalificadas socialmente. E incluso es posible que los techos electorales que empiezan a mostrar estos partidos que gobiernan se deban al electoralismo que se impone como salida al dilema.

Los análisis realizados por los partidos no dan indicios de que circunstancias políticas tan ricas hayan introducido desafíos a sus concepciones. Algunos siguen obsesionados con las técnicas de mercadeo político, para lo cual hipotecan recursos económicos y humanos importantes que siempre serán desventajosos en la competencia con los partidos de derecha, además de los efectos negativos que tienen esas lógicas mediáticas sobre la política³⁴; al mismo tiempo que desechan experiencias de vínculos de masas que han mostrado su eficacia, además de la función organizativa que poseen³⁵.

Estas aspiraciones “modernizantes” generan un círculo perverso de mayor dependencia financiera con el Estado y con las negociaciones elitistas en las que se determina. Las legislaciones electorales, en las que se obtienen algunos avances en cuanto a equidad formal, resultan muy onerosas desde el punto de vista político pues son francamente intervencionistas (en la elección de autoridades y candidatos, en criterios organizativos, en los manejos financieros y administrativos, etc.). Los ingentes esfuerzos que hoy se invierten desde la izquierda por ampliar su condición de partidos estatales muestran, además, que no se comprende que tales equidades son desiguales, pues la derecha no sólo cuenta con los recursos estatales, sino que tiene entre sus medios de propaganda a funcionarios de gobierno, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos, aunque lo hagan sin logotipo. Más aún, estos mismos activistas informales –y no tanto– de los partidos que defienden el orden social actual, manipulan los rechazos que el parlamentarismo cosecha entre amplios sectores, y hasta encabezan

34 Véase Ricardo Yocelzky, “Lumpendemocracia en América Latina”, mimeo.

35 No se contemplan experiencias tan reveladoras como la marcha zapatista de marzo de 2001, en la que la masividad del movimiento que la rodea logra imponerse al bloqueo de los medios de comunicación. El contragolpe popular en Venezuela, de mediados de abril de 2002, también ofrece elementos de reflexión importantes en ese sentido.

campañas para reducir los gastos estatales en el sistema representativo, que sobre todo afectarían a la izquierda. El círculo perverso de la dependencia política se cierra sobre la izquierda parlamentarista.

Estas son debilidades que provienen de concepciones que son antagónicas a los objetivos buscados pero, contra toda simplificación, también hay debilidades originadas en las confrontaciones políticas mismas, donde nunca se actúa solo.

Crisis de representación: un origen, dos direcciones

El cambio de función del parlamento, de mediador a instrumento de control, es un factor importante en la crisis de representación que hoy acusan todos los partidos. Debe decirse que la representación de intereses va más allá de los votos que conquisten los partidos: refiere a la adhesión a las propuestas sociales y políticas con las que se sienten identificadas ciertas franjas de la sociedad. En la izquierda hay una larga historia de representación de los intereses populares muy superior a lo movilizado como electorado, e incluso independiente de que el partido participara en la disputa electoral, lo que no siempre ocurría.

La crisis actual ocurre en dos direcciones distintas: los partidos que representan el interés burgués han dejado de ser nacionales porque ya no agregan intereses sociales diversos a los del capital; en tanto que los partidos que tienen por objetivo la representación de los explotados y dominados (que son la mayoría de la población), han diluido esas definiciones clasistas en el intento de ser aceptados por fracciones dominantes, en la perspectiva hipotética de llegar a ser gobiernos nacionales. Aunque ambas están englobadas en una crisis de representación, no se las puede tratar de manera indiferenciada, como ocurre frecuentemente.

En el caso de los partidos burgueses, es necesario distinguir entre aquellos que siempre representaron a los grupos oligárquicos y que por ello se les identificaba como la *derecha*, de los que fueron de tipo populista –por el contenido de las alianzas sociales que representaron aunque no todos funcionaron de manera corporativa– y que en otras épocas ocupaban el *centro* del espectro político.

En el campo burgués, son estos últimos los que acusan los mayores cambios. Pensemos en el Partido Justicialista argentino, en la Democracia Cristiana chilena, en Acción Democrática en Venezuela, en el Partido Colorado en Uruguay, en el Movimiento Nacionalista Revolucionario boliviano, en el Partido Revolucionario Institucional en México, o en el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) de Perú, aunque su tradición gobernante es más breve.

Fueron partidos con influencia en las organizaciones obreras, universitarias y en el sector rural, que no obstante sus prácticas políticas clientelistas y elitistas, lograron representar esos intereses al amparo de las políticas desarrollistas del Estado. Su crisis de representatividad no se explica, como pretenden algunos autores, por la “pérdida de centralidad del Estado”³⁶, sino por el cambio de los contenidos de la intervención estatal, que sigue siendo central en la economía y en la política, como acabamos de comentar: no ha desaparecido la presencia pública, sino que es el interés del gran capital el que determina los contenidos del *interés general*, del *pacto social*.

Como es obvio, estos partidos conservan niveles de representatividad entre sectores sociales no dominantes. Tienen todavía influencia sobre sectores muy pobres y marginados, a los que involucran con las políticas focalizadas estatales y a través de la intermediación de organizaciones no gubernamentales. Y también han logrado la adhesión social de fracciones de clase media profesional que se reciclaron con la tercerización inducida por la economía neoliberal, como satélites de los procesos de acumulación a través de actividades de servicios en pequeñas empresas, sectores dependientes de los éxitos del modelo, con posturas políticas muy conservadoras. En cambio, es patente el alejamiento de franjas de pequeños empresarios urbanos y rurales, a los que el modelo está destruyendo.

Estos cambios en la composición social (y magnitud) de los adherentes al proyecto político de estos partidos tradicionales no significan que éstos hayan dejado de ser estatales ni que hayan dejado de actuar al margen del aparato estatal al mismo tiempo. Aún más, son las fuerzas que ellos representan las que han modificado los contenidos sociales de la acción estatal. Entre democracia y dictadura, en este plano no hay cambios: aunque

³⁶ Norbert Lechner, “Por qué la política ya no es lo que fue”, en *Nexos* núm. 216, México, diciembre 1995.

compartieron con los militares la administración del Estado o se la cedieron momentáneamente, impusieron sus intereses al Estado como propietarios del capital.

El abandono de discursos más incluyentes o de representación de intereses diversos en los partidos tradicionales no es un problema de “defección moral” de sus dirigentes: es el capitalismo al que representan el que ha cambiado y que se reproduce exacerbando la explotación y la exclusión. Que emigraran del “centro” a la derecha más franca no es algo circunstancial³⁷, y por ello son nulas las posibilidades de que estos partidos se reformen o que sean actores de procesos verdaderamente democráticos en América Latina.

Por eso es más contrastante que, en lugar de privilegiar la representación de esas bases electorales populares alejadas de los partidos tradicionales, sectores importantes de la izquierda no cejen en sus esfuerzos por ser partidos más estatales y actores cuasi indiferenciados del *pacto social*. Ese desperfilamiento clasista va de la mano de sus intenciones de convertirse en partidos “de ciudadanos”, de electores. La territorialización de sus estructuras partidarias adosadas a los circuitos electorales, la desorganización y la desmovilización de sus bases militantes para activarlas sólo en las campañas electorales, las políticas de afiliación asociadas a las elecciones partidarias, la preferencia por las encuestas de opinión y la publicidad televisiva –en lugar de debate político en la base– son datos de la impronta liberal de sus concepciones políticas.

Esa concepción de territorialización es de naturaleza distinta a la impulsada en el marco de la descentralización llevada a cabo por los gobiernos de izquierda para elevar la participación en el ámbito local, concebida como espacios de organización colectiva. Pero incluso muchas de estas iniciativas languidecen cuando reproducen la lógica “ciudadana” individualista, con apelaciones intermitentes para elecciones locales. Y son observables análisis de izquierda que sobredimensionan lo local frente a lo sectorial, a veces en términos excluyentes³⁸, a partir de supuestos teóricos y

37 Lo mismo vale para el laborismo inglés y el fanatismo reaccionario de Tony Blair.

38 Una perspectiva diferente, y tal vez por ello exitosa en términos de avances políticos, es el Presupuesto Participativo en Rio Grande do Sul, que combina la participación territorial con la sectorial (“asambleas temáticas”), donde lo estrictamente local (como

sociológicos no siempre verificables³⁹. Algunos de estos supuestos muestran la aceptación tácita de las teorías pluralistas liberales como descripción de las nuevas configuraciones sociales; y, en general, indican que se renuncia con facilidad al análisis de las nuevas realidades populares (que requerirían alternativas organizativas originales)⁴⁰, por la asunción de una negación tácita de la pervivencia clasista de los explotados.

En el marco de todas estas complejas circunstancias, se constata la carencia de un proyecto consistente en ideas y de construcción articulada de fuerzas sociales y políticas, con las cuales poder transformar *lo público* en lo verdaderamente *general*: los intereses de las víctimas del capitalismo, que son abrumadoramente mayoritarias. Las concepciones y prácticas parlamentaristas no le han permitido a la izquierda avanzar en ese sentido.

Las falsas contradicciones en las críticas actuales

La alternativa a la subalternidad de la izquierda parlamentarista no se halla en negar en general a los partidos, las instituciones y la construcción de poder, porque el nihilismo ideologizado no conduce a una crítica superadora.

Hay que reconocer que la crítica difundida por la izquierda no partidaria llega a producir impactos removedores del sentido común (ideología dominante), e incluso a colocar temas de debate largamente eludidos como, por ejemplo, la relación entre partido y clase o entre partido

servicios urbanos) se redimensiona con las perspectivas y demandas nacionales de grupos sociales que participan en cuanto tales).

* Sin embargo, esa concepción y práctica fueron derivando en la formalización administrativa y despolitizada del presupuesto participativo

39 Por ejemplo, suponer que el desempleo implanta a esos trabajadores en el barrio, cuando éste a veces sólo es “dormitorio” de quienes están todo el día buscando cómo resolver la sobrevivencia. (Testimonios de integrantes de las Brigadas del Sol del PRD en México señalan la imposibilidad de encontrar a la gente en su casa). O la suposición de que la pérdida de referentes colectivos (la empresa, el sindicato, el centro de estudiantes) es completamente sustituida por formas de socialización barrial como clubes deportivos, cantinas, etc.; además de no diferenciarse los comportamientos por grupos sociales, en los que el barrio no pesa igual.

40 En Argentina y posteriormente en Uruguay, los desempleados han constituido organizaciones propias que reclaman participar en las centrales sindicales. Tampoco la izquierda ha sabido promover la organización de los trabajadores “informales”.

y organizaciones sociales, en los que los partidos han sufrido verdaderas regresiones analíticas y políticas.

La izquierda no partidaria es heterogénea. Más allá de las coincidencias discursivas observables, deben distinguirse las posturas que hacen de la negación un mecanismo de deslinde político⁴¹, respecto de las que se agotan en el rechazo y conducen a simple marginalidad política (sin capacidad de incidencia alguna).

En cualquier caso, aún no se discute con seriedad un conjunto de problemas. Es imposible pensar en un desarrollo democrático si los procesos de organización social independiente –y la fuerza política que de ella resulta– no se dirigieran a transformar la institucionalidad que garantiza la reproducción de la dominación capitalista, para construir una que garantice la permanencia de la inclusión de las mayorías sociales. Si un verdadero proceso de emancipación es aquel que rompe con la separación –e incluso contradicción– creada por el capitalismo entre el productor y el ciudadano, la democratización que se impulsa “desde abajo” debe alcanzar a las instituciones del Estado.

El Estado cristaliza las relaciones de fuerza existentes en la sociedad. Y lo que el Estado latinoamericano expresa hoy en su patrimonialismo neo-oligárquico es la debilidad persistente del trabajo frente al capital; da cuenta de que aún no se logra recomponer las fuerzas sociales destruidas por el neoliberalismo. Pero la recomposición de estas fuerzas es mucho más difícil si el Estado impone, con su fuerza punitiva, nuevas formas legales de exclusión antidemocrática (leyes laborales y educativas, políticas fiscales regresivas, utilización de recursos públicos al servicio del capital, etc.). Y debe quedar claro que los ultraneoliberales están haciendo uso de esa fuerza legal, incluso, para **compensar sus debilidades de representación política con represión**: la criminalización de la protesta, la judicialización de los despojos, la protocolización del injerencismo imperialista, etcétera.

41 Véase, por ejemplo, la entrevista televisiva de Julio Scherer al **Subcomandante Marcos** del 11 de marzo de 2001, extractada por Romeo Pardo en “El movimiento zapatista de liberación nacional en la opinión pública”, en Fabiola Escárzaga y Guillermo Michel, **Sobre la marcha**, México, UAM-X-Rizoma, 2002. Los cuestionamientos agudos e incisivos de Marcos terminan en dicotomías muy discutibles: **partido vs. organización política; político vs. rebelde social; rebelde social vs. revolucionario; democracia vs. poder**, etc., que de todos modos son relativizados por la práctica política del EZLN, muy creativa.

Efectivamente, el problema del poder, que es el problema de la política, no se limita a lograr el control del aparato estatal *per se* (y menos sólo el gubernamental), sino que refiere a la transformación profunda de las relaciones sociales, que son económicas y por lo tanto políticas (como política es la explotación capitalista), para que estas nuevas correlaciones de fuerza puedan rehacer lo público en sentido democrático. Pero son procesos articulados sobre todos los ámbitos de la sociedad, en los que ningún avance en cada uno de ellos puede ser desechado.

Hasta ahora nadie ha podido demostrar que esto pueda hacerse sin organizar una voluntad colectiva con objetivos de transformación precisos, que no es lo mismo que la sumatoria de individualidades aisladas bien intencionadas. Gramsci advertía que lo de menos es el nombre que se le asigne a la organización, porque también está “el partido de los que no quieren partido”⁴². Pero debe reconocerse que hay todo un campo para indagar, colocado por los sectores de izquierda no partidaria sin claridad conceptual pero con una indudable potencialidad heurística, como es el de hallar formas de organización colectiva que garanticen, desde sus cimientos, la emancipación de cada ser humano, como fundamento de la diversidad. Pero todo está por discutirse en nuestra región.

Aclaraciones finales

Las propuestas analíticas aquí presentadas no admiten una conclusión oclusiva. No obstante su densidad problemática, apenas son indicativas, e incluso de manera insuficiente, de la complejidad de fenómenos a considerar en el análisis de la política latinoamericana actual.

Y a pesar de que sitúan la reflexión más allá de los parámetros éticos individualizados con que se encara el desprestigio de la política, de ninguna manera excluyen la pertinencia temática de la relación entre política y ética. Tampoco desconocen que los aspectos biográficos, psicológicos y culturales

42 Los teóricos de la sociedad de redes, más allá de sus discursos aparentemente progresistas, comulgan con la dispersión social que propugna el liberalismo conservador. Su rechazo tajante a cualquier forma de organización refuerza la prédica del conformismo individualista. Otra cosa es la perspectiva de ampliación horizontal de las articulaciones sociales y políticas populares a través de redes de organizaciones.

de los actores políticos, considerados individualmente, son aspectos de los entramados episódicos que forman parte de las coyunturas, pero que por sí mismos no las definen ni explican. En todo caso, la relación entre ética y política no es abstracta ni general, está referida a las dimensiones ideológicas de las relaciones de dominación. Y es precisamente en este plano en el que se convoca a discutir las concepciones de la política que, más allá de las intenciones de los sectores críticos con el orden social actual en América Latina, demuestran aún la hegemonía ideológica liberal conservadora en nuestras sociedades.

El señalamiento de los déficits teóricos en los análisis políticos actuales tampoco sitúa las soluciones a los problemas antes referidos solamente en el plano de la construcción intelectual. Ésta es una condición imprescindible pendiente, pero no suficiente, entre otras razones, porque para que las ideas contribuyan a transformar la realidad tienen que ser convertidas en acción consciente por los sujetos sociales y políticos. La arrogancia academicista suele negarlo y subestima el potencial cognoscitivo de las experiencias sociales y políticas concretas, que en América Latina son hoy una fuente de reflexión e interpelación para todos: partidos, dirigentes sociales e intelectuales.

Lo social y lo político: desafíos urgentes de las luchas populares en América Latina (2002)*

Aclaración previa

Escribí este trabajo para presentar como ponencia en las V Jornadas Nacionales-II Jornadas Latinoamericanas, con el tema *De la dictadura financiera a la democracia popular*, que organizó el *Grupo Hacer la Historia* de la Facultad de Humanidades e Historia de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), los pasados 18 y 19 de octubre de 2002¹. Esa estadía en Argentina fue de una riqueza removedora. Con el hecho imposible de creer, apenas saliendo del aeropuerto de Ezeiza, de miles de carteles azules que, como en un juego de horror, decían “Vote Menem”^{*}.

Al evento en Rosario asistieron más de mil doscientos entre académicos, estudiantes y luchadores sociales de todo el país, que todavía buscaban cómo pagar sus boletos de regreso en autobús, hasta la Patagonia algunos. Discutían, con un rigor teórico y analítico que la academia nuestra envidiaría, desde los aprendizajes de la rebelión popular iniciada meses atrás a los desafíos del futuro. Allí, y en la mesa redonda en la que participé

* Publicado en *Estudios Latinoamericanos* Nueva Época, Año IX, núm.18, México, Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, julio-diciembre 2002. Y en: Jairo Estrada (Comp.) *Dominación, crisis y resistencias en el nuevo orden capitalista*, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional de Colombia, 2003.

1 Posteriormente discutí sus contenidos en el III Seminario Internacional Marx Vive: “Dominación, resistencias y alternativas en el nuevo orden mundial”, realizado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 19 al 21 de noviembre de 2002.

* La inquietud no era infundada: escribí esta “Aclaración previa” días antes de las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003; en estos comicios Néstor Kirchner, del Frente para la Victoria, obtuvo 22.0 por ciento de los votos, superado por Carlos Saúl Menem con 24.3 por ciento. El 14 de mayo de 2003, cuatro días antes de la segunda vuelta electoral, Menem renunció, lo que convirtió a Kirchner en presidente electo.

en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires, las preguntas eran verdaderas reflexiones, exultantes de confianza en las posibilidades populares y, al mismo tiempo, con angustiosas interrogantes sobre un futuro cercano (las elecciones presidenciales), sobre lo que no había acuerdos conceptuales ni políticos. Siempre interesándose sobre la lucha zapatista en México, de la cual reconocían haber abrevado, así como del proceso político venezolano, al que supieron darle solidaridad en sus propias reivindicaciones.

Conocí en Rosario y en Buenos Aires diferentes experiencias de este proceso de reconstrucción de la autonomía y la dignidad populares. Una toma estudiantil de un hospital abandonado por sus propietarios que sacaron el dinero del país y lo declararon en quiebra: las camas tendidas, los medicamentos dispuestos en platitos para los enfermos, como en una ciudad fantasma propia de la ciencia ficción; pero con la cruda realidad de trabajadores de la salud desempleados, enfermos sin atención y una comunidad que discutía ponerlo al servicio suyo junto con la actividad cultural que desarrollaban los estudiantes. *Tomas* de fábricas y supermercados quebrados fraudulentamente, puestos a funcionar por los trabajadores, con aportes solidarios y mucho sacrificio, dando trabajo y productos baratos a los consumidores igualmente pobres. Experiencias en las que la población entendió a la perfección la teoría del valor de Marx, diferenciando la producción de valor de uso de la de valor de cambio de la acumulación expropiadora, amparada además por una ley de quiebras que exigían modificar: no es de sorprender que ese hospital *tomado* y la fábrica Brukman fueran desalojados con todo lujo de represión. Hospitales públicos sin recursos pero cuyos médicos con más de nueve meses de salarios retrasados daban servicio a la población pobre con aportes solidarios de los barrios y de pequeñas farmacias, que las asambleas de vecinos articulaban con su trabajo.

Radios comunitarias, centros de organización popular con educación para niños marginados, ancianas madres de desaparecidos entregadas en todos estos esfuerzos colectivos. Los “cartoneros”, con sus carros de supermercado hurgando todas las noches en la basura, que superando la condición de marginalidad decidieron organizarse y coordinarse con las otras luchas. Organizaciones de desocupados (*piqueteros*) aportando su experiencia organizativa de una clase obrera centenaria. Y universitarios transmitiendo sus conocimientos a organizaciones barriales que se lo solicitaban para

entender la deuda externa y otros “misterios” de saberes monopolizados por los “expertos”. Algunos responsables de la dirección universitaria repensaban la labor académica de cara a las exigencias de una población llena de necesidades y de demandas de conocimiento. Una revolución social y moral en marcha, repudiando a los capitalistas depredadores y a la clase política responsable y cómplice de la destrucción del país.

Vi cada día en la televisión a los niños de Tucumán muriendo de desnutrición en los hospitales del país que podría alimentar a todo un continente. Vi en los quicios de los soberbios edificios bonaerenses gente arremolinada cubierta de periódicos para dormir allí, algunos ¡leyendo en la penumbra!

La consigna “que se vayan todos” expresaba un sentir generalizado, pero escuché los debates en los que se reclamaba la formación de un instrumento político que los representara para dar las batallas por venir, para evitar que la derecha siguiera usando el monopolio de la fuerza legal para reprimir al pueblo y para seguir robándole. Se fracasó en ello: la izquierda partidaria hizo primar el sectarismo y renunció a la responsabilidad de aportar al avance de este gran movimiento popular; se perdió una oportunidad importante para impedir que la derecha haga de la represión y el “orden” su máxima “oferta” electoral para los próximos años; las organizaciones sociales populares están dispersas entre propuestas y desconfianzas hacia todo lo que huele a “política” y van disminuyendo su fuerza. No faltan quienes ahora teorizan los repliegues de hecho y por frustración como la “inevitable” teoría del péndulo.

Me pregunto si esta nueva etapa que anuncia más miseria y represión para los argentinos podrá ser, por fin, la partera de la construcción de un proyecto político capaz de convertir toda esa energía social y esa admirable creatividad en voluntad colectiva organizada*, capaz de hacer retroceder a los criminales sectores dominantes en todas sus manifestaciones y ámbitos. El desafío no es sólo para el pueblo argentino, que sigue enseñándonos con

* En un trabajo del año 2004 escribí: “Argentina sorprende una vez más con un presidente Kirchner que no proviene de la izquierda pero que asume el mandato moral del movimiento social de 2001 y enfrenta algunos nudos del poder menemista restaurando la dignidad de la memoria; con gestos de cierta independencia hacia los poderes financieros mundiales que no tiene Lula, ni la tuvo el Frente Amplio de Uruguay en su pasada campaña electoral”. (Véase: “El posliberalismo y la izquierda”, publicado en *Revista Espacio Crítico* núm.2, Bogotá, Enero-Junio de 2005, y en Jairo Estrada (Comp.), *Teoría y acción política en el capitalismo actual*, Bogotá, Universidad

las luces y sombras de su experiencia, es el nuestro propio en toda América Latina (abril de 2003). Lo que sigue es la ponencia original.

Las paradojas de la nueva coyuntura

Los tiempos sociales se han acelerado notablemente en América Latina. Las contradicciones generadas por el capitalismo han empezado a estallar. Crisis sociales y políticas, que en ciertos países y momentos son crisis de dominación francas, marcan una tendencia previsible en ese sentido en la región. Sin embargo, la potencialidad de cambio que la nueva coyuntura representa está condicionada por la resolución de atrasos políticos en los sectores dominados, a riesgo de que los derroteros de la crisis que se abre puedan ser determinados por los sectores dominantes, lo que significaría un agravamiento de las tragedias colectivas actuales.

Más allá de la heterogeneidad de realidades entre países, hay un escenario común de aumento de las contradicciones por: 1) una crisis económica estructural de proporciones inéditas, que se agrava por la radicalización de la ofensiva imperialista sobre nuestra región en concordancia con la crisis capitalista mundial; 2) una extendida crisis de legitimidad del orden social actual y el agotamiento de aquellos mecanismos de control social y político que durante una década y media permitieron darle estabilidad a la dominación excluyente (governabilidad), lo que se manifiesta en diversas formas de recomposición de las luchas populares –después de un período de derrotas sociales y políticas– en ocasiones en forma de estallidos masivos, y 3) la proclividad represiva de los sectores dominantes, con el reforzamiento de las funciones institucionales punitivas y con apelación directa a las fuerzas armadas y policiales.

Tal vez uno de los signos peculiares de esta nueva coyuntura es que se trata de una crisis social y política mejor entendida por la derecha que por las fuerzas de izquierda, las que en cierto modo se han visto sorprendidas y

Nacional de Colombia, 2006, p.552). Esta valoración sobre la presidencia de Néstor Kirchner fue correcta; no obstante, no anula el hecho de que la izquierda partidaria argentina no pudo generar una opción de izquierda independiente que expresara políticamente la energía social del levantamiento popular de diciembre de 2001, que no fue animado exclusivamente por las bases populares del peronismo.

hasta rebasadas por las protestas y los estallidos sociales. He aquí una clave problemática en las perspectivas y derroteros de la crisis.

En toda crisis hay factores imponderables en los avatares propios de relaciones entre fuerzas dispares entre dominantes y dominados. Pero la eficacia de los segundos se mide también por la capacidad que desarrollan para reducir los márgenes de azar en la contradicción con: 1) un conocimiento adecuado de la realidad en la que se actúa; 2) efectividad para incrementar la fuerza propia y disminuir la del contrario; 3) claridad en las direcciones y tiempos en los que aplicar la fuerza.

Las crisis sociales y políticas son momentos en los que se alteran o rompen los equilibrios de la dominación, la que activa inmediatamente su resistencia para impedir un peligro efectivo o para prevenir un peligro posible, lo que supone un no retorno a la situación inmediatamente anterior al estallido de la crisis. En otras palabras, la “resolución” de las crisis supone avances o retrocesos para los dominados². En esto consisten los desafíos actuales.

Lo que la nueva coyuntura está evidenciando es que, al mismo tiempo que crecientes sectores de la población ya no toleran seguir en las condiciones actuales, la izquierda exhibe insuficiencias y debilidades para superar esas tres pruebas de eficacia política señaladas anteriormente. Estamos ante un momento en el que pareciera que los tiempos sociales se hubieran adelantado a la madurez de los actores políticos, aun cuando éstos son también gestores de estos tiempos sociales.

Las crisis políticas de los últimos años tienen características diferentes a las de décadas atrás: tienen un mayor componente de manifestación reactiva, de desesperación por la miseria y la frustración, que de maduración política y de construcción orgánica. Son más expresiones de la brutalidad de la dominación que de la voluntad consciente y organizada de los dominados para cambiar la realidad. A pesar de ello, poseen una fuerza que interpela y sacude las relaciones de poder. En todos estos movimientos está la savia de la lucha organizada, pero la simiente de la experiencia cotidiana otorga los mayores impulsos expansivos.

2 Para una discusión teórica del problema de las crisis políticas, véase de Antonio Gramsci “Análisis de situaciones. Relaciones de fuerzas” en *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. Cuadernos de la Cárcel*, tomo 1, México, Juan Pablos Editor, 1975, pp. 65-76.

Cuando me refiero a la izquierda, incluyo en ella tanto a los partidos como a las fuerzas de izquierda que están por fuera (o en contra) de los partidos. La distinción entre “izquierda política” e “izquierda social” que sugieren algunos autores según se trate o no de estructuras permanentes con inserción institucional, resulta inadecuada porque establece un criterio reduccionista del sistema político al sistema de partidos y de éste al sistema representativo: unas y otras fuerzas son actores del sistema político.

En la nueva realidad, las insuficiencias y debilidades de estos distintos sectores de la izquierda se manifiestan en algunos aspectos de manera diferente y, en otros, con similitud. Difieren en la relación que establecen con la población movilizadora: muchos partidos tienen reacciones iniciales de desconfianza hacia movimientos que no dirigen, deslindes cuando las concepciones de estos últimos no se ajustan a sus propias concepciones, y capacidades tardías para acoplarse y aportar sus posibilidades organizativas y políticas. Por el contrario, los grupos de izquierda no partidaria tienden a fundirse en las nuevas expresiones de masas y poseen una enorme creatividad para generar formas novedosas de protesta social. Lo común entre unos y otros es un insuficiente conocimiento de la realidad, en particular de las múltiples formas en las que se ejerce la dominación; ambos sectores exhiben debilidades teóricas originadas en concepciones de la política que parten de fundamentos similares aunque se manifiesten como concepciones opuestas; en unos y otros la carencia de visiones estratégicas se origina en la ausencia de un balance serio sobre las experiencias fracasadas del socialismo; y, colocados en escenarios opuestos, coinciden en la dificultad de dar respuestas adecuadas a la crisis, por su respectiva incapacidad para cerrar la brecha entre lo social y lo político.

Entretanto, los sectores dominantes actúan para reducir las fuerzas que se les oponen y para avanzar en sus cada vez más rapaces objetivos capitalistas, en una combinación de estrategias que van desde el intervencionismo militar imperialista, la represión interna, la negociación en los ámbitos del sistema representativo, la diversificación de las formas de control social e ideológico con mecanismos institucionales de diverso tipo, hasta la construcción de un discurso renovado con el cual manipular y neutralizar las búsquedas de alternativas.

No es posible analizar en este trabajo el conjunto de fenómenos que caracteriza el momento actual de América Latina y que condiciona la

posibilidad de transformación de la trágica realidad de nuestros pueblos. Los desafíos que se presentan están determinados, en primer lugar, por las formas en que se ejerce el poder, están colocados por los sectores dominantes. Y sólo desde esta perspectiva es posible hacer una reflexión sobre la situación de la izquierda, pues sus insuficiencias o dificultades lo son en función de esas realidades a transformar. De no ser así, los análisis autorreferidos pueden ser ejercicios catárticos, de autocomplacencia o de autoflagelación, sin ninguna incidencia sobre la realidad.

El impacto de la crisis argentina

La debacle de Argentina ha introducido con dramatismo temas de debate no siempre contemplados en América Latina, aunque refieran a una realidad problemática común.

La crisis argentina se convierte en un *emergente* analítico no por su excepcionalidad actual en el contexto latinoamericano, sino por la contrastación con la peculiaridad de sus antecedentes: fue una de las diez mayores economías del mundo en las primeras décadas del siglo XX; la que exhibió uno de los mayores desarrollos relativos a lo largo del siglo; que se diferenció del resto de la América Latina indígena, negra, mestiza y mulata como una de las excepciones “europeas” (lo que para los parámetros racistas predominantes constituía la clave de sus potenciales de desarrollo). Pero, además, porque fue el país modelo de la ortodoxia neoliberal, el ejemplo consentido de las claves del éxito. Razones suficientes para convertirse en el ejemplo más socorrido en los debates actuales en la región.

Si pudo convertirse en la referencia típica (en sentido weberiano) de la destrucción de un país por el capitalismo, no ha sido sólo por sus indicadores económicos y sociales pues, por ejemplo, los terribles niveles de pobreza en Argentina todavía no superan los de otros países como México, Guatemala o Perú, por citar algunos. Ni solamente por el vertiginoso ritmo de su deterioro³ que intensifica los impactos de su magnitud. Es el estallido

3 Grado de “acostumbramiento”: el obispo de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez, en reunión con empresarios, dijo que como el pueblo mexicano lleva medio milenio en pobreza, por “su capacidad de soportar situaciones adversas en toda su historia, no estamos (...) en peligro de una desesperación”. Véase: “En México no hay riesgo de

popular de diciembre de 2001 el que da la verdadera dimensión de la crisis: la intensidad de la protesta, su persistencia y la diversidad de sectores sociales involucrados son las evidencias cualitativas de una crisis económica que deriva en crisis de dominación. Un espejo difícil de no mirar, cuyos reflejos sacuden las certezas ideológicas y teóricas impuestas por la derecha, y que también hacen patente las debilidades del análisis social en nuestra región.

En México, por ejemplo, en los primeros días de la rebelión argentina algunos intelectuales atribuyeron la estridencia del conflicto a la manifestación de descontento de la clase media, y suponían que ese arrebató corporativo se desinflaría con algunas medidas compensatorias. Identificaban los *cacerolazos* sólo con el hecho circunstancial del *corralito* bancario, sin considerar que éste había sido impuesto dos semanas antes del estallido. Tampoco pudieron establecer la conexión entre la furia colectiva y el decreto de estado de sitio, porque para la perspectiva posmoderna el pasado no existe y menos la memoria histórica. Y como ésta no es commensurable por datos electorales, no podían entenderse la persistencia intersticial del repudio al horror de la dictadura* en una sociedad que había dado su aval electoral a la derecha. Para ese pensamiento de lo efímero, que no reconoce procesos, tampoco se percibía la impronta de los tres millones de votos en el plebiscito organizado muy poco antes por el Frente Nacional contra la Pobreza.

Al pasar de los meses, tampoco el deseoso optimismo de la derecha pudo convencer de que apenas se trataba de la anécdota espectacular de una crisis financiera que el sistema absorbería (una especie de “Efecto Tango II”) y le fue imposible encubrir el ejemplarizante carácter estructural de la crisis económica y social argentina⁴.

estallido social por la pobreza: Sandoval Iñiguez”, *La Jornada*, México, 7 de septiembre de 2002, p.37. Para este prócer eclesial, unos indios alzados con pasamontañas para simbolizar precisamente la invisibilidad a que se los ha condenado, no dejan de ser indios, no cuentan.

* El presidente Kirchner así lo entendió: comenzó su gestión promoviendo, en agosto de 2003, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que le granjeó una alta popularidad pese a su bajo caudal electoral.

4 En los primeros días, el presidente Fox se refirió a la crisis argentina como elemento de contrastación con la “solidez de la economía mexicana”, inmune a cualquier “contagio”. En las últimas semanas, el ejemplo argentino es usado como medio de chantaje para privatizar la industria eléctrica, sin lo cual “se caería en crisis estructurales como en Argentina”.

Las escenas cotidianas de las protestas callejeras han sido más eficaces que el debate académico para cuestionar las sesudas afirmaciones de la derecha sobre el desempleo “funcional”, la pobreza como “externalidad”, el alejamiento de la población respecto de los partidos como la “desafección política” propia del “consenso”. O de que existe una correlación absoluta entre nivel educativo y pobreza, justificación en boga de las políticas dominantes actuales.

Pero también la experiencia popular argentina ofrece enseñanzas fundamentales para todos los sectores de la izquierda latinoamericana, tanto en la potencialidad de un movimiento creativo que se construye desde abajo con un claro sentido democrático, como en las limitaciones de una “molecularidad” que no logre condensarse en una voluntad colectiva con capacidad para imponerle sus objetivos a los sectores dominantes. La admiración hacia este movimiento popular también ha conducido en el exterior a conclusiones demasiado apresuradas: la identificación llana entre crisis de dominación y crisis revolucionaria; la oposición excluyente entre democracia directa y democracia representativa; la oposición también excluyente entre redes organizativas y organizaciones permanentes, y otras; que en conjunto confirman las dificultades en el seno de la izquierda para pensar de manera dialéctica, con una siempre fresca capacidad de asombro ante lo nuevo pero sin perder el rigor teórico que permite trascender el impresionismo fenomenológico⁵. Por lo demás, la lectura de la experiencia popular argentina desde el exterior no siempre logra captar el modo como ésta va construyendo su praxis, cómo aprende y teoriza desde la lucha⁶.

Pero tal vez fue el estallido de la crisis en Uruguay el que disipó la idea de la excepcionalidad argentina. Tras considerarlo inicialmente como un contagio de crisis financiera debido a la dependencia económica del país con sus vecinos, la insuficiencia de la contención parcial de la crisis bancaria con el préstamo de los organismos financieros colocó el debate en sus justos términos estructurales. Por lo demás, las explicaciones

5 Por razones de espacio no incluyo las citas de numerosos trabajos periodísticos de diversos países o debates políticos y académicos que ilustran este tipo de análisis y conclusiones.

6 Como puede apreciarse de las discusiones del Foro Social Temático de la Argentina, en agosto del 2002, difundidas en América Latina. Véase, por ejemplo: “Foro Social Mundial-Argentina: Propuestas y conclusiones del Foro Social Mundial”, en Servicio Informativo (electrónico) ALAI-AMLATINA del 26 de agosto de 2002.

centradas en la corrupción y en la decadencia de la clase política, más el argumento de la debilidad de las instituciones democráticas con que los organismos financieros internacionales pretenden explicar las “fallas” del funcionamiento económico, no se ajustan a la realidad uruguaya.

La vastedad de la crisis social y política latinoamericana

No obstante su trascendencia, el “caso argentino” no es el que marca el inicio de la nueva coyuntura latinoamericana. Desde comienzos del nuevo siglo observamos un acelerado proceso de recomposición de las luchas populares en toda la región y crecientes escenarios de crisis sociales y políticas.

La coyuntura es nueva tanto por su magnitud como por la naturaleza social de las luchas. En la primera mitad de los noventa, tras el debilitamiento de los asalariados pierden presencia las luchas clasistas; el escenario social es ocupado principalmente por grupos de clase media profesional en torno a organizaciones de derechos humanos, de género y ecologistas. En la segunda mitad de la década, cobran fuerza los movimientos campesinos, muchos de ellos identificados principalmente por su condición indígena, y el actor colectivo urbano que reaparece es el movimiento estudiantil con reivindicaciones propias.

En la década que comienza, el eje de las luchas está en el cuestionamiento a las políticas económicas, se resisten privatizaciones e inversiones transnacionales y reformas fiscales regresivas, etcétera. Reaparecen los movimientos de huelga de sindicatos urbanos y rurales que, al igual que las luchas de pobladores y estudiantes, en tanto se dirigen contra la esencia económica de la dominación adquieren un claro perfil clasista.

El otro aspecto novedoso es que empieza a revertirse la dispersión de las protestas característica de la década anterior. Y allí donde se logra una acción unificada en torno a objetivos comunes, el descontento social llega a transformarse en una fuerza política capaz de obligar a los Estados a modificar decisiones, de destituir ministros, de hacer caer presidentes y de ganar elecciones. Ejemplos de ello son el estallido popular en Ecuador de enero de 2000⁷; el levantamiento popular en Cochabamba (Bolivia) en abril del

7 Encabezado por el movimiento indígena y en el que participaron estudiantes,

2000⁸; el triunfo electoral del Bloque Social Alternativo en el Departamento del Cauca (Colombia) en octubre del 2000⁹; la Marcha zapatista en México entre febrero y marzo del 2001¹⁰; el levantamiento popular de Arequipa (Perú) en junio de 2002¹¹; el levantamiento popular en Paraguay en junio del 2002¹²; el levantamiento de los campesinos de San Salvador Atenco en México en 2002¹³. Debe destacarse la huelga general en Colombia, el 16 de septiembre de este año, en la que sindicatos, organizaciones rurales y sectores de la educación, en medio de una agudización de la guerra y bajo Estado de Conmoción (modalidad de estado de sitio), enfrentan las medidas económicas antipopulares del flamante presidente ultraconservador y guerrillista Álvaro Uribe.

La nueva coyuntura latinoamericana tiene un componente fundamental en el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, el único gobierno –aparte de Cuba– que impulsa un proyecto popular confrontado a los intereses estratégicos norteamericanos y sometido a una sistemática ofensiva golpista de la derecha. La exitosa resistencia al golpe de abril de 2002 es el primer triunfo popular en este nuevo siglo¹⁴. Contra todos los

profesores, sindicatos de trabajadores urbanos y campesinos, movimientos de barrios e incluso un sector de militares, obligó la renuncia del presidente Mahuad y tomó el gobierno brevemente, aunque fue derrotado por un contragolpe militar.

- 8 Estudiantes, pobladores y campesinos se levantan contra la privatización del agua, durante varios días toman el control de la ciudad e impiden la privatización. Este movimiento se proyecta junto a la lucha de los campesinos coccaleros en el avance electoral del dirigente aymara Evo Morales.
- 9 Esta alianza entre organizaciones campesinas, sindicatos y partidos de izquierda se gestó en 1999, hizo una huelga general regional en una zona estratégica para el Plan Colombia que duró 26 días; y ganó posteriormente la gubernatura con el candidato indígena Floro Tunubalá.
- 10 Que recorre 3 mil kilómetros con apoyo de millones de mexicanos y obliga a la derecha a recibir en el Congreso de la Unión a quienes son perseguidos como delincuentes.
- 11 En el que se constituye el Frente Cívico Amplio que frena la privatización eléctrica.
- 12 Campesinos, estudiantes y trabajadores, unidos en el Congreso Democrático del Pueblo, tras una marcha hacia la capital, cortes de carreteras y grandes manifestaciones en Asunción, obligan al Parlamento a suspender la ley de privatizaciones de teléfonos, agua potable, alcantarillado y ferrocarriles.
- 13 Cuyas tierras fueron expropiadas para hacer un nuevo aeropuerto, obligan al gobierno a cancelar el proyecto transnacional en agosto de 2002.
- 14 Al escribir la ponencia todavía faltaba ver la resistencia exitosa a un segundo golpe “cívico” de dos meses, así como el triunfo de Lucio Gutiérrez en Ecuador con el apoyo del movimiento indígena, compromisos populares que Lucio Gutiérrez no ha sostenido y que ya aceleran nuevos levantamientos populares en ese país.

vaticinios, Cuba empieza a superar la crisis económica tras la implosión de la URSS y acrecienta su influencia internacional, movilizandoo a millones en la resistencia a las agresiones de Estados Unidos.

En Brasil, el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva sintetiza las luchas populares de trabajadores urbanos y rurales en torno a la Central Única de Trabajadores y al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de los universitarios y de la Conferencia Nacional de Obispos, y de pobladores en torno a los gobiernos del PT, cuya confluencia se ilustra con el reciente plebiscito contra el ALCA¹⁵.

Todos estos son signos del agotamiento de la estabilidad de la dominación. Pero persisten dificultades inocultables. No todo el descontento o la desesperación se manifiestan como lucha antisistémica, también producen conductas conservadoras entre los sectores populares y diversas formas de anomia social, que pueden crecer por los sentimientos de frustración y ser base social de contraofensivas dominantes.

Aun en los contextos de lucha, una característica común es la dificultad para sostener esos niveles de lucha o superarlos mediante una fuerza política suficiente como para frenar el aumento de la explotación y la pobreza y revertir la fuerza institucional de la derecha. No obstante los avances en las luchas y en la conciencia, lo objetivo es que empeora la situación de nuestros pueblos.

Esto asigna a la coyuntura una complejidad inédita. Todavía los pueblos son muy débiles frente a los grupos de poder. Pero, al mismo tiempo, la imposición sin demasiadas trabas de los objetivos capitalistas tensa aún más las contradicciones en un momento en el que son estrechos los márgenes de tolerancia, pues se está llegando al límite de la sobrevivencia de amplísimas mayorías. La probabilidad de estallidos sociales aumenta aunque puedan agotarse en su intermitencia. Es ciertamente paradójico que la enorme predisposición social que existe contra el orden dominante actual, dadas las dificultades políticas señaladas, no asegure avances populares e incluso pueda ser el preludio de reacciones mucho más autoritarias que aborten los avances logrados.

15 Del 1 al 7 de septiembre de 2002, 150 mil militantes sociales de 3890 municipios debatieron con la población. Votaron en el plebiscito (no oficial) 10'149,502 brasileños. En ese contexto se desarrolló la campaña electoral. Véase de Daniela Stefano, "O povo ja disse nao à ALCA". Brasil, *MST Informa*, Año II, núm. 23, 27 de septiembre de 2002.

Frente a estos riesgos ciertos, algunos partidos de izquierda actúan de manera conservadora ante expresiones de lucha que no pueden conducir, privilegian el orden sistémico como supuesta garantía contra los avances represivos, y en algunos casos tratan de canalizar el descontento mediante ofertas electorales futuras, sin saber cómo responder a pueblos que no pueden soportar más sus condiciones de vida presentes. Es bastante dramático que quienes siempre han convocado a la lucha contra el neoliberalismo se asusten con que ocurra masivamente cuando no la esperaban y que traten de contenerla. En algunos discursos partidarios son frecuentes las condenas al “caos” y la “anarquía” para calificar estos momentos de estallido social. Están los que oponen “lucha organizada” a “estallido social”, cuando la experiencia latinoamericana muestra que el segundo suele ser una condensación de la primera o un contexto para crearla, amén de que en todo estallido social hay zonas de expresión desorganizada. Hay descalificaciones de las formas de protesta inéditas hasta llegar a confundirlas con acciones de provocación organizadas por la derecha (que, naturalmente, existen). Por lo demás, la contención de las luchas no evita el aumento de las conductas autoritarias de los dominantes, todo lo contrario, les otorga impunidad en una crisis social que existe objetivamente. Estas posturas equívocas contribuyen a ensanchar la brecha entre los partidos y diversos sectores sociales, conducen a mayores desconfianzas mutuas y a poner más obstáculos para los avances populares.

Las encrucijadas actuales dan cuenta de dos grandes cuestiones: 1) los déficit pasados y actuales de la izquierda en la gestación de un proyecto de poder, entendiendo por tal la estrategia de construcción de fuerza política y de conceptualizaciones sobre el cambio; 2) que en el horizonte inmediato de la izquierda no estaba contemplada una crisis social y política profunda, lo que se explica por algunas de las consideraciones ya señaladas pero también por su aceptación tácita de las posibilidades que ofrece el marco político de la democracia gobernable. Muy diferente es la percepción que sobre ello tienen los sectores dominantes.

Las estrategias dominantes: neoinstitucionalismo, neocolonialismo y represión

Los primeros en advertir un escenario de crisis fueron los sectores dominantes, a mediados de la década pasada. Durante varios años, la

reestructuración conservadora del capitalismo había sido exitosa en todos los ámbitos y éstos guardaban una relación funcional: la liberalización económica que da impunidad a la acumulación de capital; la gestación de una sociedad incapaz de enfrentarlo (debilitamiento del trabajo frente al capital, fragmentación social y hegemonía ideológica de la derecha); márgenes importantes de estabilidad e incluso legitimidad del orden dominante mediante la administración política de las contradicciones en el marco de la democracia representativa. Había estabilidad de la dominación excluyente (governabilidad)¹⁶.

El modelo funciona asignando al sistema de partidos con representación parlamentaria el papel de filtro de las demandas sociales para impedir que se impongan al Estado como políticas públicas contrarias al interés capitalista, y también como instrumento de control político para evitar la conflictividad social (calificada como amenaza a la democracia). La definición de la política como instancia ajena a las decisiones económicas es “demostrada” con los condicionamientos “ineludibles” de la globalización, presentada como una fuerza metafísica ajena a la voluntad política.

A mediados de la década se reconoció que el modelo político perdía capacidad de control debido a una crisis de representación de los partidos de la derecha, que perdían credibilidad en la sociedad. Años después, la crisis de representación afectará también a los partidos de izquierda que adoptan posturas y políticas parlamentaristas en el marco de esas reglas del juego¹⁷.

El descrédito de los partidos (manifestado en un abstencionismo electoral superior en promedio al 50 por ciento en América Latina) reduce su capacidad para incidir sobre las conductas sociales, pero también induce a otras formas de acción política: ese es el llamado de atención del

16 Dadas las limitaciones de espacio, para la discusión teórica de la democracia gobernable y el análisis de los procesos sociales y políticos concretos que llevan a imponer este modelo conservador de democracia liberal en América Latina, remito a otros trabajos míos como: “Governabilidad como dominación conservadora” (1995); “La democracia gobernable: instrumentalismo conservador”, 2000 (ambos en este volumen); y también: “La crisis de la democracia gobernable”, Caracas, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol.7, núm.2, agosto de 2001.

17 Analizo la crisis de representación de los partidos como componente de la crisis de gobernabilidad en el trabajo “El desprestigio de la política: lo que no se discute”, abril 2002 (en este volumen).

levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994 y de la creciente influencia moral del EZLN¹⁸.

Para 1996, algunos líderes políticos e intelectuales del sistema se plantean la necesidad de recomponer la credibilidad de la política sistémica y de definir otros mecanismos de control eficaces para impedir una crisis de gobernabilidad. Estos sectores, con visión más política que los tecnócratas, reclaman un papel más activo del Estado en aquella dirección.

Con ese fin crean centros de elaboración estratégica (*think tanks*) que construyen un discurso aparentemente crítico de las políticas neoliberales. En febrero de 1996, el BID discute los riesgos de la insuficiencia de los programas sociales y crea el Instituto de Desarrollo Social (INDES)¹⁹. En septiembre de ese mismo año, a instancias del presidente uruguayo Julio Ma. Sanguinetti, se crea el *Círculo Montevideo* como foro de debate entre políticos, intelectuales y funcionarios de organismos internacionales, que elaboran a partir de la ponencia central encargada a Alain Touraine*.

En noviembre de ese mismo año de 1996 se reúne la VI Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno, en Chile, para tratar la crisis de credibilidad de los partidos y la democracia²⁰. Al año siguiente, 1997, la VII Cumbre se reúne en la isla Margarita (Venezuela) para discutir el tema *Los valores éticos de la democracia*.

18 Moises Naim, funcionario del Banco Mundial dice: “Tal vez esa fecha vendría a simbolizar el día en el que el mensaje de que las reformas macroeconómicas aunque necesarias no son suficientes para propulsar a los países en el camino de la prosperidad, comenzaría a ser tomado en cuenta seriamente por políticos, funcionarios, expertos en reformas y periodistas alrededor del mundo. Después de todo, México había sido el ejemplo que usaban los promotores del Consenso de Washington cada vez que querían justificarlo”. (Traducción de la autora). Véase: “Confusion?”, *Foreign Policy Magazine*, Octubre 26, 1999. Ponencia presentada en la Conferencia del FMI sobre la Segunda Generación de Reformas, en Washington DC, 1999, pp.11-12.

19 En la reunión *Desafíos socioeconómicos de América Latina en los umbrales del siglo XXI: la respuesta del* BID. Washington DC, febrero de 1996.

* Por economía de espacio, en esta edición se ha suprimido la extensa cita de la ponencia de Alain Touraine, que puede consultarse en la nota 37 del trabajo incluido en este volumen: “Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política”.

20 En la *Declaración de Viña* se comprometen a “promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social (...) reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de (las) agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos (...) para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población”. Versión oficial.

Tras la crisis financiera asiática de 1997 y sus impactos en otras regiones, que aumentan el desprestigio del neoliberalismo, el Banco Mundial (BM) presenta su *Informe sobre el Desarrollo 1997: El Estado en un mundo en transformación*. Uno de los directores generales del Informe es Joseph E. Stiglitz, quien ha dejado de pertenecer al Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton (1993-1997) y se incorpora al Banco Mundial como Economista Jefe y Vicepresidente Senior (1997-enero 2000). Unos meses después, el grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe de ese organismo publica *Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional*²¹.

Esas “recomendaciones” son adoptadas por los gobiernos latinoamericanos (Cuba no participa) en la *Segunda Cumbre de las Américas* que se realiza en Santiago de Chile en 1998, en un documento bautizado por el director del BM, James Wolfensohn, como el *Consenso de Santiago*. El 5 de febrero de ese mismo año de 1998, reunido con el presidente Clinton en Washington, Tony Blair anuncia que promoverá una “*tercera vía*” para el desarrollo.

El desprestigio del neoliberalismo obliga a una desafiliación colectiva del “Consenso de Washington”. Incluso John Williamson, quien en 1990 acuñó esa frase²², rechaza en 1999 ser identificado como neoliberal y replica contra las aparentes discrepancias del BM²³.

21 Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry, *Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional*. Washington DC. Banco Mundial, 1998.

22 John Williamson, “What the Washington Consensus Means by Policy Reforms?” en: J. Williamson (ed.) *Latin American Adjustment: How Much has Happened*, Washington DC, The Institute for International Economics, 1990. Los diez temas de política económica que hacen al consenso son, según el autor: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; garantía de los derechos de propiedad.

23 John Williamson, “What Should the World Bank Think about the Washington Consensus”, Washington DC, *The World Bank Research Observer*, vol.15, no.2 (August 2000), pp.251-252: “Hace diez años, inventé la frase ‘Consenso de Washington’ para referirme al mínimo común denominador de las políticas recomendadas por las instituciones con sede en Washington a los países de América Latina hacia 1989”. Le disgusta que la tergiversación haya conducido a “interpretar que las reformas de liberalización económica de las dos décadas pasadas fueron impuestas por las instituciones de Washington, en lugar de haber sido el resultado de un proceso de convergencia intelectual, que es lo que yo creo que subyace a las reformas [...] y en el que participó también el Banco Mundial”. Lo que más le preocupa es que el “término

El *neoinstitucionalismo*, como se denomina genéricamente a esta operación para compensar en otras instituciones las ineficacias del sistema de partidos para mantener la gobernabilidad, tiene en el BM un estratega y chantajista ejecutor. Pero sus elaboraciones son expresión del pensamiento de ciertas fracciones dominantes, no su génesis (en ese sentido es cuestionable la teoría de la conspiración). La carta de presentación del neoinstitucionalismo es criticar que la *modernización* económica generó crecimiento pero no logró disminuir de manera significativa la pobreza y la inequidad. Para cumplir con esos supuestos objetivos, ajenos a sus intenciones, la derecha coopta (financia) a un número significativo de académicos y profesionales latinoamericanos en el campo de las políticas públicas y la gestión social, con arraigo en la proliferación de ONG.

Tras la retórica, la preocupación por la pobreza se debe a que provoca “disturbios políticos y sociales”²⁴ que ponen en riesgo la continuidad y profundización de las políticas del capital transnacional:

... América Latina –o, en todo caso, la mayoría de sus países– constituye un claro caso de un proceso reformista incompleto; a pesar de algunas medidas iniciales no faltas de espectacularidad, en la mayoría de los países los grupos de interés –incluidos los intelectuales que dudan de los beneficios de un nuevo programa de desarrollo para el país– lograron reagruparse y bloquear algunas iniciativas esenciales: entre éstas, un mayor grado de privatización, la reforma de los sectores sociales y, tal vez lo más importante, una reforma profunda de las instituciones del Estado.²⁵

La apelación a la política (“Los buenos dirigentes consiguen que la población se sienta identificada con la reforma, que se convenza de que ésta no es algo que viene impuesto desde el exterior”²⁶) coloca al BM en una “oposición” al FMI que es de tipo táctica. Hay diferencias en la concepción de las políticas económicas sólo en la forma de aplicarlas (mayor gradualismo,

haya sido investido de un significado que es notablemente diferente del que yo pretendí y que hoy sea usado como sinónimo de lo que a menudo se llama ‘neoliberalismo’ en América Latina, o lo que George Soros (1998) ha llamado ‘fundamentalismo de mercado’” (Traducción de la autora).

24 Banco Mundial, *Informe sobre el Desarrollo 1997*, p.38.

25 Fragmento de la conferencia de Sebastián Edwards en el Centro de Estudios Públicos de Chile, en agosto de 1997: “¿El fin de las reformas latinoamericanas?”. Santiago, *Estudios Públicos* núm. 69, enero 1998, p.71. Edwards fue el Economista en Jefe para América Latina del Banco Mundial.

26 BM. Informe sobre el Desarrollo 1997, p.16.

algunas regulaciones estatales para evitar descontroles económicos). Su discurso contra el “minimalismo” estatal de los “fundamentalistas del mercado” es falaz porque el Estado ha sido y es un instrumento central de intervención al servicio del gran capital. Sólo que en el contexto de crisis social y política debe aumentar las funciones de control para: 1) dar absoluta seguridad jurídica y política a las inversiones privadas, y 2) neutralizar a los actores colectivos que ya resisten las reformas económicas pendientes, además de crear una “nueva mentalidad respecto al desarrollo”.

En la caracterización de los obstáculos para esa función estatal introducen descriptivamente problemas reales (ineficiencia, corrupción, clientelismo) a atacar con políticas de *transparencia y Estado de derecho*, con lo que cautivan a no pocos sectores críticos que identifican esos objetivos con sus propias demandas democráticas. Claro que nada dicen sobre que esos “defectos institucionales” son consustanciales al patrimonialismo estatal burgués con que se ha reestructurado el capitalismo. Por el contrario, los atribuyen a las “conductas desviadas de los pobres para acceder a recursos”²⁷.

Bajo esas apariencias democratizadoras, las reformas de “segunda generación” transitan por otros caminos y se intensifican en los nuevos contextos de crisis social y política. Con ellas se busca lubricar (sic) la ofensiva neocolonial del capitalismo transnacional urgida por la crisis mundial, con un Estado de derecho *ad hoc*: Estados latinoamericanos que: 1) dan el marco legal, la infraestructura y los recursos para la apropiación transnacional de todas las fuentes de energía (petróleo, electricidad); de los recursos naturales que serán absolutamente escasos dentro de cincuenta años en los países desarrollados (agua, otras fuentes de biodiversidad)²⁸; de lo que queda de la banca nacional; de medios de transporte para el control estadounidense de todo el comercio regional institucionalizado en el ALCA, y para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo; 2) dan

27 Ese argumento resulta más potable que los de Mario y Álvaro Vargas Llosa, que atribuyen esas “taras” estatales a la izquierda latinoamericana. Véase: Álvaro Vargas Llosa et. al., *Manual del perfecto idiota latinoamericano*. México, Plaza y Janés, 1996.

28 Así lo reconoce el informe de inteligencia norteamericana: *Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts*, publicado en diciembre del 2000 por la Junta Nacional de Inteligencia para el Exterior bajo la autoridad del director de la CIA, George J. Tenet, y preparado bajo la dirección del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC por sus siglas en inglés), al mando de John Gannon.

el marco legal para el control militar de Estados Unidos sobre el territorio latinoamericano, para garantizar sus objetivos neocoloniales mediante acciones de contrainsurgencia y *guerra de baja intensidad*²⁹; 3) dirigen su monopolio de la fuerza legal y represiva para dar seguridad a la propiedad, y 4) que mediante diversas estrategias institucionales buscan neutralizar o disgregar la potencialidad crítica de los dominados.

El Plan Puebla Panamá como prolongación desde el norte del TLCAN, en el Sur el Plan Colombia en el marco de la Iniciativa Andina, el debilitamiento del Mercosur³⁰ y los intentos golpistas en Venezuela, son las tenazas más visibles de la ofensiva transnacional neocolonial y que tendrían al ALCA como superestructura jurídica.

Pero, como se señaló, la estrategia es mucho más compleja y diversa, con participación de diversos organismos internacionales y regionales que amarran³¹ las políticas locales. Su visualización es difícil, pues van apareciendo como acciones o políticas aisladas, sin una secuencia previsible, tal como aconsejan los neoinstitucionalistas³². Un “rompecabezas”, como

29 Ver el *Informe Santa Fe IV*, aspectos centrales publicados en *Latin America Today* (versión electrónica) del 11 de junio de 2000. El “11 de septiembre” ha servido para subordinar más a los gobiernos latinoamericanos al militarismo norteamericano en la región, notablemente incrementado desde comienzos de esta década. La aceleración del Plan Colombia como plan maestro, la instalación de bases militares de Estados Unidos en Manta (Ecuador) y Aruba. Las maniobras en Vieques (Puerto Rico), en el Chapare (Bolivia), en el Chaco (Paraguay), las maniobras Cabañas 2000 y 2001 en Argentina; acciones “contra el dengue” en Misiones (Argentina). El intento desde el 2000 de transferencia de la Base de Lanzamientos de Alcántara (Maranhao, Brasil) a Estados Unidos y en 2002 de instalación de una base en Tolhuim (Tierra del Fuego, Argentina). La creación en 2002 del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos (que abarca Alaska, Canadá, Puerto Rico y México); la participación de la Armada mexicana, por primera vez en la historia, en las Operaciones Unitas en el Pacífico frente a Colombia; el control sobre la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) después del 11S; el proyecto de instalación de una Academia de Policía para América Latina en Costa Rica, etcétera.

30 La actual embajadora de Estados Unidos en Brasil, Donna J. Hrinak, fue durante cinco años negociadora del TLCAN y embajadora en Venezuela posteriormente.

31 El “amarre” vía convenios internacionales es una de las tácticas de “convencimiento” planteada por el BM a los países.

32 La “inconsistencia cronológica” es criticada por el BM, pues “...una diferencia básica entre los programas de estabilización y las reformas institucionales es precisamente la secuencia en que se van absorbiendo los costos y beneficios de cada reforma [que] imponen retos políticos especiales” (p.32). Un ejemplo claro son las reformas educativas, que recomiendan hacerlas “en pequeños segmentos en áreas” y no de manera generalizada desde el comienzo (p.109). Banco Mundial, *Más allá del Consenso de Washington*, op. cit.

señala Fermín González, en el que es “invisible la figura final a construir y la relación oculta entre sus piezas”³³.

El papel asignado al Estado latinoamericano no es cualitativamente distinto en cuanto a su instrumentalización neo-oligárquica por un bloque de poder transnacionalizado, que convierte sus excluyentes intereses en interés público. Pero plantea una complejidad de ámbitos y diferenciación de formas de relación entre dominantes y dominados que no ha sido aún captada plenamente por estos últimos.

Como mencioné, la dupla *transparencia-Estado de derecho* de las políticas neoinstitucionales, explotadas como avances democráticos, son señuelos de legitimación. En realidad, el *perfeccionamiento del Estado de derecho* está al servicio del capital: se impulsan nuevas leyes del trabajo que *norman la desregulación* del mercado laboral, es decir, legalizan la flexibilización laboral (precariedad de las contrataciones, liquidación de los contratos colectivos, indefinición de la jornada de trabajo, legalización de las rebajas salariales)³⁴.

El *Informe sobre el Desarrollo 2002: Instituciones para los mercados* del BM, que complementa los de 1997 y 1998, sintetiza varias de las reformas en curso en los dos últimos años. Las reformas fiscales regresivas (incrementos del IVA, exenciones impositivas a los más ricos³⁵) son el eje de la “modernización administrativa” que concentra funciones en el Poder Ejecutivo. Por cierto, el arriba citado Informe del 2002 recomienda que en aras de la transparencia se deleguen la recaudación fiscal y su control a los organismos internacionales (pp.102-110).

La entrega de los recursos naturales y energéticos ya no es por decreto, como en los años noventa, sino mediante reformas constitucionales o en su defecto por reformas legales para el suministro privado de servicios; se otorgan títulos de propiedad privada a las tierras comunitarias para enajenarlas³⁶;

33 Fermín González. “El rompecabezas de la dominación neocolonial”, Bogotá, Fundación para el Trabajo y la Vida, 2001, pp.1-2. Es un excelente análisis que abarca la complejidad de estas estrategias regionales y en particular el Plan Colombia.

34 Véase, por ejemplo, el sorprendente proyecto de *Ley Especial para la Reactivación del Empleo* en El Salvador, que se debate desde el año 2000.

35 En México, por ejemplo, la reforma fiscal de 2002 permite que los más ricos (decil x) sean exonerados de pagar impuestos por una cifra equivalente a 53 mil millones de dólares. Véase Julio Boltvinik, “Los ricos no pagan impuestos”. *La Jornada*, México, 12 de octubre de 2001, p.38. Y las transacciones en la Bolsa no pagan impuestos.

36 “Si la tenencia de tierras es segura, un mercado inmobiliario eficiente que permita la

se legaliza la biopiratería transnacional como *propiedad intelectual* y se le encubre como proyectos ambientalistas. Significativamente, a esta temática está dedicado el *Informe sobre el Desarrollo 2003: Desarrollo sustentable en un mundo dinámico. Transformación de instituciones, crecimiento y calidad de vida del BM*.

El nuevo protagonismo del poder judicial tiene una direccionalidad inequívoca para dar seguridad al capital: la *judicialización* o *criminalización de la protesta* en cualquiera de sus manifestaciones es la forma que adopta la “defensa del estado de derecho”³⁷. En tanto que jamás condena los fraudes y robos de los empresarios-gobernantes-narcotraficantes, excepto algunos casos “ejemplarizantes”³⁸ con fines legitimadores. El poder judicial contribuye a eliminar obstáculos a los megaproyectos transnacionales negando los derechos jurídicos de los afectados³⁹. Y en Venezuela, en septiembre de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia “resolvió” por mayoría que “no hubo golpe de estado” contra el presidente Hugo Chávez.

Las políticas de *transparencia* son las que más confusión crean, porque difícilmente podría negarse la importancia del combate a la corrup-

transferencia de derechos de un propietario (o un titular de derechos de uso) a otro puede contribuir a aumentar la productividad, ya que transferiría la tierra de los cultivadores menos eficientes a los más productivos” Véase BM, *Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002*, p.35. Hernando de Soto, también asesor del presidente Fox en estas reformas, argumenta que los pobres en realidad son muy ricos, sólo que por el estado informal de su propiedad inmobiliaria no la han podido convertir en capital. Calcula que en América Latina y el Caribe su valor es billonario en dólares (millón de millones):1'760,000 millones de dólares. Véase *El misterio del capital* (2000), México, Diana, 2001, p.66. Esas son las magnitudes de lo que pretenden enajenar.

37 Hasta Guillermo O'Donnell cuestiona que “actualmente las reformas legales y judiciales (y la mayor parte de los fondos internacionales e internos destinados a apoyarlas) están fuertemente orientadas hacia los intereses apreciados de los sectores dominantes (básicamente el derecho comercial interno e internacional, ciertos aspectos del derecho civil, y los aspectos del derecho penal más puramente represivos)”, en lugar de que el estado de derecho garantice los derechos sociales y civiles de toda la población. Véase “La irrenunciabilidad del Estado de Derecho”, Barcelona, *Revista Instituciones y Desarrollo* núm. 8 y 9, 2001. Tomado de la Biblioteca Virtual del Instituto Internacional de Gobernabilidad, p.26 en esa versión.

38 Sólo acciones ejemplarizantes son recomendadas. Ver *Más allá del Consenso de Washington, op. cit.*

39 El Plan Puebla Panamá es antagónico al derecho de los pueblos indios sobre sus territorios. En septiembre de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana renunció a considerar las 322 controversias constitucionales interpuestas por comunidades indígenas de todo el país contra la inconstitucionalidad de la reforma constitucional sobre derechos indígenas, votada por la derecha en el Congreso de la Unión poco después de la marcha zapatista.

ción. Pero las apariencias engañan. *Transparencia Internacional* (TI), el referente obligado de todas las iniciativas en América Latina, es una “ONG” que opera como brazo ejecutivo del BM con un claro papel injerencista. Es financiada, entre otros, por el BM, la USAID, las transnacionales petroleras, de electricidad –entre las que se destacan Enron y su empresa contable Arthur Andersen, envueltas en los sonados casos de fraude y corrupción en Estados Unidos–, fabricantes de armas, farmacéuticas acusadas de biopiratería y fundaciones como la Ford, MacArthur, Open Society Institute (de Georges Soros)⁴⁰. Sus documentos son copia fiel de los del BM: la corrupción se reduce con más liberalización de los mercados, privatizaciones y eliminación de regulaciones estatales⁴¹. Con las leyes de Libertad de la Información que promueve TI (incluidas en el apartado Negocios) ofrece el servicio de la “ONG” The International Records Management Trust⁴², que trabaja con países en desarrollo para organizar los registros de información de los gobiernos y resguardarlos cuando éstos no estén en uso por las instituciones; su director fue funcionario del BM para África y América Latina. TI también participa en acciones para facilitar el trabajo de Interpol, promover la revisión de leyes de extradición⁴³, etcétera.

En México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (junio de 2002), Transparencia México (TM) integra la dirección del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que, en períodos de siete años, tiene autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y facultades para definir los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, resolver las controversias y las demandas ciudadanas de acceso a la información, entre otras. Asimismo, TM ha sido incorporada a la dirección del recientemente creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, directamente controlado por el Poder Ejecutivo y en el que participan, entre otros, los

40 Peter Eigen, director de TI, trabajó 25 años en el BM para África y América Latina. Véase: www.transparency.org

41 Véase, por ejemplo, Daniel Kauffmann y Cheryl Gray, “Corrupción y desarrollo”, Washington DC, Banco Mundial, *Finanzas y Desarrollo*, marzo 1998, p.10.

42 Véase: www.irmt.org

43 “Los países industrializados tienen que desempeñar un papel esencial en la asistencia para el mantenimiento de la integridad nacional, en una gran cantidad de países en desarrollo y países en transición”. TI *Source Book* 2000, p.10.

empresarios, sectores de la Iglesia católica⁴⁴ y el sindicato de maestros (SNTE), histórico sostén corporativo y corrupto del PRI, hoy aliado del presidente Fox.

Las reformas educativas son un eje del Consenso de Santiago, “fundamentales para los intereses empresariales”, para la gestación de una “nueva mentalidad” y espacio privilegiado para el control social, en consonancia con el manual de manejo de conflictos que ofrece el BM: cambio de secuencia de las reformas cuando son inicialmente rechazadas; dispersión de la información sobre las mismas; cooptación de dirigentes sindicales; diferenciación de ingresos con criterios de selectividad; mecanismos de opinión y evaluación de la “sociedad civil” (empresarios, Iglesias, padres de familia); descentralización financiera y competencia entre escuelas mediante sistema de becas focalizadas, etcétera. Atravesando todas las políticas, se reivindica una forma de “participación” de los implicados (“dar voz”) sobre proyectos definidos previamente, con el fin de “que asuman esos proyectos como propios”.

El Estado de derecho y la democracia representativa, como marcos de estas estrategias, permiten ciertos márgenes de manejo político a corto plazo; pero al mismo tiempo tensan las contradicciones y conflictos por la radicalización de la ofensiva capitalista que facilitan. Por eso la apelación a la represión policial y militar directa es cada vez más frecuente.

La derecha tiene conciencia de los escenarios de crisis. Para retener el control político mueve otras piezas del rompecabezas con el pragmatismo que la caracteriza, con éxitos diversos según sus propias capacidades y según la eficacia política de los actores populares y de la izquierda. Es posible interpretar así los apoyos de última hora que políticos, empresarios e intelectuales de la derecha brasileña dan a la candidatura de Lula⁴⁵ no

44 La cúpula de la Iglesia católica es ultraconservadora. Recientemente, el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano le pide al presidente Fox “firmeza” para alcanzar “certezas jurídicas para la inversión, reforma del Estado, combate a la corrupción e inseguridad pública, reformas fiscal, laboral y energética”. Véase: *Participación solidaria para afianzar la transición democrática*, 26 de septiembre de 2002.

45 Además de la alianza electoral con el empresario José Alencar como vicepresidente, se suma el apoyo de ex presidentes como José Sarney e Itamar Franco; del político Antonio Carlos Magalhaes; de la élite empresarial paulista como Roberto Jéha; de Roberto Mangabeira Unger, el famoso neoinstitucionalista brasileño conectado a México con Carlos Salinas de Gortari y Jorge Castañeda.

sólo para defender sus intereses empresariales ante el ALCA, sino también para tratar de desnaturalizar el programa de gobierno del Partido de los Trabajadores, en un país con una crisis económica apenas contenida y con un pueblo movilizado. Parte de esas movidas estratégicas es el objetivo de expropiarle el discurso crítico a la izquierda.

Stiglitz: salvar al sistema

La crisis argentina le da la oportunidad a Joseph Stiglitz para un activismo mediático con audiencia asegurada en toda América Latina, con el que busca proyectarse como la voz más autorizada contra el “neoliberalismo fondomonetarista”. Sus objetivos políticos quedan más claros en el libro *El malestar en la globalización*⁴⁶ que acaba de publicar: ejercer un liderazgo intelectual y moral en la crítica al neoliberalismo para condicionar el debate de las alternativas a los horizontes sistémicos.

Para ganar credibilidad moral, elabora un retórico y bastante cínico deslinde de las políticas actuales, que sólo el desconocimiento del papel del BM bajo su conducción permite hacer creíble. El soporte de su argumentación es una muy interesante descripción de los efectos negativos de las políticas fondomonetaristas. Sin embargo, la exposición argumental está plagada de contradicciones, consustanciales a la postura dual que quiere presentar como crítico del neoliberalismo pero también como defensor del capitalismo realmente existente. Contra sus propias afirmaciones, termina por explicar la crisis capitalista como producto de una conspiración del FMI cual vocero tecnocrático del sector financiero. Como elude toda consideración sobre las dinámicas de la acumulación capitalista, atribuye la fuerza del “sector financiero” a las decisiones de esos funcionarios: “políticas erróneas”. La “alternativa” es democratizar la forma como se eligen los miembros del FMI. Desde luego que las discrepancias en el terreno de la gestión económica (mercado-regulaciones) tienen gran importancia en el corto y mediano plazos –en lo que su discurso cobra fuerza–, pero su posición como intelectual orgánico

46 Joseph Stiglitz. *El malestar en la globalización*. Madrid, Taurus, abril 2002.

del gran capital transnacional lo conduce a ideologizar el análisis de la crisis porque pide más de lo mismo pero bien ejecutado⁴⁷.

Cuando critica la falta de perspectiva sistémica de los fondomonetaristas, apunta al mensaje central de su exposición: advertir que las contradicciones y conflictos sociales en los países subdesarrollados están llegando a un punto extremadamente peligroso⁴⁸. Afirmar categóricamente que el capitalismo ha llegado a una encrucijada y que, tal como lo hizo Keynes ante la Depresión de la década de los treinta, el capitalismo debe ser salvado⁴⁹. Probablemente su deseo sea pasar a la historia jugando ese papel.

Es político su esfuerzo por convencer a los que luchan contra el neoliberalismo de que la lucha debe ser contra una “globalización mal gestionada” y no contra el capitalismo. Es desde su pragmática visión de poder de clase que afirma sin pena estar del lado de las víctimas e incluso como aliado de los movimientos de Seattle, Praga, Washington y Génova. Más allá de la utilidad política de contar con una estentórea voz disonante en esta coyuntura, no puede haber confusión sobre el carácter normativo

47 Como señalaba Samir Amin dos años atrás: al partir de la “particular visión unilateral de la ideología de la razón burguesa (de que) la acumulación sólo tiene aspectos positivos, lo negativo del fenómeno, cuya realidad no puede ser negada -las crisis y sus consecuencias (desempleo, pobreza, inseguridad, marginación), el subdesarrollo de las periferias del sistema mundial- están siendo atribuidas tanto a causas específicas ajenas al campo de operación de la lógica de expansión del capital (demografía, errores políticos en la gestión de la expansión capitalista, y en especial factores culturales) como al funcionamiento ‘imperfecto’ de los mercados. Si fuera perfecto, se aduce, el mercado produciría un sustantivo y continuo crecimiento benéfico para todos los humanos [...] La destrucción producida por la acumulación de capital se refiere a todas las dimensiones de la realidad humana y social; es, simultáneamente, la destrucción del ser humano, de la naturaleza y de los pueblos. Más aún, la magnitud de esta destrucción no disminuye con el progreso de la acumulación, como promete el discurso ideológico dominante; por el contrario, la destrucción crece y, a la fecha, se ha convertido en una seria amenaza para la civilización”. Véase: “La dimensión destructiva de la acumulación de capital”, presentado al primer Foro Social Mundial en 2001. Biblioteca de las Alternativas, FSM 2001.

48 Respecto al “colapso argentino en 2001” Stiglitz señala que: “Dada la alta tasa de desempleo durante casi siete años, lo asombroso no es que los ciudadanos se amotinaron sino que sufrieran en silencio durante tanto tiempo”. *Ibid*, p.44.

49 Dice Stiglitz: “A Keynes lo pusieron entonces en la picota: sus críticas al mercado le granjearon la acusación de socialista; y sin embargo en un cierto sentido Keynes fue intensamente conservador. Abrigaba una creencia fundamental en los mercados: si el Estado corregía este único fallo, la economía podría funcionar de modo razonablemente eficiente. No aspiraba a una sustitución cabal del sistema de mercado; pero sabía que si esos problemas básicos no eran abordados, las presiones populares serían gigantescas”, *op. cit.*, p.310.

de su discurso: “Si no hay reformas la reacción que ya ha comenzado se extenderá y el malestar ante la globalización aumentará. Ello sería una tragedia para todos [...] Aunque económicamente el que más perderá será el mundo en desarrollo, habrá ramificaciones políticas más amplias que afectarán también al mundo desarrollado...”⁵⁰.

Stiglitz sabe que tiene receptividad en importantes sectores de la izquierda que también separan el neoliberalismo del capitalismo. Esta autonomización supone otras: la de las políticas económicas respecto del poder de la burguesía; la de la hegemonía del capital financiero respecto de los grados de concentración que tiene el capital hoy, aspectos fundamentales que la izquierda no discute. En virtud de un dato objetivo del momento, como es que la sustitución del capitalismo no está en el horizonte inmediato porque no hay fuerzas sociales y políticas que puedan hacerlo, el trasfondo es la renuncia al socialismo (anticapitalismo) ante el fracaso de las autodenominadas experiencias socialistas. También aparece como realismo político el posibilismo que nace de la confusión entre anticapitalismo y maximalismo, o entre reforma y administración de lo existente, lo que impide que los proyectos de corto y mediano plazo de la izquierda tengan proyección estratégica⁵¹.

Pero en aras de la construcción necesaria de un pensamiento y política independientes, la izquierda debería cuidarse de conferirle a Stiglitz el liderazgo intelectual que pretende.

Lo social y lo político: discrepancias, coincidencias, responsabilidades

A la luz de las estrategias dominantes es evidente que la necesaria articulación entre lo social y lo político no es un asunto sólo de discusión teórica o de preferencias doctrinarias. Entenderlo así depende de un mayor conocimiento de la realidad, pero también de la clarificación de los

50 J. Stiglitz, *op. cit.* pp.310-311.

51 No se “niega la lucha por reformas, cuando justamente estamos en una posición en general defensiva, sino que exige calificar con rigurosidad la orientación estratégica de cada una de ellas. Pueden ayudar y acumular en dirección a la transformación social, como a corto o mediano plazo pueden afirmar la dependencia”, Fermín González, *op. cit.*, p.7.

problemas conceptuales que están incidiendo en las divergencias políticas y éticas en el seno de la izquierda.

Las críticas a la integración de muchos de los partidos con representación parlamentaria a las lógicas y prácticas sistémicas se manifiesta como un cuestionamiento ético al elitismo, prebendismo y a su distanciamiento de las luchas sociales. Pero la justeza de la crítica en el terreno ético se traduce en una negación en general de “la política”, “los políticos” y “los partidos” que exhibe una coincidencia conceptual: pensar la política en los términos impuestos por el liberalismo (*se hace política sólo a través del sistema representativo*). A partir de esta concepción liberal de la política, muchos partidos se adaptan o subordinan a las reglas del juego del parlamentarismo⁵², que en los términos actuales de la democracia gobernable los distancia de los sectores sociales que declaran representar. Aunque no lo parezca, el referente conceptual es el mismo cuando, desde posturas opuestas, se asume que “la política es así” y se rechaza no *esta forma de concebir* la política, sino a la política en general.

La hegemonía ideológica liberal se observa en la aceptación de la premisa de la relación dicotómica entre Estado y sociedad, lo que conduce a pensar la sociedad civil en sus dos dimensiones de *sociedad como mercado*: como una intermitente sociedad política (electorado) en la perspectiva parlamentarista, y como una configuración de redes de intercambios plurales para los grupos opuestos. Igualmente comparten una visión reduccionista del Estado asimilado a las instituciones como *locus* del poder, separándolo de los otros ámbitos en los que éste se genera; sea para limitar a ellas el ámbito de la política, o para negar la política negando a las instituciones.

Ahora bien, el rechazo en sí a la política y los partidos no es privativo de algunos sectores de izquierda, es la manifestación más vasta de la crisis del modelo político de gobernabilidad en su modalidad de crisis de representación. Así se observa incluso en países donde los partidos de izquierda no tienen representación parlamentaria o desde antes que la tuvieran. De hecho, la crisis de representación la padecen inicialmente los partidos que representan los intereses burgueses porque en las condiciones

52 Entendido en este caso como la concepción y prácticas que acotan la política al ámbito institucional, bajo reglas que garantizan que la representación de intereses diversos no pongan en riesgo la dominación capitalista, y no en su acepción como forma de gobierno.

actuales de reproducción del capitalismo ellos son antagónicos con la agregación subordinada de los intereses populares.

Desde luego que cuando la izquierda mimetiza sus prácticas político-electorales con las de los otros partidos, bajo las lógicas del mercado político, queda entrampada entre un aumento de votos en el corto plazo y una pérdida de fuerza política que incluso puede ocasionarle una disminución o estancamiento del electorado en el mediano plazo. Cuando el “todos los políticos son iguales” incluye a los de izquierda, los rechazos se convierten en decepción y frustración⁵³.

Es interesante observar que en las posturas anti-partido de algunos sectores de izquierda están también confundidas, aunque en menor grado, críticas anteriores al vanguardismo, verticalismo o antidemocratismo de los partidos, que tomaron fuerza con la crisis del llamado socialismo real y bastante antes de que los partidos aumentaran su incidencia electoral. La inexistencia de un balance riguroso de esa crisis, y la salida fácil y elusiva en términos autocríticos de atribuirle a aquélla la causalidad absoluta de las insuficiencias o defectos de los partidos latinoamericanos, produjo también vacíos que fueron llenados por la crítica burguesa a los partidos. Hay una maraña de discrepancias que ni siquiera están identificadas y despejadas como tales, que da como resultado la incapacidad para debatir y avanzar en los desafíos impuestos en la coyuntura.

Una explicación histórica de las debilidades analíticas de la izquierda para encarar su proyecto político en las nuevas circunstancias es que en la mayoría de países ésta es una realidad inédita, porque la democracia liberal no fue el modelo político predominante en la región antes de los años noventa. Cuando la izquierda se enfrenta a la democracia gobernable, cree descubrir en ella la democracia representativa en general. Hasta los años setenta, sólo en Chile y Uruguay, y en cierto modo en Costa Rica, se llegó a construir un proyecto político de cambio en el marco de la democracia representativa, fundamentado en la gestación de fuerza social independiente y clasista como fuente de poder para incidir en las instituciones para transformarlas. En la actualidad, incluso ha habido retrocesos teóricos y políticos en esos países (especialmente en Chile), sea porque aún no se

53 La discusión del parlamentarismo, de la crisis de representación de los partidos y de las experiencias de los partidos de izquierda en el contexto de la democracia gobernable la desarrollo en “El desprestigio de la política: lo que no se discute”, *op. cit.*

supera la derrota de los años anteriores o por el avance del pensamiento liberal conservador que comentamos.

Hay incapacidad para superar las debilidades analíticas y prejuicios para pensar en el partido, no como una máquina encumbradora de élites, sino como un instrumento político que tiene como tareas la promoción de la organización independiente de la diversidad popular y su coordinación hacia una dirección de acción común, así como la de proporcionar a cada grupo y sector social la visión de conjunto del funcionamiento sistémico que permita universalizar y resignificar los particularismos en la perspectiva del cambio. Estas incapacidades y prejuicios son un obstáculo para encarar la responsabilidad de convertir el rechazo al neoliberalismo en una fuerza política equivalente. Esto es, en una voluntad colectiva organizada capaz de modificar la fuerza de los dominantes.

Aunque en los últimos años se observan importantes avances en la conversión del malestar social en fuerza social organizada y en lucha, lo que en sí mismo tiene un impacto político, no siempre estas fuerzas colectivas en la calle impiden que los grupos dominantes compensen las pérdidas coyunturales de fuerza con las que ya tienen cristalizadas en las instituciones para perpetuarlas. Ejemplos sobran: en términos generales no se han podido frenar las políticas educativas neoliberales; no se han podido frenar las violaciones a las leyes que protegen el trabajo o la aprobación de las que consagran la impunidad del capital; se lucha por reformas constitucionales a favor de los derechos indígenas pero no hay representaciones en el parlamento que las hagan posibles. “Que se vayan todos”, dicen en Argentina, pero hay que sacarlos y sustituirlos.

En la lucha por transformar la correlación de fuerzas que las instituciones representan, no estamos hablando sólo del sistema representativo. Pero hay que admitir que los cambios en este nivel son una vía, no la única, que no puede despreciarse porque es la más factible hoy para amplios sectores sociales. Como decía Frei Betto, incuestionable luchador social y político, pocos días antes de las elecciones en Brasil en un llamado público a acudir a votar: “Quien tiene asco de la política es gobernado por quien no lo tiene. Es eso lo que los malos políticos, los corruptos y demagogos quieren de nosotros, repugnancia a la política. Así ellos toman el control de la banca

y hacen los negociados que a ellos les conviene, siempre financiados con nuestro dinero”⁵⁴.

En este sentido, la experiencia boliviana aporta enseñanzas importantes⁵⁵. El Movimiento al Socialismo (MAS) nace como instrumento político del seno de las luchas campesinas e indígenas, de su proceso de maduración orgánica y de su capacidad para articularse con las luchas de pobladores, estudiantes, trabajadores urbanos. Los votos a Evo Morales condensan esa fuerza social y política, que podrá reforzarse con la influencia que gana en el parlamento con una numerosa bancada indígena.

Por lo demás, la participación en elecciones no ha sido sólo una vía de encumbramiento de mezquindad política o de transformación de parte del liderazgo de izquierda en conductas elitistas detestables, como hoy se lo ve. También ha permitido constituir gobiernos cuyo papel y logros democráticos quedan frecuentemente opacados por las prácticas electoralistas de los mismos partidos. Para más de 80 millones de latinoamericanos⁵⁶ no es indiferente que se atenuaran, frenaran o revirtieran varios aspectos de las estrategias dominantes, desde las sociales hasta las represivas, aunque las experiencias más estrictamente locales no hayan podido modificar las políticas económicas generales que definen las condiciones de sobrevivencia. No obstante que es uno de los aspectos más positivos del accionar político de la izquierda partidaria, la gestión de gobierno todavía no es concebida como parte indisoluble del proyecto político más general, en lo que también puede desgastarse el impulso transformador. La necesaria relación de lo social y lo político se evidencia también a este nivel porque se han consolidado más aquellas experiencias que han promovido participación con capacidad de decidir (que es la única participación democrática)

54 Frei Betto. “Brasil: Elecciones, recta final”. Servicio informativo Alai-Amlatina, 30 de septiembre de 2002.

55 Véase Washington Estellano, “Bolivia: la agonía del modelo”, *Viento Sur* (España), agosto 2002.

56 Las dos ciudades más populosas de América Latina (Ciudad de México y Sao Paulo) son gobernadas por la izquierda. En Brasil, el PT gobierna cinco estados, siete capitales estatales, 179 ciudades de entre 200 mil y 10 millones de habitantes. El FMLN gobierna la capital salvadoreña desde 1997 y el 78 por ciento de los municipios. El Frente Amplio gobierna sobre la mitad de la población uruguaya. Tras gobiernos municipales de Causa R en los noventa, hoy el Movimiento Bolivariano gobierna Venezuela. El Frente Sandinista gobierna Managua y otros municipios; en Colombia la izquierda gobierna dos Departamentos.

y que han promovido formas de organización permanente de la población como fuentes de fuerza social y conciencia.

Venezuela es un buen ejemplo de la necesidad de la fuerza política. El contenido popular del proyecto que encabeza Chávez convoca el apoyo de las masas pobres, pero su capacidad para defenderlo viene de nuevas formas de organización (Círculos Bolivarianos). Pero estas formas de organización política no son suficientes, falta organización social independiente en sindicatos, centros educativos, entre la burocracia media y baja. Y desde allí la derecha conspira.

El previsible triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil en la segunda vuelta del próximo 27 de octubre es de una enorme trascendencia, será una gran sacudida a las piezas del rompecabezas de la dominación transnacional neocolonial. Pero también nos proporcionará un verdadero laboratorio de análisis sobre los desafíos actuales de la izquierda, de su capacidad para convertir en una gran fuerza política la voluntad popular contraria al neoliberalismo, para garantizar que las fuerzas sociales y políticas populares impidan que las alianzas electorales con sectores de la burguesía neutralicen el sentido social del gobierno, que se convertirá en un muy claro escenario de lucha de clases.

En la nueva coyuntura, la izquierda se enfrenta a una gran tarea intelectual para revertir su vaciamiento teórico y el que también sufre la academia, para enfrentar las debilidades políticas y poder pensar con independencia en un proyecto de transformación. Pero los tiempos para lograrlo no los puede determinar por sí misma porque no actúa sola.

El sectarismo es un obstáculo enorme para las grandes tareas; superarlo exige entender que no es una enfermedad congénita sino manifestación de la carencia de un proyecto de poder. Se necesita generosidad y responsabilidad. Los partidos tienen que asumir las consecuencias éticas de sus prácticas parlamentaristas, pero la izquierda no partidaria debe reconocer los aportes y los sacrificios de las luchas de las bases partidarias.

En épocas de crisis no hay engaños posibles. En ésta, las responsabilidades colectivas están acicateadas por el hambre y la desesperación de millones de latinoamericanos. Nadie tiene derecho a convertir las posibilidades de cambio en frustración.

América Latina: estrategias dominantes ante la crisis (2003)*

A juzgar por los discursos actuales, se está llegando a un consenso contrario al neoliberalismo. Desde hace algunos años, muchos políticos y gobernantes latinoamericanos, así como directivos e intelectuales de organismos financieros internacionales, deslindan de sus pasadas filiaciones neoliberales. Después de la estrepitosa crisis en Argentina, que había sido el ejemplo consentido de las virtudes del *modelo*, la negación es todavía mayor.

Las otrora bondades del irrestricto mercado han dado paso a un “redescubrimiento” del necesario papel del Estado para corregir las “fallas” de aquél, que se ha demostrado incapaz de “resolver” la pobreza, no obstante que el crecimiento fue algo mayor en la década de los noventa que el nulo de la anterior. La constatación misma –aunque obvia– se presenta como un cambio de sensibilidades frente al doctrinarismo de las décadas pasadas, bajo la forma de una crítica al “Consenso de Washington” de parte de algunos de sus principales gestores y promotores; con mayor notoriedad del Banco Mundial pero también del Banco Interamericano de Desarrollo y otros centros de elaboración estratégica del sistema capitalista. Tanto así, que hay quienes hablan de la existencia de un “consenso posliberal” comprometido a reencaminar el desarrollo en nuestra región.

La proliferación de discursos que desde el sistema critican algunas de las *verdades* del doctrinarismo neoliberal, abona el debate que la propia realidad latinoamericana instaló en los hechos. La aparición de diferencias entre quienes comandan la reproducción del sistema es vista por muchos como un signo esperanzador de que surjan de su seno iniciativas de cambio de los aspectos más negativos impuestos por el capital financiero.

* Publicado en el libro de Naum Minsburg (Coord.), *Los guardianes del dinero. Las políticas del FMI en Argentina*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003. También en *Revista Espacio Crítico* núm. 1, Bogotá, segundo semestre de 2004.

En América Latina se escuchan voces de industriales nacionales que lo reclaman, pero son pocos los que quedan y no tienen el peso suficiente como para atribuirles estos cambios de opinión.

Lo cierto es que las coincidencias discursivas hacen muchas veces difusas las diferencias entre izquierda y derecha: todos hablan de justicia social, de equidad, del “fracaso” del neoliberalismo. Y en sectores de izquierda están surgiendo expectativas sobre posibles convergencias que evitaran que los objetivos del desarrollo sean un campo de confrontaciones de intereses contradictorios; se sabe que las fuerzas propias no bastan para cambiar los fundamentos del orden capitalista actual en el corto plazo. En otras palabras, es la esperanza de gobiernos progresistas que sean “viables”, tolerados por los centros de poder económico. Se buscan acercamientos, se eluden confrontaciones, se adaptan programas y discursos, se hacen propias muchas de las políticas de “reformas” impulsadas por los *nuevos críticos*. En la práctica, esto da aliento al objetivo que persiguen los sectores dominantes con la renovación de su discurso: definir, o al menos incidir, en la *agenda* de discusión del cambio “posible”.

La agenda “posliberal” tiene como premisa que es dissociable el neoliberalismo del capitalismo: critica algunos aspectos del primero para reafirmar el segundo. El neoliberalismo sería sólo el paquete de medidas económicas sintetizadas por John Williamson en 1989 como “Consenso de Washington”¹, y éstas serían independientes de las relaciones de poder entre las clases, olvidando que son relaciones que el capitalismo neoliberal modificó a profundidad en todos los ámbitos de la vida social, que los *nuevos críticos* no proponen alterar. Es cierto que cualquier cambio de políticas puede tener resultados visibles en lo inmediato, dadas las terribles condiciones de existencia de las amplias mayorías latinoamericanas, pero serían efímeros si no forman parte de un proceso de modificación de las

1 Se refería a los diez temas de política económica sobre los que había consenso: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; garantía de los derechos de propiedad. En “What the Washington Consensus Means by Policy Reforms?”, en J. Williamson (ed.), *Latin American Adjustment: How Much has Happened*, Washington DC, The Institute for International Economics, 1990.

relaciones de poder entre dominantes y dominados en que se sustenta el orden social y económico actual.

El cambio de políticas debe discutirse. Pero de ahí a aceptar que puedan provenir de las élites capitalistas, es simplemente cerrar los ojos ante lo que ha sido la experiencia latinoamericana de estos últimos años con la puesta en práctica de las políticas promovidas por el denominado consenso posliberal. La realidad no sólo obliga a dudar seriamente de que los discursos correspondan a las intenciones, sino a reconocer que esas políticas han contribuido a profundizar la explotación y exclusión de las mayorías latinoamericanas y la expoliación de nuestros países como tales.

Los discursos son atendibles en cuanto denotan el desprestigio del neoliberalismo y hasta como confirmación de la veracidad de las razones de quienes se le han opuesto en más de dos décadas. Pero el nivel discursivo es equívoco y distorsionante de cualquier análisis serio, más cuando, como el del denominado consenso posliberal, se formula con un lenguaje tecnicista, abstracto y ahistórico que encubre los condicionamientos políticos que hay hasta en los asuntos estrictamente técnicos y de apariencia neutra. Tomado a la letra, es imposible distinguir el componente ideológico de las formulaciones teóricas (con sus coherencias e inconsistencias internas), el carácter normativo que posee en cuanto realidad deseable, ni cotejar los dichos con la realidad concreta.

A menos que se crea en repentinas metamorfosis morales de los beneficiarios directos u orgánicos de la mayor destrucción de nuestros países y sociedades, o que se crea que es posible dissociar el discurso respecto de los sujetos y de sus objetivos e intereses concretos, sólo una perspectiva política puede explicar tales cambios en quienes comandan el sistema capitalista.

El eje del nuevo discurso, como se señalaba, es la atención privilegiada a la pobreza como un deplorable pendiente del desarrollo que el “Consenso de Washington”^{*} no encaró, y que ahora sí hay que resolver. Sin embargo, el **tema** de la pobreza estuvo siempre presente como motivación manifiesta de los cambios estructurales que aquél promovió para la década de los noventa en América Latina. El *Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1990*, del Banco

* Cuando ya era “sentido común” hablar del Consenso de Washington como sinónimo de neoliberalismo, entrecomillé la frase para cuestionar su uso acrítico impuesto por el discurso de los “posliberales”. Sintomáticamente, en la primera edición de Argentina las comillas fueron eliminadas, que ahora restituyo.

Mundial (BM), está dedicado precisamente a ese tema². El segundo eje del discurso es que las instituciones tienen un papel importante para promover el desarrollo, tampoco consideradas por el “fundamentalismo de mercado del Consenso de Washington”. Tan novedoso sería este “redescubrimiento” del Estado que las propuestas se caracterizan como *neoinstitucionalistas*. Sin embargo, el *Informe sobre el Desarrollo 1991* del BM discute “las relaciones necesarias entre mercado, instituciones y sociedad”, desde premisas similares a las de las formulaciones actuales³.

En realidad, la diferencia entre las visiones promovidas en tiempos de esplendor del “Consenso de Washington” y las que desde hace algunos años proponen ir “más allá” de aquél, es que la pobreza ha pasado de ser un *tema* justificatorio para ser reconocida como un *problema*. Y el problema no es sólo que haya aumentado en la década, pues desde esas lógicas podría atribuirse a las circunstancias adversas al crecimiento económico (el “fundamento” de su resolución, ayer y hoy), sino que ahora tiene costos políticos.

En efecto, la pobreza se convierte en un problema imposible de soslayar recién cuando la resistencia de las víctimas del neoliberalismo pone en entredicho la estabilidad de las políticas y objetivos capitalistas actuales y, en algunas circunstancias y países, pone en riesgo la dominación capitalista misma. Es precisamente la lógica conservadora del poder la que explica el pragmatismo de la reconversión discursiva, pero también el de las diversas formas en que se realizan las estrategias para evitar, contener o sofocar las crecientes interpelaciones populares al orden actual; estrategias que, por lo demás, van ajustándose en función de las distintas circunstancias políticas en nuestra región.

Ésta es la intención de las siguientes páginas, con las limitaciones que impone el rigor del espacio. Se intenta mostrar, en primer lugar, que el “nuevo consenso posliberal” es, antes que un debate teórico o de instrumentos de gestión económica, una respuesta dominante a la pérdida de eficacia del modelo político que permitió administrar con éxito las contradicciones del capitalismo neoliberal hasta mediados de la década

2 Banco Mundial. *La pobreza. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990*, Washington D.C., Oxford University Press para el Banco Mundial, julio de 1990.

3 Banco Mundial, *The Challenge of Development, World Development Report 1991*, Washington D.C., Oxford University Press for The International Bank of Reconstruction and Development/ The World Bank, June 1991. Véase en particular el capítulo 7, “Rethinking the state” (Repensar el Estado).

pasada. Desde esa perspectiva es que se abordan algunas de las propuestas del *neoinstitucionalismo* como parte de esas definiciones estratégicas. Y finalmente se observan varias de las formas concretas que adoptan esas estrategias en nuestra región, y cómo adquieren modulaciones más conservadoras con la profundización de la crisis política que se verifica a partir del nuevo siglo, que tiene como acicate los severos condicionamientos impuestos por la crisis económica, sobre todo la de Estados Unidos. Esto configura un escenario latinoamericano en el que conviven la negociación política, la sofisticación de las formas de control social, la represión de las protestas, una creciente militarización y hasta nuevas *guerras de baja intensidad*, garantizadas todas por el “nuevo” Estado promovido por quienes, desde el poder, convocan a “ir más allá del neoliberalismo”.

La crisis política en el origen

Entre 1996 y 1998 puede ubicarse el período más intenso de elaboración del *consenso posliberal*. En esos años proliferan los foros de análisis que formulan políticas de “reformas a las reformas”. Todos se refieren a un nuevo momento de inestabilidad política en América Latina, al que relacionan con una creciente frustración social respecto de la democracia, a la que se ve en riesgo. Se admite que está deteriorada la legitimidad democrática que permitió a los gobiernos electos (incluido el de Chile en 1990) llevar a cabo reformas estructurales aceleradas (“terapias de *shock*”) para superar la crisis de la década anterior. Esas reformas –se dice– están perdiendo el ritmo de avance.

En la relación de fenómenos que se hace, no es la pobreza en sí misma la que pone en entredicho a la democracia, sino la inestabilidad política que aquélla provoca. Se asume que hay signos de crisis de gobernabilidad, pensada en congruencia con lo que se entiende por democracia. Una breve consideración de tal concepción es necesaria para comprender el sentido político de los diagnósticos que se hacen respecto al debilitamiento de los éxitos observados años antes.

En efecto, la reestructuración capitalista neoliberal fue exitosa en todos los ámbitos de la vida social. Además de la liberalización económica que da impunidad a la acumulación de capital, incluyó la gestación de una sociedad incapaz de enfrentar esos cambios, lo que se logra mediante

el debilitamiento del trabajo frente al capital, la fragmentación social y la hegemonía ideológica de la derecha; y también incluyó la imposición de un modelo político que permitió márgenes importantes de estabilidad e incluso legitimidad de la dominación: *governabilidad*.

Los confusos usos de este término requieren también una aclaración. Gobernabilidad (*governability*) significa estabilidad política, obediencia; es decir, dominación. Y no debe confundirse con el grado o técnicas del ejercicio de gobierno (*governance*), traducible como gubernamentalidad, gobernación y –según un anglicismo de moda– gobernanza. Son fenómenos relacionados pero no asimilables. La *estabilidad* no es necesariamente consecuencia de la *legitimidad*: la estabilidad de la dominación puede lograrse con represión, aunque los gobiernos no sean legítimos ni eficientes; las experiencias dictatoriales latinoamericanas lo demuestran⁴. Asimismo, es incorrecto asimilar *democracia* con *estabilidad* (gobernabilidad), como intencionadamente se hace para justificar un modelo de democracia que excluye y rechaza el cambio del orden económico y social (que implica la inestabilidad propia de una democracia en desarrollo), lo que en las condiciones latinoamericanas es profundamente conservador.

En este tipo de democracia liberal conservadora⁵, el sistema de partidos con representación parlamentaria cumple un papel de filtro para impedir que las demandas sociales contrarias al interés del capital puedan imponerse al Estado como políticas públicas. No sólo dejan de representarse los intereses subalternos, sino que también es función de los partidos evitar que esos intereses se expresen conflictivamente.

Este modelo conservador de democracia liberal se impuso en América Latina explotando el impacto duradero del autoritarismo y el terror de Estado, que durante varios años hizo proclives a las sociedades a jerarquizar la libertad sobre la igualdad. Los sectores dominantes ejercieron un

4 Para una discusión teórica más amplia de la gobernabilidad y las múltiples estrategias para construirla remito a otros trabajos de mi autoría, entre ellos: “Gobernabilidad como dominación conservadora”; “La democracia gobernable: instrumentalismo conservador” (ambos en este volumen); y “La crisis de la democracia gobernable”, Caracas, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol.7, núm.2, agosto de 2001.

5 Que corresponde al modelo de equilibrio planteado por Joseph Schumpeter en 1942, pero que no cumple siquiera con la premisa que él plantea en cuanto a que funciona en sociedades en las que no hay diferencias sociales muy grandes y donde existe un consenso estructural básico. Joseph Schumpeter, *Capitalismo, Socialismo y Democracia*, Barcelona, Orbis, 1983.

chantaje democrático al sostener que cualquier cuestionamiento o conflicto es una forma de desestabilización y atentado contra la democracia. Para “demostrarlo”, se resguardó la impunidad de las fuerzas armadas y su activa visibilidad por varios años. Como soporte de este modelo político se buscó un nuevo *consenso democrático elitista* en torno a la concepción liberal conservadora de la política, reducida a la elección de las élites que gobiernan y a la definición por parte de éstas de las reglas del juego del sistema político.

Una de las derivaciones de esa concepción de la política es su autonomía respecto de la economía cuyo ámbito de decisión es el mercado. Las transiciones negociadas (con la única excepción de Nicaragua) parecían confirmarlo por cuanto el régimen político cambió en términos más inclusivos, sin que cambiara el carácter excluyente de la economía. Esta supuesta autonomía entre ambas también fue *demostrada* explotando la idea de la globalización como una fuerza metafísica ajena a la voluntad política. La profecía se autocumplió porque los partidos, incluso los contrarios al neoliberalismo, aceptaron por convicción o adaptación esas máximas, que acotaron la práctica política parlamentaria principalmente a lo procedimental. La subordinación de estos partidos de izquierda a las *reglas del juego democrático* no estuvo exenta de coerción, desde la calificación de bloqueos a sus oposiciones hasta castigos directos con expulsiones de parlamentarios⁶. La cooptación y el prebendismo hicieron, muchas veces, el resto.

Pero, a mediados de los noventa, la eficacia de los partidos para imponer a los dominados estas reglas de lo admisible empezó a decaer. Para sectores cada vez más amplios, las promesas de bienestar para cuando la consolidación de la democracia permitiera el crecimiento (la “segunda transición” de la que hablaba Guillermo O’Donnell)⁷ dejaron de ser creíbles. Si la política no tiene ninguna utilidad para resolver los acuciantes problemas de sobrevivencia, de nada sirve participar en ella. La abstención electoral, que promedia el 50 por ciento en la región, demostró no ser precisamente apatía política.

6 Como las expulsiones del senador uruguayo Germán Araújo del Frente Amplio en los ochenta, y la más reciente (y finalmente fallida porque regresó y con más fuerza) del diputado Evo Morales del Movimiento al Socialismo de Bolivia, en enero de 2002.

7 Guillermo O’Donnell y Phillippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Vol.4 (1986). Buenos Aires, Paidós, 1991, pp. 77-78.

El distanciamiento respecto de los partidos limitó su influencia y capacidad de control sobre numerosos sectores sociales. Y para peor, la legitimidad del sistema representativo sólo se recuperaba cuando surgían opciones electorales creíbles a favor del cambio económico y social: a mediados de los noventa, la izquierda creció electoralmente. En muchos países aumentó considerablemente su representación parlamentaria; volvió a ganar gobiernos de capitales nacionales y estatales en Brasil (Partido de los Trabajadores), Uruguay (Frente Amplio) y Venezuela (Causa Radical); y por primera vez, en México y El Salvador triunfaron en las capitales y en otros importantes municipios el Partido de la Revolución Democrática y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, respectivamente. Poco después, el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en diciembre de 1998, constituye la mayor interpelación a la democracia gobernable y al sistema de partidos tradicionales: el abstencionismo desciende de 65 a algo más del 20 por ciento; la Asamblea Constituyente en mayo de 1999 crea una nueva institucionalidad y prácticas de representación política distintas, con mayor peso de los mecanismos de democracia directa, la ratificación y revocación de los cargos, y la inclusión de derechos sociales que han sido eliminados o han quedado sólo en el papel en los otros países. Vuelve a agitarse el tema de la “democracia delegativa” (O’Donnell)⁸, porque la única delegación de decisiones admisible es hacia las élites partidarias que reproducen la democracia gobernable.

La crisis de representación de los partidos y el ascenso de la conflictividad social son, efectivamente, los síntomas de una incipiente crisis de gobernabilidad en la región. Esto, y no la pobreza, es lo que realmente preocupa a los sectores dominantes. Es sintomático que la CEPAL registre el escenario social de 1996 de esta manera:

El último año se ha caracterizado también por un aumento de las protestas de grupos organizados de trabajadores. Las demandas son muy amplias y abarcan desde exigencias de mejores salarios a protestas contra las políticas económicas. Hubo movilizaciones en Argentina, Bolivia, Venezuela y Uruguay y recientemente se realizó una protesta nacional de campesinos y obreros en Paraguay, donde los sindicatos exigen reajustes salariales proporcionales a las alzas de precios, la legalización de las ocupaciones de

⁸ Guillermo O’Donnell, “Delegative Democracy”, en *Journal of Democracy*, Vol.5, núm.1, January 1994.

tierras, la reformulación de la política económica y el cumplimiento de las leyes laborales. En Argentina también ha habido paros generales de la CGT en protesta por las últimas medidas fiscales.

El sector del magisterio fue el que acumuló mayor cantidad de movilizaciones por mejores salarios en Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela. También exigieron mejores sueldos los empleados públicos de Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. En Perú, los petroleros protestaron contra la privatización de ese sector, mientras en Chile ha habido huelgas de los trabajadores del cobre, los mineros del carbón, los maestros, los funcionarios de los servicios de la atención primaria en salud y los trabajadores municipales. En Honduras, empleados y maestros de instituciones públicas participaron en paros y protestas, que también involucraron al sistema de salud. En Venezuela hubo una ola de movilizaciones sociales de empleados públicos, maestros y de la Confederación de Trabajadores, principal organismo sindical del país. [En Brasil] demandas y marchas de campesinos e indígenas encabezados, entre otros, por el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra. En Bolivia los productores de coca organizaron una masiva marcha hacia la Paz, en tanto que la Central Obrera Boliviana y los comités cívicos departamentales llamaron a huelga y paros nacionales y regionales.

[...] Entre los factores limitantes de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la equidad destacan la exclusión y el desigual acceso a bienes y servicios sociales, la creciente pérdida de credibilidad del sistema político, la necesidad de una reforma del Estado, y la pérdida de capacidad movilizadora y articuladora de los partidos.⁹

La crisis de representación¹⁰, que llega a afectar también a aquellos partidos de izquierda que en aras del crecimiento electoral adoptan posturas y políticas parlamentaristas, induce asimismo a otras formas de acción política no controlables por el sistema de partidos. Ése es el llamado de atención del levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994¹¹ y la creciente

9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe: *Panorama social de América Latina, edición 1996*. Santiago de Chile, febrero de 1997, pp. 151-152.

10 Análisis la crisis de representación de los partidos como componente de la crisis de gobernabilidad en el trabajo “El desprestigio de la política: lo que no se discute” (en este volumen).

11 Moises Naim, venezolano directivo del Banco Mundial dice: “Tal vez esa fecha vendría a simbolizar el día en el que el mensaje de que las reformas macroeconómicas aunque necesarias no son suficientes para propulsar a los países en el camino de la prosperidad, comenzaría a ser tomado en cuenta seriamente por políticos, funcionarios, expertos en reformas y periodistas alrededor del mundo. Después de todo, México había sido el ejemplo que usaban los promotores del Consenso de Washington cada vez que querían justificarlo.” (traducción de la autora). M. Naim, “Confusion?”, en *Foreign Policy Magazine*, Octubre 26, 1999, pp.11-12.

influencia moral que posee. Precisamente en 1996 (julio) se realiza el *Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo*, en Chiapas, convocado por el EZLN y con representantes de cuarenta países. Se le considera la primera convocatoria de lucha internacional contra el neoliberalismo, que crece incesantemente en los siguientes años.

No es casualidad, pues, que desde 1996 se multipliquen los espacios de análisis sistémico sobre el nuevo momento. Los que siguen son algunos ejemplos (no todos) de lo que se afirma (y que no siempre se demuestra). Incluyo algunas citas muy ilustrativas (y poco conocidas), así como la mención de algunos participantes y su trasiego por diferentes espacios para que se observe cómo se va tejiendo el nuevo “consenso posliberal”.

En febrero de 1996, el BID discute los riesgos de la insuficiencia de los programas sociales y crea el Instituto de Desarrollo Social (INDES). En marzo, el Directorio Ejecutivo de este banco considera que la persistencia de la pobreza, causa de la inestabilidad política crónica, es preocupante y que “no se puede enmascarar las débiles eficacia y credibilidad de las instituciones democráticas [en particular] los parlamentos y partidos políticos”¹². En septiembre de ese mismo año, a instancias del presidente uruguayo Julio Ma. Sanguinetti, se crea el *Círculo Montevideo* como foro de debate entre políticos, intelectuales y funcionarios de organismos internacionales, que elaboran a partir de la ponencia central encargada a Alain Touraine*. En ese mismo año el *Diálogo Interamericano* crea un nuevo *think tank*, el Foro Sol M.Linowitz¹³.

12 “A pesar de que el clima macroeconómico ha mejorado mucho, subsiste una cantidad de problemas que si no se resuelven, podrían deteriorar la sostenibilidad de la nueva estrategia de desarrollo y la consolidación de los regímenes democráticos. La persistencia de la pobreza y de otros factores de exclusión socioeconómica –una de las causas fundamentales de la inestabilidad política crónica– es fuente de profunda preocupación. [...] Gobernabilidad implica estabilidad política [...] no se puede enmascarar las débiles eficacia y credibilidad de las instituciones democráticas [en particular] los parlamentos y partidos políticos.” Véase Banco Interamericano de Desarrollo, “Frame of Reference for Bank Action in Programs for Modernization of The State and Strengthening of Civil Society”, Strategic Planning and Operational Policy Department, marzo 1996, pp.1-8.

* Por economía de espacio, en esta edición se ha suprimido la extensa cita de la ponencia de Alain Touraine, que puede consultarse en la nota 37 del trabajo incluido en este volumen: “Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política”.

13 El Diálogo Interamericano fue creado en 1982 por iniciativa de Demócratas de Estados Unidos y políticos latinoamericanos vinculados con la socialdemocracia de

En noviembre de 1996 se reúne la VI Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno, en Chile, para tratar la crisis de credibilidad de los partidos y la democracia¹⁴. Al año siguiente, 1997, la VII Cumbre se reúne en la isla Margarita (Venezuela) para discutir el tema *Los valores éticos de la democracia*¹⁵.

Tras la crisis financiera asiática de 1997 y sus impactos en otras regiones, que aumentan el desprestigio del neoliberalismo, en agosto de ese mismo año el BM publica el informe *El Estado en un mundo en transformación*.¹⁶ Uno de los directores generales del Informe es Joseph E. Stiglitz, quien ha dejado de pertenecer al Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton (1993-1997) y se incorpora al BM como Economista Jefe y Vicepresidente Senior (1997-enero 2000).

Unos meses después, en 1998, el grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe del BM publica *Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional*¹⁷. El 5 de febrero de 1998, reunido en Wash-

derecha y posturas afines (entre ellos, Julio Ma. Sanguinetti, Fernando Henrique Cardoso, Alejandro Foxley y Raúl Alfonsín). Fue un espacio de debate sobre las transiciones. Luego se incorporaron republicanos, entre ellos miembros de los gabinetes de los gobiernos de Gerald Ford y George Bush (padre). Participa la élite del poder económico, político, militar y académico de Estados Unidos y América Latina (con mínima presencia de intelectuales). Trabaja para acercar a políticos de centro e izquierda con Estados Unidos. Véase www.thedialogue.org

- 14 En la *Declaración de Viña* se comprometen a “promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social [...] reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de [las] agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos [...] para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población.”
- 15 La *Declaración de Margarita* señala que “... la consolidación del sistema democrático en Iberoamérica debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento, resaltando el papel esencial que las agrupaciones y partidos políticos así como los gobiernos cumplen en el desarrollo de la vida democrática. [...] es necesario potenciar la capacidad política de las agrupaciones y de los partidos como articuladores y agregadores de demandas sociales, así como de formuladores de propuestas programáticas que los configuren como centros de discusión para los problemas de nuestros pueblos y de conformación de opciones que orienten el debate y la vida pública...” VII *Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno*. Margarita, Venezuela, 8 y 9 de noviembre de 1997.
- 16 Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo 1997: El Estado en un mundo en transformación, Washington DC, Oxford University Press para el Banco Mundial, 1997.
- 17 Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry, *Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional*. Washington DC. Banco Mundial, 1998: “... muchos partidos políticos parecen no cumplir con los criterios necesarios para

ington con el presidente William Clinton, Tony Blair anuncia que promoverá una “tercera vía” para el desarrollo. En ese mismo mes se crea la Carnegie Economic Reform Network, que en su primera reunión, en Miami, discute *Los desafíos políticos para el avance de las reformas económicas en América Latina*¹⁸.

Las nuevas elaboraciones estratégicas son adoptadas por los gobiernos latinoamericanos miembros de la OEA (Cuba no participa) en la *Segunda Cumbre de las Américas* que se realiza en Santiago de Chile en abril 1998, en un documento bautizado por el director del BM, James Wolfensohn, como el *Consenso de Santiago*; que según el BM cumplirá “el mismo papel catalizador que cumplió anteriormente el Consenso de Washington.” (MACW, p.8) En 1999, el propio John Williamson rechaza ser identificado como neoliberal.*

Las percepciones de crisis se intensifican con el nuevo siglo, pues lo que era concebido como crisis de credibilidad y de representación que afecta la estabilidad de la dominación, pocos años después llega a convertirse en una interpelación franca a la dominación en varios países y momentos, configurando una tendencia regional ascendente. Este nuevo momento político

representar efectivamente a la aglomeración de intereses existentes. [...] hay quienes han argumentado que los países de la región se están enfrentando a una ‘crisis de representación’. Es posible que esto sea exagerado; resulta difícil sostener que la representación dentro de América Latina y el Caribe sea menor en la actualidad que durante el apogeo de los regímenes autoritarios y militares. [Nota de la autora: ¡nótese con qué se compara!] Sin embargo, es importante determinar si la democratización formal de la política dentro de la región se ha visto acompañada de avances ‘reales’ en la representación; en especial dentro de los estratos socioeconómicos más bajos. La función que desempeñan los partidos políticos es importante en este debate; ante la ausencia o limitada eficacia, sería más difícil aglutinar, procesar y finalmente abordar los intereses y demandas de la ciudadanía y que estos fuesen abordados por los líderes de gobierno. [En algunos países] los líderes de los partidos tienen poco control sobre sus miembros...” pp.34 y 35.

18 Es una red de nivel ministerial de América Latina, los países ex “socialistas”, África y Asia, además de un representante del gobierno de Felipe González, en la que participa el colombiano Guillermo Perry, autor de “Más allá del Consenso...”. Allí se señala que “El riesgo de una reacción contra el modelo económico dominante actual y de retrocesos en áreas claves de reforma no debería ser subestimado.” pp.3-4 (traducción de la autora). Véase: Daniel Morrow, *The Political Challenges of Advancing Economic Reforms in Latin America. A report based on the first meeting of The Carnegie Economic Reform Network, Washington DC, Carnegie Endowment For International Peace/Economic Development Institute of the World Bank, Septiembre 1998.*

* Por economía de espacio, en esta edición se han suprimido las citas de John Williamson, que pueden consultarse en la nota 23 de “Lo social y lo político: desafíos urgentes de las luchas populares en América Latina”, en este volumen.

muestra que la aplicación de las políticas del “consenso posliberal” agudiza las contradicciones sociales y políticas a niveles de estallidos populares.

Ejemplos de ello son: el estallido popular en Ecuador de enero de 2000, que depone al presidente Jamil Mahuad; el levantamiento popular en Cochabamba (Bolivia) en abril del 2000, que frena la privatización del agua; el triunfo electoral del Bloque Social Alternativo en el Departamento del Cauca (Colombia) en octubre del 2000, por el que un indígena llega a la gubernatura; la Marcha por la Dignidad zapatista en México, febrero-marzo del 2001; el levantamiento popular en Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001, y la persistencia hasta el presente del estado de rebelión; el levantamiento popular de Arequipa (Perú) en junio de 2002, que frena la privatización eléctrica; el levantamiento popular en Paraguay en junio del 2002, que frena la privatización de teléfonos, agua potable, alcantarillado y ferrocarriles; el levantamiento de los campesinos de San Salvador Atenco en México en 2002, que frena la construcción de un aeropuerto en tierras que les fueron expropiadas (y que recuperan); la huelga general en Colombia, el 16 de septiembre de 2002, en medio del Estado de Conmoción (estado de sitio). En Venezuela, el pueblo conjura el golpe de Estado de abril de 2002 y resiste la nueva ofensiva golpista que comienza en diciembre de ese año y aún continúa. Por su parte, contra todos los vaticinios, Cuba empieza a superar la crisis económica tras la implosión de la Unión Soviética y acrecienta su influencia internacional, movilizando a millones en la resistencia a las agresiones de Estados Unidos. Y el año 2002 culmina con el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que sintetiza el ascenso de las luchas populares rurales y urbanas, y con el de Lucio Gutiérrez en Ecuador, expresión política del levantamiento de enero del 2000¹⁹.

19 Nota de *postscriptum*: Lamentablemente, el pueblo ecuatoriano tendrá que reencauzar la defensa de sus derechos ante los espurios y aún no del todo claros objetivos que han llevado a Lucio Gutiérrez, apenas a un mes de asumir como presidente, a ofrecerse como “el mejor aliado de Estados Unidos en su política exterior”, ofreciéndole también los recursos energéticos y naturales ecuatorianos para las inversiones norteamericanas, y que se ha declarado aliado del presidente Álvaro Uribe en el marco del Plan Colombia. Es probable que la ya anunciada y no tardía ruptura de la alianza del movimiento indígena con Gutiérrez anuncie un nuevo escenario de estallidos sociales, que algunos analistas estadounidenses advierten con preocupación más allá de los plácemes gubernamentales y empresariales estadounidenses por el nuevo aliado. Véase información sobre el viaje de Gutiérrez a Estados Unidos en el diario *El Comercio* de Quito, entre el 11 y el 15 de febrero de 2003 (elcomercio.com).

La *preocupación* de años atrás se convierte en *alarma*. Es sintomático que mientras que en 1999 el Diálogo Interamericano señala que el “sistema democrático y la economía de mercado están en tela de juicio en toda la región, [...] y en algunos casos corren serio peligro.”²⁰, un año después diga que “los asuntos hemisféricos son mucho más preocupantes que hace cinco años [...] La economía no es la principal razón para estar preocupados por el futuro de América Latina. Más preocupante es la calidad de la política y del liderazgo político en la región. La política democrática ha tenido retrocesos en muchos lugares; esas reversiones no son simples tropiezos. Los problemas son profundos y serios...”²¹.

También el BID acusa recibo de la nueva coyuntura, e incluso llama la atención sobre las falencias políticas que todavía tienen muchos de los análisis de esos años²². Se multiplican las advertencias de que el sistema capitalista corre peligro y que debe actuarse de manera más política para protegerlo. Ya en 1998 Georges Soros había advertido sobre el “fracaso de la política” ante el “fundamentalismo de mercado”²³. En el 2000, las primeras palabras de Hernando de Soto en *El misterio del capital* son: “Para las cinco sextas partes de la humanidad, esta no es la hora del mayor triunfo del capitalismo sino la de su crisis [...] El Capitalismo queda como la única forma viable de organizar racionalmente una economía moderna. [Pero] el premio al esfuerzo [de los países del Tercer Mundo] es un amargo desencanto. [...] En América Latina la simpatía por el libre mercado empieza a disminuir...”²⁴.

Y en 2002, Joseph Stiglitz da su señal de alarma en su libro *El malestar en la globalización*: “Hoy la globalización es desafiada en todo el mundo [...] Si no hay reformas la reacción que ya ha comenzado se extenderá

20 Diálogo Interamericano, *Las Américas en el milenio: tiempos de prueba*. Informe del Foro Sol M. Linowitz, noviembre de 1999, p.1.

21 Diálogo Interamericano, *Tiempo de decisiones: la política de Estados Unidos en el hemisferio occidental*. XI Reunión, 2000, pp.1 y 4.

22 Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe 2000 Progreso económico y social en América Latina: Desarrollo más allá de la economía*. Con la asesoría de Andrés Allamand, que es sintomático: miembro de la Dirección del Diálogo Interamericano y fundador del partido Renovación Nacional de Chile (ex pinochetistas convertidos a la democracia y que forman parte del “partido transversal” por la gobernabilidad, junto con los gobernantes Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia).

23 George Soros, *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, México, Plaza y Janés, 1999, pp.28-29.

24 Hernando de Soto, *El misterio del capital*, México, Diana, 2001, pp.27- 29.

y el malestar ante la globalización aumentará. Ello sería una tragedia para todos [...] Aunque económicamente el que más perderá será el mundo en desarrollo, habrá ramificaciones políticas más amplias que afectarán también al mundo desarrollado. [...] Hoy el sistema capitalista está en una encrucijada, igual que durante la Gran Depresión. En la década de 1930 el capitalismo fue salvado por Keynes.” Pero disipa cualquier duda respecto a la intención de su crítica: “A Keynes lo pusieron entonces en la picota: sus críticas al mercado le granjearon la acusación de socialista; y sin embargo en un cierto sentido Keynes fue intensamente conservador. Abrigaba una creencia fundamental en los mercados: si el Estado corregía este único fallo, la economía podría funcionar de modo razonablemente eficiente. No aspiraba a una sustitución cabal del sistema de mercado; pero sabía que si esos problemas básicos no eran abordados, las presiones populares serían gigantescas”²⁵.

Las propuestas neoinstitucionales del Banco Mundial

El neoinstitucionalismo, como se denomina genéricamente a la operación para compensar en otras instituciones la ineficacia del sistema de partidos para mantener la gobernabilidad, tiene en el Banco Mundial un ejecutor central. Como se ha visto, la gestación de la estrategia es un producto colectivo de fracciones de la clase dominante como tal y con importante participación de latinoamericanos (lo que cuestiona la “teoría de la conspiración” que supone que todas las políticas son creatura “externa”). Pero es con la coacción del financiamiento del BM, y en menores volúmenes del BID, decidido según el cumplimiento de tales “recomendaciones”, que éstas se convierten en la política dominante en América Latina. Por ello, aunque el neoinstitucionalismo es heterogéneo²⁶ en cuanto a los énfasis

25 Joseph Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Madrid, Taurus, abril 2002, pp.309-311.

26 Como la “segunda vía” del brasileño-estadunidense Roberto Mangabeira para la “reforma de las instituciones que definen al mercado”, que él diferencia de la “primera vía” de la ortodoxia neoliberal” y de la “tercera vía” que es la primera vía edulcorada”. Con una carga retórica dizque progresista de verdad sorprendente (junto a propuestas de elevar el IVA al 35 por ciento), su preocupación sigue siendo la defensa del capitalismo frente a los peligros “populistas”. Véase: *La segunda vía. La alternativa progresista*. México, Miguel Ángel Porrúa, 2000. El profesor de Harvard es asesor

temáticos o perfiles (más políticos o más formalistas), los planteos del BM tienen el mayor peso y representatividad.

La propuesta neoinstitucional del BM parte de afirmar que “No cabe duda de que el desarrollo promovido por el Estado ha sido un fracaso. Pero también lo han sido los intentos que han tratado de alcanzar ese objetivo al margen del mismo”²⁷. “La oscilación del péndulo hacia el Estado minimalista de los ochenta ha ido demasiado lejos” (ID97, p.26). El Estado tiene cinco tareas fundamentales para alcanzar el desarrollo: establecimiento de un ordenamiento jurídico básico; mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes, incluida la estabilidad macroeconómica; inversión en servicios sociales básicos e infraestructura; protección de los grupos vulnerables y defensa del medio ambiente (ID97, p.4). Reconoce que estas tareas han sido consideradas desde largo tiempo (en efecto, son las mismas que reivindicó en 1991), pero propone como novedad una relación complementaria entre Estado y mercado, que realmente no modifica el principio de subsidiariedad de años anteriores²⁸.

Con el marco retórico sobre la pobreza y la necesidad de “invertir en la gente”, que estaba ya presente en 1991, tanto el ID97 como *Más allá del Consenso de Washington*²⁹ enfocan la etiología de la pérdida de ritmo del crecimiento en que el capital carece todavía de las seguridades suficientes para invertir, y aducen las siguientes causas (que sintetizo en sus propios términos): se mantiene el síndrome de ilegalidad que no garantiza plenamente la propiedad (déficit legales, burocratismo e ineficacia judicial); la información es insuficiente (transparencia), como también lo es la confiabilidad de la burocracia media y baja (corrupción); persisten las

del presidente Vicente Fox y amigo del ex canciller mexicano Jorge Castañeda, con quien –según dijo– trataba de generar una “nueva izquierda” en América Latina. Fue furibundo crítico de Lula pero en la segunda vuelta presidencial le dio su apoyo como muchos otros personajes de la derecha y centroderecha de Brasil.

27 Banco Mundial, *Informe sobre el Desarrollo 1997: El Estado en un mundo en transformación*, p.1. En lo sucesivo: ID97.

28 En 1991 el BM decía: “La cuestión intervención vs. *laissez faire* es una dicotomía muy popular pero falsa [...] los mercados no pueden operar en el vacío, necesitan un marco regulatorio y legal que sólo los gobiernos pueden proporcionar. Y en muchas otras tareas se ha demostrado que muchas veces los mercados son inadecuados o fracasaron completamente [...] si los dos trabajan juntos, la evidencia sugiere que el total es mayor que la suma de las partes y los resultados han sido espectaculares”. Informe Mundial sobre el Desarrollo 1991, pp.1-2. En lo sucesivo: ID91.

29 Burki y Perry, *op. cit.* En lo sucesivo: MACW.

imposiciones de los intereses creados (patrimonialismos particularistas) que se oponen al interés general; los políticos no garantizan sus compromisos porque los subordinan a los vaivenes de los tiempos electorales (clientelismo). En suma, estos altos *costos de transacción* desalientan la inversión, se debilita el crecimiento, la pobreza no se resuelve. Se frenan las reformas.

La crítica no está en la sustancia de las “reformas de primera generación” sino en el modo como se llevaron a cabo y/o no se completaron. Por una parte, enfocan las baterías en los problemas de gestión (“los malos gobiernos”). Es necesario cambiar las reglas y los valores de tales comportamientos, lo que es sinónimo de reforma de las instituciones: porque ellas son concebidas –siguiendo a la teoría de Douglass North– sólo como un conjunto estable de normas (instituciones formales) y de valores (las informales). Para hacerlo bastan una nueva ingeniería institucional y voluntad política. Pero la garantía de que esto ocurra es una sociedad civil fortalecida.

Y, por otro lado, los modos de implementación aluden también a su *velocidad y secuencia*: un problema de táctica política para evitar las resistencias a las reformas. Tal vez sea éste el principal motivo de discrepancia entre el BM y las “visiones tecnocráticas” que cuestiona del FMI por su incapacidad para percibir el cambio de los momentos políticos. Tampoco hay gran diferencia con la época anterior del banco porque ya en 1991 reconocía que “Uno de los obstáculos para hacer reformas han sido sus costos políticos, actuales o potenciales” (ID91 p.128), y se le consideraba un asunto a resolver de modo pragmático, independiente de concepciones de un tipo u otro (es un informe sin rodeos porque el momento político lo permitía, después no).

En 1991 el BM deja claro que la opción de velocidad entre *gradualismo* y *terapia de shock* (un lapso concentrado no mayor de dos años) depende del grado de legitimidad de los gobiernos: gradualismo para baja legitimidad, *shocks* para alta. Aconsejan que si los que se oponen a las reformas poseen mucha fuerza organizada, es conveniente tomarlos por sorpresa con reformas veloces antes que reaccionen; si hay posibilidades de ganar para las reformas a los opositores potenciales entre los perdedores previsibles, tal vez el gradualismo permita hacer mejor la labor de convencimiento aliviándolos con transferencias temporales que les ayuden a pasar por la transición, y les dé a los gobiernos tiempo para descubrir quiénes son esos potenciales opositores. También el gradualismo podría darles tiempo a los

gobiernos para enfrentar obstáculos administrativos y de inexistencia de las instituciones requeridas; y podría ser también útil para el sector privado para darle tiempo para la relocalización de los capitales y del trabajo, etcétera.

Y se aclara que hacer el ajuste a lo largo del tiempo no significa que la introducción de las reformas sea en sí misma gradual (ID91, pp.116-117). Aunque no lo expresen, son idénticas las consideraciones que llevan al BM en la segunda mitad de los noventa a recomendar el gradualismo a la luz del nuevo momento político.

En cuanto a las secuencias (todas las reformas juntas o de a poco, y cuáles primero), donde pueden hallarse diferencias mayores respecto a las posiciones anteriores del BM es en el manejo de las variables y los instrumentos económicos para evitar distorsiones a la estabilidad macroeconómica (acababa de estallar la crisis financiera asiática en 1997). La crítica a la “inconsistencia cronológica”³⁰ de las políticas del “Consenso de Washington” no es conceptual ni doctrinaria, es un ajuste táctico motivado por el nuevo momento político, que exige cambiar las secuencias de modo que cuando una reforma genera rechazos no se le presente de manera completa y se implemente al inicio en “pequeños segmentos en áreas”, aquellos que puedan ser aceptados, y esa legitimidad parcial facilitará la aplicación del resto (MACW, p.109). Es la táctica del “rompecabezas”, en la que se ven piezas sueltas sin poder percibir la figura final que se construirá y la relación oculta entre las piezas³¹.

La exposición de motivos-diagnóstico del BM en 1997-98 se basa en un conjunto de falseamientos que se encubren con la introducción descriptiva de problemas reales (ineficiencia, corrupción, clientelismo, patrimonialismo), dando la impresión de convergencias con el pensamiento progresista. Pero el contenido conservador de esas formulaciones abstractas queda al descubierto a la hora de traducirse en políticas:

1. El Estado neoliberal nunca ha sido “minimalista” (ideologización liberal que con frecuencia la izquierda ha repetido), pues su papel

30 “...una diferencia básica entre los programas de estabilización y las reformas institucionales es la secuencia en que se van absorbiendo los costos y beneficios de cada reforma [que] imponen retos políticos especiales”. MACW, p.32

31 La idea pertenece a Fermín González: “El rompecabezas de la dominación neocolonial”, Bogotá, Fundación para el Trabajo y la Vida, 2001, pp.1-2.

“subsidiario” implica una intensísima intervención fiscal, jurídica y política para favorecer los intereses del gran capital que domina el mercado. *Subsidiario* es un eufemismo del carácter neo-oligárquico del Estado, que iguala interés privado minoritario (aunque poderoso) con interés general, y que fusiona poder económico y poder político en la administración directa del Estado. Éste es el patrimonialismo que sustenta la corrupción a niveles de saqueo nacional y no la “falta de cultura cívica de los pobres” –como se afirma–, pero además es consustancial a la acumulación de capital en los términos actuales. Por su parte, el particularismo de los grupos de presión del que hablan no se refiere al de los grupos económicos transnacionales (de origen externo o criollo), ni a los medios de comunicación, el narcotráfico, la cúpula de la Iglesia, la élite partidaria y gubernamental, o a los militares-policiales, que son la estructura del poder oligárquico. Todos bien “fácticos” por cierto, sean “formales” o “informales” (otra imprecisión frecuente en el discurso de izquierda). Por el contrario, se refieren a los sectores populares organizados (sindicatos de trabajadores públicos y privados, urbanos y rurales) que defienden derechos sociales conquistados en las luchas democráticas (descalificados como “intereses creados”) y que, por supuesto, son un obstáculo para el “interés general” que es el del gran capital.

2. La ampliación de las funciones del “nuevo Estado” no cambia sus contenidos en cuanto a que rescate las de responsabilidad social que abandonó, sino que se orienta a hacer un uso más intenso de su capacidad coercitiva institucionalizada³², para ejercer el control social que el sistema político no garantiza ante una sociedad que está dejando de ser gobernable.
3. Las instituciones no son sólo reglas y valores, son cristalizaciones de balances de poder. Si éstos no cambian, ninguna ingeniería institucional modificará la naturaleza de la acción estatal. Voluntad política no falta, sucede que está dedicada a mantener el orden social actual. La buena gestión hace a la eficacia y eficiencia, pero no modifica los objetivos. Hasta ahora el Estado ha sido eficaz en

32 “Las ventajas singulares del Estado son sus poderes para imponer tributos, prohibir, castigar y exigir”. ID97, p.29.

el cumplimiento de sus objetivos conservadores, y la eficiencia, que es un valor siempre apreciable, tampoco es socialmente neutro. La retórica del “buen gobierno” sirve para ganar credibilidad incluso entre sectores de izquierda, y justifica la cooptación de intelectuales y profesionales para las “nuevas políticas públicas”.

4. El clientelismo, presentado como un atavismo en la modernización del Estado, es un recurso *sine qua non* de la eficacia de las *nuevas* políticas sociales de los neoinstitucionalistas, pero que son las mismas que las del “Consenso de Washington”: focalizadas hacia los “grupos más vulnerables” (pobres, mujeres, niños, indígenas, discapacitados). Además de que no eliminan la vulnerabilidad, producen la dispersión competitiva de y entre los pobres, un instrumento para neutralizar los “disturbios políticos y sociales” (ID97, p.17). Antes y después, el BM y el BID promueven y financian la mediación de organizaciones no gubernamentales confiables para llegar a esas clientelas pauperizadas. Por otra parte, el clientelismo es también consustancial a la *política como mercado* en la que se fundamenta la democracia gobernable. En tercer lugar, la relación problemática que se advierte entre descentralización (en realidad, desconcentración) del Estado y clientelismo tiene su destinatario político. La descentralización, en marcha desde los años ochenta y ensalzada desde los noventa como una “revolución democrática silenciosa”, sigue siendo un instrumento útil para disminuir los presupuestos centrales destinados a lo social. Es, asimismo, un instrumento útil para la gobernabilidad en la medida en que lo local se mantenga aislado y disperso. Pero las virtudes del “cara a cara entre el ciudadano y el Estado” son seriamente reconsideradas cuando una de esas caras es la izquierda... que empezó a ganar elecciones³³. Por lo demás, las políticas actuales necesitan una mayor concentración del poder coercitivo del Estado.

33 “...una estrategia de mayor apertura y descentralización tiene sus peligros. Cuanto más numerosas sean las oportunidades de participación, tanto mayores serán las reivindicaciones que se formulen al Estado. Esto puede incrementar el riesgo de una excesiva influencia por parte de intereses especiales más agresivos o de parálisis total. No se puede permitir que el acercamiento del Estado a algunos grupos los separe todavía más de otros. Asimismo, si no se adoptan normas claras para la imposición de limitaciones a los diversos niveles de gobierno [...] la crisis de gobernabilidad que aflige a muchos gobiernos centralizados se transmitirá a los otros niveles”. Una de las soluciones para evitar los peligros es “la búsqueda de consensos”. ID97, p.13.

5. El interés por la sociedad civil no es novedoso y encuadra en la visión liberal más ortodoxa. El concepto de sociedad civil como sumatoria de individuos libres e iguales ante la ley (independientemente de su condición social), sirve para construir la noción de *sociedad como mercado* y negar las clases. Y el *pluralismo* que se deriva de la sociedad como mercado (todos tomadores de decisiones sin distinguir entre las que pueden tomar los indigentes o los grandes empresarios), permite negar la asociación entre poder y dominio económico y, por ende, la concentración de ambos. Sirve para esgrimir la dicotomía entre lo social y lo político, entre sociedad civil y sociedad política, en que se basa la democracia gobernable. Con estas fundamentaciones se gestó la transformación neoliberal de la sociedad, como sociedad gobernable. Las “nuevas” propuestas no son distintas en cuanto al papel mediador de las ONG; o en equiparar a todas las organizaciones privadas, sean empresariales, religiosas, de derechos humanos, vecinales o de consumidores. Sólo los sindicatos de trabajadores u otros movimientos sociales populares son considerados grupos de presión que no encajan como respetables organizaciones civiles. La “revolución democrática silenciosa” se basa en “dar voz” a la sociedad civil. Pero las “consultas” sobre las acciones públicas, hechas a los afectados, avalan las decisiones ya tomadas: hasta ahí es el nivel de la “participación”. Las propuestas del BM exhiben toda su intencionalidad al asignarle a la “comunidad” el papel de instrumento para confrontar *desde abajo* a las organizaciones sindicales, enfrentando a pobres contra pobres; las políticas específicas hacia la educación pública sintetizan todas las formas de manipulación contenidas en la propuesta neoinstitucional³⁴.

34 La participación de los “consumidores” de la educación pública básica y media se propone para privatizar la educación y debilitar a los sindicatos magisteriales, considerados los principales obstáculos a las reformas educativas. La descentralización apunta al autofinanciamiento de cada escuela con recursos de la “comunidad” (integrada por actores tan dispares como padres empobrecidos y empresarios *altruistas*); los gobiernos aportan recursos adicionales en función de la competencia por matrícula, hasta ahí las compensaciones que el neoinstitucionalismo introduce en términos de “equidad”. La “comunidad” tiene “voz” en las decisiones administrativas y de dirección educativa en cada escuela junto con los directores, en la contratación y despido del personal docente y aporta los elementos de evaluación para un sistema gubernamental de compensaciones económicas individuales para que los maestros acepten las pérdidas de derechos colectivos. En la educación superior, la “sociedad civil” también tiene voz vía el financia-

Cuando el cambio de secuencia para ganar apoyos parciales que lubriquen la imposición de las políticas conservadoras no es suficiente, es necesario aumentar el “costo de salida” con otros “amarres” que hagan oneroso su rechazo; por ejemplo, la firma de acuerdos internacionales y tratados que le den fuerza de ley.

El “nuevo” papel de la “política posliberal” se sintetiza así: “Los buenos dirigentes consiguen que la población se sienta identificada con la reforma, que se convenza de que ésta no es algo que viene impuesto desde el exterior” (ID97, p.16).

El neoinstitucionalismo realmente existente

La retórica neoinstitucional sobre el buen gobierno, la preocupación sobre la pobreza y el desarrollo con equidad, logra cautivar a no pocos sectores críticos que identifican esos objetivos con sus propias demandas democráticas. Pero bajo esas apariencias democratizadoras, las reformas de “segunda generación” construyen el marco para el avance de la ofensiva del capital transnacional, que se intensifica con la crisis capitalista y se acelera ante los riesgos reales y potenciales de crisis de dominación. Se crea un Estado de derecho *ad hoc* que asigna a los Estados latinoamericanos las siguientes funciones:

1. Dan el marco legal, la infraestructura y los recursos para la apropiación transnacional de las fuentes de energía (petróleo, electricidad); de los recursos naturales que serán absolutamente escasos dentro de cincuenta años en los países desarrollados (agua, otras fuentes de biodiversidad); de lo que queda por privatizar de la banca nacional y la seguridad social; de medios de transporte para el control estadounidense de todo el comercio regional institucionalizado en el ALCA, y para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

miento y las demandas empresariales de profesionales. Pero a este nivel, en el que hay más resguardos autonómicos, el cambio en la secuencia de las reformas es decisivo para neutralizar los rechazos. En las universidades públicas, la táctica ha sido exitosa desde comienzos de la década, nada que el BM tenga que criticar al Consenso de Washington.

2. Dan el marco legal para el control militar de Estados Unidos sobre el territorio latinoamericano, para garantizar sus objetivos neocoloniales mediante acciones de contrainsurgencia y *guerra de baja intensidad*³⁵.
3. Dirigen su monopolio de la fuerza legal y represiva para dar seguridad a la propiedad capitalista.
4. Intensifican las estrategias institucionales para neutralizar o disgregar la potencialidad crítica de los dominados.

La apropiación transnacional de territorios y recursos naturales se realiza bajo la modalidad de acuerdos internacionales, multilaterales o bilaterales, que tienen fuerza de derecho público internacional y, en esa medida, se convierten en legislación nacional.

El Plan Puebla Panamá (PPP) fue presentado por el presidente Vicente Fox en febrero de 2001, dos meses después de asumir, como su principal proyecto de desarrollo sexenal; pero al mismo tiempo impulsado por el BM y el BID como “un polo de desarrollo de clase mundial en América Latina, una nueva forma de planeación y una acción para participar de manera decisiva en la macrorregión”. A través de México, el PPP extiende el dominio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta la frontera con Colombia. Aprobado por todos los gobiernos mesoamericanos, sus respectivos Estados lo solventan con recursos fiscales y deuda, infraestructura, recursos institucionales y humanos, incluidos los costos políticos, sociales y represivos para llevarlo a cabo (todo solventado

³⁵ Véase el *Informe Santa Fe IV*, cuyos aspectos centrales están publicados en *Latin America Today* del 11 de junio de 2000. El “11 de septiembre” ha servido para subordinar más a los gobiernos latinoamericanos al militarismo norteamericano en la región, notablemente incrementado desde comienzos de esta década. La aceleración del Plan Colombia como plan maestro, la instalación de bases militares de Estados Unidos en Manta (Ecuador) y Aruba. Las maniobras en Vieques (Puerto Rico), en el Chapare (Bolivia), en el Chaco (Paraguay), las maniobras Cabañas 2000 y 2001 en Argentina; acciones “contra el dengue” en Misiones (Argentina). El intento desde el 2000 de transferencia de la Base de Lanzamientos de Alcántara (Maranhao, Brasil) a Estados Unidos y en 2002 de instalación de una base en Tolhuim (Tierra del Fuego, Argentina). La creación en 2002 del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos (que abarca Alaska, Canadá, Puerto Rico y México); la participación de la Armada mexicana, por primera vez en la historia, en las Operaciones Unidas en el Pacífico frente a Colombia; el control sobre la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) después del 11S; el proyecto de instalación de una Academia de Policía para América Latina dirigida por Estados Unidos, en Costa Rica; en 2003, las Operaciones Nuevos Horizontes en Panamá, República Dominicana (donde 10 mil soldados de Estados Unidos llegarán entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2003) y en Ecuador, etcétera.

por los pobres), más algunos financiamientos internacionales para facilitar la inversión transnacional. Sus principales programas son: Fondo Mesoamericano para el Desarrollo Sustentable, Red Internacional de Carreteras y Puertos, Mercado Eléctrico y de Telecomunicaciones Regional, y el Corredor Biológico Mesoamericano –que posee el 7 por ciento de la biodiversidad mundial– para la explotación forestal y de productos no maderables del bosque, fauna y flora, pesca y acuicultura, generación de fuentes de agua convertidas en cuencas internacionales, energéticos como petróleo y uranio, turismo “ecológico y de aventura”, etcétera. En México, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas mandata por ley la expulsión de las poblaciones que las habitan (comunidades indígenas)³⁶. Estas poblaciones son la fuerza de trabajo contemplada para un cinturón de empresas maquiladoras en esa región, con salarios más bajos que los de la frontera norte de México. Así se entiende el rechazo de la derecha en el Congreso de la Unión al proyecto de ley que defendió la Marcha de la Dignidad convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en febrero-marzo de 2001, proyecto que reconocía a las comunidades indígenas el estatus de *pueblos* (con derechos sobre el territorio y sus recursos naturales); la Suprema Corte de Justicia rechazó las 322 controversias constitucionales interpuestas por comunidades indígenas en todo el país. Este es el contexto del aumento del paramilitarismo en Chiapas contra las resistencias indígenas a las expulsiones de la Selva Lacandona (diciembre 2002), al ingreso de inversionistas privados y a la construcción gubernamental de supercarreteras en el geoestratégico Istmo de Tehuantepec.

La “protección ambiental” es la justificación de los cambios en las leyes de Propiedad Intelectual negociadas en la Organización Mundial de Comercio por las transnacionales de la biogenética, para legalizar la biopiratería. Significativamente, el *Informe sobre el Desarrollo 2003* del BM

36 “El BM invertirá 60 millones de dólares en 34 de estas zonas prioritarias, en las que se localiza gran parte de la riqueza genética y de biodiversidad del país. Estos recursos serán administrados por organizaciones no gubernamentales bajo la vigilancia del organismo multinacional, el cual tendrá la prerrogativa de diseñar, aprobar, modificar o vetar las acciones que se realicen en estas zonas. [Esta es la segunda fase del] programa [que] fue puesto en marcha en 1997, luego de que el Congreso de la Unión, a iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hizo cambios legales para que las áreas naturales protegidas dejaran de ser manejadas por el gobierno, se descentralizaran a los estados y pudieran participar las ONG”. *La Jornada*, México, 26 de enero de 2002, p.38.

tiene por tema: *Desarrollo sustentable en un mundo dinámico. Transformación de instituciones, crecimiento y calidad de vida.*

El PPP se continúa hacia el sur con el Plan Colombia, aprobado por los Congresos de ese país y el de Estados Unidos, que se extiende a la región amazónica desde Ecuador y Perú a través de la Iniciativa Andina³⁷, el cual puede prolongarse con el recientemente aprobado Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, y que, a través del proyecto del *Corredor Biooceánico* que une a Chile con Argentina por la provincia de Neuquén (con un ferrocarril trasandino, empresas de fruta, ganadería y explotación petrolera, financiados por el Bank of America y empresas transnacionales), se conectaría hasta Tierra del Fuego por la base norteamericana a instalarse en Tolhuim. El debilitamiento del Mercosur por la crisis argentina es parte importante en estas estrategias. El ALCA, impulsado por el Consenso de Santiago y por el Diálogo Interamericano, es el entramado institucional que englobaría estos distintos proyectos de neoinstitucionalismo neocolonial.

Las acciones golpistas contra el gobierno de Hugo Chávez ofrecen la pieza que falta. Y si bien el triunfo de Lula da Silva puede ser un factor central para alterar estos planes, es preocupante que el Diálogo Interamericano imponga sus estrategias³⁸.

37 Fermín González lo define como “un plan integral dirigido a terminar de implantar el modelo económico neoliberal, asegurar los enormes negocios de los energéticos y la biodiversidad de la región y controlar directamente las zonas de producción de narcóticos. Su acción militar está destinada a cambiar la correlación de fuerzas con la insurgencia colombiana para así poder llevarla a una negociación de paz, mientras que con la criminalización de la protesta social y la acción estatal y paramilitar persiguen destruir el tejido social popular y actuar como disciplinadores de las resistencias populares. Esto incluye el asegurar el desplazamiento de los pueblos y comunidades capaces de resistir desde los territorios considerados estratégicos para sus negocios. Todo acompañado de ‘inversiones sociales humanitarias’ destinadas a preparar la integración económica de la región a los mercados internacionales”, *op. cit.*, p.9.

38 El citado documento del año 2000 del Diálogo dice que no tiene sentido “tratar de cambiar las conductas del presidente Chávez, pues más bien lo provocaría a seguir desafiando las políticas de Estados Unidos. Aislar a Chávez o precipitar una espiral descendente en los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela no beneficiaría a ninguno. Si el presidente Chávez fuera a desconocer la constitución de Venezuela y girara hacia un gobierno autoritario, Estados Unidos debería tratar de lograr una respuesta multilateral a través de la OEA, involucrando en ello a todos los gobiernos del hemisferio.” (p.21) Un miembro fundador distinguido del Diálogo es James Carter, actuante en la crisis venezolana, y el mediador cuasi permanente es César Gaviria, Secretario General de la OEA. A esa reunión del 2000, y a la anterior, asistió el actual presidente brasileño (que no firmó los documentos). En el Grupo de Países Amigos de Venezuela, constituido en enero de 2003 por iniciativa de Brasil, (que lo integra junto

Las estrategias de apropiación de energéticos cuentan, además, con el sostén institucional de los Congresos con varias iniciativas de reformas constitucionales para privatizarlos o para legislar a favor del suministro privado de servicios. La apropiación del territorio se complementa con acciones gubernamentales de titulación como propiedad privada de las tierras comunitarias. Esta política, que se inscribe en el discurso de la seguridad jurídica de la propiedad, en el caso de los pobres es un mecanismo para enajenársela. Así lo plantea con claridad el *Informe sobre el Desarrollo 2002: Instituciones para los mercados* (que cuenta entre sus asesores a Joseph Stiglitz), documento que ratifica y amplía las políticas impuestas por el BM en 1997-1998³⁹. En este informe se promueven las reformas fiscales como eje de la “modernización administrativa”, las cuales se aplican de manera regresiva en toda América Latina (incrementos del IVA, exenciones impositivas a los más ricos)⁴⁰, y se ejecutan con mayor concentración de funciones en el Poder Ejecutivo. El BM va *más allá*, y recomienda que en aras de la transparencia se deleguen la recaudación fiscal y su control a los organismos internacionales (ID2002, pp.102-110).

Las políticas de *transparencia* crean mucha confusión porque difícilmente podría negarse la importancia del combate a la corrupción.

con Estados Unidos, México, Colombia, Chile, España y Portugal) el país bolivariano tiene muy pocos amigos. En el grupo de empresarios del Diálogo (The Group of Fifty, G50) está el venezolano Juan Lorenzo Mendoza Pacheco, Director Ejecutivo de las Empresas Polar, uno de los pilares de la oposición golpista. Por lo demás, es sorprendente que la entonces diputada de Pachakutik, Nina Pacari, asistente y firmante de los documentos de 1999 y 2000 (los únicos documentos oficiales completos que conozco), sea desde el 15 de enero de 2003 la Canciller del nuevo gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Véase www.thedialogue.org

39 “Si la tenencia de tierras es segura, un mercado inmobiliario eficiente que permita la transferencia de derechos de un propietario (o un titular de derechos de uso) a otro puede contribuir a aumentar la productividad, ya que transferiría la tierra de los cultivadores menos eficientes a los más productivos.” Banco Mundial. *Informe sobre el Desarrollo 2002: Instituciones para los mercados*, México, Ediciones Mundi-Prensa para el Banco Mundial, 2002, p.35. Hernando de Soto, también asesor del presidente Fox en estas reformas, argumenta que los pobres en realidad son muy ricos, sólo que por el estado informal de su propiedad inmobiliaria no la han podido convertir en capital. Calcula que en América Latina y el Caribe su valor es billonario en dólares (millón de millones): 1'760,000 millones de dólares. Véase *El misterio del capital*, op. cit., p.66. Esas son las magnitudes de lo que pretenden enajenar.

40 En México, por ejemplo, la reforma fiscal de 2001 permite que los más ricos (decil x) sean exonerados de pagar impuestos por una cifra equivalente a 53 mil millones de dólares anuales. Julio Boltvinik, “Los ricos no pagan impuestos”, *La Jornada*, México, 12 de octubre de 2001, p.38. Y las transacciones en la Bolsa no pagan impuestos.

Pero las apariencias engañan. Transparencia Internacional (TI), que dirige Peter Eigen, alto funcionario del BM durante veinticinco años, es el referente obligado de todas las iniciativas en América Latina. Es una “ONG” que opera como brazo ejecutivo del BM con un claro papel injerencista, y es financiada, entre otros, por el BM, la USAID, las transnacionales petroleras, de electricidad –entre las que destacan las “transparentes” Enron y su empresa contable Arthur Andersen–, fabricantes de armas, farmacéuticas acusadas de biopiratería y fundaciones como la Ford, MacArthur, Open Society Institute (de Georges Soros). Sus documentos son calco de los del BM: la corrupción se reduce con más liberalización de los mercados, privatizaciones y eliminación de regulaciones estatales.

Con las leyes de Libertad de la Información que promueve TI (incluidas en el apartado Negocios) ofrece el servicio de la “ONG” The International Records Management Trust, cuyo director también fue un alto funcionario del BM, que trabaja con países *en desarrollo* para organizar los registros de información de los gobiernos y resguardarlos cuando éstos no estén en uso por las instituciones. TI también participa en acciones para facilitar el trabajo de Interpol, promover la revisión de leyes de extradición⁴¹, etcétera.

En México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (junio de 2002), Transparencia México (TM) integra la dirección del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que, en períodos de siete años, tiene autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y facultades para definir los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, resolver las controversias y las demandas ciudadanas de acceso a la información, entre otras. Se estrenó “clasificando” información sobre financiamientos presumiblemente ilegales a la campaña del hoy presidente Fox. Asimismo, TM ha sido incorporada a la dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2002), directamente controlado por el Poder Ejecutivo y en el que participan, entre otros, los empresarios, los sectores más conservadores de la Iglesia católica y el sindicato de maestros (SNTE), histórico sostén corporativo y corrupto del PRI, hoy aliado del presidente Fox.

41 “Los países industrializados tienen que desempeñar un papel esencial en la asistencia para el mantenimiento de la integridad nacional, en una gran cantidad de países en desarrollo y países en transición”, TI Source Book 2000, p.10.

También conquistan adhesiones las reformas hacia el *perfeccionamiento del estado de derecho*, entendidas nominalmente como avances democráticos pero que se dirigen a reforzar el carácter neo-oligárquico del Estado privilegiando su condición de aparato de coerción al servicio del capital. Se impulsan nuevas leyes de trabajo que *norman la desregulación* del mercado laboral, es decir, legalizan la flexibilización laboral (precariedad de las contrataciones, liquidación de los contratos colectivos, indefinición de la jornada de trabajo, legalización de las rebajas salariales). La judicialización o criminalización de las protestas se hace a nombre del Estado de derecho; sólo las protestas populares son consideradas síntomas del “síndrome de ilegalidad”.*

El nuevo protagonismo del poder judicial tiene una direccionalidad inequívoca hacia esos contenidos conservadores del Estado de derecho. El encarcelamiento de algunos empresarios-gobernantes-trafficantes cumple con las recomendaciones del BM (MACW) de realizar acciones “ejemplarizantes” para legitimar al poder judicial. Igual intención tiene el *doble estándar* de la acción judicial: atiende las controversias entre niveles de poderes que no alteran las políticas económicas fundamentales, o a favor de leyes antidiscriminatorias legítimas pero que benefician a reducidos universos sociales⁴²; pero se desentiende de las controversias que afectan los privilegios de los grandes empresarios (rescates públicos de quiebras fraudulentas de la banca y otras empresas privatizadas, prácticas especulativas, normas preferenciales para compañías transnacionales, tráfico de influencias, etc.). Hay una creciente judicialización de la política para reforzar al Ejecutivo frente a parlamentos con mayor representación de izquierda; o a la inversa, como en Venezuela, con permisividad y apoyos a las acciones golpistas. Se favorece la privatización de la justicia transfiriendo esferas de derecho público al ámbito civil, como en los conflictos laborales; o a través de nuevos mecanismos de resolución privada de controversias, que agravan la desigualdad en el acceso a la misma.

* Por economía de espacio, se suprimió la cita de Guillermo O’Donnell, que puede consultarse en la nota 37 del trabajo “Lo social y lo político...”, de este volumen.

42 Que son demandas democráticas de larga data, como las del aborto en caso de violación, el casamiento entre homosexuales, etc., promovidas por la izquierda. Las de género o culturales son casi las únicas que el BM y el BID admiten en términos de “igualdad”. Los indígenas pueden aspirar a que se respeten sus lenguas, pero se les niega su territorio originario.

Las reformas educativas “fundamentales para los intereses empresariales” y para gestar una “nueva mentalidad” son el marco de un creciente autoritarismo. Se cumple la recomendación de “invertir un capital político para vencer la resistencia de los dirigentes de los sindicatos nacionales de maestros”⁴³: cooptación o represión a dirigentes y militantes sindicales; inflexibilidad y nula voluntad de negociación para provocar conflictos desgastantes para la organización sindical; asignación discriminatoria de la materia de trabajo y de las compensaciones individualizadas, etcétera. Las prácticas autoritarias alcanzan incluso a las “comunidades” cuya “voz” coincide –a contracorriente de lo que se pretende– con las demandas de los maestros⁴⁴.

El neoinstitucionalismo realmente existente incluye, desde luego, los discursos contrarios al neoliberalismo, que pueden llegar al radicalismo verbal que nos obsequió el mexicano Carlos Slim, uno de los mayores beneficiados por este capitalismo –el empresario más rico de América Latina que, según la revista *Forbes*, en el año 2000 ocupaba el lugar 33 a nivel mundial con 7.9 mil millones de dólares, en 2001 avanzó al lugar 25 con 10.8 mil millones y en 2002 al 17 con 11.5 mil millones de dólares–: “No son modelos económicos de América Latina, es un modelo neoliberal, que parece neocolonial. Está el llamado Consenso de Washington que se puso de acuerdo en diez mandamientos y creen que con eso se establece el desarrollo de los países, pero no funcionan, no son operantes y hay que corregirlos y adecuarlos”⁴⁵.

43 La Carnegie Economic Reform Network, en la que participa Guillermo Perry autor de *Más allá del Consenso de Washington* expresa, con una sinceridad que el BM no se permitió en sus documentos, la necesidad de mano dura para liquidar las resistencias. *Op. cit.*, pp.11-14.

44 En Bogotá, en abril de 2001, los padres de una escuela se unieron a los maestros para protestar contra la reducción de los años de preescolar. Su voz no fue escuchada. Tuvieron que hacer una huelga de hambre durante un mes para que la medida fuera suspendida allí (ayunaron un maestro que además era presidente de la Asociación Distrital de Educadores, filial en Bogotá de la FECODE, y tres padres). La Secretaria de Educación de la Alcaldía fue premiada: es la ministra de Educación del gobierno de Álvaro Uribe.

45 Entrevistado en Punta Arenas cuando viajó en su avión privado a la Antártida con el español Felipe González y el senador chileno del PPD Fernando Flores, amigos suyos desde 1998. Antes hicieron una breve escala en Brasilia para saludar al todavía presidente Fernando Henrique Cardoso. Véase: *El Mercurio*, Santiago de Chile, 24 de noviembre de 2002.

Una reflexión final

Los diseños del capitalismo son de larga duración. Estamos viendo proyectos que se piensan para treinta o cincuenta años. Con ese horizonte de poder, las diferencias y hasta conflictos de intereses particulares o sectoriales pueden ser procesados en una perspectiva de clase. Cuando se afirma que el gradualismo, en términos de la temporalidad en que desarrolla sus políticas, no significa que la estrategia no esté en marcha en todas sus dimensiones, da idea de cómo se proyecta. Por eso puede ensayar adaptaciones, ritmos y caminos distintos sin perder la brújula pero pisando firme sobre el terreno de las relaciones políticas.

Ése es el tamaño de los desafíos de los sectores dominados, todavía moviéndose en tiempos casi episódicos, con un posibilismo lineal del paso a paso sin construir las herramientas políticas que les permiten ampliar las metas más allá de las limitaciones del presente: que es un pragmatismo de corta mira, muy distinto al del poder. Sin perspectiva de aliento, tampoco pueden captarse las acciones dominantes que les determinan los objetivos de transformación. Y en eso, los intelectuales profesionales tienen responsabilidades de conocimiento ineludibles.

Sin embargo, el capitalismo tiene flancos débiles en las contradicciones que genera, que estallan a pesar de las insuficiencias del pensamiento crítico y que empujan la voluntad de cambio cuando está en juego la sobrevivencia misma. América Latina es hoy un vivo ejemplo. Nada autoriza el fatalismo, pero tampoco la complacencia, porque en política nadie juega solo.

La izquierda latinoamericana: gobierno y proyecto de cambio (2003)*

Una nueva realidad latinoamericana

En América Latina ingresamos en una coyuntura política nueva. En 1997, más de 60 millones de latinoamericanos vivían en municipios gobernados por la izquierda¹. En 2003, son más de 200 millones, con dos gobiernos nacionales además de Cuba: Venezuela desde 1999 y Brasil desde 2003.

La fuerza electoral ganada por la izquierda es un indicador relevante del momento político nuevo, pero no lo expresa ni lo explica suficientemente, y hasta podría conducir a conclusiones equivocadas. Entre ellas, suponer que la fuerza electoral de la izquierda signifique por sí misma un retroceso absoluto de las fuerzas conservadoras en América Latina. El entusiasmo y las esperanzas que justificadamente motiva este signo de avance de las fuerzas democráticas no pueden hacernos perder de vista la complejidad del proceso político en nuestro subcontinente.

En la nueva coyuntura, los avances electorales de la izquierda expresan una realidad social y política nueva, definida primordialmente por el ascenso de las luchas populares, por una creciente recomposición de la capacidad de resistencia al neoliberalismo. En ocasiones, llega a manifestarse en levantamientos populares que han podido frenar privatizaciones y otras políticas antipopulares, han hecho caer presidentes y en algunos casos han sido el antecedente inmediato de triunfos electorales. Sin embargo, en este

* Publicado bajo el título “The Latin American Left: Between Governability and Change”, en Daniel Chavez and Benjamin Goldfrank (Editors), *The Left and the City. Progressive and Participatory Local Governments in Latin America*, London, Latin American Bureau, March 2004.

1 La discusión de esas experiencias están en el libro de 1998: Beatriz Stolowicz (coord.) *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, Plaza y Valdés/Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1999.

panorama amplio y diverso de luchas éstas no siempre tienen una expresión electoral correlativa, y tampoco están necesariamente vinculadas a los partidos de izquierda que participan en los procesos electorales².

Hablar de la izquierda latinoamericana siempre conlleva riesgos de generalizaciones que hacen perder de vista las especificidades de cada actor político, las condiciones históricas de su constitución e identidades, las alteridades sociales y políticas que lo definen y las circunstancias concretas en que actúa. Cuando hablamos de partidos, a esos rasgos específicos hay que agregar diferencias en sus definiciones ideológicas, en el grado de organicidad y homogeneidad que poseen, en el vínculo y arraigo que tienen entre los sectores sociales que buscan representar, o en el nivel de elaboración y desarrollo que tienen sus proyectos políticos.

Hoy en día, además, el vasto campo de la izquierda latinoamericana ya no puede analizarse con las habituales referencias a los partidos de mayor consolidación o mayor tradición. Si incluimos en la izquierda a quienes luchan contra la explotación, la marginación y el saqueo de las riquezas nacionales por el gran capital transnacional, observamos que es más amplio

2 En enero del 2000, un levantamiento popular en Ecuador destituye al presidente Jamil Mahuad. En abril de 2000, un levantamiento popular en Cochabamba (Bolivia) frena la privatización del agua. En febrero de 2001 es la Marcha de la Dignidad convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que moviliza a millones. En diciembre de 2001, un levantamiento popular en Argentina hace caer al presidente Fernando de la Rúa y a tres presidentes más en quince días, y se mantiene por más de siete meses ocupando las calles. En abril de 2002 la resistencia del pueblo venezolano conjura un golpe de Estado, lo que vuelve a ocurrir entre diciembre del 2002 y febrero de 2003 frente al paro patronal golpista. En junio de 2002, un levantamiento popular en Arequipa (Perú) frena la privatización eléctrica; en ese mismo mes, un levantamiento popular en Paraguay frena la privatización de teléfonos, electricidad, agua, alcantarillado, ferrocarriles e impide la aprobación de una Ley Antiterrorista. En agosto de 2002 los campesinos ejidatarios de San Salvador Atenco (México) impiden la construcción transnacional de un megaaeropuerto y obligan a dejar sin efecto la expropiación de sus tierras. En agosto de 2002, médicos y trabajadores del Seguro Social de El Salvador inician una huelga de siete meses que frena la privatización de esos servicios. En Brasil, en septiembre de 2002 se hace un plebiscito popular contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el que participan 10 millones, un mes antes de las elecciones presidenciales. En Colombia, en medio de la guerra intensificada por el Plan Colombia, se hace una huelga general el 16 de septiembre de 2002; y en octubre de 2003, los colombianos derrotan un referéndum impuesto por el presidente Álvaro Uribe. En Vieques (Puerto Rico), tras años de resistencia, logran en abril de 2003 que salga la Marina de Estados Unidos de su isla. Y entre febrero y octubre de 2003, un levantamiento del pueblo boliviano (la *Guerra del gas*) no sólo frenó su desnacionalización, sino que obligó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar. Estos son sólo algunos ejemplos notorios, pero hay muchas luchas más en todos los países.

y diverso que aquellos partidos, aunque coincidan en términos generales en los objetivos. Desde mediados de la pasada década de los noventa han surgido nuevas organizaciones de izquierda que tienen importante incidencia política. Algunas no participan en el sistema representativo, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. Otras organizaciones de más reciente formación disputan los gobiernos estatales y nacionales a la derecha, pero nacen también de movimientos sociales específicos, desde los cuales amplían la representación popular sin perder las identidades originarias. Es el caso de Pachakutik, que se constituye en 1995 como el instrumento político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que participa en el gobierno presidido por Lucio Gutiérrez. Del Movimiento al Socialismo boliviano (1998), cuya raíz es el movimiento indígena –campesino y minero–, que llevó al indígena aymara Evo Morales a disputar la presidencia en 2002. Es el caso del Bloque Social Alternativo, que en el 2000 eligió como gobernador del Departamento del Cauca en Colombia al indígena guambio Floro Tunubalá, y que nació en 1999 a partir de una alianza de organizaciones indígenas y campesinas con sindicatos, estudiantes, pobladores y partidos de izquierda, en el contexto de una huelga general regional de veintiséis días. También el Movimiento V República con que ganó las elecciones Hugo Chávez en 1998 tiene su origen en una alianza heterogénea entre sectores militares y diversos grupos de izquierda unidos por el objetivo común de enfrentar al bipartidismo tradicional que gobernó Venezuela desde 1958, a la que adhirieron amplias franjas populares.

El accionar político de izquierda es mucho más vasto que la disputa electoral. Pero ésta tiene hoy una gran vitalidad, pues nunca como ahora la izquierda tuvo mayores posibilidades de disputarle gobiernos a la derecha, dado el desprestigio que ésta tiene por la amplitud del rechazo al neoliberalismo. Sin embargo, la probabilidad de convertir esos avances electorales en posibilidades de cambio de la realidad latinoamericana actual no se reduce a tener numerosas representaciones parlamentarias o ganar gobiernos municipales y hasta nacionales. Éstos también dependen de la gestación de una fuerza política suficiente, es decir, de una voluntad colectiva organizada capaz de cambiar las relaciones de poder con las que el capitalismo neoliberal se reproduce en todos los ámbitos de la vida social.

Porque el neoliberalismo no es solamente un conjunto de políticas económicas y sociales llevadas a cabo por administraciones gubernamen-

tales conservadoras. Es el poder avasallador del capital sobre el trabajo, que se impuso destruyendo la fuerza social y política relativa de los dominados, mediante la liquidación violenta de su capacidad de resistencia a la explotación y la dominación, la destrucción sistemática de sus organizaciones y su dispersión como sujetos colectivos. Las dictaduras fueron el inicio más violento de esta modificación del poder relativo entre dominantes y dominados a favor de los primeros, pero fue bajo los regímenes representativos que ese proceso se profundizó radicalmente. La década de los noventa, bajo **democracias**, es en la que se lleva a cabo la mayor expropiación del trabajo en la historia moderna de América Latina, al interior de cada país y desde los centros del poder capitalista mundial.

Tras las frías cifras de la estadística está la impunidad de un capitalismo depredador de vidas y países, que no es fruto de un proceso **espontáneo** o metafísico, sino el resultado concreto de este cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Ese es el significado de que la pobreza alcance hoy, en promedio, a más de un 60 por ciento de la población latinoamericana³, de la cual más de la mitad se encuentra en pobreza extrema⁴. Pero la pobreza es la contracara del enriquecimiento de las poderosas minorías capitalistas en cada país: la concentración del ingreso ha sido un proceso sostenido en las últimas dos décadas, llegando en 1999 (también en el promedio regional y según cifras oficiales), a que el 40 por ciento de la población más pobre tenga el 15 por ciento del ingreso total, mientras que el 10 por ciento más rico tiene cerca del 40 por ciento del ingreso total⁵. A ello hay que agregar lo que América Latina transfirió a los centros capitalistas del **primer mundo**: solamente por deuda externa, entre 1992 y 2001, salieron de América Latina más de 1221 billones de dólares

3 Instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) establecen que hay un 43 por ciento de hogares pobres. Cuando se hacen las correcciones de hogares a personas, la cifra asciende por lo menos a 60 por ciento. En México, los estudios sobre pobreza de Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, transforman el 40 por ciento oficial medido en hogares, a 74 por ciento medido en personas.

4 Para el Banco Mundial, son pobres los que viven con dos dólares o menos al día, y extremadamente pobres los que lo hacen con uno o menos. Desde luego que estos parámetros de medición suponen condiciones infrahumanas, a los que hay que sumar en condiciones de pobres a muchos millones más.

5 Datos a partir de Cepal (2003) que deben ser corregidos tras las crisis económicas que estallaron en 2001-2002 en Argentina y Uruguay.

(1.22 billones en términos latinoamericanos, como millón de millones); no obstante lo cual, la deuda externa se duplicó en igual período⁶. Sólo en 2001, por cada dólar que recibió de los países ricos para “disminuir” la pobreza, América Latina les devolvió más de 6 dólares. Esto lo pagan los pobres, porque los ricos no pagan impuestos⁷.

Lo más grave de este saqueo interno y externo ocurre a pesar de que en varios países la izquierda tiene importantes representaciones parlamentarias e incluso gobierna en capitales nacionales y estatales y en varios municipios más. El hecho concreto es que, en la década en que gobierna la izquierda, en esos países empeora la situación económica y social de la mayoría de sus poblaciones, a pesar de los importantes y muy destacados esfuerzos de estos gobiernos de izquierda por mejorar la calidad de vida de la población gobernada.

Este es un dato duro a considerar sobre la fuerza política que posee la izquierda, y sobre la que necesita generar más allá de los votos que ha conquistado, para hacer retroceder la explotación de las mayorías populares a las que busca representar políticamente. No se trata sólo de que hasta hace muy poco tiempo la izquierda gobernó en municipios con limitadas esferas de competencia económica. Es igualmente válido para gobiernos nacionales, pues el capital domina también por fuera del gobierno: el ejemplo de Venezuela es suficientemente ilustrativo del clásico problema teórico sobre la diferencia que existe entre gobierno y Estado, por un lado, y entre Estado y poder, por otro.

Esta lacerante realidad a transformar da la medida de los desafíos y responsabilidades que tiene hoy la izquierda latinoamericana. Esto no siempre está claro en los análisis de la propia izquierda, que suelen ser autorreferidos. Habitualmente evalúa los logros en comparación con su

6 En 1992, la deuda era de 478 mil 700 millones de dólares. Después del monto mencionado de pago parcial de capital e intereses, aumentó a 817 mil 200 millones en 2001. Lo que América Latina transfirió por intereses pagó cuatro veces el capital que recibió y equivale a los recursos necesarios para cubrir las “necesidades básicas” de la población regional durante 17.5 años, según el cálculo del costo de esas necesidades realizado por el Banco Mundial. Véase de Carlos Fernández-Vega, “Saqueo institucionalizado” en *La Jornada*, México, 21 de abril de 2003.

7 En México, por ejemplo, en 2001, los más ricos (decil X) dejaron de pagar impuestos por un equivalente a 60 mil millones de dólares. La Bolsa de Valores no paga impuestos. Pero los bancos privados recibieron 100 mil millones de dólares por la estatización de sus deudas a partir de 1996.

situación previa. Todo logro por sí mismo siempre es un hecho positivo que involucra enormes esfuerzos y sacrificios que deben valorarse. Pero si no se mide el desempeño propio en función de los cambios necesarios, ello puede conducir a eludir las responsabilidades, o bien a obstaculizar la construcción de una estrategia de cambio, entendida como un proceso de gestación de las herramientas y condiciones políticas para poder seguir dando pasos hacia delante. A mediano y largo plazos, lo primero puede producir frustración entre quienes buscan en la izquierda un medio para cambiar el orden social; y lo segundo puede conducir a fracasos, incluso de aquellas experiencias enormemente ricas y prometedoras, pero que se agotan en su carencia de fuerza para llevarlas a cabo.

Estos riesgos están siempre multiplicados por el hecho de que la izquierda no actúa sola. Lo hace frente a una derecha latinoamericana que ha demostrado una gran capacidad de iniciativa política e ideológica para encarar la crisis capitalista y las circunstancias de crisis de dominación que enfrenta con mayor o menor intensidad en todos los países; que ha demostrado eficacia para hacer funcional a sus objetivos las debilidades teóricas y políticas de la izquierda, e incluso hasta sus mismos logros. Y es que una clave de la política es entenderla como un proceso relacional, en el que todos y cada uno de los actores sociales y políticos se configuran no sólo por lo que aspiran a ser, sino por lo que los otros los condicionan a ser o hacer; lo cual no tiene, obviamente, un sentido unidireccional.

En América Latina esta relación contradictoria es profundamente asimétrica, considerando que la derecha sustenta su poder en el control sobre los procesos económicos y sociales, los medios de socialización valórica y cultural, además de que conserva un enorme poder para disponer del monopolio legal de la fuerza más allá, y a pesar, de los gobiernos. Pero –y este es un dato de la nueva coyuntura–, el estallido de las contradicciones generadas por el propio capitalismo está erosionando su influencia política y la eficacia de las “grandes verdades neoliberales” con que ha justificado su dominio. Pero esta nueva coyuntura de crisis social también impacta sobre la izquierda, porque en varios países los tiempos sociales se han acelerado con mucha mayor velocidad que la de maduración de los actores políticos de izquierda, imponiéndole a éstos nuevas exigencias y ritmos desde los sectores populares mismos. Por decirlo de manera más coloquial, los desafíos a la izquierda le vienen desde “arriba” y desde “abajo”. Y le acotan

los tiempos y condiciones para enfrentar los problemas, aún irresueltos, de las derrotas políticas que le impusieron las dictaduras y los autoritarismos civiles, junto con los impactos ideológicos de la crisis del socialismo llamado real, insuficientemente procesados.

Lo peculiar de la coyuntura es que la crisis social y política tiene una tendencia ascendente con relativa independencia de los actores políticos institucionales. Hay luchas sociales que no están vinculadas a los partidos y a veces son contradictorias con las decisiones partidarias. Varios de los partidos que orientan su accionar principalmente a la disputa electoral son rebasados por las luchas de masas. No faltan los partidos que buscan contenerlas o intentan conducir las en función de sus tiempos propios u objetivos electorales, lo que deriva en desencuentros y distanciamientos con los luchadores sociales. Sea como fuere, las luchas sociales crean escenarios políticos nuevos, ante los cuales la izquierda partidaria debe responder. Tiene el reto de contribuir a que la enorme deseabilidad de cambio movilizada actualmente siga creciendo y que impida que la derecha pueda manipular la crisis política en su propio beneficio.

Las crisis sociales y políticas son momentos en los que se alteran o rompen los equilibrios de la dominación, y ésta activa inmediatamente su resistencia para impedir un peligro efectivo, o para prevenir un peligro posible, lo que supone un *no retorno* a la situación inmediatamente anterior al estallido de la crisis. En otras palabras, la “resolución” de las crisis supone *avances* o *retrocesos* para los dominados. Esa “resolución” tiene un alto grado de incertidumbre porque depende de múltiples factores propios y de la relación entre opuestos. Este es el contexto específico latinoamericano, que acelera tiempos, aumenta las demandas y expectativas de cambio, y exige definiciones políticas; es éste el marco para discutir los problemas de la izquierda, de su proyecto y del papel que tienen sus gobiernos en él.

La fluidez del momento político actual en América Latina no admite respuestas simples. Se puede afirmar que la izquierda es hoy mucho más fuerte que hace un lustro. Pero esa fuerza ganada es insuficiente para los desafíos que tiene que encarar, lo que podría significarle reversiones. Se puede afirmar que sus experiencias de gobierno tienen en todas partes un inequívoco signo positivo, colmadas de logros y de creatividad, lo que las convierte en el aspecto más rico de las prácticas políticas de varios partidos:

vinculadas estrechamente con la población y respondiendo a sus necesidades, con una gran honestidad sometida permanentemente al escrutinio de la sociedad, obligadas a dar resultados, con esfuerzos de gestación de una ciudadanía gobernante, etcétera. Pero no siempre estas experiencias han contribuido (ni con el mismo grado) a generar fuerza política permanente, y también corren el peligro de rutinizarse como espléndidas administraciones que podrían agotarse como proyecto alternativo.

Hay en nuestra región experiencias de gobierno que por su permanencia en el tiempo, de más de una década en Uruguay y Brasil y de seis años en México y El Salvador, aportan elementos de reflexión consistentes para analizar la capacidad de gestión gubernamental de la izquierda. Los balances claramente positivos explican que crezca la confianza sobre esas capacidades y que se piense que la izquierda está facultada para gobernar a nivel nacional. Pero los gobiernos, a cualquier nivel, no son sólo acciones administrativas. Implican una concepción sobre la sociedad en la que actúan y una direccionalidad en el ejercicio de las parcelas de poder que poseen. Ha habido análisis sobre las gestiones gubernamentales y sobre sus aportes para reformar democráticamente al Estado: una nueva relación entre gobernantes y gobernados, gestando una ciudadanía gobernante; un nuevo concepto de eficiencia asociado a la eficacia social de las políticas; un ejercicio de transparencia que implica control real sobre la gestión, que rompe con la falaz transparencia que pregona la derecha neoliberal limitada a ofrecer cifras que, con suerte, sólo los ungidos (los famosos “expertos”) logran desentrañar, etcétera. Con toda esa riqueza, es significativo que estas creaciones alternativas sean insuficientemente valoradas e incidan poco en los estudios profesionales de administración pública que se desarrollan en las universidades, en las que la hegemonía conservadora sigue operando.

En las siguientes y breves páginas no abordaré esta temática de manera particular, y propondré, en cambio, algunas reflexiones sobre algunos de los otros aspectos que hacen a la discusión de los gobiernos como parte del proceso político, en los que se dirimen las fuerzas relativas entre dominantes y dominados.

Especificidades del contexto político en que actúa la izquierda

A pesar de la heterogeneidad antes señalada entre las organizaciones de izquierda, todos los partidos desarrollan su actividad política en un contexto altamente homogeneizado por la imposición de un modelo conservador de democracia liberal, tras las transiciones desde regímenes dictatoriales o autoritarismos civiles a regímenes representativos⁸. La mayoría de los partidos participan por primera vez en el sistema representativo bajo ese modelo político conservador. Esto les representa un problema adicional para definir un proyecto político independiente, capaz de constituir sujetos políticos autónomos a la vez de participar en las instituciones representativas.

Debe considerarse que excepto en Chile, Uruguay y en menor medida en Costa Rica, la democracia liberal ha sido excepcional como modalidad real de la política en la región antes de la década de los setenta. La política latinoamericana transitó por regímenes autoritarios –algunos de ellos de tipo corporativo– o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que el discurso liberal fue francamente conservador. Fueron específicamente esos contextos no democrático-liberales los que abonaron en amplios sectores de la izquierda la no consideración de la democracia burguesa como espacio de acción política, y la búsqueda de prácticas políticas por otros medios (desde antes, pero, aun más, después de la Revolución Cubana), hasta acciones políticas marginales e incluso lógicas corporativas. Esa ausencia de liberalismo político en América Latina es una de las principales razones de que no madurara una teorización de izquierda sobre la democracia política como un escenario específico de la luchas de clases –como medio de *cambio*–, que confrontara la visión dominante de la democracia como medio de *conservación*, como instrumento para administrar políticamente las relaciones de poder de modo de que no cambien. La acusación que habitualmente se le hace a la izquierda latinoamericana de ser “instrumentalista” en sus concepciones sobre la democracia carece de fundamento histórico. No pudo serlo. Si algún error teórico puede atribuírsele, es que desarrolló una concepción economicista del Estado entendido sólo como “reflejo”, con escaso análisis

⁸ El proyecto político bolivariano en Venezuela se lleva a cabo en ruptura con ese modelo de democracia.

de la dominación y las mediaciones. Estos mecanicismos tampoco le permitieron ser “instrumentalista de la democracia.” La acusación tiene otras intenciones, que no discutiré aquí.

Cuando la mayor parte de la izquierda latinoamericana experimenta la democracia representativa hacia finales de los años ochenta, lo que en realidad descubre es la *democracia gobernable*, la realización histórica más conservadora de la democracia liberal. El modelo de democracia elitista y de equilibrios, como instrumento de administración política del *statu quo* (Hayek)⁹, concibe a la democracia sólo como método de formación de gobiernos y de reclutamiento de las élites que decidirán *por sí y ante sí* a nombre de la sociedad. El modelo presupone que existe “un consenso estructural básico” en la sociedad (Schumpeter). Y que no habiendo discrepancias en los asuntos económicos, éstos no necesitan formar parte del debate político entre las élites, quedando exclusivamente en la esfera del mercado. Las élites políticas se diferencian apenas por cuestiones de forma, y el debate será solamente sobre asuntos procedimentales. (Sartori)¹⁰. Sin embargo, el propio Joseph Schumpeter advertía a mediados de la década de los cuarenta que este “[...] método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social”¹¹.

No obstante, es el modelo que se impone en América Latina. Sustrae a la economía del debate político bajo el supuesto de que ésas son decisiones incontrovertibles del mercado y, más aún, de la “globalización”, que es presentada como una fuerza metafísica ajena a las relaciones de poder. Haya o no “consenso estructural”, la derecha liberal impone como *consenso* que nadie puede torcer el destino impuesto por el mercado. Así avanza la estrategia de la *profecía autocumplida de la globalización*: no se pueden contrariar las leyes del mercado, se renuncia a tomar decisiones; *ergo*, los embates del capital trasnacional de origen foráneo o criollo se multiplican sin poder frenarlos. El equilibrio deviene de no alterar los contenidos de ese consenso. Cualquier demanda o conflicto que vaya en contra de las decisiones del capital atentan contra la democracia. La gobernabilidad

9 Friedrich Hayek, *Camino de servidumbre* (1944), Madrid, Alianza, 1990.

10 Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia* (1988), Madrid, Alianza Universidad, 1991.

11 Joseph Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942), Buenos Aires, Ed. Folio, 1972, p.378.

(*governability*), como búsqueda de la estabilidad política (lo que es equivalente a *obediencia*), pasa a ocupar el lugar de la democracia. Ésta deja de ser un mecanismo institucional para procesar conflictos, porque éstos se consideran un bloqueo a la democracia. La democracia misma se hace gobernable¹².

En este modelo político, al sistema de partidos le corresponden dos funciones: 1) ser los vehículos de selección de las élites (elecciones) y 2) actuar como filtro para impedir que los intereses contrarios a los objetivos capitalistas puedan convertirse en políticas estatales. Los partidos tienen como función filtrar la representación de intereses subalternos, pero también impedir que sus portadores se organicen para expresarlos como demandas.

Esas son las reglas del juego a que debe someterse la izquierda para ser aceptada por el sistema con el estatus de pares respetables. El sometimiento incluye chantajes y presiones, cooptaciones mediante prebendas y la interiorización de las concepciones liberales-conservadoras de la política. Se le condiciona a aceptar (por convicción o por subordinación) que la política es un mercado de competencia por consumidores (votantes) cuya captación exige ofertas políticas indiferenciadas que, como cualquier otro producto a vender, debe privilegiar la imagen a su contenido. El mercadeo (*marketing*) político, además, se convierte en América Latina en un espectáculo de la peor ralea.

El modelo funcionó durante una década, gozando de una prolongada tolerancia de parte de una sociedad que, en aras de conservar las libertades públicas, renunció a “poner en peligro la democracia” con demandas igualitarias. También funcionó porque, simultáneamente, en los marcos de la reestructuración capitalista se gestó una sociedad con una debilitada capacidad de demandar no obstante estar pletórica de necesidades. La eufemísticamente llamada flexibilización laboral, que liquida toda protección legal a los trabajadores, los condujo a tener que aceptar la reducción salarial, la pérdida de derechos, la precariedad contractual y demás formas de sobreexplotación, a cambio de conservar un empleo que el propio modelo económico destruye. La dispersión organizativa, el individualismo inducido desde la economía pero también mediante

12 Análisis con más detalle los problemas de la democracia gobernable en “Democracia gobernable: instrumentalismo conservador” (en este volumen).

contrarreformas educativas y culturales y la competencia de pobres contra pobres para acceder a los escasísimos recursos que el Estado entrega de manera focalizada disgregaron las capacidades de resistencia y demandas.

Durante una década, el capital tuvo impunidad para avanzar en sus objetivos. Pero al mismo tiempo, el funcionamiento sin obstáculos del modelo político terminó por poner en crisis la credibilidad del sistema representativo: se generalizó el desprestigio de “los políticos”, “los partidos” y “la política”; el rechazo al elitismo político y al prebendismo, así como la convicción de que las instituciones representativas, particularmente el parlamento, son inútiles para modificar la realidad económica que afecta a la mayor parte de la población¹³.

A finales de la década de los noventa, la crisis del sistema representativo alcanza también a aquellos partidos de izquierda que se subordinan a esas reglas del juego para la gobernabilidad. Esto ocurre con diferencias en los países en función de los arraigos sociales que tienen, que cuando son importantes obligan a los partidos a una mayor independencia política. Pero ninguno pudo evitar contaminaciones con las prácticas sistémicas, que invariablemente fueron objeto de críticas. Esta es una de las principales razones del alejamiento de sectores de izquierda respecto de los partidos, llegando incluso a manifestarse como un rechazo genérico a “la política”. Es un fenómeno de dimensiones no desdeñables pues involucra a una izquierda no partidaria que tiene importante capacidad de convocatoria social¹⁴.

Un indicador del rechazo a este modelo político es el abstencionismo electoral: aunque en la mitad de los países el voto es obligatorio, la abstención supera el 50 por ciento en el promedio regional, lo que a juzgar por el escenario de luchas no es precisamente un signo de apatía política. Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que hacia finales de siglo un 65 por ciento de los latinoamericanos están descontentos con “esta” democracia¹⁵.

13 Sólo en Uruguay, en 1992, pudo frenarse una privatización por los canales políticos institucionales, mediante un referéndum. En el resto de América Latina, sólo los levantamientos populares pudieron frenar algunas.

14 En muchas de las críticas hay una asimilación genérica de la política sistémica a toda forma de política. Análisis con detalle estos asuntos en “El desprestigio de la política: lo que no se discute”; y en “Lo social y lo político: desafíos urgentes de las luchas populares en América Latina” (ambos en este volumen).

15 Banco Interamericano de Desarrollo, *Desarrollo más allá de la economía*, Washington DC, 2000.

Prueba de que se trata fundamentalmente de un rechazo al modelo político de gobernabilidad es que, cuando en América Latina aparecen opciones políticas de cambio creíbles, las esperanzas se renuevan con la expectativa de que un gobierno de signo político opuesto modifique la realidad económico-social. Cada vez que la izquierda fue capaz de ofrecer esas alternativas creíbles, creció electoralmente. Pero la adhesión a los candidatos presidenciales es mayor que la que cosechan sus partidos, especialmente los que son juzgados como electoralistas.

La crisis de representación que afecta a los partidos de derecha, pero que acusan en diverso grado los de izquierda, hace que el sistema de partidos pierda eficacia como mecanismo de control social y político, como instrumento de gobernabilidad. Y cuando el sistema representativo recupera credibilidad, lo hace por la izquierda. Por las dos razones, desde mediados de la década de los noventa, los políticos e intelectuales más lúcidos de la derecha elaboran estrategias para transferir a otras instituciones estatales las funciones de control social y político, que el sistema de partidos ya no ejerce eficazmente.

En eso consiste el llamado *neoinstitucionalismo*, que ha sido engañosamente presentado por sus promotores como el “consenso posliberal superador del Consenso de Washington”. Las llamadas “reformas de segunda generación” tienen el propósito de intensificar el papel del Estado para “completar” las políticas neoliberales: más privatizaciones, legislaciones laborales que *norman* la *flexibilización*; entrega de territorios, de recursos energéticos, biodiversidad y agua al capital transnacional (en eso consisten el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina y otros “megaproyectos”); control militar directo de Estados Unidos sobre nuestros territorios como garantía de su dominio económico a través del ALCA; judicialización y criminalización de las protestas sociales; judicialización de la política para impedir oposiciones parlamentarias a los Ejecutivos, etcétera. Esto se lleva a cabo bajo el discurso del “perfeccionamiento del Estado de derecho” y de la “modernización institucional”, exclusivamente orientadas a dar plena seguridad al capital en tiempos borrascosos. Son políticas neocoloniales, muchas de las cuales se imponen mediante tratados internacionales entre Estados formalmente soberanos, y que tras su normalización como derecho público internacional se transforman automáticamente en legislación nacional y en contenido de las políticas

públicas. Con el nuevo siglo estas acciones se han acelerado a los ritmos que reclama la crisis capitalista, particularmente la de Estados Unidos, y justamente cuando están aumentando las resistencias populares: de allí la intensificación de la represión en la nueva coyuntura¹⁶.

Las *políticas públicas* se convierten en eje de realización de estas estrategias. Recubiertas de una aparente neutralidad técnica, siguen siendo un canal de cooptación de académicos y profesionales. La crítica al neoliberalismo no ha llegado al terreno de las “nuevas políticas públicas”: actualmente la derecha define con muy poca oposición la “agenda” de lo *deseable*, es decir, lo que es *financiable* y por lo tanto *posible* en la acción gubernamental en América Latina, incluida desde luego la de izquierda. Ésta ha resultado permeable a ese discurso y a varias de esas políticas, en general sin conocer sus implicaciones, e involuntariamente llega a legitimarlos.

Ocurre así que, tanto en el sistema representativo como en la gestión gubernamental, la izquierda no siempre logra superar los condicionamientos de la derecha, que tienen el propósito de coartar su potencialidad alternativa y convertirla en una de las fuerzas políticas que administran lo existente, explotando una *pluralidad mediatizada* para ganar legitimidad. Desde luego que la dialéctica política no depende solamente de las intenciones de la derecha. Y si la carencia de análisis más críticos sobre estos temas es una característica bastante común a la izquierda partidaria de la región, también es cierto que en la práctica muchas veces logra compensarlo con acciones que, en los hechos, van en dirección opuesta a esos objetivos conservadores. Pero no siempre. Los riesgos de un pragmatismo acrítico están presentes en los gobiernos municipales y son mayores cuando se trata de gobiernos nacionales.

Lo local en debate

Lo local ha sido la gran “novedad” de la década de los noventa, sin ser precisamente un tema nuevo. Tradicionalmente los gobiernos locales han sido un espacio de distribución de cuotas de poder entre los sectores

16 Desarrollo con mayor detalle las estrategias, discursos y políticas neoinstitucionalistas en “América Latina: estrategias dominantes ante la crisis” (en este volumen).

dominantes: el “pintoresco” ámbito del caudillismo y caciquismo latinoamericanos. Desde comienzos de la década de los ochenta fue uno de los ejes de las reformas neoliberales del Estado: la desconcentración gubernamental permitió liberar al Estado central de funciones sociales, reducir sus presupuestos y su personal. Bajo las nuevas democracias, liberó al sistema representativo y al Estado de tener que responder a demandas nacionales inaceptables. El ámbito de lo local es el espacio preferencial de las nuevas formas de clientelismo político a través de las políticas sociales focalizadas que llevan a cabo los gobiernos centrales; un mecanismo de control social a muy bajo costo, que mantiene a los más pobres disgregados y en competencia entre sí. Un eficaz mecanismo de gobernabilidad.

Al mismo tiempo, lo local ha sido uno de los ejes de la justificación ideológica de la reestructuración capitalista neoliberal, al presentarlo como lo que conecta la *sociedad de mercado* con la *globalización*, conexión que los centros de elaboración ideológica del capitalismo han denominado como lo “glocal”. En la construcción de este término se sintetizan varias de las conceptualizaciones neoliberales sobre la sociedad actual. Todas ellas se articulan a partir de la afirmación ideologizada de la irrelevancia del Estado nacional: mediante una operación de inferencias arbitrarias, se transforma el debilitamiento del componente “nacional” en la supuesta desaparición del Estado mismo (justificación necesaria para derribar las barreras políticas a la circulación del capital transnacional). Paralelamente, la sociedad es convertida en el símil del mercado: individuos en competencia, que buscan compensar la pérdida de la *comunidad nacional* en pequeñas comunidades de pertenencia, de adscripción voluntaria, que establecen entre sí múltiples relaciones (“*cleavages*”) que las van conectando de modo reticular. En cada una de esas pequeñas comunidades los individuos toman decisiones (sobre asuntos parciales), constituyendo así una “poliarquía” (Robert Dahl)¹⁷ en la que el poder está distribuido, disperso. Esto es posible –dicen– cuando se privatiza y dispersa el poder del Estado en el mercado. Para la concepción pluralista liberal, la sociedad es un espacio de intercambio privado entre iguales en tanto propietarios (sin importar si unos lo son de capital y otros de su fuerza de trabajo). Los individuos tienen poderes “iguales” que ejercen como ciudadanos (votantes) para elegir a las élites que los gobernarán

17 Robert Dahl, *La poliarquía. Participación y oposición* (1971), México, Rei, 1993.

(“lo público estatal”) y que ejercen en pequeños espacios gregarios sobre asuntos particulares, de organizaciones no gubernamentales (“lo público no estatal”). Se hace desaparecer la configuración clasista de la sociedad y el poder; desaparece la política como instancia de decisión de alcance nacional para quedar arraigada en particularismos locales; desaparecen los sujetos sociales colectivos. Lo “glocal” es asumido como una –nunca demostrada– “desterritorialización nacional del poder”, con una simultánea “reterritorialización de los particularismos” en el espacio local.

Esta teorización está dirigida a justificar la disgregación social promovida por el capitalismo neoliberal, funcional al modelo político para la gobernabilidad. Y se utiliza con intención normativa, como la democracia deseable: ajena a los antagonismos de clase; que no decide absolutamente nada sobre el modelo nacional de desarrollo sino sobre efectos específicos del mismo; que reduce lo social a pequeños grupos de referencia.

Muchos intelectuales y políticos de izquierda son receptivos a estos argumentos. En cierto modo, son “explicaciones” que sirven para aceptar con resignación los retrocesos sociales. Hay posturas extremas que llegan a pensar lo local como la nueva forma histórica de lo social, que sustituye definitivamente a los movimientos sociales de resistencia y lucha antisistémica, a cuya organización se renuncia. Hay quienes se refugian en lo local para tomar distancia de un sistema representativo que desprecian. Otros, por el contrario, utilizan el espacio local como plataforma de lanzamiento para conseguir candidaturas. Y son muchos los que reifican lo microsocioal –la sustancia de las ONG–, porque éstas son el medio para conseguir ingresos financiados internacionalmente (por el capital transnacional). Pero también en estos espacios locales van desarrollándose formas de organización autogestiva popular para resistir al neoliberalismo y generar alternativas de sobrevivencia y solidaridad.

Hay algo de todo esto presente en las experiencias de gobierno local de izquierda, aunque sus pesos específicos cambian según sea la naturaleza de los proyectos. Hay diferencias entre los que asumen lo local como sustitución de sujetos sociales colectivos, o los que conciben lo local como complemento a su reconstitución, aportando a ese proceso los esfuerzos de reconstrucción parcial del tejido social en algunos segmentos de la población. Hay diferencias entre políticas sociales que son más asistencialistas, y las que promueven la organización más permanente del universo social involucrado en esas

políticas. Son diferentes los proyectos que se concentran en la provisión de servicios urbanos básicos que los que combinan lo territorial con lo sectorial, porque son estas últimas problemáticas las que permiten ganar perspectivas más amplias sobre el orden social y económico cuestionado. Y también son importantes las diferencias en las concepciones sobre la participación democrática a este nivel, en cuanto a la capacidad de decisión que se tenga y los ámbitos que abarque: no es lo mismo decidir sobre opciones de obras puntuales que decidir sobre los proyectos económicos y sociales amplios, su orientación y su implementación. La participación también es diferente si se limita a avalar la gestión gubernamental por medio de encuestas telefónicas, que tener facultades hasta para remover funcionarios de gobierno. La experiencia más rica la aportó el Presupuesto Participativo inaugurado en Porto Alegre, que se convirtió en un paradigma de la participación democrática directa en el ámbito local para toda América Latina. Pero muchas veces se le piensa más desde la lógica procedimental de la participación que desde sus contenidos como proyecto político¹⁸.

Se trata de diferencias claves entre crear condiciones políticas nuevas o limitarse a administrar con eficiencia y altruismo lo que existe. La *good governance* no ha sido privativa en todo tiempo y lugar de la izquierda: en el pasado lo fue también de gobiernos burgueses. Hoy es casi una virtud exclusiva de la izquierda frente al patrimonialismo estatal de la derecha. Pero no es el único rasgo que puede definir por sí mismo a un proyecto alternativo y, en esa pérdida de contenidos, puede conducir a la rutinización y pérdida de impulso participativo en los gobiernos, como de hecho ocurre ya en algunos países. El buen gobierno de la izquierda también es apreciado por los neoinstitucionalistas de derecha, porque aporta credibilidad genérica a las *políticas públicas*; puede disminuir los grados de descontento y conflictividad y contribuir a reforzar la gobernabilidad sistémica. Estas también son algunas de las claves de los distintos niveles de tolerancia de la derecha a la *cohabitación política* con gobiernos de izquierda, por supuesto que nunca exenta de agresiones, bloqueos y descalificaciones para debilitarlos.

18 La formalización en lo procedimental, además, no permite observar las implicaciones que tiene en la relación entre democracia directa y democracia representativa locales, que involucra la acción partidaria. O se extrapolan los procedimientos sin considerar su aplicabilidad según sea el tamaño de los municipios y ciudades.

Esa tolerancia desaparece cuando el territorio se convierte en espacio de coordinación y despliegue de la rebeldía popular, de articulación de las luchas de los pobladores con las de campesinos, sindicatos, desempleados y estudiantes, como está ocurriendo en varios de nuestros países, en franca resistencia a las políticas gubernamentales y a la expropiación neocolonial de nuestras riquezas naturales. El territorio como escenario de la contradicción de clases –un proceso en ascenso en América Latina– es la crítica de izquierda más contundente a las concepciones liberales conservadoras, hegemónicas hasta hace unos pocos años. Pero también interpela a varios de los partidos que se subordinaron a ellas.

Si el territorio no es concebido como el espacio de confrontación social con el poder del capital, los gobiernos pueden llegar a considerarse ajenos a esas luchas, e incluso operar como simples administradores del orden. Hay experiencias de ese tipo que amplían las brechas entre los movimientos sociales y los que tendrían que ser considerados como “sus” gobiernos.

Según sea la concepción de la sociedad de la que se parta es el modo como los gobiernos piensan el problema de la representación del interés general, de lo que se deriva el objetivo de “gobernar para todos”. En principio, esto significa la provisión democrática de servicios y derechos urbanos sin exclusión de ningún tipo. Desde las concepciones liberales pluralistas, esto se traduce como neutralidad social y equidistancia o equivalencia en las necesidades a atender, lo que conduce a que sea la clase dominante la que imponga sus decisiones e intereses, mimetizada como “la sociedad civil poliárquica”. Esto refuerza la concepción impuesta con la reforma neoliberal del Estado, que convierte el interés del capital en el interés general y expulsa de la esfera pública los intereses populares.

Y, en realidad, aun bajo los estrictos cálculos electorales con que muchas veces se deciden políticas gubernamentales, no puede dejar de asumirse que, no sólo filosóficamente, sino también cuantitativamente, *lo general* es cada vez más *lo popular*. Sin embargo, la obsesión por la gobernabilidad (*governability*), traducida como privilegio del orden (que reclaman los poderosos para su tranquilidad), a veces deja en segundo plano las acciones contra la desigualdad social. De este modo los gobernantes de izquierda pueden hacerse más confiables ante empresarios y medios de comunicación, pero pueden terminar perdiendo fuerza política. La derecha siempre presenta como anarquía y delincuencia todo lo que altere el *statu*

quo y muchas veces logra poner a la izquierda a la defensiva. Es cierto que no siempre las demandas populares se expresan con madurez política; que la desesperación ante las carencias, sumada a la debilidad social y organizativa, frecuentemente conduce a formas de primitivismo político. Superarlo, y no controlarlo, es parte de los retos que tiene la izquierda.

En ese sentido, no ha sido fácil para la izquierda gobernante encarar su relación con los sindicatos. No sólo con los que están subordinados a la clase dominante y a sus partidos, que son utilizados como fuerza de choque contra los gobiernos de izquierda. También le ha resultado difícil la relación con sindicatos independientes y cercanos a la izquierda. En esos conflictos muchas veces les asiste la razón a los gobiernos que se enfrentan al deterioro de la ética laboral y a diversas formas de desclasamiento, nocivos hasta para las causas de los propios trabajadores. Los gobiernos no pueden dejar de exigir resultados en el trabajo, pero no pueden dejar de reconocer que ello también es efecto de la destrucción social y moral demoledora del capitalismo actual. Sin embargo, no pueden sobredimensionarse estos problemas como los únicos causantes de las dificultades de relacionamiento, atribuibles sólo a los trabajadores. No solamente está en juego una relación funcional, sino también el complejo y viejo problema de la autonomía social frente a cualquier gobierno, incluso los de izquierda. Cuando esas fuerzas autónomas no existen como acicate del proyecto político, la lógica del administrador termina por agotarlo. El reto aumenta cuando se ganan gobiernos nacionales.

Gobiernos y elecciones

Más allá de las diferencias de los proyectos, en todos los países sus gobiernos le han dado votos a la izquierda. En algunos casos, contrarrestando la crisis de representación de los partidos mismos¹⁹. Con diferentes grados, se observa una cierta dualización de los partidos entre un sector partidario que

¹⁹ Esto ocurre en México. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está muy cuestionado, pero el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cosecha un 80 por ciento de aprobación en encuestas, que se expresa en el apoyo electoral a su gobierno en julio de 2003. Sin embargo, en estas elecciones intermedias la abstención en el Distrito Federal se eleva considerablemente, y el PRD pierde votos reales a nivel nacional respecto a las elecciones anteriores de 1997 y 2000 (la concentración

trabaja de cara a la población y otro que participa en, o está vinculado, al elitismo político sistémico.

Ese dualismo opera con influencias recíprocas desiguales. En general, los aspectos más positivos de las experiencias de gobierno tienen una escasa incidencia en la conceptualización y prácticas de los partidos; son poco discutidas como aportes a los proyectos políticos. Es posible que en algo influya el hecho de que son los propios equipos de gobierno los que buscan eliminar interferencias partidarias en aras de eficiencia decisoria. En cambio, los gobiernos son influidos por las prácticas partidarias más cuestionadas, como el electoralismo, porque la existencia misma de los proyectos de gobierno depende de su continuidad, y eso requiere de seguir ganando elecciones. También el tradicionalismo político que exhiben algunos partidos llega a expresarse en las decisiones gubernamentales en materia de alianzas sociales, en la determinación de políticas en función de los tiempos electorales o en el manejo de las relaciones de los funcionarios de gobierno con los otros actores del sistema político.

Conforme crece la potencialidad electoral de la izquierda en los nuevos contextos sociales, aumentan los riesgos de tradicionalismo político de aquellos partidos que convierten en objetivo casi único el ganar elecciones. Un rasgo de ese tradicionalismo político es, por ejemplo, la conceptualización liberal del territorio como geografía electoral. En eso consiste la “ciudadanización” de varios partidos, que abandonan sus estructuras organizativas sectoriales y adosan la organización del partido a las circunscripciones electorales, activándolas sólo para períodos comiciales, internos o nacionales. Partidos así estructurados contribuyen poco a los proyectos locales de gobierno.

El impacto del electoralismo se da en todos los partidos, al menos en los tiempos de elecciones; de que sea de efectos duraderos depende de un sinnúmero de circunstancias, entre ellas la inserción de los partidos en las organizaciones sociales que les marcan sus propios tiempos y exigencias. Lo cierto es que en los tiempos electorales ganan fuerza en los partidos las posturas más pragmáticas e identificadas con las lógicas del mercadeo (*marketing*) político. Eventualmente cuestionadas en otros contextos

geográfica de su fuerza le permite aumentar el número de diputados totales gracias a esos distritos, pero disminuye el caudal total de votos).

políticos, cuando crece el caudal de votos esas posturas electoralistas también aparecen en lo inmediato como las triunfadoras.

Que se ganen elecciones no significa siempre que crezca abrumadoramente el caudal de votos, también pueden ganarse con altos índices de abstencionismo. Las momentáneas recuperaciones de credibilidad del sistema representativo no compensan la dispersión social ni la inorganicidad que aún tiene el descontento social, y tampoco eliminan completamente el desencanto ante una década de perversiones políticas. El hecho es que faltan votos. Bajo la premisa de que los fines justifican los medios, los votos faltantes se buscan mediante alianzas cupulares con el centro y la derecha. Claro que la derecha hace estas alianzas oportunistas con la izquierda sólo cuando ésta exhibe una importante fuerza real o potencial. Lo cierto es que esas acciones cupulares suelen dar resultados en votos. Pero la decisión de sumar votos cautivos de la derecha o del centro “por arriba”, en lugar de conquistar políticamente a las franjas del electorado popular que se aleja de los partidos de derecha (un proceso más prolongado), introduce nuevas contradicciones para la izquierda. No son “entregas de votos gratuitas” por parte de la derecha: implican condicionamientos futuros para los gobiernos de izquierda, que en algún momento terminan pagando esos costos.

En el corto plazo, decisiones políticas de este tipo parecen inocuas cuando ofrecen triunfos electorales. Desde luego que los triunfos son deseables y necesarios incluso con los riesgos mencionados, pues siempre representarán un cambio en las relaciones de poder y la posibilidad de atender algunas de las agudas necesidades económicas. Por limitadas que sean las reformas que se lleven a cabo, contarán con apoyo popular y son valiosas por sí mismas. Pero los impulsos reformadores estarán condicionados por los compromisos con fuerzas no progresistas, más allá de los votos conquistados. Lo que hace la diferencia en estos escenarios previsibles es si los partidos tienen fuerza social y política, si los sectores populares pueden defender sus conquistas. El ejemplo venezolano lo confirma: fueron capaces de conjurar dos intentos de golpes de Estado. La nueva experiencia de Brasil constituye un verdadero laboratorio político respecto a mucho de lo que aquí se señala: una izquierda fuerte que gana con alianzas con la derecha y centro-derecha, en un país con un importante movimiento popular urbano y rural. En Ecuador, el triunfo de Lucio Gutiérrez en la primera vuelta se dio en alianza con Pachakutik, obteniendo un 20.43 por ciento del total

de votos; el de la segunda vuelta de noviembre de 2002 (54.79 por ciento) se alcanzó con el apoyo de otros partidos de izquierda de menor fuerza electoral y con compromisos políticos con la derecha y centro-derecha. A pocas semanas de asumir en enero de 2003, estos compromisos alejaron al gobierno de Gutiérrez de sus alianzas populares anteriores, que rompen con él en agosto de ese mismo año. La continuidad neoliberal de la política económica y social, y una política internacional de franca subordinación a Estados Unidos, es acordada con la derecha tradicional ecuatoriana.

Las positivas gestiones gubernamentales aportan votos. Pero, del mismo modo, si la adhesión a las administraciones de izquierda no se traduce en procesos de organización y consciencia crecientes de los gobernados, por un lado, y de adhesión al proyecto del partido, por otro, tampoco buenas gestiones garantizan un electorado *cautivo*, como también se observa en la experiencia brasileña de Rio Grande do Sul, en la que el PT fue derrotado a nivel estadual²⁰.

Una vez más, estamos ante el problema nodal del proyecto de izquierda. Una fuerza electoral que no se sustente en fuerza política es inestable y precaria, y hasta puede transformarse en frustración y retrocesos posteriores.

Unas palabras finales

El problema de la democracia es, en todo tiempo y lugar, el de la emancipación humana. La posibilidad de que una sociedad decida con autonomía sobre su presente y su futuro está asociada a la conquista de la igualdad social. Una sociedad que está en los límites de la sobrevivencia, que carece de los medios económicos, educativos y de información suficientes para ejercer su libertad no puede constituirse como ciudadanía plena.

En América Latina, la gestación de esa ciudadanía plena pasa necesariamente por eliminar las poderosas fuentes de desigualdad,

20 En Brasil, en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 46.44 por ciento de los votos nacionales. El PT obtuvo 18.38 por ciento de los votos nacionales para diputados y el 18.52 de los votos nacionales para senadores. En Rio Grande do Sul, el PT perdió el gobierno del estado, que lo ganó el PMDB. En la primera vuelta, Tarso Genro obtuvo el 37.25 por ciento de los votos, siendo el candidato a gobernador con menor porcentaje de votos en todo el país. En la segunda vuelta obtuvo el 47.33 por ciento.

explotación, miseria y marginación actuales. La lucha democrática en nuestra región es, por necesidad, una lucha contra el capitalismo realmente existente, el neoliberalismo. La lucha democrática es, guste o no el término, una lucha de clases. Se trata de un proceso complejo y prolongado, que requiere de la reconstrucción de los sujetos sociales disgregados y debilitados por la dominación capitalista, su fortalecimiento como actores políticos capaces de frenar las políticas dominantes y, lo que no es menor, con capacidad para reconstruir nuestras sociedades.

En el descontento y rechazos actuales al orden social más antidemocrático que haya conocido América Latina en su historia moderna, hay un germen poderoso de avance democrático. Hoy se pueden conquistar gobiernos.

He propuesto un análisis en el que los problemas no se tratan en blanco o negro. He tratado de dejar claro que no comparto la idea de “cuanto peor, mejor”: en procesos complejos, los atrasos no invalidan los logros, que son necesarios. Sin embargo, tras varios años de crecimiento electoral de la izquierda –tan difícil de lograr, venciendo miedos sociales ante una derecha que busca impedirlo por cualquier medio, incluso violento– también es justo recoger aquí una pregunta que muchísimos latinoamericanos se hacen: “ganar para qué”. Nunca hubo tantos parlamentarios y municipios de izquierda como en estos años, que han sido al mismo tiempo de los más trágicos para nuestros pueblos. Aun con gobiernos de izquierda, la frustración ha crecido, los jóvenes siguen sin esperanza. Más allá de sus deficiencias, siempre es positivo que gobierne la izquierda: porque no es indiferente que no se robe desde los gobiernos, que no haya abusos de las burocracias, que no haya represión, que se recuperen las calles, plazas y espacios de cultura. Pero todo esto, que es altamente apreciado para la dignificación humana, tiene un valor menor para los que apenas pueden sobrevivir, y en América Latina esto no es una metáfora para las mayorías. Su vida depende de que se haga retroceder a este capitalismo depredador.

Ganar gobiernos no resuelve mágicamente, ni en un acto, los graves problemas estructurales –siempre se afirma–, y con razón. El gradualismo político se impone por necesidad, pero debe ser concebido en términos de la construcción de las condiciones políticas necesarias, y no como una *ideología del cambio*. La ideología gradualista es el camino más corto a las derrotas. Porque es la suposición –ésta sí mágica– de que pueden generarse

cambios sin tocar al poder. Hasta la más caballerosa cohabitación política se acaba apenas se afectan, y hasta levemente, los privilegios capitalistas.

Los conflictos con el poder son inherentes a ese andar “sin prisa y sin pausa”, como decía el poeta. La gobernabilidad (*governability*) es la afirmación del *statu quo*, no puede ser opción para la izquierda. Tampoco puede medir los avances sólo por los espacios de poder que ella conquista para sí misma.

Los desafíos son enormes, porque hoy el capital tiene el poder más concentrado y potente de su historia y no está precisamente en una retirada voluntaria. Las contradicciones que genera y enfrenta son graves, pero no son automáticamente derrotas políticas que no pueda todavía manipular. De ahí la importancia de analizar las insuficiencias y errores de la izquierda, que cuentan más cuanto más se avanza. No es una paradoja, sino la dialéctica misma de la política emancipadora. Superar esos retrasos es una desafiante tarea colectiva contra la autocomplacencia pero también ajena a toda auto-flagelación. El optimismo no es infundado en una América Latina cuyas mayorías claman por cambios, y con una izquierda que si tiene que pensar en problemas, es porque está procurando andar el camino del cambio.

Apuntes para pensar la autonomía universitaria hoy (2003)*

Cuando repasamos la historia de la autonomía universitaria en América Latina, es aún más patente el carácter de contrarreforma que tienen las políticas universitarias de la última década y media.

El concepto mismo de autonomía no puede analizarse al margen de esa historia. Cabe recordar que las primeras demandas de autonomía fueron las de la universidad medieval y clerical contra la Ilustración y el primer liberalismo republicano. E incluso que, en más de una ocasión, la autonomía fue un parapeto jurídico esgrimido por las fuerzas conservadoras atrincheradas en las universidades contra gobiernos progresistas. Por sí mismo, el concepto jurídico de autonomía universitaria, en cuanto facultad de darse a sí misma normas, no denota un contenido ni orientación específicos.

Sin embargo, en nuestra historia universitaria moderna, la del siglo xx, la lucha por la autonomía, como fenómeno continental, tiene un contenido antioligárquico y democratizador. Conquistar independencia del poder político para la creación de conocimiento científico y cultural, de pensamiento crítico y ético al servicio del desarrollo humano, en el caso de la universidad estatal no sólo implica democratizar a la propia institución para que deje de ser un espacio de producción y reproducción de la élite dominante. Implica también una disputa por la democratización del Estado al que la universidad pertenece.

Por ello, la accidentada, y muchas veces trágica, historia de la autonomía universitaria en América Latina no la podemos ver sólo en sus aspectos jurídicos, sino también como condensación de la constitución de

* Conferencia magistral en el *Foro Autonomía Universitaria* en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, 28 de agosto de 2003. Publicada en *Revista de Sociología* núm. 19, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2005.

fuerzas sociales y proyectos societales en pugna, expresados en los grupos sociales universitarios pero más allá de ellos. En nuestro continente, las experiencias de autonomía universitaria más democratizadoras se lograron en los países en los que la lucha universitaria era expresión, y formaba parte, de la lucha democrática y liberadora de movimientos populares amplios y articulados. La reforma universitaria de 1958, en Uruguay, una de las más profundas en su momento, fue producto de un movimiento de masas con la consigna “obreros y estudiantes unidos y adelante.” En Chile, el movimiento de reforma de 1968-69 en la Universidad de Chile, forma parte de ese avance popular que permite el triunfo de la Unidad Popular en 1970. Fue el presidente Salvador Allende, un destacado universitario, quien entregó personalmente el nuevo Estatuto a su casa de estudios en 1971. La evocación, más allá de su rigor histórico, sea también para rendirle un homenaje, a 30 años de su asesinato.

Es esta perspectiva social y política la que permite comprender las diferencias de alcances jurídicos, en cuanto a la conquista de autonomía administrativa, académica, de gobierno y/o financiera. Y también permite entender las razones de los avatares y retrocesos de cada una de esas dimensiones autonómicas en los distintos países. Las diferencias entre países son importantes.

Lo común en el continente, sin embargo, es la intención democratizadora de estas luchas por autonomía universitaria; y también el que en todos los países el detonante y protagonista fundamental de esas luchas han sido los estudiantes. Ello ha sido así desde 1918 en Córdoba. El movimiento de la Federación Universitaria de Córdoba fue una crítica radical al poder oligárquico en la sociedad y en la universidad, donde las castas aristocráticas se heredaban los cargos de dirección y docentes, e impedían la circulación del pensamiento científico, del pensamiento humanista y socialista que florecía tras la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Rusa. El Manifiesto Liminar de los estudiantes cordobeses denunciaba que las “universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes”; que “las funciones públicas se ejercitan en beneficio de determinadas camarillas”; que “Los cuerpos universitarios son celosos guardianes del dogmatismo”. Y “Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”. Que son

siempre, el elemento más potencialmente removedor del conservadurismo, agrego yo. Se han levantado, dice el Manifiesto, “contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad”. Hablan de revolución democrática continental: “Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”.

Así era. En 1921 se reunió en México el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, que fue seguido por el de Montevideo. A los principios de Córdoba de “verdadera democracia universitaria” y “verdadera renovación pedagógica y científica” se añadió la extensión universitaria como “verdadera popularización de la enseñanza”. Entre 1918 y 1924 esos principios fueron enarbolados por los estudiantes chilenos, uruguayos, los colombianos desde Medellín, los cubanos encabezados por Julio Antonio Mella, y los peruanos. El movimiento peruano, dirigido por el estudiante Víctor Raúl Haya de la Torre y por José Carlos Mariátegui, exigía que se abrieran las puertas de la educación para esa inmensa mayoría del pueblo indio y mestizo trabajador excluida, y crearon las Universidades Populares González Prada, a las que acudían obreros.

La participación de los estudiantes en el gobierno universitario fue conquistada lentamente y con grados diversos de cogobierno. En general, la **autonomía de gobierno**, como elección independiente y democrática de autoridades, fue un proceso accidentado y escamoteado en muchas universidades, con limitaciones y mecanismos de injerencia directa e indirecta del poder político, nombrando rectores, creando organismos suprauniversitarios de decisión y control, o Juntas de Gobierno en las que interviene directamente el sistema político. La primera forma de autonomía fue la **administrativa**, que reconoce personería jurídica a las universidades para disponer libremente de su patrimonio y adoptar sistemas propios de gestión.

Hacia finales de los treinta y en los cuarenta del siglo XX casi todos los países reconocían a la universidad estatal la **autonomía académica** para nombrar y remover personal, definir planes y programas de estudio y emitir títulos y certificados. Esto ocurrió incluso en los países que no tenían regímenes liberal-representativos, que eran la mayoría. Porque el patrón

de acumulación capitalista basado en la sustitución de importaciones, que implicaba modernización urbana, industrialización, crecimiento de las capas medias, mayor consumo y cierta redistribución del ingreso, no resultaba antagónico con las perspectivas de la clase media universitaria. En la época de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial, las mayores bonanzas económicas por las exportaciones facilitaron que el Estado asumiera el financiamiento de la universidad. La *autonomía financiera* siempre fue relativa, hasta en los países en que se estableció como obligación constitucional asignar un porcentaje del presupuesto público a la universidad. El financiamiento estatal siempre fue un mecanismo de presión para que la universidad no se excediera en sus concepciones democratizadoras más allá de las funciones profesionalistas y de movilidad social admitidas por aquel modelo de desarrollo capitalista. La segunda posguerra fue el principio del fin de las bonanzas coyunturales y de la relativa convergencia entre universidad y modelo de desarrollo.

En las universidades comenzó a madurar la crítica a ese modelo industrializador que se basó en la exportación primaria de una oligarquía sólo excepcionalmente afectada en su poder económico y político; una industrialización que excluía de sus beneficios a la población campesina e indígena; que era radicalmente dependiente en tecnología, con endeudamiento externo creciente, que iba rezagando a la industria nacional frente a la inversión extranjera directa que se beneficiaba de los términos proteccionistas. A partir de 1958, gobierno tras gobierno latinoamericano fueron firmando las primeras Cartas de Intención con el Fondo Monetario Internacional, que imponían limitaciones a las políticas de distribución directa e indirecta del ingreso, establecido como condición para recibir financiamiento externo.

Los movimientos universitarios de finales de los cincuenta y de los años sesenta del siglo pasado cuestionaron nuevamente la función científica y social de la universidad, su profesionalismo funcional a un capitalismo dependiente en crisis progresiva. Exigieron reformas académicas y un vínculo más directo con la realidad social, y desde luego la democratización del gobierno universitario para poder llevarlo a cabo. Esos movimientos se identificaron con las luchas populares para resistir la liquidación progresiva de derechos sociales y salariales. La autonomía universitaria estuvo en el

centro de la disputa entre los fines sociales de la universidad y las tendencias crecientemente autoritarias de la dominación capitalista en nuestra región.

La historia que sigue es más que conocida: intervenciones militares y policiales a las universidades, matanzas, dictaduras militares y autoritarismos civiles, como condición para imponer el nuevo modelo de acumulación capitalista. Y para imponer, 15 años después, un nuevo sistema político, con un régimen representativo que administrara políticamente el orden social de injusticia, que hiciera gobernables a sociedades agobiadas por la pobreza y la desigualdad, en un marco de pretendida legitimidad. La democracia gobernable actual.

Hoy se vuelve a la oligarquización del poder y del Estado: un pequeño grupo de grandes propietarios transnacionalizados detenta el poder económico y él mismo administra de manera directa el Estado. La noción de lo público se modifica, pues el Estado representa sólo los intereses de esta nueva oligarquía y expulsa de la esfera pública los intereses de las amplias mayorías, algunos de los cuales habían sido conquistados como derechos laborales y sociales mediante luchas.

Este cambio del contenido de lo *público* entra en contradicción con lo *público* de la universidad. La de hace tres o cuatro décadas no era la universidad *de toda la sociedad* en cuanto a quiénes accedían a ella. Muy pocos hijos de obreros y campesinos, aunque la gratuidad permitió que llegaran los hijos de empleados y de la clase media baja, democratizando su composición social y también sus inquietudes. Pero la universidad asumía su condición pública como intención de producir conocimiento y difundir cultura *para toda* la sociedad. Esto resulta contradictorio con lo público que el Estado representa hoy, y que los sectores dominantes no admiten en una institución estatal. Por eso tienen que liquidar la autonomía universitaria.

Las dictaduras lo hicieron a punta de bayoneta. Los regímenes representativos no pueden derogarla de manera abierta. Pero en la práctica la cancelan invirtiendo el proceso en el que se dio la autonomía: el Estado se desentiende del financiamiento, y el gobierno aumenta su intervención en los planos administrativos, académicos y de gobierno.

La importancia de la existencia del financiamiento estatal a la universidad no es sólo un asunto de montos, que fueron disminuyendo en las últimas dos o tres décadas. Que el financiamiento sea público supone la posibilidad de que, con suficiente fuerza social y política, se pueda incidir

y eventualmente modificar las decisiones estatales. En ningún caso es posible modificar políticamente las condiciones del financiamiento privado. El Estado se retira para que la universidad, agobiada por necesidades, tenga que rendirse ante las condiciones del financiamiento privado. Pero aun así, el gobierno usa el menguado financiamiento estatal para ejercer presiones cada vez mayores sobre la universidad, porque impone condiciones incluso académicas para entregarlo y determina dónde aplicarlo, bajo los criterios de “pertinencia” y “excelencia”. Sin autonomía financiera, se pierde además la autonomía académica y administrativa. La llamada *evaluación* es el instrumento para operacionalizar esta intervención, que incluso mediatiza la validez de los títulos. Luego volveré sobre este tema. Y además de esto, prácticamente se invalida la autonomía de gobierno mediante un número cada vez mayor de organismos gubernamentales suprauniversitarios. No son instancias de coordinación, como se dice, son instituciones que toman decisiones sobre las universidades al amparo de las Leyes de Educación Superior—muchas de las cuales son herencia dictatorial—y de las cada vez más numerosas Leyes de Ciencia y Tecnología, que son altamente injerencistas sobre las definiciones universitarias en investigación y docencia, pero poco eficaces para allegar fondos públicos a las universidades.

Para justificar el intervencionismo gubernamental se arguye que la universidad pública no puede ser autárquica, que debe someterse al escrutinio de la sociedad por los fondos que ella le entrega, que debe ser transparente y rendir cuentas. Así planteado es irrefutable. Pero es pura retórica. ¿A qué parte de la sociedad representa el gobierno como administrador del Estado? A los que pagan los impuestos con que se financia a las universidades, que son los pobres, desde luego que no: porque los más ricos no pagan impuestos a la renta, no pagan impuestos al consumo ni a las operaciones especulativas. En cuanto a la transparencia, hay que decir que es un comodín usado como cazabobos para encubrir, con el señalamiento de “problemas morales” de algunos funcionarios, el uso patrimonialista que hace del Estado el gran capital, como su propiedad privada.

Es un argumento más que engañoso. Algunas de las universidades que por su desarrollo democrático defienden más su autonomía, rinden cuentas a los Parlamentos y exhiben sus contabilidades a revisión de las Contralorías. Mientras que otras, cuyas autoridades están comprometidas políticamente con los gobiernos, no rinden cuentas.

Otro argumento contra la autonomía es que ampara burocratismo y la fragmentación del interés común por intereses grupales, corporativos, lo que haría a las universidades inoperantes. Pero en la última década, la injerencia gubernamental que comentamos tiende a convertir a las universidades en simples aparatos burocráticos de recolección de formatos y certificados, y de reparto de fondos decididos en montos y destino en otra parte. Y si de fragmentación se habla, hoy estamos ante instituciones pulverizadas, dadas las políticas de individualización del ingreso de los trabajadores académicos. No sé si aquí sea igual, pero en México una parte importante de nuestro tiempo de trabajo hay que dedicarlo a llenar formatos con información que la universidad ya posee. Todas las decisiones institucionales se fundamentan con números, todo tiene puntaje, son prácticas burocráticas, no académicas.

Los estudiantes, por su parte, están igualmente sometidos a mecanismos de individualización y control burocrático de su desempeño por criterios mercantiles, que sólo apuntan a abaratar costos disminuyendo su estancia en las instituciones. En la lógica de la eficiencia terminal no hay ninguna consideración académica. La retórica sobre la equidad, sobre la igualación de oportunidades mediante tutorías, es también una forma burocrática de individualización dependiente de los estudiantes. La figura del tutor, cuyo término en sí mismo califica al estudiante como persona sin capacidad para actuar con autonomía, es una forma de individualizar sus perfiles curriculares en función de la demanda del mercado. Se acabaron las filosofías pedagógicas que dan cuerpo a la docencia.

En estas condiciones, que destruyen la capacidad de los universitarios para ejercer las decisiones democráticas como sujetos colectivos, el gobierno colegiado, aunque se mantenga formalmente, es una farsa.

Hay una regresión de un siglo. Pero incluso es peor que entonces. Porque si las reformas, desde Córdoba, asignaban a las universidades funciones científicas que en ciertas coyunturas resultaron útiles para el desarrollo capitalista, hoy las funciones científicas de la universidad son hasta superfluas para economías especulativas y de servicios.

A la clase dominante le importa muy poco la universidad pública más allá de usarla como instrumento de socialización valórica e ideológica conservadora. Y han tenido bastante éxito en imponer el individualismo y el utilitarismo como guía de acción de los universitarios, lo que de por sí cambió el sentido del quehacer institucional.

La transformación de los fines cognoscitivos y sociales de la universidad también se impone con la penetración ideológica de la concepción neoliberal del “capital humano”. Si algo hay que reconocerle a los sectores dominantes, es su capacidad para desplazar los contenidos de las representaciones lingüísticas y conceptuales, para encubrir sus propios fines y objetivos con un lenguaje de aparente sentido común.

Hablar de capital humano parece una disposición virtuosa para cuestionar la cosificación capitalista, como reivindicación de las personas como la verdadera riqueza de una sociedad. Pero no. La teoría neoclásica del capital humano, que desde fines de los años cincuenta desarrollan Gary Becker y sus seguidores, es la negación de las personas como tales. Y es la concepción que domina la educación en la actualidad. Y la que da mayor justificación a la liquidación práctica de la autonomía, también desde “dentro” de la universidad.

Los neoliberales definen como capital humano a las capacidades y habilidades que se acumulan en ese factor productivo llamado trabajador. La persona cuenta sólo como portadora de esas capacidades. Y éstas serán útiles sólo si el mercado está interesado en usarlas. El costo de esas habilidades, llamado “costo de oportunidad”, se valora en función de la “aplicabilidad económica” que posean las habilidades, de su “empleabilidad”, es decir, que el mercado las emplee. Si no está interesado en usarlas, ese costo de oportunidad es un desperdicio. Para esta teoría, la pobreza es el resultado de que a ciertos sectores de la población no se les dio la oportunidad de contar con esas habilidades que el capital requiere. Sólo por ello son desempleados o tienen salarios de hambre. Si la pobreza se explicara sólo por falta de “educación”, ¿cómo explican que haya pobres con exceso de educación? Es cuestión de preguntarles a los neoliberales argentinos.

Según esta teoría, el Estado, como subsidiario del capital (“subsidiario” es un eufemismo hoy), debe proveer y financiar las habilidades requeridas por el capital, pero sólo éstas. Con los impuestos de las mayorías pobres, el Estado le financia al capital esos factores necesarios para la acumulación, que integran la fuerza de trabajo. Cuando algunos neoliberales dicen que la educación es *inversión* y no *gasto*, no lo hacen por repentinas metamorfosis éticas: están pensando en esos factores de la acumulación privada. Y esa es la lógica de las mal llamadas “políticas sociales” neoliberales: proveer focalizadamente esas habilidades que el capital requiere a quienes no las

tienen, para que puedan tener el privilegio de ser explotados. La educación deja de ser siquiera “instrucción” y se convierte en mera “capacitación”. Además, el Estado tiene que facilitar la “empleabilidad” de esas habilidades, ayudando a disminuir sus costos de transacción en el mercado.

Eso incluye dar seguridad al capital para que no aumenten sus costos con legislaciones laborales que no lo favorezcan, darle garantías de que sus inversiones no serán afectadas con impuestos, con demandas judiciales, con riesgos de expropiación, con decisiones políticas que las interfieran, etc. Sólo así la tarea educativa se justifica como creadora de capital humano.

Bajo esta lógica, la universidad ya no es educación superior, está reducida a ser sólo el nivel terciario, formadora de más habilidades que el nivel secundario, las que el mercado requiera. Su papel ahora es más estrechamente profesionalista que antes. La multiplicación de “ofertas profesionales” no está dirigida a satisfacer vocaciones e intereses juveniles, sino a dar al mercado lo que pide. Y es aquí donde entran los criterios de “pertinencia” y “excelencia”. El capital decide qué es pertinente y excelente, el gobierno financia según ello, y la mentada evaluación es el mecanismo para asignarlo. Los seguimientos que se hacen de la inserción de los egresados en el mercado laboral no es una altruista preocupación por el destino de los jóvenes, sino sólo una forma de medición práctica del ajuste de la universidad a la demanda del capital. Y son estas evaluaciones de gobiernos y empresarios, que son las dos caras funcionales del gran capital, lo que determina toda la vida académica: carreras, perfiles curriculares, desempeños estudiantiles y docentes, las nociones de eficacia y eficiencia mismas, todo.

Puede decirse que, en principio, es correcto que la universidad responda a los requerimientos del desarrollo económico. Pero, ¿de qué desarrollo hablamos? ¿Crecimiento macroeconómico es desarrollo? Esta es una conocida discusión. Pero aun en términos macroeconómicos, nada permite aceptar la lógica del capital humano. En un capitalismo especulativo, que no invierte productivamente, que importa casi todo lo que se consume, que hace del desempleo una condición estructural para aumentar la explotación, que se somete al saqueo de nuestros recursos naturales, que se somete al monopolio transnacional de la propiedad intelectual impuesto en la Organización Mundial del Comercio, que pugna por el ALCA para legalizar

todo esto... ¿qué desarrollo es éste? ¿Qué necesidades de conocimiento propio puede requerir?

Los requerimientos de capital humano a la educación básica son mínimos, no mucho más conocimiento que leer, escribir y las operaciones aritméticas; algo de inglés para apretar botones, pero sobre todo le interesa que haya disponibilidad para la flexibilidad y una gran propensión a la tolerancia a lo existente. En cuanto a la educación terciaria, le interesan los servicios, principalmente. Para ello no se necesita crear conocimiento científico, sino sólo enseñar aplicaciones y sobre todo habilidades. En eso consiste el “constructivismo” pedagógico que se está imponiendo: maestros que sean sólo animadores de la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes. No se necesitan maestros y profesores que sean creadores y transmisores de conocimiento, son piezas entrenadoras. Son por lo tanto “intercambiables”, de mínimo prestigio, mínimo poder y mínimo ingreso, como explicaría el estructural-funcionalismo. Nada de procesos de enseñanza-aprendizaje que formen críticamente las personalidades de todos sus participantes, incluso frente al conocimiento que da su propia universidad. Nada de sindicatos o cogobierno democrático autónomo.

Para la reproducción del capitalismo dependiente en América Latina la clase dominante sólo necesita garantizar su reducida élite. A ella sí hay que darle una formación más integral, que sepa pensar y mandar, que esté al día en los avances de la ciencia y la tecnología que se produce monopólicamente en los centros del sistema, también para que sepa manipular las ingenuas mitificaciones de la llamada “sociedad del conocimiento”. Esos son los denominados “grupos de liderazgo académico” en los documentos estratégicos del BID y el Banco Mundial. A ellos el Estado les debe destinar abundantes recursos sin obligación de que rindan cuentas por los mismos; el Estado neo-oligárquico forma y financia solamente a su élite intelectual, igual que a sus banqueros.

Los estudios de licenciatura o pregrado forman fuerza de trabajo apta, apenas superior a la secundaria. Cómo será la escasa demanda del mercado, que cuando sólo un 15% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en la universidad –en el promedio latinoamericano– se habla de masificación. Los posgrados criollos aportan sólo lo que se les quitó a las licenciaturas, están degradados. Y se usan sobre todo como mecanismo de control social, como manipulación utilitaria de expectativas, y para imponer mayores

sujeciones a los académicos en la competencia individualizada por ingresos. El Estado financia a su élite para los posgrados del centro del sistema en todas sus sucursales. Ahora pretenden que la educación sea una mercancía de libre comercio, así también sus transnacionales educativas pueden extraer ganancias mayores directamente en nuestros territorios.

No sólo se liquida la autonomía formal de las universidades, es la liquidación de todo pensamiento autónomo. Es desde fuera y desde *adentro* mismo de las universidades que se destruye su responsabilidad social de aportar opciones a nuestras sociedades para que éstas decidan autónomamente proyectos de países incluyentes, que dispongan de los saberes para un desarrollo humano pleno.

En la búsqueda de alternativas al neoliberalismo, estos temas están casi ausentes. Y en una coyuntura en la que el desprestigio del neoliberalismo en lo económico y social abre posibilidades a triunfos electorales de la izquierda, ésta no asume estos problemas. Por ejemplo, no percibe hasta dónde la hegemonía ideológica neoliberal sigue intocada en la educación y sobre todo en las universidades. Hace quince días, el Ministro de Educación del gobierno de Lula da Silva, Cristovam Buarque, ex rector de la Universidad de Brasilia en los ochenta, decía a la prensa, en México, que una de las razones por la que la universidad perdió “su rumbo” es porque “el conocimiento avanza más rápido de lo que la universidad logra. Cuando un joven termina su doctorado después de tres o cuatro años, lo que está en su tesis seguro que ya está superado.” ¿Ese es el problema de nuestras universidades? El conocimiento, como creación humana, siempre avanza más allá de lo que una comunidad o individuo pueden apropiarse de él, en un determinado instante histórico. Pero además, ¿todo lo que avanza hoy es realmente conocimiento nuevo? Mucho de ello son aplicaciones que se multiplican en función de la competencia capitalista. Hay que conocerlas, desde luego.

Pero las prioridades de conocimiento parecen ser otras cuando en América Latina faltan médicos para curar diarreas infantiles mortales, cuando a nuestras fértiles tierras se les impide producir para dar de comer a millones, cuando faltan cientos de miles de viviendas populares, cuando lo social está moldeado por el desempleo y el hambre, cuando el analfabetismo absoluto y funcional lacera a millones. Nuestras universidades están obligadas a preguntarse qué es prioritario investigar, para qué y para

quiénes, qué nuevos conocimientos son necesarios y qué tecnología adaptar, qué tipo de profesionales formar, qué principios éticos promover, sin estar condicionada práctica y mentalmente por la vorágine de la acumulación del gran capital transnacional que nos está destruyendo como países. Así se ejerce autonomía. Estas preguntas no las puede responder la universidad pública de manera aislada, pero tampoco siguiendo las “señales” del lucro. La extensión universitaria debe ser repensada como fuente de definiciones, no como algo accesorio. Es trabajando con los sectores sociales mayoritarios, los que construyen realmente a los países, como la universidad tiene que definir los problemas a estudiar y ofrecer opciones; lo que debe llevarse a cabo en un proceso democrático de toma de decisiones, condición ineludible, además, para su riqueza y eficacia.

Es una responsabilidad que quizás sólo pueda asumirse cabalmente en una integración latinoamericana de y para los pueblos. El conocimiento científico tiene principios epistemológicos y metodológicos universales. Pero en esa integración latinoamericana de y para los pueblos, las universidades podrían desarrollar líneas primordiales de investigación y docencia, por países, en función de sus condiciones y posibilidades específicas, para ser aportadas mutuamente.

Avanzando en cada lugar, pero juntos en la resistencia continental a la contrarreforma actual, para rescatar y redefinir el rumbo de la autonomía universitaria.

La tercera vía en América Latina: de la crisis intelectual al fracaso político (2005) (fragmento)*

La batalla de ideas aún perdida

El neoliberalismo está desprestigiado socialmente, pero no en crisis intelectual. Las críticas a los efectos sociales de las políticas económicas no han alcanzado a los modos de pensar: siguen predominando los parámetros teóricos y epistemológicos entronizados por las clases dominantes para imponer y legitimar la reestructuración neoliberal del capitalismo.

Lo que se ha llamado “pensamiento único” sigue incólume, aunque reciclado. La frase “pensamiento único” no es más que una constatación, formulada con eficacia impresionista e intención crítica, de que está operando la hegemonía ideológica de las clases dominantes. Es una descripción que no explica por qué ni cómo las ideas de los beneficiarios de este orden social desigual y excluyente se han impuesto como *sentido común*: palabras e ideas que parecen *obvias, lógicas, naturales*, que todos usan de manera coloquial para nombrar lo que “es”. Sucede que la conocida afirmación de Marx de que *las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad*, es menos tautológica de lo que parece, y más difícil de demostrar de lo que se cree. Y que hoy operan incluso para formular las críticas al neoliberalismo.

Aunque la derecha está desprestigiada social y políticamente, y hasta sufre derrotas electorales, no ha perdido capacidad de iniciativa ideológica; por el contrario, exhibe gran eficacia para reciclar su discurso e incidir en la discusión de las alternativas reclamadas por amplias mayorías sociales, con el propósito de neutralizarlas.

* Publicado en Jairo Estrada (Ed.), *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005.

En un lapso de veinte años, la derecha ha puesto en práctica dos operaciones ideológicas aparentemente contradictorias pero con éxito parecido: primero impuso el *consenso neoliberal*, ahora impone un *consenso posliberal*, que es presentado como “crítica” y “alternativa” del primero. Un “anti-neoliberalismo” con el que pretende desligarse del descrédito que padece, para incidir en la discusión de las *alternativas* acotando el horizonte de lo *posible* y por lo tanto *deseable*. Su objetivo es mantener y hasta profundizar los mismos objetivos capitalistas en nombre del “cambio”. Entre sus más visibles logros está el convencer que alternativa no es antítesis, sino una tercera vía.

El *neoliberalismo* se impuso mediante una violenta derrota social de los sectores populares. El posliberalismo se está imponiendo cuando los pueblos están empezando a superar aquella derrota. Paradójico, pero sobre todo preocupante. Es necesario explicarse cómo una derecha desprestigiada puede llevar a cabo con éxito la operación de metamorfosis de su agenda conservadora en el nuevo programa progresista.

La tercera vía es la fase actual de la estrategia de larga duración de la derecha en América Latina para neutralizar a la izquierda en un capitalismo que cataliza las demandas de igualdad social y contra la exclusión, que son consustanciales a la existencia misma de la izquierda. El tercerismo, como política conservadora, tiene ya dos décadas en América Latina. Anteriormente fueron políticas *hacia* y *sobre* la izquierda que sobrevivió al exterminio político-militar procurando integrarla al sistema. En la nueva fase de la estrategia, lo que se busca es que los objetivos conservadores sean llevados a cabo *desde* y *por* la propia izquierda que va saliendo de la derrota y que gana elecciones.

La crisis intelectual de los dominados, que aún persiste, cumple un papel de primer orden. Precisamente porque la *batalla de las ideas* no se ha ganado, es que sigue perdida la *batalla de las palabras*. La derecha actúa todavía con desmedida impunidad para manipular políticamente con el discurso, imponiendo, como lo hizo antes, un léxico del cual no se sustrae siquiera la mayoría de sus críticos. Entre éstos hay quienes dicen que lo usan con un sentido práctico para dar fluidez a la comunicación (¿déficit creativo?); aunque nombran con las mismas palabras contenidos distintos –lo que pocas veces se explicita–, con el uso del léxico dominante legitiman la semántica que los poderosos socializan como *sentido común*. Con la salvedad

de esas excepciones, el léxico dominante exterioriza el dominio ideológico y epistemológico que predetermina desde dónde se piensa la realidad. No es sólo la repetición permanente de esas palabras lo que hace a su eficacia introyectiva; los sectores dominantes han dado a cada una de ellas una justificación práctica y una explicación “científica” para hacerlas creíbles como realistas, como descripción necesaria e inevitable de una realidad que se piensa y explica, desde, y en función de la lógica capitalista. Desde luego que la eficacia ideológica no se reduce a mecanismos lingüísticos, sino que se realiza y arraiga a través de procesos sociales que hacen “creíble” el modo como se les nombra. Pero ese supuesto realismo nominal resulta de un desplazamiento de contenidos, de un deliberado encubrimiento de la realidad con fines políticos: *ideologización*.

La centralidad que tiene actualmente el discurso ideológico como instrumento político de dominación da cuenta del vaciamiento teórico de los dominados y de sus limitaciones cognoscitivas sobre los procesos socio-históricos mismos. Lo que les impide desnudar las falsificaciones doctrinarias, desentrañar el lenguaje abstracto, ahistórico y tecnicista del discurso ideologizado. Aunque estos son rasgos consistentes con las representaciones teóricas burguesas del capitalismo, son notorias las inconsistencias deliberadas para oscurecer los verdaderos objetivos. No es casual que parte de la ofensiva ideológica de la derecha sea la *teorización posmoderna* que absolutiza la *palabra* y el *sentido*, como simbolismo subjetivo e individual independiente de las determinaciones de clase y de las relaciones de poder. De esta manera se oculta que son quienes ejercen el poder los que imponen los contenidos de las representaciones convertidas en *sentido común*. Quienes hacen análisis del discurso partiendo del lenguaje mismo como verdad neutra, creen “descubrir una verdad del lenguaje a falta de un lenguaje de lo verdadero”, como dice Henri Lefevbre¹. Esto hace posible que con total desparpajo los beneficiarios del orden social actual se mimeticen como críticos o progresistas, y hasta lleguen a convertirse en líderes de opinión de quienes lo cuestionan.

Algunas precisiones son necesarias para tratar el tema de la ideología dominante, que no es simple “reflejo”² ni pura “conspiración”. En la

1 Henri Lefevbre, *La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones* (1980), México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p.109.

2 El economicismo tomó la idea de Marx de ideología como “reflejo” de una posición

ideología dominante encontramos varios elementos constitutivos: a) una expresión consciente del conocimiento que la burguesía tiene de sí y de la realidad sobre la que actúa; b) un modo inconsciente y fetichizado de entender y representar la realidad (la suya propia y la de los dominados) desde una posición de clase, y c) los efectos que en el pensamiento tiene la existencia relacional-contradictoria de esa clase con otros grupos sociales. Estos elementos constitutivos del pensamiento de la clase dominante son sistematizados doctrinariamente y se organizan como teoría.

En el discurso ideológico de los dominantes se expresa, en parte, el horizonte epistémico de clase con representaciones relativamente inconscientes. Aun en éstas hay un encubrimiento de las finalidades y de los intereses particulares que se pretenden universalizar, lo que se hace mediante desplazamientos o trasposiciones explicativas del modo de existencia de las clases y sus relaciones. Cuando las representaciones dominantes, que le asignan a la *realidad* ciertas características, son interiorizadas por los dominados (subalternidad), la dominación se perpetúa sin tener que “mentir” flagrantemente. Pero cuando las contradicciones sociales se agudizan al punto de hacer difícil que los dominados introyecten las universalizaciones de los dominantes, cuando está la señal de alarma sobre el riesgo de perder

de clase, asignándole un rol pasivo. Es una interpretación errónea de lo señalado por Marx y Engels en el primer capítulo de *La ideología alemana* de 1845: “Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. [...] no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los *reflejos ideológicos* y de los ecos de este proceso de vida.” C. Marx y F. Engels, *La ideología alemana*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1974, p.26 (resaltado en cursiva de la autora). Que no hay en Marx la idea de que la ideología (representaciones, teoría, lenguaje, consciencia) es un reflejo pasivo, es comprobable en lo que él mismo dijera un año antes, en 1844: “Es cierto que el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que el poder material tiene que derrocar por medio del poder material, *pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas.*” C. Marx, *En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel*. En *La sagrada familia*, México, Juan Grijalbo Editor, 1967, pp.9-10 (resaltado en cursivas de la autora).

el dominio sobre el sentido común, el encubrimiento y la mentira son decisivos. Esa acción consciente con fines prácticos precisos, constituyente del discurso, también es arropada teóricamente. Entre muchos miembros de la clase la ideología puede conservar aún vastas zonas inconscientes; pero no es así entre quienes ejercen el liderazgo ideológico, en el que participan los cortesanos leales de la clase. Esto no es una simple inferencia lógica sino una comprobación empírica. Se miente deliberadamente, y esa es la “verdad” que se impone para pensar la realidad.

Constatar los éxitos ideológicos de la derecha no basta para explicarlos. Hasta ahora se ha prestado una mínima atención a los efectos ideológicos de las derrotas político-militares de los años setenta y ochenta sufridas por la izquierda. Casi es un lugar común atribuir a la crisis del “socialismo real” la pérdida de horizonte anticapitalista. Más recientemente se observa el impacto que tiene la potencialidad electoral de la izquierda, y la probabilidad de que gobierne, en su desperfilamiento programático y en la adopción de conductas posibilistas, respectivamente. Pero explicar los cambios ideológicos en la izquierda y sus debilidades teóricas es un asunto de totalidad compleja, de tendencias así como de especificidades, que planteado de manera abstracta termina por ser inasible. Y por supuesto impensable de reconstruir analíticamente, aun de manera indicativa, en un trabajo breve. Algunas pistas pueden encontrarse al analizarse temas o problemas más concretos³. Uno de ellos, tratado aquí someramente, es la proclividad al *tercerismo* de parte importante de la izquierda partidaria y no partidaria latinoamericana, que viabiliza el reciclamiento discursivo y las estrategias políticas de la derecha para gestar un *consenso posliberal*.

De los dos demonios al tercerismo

La izquierda le ha entregado dócilmente a la derecha un flanco por el cual ser golpeada: el análisis de la derrota político-militar⁴ en décadas

3 En otros trabajos analicé cómo en el marco de la democracia gobernable, la concepción conservadora de la democracia liberal se asimila como la idea de democracia en general, lo que induce a pensar que “se es democrático” sólo si se es liberal en su versión más conservadora.

4 El adjetivo “político-militar” no es reductible a la acción de las guerrillas en América Latina. Se plantea en sentido gramsciano: es un momento de crisis de dominación, tras

pasadas. La derecha da la “explicación”: “la causa está en el marxismo, responsable del ascenso del fascismo y de la caída de la democracia”. Son los mismos argumentos que los esgrimidos por los liberales en la década de los treinta en Europa⁵, para hacer que la izquierda renuncie a sus metas socialistas y adhiera al capitalismo como única posibilidad de progreso y democracia. La derrota, que fue infligida a la izquierda latinoamericana por la contrarrevolución capitalista, habría sido producto del marxismo por dos efectos del mismo: el “utopismo” (“voluntarismo”) y la “escasa adhesión de la izquierda a los principios democráticos”. El argumento, basado en falseamientos históricos y teóricos, tanto con relación al pensamiento del fundador de la filosofía de la praxis como a la historia misma, sustenta la muy difundida *teoría de los dos demonios*: que responsabiliza por igual a fascistas y marxistas por la “crisis de la democracia”. La contrarrevolución es justificada como reacción comprensible a “la revolución” (en realidad, toda forma de ascenso de las luchas populares), con lo que se niega por principio la legitimidad de la lucha contra la opresión, la desigualdad y la injusticia; el efecto es convertido en causa. Sólo en un segundo momento los liberales conservadores condenan los aspectos represivos de la contrarrevolución que se extienden sobre toda la sociedad.

Estos argumentos para desradicalizar a la izquierda (que no vaya a las raíces), se refuerzan con la crisis del “socialismo real”. Se induce a la izquierda a renunciar a sus objetivos anticapitalistas “porque provoca a los enemigos y pone en riesgo a la democracia”, por un lado, y porque además “es inútil” dado el “fracaso del socialismo”. Este, que es un argumento de la derecha, se hace pasar como un pensamiento de *izquierda democrática moderna y realista*⁶. Con falseamientos históricos y teóricos se reinterpretan los “datos” para ofrecer conclusiones que anticipadamente se quería demostrar. Buena parte de la izquierda tomó como ciertos los “fundamentos” de la

una acción política que ha disgregado la fuerza política hegemónica del opresor, que por la máxima tensión de fuerzas puede tener reflejos militares. Que puede derivar en la pérdida de eficacia represiva del opresor y disgregarlo, o en sentido contrario en la derrota represiva-militar, y política, de los dominados.

5 Un exponente del tercerismo de aquellos años fue Carlo Rosselli. Véase *Socialismo liberal* (1930), México, Editores Mexicanos Unidos, 1977.

6 Un buen ejemplo es *La utopía desarmada* de Jorge G. Castañeda, difundida como obra de un izquierdista moderno, que pocos años después no ocultó su connivencia con Carlos Salinas de Gortari y su adoración al imperio del norte. México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1993.

teoría de los dos demonios, renegando de su lucha por los costos humanos y políticos impuestos por la contrarrevolución, y también aceptando la versión del “marxismo” dada por la derecha.

Es cierto que en América Latina hubo experiencias de voluntarismo en las concepciones políticas de algunos “marxistas”. Para empezar, no son deducibles de la teoría de Marx (quien aclaraba siempre no ser “marxista” deslindando de sus vulgarizadores, que no divulgadores)⁷. Enseguida, no todo lo que se califica como voluntarista lo era, aunque fuese derrotado o fracasara. El *voluntarismo* cree que el cambio es realizable independientemente de las condiciones internas al capitalismo; empero, la derecha pretende hacer pasar como *voluntarismo* el fin socialista mismo, es decir, la voluntad consciente y racional en pos de la emancipación humana, luchando contra el capitalismo porque éste no la permite. Pero sobre todo, el que hubiera en América Latina expresiones de un “marxismo” vulgar y dogmático, ajeno al marxismo mismo pero actuando en su nombre, no es la *causa* de la brutal reestructuración del capitalismo, impuesta con la destrucción física y orgánica de todas las fuerzas que la resistían o pudieran resistirla. Con esa “teoría” la derecha culpabiliza a la izquierda por haber luchado por la verdadera democratización de nuestras sociedades.

Mucha de la izquierda que renegó del marxismo lo hizo sin conocerlo, y otra lo hizo admitiendo sus propias limitaciones teóricas pero atribuyéndoselas al marxismo. Y casi todas asimilaron el fracaso del socialismo en la URSS⁸ a su derrota político-militar, que no tuvo relación con

7 Los errores de algunos “marxistas”, como explica Gramsci, son producto también de la difusión de las removedoras ideas de la filosofía de la praxis en las masas populares: “Tal vez pueda probarse que muchos supuestos teorizadores del materialismo histórico han caído en una posición filosófica análoga a la del teologismo medieval [...] un gran movimiento de renovación moral e intelectual, en cuanto se encarnaba en las amplias masas populares [...] iba a tomar inmediatamente formas groseras y hasta supersticiosas, y que eso era inevitable por el hecho mismo de que el protagonista, el abanderado [...] era el pueblo [...] y no una pequeña aristocracia de grandes intelectuales.” Carta a Tatiana Schucht, Cárcel de Turi, diciembre de 1930. En *Antología* de Manuel Sacristán, México, Siglo XXI, 1970, pp.259-260.

8 El fracaso del socialismo en la URSS no es atribuible a la filosofía de la praxis, y tampoco al proyecto defendido por Lenin en los siete años que estuvo al frente de la transformación revolucionaria de ese país, aunque tras su muerte se actuara en nombre del “marxismo-leninismo”. Tampoco es conocido el pensamiento de Lenin, quien combatió hasta sus últimos días las concepciones deformantes del proyecto socialista, entre otras, el centralismo ruso, la liquidación de la autonomía de los sindicatos obreros y el debilitamiento de la democracia de los soviets, por y con el burocratismo

aquél. Contribuyeron así –aun involuntariamente– a la ideologización de derecha para negar la filosofía de la praxis como tal y con ello la crítica al capitalismo. En América Latina esta sigue siendo una discusión pendiente, que por omisión avala las mentiras y falseamientos de toda laya, admitidas vergonzantemente por buena parte de la izquierda.

Cuando el capitalismo es indefendible por sí mismo, sólo enterrando al marxismo y a la finalidad socialista es que residualmente se hacen emerger sus “virtudes”. Y desde esa plataforma argumentativa puede presentarse al liberalismo como la única ideología y concepción democrática y liberadora. Para ello se disocia al liberalismo de la burguesía, presentándolo como una “idea” universal de libertad y democracia. El desconocimiento que también tiene la izquierda latinoamericana respecto al liberalismo, como programa político burgués y como doctrina legitimadora de su poder, facilita la ofensiva ideológica de la derecha. En particular, la que acusa a la izquierda de “escasa adhesión a los principios democráticos”. A “sus” principios democráticos, que la derecha realiza en la democracia gobernable. Y de cuyas virtudes ya no puede hacer gala⁹.

Así, haciendo padecer a la izquierda los horrores del terrorismo de Estado, y endilgándole “la crisis de la democracia”, el tercerismo conservador logra imponerse mediante la trastocación de las taxonomías políticas en América Latina. Tras las dictaduras, las transiciones colocaron como eje dicotómico el de “civiles-militares”, lo que permitió asimilar los civiles a *democráticos* y los militares a *autoritarios*. El cambio de régimen político colocó a la *clase política civil restaurada* como una entidad democrática

estatal. Baste ver sus escritos “Contra la burocracia”, “Sobre la Inspección Obrera y Campesina”, “Más vale poco pero bueno”, “Carta al Congreso” (conocida como su testamento político) y la compilación de sus dictados en “Diario de las secretarías de Lenin”. Publicados en *Cuadernos de Pasado y Presente* núm.25, Córdoba, 1971. Como enseña Adolfo Sánchez Vázquez, el poscapitalismo que hubo en la URSS detuvo su tránsito hacia el socialismo, porque si bien socializó los medios de producción, no socializó el poder, siendo ésta una condición ineludible para el socialismo, a su vez larga fase de transición. El tránsito de la sociedad capitalista a la sociedad socialista quedó a medias, razón por la cual ese no era “socialismo real”. Véase *De Marx al marxismo en América Latina*, México, Ed. Ítaca-BUAP, 1999.

9 El más reciente informe del PNUD compendia las inquietudes que desde hace varios años tienen los ideólogos de las clases dominantes, que no logran convencer de las virtudes de la democracia liberal realmente existente. *La democracia en América: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Informe sobre la democracia en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)*, 2004.

indiferenciada, lo que permitió borrar la participación y responsabilidad de la derecha civil durante las dictaduras y el que sea la principal beneficiaria de la reestructuración capitalista al amparo de las dictaduras militares y los autoritarismos civiles. Ese sector de la derecha pudo, durante varios años, presentarse como el “centro” en el sistema de partidos; “derecha”¹⁰ quedó asociada a los militares y a los que no participaron en las negociaciones para la transición. En tanto que la izquierda –donde aún existía– exhibió con orgullo el haber sido protagonista fundamental de la resistencia contra las dictaduras, legitimada como actor *democrático* y no tanto como *izquierda*. La imposición de la concepción de derecha de la *democracia como moderación y desradicalización* compelió a la izquierda a demostrar sus credenciales democráticas con un corrimiento al centro. Cuando eran “reaccionarios” quienes defendían el socialismo, y “progresistas” los que festejaban el advenimiento del dominio casi incontestado del capitalismo convertido en *economía de mercado*, la capacidad de manipulación ideológica de la derecha llegó al zenit.

Sin embargo, en poco más de un lustro, la debacle económica y social en América Latina impuso la crítica al neoliberalismo, que fue polarizando el campo “democrático” entre sus defensores y sus críticos. Esa contradicción fue sobreimpuesta –más empírica que analíticamente– a la contradicción entre derecha e izquierda, respectivamente.

Con el soporte de las luchas y resistencias populares, el orgullo de pertenecer a la izquierda se recuperó, aunque con superficialidad en las definiciones: sus señas de identidad son las de *democrática, antineoliberal y progresista*; ya no anticapitalista.

Desprestigiada, pero no a la defensiva, la derecha impone la “interpretación” de la nueva coyuntura traduciendo la oposición *neoliberales-antineoliberales* (transmutada en “derecha-izquierda”) a *antiestatistas-estatistas*, y más precisamente como *fundamentalistas de mercado-estatistas*, los nuevos dos demonios o dos “extremismos”. Entre ellos, una vez más el tercerismo conservador se autoasigna un “nuevo centro”: “tanto mercado como sea

10 De derecha, más allá de las relaciones espaciales en los sistemas partidarios, son la concepción y postura de quienes promueven la desigualdad y la justifican como el motor del desenvolvimiento social. Quienes favorecen la reproducción del capitalismo realmente existente son de derecha más allá de sus declaraciones.

posible, tanto Estado como sea necesario”¹¹, que se convierte en santo y seña de la versión actual de tercera vía.

El tercerismo, insisto, es la estrategia de una derecha más lúcida y política para absorber las contradicciones inherentes a la reproducción del capitalismo en su fase histórica actual: especulativo, rentista, explotador, excluyente, depredador. Contradicciones que se agudizan con cada éxito capitalista, y que generan objetivamente la necesidad y vigencia históricas de la izquierda. Los éxitos ideológicos de la derecha tercerista consisten en “reinterpretar” las contradicciones y construir los “extremos” adecuados para colocarse como “centro”, y desde allí cooptar o neutralizar a la izquierda. El “extremo derecho” es proporcionado por la propia reproducción capitalista, con su permanente violencia económica, que requiere de formas más directas, menos mediadas, de dominación. A las que apela toda la clase dominante cuando es necesario. Pero hay un sector de los dirigentes políticos e ideológicos de la clase, una derecha pragmática, con mayor flexibilidad política, que ha sabido renunciar a ellas cuando pierden efectividad. Sólo en ciertas coyunturas este sector más lúcido se diferencia de las posturas tradicionales de la derecha. Son diferenciaciones tácticas en el ejercicio de la dominación, que suelen encubrirse con declaraciones doctrinarias pero que responden a objetivos comunes. De hecho, y ya lo hemos comprobado en América Latina, cuando las vías “más políticas” no dan resultado, sus promotores ocasionales también renuncian a esas políticas de “centro”. Más aún, hay una suerte de división del trabajo, en la que la existencia del “extremo de derecha” es funcional a las adecuaciones tácticas, la vieja historia del *policía malo y el policía bueno*.

Para que el tercerismo de derecha funcione necesita un “extremo izquierdo”. Lo es, por definición, toda postura anticapitalista y antisistémica. Por las razones comentadas, se ha difuminado la presencia del “extremo izquierdo”, corriéndose al centro o al centroizquierda, lo que permite a la derecha tercerista ocupar su posición “intermedia” mucho más desplazada hacia la derecha. Requiere de menos mediaciones para llegar al mismo objetivo, con mucho menor creatividad teórica e ideológica, y política, que la que necesitó hace medio siglo cuando tuvo que embarcarse en el Estado

11 Anthony Blair, *La tercera vía*, Madrid, Grupo Santillana-Ediciones El País, S.A, 1998, p.92.

de Bienestar para neutralizar el anticapitalismo de las masas en el centro capitalista, y en América Latina con las distintas versiones desarrollistas. Resulta paradójico que cuando la brutalidad de esta fase histórica del capitalismo requeriría de mayores esfuerzos y recursos para legitimarlo, y cuando amplios sectores populares reclaman y luchan por cambios, la derecha pueda mantener la conducción ideológica y política sin mayor dificultad, e incluso pueda mimetizar su agenda conservadora como progresista, e imponérsela a la izquierda.

Antiestatismo y estatismo

La tercera vía actual se presenta como la posición opuesta simultáneamente a los “extremos” del “antiestatismo” o “fundamentalismo de mercado” y del “estatismo” de la izquierda (de “las izquierdas” socialdemócrata y marxista, plural en sí mismo discutible para el presente). Es un doble falseamiento, tanto de la caracterización de sus *opuestos*, como de la posición propia, que de ninguna manera es de equidistancia.

El llamado fundamentalismo de mercado neoliberal es un encubrimiento del liberalismo económico, sostenido por el discurso eminentemente doctrinario con que éste combate ideológicamente al socialismo y al Estado de Bienestar, pero que nada tiene que ver con las prácticas económicas liberales. Tanto en la anterior fase liberal del capitalismo central (1850-1873), como en la actual, el Estado cumple un papel fundamental en la expansión y acumulación capitalistas, interviniendo intensamente en su favor: reprimiendo y disciplinando a la fuerza de trabajo; modificando la legislación; conquistando mercados; con políticas fiscales, monetarias y arancelarias *ad hoc*; transfiriendo recursos al gran capital; socializando sus deudas y privatizando las ganancias. En realidad, las diatribas contra el Estado se dirigen exclusivamente contra sus funciones sociales, las que contemplan intereses distintos al capital, que limiten su uso patrimonial por la clase dominante. Las críticas sinceras al neoliberalismo han dado luz sobre algunas de esas prácticas, pero sin liberarse del todo de la sinonimia entre interés empresarial e *interés general*, aceptando la presunción de que el capital siempre provee empleo, imposible de sostener ante el predominio del rentismo y la especulación.

El “estatismo” no es el signo identitario de la izquierda. Lo que la define es su búsqueda de la emancipación humana, sólo posible con la igualdad social. El Estado, que cristaliza las relaciones de poder entre las clases, es expresión de los procesos sociales en que estas relaciones de poder se transforman y, a la vez, si esto último ocurre, es un instrumento para transformarlas. La de izquierda no es (no debe ser) una concepción a favor del Estado a ultranza, abstracta y neutra, sino inherente a las metas de democratización económico-social –y por lo tanto política– en su más vasta dimensión. Lo que la derecha denomina tramposamente “estatismo de izquierda” es que ésta defienda las conquistas sociales populares institucionalizadas tras una larga historia de lucha, y que persiga la institucionalización de nuevas conquistas. El Estado que rechazan los neoliberales-posliberales es el “de Bienestar”, al que presentan como creatura de la izquierda –también la latinoamericana¹²– y que caracterizan como el producto de decisiones políticas de las burocracias estatales que responden a “intereses creados” sin considerar los requisitos para el funcionamiento sano de la economía (mercado), causantes de las crisis.

Se trata de una caricatura que oculta que el Estado de Bienestar es ante todo un Estado capitalista, contradictorio pero eficaz para garantizar la dominación burguesa, establecido en circunstancias históricas en que el ascenso de las luchas de los trabajadores la ponen en riesgo; que tiene que incluir algunos de los intereses de los dominados (mediaciones) para estabilizar la dominación capitalista; y que al hacerlo beneficia al capital, cuando éste está comandado por las fracciones productivas (consumo y producción en masa, empleo), fracciones burguesas que son poderosos “intereses creados” actuando en y sobre el Estado. La caricatura encubre que el papel de la burocracia es precisamente el de subordinar social y políticamente a los trabajadores para transformar sus *conquistas* en *clientelismo*, como base política de la conducción burguesa del Estado. Y que se trata del Estado en el centro del sistema capitalista, que compensa los costos capitalistas de esa redistribución del excedente con la intensificación de la extracción de plusvalía relativa, pero sobre todo con las transferencias de valor provenientes de la periferia dependiente.

12 Véase, entre otros de su estilo, el *Manual del perfecto idiota latinoamericano*, de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, con presentación de Mario Vargas Llosa, México, Plaza y Janés, 1996.

En América Latina, sólo excepcionalmente ha habido ciertas formas de Estado de Bienestar, que integraron parcialmente a los sectores urbanos vinculados a la limitada industrialización, no así a vastos sectores campesinos y a todos los indígenas (la mayoría de la población en buena parte de los países); y que han sido siempre economías estructuradas y sobredeterminadas por su inserción dependiente al capitalismo mundial, lo que –salvo excepcionales coyunturas– produce una permanente sangría de riqueza con la complicidad de las beneficiadas oligarquías criollas y sus burocracias locales.

Parte no desdeñable de la intelectualidad latinoamericana de izquierda hace suya la caricatura que la responsabiliza de la crisis. Introyecta la acusación de los conservadores de haber “sobrecargado con demandas” (Huntington)¹³ al Estado, y por ende al mercado, por defender las relativas conquistas del trabajo frente al capital obtenidas con sacrificio y hasta sangrientas luchas. Se autoinculpa de la burocratización y del clientelismo que sostuvo a los partidos tradicionales de la derecha. Hace suya la máxima neoliberal de que “para distribuir hay que producir”, haciendo a un lado la cuantificación de la masa de valor producida por el trabajo de los latinoamericanos, de elevada productividad por su intensidad, transferida al centro del sistema y concentrada en pocas manos en la región. Acepta como pecado propio las concepciones desarrollistas de las que ahora se siente obligada a “renegar”, olvidando –y en muchos casos desconociendo– que esa concepción burguesa del desarrollo fue rigurosamente criticada por intelectuales y por varios (no todos) partidos de la izquierda latinoamericana^{14*}. La renuncia al marxismo en las nuevas generaciones es

13 Samuel Huntington, Michael Crozier y Joji Watanki, *La gobernabilidad de la democracia*, 1975, op. cit.

14 Que frente al neoliberalismo el período del desarrollismo pueda ser recordado con nostalgia, por su mayor (pero relativa) distribución del ingreso y por los mayores márgenes de autonomía de los Estados que produjo en algunos países y épocas, a lo que realmente se opone el neoliberalismo, no permite olvidar que fue un modelo de desarrollo capitalista estructuralmente dependiente, que favoreció la concentración capitalista y la transnacionalización de las economías.

* El “neo-desarrollismo” (que prefiero caracterizar como “neodesarrollismo transnacional”), que se irá imponiendo en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, explota las reminiscencias comentadas en la nota anterior para presentarse como una política progresista, pero para subordinar al Estado como garante y financiador de la acumulación por desposesión transnacional.

facilitada por la desaparición física de casi toda la generación que teorizó críticamente sobre el capitalismo latinoamericano dependiente. Las nuevas generaciones no conocen esa obra que ha sido desterrada de la academia. En los partidos de izquierda, más precisamente de centroizquierda, hay intelectuales de peso que en décadas pasadas fueron desarrollistas, algunos de ellos funcionarios internacionales; son los que renegando de sus limitaciones adoptan más entusiastamente las concepciones de tercera vía.

Como se ha dicho, la tercera vía declara una oposición doble: a un falsificado *fundamentalismo de mercado* que “no ha resuelto la pobreza” y a un falsificado *estatismo* que “no reconoce el papel necesario del mercado para generar riqueza”. Les opone una glamorosa fórmula: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, cuya ambigüedad permite llenarla con cualquier contenido. Los terceristas se lo asignan: más Estado al servicio del capital.

Aunque los terceristas se presentan como contrarios a “un fundamentalismo de mercado que promueve un individualismo a ultranza que abandona a todos a sobrevivir como puedan”, en realidad, la tercera vía es una crítica contra el bien-estar¹⁵, contra los derechos sociales universales, vehiculizada por la crítica de derecha contra el Estado de Bienestar. Los que resisten y conservan algunos derechos son calificados como “privilegiados”, son convertidos en los enemigos de quienes los han perdido (se los han quitado). Según dicen, los primeros son los *intereses creados* (sindicatos) que alimentan la opresión de las burocracias estatales que favorecen a las “minorías” y discriminan a la “gente común”. Los segundos son la *sociedad civil* que debe recuperar sus capacidades de “elección y acción”; que debe ser “empoderada” para que se libere de la pérdida de independencia personal por la tutela de las burocracias y el asistencialismo del welfare, para que “salga adelante por sí misma”. Si alguno carece de ciertas “capacidades” para hacerlo, el Estado debe proporcionárselas de manera focalizada: “igualdad de oportunidades”. El Estado debe financiar la infraestructura, la inversión en ciencia y tecnología, y la capacitación de la fuerza de trabajo, para que las empresas progresen... y creen empleo. Con la “creación de capacidades mundiales” llegarán a su fin los empleos para toda la vida (*dead-end jobs*);

15 Para debatir con la tercera vía es necesario distinguir entre el *Welfare* (Estado de Bienestar), y el *well-being* (la satisfacción de las necesidades humanas), que es asimilada al primero y desechados a un mismo tiempo.

retórica aparte, el fin de la estabilidad laboral no es por movilidad hacia trabajos con salarios superiores, sino hacia la precariedad contractual de un mercado de trabajo “flexible”. Y mediante un sistema de vales o “becas-crédito”, el Estado da crédito focalizado al consumo de pobres y clase media en la educación, salud y seguridad social, una vez que éstas han sido privatizadas. Los pobres “eligen” dónde consumir, y se hacen cargo de las funciones que el Estado abandona (particularmente educación y seguridad): en esto consiste el tal “empoderamiento”. El Estado abiertamente subsidia al capital privado, lo que financia, entre otros, reduciendo el gasto público social. No hay diferencia alguna entre estas políticas “progresistas” y la privatización neoliberal de servicios que, junto a las políticas sociales focalizadas del neoliberalismo, van en el paquete de la “descentralización”. Lo que cambia es la retórica¹⁶.

El neoliberalismo “fracasó” –dicen los posliberales– porque el mercado libre no “resolvió” la pobreza ni la estabilidad macroeconómica. Los intelectuales y políticos de izquierda latinoamericanos lo repiten encantados: aceptan como cierto el discurso neoliberal que decía que ésos eran los objetivos de la reestructuración conservadora del capitalismo, cuando sus verdaderos objetivos eran la liquidación de la fuerza socio-política del trabajo para recuperar la tasa de acumulación y sobre todo la de ganancia, mediante sobreexplotación, concentración del ingreso y saqueo transnacional. El neoliberalismo no fracasó, fue trágicamente exitoso. Pero el argumento del “fracaso del neoliberalismo”, muy *progresista*, legitima moralmente a los *nuevos críticos* terceristas. También logran legitimarse “teóricamente” cuando declaran que la competencia perfecta y los equilibrios de mercado proclamados por los neoclásicos no son ciertos porque la acción no es tan racional y hay una información imperfecta. Sobre tal *hallazgo* es que fundamentan el “nuevo” papel que el Estado debe cumplir (neointitucionalismo) para “corregir los defectos del mercado”, para hacer funcionar “correctamente” al que siguen proclamando como la “locomotora de la economía”. Su metáfora europea es: “Queremos una sociedad que

16 Esta apretada e incompleta síntesis puede cotejarse con los manifiestos programáticos de los Nuevos Progresistas de Estados Unidos: *Rebuilding the Road to Opportunity* (1982); *Renewing America's Promise* (1985); *The New Orleans Declaration: A Democratic Agenda for the 1990s* (1990); *The New American Choice Resolution* (1991). Repetida literalmente por la copia europea.

aprecie a los buenos empresarios tanto como a los artistas o a los futbolistas, y que valore la creatividad en todas las esferas de la vida”¹⁷.

Una intelectualidad de izquierda que tomó como cierto el doctrinarismo del liberalismo económico (“antiestatismo”) y que acepta que su identidad se define por el “estatismo”, cuando escucha la frase “más Estado” cree encontrar al *progresismo*. Pero la tercera vía asigna al Estado una función subsidiaria al mercado, que en nada se diferencia del neoliberalismo, como veremos.

La Tercera Vía ha sido popularizada y legitimada como un programa de “nueva izquierda” por los partidos europeos que fueron socialdemócratas décadas atrás; que, con el discurso de oposición al fundamentalismo de mercado, en la segunda mitad de los noventa derrotaron electoralmente a los partidos conservadores que gobernaron por más de una década. Pero la Tercera Vía no nace en Europa sino en Estados Unidos, y se ejecuta mediante el “Consenso de Washington”. Que pocos años después esa tercera vía fuera *vendida* en América Latina como las políticas para “ir más allá del Consenso de Washington” no es una paradoja, es el signo de la tragedia intelectual y política. [...]

17 Tony Blair y Gerhard Schroeder, *La tercera vía. Europa: The Third Way-Die Neue Mitte*, (La Tercera Vía-el Nuevo Centro) (8 de junio de 1999). Versión original publicada en Martín Jacques (Ed.), *¿Tercera Vía o neoliberalismo?*, Barcelona, Icaria, 2000, p.30.

La izquierda latinoamericana y las encrucijadas del presente (2006)*

La mirada

Mi reflexión tiene como punto de partida el celebrar qué distinta es América Latina hoy a la de hace 10 o 15 años: luchas populares intensas y extendidas, y un notable crecimiento electoral de la izquierda y del centroizquierda involucrando a más de 250 millones de latinoamericanos. Un escenario inimaginable pocos años atrás, que se expresa claramente en una menor sumisión gubernamental de la región a Estados Unidos, lo que puede justificarse precisamente en las relaciones con Cuba: estrella solitaria contra el imperialismo por varias décadas y todavía criminalmente bloqueada por Estados Unidos durante casi medio siglo, solidaria inquebrantable con la lucha de los pueblos de América Latina, que hoy estrecha esos lazos recíprocos también a través de varios gobiernos latinoamericanos.

Justamente por estos importantes cambios es que los desafíos de la izquierda son mayores, porque ni el imperialismo ni la derecha de nuestros países están en retirada. La defensa de sus privilegios adquiere hoy un significado distinto al de cualquier otra época anterior del capitalismo, pues hemos ingresado en la prolongada e incierta fase histórica de su crisis como *sistema histórico*. A pesar de la desintegración del socialismo llamado “real”, o quizás precisamente a partir de ella, la vertiginosa aceleración de la concentración y centralización del capital, y su transmutación

* Ponencia presentada en el v *Seminario Internacional Marx vive: Alternativas y gobiernos alternativos en América Latina*, Universidad Nacional de Colombia, 2 de noviembre 2006. Una versión de esta ponencia fue también presentada en el *Seminario regional América Latina hoy: Procesos sociopolíticos y espacios de integración regional*, de la Asociación para la Unidad de Nuestra América (AUNA), La Habana, Cuba, 17 de noviembre de 2006. Publicada en Jairo Estrada (Comp.), *Izquierda y socialismo en América Latina*, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

especulativa y rentista y por lo tanto violentamente depredadora, agudiza las contradicciones de su propia reproducción. Cada éxito capitalista intensifica las contradicciones, que ya no puede absorber económicamente y le resulta cada vez más difícil políticamente. El gran capital, que comanda al sistema, persigue actualmente su reproducción a costa de la humanidad y del planeta mismo, lo que exhibe su inviabilidad histórica.

El derrotero de esa crisis y sus resultados son inciertos y dependerán de la fuerza relativa entre los que defienden su condición de privilegiados y los que luchan por salvar a la humanidad y necesariamente su hogar vital, así como de las nuevas formas de organización social que se lleguen a imponer con tales propósitos, sea de uno u otro lado. Hoy se está pensando en el *socialismo del o en el siglo XXI* como camino emancipatorio, pero también hay ideólogos capitalistas preocupados por encontrar formas económicas y sociales más estables para garantizar los privilegios. Si bien la disputa histórica sobre la crisis del capitalismo no es de corto plazo, los fenómenos que originan la crisis están acelerando los tiempos sobre todo en América Latina.

Los debates fundacionales de la izquierda –del pensamiento socialista– advertían desde su vertiente marxista sobre las tendencias depredatorias y caóticas del capitalismo en la larga duración. Pero esos debates se dieron en un momento histórico distinto, cuando el capitalismo estaba en fase expansiva y tenía gran capacidad para crear mecanismos de absorción de las contradicciones económicas y políticas, y además en el centro del sistema capitalista. Lo que también explica en su momento los caminos divergentes adoptados en el seno de aquella izquierda.

Los desafíos actuales de la izquierda latinoamericana son muy distintos: por tratarse de la periferia dependiente desangrada por la expropiación capitalista externa e interna; porque es una región estratégica para la reproducción actual y de mediano plazo para el gran capital como proveedora de recursos naturales (agua y biodiversidad), energéticos y materias primas, además de un gigantesco flujo de valor¹ al centro del

1 El concepto de excedente tal como se le definía como lo restante una vez descontado el consumo individual (de propietarios y trabajadores) y productivo (capital) no se ajusta a la realidad actual en la que la expropiación de valor y de ingresos a los trabajadores y consumidores pobres (por parte del capital directamente y con una central función expropiatoria del Estado que se lo transfiere al capital) no permite cubrir las necesidades

sistema; y porque, por todo esto, la desigualdad y también la pobreza no sólo son mayores sino una condición *sine qua non* para esa reproducción capitalista. Los tiempos capitalistas se aceleran en América Latina porque es además una región en la que las mayorías populares se hallan en el límite de la sobrevivencia y están recuperando también rápidamente su capacidad de resistencia y lucha.

Esta recomposición social y política de numerosos sectores populares es un logro de la izquierda latinoamericana en sus más diversas expresiones. Nunca debe olvidarse que se viene de una sangrienta contrarrevolución con la que se impuso la reestructuración neoliberal del capitalismo hace tres décadas, que buscó liquidar orgánica y físicamente toda resistencia social y política a la misma. Pero al mismo tiempo, este nuevo escenario le impone a la izquierda mayores exigencias: por las responsabilidades y tareas actuales, sin duda más complejas, y porque en él tiene por antagonista a una derecha que intensifica la defensa de sus privilegios no sólo en términos de los intereses inmediatos de los propietarios capitalistas sino también con urgencias sistémicas.

Esto nos exige una forma distinta de pensar los problemas de la izquierda. Los análisis autorreferidos no permiten claridad estratégica. Comparar la situación actual con la anterior o reivindicar el esfuerzo y sacrificio de tantos para llegar a la situación actual constituye un punto de partida fundamental de reafirmación moral y de reafirmación de la propia voluntad y capacidad para producir cambios. Pero no es suficiente para honrar el compromiso que de ello se deriva, y en muchos casos es todo lo contrario: conduce a una complacencia que obnubila el reconocimiento de los errores cometidos o los problemas a enfrentar y obnubila la asunción de las responsabilidades actuales para avanzar en los objetivos emancipatorios de la izquierda, responsabilidades que no son a modo de sus preferencias, sino que están condicionadas por una realidad definida decisivamente por una clase dominante que no ha perdido capacidad de iniciativa política e ideológica y que está en plena ofensiva conservadora.

El rigor crítico es fundamental para dilucidar la compleja y contradictoria relación entre lo *existente*, lo *posible* y lo *necesario*, aportando

básicas de subsistencia; y porque los flujos de riqueza de la periferia al centro se dan por saqueo de riqueza social (privatizaciones) y de los territorios mismos. Por eso es apropiado hablar de neocolonialismo, de permanente acumulación originaria.

los elementos racionales y el sustento de la audacia para construir lo posible, sin lo cual no hay cambio social. Construir lo posible exige realismo pero excluye el posibilismo que se agota en lo existente –que es menester cambiar– y excluye también el pragmatismo que supone que cualquier medio conduce a los fines, sin advertir que algunos medios conducen a otros fines. Pero, sobre todo, construir lo posible exige generar la fuerza social y política del sujeto del cambio.

Una compleja dualidad

Es necesario reconocer que este nuevo escenario que se caracteriza genéricamente como de *avance de la izquierda* se mira en la región oscilando entre el optimismo y el pesimismo. Optimismo por lo que ocurre *abajo*, por el movimiento de los pueblos, y pesimismo frente al papel de las dirigencias de la izquierda –de los partidos y en los gobiernos–, con honrosas excepciones en todos los países. Eso no se ve así en Cuba y Venezuela donde claramente el *arriba* y el *abajo* construyen juntos cambios fundamentales, y se mira con expectativa la aún incipiente experiencia de Bolivia².

No es fácil explicar la complejidad de la realidad latinoamericana, en la que por momentos algunos creen ver situaciones pre-revolucionarias aquí y allá y luego períodos de decepción, de victorias estridentes pero temporales y contramarchas. Hay más capacidad de resistencia y acciones

2 Evo Morales exhibe con orgullo su pertenencia al movimiento cocalero, del que sigue siendo su líder orgánico tras asumir la presidencia de Bolivia. En su primer año de gobierno ha dado pasos audaces para llevar a cabo desde un comienzo compromisos programáticos fundamentales con los que triunfó: la nacionalización (parcial) de hidrocarburos, la Constituyente y el inicio de la reforma agraria. Culmina su primer año con un fuerte apoyo popular boliviano y admiración popular latinoamericana. Pero hay que decir que esas acciones se inscriben en concepciones del desarrollo que podrían dificultar la consecución de los objetivos programáticos y los intereses sociales que éstos representan. Por otra parte, como nos explica el investigador boliviano Luis Tapia (conferencia en la UAM Xochimilco del 14 de noviembre de 2006), el programa de cambio promovido desde el gobierno se enfrenta a la contradicción entre la mayoritaria cultura y práctica social comunitaria y un Estado regido por los principios liberales que excluyen la configuración de lo público desde la comunidad. Es decir, plantea problemas de fondo a la relación entre Estado y movimientos sociales comunitarios, que son el soporte del triunfo del MAS. Esta contradicción esencial y singular a Bolivia se expresa ya en la relación gobierno-movimientos en varias áreas de acción, así como en la integración de la Constituyente.

contestatarias³ que capacidad de transformación. Y, sin embargo, la tendencia de avance de izquierda se mantiene a nivel regional. Es que, en buena medida, en América Latina *la izquierda avanza a pesar de la izquierda*. Porque la lucha por la sobrevivencia conduce a un anticapitalismo práctico –aunque sus protagonistas no siempre lo interpreten así– que alimenta el movimiento hacia la izquierda. Mientras que en las organizaciones de izquierda, en sus dirigentes y muchos de sus intelectuales, los horizontes estratégicos no pasan necesariamente por allí. Es así que según desde dónde se mire aparecen valoraciones distintas⁴. Esta dualidad debe ser constatada y la dialéctica de ambos fenómenos debe ser incorporada en el análisis so riesgo de conclusiones erradas.

Rutas y ritmos

El problema de los horizontes estratégicos y tácticos en la conducción de la izquierda remite a muchos asuntos, pero hay uno, que ya el tiempo nos permite observar, que es que buena parte de la izquierda ha transitado por las rutas, y con los ritmos, que le ha trazado la derecha, incluidos el lenguaje y los conceptos que la derecha impuso. La crítica de izquierda a la hegemonía dominante, a cómo ha operado sobre ella misma también (por eso es hegemonía), ha sido tardía, desfasada, mostrando enormes déficit analíticos tanto teóricos como políticos. Y esto aún sigue ocurriendo, desperdiciándose enormes energías sociales dispuestas a luchar por cambios profundos.

Veamos estas últimas décadas. Desde mediados de los años ochenta, mediante las transiciones la derecha impuso la idea de la autonomía de la política⁵ y que podían disociarse los avances democráticos de los fenómenos

3 El término contestatario, que gusta tanto, indica que se trata de una acción de contestación, lo que confirma que la iniciativa está siempre del otro lado.

4 En México, por ejemplo, no es fácil entender el proceso social y político de los últimos años en el que se observan avances notables de la lucha popular a pesar del rechazo que producen las direcciones y las prácticas de los partidos de izquierda (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo) y de sindicatos y otras organizaciones sociales, que conducen a estancamientos y retrocesos. Algo similar puede observarse en Argentina o Ecuador, en Chile o Nicaragua, por mencionar tan sólo unos ejemplos.

5 Economía y política nunca son autónomas. La condición para que la *democracia* representativa fuera compatible con el más antidemocrático modelo económico fue y es que lo económico no es tema de discusión democrática o de decisión de

económicos lo que, salvo excepciones, facilitó los shocks neoliberales al tiempo que la izquierda comenzaba a conquistar espacios institucionales. Y por esto el desprestigio de la política y los políticos alcanzó a la izquierda en muchos países, siendo éste un primer momento de crisis de representación de la izquierda⁶. Desde finales de los años ochenta la derecha impuso la idea de gobernabilidad como sinónimo de democracia⁷. A mediados de los noventa todavía la izquierda hablaba de gobernabilidad pensándola de esa manera. Pero en ese mismo momento, 1996, 97, 98, la derecha ya estaba cambiando los ejes de su ofensiva ideológica precisamente porque percibía crisis de gobernabilidad y que se acelerarían las luchas contra el neoliberalismo, y comenzó a gestar el *Consenso Posliberal*⁸ para incidir sobre la formulación de alternativas. Desde comienzos de este siglo incidió en el movimiento altermundista y logró imponerle como su gurú al ideólogo posliberal Stiglitz y como referente teórico a Karl Polanyi⁹. Durante todos

mayorías sino sólo del mercado, es decir, del capital. Para justificar la aberración antidemocrática de que la gente no pueda decidir sobre sus condiciones de existencia, se atribuye a la “globalización”, como fuerza metafísica ajena a las relaciones de poder, todas las acciones económicas. La idea de la autonomía de la política sigue presente en algunas izquierdas que gobiernan, aunque en la práctica esto no opera desde luego. Por tomar un ejemplo: si en el plano económico se persigue la equidistancia entre el interés capitalista y los intereses populares, el gobierno no puede promover la activa participación popular para conquistarlos, por cuanto eso implica afectar privilegios capitalistas; tiene que apelar a la negociación cupular para manejar el conflicto. Pero esto significa, también, que tiene que encontrar la forma de atenuar o controlar la participación independiente de las organizaciones sociales y condicionarla o hacerla acompasar al accionar del gobierno, lo cual entra en contradicción con el programa de esas mismas izquierdas. La relación indisoluble entre economía y política también puede demostrarse de manera inversa, cuando para enfrentar privilegios capitalistas, oligárquicos, los gobiernos apelan a la participación popular.

- 6 Discuto esto con más detalle en “El desprestigio de la política: lo que no se discute” (en este volumen).
- 7 Gobernabilidad (governability) es la estabilidad que se obtiene con la obediencia de los gobernados, que no necesariamente es resultado de la legitimidad del gobierno, sino que también puede obtenerse por represión, o mediante la neutralización del conflicto dispersando la capacidad de expresión de demandas de los gobernados. En sociedades con tantas necesidades insatisfechas como las latinoamericanas, impedir que éstas sean demandadas es reforzar la dominación conservadora, nunca reforzar la democracia. Analizo este tema, entre otros trabajos, en: “Gobernabilidad como dominación conservadora” (en este volumen).
- 8 Se ha suprimido el contenido de esta nota que originalmente refería a los rasgos del posliberalismo, analizados con amplitud en este volumen.
- 9 En su clásico libro *La gran transformación* (1944), Karl Polanyi ofrece una contundente crítica moral al liberalismo económico. Hace una profética advertencia sobre el riesgo de destrucción de la naturaleza por someter a la tierra a las reglas del mercado y

los noventa, la derecha se montó sobre las experiencias de gobiernos locales de izquierda, induciendo a ver el presupuesto participativo, por ejemplo, a esta importante experiencia en sus comienzos, como un mero asunto de *good governance*, despolitizado. Así lo promovió primero el BID y después fue oficializado en el 2000 por el Banco Mundial como el modelo a seguir, y con apoyos financieros. En muchas discusiones de izquierda el problema del gobierno de izquierda quedó reducido a ello, y por eso no se entendió por qué la *good governance* (una gestión eficaz aunque de objetivos limitados, con cierta transparencia y legitimada por cierta participación) no podría ser condición suficiente para mantener los triunfos del PT en Rio Grande do Sul. Y la lógica de la *good governance mundial* está desplazando el problema del imperialismo, bajo el supuesto de que ella se alcanzaría dizque democratizando las instituciones financieras internacionales, sin cambiar las relaciones de poder.

La derecha no pudo impedir por todos los medios el triunfo electoral de varias izquierdas o centroizquierdas, pero les impuso el posliberalismo como programa gubernamental. Desdramatizando sus derrotas electorales, la derecha difundió la idea de que los nuevos signos electorales eran un movimiento natural del péndulo ante los excesos del neoliberalismo. Y en la izquierda se empezó a hablar de la oscilación del péndulo, que es una cómoda justificación de la esperanza, sin saber que la idea del péndulo tiene implicaciones muy serias. Muchos izquierdistas asumieron que en ese movimiento pendular los tiempos serían mínimo de quince o veinte años, ése sería el margen temporal para hacer cambios graduales, y que por graduales serían aceptados con menor resistencia. En ese margen del tiempo pendular se inscribirían los tiempos de la acción, los tiempos prácticos, que serían los tiempos electorales de entre cuatro y seis años según los países. Así que apenas iniciado un gobierno de izquierda o centroizquierda –nacional,

también sobre los efectos destructivos de las mismas sobre el “trabajo”. Pero Polanyi no cuestiona la propiedad privada capitalista sobre una y otro, ni el origen de dicha propiedad en la expropiación de los productores directos. Tan sólo recomienda regulaciones estatales que humanicen su uso. En oposición al liberalismo económico defiende el proteccionismo alemán de fines del siglo XIX pero desligándolo de sus objetivos de expansión imperialista. Junto a su enjundia discursiva que tiene indudable actualidad, Polanyi es un defensor del gran capital en un capitalismo regulado. Se le ha promovido para incidir sobre los movimientos altermundistas (la edición mexicana de 2003, de su libro, tiene un prólogo de Stiglitz que así lo manifiesta) porque es funcional a la idea de humanizar la globalización con algunas regulaciones pero sin tocar al gran capital.

provincial o municipal– ya habría que pensar en el candidato posible siguiente y en las alianzas para hacerlo triunfar, y la gestión de gobierno tendría que ser condicionada prudentemente en proyección electoral. Esos eran los ritmos y el escenario pensados por varias fuerzas de izquierda.

Pero la verdadera fundamentación del péndulo es otra. Es la forma en que la burguesía explica la historia del capitalismo: como sucesivos movimientos de corrección de anomalías o excesos, que lo devuelven a sus equilibrios y a su normalidad como “progreso”. En esta lógica, las oscilaciones pendulares siempre son cambio para regresar, es decir, siempre se está dentro del capitalismo. Así, los excesos del neoliberalismo deberían ser corregidos, pero nada puede hacerse fuera o contra el capitalismo. La izquierda sólo podría ser posliberal. Lo que la teoría del péndulo no dice, por supuesto, es que en la historia del capitalismo cada movimiento de ajuste y corrección generado por el propio sistema (siempre presionado por las contradicciones sociales) se hizo para lograr mayores ganancias –ése es el progreso– y que con cada cambio de mecanismos de reproducción hubo un cambio cualitativo en una mayor concentración y centralización del capital, no un punto de retorno. El neoliberalismo fue exitoso en aumentar ganancias pero los grados de concentración y centralización a que condujo hacen que las contradicciones sean de tal magnitud que el capitalismo no puede absorberlas. Ya no puede ofrecer nuevos equilibrios.

Empero, la explicación pendular tuvo la eficacia de hacer creer que las correcciones graduales al neoliberalismo llevadas a cabo por una izquierda “moderna”, “responsable”, “prudente”, “realista”, conversa a la “globalización”, transitarían pacíficamente entre tiempos electorales.

Nuevo cambio de escenario

Y de pronto nos encontramos con que la derecha altera el escenario, que nuevamente está cambiando las rutas que construyó para que transitara la izquierda, y que una buena parte de ésta no lo percibe.

Por un lado, la derecha está cambiando la estrategia política dirigida a neutralizar a la izquierda en el terreno de la política sistémica. Las reglas del juego de la *democracia gobernable* que impuso durante quince años son desechadas por la propia derecha con *guerras sucias* electorales, fraudes,

campañas electorales con persecución de luchadores sociales y políticos. En todos los países los grandes medios de comunicación y las corporaciones empresariales actúan como fuerzas de choque antidemocráticas desplazando el papel de los partidos de la burguesía. En las elecciones intervienen Estados Unidos y los operadores políticos de las transnacionales europeas, sobre todo las españolas (como Aznar y Felipe González), para asegurar la imposición de los candidatos de la derecha. Este cambio de ruta, desechando la institucionalidad de la *democracia gobernable*, lo hemos visto en los procesos electorales recientes en El Salvador, Costa Rica, Perú, México, Ecuador, y también en el referéndum en Panamá del 22 de octubre de 2006.

Por otro lado, después de inducir la moderación posliberal de los gobiernos de izquierda para que no tocaran los cimientos de la acumulación de capital y tan sólo administraran la crisis con reducción de la pobreza extrema, la derecha tampoco acepta que se “administre” la crisis. Luiz Inácio Lula da Silva era el ejemplo elogiado a seguir y lo golpearon sin miramientos para impedir su reelección en octubre de 2006¹⁰. También Tabaré Vázquez fue elogiado por su moderación posliberal y le organizaron un paro patronal de transportistas que evoca el Chile de 1972¹¹.

Es que el capital va por todo y rápido: por las privatizaciones que todavía no se han hecho o que se hicieron parcialmente, sobre todo en energéticos, agua, biodiversidad y minería. Y mucho menos acepta que se inicien re-nacionalizaciones aunque parciales, como en Bolivia, donde la derecha le declara la guerra a Evo Morales. Va por firmar todos los tratados de libre comercio con Estados Unidos aún pendientes (los firmados más

10 Lula no pudo reelegirse en el primer turno. Esta primera fase fue una campaña electoral sin entusiasmo ni participación, con la militancia del Partido de los Trabajadores desmovilizada. Pero ante el riesgo de un triunfo del candidato de la derecha Geraldo Alckmin en la segunda vuelta -quien además de garantizar los privilegios al gran capital prometió la adhesión total de Brasil a los intereses de Estados Unidos y privatizar lo que todavía se mantiene público-, el temor a esas graves regresiones reactivó la acción militante y el uso de un discurso mucho más claramente de izquierda, lo que permitió el triunfo de Lula el 29 de octubre de 2006 con un 62 por ciento de los votos.

11 El chantaje empresarial de octubre de 2006 fue en respuesta a un ínfimo aumento del combustible para destinarlo al subsidio del boleto de transporte público de uso popular. El presidente Tabaré Vázquez, con el apoyo de la central de trabajadores PIT-CNT (paro general, concentración callejera) y del Frente Amplio, respondió con firmeza desbaratando el intento desestabilizador de los empresarios. Fue de las pocas coyunturas en que la movilización de abajo se articuló con la acción del liderazgo de izquierda tras un año de desencuentros. Lo que confirma también las hipótesis que propongo en este trabajo.

recientemente con Perú y Costa Rica, y presiona por la firma con Uruguay). No acepta modestos aumentos al salario mínimo y ni siquiera las políticas de asistencia a la extrema pobreza. Nada de legitimaciones democráticas con sanciones a violadores de derechos humanos y de nuevo es reactivada la ultraderecha militar, como en Argentina y Paraguay¹². La derecha latinoamericana se somete gustosa al intervencionismo militar norteamericano desde los Comandos Norte y Sur bajo la excusa cínica del terrorismo o de las acciones humanitarias. Refuerza la pinza estratégica con la fusión del Plan Puebla Panamá y el Plan Colombia extendido regionalmente. Con bases militares incrustadas en Paraguay y ampliando la Operación Nuevos Horizontes ahora también a Perú. Y ya se gestan nuevas alianzas ultraconservadoras regionales, como la que establece el nuevo procónsul norteamericano Felipe Calderón con la derecha chilena, y mediante la Organización Demócrata Cristiana de América que ahora es presidida por el neo-fascista Manuel Espino, presidente del gubernamental Partido Acción Nacional de México¹³. Un dato relevante al respecto es el creciente protagonismo del integrismo católico (Opus Dei) en los partidos de derecha y centroderecha en América Latina.

Es decir, que mientras buena parte de la izquierda hace suyo el tercerismo posliberal y las equidistancias, la derecha está desechando al *centro* como su propia herramienta político-ideológica para neutralizar a la izquierda, intensifica y polariza la confrontación, y acelera sus ritmos. Y de nuevo la izquierda es sorprendida, está desfasada, responde puntualmente movilizándose a sus bases, sin alcanzar a ver que no se trata de episodios aislados en cada contexto nacional sino de una nueva fase en la ofensiva continental de la derecha.*

12 En Argentina, en septiembre de 2006 es desaparecido Jorge Julio López, víctima de la dictadura, por declarar como testigo en el juicio contra el ex represor Etchecolatz y además la derecha organiza manifestaciones en apoyo a los represores de la dictadura. En Paraguay, en octubre de 2006, el luchador por derechos humanos y víctima de la dictadura Martín Almada es demandado judicialmente por sus propios represores. En Uruguay también la derecha militar cierra filas contra los juicios a represores de la dictadura.

13 Manuel Espino es miembro de la organización fascista secreta El Yunque, que copó numerosos altos puestos de gobierno desde la presidencia de Vicente Fox. Espino dirigirá la Organización Demócrata Cristiana de América en el período 2006-2009, cuyo vicepresidente es Marcelino Miyares del Partido Demócrata Cristiano de Cuba con sede en Miami.

* Meses después se instalan siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, varias en Panamá, y se da el golpe de Estado en Honduras.

Ahora bien: esta aceleración de los tiempos políticos por la derecha no es proporcional a los riesgos reales o supuestos que puedan representarle los gobiernos de izquierda o centroizquierda a los intereses capitalistas. Va más allá, es proporcionalmente mayor a la fuerza de la izquierda –gobernante o no– en varios países.

Es plausible pensar que en el cambio de estrategia son factores de peso la desaceleración económica de Estados Unidos con su concomitante reforzamiento militar, ahora fuertemente afectado en Irak, así como los problemas en el funcionamiento general del sistema capitalista con las amenazantes burbujas prontas a estallar, como advierten alarmados los europeos y algunos analistas de Estados Unidos y Asia¹⁴. El papel fundamental que cumple ya –y el que tendría que cumplir– América Latina ante esos nuevos problemas en la reproducción capitalista sistémica creará en la región nuevas contradicciones que el sistema no podría absorber bajo las estrategias políticas anteriores¹⁵.*

14 Véanse, por ejemplo, los informes del Laboratoire Européen d'Anticipation Politique Europe 2020 (LEAP/E2020); así como los análisis sobre la explosividad de la deuda generada por la especulación financiera e inmobiliaria en Estados Unidos junto al descenso de la producción manufacturera, en el contexto de sus déficit fiscal y comercial que encadenan la economía estadounidense a la de China (en el comercio y a través de los Bonos del Tesoro que aquélla posee así como Japón y Corea del Sur). Y los signos de una crisis de sobreproducción en China que podría arrastrar a Estados Unidos. Al respecto véanse: Fred Magdoff, "The Explosion of Debt and Speculation", *Monthly Review*, November 2006; y el trabajo de Ho-Fung Hung "Rise of China and the Global Overaccumulation crisis", citado por Walden Bello en "Economías 'encadenadas'", *La Jornada*, México, 9 de diciembre de 2006, p. 23.

15 No debería sorprender que algunos lúcidos ideólogos capitalistas, como el empresario mexicano Carlos Slim, estén promoviendo una vía de salida a la explosión especulativa con inversiones productivas del capital transnacional en infraestructura petrolera, minería, carreteras, transporte e infraestructura hídrica (represas, canales, explotación del agua) en América Latina. Un neo-desarrollismo transnacional que Slim evidentemente busca comandar en la región, para el que creó su Instituto para el Desarrollo de América Latina (IDEAL). Estos proyectos, que pueden viabilizarse controlando la orientación del Plan Puebla Panamá y la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), exigen la subordinación de los gobiernos latinoamericanos a esa inversión privada transnacional que, aunque genere empleos temporales, está dirigida a avanzar en la apropiación de territorios y recursos naturales con apoyo de los Estados latinoamericanos, una estrategia típicamente "posliberal". Y que multiplicará las resistencias populares en América Latina.

* Ha podido comprobarse que, en el segundo lustro de la primera década de este siglo, la agresividad de la derecha contra los gobiernos de izquierda y centroizquierda disminuyó en proporción a la adopción por éstos del neodesarrollismo transnacional como concepción de desarrollo.

Encrucijadas para la izquierda

El nuevo escenario coloca a la izquierda en una encrucijada. La vía electoral ha sido un medio importante para recomponer fuerzas y para conquistar espacios institucionales para promover algunos cambios. Y hay que decir que aunque los gobiernos de izquierda no hayan colmado las expectativas con que se los votó, los pueblos no están peor que antes. Por mínimos que hayan sido, los cambios son significativos para pueblos en la miseria, históricamente humillados y reprimidos, y que saben que retrocederán con gobiernos de la derecha. Esto no significa que estén dispuestos a aceptar siempre el mal menor o acepten indefinidamente que la izquierda no cumpla con sus objetivos y responsabilidades transformadores, porque en esto les va la vida. Pero todavía para los pueblos la vía electoral no está cancelada como opción¹⁶. Es la derecha la que pone en cuestión su legitimidad y legalidad. Es la derecha la que está desenmascarando las elecciones como momentos cada vez más intensos de la lucha de clases.

El punto es cómo la izquierda puede avanzar electoralmente con partidos convertidos en maquinarias electorales tras haberse sometido a las reglas del juego de la *democracia gobernable*; partidos que han desorganizado y desmovilizado a sus bases sociales y políticas, cuando ahora para transitar la ruta electoral se necesitan pueblos informados, organizados e intensamente movilizados: para llegar a votar, para defender los votos si eventualmente se gana, para promover cambios y también para defenderlos. Cómo avanzar en esa organización y movilización con partidos de izquierda que adoptaron la concepción de la política como *marketing*, para la que sólo es política lo que está en la televisión; lo que ahora es además un contrasentido por el bloqueo de los grandes medios, que no se rompe siquiera pagando los millones que cobran.

En este nuevo escenario de una ofensiva capitalista que no concede, la izquierda tiene que asumir que ni siquiera la lógica gradualista funciona si no se afectan los pilares de la reproducción del gran capital, lo que exige

16 Para promover cambios, desde luego. Y también para frenar a la derecha aun cuando los candidatos de izquierda y centroe izquierda, y sus programas, no colmen las expectativas en aquel sentido, tal como se observó en las elecciones presidenciales en Brasil, México, Nicaragua y en Ecuador.

además un intenso antiimperialismo. Tiene que asumir que los tiempos se han acortado. Y que si aspira a gobernar tiene que apelar a la fuerza social y política popular para enfrentar al capital.

Pero muchos de los partidos no están en esta lógica, no convocan a las masas populares. E incluso ejercen control sobre ellas, pretendiendo que reduzcan su independencia en función de las acciones gubernamentales u objetivos electorales. Estamos viendo nuevamente crisis de representación de los partidos respecto a sus bases sociales naturales. Porque no representan sus intereses adecuadamente, porque no interpretan el alcance de sus demandas. Porque no interpretan que en los pueblos hay mayor voluntad de lucha de la que suponen muchos dirigentes de la izquierda, que atribuyen conservadurismo en la sociedad por lo que son sus propias concepciones o limitaciones.

Y eso explica que las carencias sean llenadas en distintos casos por liderazgos individuales; que en rigor no son populistas, calificarlos así es un reduccionismo formal. Pero estos liderazgos deben sostenerse en una sólida organización popular, independiente y crítica, si es que se quieren superar las prácticas contestatarias y los estallidos ocasionales.

También está en una encrucijada la llamada izquierda social¹⁷. Su oposición a la izquierda “moderna” se funda en críticas válidas, pero por momentos parece que ve en ella a un enemigo mayor que la derecha. Y, además, no logra entender la compleja dialéctica política por la que amplios sectores populares siguen votando por los partidos que se critican, y actúa frente a esos sectores populares con sectarismo y aislándose.

La llamada izquierda social reivindica la organización horizontal como garantía contra las manipulaciones partidarias o caudillistas. Hay que reconocer que las formas moleculares de organización son una de las bases fundamentales de la potenciación de la lucha de masas, que por cierto no son multitudes anónimas. Pero la horizontalidad molecular no siempre, o muy pocas veces, muestra eficacia para condensar las fuerzas. Y la condensación de fuerzas es imprescindible para enfrentar la fuerza concentrada del bloque

17 La distinción entre “izquierda social” e “izquierda política” oculta que la primera es un actor político, a veces con mayor incidencia política que algunos partidos, aunque no participe en la política institucional. En esta clasificación puede observarse la influencia que aún tiene el liberalismo en el análisis de la política y lo político en el llamado pensamiento crítico.

de poder, que usa cada vez más al Estado para golpear a los dominados. Por lo demás, hay que disputar ese Estado para los cambios que promueve. También esta izquierda llamada social tiene desajustes, no logra ver el nuevo escenario.

Estos son desafíos para la izquierda latinoamericana. Analizando cada uno de ellos daría la impresión de que condujera a conclusiones pesimistas, y no lo creo así. Las mayores contradicciones sociales y políticas, que la nueva ofensiva capitalista anuncia, intensificarán las resistencias y luchas a pesar de los problemas actuales de la izquierda, de muchos de sus partidos y varios gobiernos. En ese sentido es mi afirmación anterior de que en América Latina la izquierda avanza a pesar de la izquierda: porque es un asunto de sobrevivencia. Es posible que el avance imprescindible de las luchas empuje a las organizaciones de izquierda a asumir los retos.

Pero ocurre que los márgenes para las deficiencias, para los análisis autorreferidos o testimoniales, se están achicando. La crisis del capitalismo no garantiza de antemano un resultado favorable a los pueblos ni al planeta mismo, el devenir de la crisis está en disputa y ésta será dramática. Y en este horizonte de posibilidades y peligros los intelectuales tenemos una gran responsabilidad, también tenemos que repensar nuestro trabajo.

La izquierda que gobierna en América Latina: elementos para un balance político (2007)*

Una vez más diré que este ensayo no es de conclusiones sino que presenta apenas algunas reflexiones propias enriquecidas con la discusión que sostuvimos los autores y autoras de este libro.

Los tiempos políticos en América Latina son vertiginosos. Con una velocidad que la crónica no alcanza a registrar, y que desafía permanentemente a los pausados tiempos del estudio social. Este es el mismo reto de todo intento de análisis de la izquierda que gobierna en América Latina, que es hoy un objeto de estudio esquivo, difícil de precisar, dado el número y la heterogeneidad de experiencias, sus diferentes definiciones políticas e ideológicas, sus objetivos y realizaciones.

Es un grado de complejidad muy distinto al que nos enfrentamos hace nueve años cuando analizamos los primeros gobiernos municipales¹. Empezando por la dificultad para denominar las experiencias actuales. Hay quienes prefieren ya no hablar de izquierda; otros por el contrario aceptan sin más las autodenominaciones de sus protagonistas; y algunos establecen estrechos criterios de inclusión-exclusión en los que pocos latinoamericanos de izquierda se sienten reflejados. Los análisis varían entre las descripciones neutras, la complacencia ante lo existente, o el pesimismo por lo que debería ser. La suma de estas posturas da como resultado un marasmo intelectual con serios efectos políticos. Eludir la discusión de qué es y debe ser la izquierda es un probable camino al fracaso del proyecto por el que tanto se

* Este trabajo cierra el libro colectivo: Beatriz Stolowicz (Coord.), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Bogotá, Ediciones Aurora, 2007.

1 Véase, de mi autoría: “La izquierda, el gobierno y la política. Algunas reflexiones” en el libro que coordiné: *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, Plaza y Valdés, 1999 (en este volumen).

ha luchado; discutirlo sólo emitiendo juicios sin explicarse las razones de los problemas y sin buscar formas de enfrentarlos es, también, la renuncia a él.

La discusión que propongo en este trabajo parte de dos cuestiones fundamentales: 1) la responsabilidad que tienen quienes asumen la representación política de los anhelos de cambio, en un momento histórico en el que de éste depende la sobrevivencia de vidas, países y del planeta mismo; 2) los procesos de cambio no dependen solamente de lo que sucede “arriba”; el estancamiento o desvío de los objetivos pueden modificarse por lo que también se haga “abajo” para impulsarlos o reencauzarlos.

Para encarar ambas cuestiones es indispensable indagar sobre los orígenes de las transformaciones ideológicas y políticas en la izquierda latinoamericana así como sus consecuencias; sobre las variadas formas que adopta la *contrarrevolución permanente* de las clases dominantes para impedir que la izquierda y sus gobiernos lleven adelante las tareas liberadoras y emancipadoras: con acciones frontales en su contra, y con otras más sutiles y muy dañinas para incidir desde ella misma; así como indagar sobre las posibilidades u obstáculos para impulsar o reencauzar el proyecto de cambio que da razón de existencia a la izquierda. Es una ardua tarea para realizar en cada país, y mucho más para la región en su conjunto. Mas a ella quiere contribuir muy modestamente este trabajo, proponiendo algunos temas y problemas para la reflexión.

1. ¿Izquierda realmente existente?

Asumo que lo que define a la izquierda de manera esencial –más allá de su heterogeneidad– es su opción ética por la emancipación humana, por la reapropiación por parte de cada ser humano de todas sus capacidades, cualidades y potencialidades, por su liberación de toda forma de subordinación o dependencia; y que ello implica necesariamente la igualdad social, sin la cual no son posibles la plena libertad ni el derecho pleno a la diferencia, individual y colectiva. La de izquierda es una opción ética con fundamento racional.

Es significativo que la delimitación de lo que se entiende por izquierda tenga actualmente las mismas dificultades que tuvo hace más de un siglo la definición de *socialismo*, algunas de ellas nada inocentes. Los paralelismos

en circunstancias históricas tan diferentes obligan aún más a cuestionar su repetición.

En el siglo XIX, cuando el capitalismo industrial y librecambista se ofrecía como la realización del progreso, prometió ser la solución a la **cuestión social de la pobreza**, promesa incumplida. Fueron los liberales económicos quienes calificaron como “socialistas” a todos los que formularan críticas al capitalismo comercial e industrial, incluidas las antiguas clases rurales afectadas por los cambios; a todos los que pensaran en términos de grupos humanos y no partiendo del individuo aislado; como socialista fue calificada la ética contraria a la pobreza mas no contraria a la riqueza, que proponía tan sólo la sensibilización moral de los industriales. Frente a la crítica radical de Marx y Engels en cuanto a que la pobreza y la desigualdad eran producidas y reproducidas por el propio capitalismo, algunos socialistas por propia adscripción creyeron en la posibilidad de erosionarlo desde dentro por medio de reformas sociales y políticas sin alterar sus cimientos. Desde finales de la década de 1860, cuando el liberalismo económico era cuestionado en el propio campo del pensamiento burgués y se reclamaba el Estado para la expansión imperialista, los ideólogos del liberalismo económico catalogaron a los opositores al librecambismo como socialistas por “estatistas”². Y aceptando esa sinonimia entre “socialismo” y “nacionalización” se autodenominaron socialistas los grupos de clase media intelectual y pequeña burguesía sensibilizados por la **cuestión social** pero que adherían al capitalismo, a su expansión imperialista y a la guerra, y al que esperaban “mejorar” en el centro del sistema con algunas reformas sociales³. Es el tronco de los “socialismos” fabiano, el revisionista bernsteniano, y sucedáneo de éstos el **socialismo liberal** de Carlo Rosselli (1930). El siglo XIX tuvo su “socialismo realmente existente”: heterogéneo, contradictorio, en disputa teórica y política. Razón que había conducido tempranamente a Marx y Engels a dar la denominación de comunista a su proyecto anticapitalista para diferenciarlo de los otros. Pero todavía se estaba en el plano de las ideas y la construcción política.

2 Y así volverá a hacerlo Hayek en el siglo XX, que en 1944 dedica su manifiesto neo-liberal **Camino de servidumbre** “a los socialistas de todos los partidos”.

3 El “reformismo” en su origen no fue homogéneo: tuvo una vertiente anticapitalista (como medio) y otra procapitalista (como fin), implicando debates más complejos; que fueron trivializados tiempo después como la mecanicista dicotomía táctica reforma-revolución.

Las realizaciones prácticas comenzaron en el siglo XX. A partir de 1917 el proyecto del socialismo revolucionario comenzó a realizarse en una sociedad concreta, enfrentando inmensas dificultades y obstáculos internos y externos. Después de la muerte de Lenin, a esa sociedad **poscapitalista** que abolió la propiedad privada capitalista de los medios de producción, y en **transición hacia el socialismo**, no sólo se le llamó socialista sino incluso comunista. Tanto seguidores como enemigos coincidieron en que ésa era la consumación del proyecto y sus ideas. Para sus seguidores acríticos bastaba con la difícil y heroica permanencia de la URSS frente al embate de sus enemigos; y creían que no era objeto de discusión el hecho de que, no obstante los logros en el bienestar social, la transición al socialismo se había detenido pues no se socializaron los medios de producción ni el poder, unos y otro bajo control de una burocracia: ése **era**, sin discusión, el “socialismo realmente existente”. Para los que proclamaron la consumación del proyecto, el estallido de la URSS fue, “por lo tanto”, la muerte del proyecto y sus ideas. La derecha celebró el “doble” entierro. Los que habían rechazado toda discusión “pues le hacía el juego al enemigo”, recién entonces se sintieron engañados; y su frustración la convirtieron en excusa para renunciar a la lucha contra el capitalismo, todavía más destructivo.

También en el siglo XX el proyecto reformista tuvo su concreción en el centro del sistema. Y aunque requirió de decenas de millones de muertos en dos guerras, hambre y muchas luchas para que se llevara a cabo, y se financió en buena medida con la extracción imperialista de riqueza de los países coloniales y dependientes, se declaró consumada la transformación del capitalismo en un sistema productor de riqueza y generosamente redistribuidor: era el “reformismo realmente existente”. Fueron los conservadores más lúcidos políticamente quienes asignaron los contenidos: el “socialismo responsable” era el que cumplía la loable función de bloquear el anticapitalismo de masas de la primera posguerra administrando al capitalismo (**administering capitalism**) con reformas sociales que no lo afectaran, revistiendo sus medidas con frases socialistas y aplicando con éxito el cristal de aumento de todas las diferencias entre su política y la de liberales y conservadores, aunque fueran las mismas. Y que desde la segunda posguerra, cuando “los días del liberalismo ya han pasado”, esperaban que ese socialismo “responsable” desplegara sus aptitudes para

servir a la misma causa en esa “era de transición”⁴. Sus seguidores acríticos también se sintieron desconcertados cuando, décadas después, los otrora reformistas asumieron la incompatibilidad de la distribución del ingreso con la acumulación, y el desempleo y el empobrecimiento de muchos fue consustancial al crecimiento económico (a la acumulación de capital). Muchos no entendieron que esos intelectuales orgánicos del capitalismo se reciclaran conservando la denominación de origen (el Nuevo Laborismo, el Nuevo Socialismo en metamorfosis en Tercera Vía). Se sintieron traicionados, y no pocos comenzaron a votar por la derecha.

Nuevamente es la derecha la que asigna los contenidos de una “izquierda responsable y moderna” en América Latina para administrar su capitalismo y neutralizar conflictos. Pero ya no en la época de expansión del capitalismo sino en la de su crisis, y no en el centro del sistema sino en su periferia dependiente. La tragedia convertida en farsa.

Esa es la intención política de inducir la aceptación de una “izquierda realmente existente” que alberga todas las variedades de los otrora llamados socialismos. Idea que se impone explotando sentimientos de otra naturaleza en el seno de la izquierda, en los que confluyen, tal como sucedió durante aquellas experiencias, legítimas valoraciones de sus miembros o seguidores respecto al sacrificio de tantos para alcanzar el gobierno, sobre las dificultades y los obstáculos internos y externos que se enfrentan, sobre las limitaciones prácticas para alcanzar lo deseable en lo inmediato, y la valoración necesariamente positiva de los logros y realizaciones en el corto plazo. Podemos comprender que estos sean argumentos de peso. Y que no deben ser sustituidos con radiografías de los problemas que los congelan en un instante como patologías incurables.

Pero la inercia intelectual que se confunde con lealtad y compromiso, o que a lo sumo espera que el tiempo resuelva las insuficiencias y problemas, ¿dejará a los historiógrafos del futuro la tarea de contar y explicar por qué una época de gran potencialidad democratizadora se frustró?

En esas posturas acríticas sólo se piensa en términos de proceso cuando se mira hacia atrás, desde donde se viene, pero no se piensa el

4 Democracia de élites sin injerencia sobre lo económico, más socialismo “responsable”, es el programa político propuesto por el mentor de las renovaciones políticas del presente: Joseph. A. Schumpeter. Véase *Capitalismo, socialismo, democracia* (1942 y 1946), Barcelona, Orbis, pp.457-461.

presente en lo que está construyendo de futuro. Y que este futuro no está predeterminado por las buenas intenciones o por la credibilidad que posean sus conductores; que puede tomar direcciones distintas, y que sobre ellas se puede y debe actuar: evitando las que apartan del camino de la transformación buscada y gestando las condiciones necesarias para poder recorrer este camino sin aceptar resignadamente las circunstancias existentes. Es decir, como *construcción de lo posible*.

Desde luego que esta intervención consciente sobre la dirección del proceso histórico no garantiza un devenir fijo o su irreversibilidad, porque la izquierda no actúa sola, y los privilegiados del orden actual no están resignados a perderlos ni están en retirada política e ideológica. Éstos son los riesgos de asumir una opción de cambio que, por lo demás, la izquierda no puede eludir: no sólo por convicción filosófica o por congruencia ética (potentes estímulos para la acción consciente), sino porque sin las transformaciones necesarias sólo queda la barbarie.

Pero ha de decirse que frente a los riesgos y los avatares históricos no es lo mismo sufrir *derrotas* que *fracasos*. Las *derrotas*, que dan cuenta de insuficiencia de fuerza frente a los contrarios, pueden remontarse enfrentando sus costos y efectos pues se preserva la legitimidad que puede movilizar la voluntad colectiva hacia nuevos esfuerzos de cambio. Los *fracasos*, en cambio, dan cuenta del abandono de objetivos o de la adopción de objetivos ajenos al proyecto de transformación para el que se habían convocado los esfuerzos y sacrificios colectivos, que difícilmente puedan seguir siendo convocados. Lo que está en discusión es cómo generar las condiciones para evitar derrotas, para conjurar el sortilegio de una izquierda que tendría fascinación por las derrotas, sabiendo también que no se las evita conduciéndola a los fracasos en nombre de supuestos realismos.

Desechar la perspectiva de la “izquierda realmente existente” no supone pensar desde una ideal “izquierda óptima” –lo que alimenta el pesimismo y el inmovilismo– sino en términos de la *izquierda necesaria* para avanzar en los objetivos emancipatorios. Al pensar en estos términos se asume, desde luego, que la izquierda es un producto histórico, en maduración, moldeada en los procesos concretos y sus contradicciones, con sus condicionamientos y desafíos, desvíos e incluso retrocesos, y que, por lo tanto, la izquierda necesaria es una izquierda en construcción.

Mas no cualquier construcción. Es aquí donde la ética cobra un sentido transformador, ajeno a cualquier abstracción, sino como un asunto del día a día, de cada acto, que desecha y repudia los males que se quieren combatir de una sociedad enajenante y opresora, que reclama la dignidad, y que exige desenmascarar las falsificaciones que desvían del camino transformador. Es la *reforma intelectual y moral* de la que hablaba Gramsci como condición para gestar el sujeto colectivo del cambio: un central asunto político, y que por lo mismo es una construcción racional y no la práctica de una religión laica (como afirman con sorna los conservadores), que exige un pensamiento crítico sobre la realidad sobre la que se actúa y sobre la existencia propia. En otras palabras, pensar críticamente sobre los errores o problemas no es una arrogante pretensión moralizante con la cual justificar alguna ajenidad con los procesos en curso, sino la manera verdaderamente responsable de participar en ellos. Aunque produzca fastidio en quienes conducen los procesos, aunque parezca injusto con quienes generosamente entregan sus esfuerzos a los mismos. Es crítica para avanzar.

La construcción y reconstrucción permanente de la izquierda en América Latina no es una tarea sencilla pues ella es parte de sociedades desgarradas por las necesidades, con los negativos efectos de larga duración de la desigualdad y la opresión, la destrucción educativa, el arraigo de los valores conservadores y de la cultura política dominante.

Esas dificultades y rémoras deben ser superadas creando una *voluntad colectiva para el cambio*, mucho más vasta que el electorado que vota por la izquierda e incluso que los conglomerados humanos movilizados por las diversas organizaciones sociales. Para convocarla, es constatable el importante papel que tiene un liderazgo colectivo e individual con verdadera voluntad política de cambio, realmente dispuesto a llevarlo a cabo. Constatamos asimismo que mientras algunos exhiben esa clara decisión política que convoca y desencadena las mejores potencialidades humanas superando dificultades, otros liderazgos, que tienen recursos de poder y energías sociales dispuestas para hacerlo, han renunciado a ello. Estos son aspectos de la subjetividad que deben analizarse: más allá de razones ideológicas que lo expliquen, cabe interrogarse por qué unos liderazgos sí *se la juegan* por el cambio y otros no, y reconocer el valor de los primeros.

Mas debe tenerse en cuenta que no basta con esas osadía, voluntad y capacidad de convocatoria para que la *fuerza social movilizada* se transforme

en *poder social*; para ello se requiere establecer nuevas relaciones sociales, políticas e institucionales.

Y aún estos factores son insuficientes para explicar los avances, estancamientos o retrocesos en la acción transformadora de la izquierda. Pues ésta no existe en un vacío donde sólo cuente lo que ella se propone *ser* o *hacer* sino que, como toda fuerza política, es el producto de una relación de fuerzas en disputa entre los promotores del cambio y del *statu quo*, entre la crítica al orden dominante y la eficacia ideológica y política de los dominantes para conservarlo. En otras palabras, la izquierda no es ajena ni inmune a las estrategias hegemónicas de la derecha. En la “izquierda realmente existente” se expresan en grados diversos los efectos de esas ofensivas dominantes, de esas rutas que construye la derecha para hacer transitar por ellas a la izquierda con el objetivo de neutralizarla políticamente.

Rutas que son concebidas e implementadas de la misma manera en todos los países para subordinar a América Latina a las exigencias de la reproducción de la economía-mundo capitalista, y que subsumen las especificidades nacionales. En cada país la izquierda se enfrenta a clases dominantes criollas que forman parte de una clase dominante mundial. No es homogénea ni carente de conflictos de intereses; pero los grandes empresarios de cada país forman parte de esa clase mundial, algunos de ellos no como socios menores sino de los más poderosos del mundo. Y en todos los países han subordinado a las burguesías medianas, que subsisten como satélites y cómplices del gran capital y que también se han beneficiado con la sobreexplotación del trabajo y la intensa intervención del Estado a favor de los intereses burgueses.

Por eso es pertinente y hasta necesario pensar a la izquierda en términos regionales y en su relación con las estrategias de la derecha, pues ese nivel del análisis puede entregar sugerentes pistas explicativas sobre las diferencias o similitudes entre los procesos.

2. La heterogeneidad de la izquierda latinoamericana

Un dato de la izquierda latinoamericana es su heterogeneidad: entre países y al interior de cada partido. Comencemos por esto último.

Los partidos de izquierda son entidades políticas heterogéneas producto de diferentes experiencias de unidad política entre diversos grupos sociales y proyectos de sociedad, que en circunstancias distintas han recorrido caminos juntos. Los partidos de izquierda del presente son en la práctica coaliciones, algunas que se constituyen formalmente con organizaciones independientes, y otras que han decidido la fusión pero que reconocen corrientes internas de manera orgánica o de facto, cuya fuerza relativa e incidencia son cambiantes. Lo característico de esta época es la acentuación de la heterogeneidad interna, que va más allá de la diversidad que todo partido contiene (que nunca es homogéneo aunque lo pretenda), y que denota la existencia de intereses, objetivos y proyectos diversos y hasta contradictorios en el seno de los partidos.

Los análisis sobre los partidos de izquierda en América Latina habían prestado escasa atención a las diferencias en la unidad política que les dio origen, siendo que el factor de aglutinamiento –los principios y objetivos compartidos– implica cierta representación social y cierta concepción sobre la acción política: a) en algunos casos, la unidad partidaria es la expresión política de un proceso de unidad social en curso, es decir, de avances en la organización, conciencia, lucha y unidad de los sectores populares; lo que confiere al partido mayor identidad social y clasista, de la cual se derivan fines más precisos en sus contenidos anticapitalistas, antioligárquicos y antiimperialistas; e induce una concepción de la política cuyo *locus* principal está en la acción social transformadora; b) en otros casos, el principal factor de aglutinamiento son objetivos democratizadores: la lucha contra un régimen político dictatorial o autoritario civil sobredetermina la lucha por la transformación social. A los núcleos mayoritarios de izquierda anticapitalista y antiimperialista, que son el pilar de las luchas por la libertad, se suman otros sectores sociales (pequeña y mediana burguesía) que comparten los objetivos democratizadores y republicanos pero difieren en la idea de la sociedad a construir y en el alcance de los cambios sociales a promover; las divergencias emergen una vez sustituido el régimen político y suelen producirse escisiones; c) otras unidades políticas se han concretado en torno a objetivos electorales, de los que se deriva, como meta principal, la reforma del régimen político para poder participar más ampliamente en él. La acción política se realiza principalmente en las instituciones y a ella se subordinan los objetivos de transformación social; las alianzas son más

difusas social y políticamente con el principal propósito de conquistar votos; y la cohesión se da en torno a los cargos políticos y al acceso al financiamiento electoral, antes que por principios políticos o éticos. En algunos partidos se entrecruzan varios factores de aglutinamiento. Existen, pues, diferencias originarias que marcan historias distintas entre partidos⁵.

Pero sucede que lo que mantiene unido al partido ha ido variando en el tiempo, sea por cambios políticos e ideológicos en su interior, o porque algunos han pasado por instancias de unificación sucesivas en las que varió el factor de aglutinamiento de cada una. Estos cambios en la naturaleza de la unidad política han llegado a modificar la identidad del partido aunque permanezcan los símbolos y rituales. Los militantes más antiguos suelen ver con perplejidad los cambios de concepciones y prácticas de sus partidos, porque usualmente asumen que la identidad originaria es invariable. La unidad política, que siempre es un rasgo de madurez y una condición necesaria para condensar fuerza frente a los contrarios, tiene que ser analizada en sus contenidos y como un fenómeno dinámico, cómo se recrea en cada momento histórico y político y los efectos políticos que tiene⁶.

5 El Frente Amplio de Uruguay (1971) fue expresión política de la unidad de asalariados y capas medias en un contexto de intensa lucha de clases; pero en los subsecuentes momentos de unificación del FA con otras organizaciones políticas predominará más el objetivo electoral. En Brasil, la unidad política de varias organizaciones de izquierda en el Partido de los Trabajadores (1981) también es expresión política de luchas sindicales, estudiantiles, rurales y de comunidades eclesiales de base, que se unen con el objetivo principal de luchar contra la dictadura. El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (1961) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (1980) se unifican, respectivamente, para enfrentar con las armas a las dictaduras en sus países; junto a la izquierda anticapitalista participan grupos y personas unidos por el ideal democrático –y eventualmente antioligárquico– pero con muy diferentes concepciones del país a construir. La unidad de izquierda en México (1982-1989) se concreta en la meta de reformar al régimen político para participar en él. En Bolivia, el MAS (nacido del antecedente en la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos en 1995) surge de la lucha social indígena y campesina. En Colombia la unidad política surge de la lucha social (2000-2006) y se amplía también con miras electorales.

6 La izquierda en Cuba ha sido también resultado de la unidad política de distintas fuerzas antes y después del triunfo de la revolución, en torno a objetivos y principios compartidos a partir de la diversidad. Lo que distingue a la experiencia cubana no es sólo el tiempo transcurrido, sino que esa unidad política y su factor de aglutinamiento fue reconstruyéndose para cada nueva fase de profundización de los cambios, lo que ha permitido asumir con gran cohesión las nuevas tareas en las distintas circunstancias, que en buena medida explica su potente fuerza transformadora.

Cabe hacer notar que la heterogeneidad entre partidos, en cuanto a concepciones y objetivos políticos, tuvo menor visibilidad cuando el común denominador regional era el rechazo a los *shocks* neoliberales, lo que dio cierta homogeneidad al discurso de la izquierda latinoamericana. Tampoco fue demasiado perceptible en las primeras gestiones de gobiernos municipales, que compartían problemas y desafíos comunes, lo que permitía hablar de “los gobiernos de izquierda” (municipales) con un justificado grado de generalidad. Con el tiempo, y particularmente en este nuevo siglo, las diferencias entre partidos fueron acentuándose.

Se las ha atribuido a que algunos accedieron a gobiernos nacionales y otros sólo gobiernan localmente. Es una explicación parcialmente cierta: la esfera de gobierno plantea problemas distintos y decisiones que repercuten en las concepciones y quehacer de los partidos. Pero existen diferencias notorias entre los partidos que gobiernan nacionalmente, así como existen afinidades entre partidos que participan en distintas esferas de gobierno.

Estos reajustes en las semejanzas y diferencias corresponden en mayor medida a los condicionamientos de los procesos políticos en los que han actuado los partidos, y, de manera particular, al grado de influencia que las estrategias dominantes han tenido sobre ellos: primero, en cuanto a las circunstancias y contextos en los cuales los partidos crecieron electoralmente y, luego, en su incidencia sobre las concepciones acerca de los cambios posibles desde los gobiernos. En este apartado me referiré a las primeras y en el siguiente apartado a las segundas.

En cuanto a las circunstancias en las que crecieron electoralmente es posible hacer una primera distinción, con un corte temporal a mediados de la década de los noventa, entre: a) los partidos que se incorporan al sistema electoral en “transiciones democráticas” a sistemas representativos funcionales al neoliberalismo, que imponen grados diversos de integración sistémica (lo que también es denominado *institucionalización* de la izquierda); b) los que se incorporan a la lucha electoral desde la segunda mitad de la década de los noventa, que lo hacen cuando la *democracia gobernable* acusa una creciente pérdida de legitimidad y desprestigio, paralela al creciente rechazo a las políticas económicas y sociales neoliberales.

Es bastante significativo que los partidos que crecieron electoralmente con mayor apego a las reglas del sistema exhiban una actitud mucho menos proclive a la ruptura con el orden existente; distinta a la crítica a las

instituciones “democráticas” que caracteriza la acción político-electoral del movimiento político que encabeza Hugo Chávez en Venezuela desde 1998, del Movimiento al Socialismo en Bolivia desde su fundación en 1995 y a la vehemente crítica al sistema político con la que Rafael Correa ganó las elecciones en Ecuador.

En los contextos de transiciones negociadas, los cambios de regímenes políticos fueron producto de la lucha de la izquierda, pero el tipo de sistema representativo (“democracia”) lo impuso la clase dominante a una izquierda con alta legitimidad pero debilitada orgánicamente. La derecha hacía depender la viabilidad del nuevo régimen a que el cambio político no afectara los objetivos económicos de la burguesía. Sólo así podría alcanzarse el nuevo “consenso democrático”, en el que serían aceptados como *pares* y *adversarios* políticos los que hasta poco tiempo atrás habían sido los *enemigos a destruir*. Para imponer ese “consenso democrático” la derecha usó el chantaje del retorno de los militares; en Nicaragua (único cambio de régimen con una revolución que incluye importantes transformaciones sociales) sometió al gobierno sandinista con la contrarrevolución, y también la derecha usó como medio de presión el anhelo de paz en El Salvador.

La estabilidad de la *democracia* (governabilidad)⁷ dependería de que no se generasen ni expresasen demandas que presionaran al Estado en dirección contraria al interés del capital y debían evitarse todos los conflictos sociales, particularmente entre trabajo y capital. La política no debería interferir sobre las decisiones libres del mercado “garantes del crecimiento”. Para reforzar esta separación entre la política y la economía se bombardeó con el discurso de la “globalización”: presentada como una fuerza metafísica ajena a las relaciones de poder (política), era ella la que supuestamente determinaba todas las decisiones económicas. Y, en efecto, la inacción política y social que dejó libre al capital facilitó su expansión sin límites. Los *shocks* neoliberales se llevaron a cabo en democracia y con la presencia de la izquierda en los parlamentos.

Bajo las reglas de esa impotente democracia para producir cambios económicos la izquierda pudo acceder a los *beneficios* ofrecidos por el sistema representativo para participar en elecciones formalmente libres,

7 Análisis con más detalle este tema, entre otros trabajos, en: “Gobernabilidad o democracia: los usos conservadores de la política” (en este volumen).

recibir financiamiento público, acceder a los medios de comunicación y acceder a los beneficios o prebendas dispensadas para los parlamentarios. La izquierda levantó su programa de reivindicaciones democráticas y sociales fundamentalmente como plataforma electoral, cosechó votos, aumentó su presencia parlamentaria y comenzó a ganar gobiernos locales. En vastos sectores de la izquierda ganó terreno la idea de que eran posibles los cambios institucionales más allá de la correlación de fuerzas sociales, que le era adversa. Lo principal sería seguir creciendo electoralmente para tener más fuerza institucional y para ello habría que ajustarse a las reglas de la *democracia existente*.

La estrategia de la derecha para integrar a la izquierda a la lógica del sistema mediante su institucionalización tuvo resultados distintos según el peso independiente que tenían las organizaciones sociales y su influencia sobre los partidos. Pero, incluso donde las organizaciones sociales eran más sólidas, su fuerza social se debilitó: aun si no fue del todo desmovilizada, los *shocks* neoliberales ejecutados bajo las nuevas democracias gobernables debilitaron estructuralmente a los sectores populares con las privatizaciones, la utilización del desempleo para imponer la flexibilización laboral y las rebajas salariales, las contrarreformas educativas, etcétera⁸.

En la primera mitad de la década de 1990 hay un reflujo de las luchas sociales cuando están creciendo exponencialmente las necesidades populares. La fuerza electoral de la izquierda comienza a crecer pero su fuerza social real disminuye. Efecto del avance del capital sin restricciones, mientras aumenta la dispersión popular, es la búsqueda individual de formas de sobrevivencia, que produce regresiones en la conciencia de los trabajadores y en sus prácticas, siendo más permeables a la ofensiva ideológica conservadora. Frustrados, vastos sectores populares se desentienden de *la política*. El desprestigio de la política y los políticos alcanza a varios partidos de izquierda. Y se estanca la votación a la izquierda.

8 Por ejemplo, la central única de trabajadores en Uruguay (PIT-CNT), que en términos relativos es quizás la de mayor influencia social y política más allá de sus afiliados, se debilitó en estos años en la relación trabajo-capital. Compensó esa debilidad social promoviendo acciones políticas nacionales como referéndums contra las leyes de privatización aprobadas en el parlamento (telefonía, energéticos y, en otro contexto, agua), que frenaron la ofensiva privatizadora “democrática”. La central de trabajadores empujó al Frente Amplio a involucrarse en esas acciones. Pero la debilidad en la confrontación económica directa con el capital persistió.

El fenómeno es interpretado por el desprecio al elitismo y al prebendismo, pero el desprestigio afecta también a partidos de izquierda ajenos a esas negativas prácticas. En realidad, la causa profunda del llamado desencanto con la política es la percepción-comprobación que ella nada resuelve de los problemas cotidianos de la gente, que son eminentemente económicos. Este es el efecto principal de la institucionalización de la izquierda, de su subordinación a las reglas del juego sistémico. El descrédito que acusa enuncia una crisis de representación⁹.

Quienes en la izquierda comulgaban con la acción política institucionalizada atribuyeron la crisis de representación a las transformaciones de su base social tradicional. Sostienen entonces que es el fin de una época histórica que obliga a cambiar la concepción de la representación política: si la clase obrera industrial de antaño y las capas medias en el Estado estaban en vías de extinción, la izquierda ya no podría crecer política y electoralmente como representante político de los asalariados. Se daba por hecho que el sujeto social anticapitalista había desaparecido en América Latina. Esto ocurría al mismo tiempo que se desmoronaba el “socialismo realmente existente” en Europa, y Cuba, además, sufría los peores momentos del *Período Especial* y no eran muchos los que confiaban en la sobrevivencia de la Revolución. Creció la convicción de que los cambios sólo podrían hacerse dentro del capitalismo.

Se esgrimió –y todavía hay quienes lo hacen– la crisis del “socialismo real” como “demostración” del fin del sujeto anticapitalista en nuestra región. Aquel derrumbe, que sin duda representaba un cambio decisivo en el dominio capitalista mundial y un factor adicional de profundo desánimo para los izquierdistas latinoamericanos, se usó como argumento forzado para justificar el cambio de concepción política de los partidos, el cual tenía orígenes indudables en la realidad socio-política de la región. En este momento se hace visible la debilidad teórica del núcleo primigenio de la

9 Discuto esto con más detalle en “El desprestigio de la política: lo que no se discute” (en este volumen). Estuvo de moda hablar de “crisis de representación” en la primera mitad de los noventa, aludiendo a la crisis de legitimidad del sistema representativo liberal en general. Pero el desencanto con la política y los políticos no provenía tanto de que la derecha no “agregara” intereses (que hacía rato que no lo hacía), sino que la izquierda dejara de expresar los intereses populares para garantizar la “governabilidad” del sistema y su permanencia en él. Cuando se habla de “intereses” no sólo se hace referencia a *necesidades observables*; entendidos también como *aspiraciones*, presuponen *demandas*.

izquierda latinoamericana formado en un marxismo dogmático y vulgarizado: que sólo ve un explotado en el obrero industrial cuando es tan sólo una forma histórica de la categoría explotado. Por esta razón hay incapacidad para identificar la nueva morfología de la expropiación del valor, que lejos de haber disminuido abarca a muchos más segmentos sociales populares. El mecanicismo de este marxismo dogmático y vulgarizado conduce también a disociar explotación de dominación, lo que impide ver en la diversidad social de los oprimidos sus connotaciones clasistas. En consecuencia, no puede reformular la noción de lo popular en las nuevas circunstancias históricas ni identificar los sujetos sociales de la lucha anticapitalista. Esto facilita la influencia del pensamiento conservador disfrazado de renovaciones posmodernas con sus efectos desmovilizadores y desarticuladores, que dificultan todavía más remontar la coyuntura de reflujo.

Aquellos “datos” sociales son convertidos en estrategia por varios sectores de izquierda: para crecer electoralmente y producir algunos cambios económicos posibles desde un gobierno nacional, las alianzas deberían hacerse con otros sectores afectados por las políticas económicas neoliberales: empresarios medianos (que no obstante haber funcionado en asociación subordinada con el gran capital tienen dificultad para obtener las ganancias esperadas), y la clase media profesional que funciona como satélite del modelo (y comparte sus valores) pero que sufre la inestabilidad laboral y está agobiada por las deudas para mantener su consumo. Y para ganar sus confianzas debía haber un corrimiento hacia el centro: desradicalizar el discurso, presentar como compatibles los intereses del capital y del trabajo en pos del objetivo compartido de la inversión, ofrecer seguridad para “los negocios”, etcétera. Al mismo tiempo, habría que “modernizar” las técnicas de atracción de votos con la apelación al *ciudadano común* para disputárselo a la derecha y adaptar la vida de los partidos a esos objetivos. Las nuevas alianzas con esos sectores sociales se concretan en fórmulas electorales y, en algunos casos, con su ingreso formal a los partidos de izquierda. Que a partir de entonces se asumen como centroizquierda, aunque conserven sus símbolos y permanezcan varios dirigentes históricos.

Estas concepciones y decisiones se legitimaron en la medida en que atrajeron votos, permitieron conservar los gobiernos municipales que ya se tenían y acceder a otros y proyectaban a los partidos a la disputa por los gobiernos nacionales. De esa manera condicionaron desde entonces las

prácticas y concepciones de los partidos que transitaron esa ruta política hasta conquistar gobiernos nacionales¹⁰.

Quienes promovieron el corrimiento hacia el centro socializaron la conclusión de que el crecimiento electoral de la segunda mitad de los noventa era resultado de ese corrimiento. Empero, el voto popular fue creciendo en mayor proporción, por múltiples razones: a) el desprestigio cada vez mayor de la derecha por sus propias acciones; b) el peso decisivo que en el desprestigio de la derecha tienen las luchas sociales, que se recomponen y extienden desde mediados de los noventa, a pesar incluso de varios partidos de izquierda¹¹; c) la reducción de la abstención electoral de segmentos populares que esperan que un gobierno de signo político distinto promueva los cambios económicos, que la lucha social no conquistaba a pesar del esfuerzo y los sacrificios; d) en ciertos casos por la influencia de candidatos carismáticos.

El voto conquistado por el centro fue numéricamente menor que el de los segmentos populares que esperaban de la izquierda cambios radicales en sus condiciones de vida. Pero la nueva configuración de la unidad política

10 Ya en 1998 señalé estos cambios de concepciones y prácticas políticas así como las tendencias que prefiguraban hacia eventuales gobiernos nacionales: la sobrestimación de los procesos electorales como esencia de la política; el cambio en la representación social de la izquierda y su correlato en las alianzas que establecía, así como el cambio de objetivos estratégicos. En este último aspecto interrogaba: “[...] la izquierda ha reconocido que los cambios que propone los hará dentro del capitalismo. No ha sido elocuente en explicar si es debido a que hoy no existen condiciones para realizar profundas transformaciones anticapitalistas –hecho por demás evidente– o porque ha renunciado definitivamente a ellas”. Como se ve, no son cambios ideológicos y políticos recientes. “La izquierda, el gobierno y la política...”, *op. cit.*, p. 188 y ss.

11 En distintos análisis he sostenido, y así lo mantengo, que la buena gestión municipal ha sido un factor positivo para el crecimiento electoral de la izquierda. Pero no debe sobrestimarse, pues la práctica gubernamental no siempre ha compensado los problemas en el accionar político de los partidos ni ha garantizado triunfos electorales, como se ha visto en Porto Alegre y en varios municipios salvadoreños. E incluso el triunfo de Chávez no puede deducirse mecánicamente de la gestión municipal de Causa R. Sobre la dualidad entre gobierno y proyecto social y político de la izquierda, señalaba ya en 1998: “Paradójicamente, cuanto más se acerca la izquierda al gobierno más prescindente es, orgánicamente, de la política de gestión de organizaciones populares, lo que es bastante evidente en relación a las sindicales, estudiantiles, universitarias, campesinas o de asalariados rurales, de jubilados, etc. [...] El acercamiento al mundo empresarial, hacia eventuales triunfos electorales nacionales [...] pareciera ocupar más su atención que la que le otorga a la construcción o reconstrucción del actor popular. Éste existe muchas veces en forma paralela al accionar de los partidos [...] y no responden necesariamente a la convocatoria política de dichos partidos”, *op. cit.*, p.189.

fue legitimada a nombre de la amplitud, e incluso a los recién llegados, a sus respectivos intereses y proyectos, se les confirió un peso político superior al del caudal electoral que aportaron. Esa sobrerrepresentación se traslada luego a los gobiernos.

No debe pasarse por alto el gran interés actual de la ex socialdemocracia (ahora social-liberal de Tercera Vía) por los “frentes amplios” amplísimos: no es para que la “unidad de izquierda” represente la diversidad popular aún insuficientemente unificada, sino para la unidad de la izquierda con la burguesía. Cuando la izquierda tiene posibilidades de triunfar electoralmente con los votos de las mayorías populares, esa estimulada “amplitud amplísima” tiene fines de revolución pasiva¹².

El crecimiento electoral de la izquierda en Venezuela y Bolivia ocurre en circunstancias diferentes a esas otras experiencias (Brasil, Uruguay, Nicaragua, México)¹³, como diferentes son sus efectos políticos. En Venezuela, Hugo Chávez ganó por primera vez las elecciones de diciembre de 1998 con 60 por ciento de los votos, muchos de los cuales provenían de sectores de la burguesía y de la clase media que suponían que siendo un *outsider* del sistema político podría salvarlo de la crisis de legitimidad en que se encontraba. Pocos meses después, frustradas las ilusiones conservadoras de una democracia gobernable, le retiraron el apoyo y le declararon la guerra; pero Chávez mantuvo y superó ampliamente esos guarismos con votos populares. La base social del gobierno crece conforme es más definido –no difuso– el carácter popular del gobierno. Y el partido se construye –más allá de las vicisitudes que hoy tiene esa construcción de la unidad política– a partir del gobierno, sí, pero teniendo como fundamento a esa base social. La aproximación cuantitativa entre *fuerza social, fuerza polí-*

12 La *revolución pasiva*, según Gramsci, es una contrarrevolución pacífica en la que la burguesía extiende su hegemonía sobre los intelectuales que representan un proyecto antagónico, apropiándose de su lenguaje y programa. Es *restauración positiva* cuando se hace a través de un programa de reformas que conquista las ilusiones de los dominados. Pero las reformas posliberales que ofrece hoy la burguesía, a nombre del anti-neoliberalismo enarbolado por la izquierda, son más de lo mismo: su farsa.

13 La experiencia del FMLN en El Salvador es muy interesante pues es un partido que resiste los cambios político-ideológicos impuestos por las democracias gobernables y mantiene su vínculo directo con las luchas sociales, pero no está libre de las tendencias al electoralismo, con todo lo que implican, para conquistar el gobierno nacional, objetivo factible. No fue ése el derrotero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que a partir de 1990 se sometió a las reglas del sistema (con sus negativas consecuencias éticas), y bajo ellas ganó las elecciones de 2006.

tica y fuerza electoral indica que esta última es expresión de la maduración política (conciencia y organización) y no de su debilitamiento o dilución. Es fuerza real, y le confiere a la política y a la acción institucional una potencia transformadora que emana y se reproduce desde la sociedad. En Bolivia, el avance electoral de la izquierda no pasó por su institucionalización ni por subordinar la radicalidad de las luchas sociales a alianzas electorales más “amplias”; por el contrario, el partido que triunfa (MAS) es un instrumento político de las organizaciones sociales en lucha, que obtiene directamente de ellas su fuerza política y electoral; el partido no existe sin las organizaciones sociales. El peligro de la institucionalización provendría del ejercicio de gobierno, que por momentos separa a ciertos dirigentes sociales en el MAS de su propia estructura y representación, lo que podría llevar a la crisis al instrumento político mismo. Todavía faltan elementos para adelantar el curso de los acontecimientos en Ecuador, donde se gobierna con un partido en ciernes y el impulso nacionalista radical recae en el liderazgo del presidente Rafael Correa.

3. La “amplitud” de los gobiernos de izquierda

La heterogeneidad de proyectos en los gobiernos nacionales tiene un primer origen en las rutas políticas por las que se ganan las elecciones, comentado en el apartado anterior. Otra fuente de heterogeneidad es la incorporación a los principales cargos de gobierno de personas provenientes de otros partidos de centroderecha y derecha, que de manera directa representan proyectos incluso opuestos a los de izquierda. Estas incorporaciones se hacen aduciendo amplitud bajo el supuesto indemostrable de que un gobierno de coalición (formal o de facto) podría disminuir la oposición de la derecha y garantizarle gobernabilidad al de izquierda¹⁴.

14 En 2003 advertí: “la decisión de sumar votos cautivos de la derecha o del centro ‘por arriba’, en lugar de conquistar políticamente a las franjas del electorado popular que se aleja de los partidos de derecha (un proceso más prolongado), introduce nuevas contradicciones para la izquierda. No son ‘entregas de votos gratuitas’ por parte de la derecha, implican condicionamientos futuros para los gobiernos de izquierda, que en algún momento terminan pagando esos costos”. (“La izquierda latinoamericana: gobierno y proyecto de cambio”, p. 16; en este volumen). Poco tiempo después, esa factura les fue cobrada al gobierno de Lula y al PT (“escándalo del *mensalão*”), sometiéndolos a su mayor crisis política.

Pero otro elemento a considerar es la concepción sobre el desenvolvimiento económico y social que se adopta y el modo como se asume la lucha contra el neoliberalismo, bandera con la cual la izquierda ganó elecciones. En este plano se comprueba la enorme influencia sobre varios gobiernos de izquierda de las concepciones y estrategias de la derecha mimetizadas como anti-neoliberalismo. Varias acciones económicas de los gobiernos, que son objeto de crítica, no son decisiones aisladas aunque muchos de quienes formulan las críticas así lo ven o no logran explicarse la razón de esas decisiones. Algunas son huellas de la influencia de la derecha, otras son adscripciones orgánicas a esas concepciones. Para explicarlo resulta necesario aportar algunas referencias.

La influencia del posliberalismo de derecha

En América Latina la derecha ha desplegado una intensa ofensiva ideológica y política para incidir en el debate sobre “alternativas al neoliberalismo” con el propósito de neutralizarlas. En tanto que no pudo impedir, por todos los medios, que la izquierda ganara elecciones nacionales, busca ahora que sea la izquierda quien ejecute su “alternativa anti-neoliberal”: el **posliberalismo**, que postula que es posible “ir más allá” del neoliberalismo sin tocar al capitalismo; una “tercera vía” que es presentada como “la alternativa progresista”.

La estrategia para construir un nuevo **Consenso posliberal** se despliega con toda intensidad desde 1997, precisamente cuando en América Latina crece el desprestigio del neoliberalismo y han perdido eficacia los mecanismos de gobernabilidad de la democracia conservadora para contener las luchas sociales. Se despliega en el contexto de la crisis financiera asiática que altera las expectativas del gran capital transnacional y de sus Estados matriciales de trasladar a otras regiones del mundo “liberalizado” la absorción de las contradicciones de su acumulación de ganancias; los obstáculos para continuar haciéndolo en Asia colocan a América Latina como una región imprescindible para esos objetivos.

La clave discursiva del posliberalismo como “alternativa anti-neoliberal” es reclamar “más Estado”; estos neoliberales repentinamente conversos al anti-neoliberalismo **admiten** que el mercado por sí mismo no resuelve la pobreza ni las inestabilidades económicas. La idea de que “más

Estado” es “salir del neoliberalismo” explota los equívocos inducidos deliberadamente para caracterizar al neoliberalismo como: a) “Estado mínimo”; b) como un conjunto de “políticas” (las “reformas de primera generación” del decálogo del llamado Consenso de Washington); c) con un responsable: el FMI¹⁵. Esta caracterización omite que: a) el neoliberalismo no es Estado mínimo sino un Estado que interviene intensamente a favor del capital aunque se desentiende de sus funciones sociales: que cumple con un papel fundamental expropiatorio para transferir riqueza social y de los trabajadores y consumidores pobres al capital (privatizaciones de empresas y de recursos naturales; transferencia financiera mediante deuda pública interna y externa, subsidios y exenciones fiscales al capital simultáneo al aumento de impuestos al trabajo y al consumo de los pobres; expropiación mediante tarifas de servicios públicos, etc.); el Estado libera al capital de toda traba jurídica; disciplina a la fuerza de trabajo para su sobreexplotación; se estatiza la política para subordinarla a los intereses capitalistas; b) que el neoliberalismo no es un conjunto de “políticas” sino que es la reestructuración radical de todas las relaciones sociales y de poder entre capital y trabajo en beneficio del primero, que hace posible la imposición de esas políticas; c) que los “responsables” de la reestructuración neoliberal no son sólo las IFIS y el Tesoro de Estados Unidos sino el gran capital transnacional, sus funcionarios políticos en los Estados del centro y de la periferia del sistema capitalista, fracciones medianas del capital que funcionan subordinadas al gran capital, y una cohorte de intelectuales –en el sentido más amplio– que viabilizan política e ideológicamente su reproducción; en suma, que no se derrota al neoliberalismo sólo enfrentándose al FMI.

Los posliberales plantean “reformular las reformas”; sostienen que las de primera generación eran buenas pero estuvieron mal hechas o inconclusas, que deben ser corregidas o completadas con las de “segunda generación”. La mayor intervención del Estado que reclaman los posliberales se centra en dar *seguridad* a las inversiones privadas, usando la secuencia retórica de que las inversiones crean empleo y éste oportunidades para salir de la

15 El Banco Mundial (bajo la conducción de su vicepresidente Joseph Stiglitz) y el BID (con la de Enrique Iglesias) son ejes de la estrategia posliberal y se autoeximen de responsabilidades. Otros ideólogos posliberales destacados son Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos y el empresario transnacional mexicano Carlos Slim (el hombre más rico del mundo en 2007 con 67 mil millones de dólares, que con su “crítica” al neoliberalismo saltó del séptimo lugar mundial a este primero).

pobreza (no dicen, claro está, que las inversiones especulativas y rentistas que predominan en América Latina no producen empleo). El discurso de la seguridad penetra rápidamente en un público amplio que la asimila como un asunto primordialmente policial. Pero la seguridad reclamada por los posliberales es la que disminuya los “costos de transacción” para que las inversiones sean atractivas. “Seguridad jurídica” para la propiedad capitalista contra expropiaciones, contra tributaciones, contra huelgas, contra demandas “corporativas”¹⁶ salariales y de derechos laborales y sociales; nuevas leyes laborales que aseguren la flexibilización del trabajo; leyes ambientales que aseguren el control sobre la biodiversidad, etcétera. “Seguridad económica” con tarifas preferenciales; exención de impuestos; previsibilidad monetaria con autonomía de los bancos centrales, aunque admiten algunas regulaciones que salven al sistema financiero de sus propias contradicciones. “Seguridad territorial y militar” –ahora argumentada como combate contra el terrorismo– para acceder a energéticos, materias primas, agua, biodiversidad; para administrar el flujo y costo de la fuerza de trabajo migrante; para reprimir conflictos y estallidos sociales. “Seguridad comercial” sobre la disposición preferencial de los mercados nacionales. Para preservar estas seguridades de los avatares políticos internos, los posliberales aconsejan convertirlas en derecho público internacional mediante tratados bilaterales y multilaterales para garantizar su obligatoriedad. Además, para hacer atractivas las inversiones, el Estado debe asumir parte de las “externalidades” como la contaminación, sólo que ahora multará a los que contaminan sin impedir que lo hagan para no afectar su propiedad. Debe, asimismo, proporcionar infraestructura.

Correlativamente, el Estado debe financiar la habilitación alimenticia y sanitaria así como la capacitación de la fuerza de trabajo en los términos que sean requeridos para inversiones rentables (“empleabilidad de capital humano”), mediante políticas sociales focalizadas (es la “igualdad de oportunidades” liberal). El señuelo “progresista” de esta estrategia es el aumento del gasto social del Estado; pero no será éste quien provea los servicios, sino que financiará sus costos (mediante becas, *vouchers* y similares) para que los provea la empresa privada (educación, salud, vivienda,

¹⁶ Los posliberales levantan un discurso contra las “corporaciones monopólicas” que en realidad se dirige contra los “monopolios públicos” (que deben seguir privatizándose) y contra los “monopolios sindicales”, nunca contra los “sindicatos empresariales”.

pensiones, etc.), que desde luego obtiene ganancias por ello. Es decir, los ingresos fiscales que aportan casi exclusivamente los contribuyentes pobres (impuestos al salario e IVA), el gobierno los transfiere para ganancias privadas... para atender las necesidades de los pobres. De este modo el Estado se libera de presiones sociales y el gobierno gana legitimidad política.

Este *neoinstitucionalismo* que exige reformas legislativas y jurídicas; que desarrolla políticas públicas para asegurar la cohesión social (“capital social” para la gobernabilidad) pero fortaleciendo al capital; que “transparenta” y legitima la gestión del Estado para hacerla previsible para los inversores; que reduce *gobierno* a *gestión* como un mero asunto de *good governance* despolitizada¹⁷; que financia o cofinancia las inversiones privadas, es, en definitiva, la subordinación del Estado y sus recursos al gran capital, que sigue siendo la variable independiente del “crecimiento”.

El posliberalismo es una variante perversa del neoliberalismo a nombre del anti-neoliberalismo, que se presenta como el movimiento pendular “natural” que, con meras correcciones a los excesos del neoliberalismo (reformular las reformas), puede devolver al sistema económico a su normalidad como “progreso” (acumulación privada) y a sus ejecutores como “progresistas”. Es la “alternativa reformista” que se ofrece como viable porque ésta sí cuenta con el apoyo de los grandes empresarios.

Los posliberales dan nueva forma a la ofensiva del gran capital sobre América Latina cuando se intensifica la inestabilidad de la economía capitalista mundial, agravada con la desaceleración económica de Estados Unidos¹⁸ que, además, es jaqueada por la resistencia iraquí; promueven

17 En la lógica de la *governance* (traducida ahora como *gobernanza*), el gobierno queda reducido a la gestión de lo existente; esa gestión es “buena” (*good governance*) si cumple con cierta transparencia y es legitimada por cierta participación. En la lógica neoinstitucionalista del Banco Mundial y el BID, los presupuestos participativos locales son buenos instrumentos de *good governance* pues se limitan a distribuir lo disponible aunque sea escaso, legitimados con la participación de la “comunidad”, que al asumir responsabilidades de ejecución reducen los reclamos al Estado y reducen los conflictos. Esta lógica es trasladada al plano internacional como *gobernanza mundial*, desplazando el problema del imperialismo, bajo el supuesto de que ella se alcanzaría dízque democratizando las instituciones financieras internacionales sin cambiar las relaciones internacionales de poder.

18 Véanse, por ejemplo, los informes del Laboratoire Européen d’Anticipation Politique Europe 2020 (LEAP/E2020) en <http://www.europe2020.org/>. Así como los análisis sobre la explosividad de la deuda generada por la especulación financiera e inmobiliaria en Estados Unidos junto al descenso de la producción manufacturera, en el contexto de su déficit fiscal y comercial que encadena la

una vía de salida a la explosión especulativa con inversiones productivas del capital transnacional en América Latina, en infraestructura petrolera y energética, minería, sistemas multimodales de vías de comunicación e infraestructura hídrica (represas, canales, explotación del agua). Se trata de un *neo-desarrollismo transnacional*¹⁹ que exige la subordinación y el subsidio de los gobiernos latinoamericanos a esa inversión privada transnacional; que aunque genere empleos temporales, extrae las ganancias y avanza en la apropiación de territorios y recursos naturales con apoyo de los Estados latinoamericanos. En esta lógica se inscriben la creación de la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y el renacimiento del Plan Puebla Panamá al que se integró Colombia, que diseñan la integración transnacional de nuestros territorios desde Alaska a Tierra del Fuego. Integración transnacional que se ofrece como base material de las acciones de integración en la que participan los gobiernos de izquierda.

La dualidad gubernamental y sus límites

No es difícil hallar las huellas del posliberalismo conservador en muchas de las políticas económicas de los gobiernos²⁰, incluso en los que llevan a cabo políticas sociales que responden a las líneas programáticas de izquierda. En estos casos, los gobiernos exhiben dualidad entre las políticas sociales y la política económica.

Las políticas sociales son el principal criterio de valoración por el que muchos juzgan a los gobiernos como de izquierda, y son las que les

economía estadounidense a la de China (en el comercio y a través de los Bonos del Tesoro que aquélla posee así como Japón y Corea del Sur). Y los signos de una crisis de sobreproducción en China que podría arrastrar a Estados Unidos. Al respecto véanse: Fred Magdoff, “The Explosion of Debt and Speculation”, *Monthly Review*, November 2006; y el trabajo de Ho-Fung Hung “Rise of China and the Global Overaccumulation crisis”, citado por Walden Bello en “Economías ‘encadenadas’” publicado en *La Jornada*, México, 9 de diciembre de 2006, p.23.

19 Carlos Slim ofrece sus inversiones en la región como una alternativa “latinoamericana” a los capitales norteamericanos y europeos. Ha creado su Instituto para el Desarrollo y el Empleo de América Latina (IDEAL), en el que trabajan desarrollistas de viejo cuño.

20 El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) impulsado por el gobierno de Lula corresponde a la ortodoxia posliberal.

generan el apoyo popular y electoral. En esa valoración cuentan también sus acciones democratizadoras, el rescate de prácticas republicanas y de decencia pública avasalladas por el patrimonialismo de derecha, el respeto a las libertades públicas, así como el reconocimiento a la diversidad étnica, de género, generacional y de preferencia sexual. En conjunto, estas acciones arrojan balances positivos y, sean cambios importantes o mínimos, dan como resultado que donde gobierna la izquierda la gente está mejor (o no está peor) que con los gobiernos anteriores de la derecha, y así se refleja en las encuestas de opinión en todos los países. El contraste con la impudicia de la derecha acrecienta la percepción de cambio, aunque sea pequeño y las conductas republicanas y decentes sean los requisitos mínimos para un gobierno de izquierda. En cualquier caso, debe reconocerse que en las políticas sociales están implicados esfuerzos destacados y destacables.

Empero, en su implementación hay diferencias de concepciones y prácticas. En todos los países el gasto público social es significativamente mayor al de los gobiernos anteriores de la derecha, lo que refuerza la percepción de cambio. Todos los gobiernos despliegan acciones contra la extrema pobreza, lo que no puede ser materia de controversia, pero en éstas cabe distinguir dos concepciones: las que hacen una discriminación positiva para atender con urgencia situaciones de emergencia al tiempo que se orientan a reconocer y atender derechos universales; y las que conciben la atención focalizada como el mecanismo idóneo para generar “igualdad de oportunidades” como meta del desarrollo social. Esta última es la versión social-liberal que ha sido ejecutada por los neoliberales desde comienzos de la década de los noventa, que los posliberales “corrigen” sólo en los montos de los programas y en los términos arriba descritos, y que tienen fines primordialmente políticos.

En apariencia son las “mismas” acciones sociales, y ambos tipos dan réditos políticos a los gobiernos en las franjas sociales atendidas. Pero las políticas posliberales que priorizan la acumulación de capital y una “igualdad de oportunidades” funcional a la primera no permiten salir del asistencialismo y la focalización; aunque atenúan situaciones extremas no resuelven las necesidades básicas, y además impiden hasta mínimas formas de independencia social, cultural y política de los seres humanos. El gobierno de la Concertación en Chile aplica el modelo económico-social-político posliberal puro y duro, carente de cualquier atributo de izquierda; el

gobierno de Lula da Silva en Brasil se ajusta cada vez más al posliberalismo conservador en lo económico y lo social pues muchas de sus políticas sociales de emergencia tienden a ser permanentes, y varias transfieren recursos públicos para servicios privados lucrativos (como los bonos universitarios). Las acciones del gobierno bolivariano de Venezuela en todo sentido están en la antípoda del posliberalismo. Pero las dualidades entre lo económico y lo social, y su efecto sobre las concepciones de políticas sociales, se observa en grados diversos en las demás experiencias de gobierno.

Un proyecto de izquierda debe orientarse a una redistribución radical de la riqueza y, por lo mismo, la política social es el corazón de la política económica que propugna por la igualdad. Esto es muy distinto a que la política social compense los efectos de una política económica que genera desigualdad. Pero estas diferencias fundamentales para un proyecto de izquierda quedan veladas, en la actualidad, por el hecho de que con todas las políticas sociales mejora el ingreso de los más pobres y que en el muy corto plazo cambian los guarismos de la desigualdad. Este dato es usado para validar la idea de la “izquierda realmente existente”. Sin embargo, las políticas económicas que subsumen el empleo y el salario a la inversión (rentabilidad privada), que hacen gala de responsabilidad al comprometer mínimos déficit fiscales (hasta por ley, como en Brasil), o que priorizan el pago de deudas externas especulativas y de orígenes fraudulentos que no se investigan, comprometen la mínima redistribución del ingreso lograda. Son decisiones económicas que entran en contradicción, además, con la ampliación de derechos laborales y sociales colectivos que como acción genuinamente de izquierda es alentada por algunos gobiernos (Uruguay, Bolivia).

En el corto plazo, como se ha dicho, lo anterior da por resultado gobiernos dualizados y en conflicto interno entre su área social y su área económica. Esta dualidad puede ser disminuida coyunturalmente por presiones populares, pero no puede permanecer indefinidamente y tenderá a ser absorbida por una de las dos prioridades en conflicto*.

En este sentido es justificada la preocupación por la tendencia de los gobiernos a adoptar el *neodesarrollismo transnacional* como la concepción

* Un ajuste de esta afirmación es necesario: la dualidad implica conflicto si el objetivo de las políticas sociales fuera la redistribución de la riqueza (objetivo de izquierda), dado que las políticas económicas posliberales la concentran; sin embargo, observamos que la mayoría de las políticas sociales de los gobiernos progresistas no plantean la redistribución de la riqueza sino el aumento del ingreso de los más pobres (focalizado),

que informa la declarada apuesta por “países productivos”. Con escasas excepciones, se entiende por productivo la exportación de monoproducción del sector primario –que está en manos de grandes capitales extranjeros, incluida la propiedad de la tierra– y las grandes obras de infraestructura de empresas transnacionales, o que se promueven apelando a una burguesía “nacional” no obstante que los capitales privados con alta capacidad de inversión son invariablemente transnacionalizados, no importando el origen nacional de los empresarios²¹. Incluso en Venezuela, donde la apuesta a un *desarrollo endógeno* está basada en una fortalecida economía estatal que impulsa ampliamente la propiedad y producción sociales, existen dentro del *chavismo* posturas que apelan a un neodesarrollismo en alianza con la burguesía²².

El Mercosur es un ejemplo de integración entre gobiernos que desde esa lógica *neodesarrollista* promueven intereses de grandes empresas incluso transnacionales, que son las que definen en buena medida la política exterior de los Estados. La Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), como alternativa de integración y complementariedad entre pueblos y empresas estatales, en los proyectos de coinversión pública-privada no está del todo a salvo de las rutas transnacionales diseñadas en la IIRSA. El cambio positivo en el continente por el mayor distanciamiento, rechazo u oposición a las directrices del gobierno de Estados Unidos, que se comprueba en los foros multilaterales y en algunas relaciones bilaterales, es contrarrestado en los hechos por la adopción de ese *neodesarrollismo transnacional*²³.

lo cual no es contradictorio con las políticas económicas posliberales, sino que, por el contrario, las legitiman.

21 En su caracterización del “capitalismo andino”, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dice: “El Estado será el primer vagón de la locomotora de la economía. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto la economía campesina y el sexto la economía indígena comunitaria. Este es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país. [Es un modelo de país productivo] diferente del desarrollismo de los años 50 en que no se busca una sola vía de desarrollo y modernización, sino que reconoce la diversidad del país”. Entrevista de Pablo Stefanoni, *Clarín*, Buenos Aires, 27 de febrero de 2007.

22 Por ejemplo, las Tesis del Partido Comunista Venezolano al XIII Congreso, citadas por Edwin Aguirre Morales, “PCV: socialismo sí, pero no por ahora.” *Aporrea*, febrero de 2007.

23 Es una vía de sumisión a los intereses imperialistas (ejecutados por Estados, empresas

Sea por adhesión orgánica a esta nueva expresión de la ideología dominante, por déficit analíticos que permiten su influencia, o bien por la perniciosa conversión de la necesidad en virtud –que hace de problemas de difícil resolución en el corto plazo lo deseable como objetivos–, lo cierto es que los gobiernos son un terreno de disputa de proyectos en el que la derecha actúa sutil y abiertamente y con preocupante eficacia.

Mientras que lo social se mantiene en la discusión política, en los gobiernos que más se ajustan a la lógica posliberal, o que la adoptan imperceptiblemente, lo económico tiende a autonomizarse de la política. Las decisiones económicas fundamentales son tomadas por funcionarios gubernamentales y representantes de grupos empresariales con capacidad de presión. En los hechos, funciona o tiende a funcionar como un *partido transversal* en el que empresarios y miembros de partidos opositores a la izquierda deciden al margen de la institucionalidad democrática, al margen de la opinión del partido que gobierna y de las bases sociales populares de la izquierda. La influencia del poder económico capitalista y de la derecha que lo representa es mucho mayor que su disminuido peso electoral.

Algunos de estos hechos políticos son cuestionados puntualmente como inexplicables decisiones o prácticas de los gobiernos, sin advertir que son prácticas políticas necesarias e inherentes al modelo posliberal. Este modelo económico exige un modelo político funcional. Si en el plano económico se prioriza la acumulación privada, o en el mejor de los casos se persigue la equidistancia entre el interés capitalista y los intereses populares, el gobierno no puede admitir, y menos promover, la activa participación popular para hacer efectivos sus intereses, por cuanto esto implica afectar privilegios capitalistas; tiene que apelar a la negociación cupular para manejar el conflicto. Esto supone que necesitará, de una parte, reducir la influencia del partido en las decisiones gubernamentales si, guiado por su programa, éste discrepa con esas decisiones; y, de otra parte, el gobierno necesitará atenuar o controlar la participación independiente de las organizaciones sociales, que son su propia base social. De manera

e instituciones financieras) menos ostensible que los explícitos acuerdos formales con Estados Unidos establecidos, por ejemplo, por Uruguay y Brasil. Esta sumisión no tan visible formalmente exige una concepción mucho más amplia acerca del antiimperialismo. En la cual, necesariamente, tiene que estar presente el rechazo a la intervención militar en Haití (con tropas de Brasil, Uruguay y Bolivia, entre otros países) y el rechazo a la participación conjunta con Estados Unidos en maniobras militares.

inversa, un gobierno que esté dispuesto a afectar privilegios capitalistas y oligárquicos apelará a la participación popular. No hay dualidades viables en el mediano plazo (que cada vez es más corto) entre lo económico y lo social, ni entre lo económico y lo político.

Si predomina la primera situación, antes descrita, es pertinente preguntarse cuándo la representación del interés empresarial llega a ser determinante en la orientación de los gobiernos y, en consecuencia, cuándo éstos dejan o pueden dejar de ser *orgánicos* a las mayorías populares y a los verdaderos intereses nacionales que la izquierda debe representar, aunque se mantenga un lenguaje de izquierda en los discursos.

4. Dirección y ritmo de los cambios

El proyecto de izquierda, en las circunstancias actuales, está en disputa en el seno de los heterogéneos partidos y en los gobiernos. Esta disputa comienza por el tema de la dirección de los cambios, que no debe ser reducida a los ritmos del cambio.

Empero, es frecuente que en el debate de izquierda la dirección del cambio sea subsumida a los ritmos del cambio esgrimiéndolo como una forma realista de asumir las limitaciones del presente, de lo cual es inferido el gradualismo. En efecto, muchos cambios fundamentales tendrán que ser paso a paso. Pero no es lo mismo dar los pasos en la dirección de: a) satisfacer las necesidades materiales y culturales de las mayorías sociales; una radical redistribución del ingreso con un amplio sentido igualitario; recuperar la propiedad pública de la riqueza social para destinarla a esos fines; transferir poder económico a las mayorías, y construir poder social para empujar en esa dirección y para defender los cambios, que: b) satisfacer las exigencias de los beneficios privados con todo lo que implica en el fortalecimiento de su poder económico y político. La vertiente de izquierda que adhiere al *neodesarrollismo* cree que hay que pasar antes por esta segunda dirección de “desarrollo” capitalista para, recién en una etapa siguiente, emprender las tareas de la primera opción; en esta sucesión, a ella no se llegará.

Precisamente por las condiciones reales en las que se actúa, por la intensificación y aceleración de las perversas exigencias del capital internacional sobre América Latina, la izquierda ya no puede eludir sus

definiciones anticapitalistas y antiimperialistas. Esto está lejos de ser una discusión doctrinaria o una opción utopista arbitraria, sino que es una necesidad imperiosa para la sobrevivencia de vidas y países. La “alternativa posliberal” conduce a aumentar la capacidad expropiatoria del capital, con la concomitante ampliación de la desigualdad (aunque disminuya temporalmente la extrema pobreza); a una más intensa depredación de nuestro continente, que redundará además en la extensión de la miseria. Defender nuestros territorios y recursos naturales, como hacen hoy los movimientos indígenas y afrodescendientes, es una lucha anticapitalista radical que constituye un inmenso tributo a la vida humana y planetaria. Es tan sólo un ejemplo de las formas concretas que adopta el anticapitalismo.

Pero los objetivos anticapitalistas no están claramente asumidos por muchos de los que en el campo de la izquierda luchan contra la barbarie, pues se la atribuyen al neoliberalismo disociándolo del capitalismo: cuestionan los “excesos” del capital pero no al capital, no obstante que su reproducción actual no puede ser otra.

Al calor e influjo de la transformadora experiencia venezolana hoy vuelve a discutirse sobre el socialismo, signo de la potencialidad de cambio que el presente contiene y de enorme importancia para proyectarla, trátase de un espejo empañado o más diáfano²⁴. Sin embargo, debe advertirse que hay quienes declaran su adhesión al socialismo pero no se oponen ideológica ni estratégicamente al capitalismo, lo que en la práctica es inviable. Y comienza a difundirse la idea del *socialismo del o para el siglo XXI* exclusivamente como un asunto ético y democrático. En lo cual pareciera prevalecer el rechazo al “socialismo realmente existente” del siglo XX antes que la reafirmación del proyecto emancipatorio, que debe ser ético y democrático, pero no puede ser sino anticapitalista. Un neo-socialismo del siglo XXI que sea anti-neoliberal pero no sea anticapitalista –y máxime en América Latina– sería la reedición, como farsa, de aquellos “socialismos antiliberales” que fueron formulados cuando el capitalismo aún contaba con márgenes amplios de absorción de sus contradicciones, que ni siquiera tiene hoy en el centro del sistema. Es significativo que algunos de los neo-socialistas excluyan a Cuba

24 Debo esta metáfora a Adolfo Sánchez Vázquez, de un texto escrito hace casi cuarenta años pero de gran vigencia: *Del socialismo científico al socialismo utópico* (1971), México, Era (Serie Popular), 1975.

de su horizonte analítico, no obstante que es la única revolución viva y en permanente recreación de su construcción socialista.

Los objetivos anticapitalistas no son, como dijimos, tan sólo una preferencia doctrinaria sino una necesidad para la viabilidad de nuestra región. Pero la necesidad histórica racionalmente fundamentada no basta para que se produzca el cambio, ni siquiera por desearlo. Se necesita construir la fuerza social y política suficiente para cambiar las relaciones de poder.

5. Instituciones, participación y poder social

El problema de las instituciones ha cobrado centralidad en el debate y en la acción política de masas: como rechazo y también como afirmación. Rechazo a las instituciones que bloquean la posibilidad de cambios a través de elecciones (sistemas político-electorales excluyentes o fraudes), o que atan de manos a los gobiernos de izquierda para iniciar transformaciones. Al mismo tiempo, al influjo de la experiencia venezolana principalmente, existe un interés afirmativo por las instituciones que, al transformarse, constituyen poderosos instrumentos de cambio. La importancia que se les reconoce en uno y otro sentido es tal, que el tema de Asambleas o Congresos Constituyentes aparece hoy como un prioritario requisito para el cambio.

Signo de los nuevos tiempos políticos es que la crítica al Estado liberal, oligárquico y excluyente, ha trascendido del ámbito teórico-académico a la práctica social y política: se hace la distinción entre *gobierno* y *Estado*, lo que representa un avance respecto a las posturas que se centraban exclusivamente en la oposición a los gobiernos; se rechaza que el Estado liberal se arroge la soberanía y se erija como un poder autónomo, por encima y separado de la sociedad y, contrario a ello, se reivindica a la sociedad como depositaria de la soberanía y origen *constituyente* del Estado; se critica la democracia liberal que, tras el acto eleccionario, expropia la soberanía de la ciudadanía y la delega en las élites partidarias elegidas para la función legislativa o ejecutiva del llamado *poder constituido*, frente a lo cual se reivindica una democracia participativa.

El objetivo refundacional de las Constituyentes –que el Estado exprese y represente a las grandes mayorías excluidas y sea eliminada la contradicción entre lo jurídico-político y lo social– ha inducido a fijar

la atención principalmente en la relación sociedad-Estado (que algunos traducen como la relación poder *constituyente*-poder *constituido*). Suele perderse de vista que esa relación da cuenta de una correlación de fuerzas sociales y políticas que no se origina en el marco jurídico sino en relaciones económicas y sociales más allá de la institucionalidad. Las instituciones cristalizan o fijan esa correlación de fuerzas sociales para perpetuarla, pero el poder relativo de clases y grupos sociales trasciende al Estado. Esto es evidente en el caso de las clases dominantes, y por ello hay quienes aluden a *poderes fácticos* para escapar de aquella reducción analítica (constituido-constituyente). Empero, esta corrección aún deja sin resolver el modo como se piensa el *poder social popular*, que no se reduce a la relación con el Estado. El reduccionismo institucionalista tiene consecuencias políticas.

Para que las Constituyentes transformen la concepción y el contenido de lo público tienen que ser *punto de llegada* de la gestación de una potente fuerza social y política popular, tanto para imponer los nuevos contenidos como para impedir que la *agenda* popular pueda llegar a ser administrada por la derecha (como ocurrió en 1997 en Ecuador y es un riesgo actual en Bolivia). La convocatoria a una Constituyente puede desencadenar la movilización política (como ocurre actualmente en Ecuador); mas debe permanecer activa para que la Constituyente se convierta, a su vez, en *punto de partida* para las transformaciones: porque la igualdad y la justicia no se decretan. En Venezuela, la Constitución de 1999 comenzó a aplicarse efectivamente después de que el pueblo derrotó el golpe de 2002, y porque el gobierno de Chávez está decidido a emprender esos cambios con el pueblo movilizado.

Debe tenerse en cuenta, además, que los principios refundacionales del nuevo orden constitucional pueden convertirse en letra muerta si no se transforman las bases materiales que le dan sustento: la transformación efectiva de las formas de propiedad, una radical redistribución de la riqueza, soberanía sobre los recursos naturales, destinar los excedentes para beneficios colectivos y no privados, etcétera. El nuevo marco legal puede ser un poderoso instrumento para llevarlo a cabo, pero no es condición suficiente para que ocurra²⁵. Añadiría otra forma de dualidad a las ya comentadas.

25 En Ecuador se cuestiona si el proyecto refundacional constituyente es viable manteniendo la dolarización de la economía. Véase: Pablo Dávalos, "Ecuador: el debate prohibido", ALAI-AMLATINA, 4 de mayo de 2007.

La relación entre cambios institucionales y participación es consustancial al proyecto de cambio: participación para llegar a cambios institucionales y, al mismo tiempo, instituciones que promueven la participación. Pero también el tema de la participación requiere de algunas precisiones.

Para empezar, debe aclararse cuál es el tipo de participación en la que se piensa: participación para decidir, o “ser parte” sólo para legitimar lo que deciden otros. Las clases dominantes también promueven la participación, pero para el control social (sobre la sociedad) con legitimidad, en una variedad de formas que integran a los dominados a los valores dominantes: desde la “democracia industrial” en la que los trabajadores “opinan” sobre la producción y la organización del trabajo para elevar la productividad en armonía con los objetivos empresariales, las “consultas” de opinión pública, las “consultas” a los consumidores de bienes y servicios, etcétera. Es decir: una participación que sólo puede optar entre lo existente, determinado por otros y sin facultades para modificarlo (en ello radica el interés del Banco Mundial por funcionalizar los presupuestos participativos).

La participación verdaderamente democrática es la que **decide**; ésta tiene atributos emancipatorios (de izquierda) en tanto devuelve a los dominados la potestad de ejercer y desarrollar las facultades humanas que les fueron enajenadas. Introduce tres órdenes de problemas: en qué instancias se efectúa la participación, con qué permanencia y con cuáles facultades para incidir en las decisiones públicas. En otras palabras, si como “poder constituyente” sólo se activa para crear o modificar instituciones y normas mediante mecanismos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, o si decide continuamente sobre los contenidos y orientaciones del Estado. Por lo demás, los sistemas representativos liberales que en América Latina incluyen excepcionalmente esos mecanismos de democracia directa no eliminan la representación elitista.

El ámbito local permite la participación más intensa y permanente con base territorial, así como los ámbitos sectoriales por actividad. Pero es una participación fragmentada y de objetivos y perspectivas parciales, no suficiente para crear la mirada más universal sobre los problemas comunes de toda la sociedad. Para estos fines colectivos más vastos son necesarias instancias de encuentro y decisiones comunes que en términos prácticos requieren mecanismos de representación, tanto con relación a la gestión administrativa como a las decisiones políticas y legales.

Observamos que hoy se plantean como contrarias la participación y la representación, porque se asume por “representación” la liberal conservadora de la “democracia existente”, en la cual las élites deciden por sí y ante sí. Negar en general la representación para deslindar del elitismo liberal ensombrece la comprensión de un asunto fundamental: que un proyecto participativo debe elaborar una concepción alternativa de la representación como parte inherente al mismo. Al respecto, no existen fórmulas alternativas consagradas y quizás no pueda haber una fórmula común para todos los países, en lo que la izquierda tendrá que aportar su originalidad creativa. En Bolivia, por ejemplo, las formas de participación de las mayorías populares son comunitarias y entran en contradicción con la lógica liberal de representación basada en el individuo. En Ecuador se rechaza la “partidocracia”, mas no se ha creado todavía una idea alternativa de participación y representación. En Venezuela, donde más enfáticamente se contraponen participación a representación, al menos verbalmente, el proyecto de Poder Popular Comunal propuesto por Hugo Chávez (17 de enero de 2007) concibe una intensa participación desde la base para la gestión, vinculada a los distintos niveles ejecutivos de gobierno, e incluye asimismo ideas de representación en Consejos Comunales y una Confederación Comunal; sin embargo, todavía no queda claro cómo esa organización participativa permanente se vincularía o expresaría en los ámbitos de decisión legislativa y política. En Cuba, por su parte, se ha ido perfeccionando un sistema político de Poder Popular altamente participativo y a la vez representativo en todos los niveles de la sociedad (territorial, sectorial y ciudadano), que establece espacios para su convergencia y para la universalización del interés común como ciudadano del socialismo. Los principios de la representación son el mérito social del representante, la representación bajo control y la revocación inmediata si así lo deciden los representados, es decir, es una representación radicalmente alternativa. Y merece ser estudiada con atención.

Una nueva concepción sobre la participación-representación también debe hacer frente a la tensión entre descentralización y centralización. Pues es menester reconocer que, sobre todo en las fases iniciales, algunos cambios sólo pueden impulsarse si se concentran recursos y energías. Es aquí donde el liderazgo político individual y colectivo puede jugar un gran papel para superar las inercias, los bloqueos desde las propias estructuras gubernamentales, para arbitrar diferencias y conflictos. Este papel reconocido al liderazgo no implica

necesariamente formas políticas “populistas” como suele trivializarse. Pero, más allá de los aciertos de la conducción (y porque no todos lo son), al mismo tiempo tienen que existir formas de regulación que eviten la burocratización.

Es el gran tema de las *mediaciones* para incidir y decidir en el ejercicio del poder, que cobra mayor relevancia en el presente dado que los contenidos del proyecto de cambio están en disputa.

Pero la gestación de fuerza social y política para el cambio va más allá de la participación por los canales institucionales creados. La burguesía dirige y domina dentro y fuera de las instituciones, e incluso prescinde cada vez más de ellas. Sus propios partidos pierden relevancia frente a la acción directa del capital a través de sus corporaciones empresariales, sus medios de comunicación y hasta las cúpulas conservadoras de la Iglesia, que actúan como fuerzas de choque antidemocráticas y expropiatorias; o a través de sus operadores políticos extrapartidarios y sus intelectuales, criollos y transnacionales, que actúan más sutilmente pero con gran eficacia. Es lucha de clases en todos sus términos y que se libra en sus propios terrenos. En éstos, los sindicatos urbanos y rurales, las organizaciones campesinas e indígenas, estudiantiles, docentes, y otras organizaciones populares son los protagonistas decisivos. Este es, también, poder social popular.

Y dada la ofensiva del capital, puede llegar a ser mucho más decisivo políticamente que otras formas de participación, aunque no son mutuamente excluyentes ni sustituibles²⁶. Suele ocurrir, empero, que la izquierda que gobierna con su mirada enfocada en lo institucional relega a un segundo plano el papel de las organizaciones sociales independientes en el proyecto de transformación. Cuya independencia de acción es necesaria, además, para hacer frente a la dualidad gubernamental ya comentada: no es “contra los gobiernos de izquierda”, sino contra el poder del capital que se impone también a través de los gobiernos. No es fortuito que haya voces conservadoras incluso desde los gobiernos y los partidos que claman por convertirlas en sus “correas de transmisión”²⁷.

26 En Uruguay, el proyecto de izquierda es defendido y sostenido en buena medida por las organizaciones sindicales y sociales independientes y es la principal forma de participación popular para enfrentar a la derecha. Igualmente en Colombia, la participación es primordialmente social (universitarios, sindical, indígenas y afrodescendientes), y discurre de manera paralela a la gestión municipal, escasamente participativa.

27 La mayoría de la dirección de la CUT de Brasil consiente la pérdida de independencia.

Sustrato de todo lo anterior es el debate amplio de las ideas, condición *sine qua non* para el avance o el rescate del proyecto de izquierda: es el que proporciona los insumos a la participación para decisiones sustantivas, y el que puede ampliar los horizontes de lo deseable y lo posible. En los tiempos actuales, resulta todavía más necesario para desenmascarar la ofensiva ideológica de la derecha sobre la izquierda. Para lo cual es necesaria una discusión que apunte a la explicación más que a la adjetivación, como tarea política-pedagógica que además permita superar la esterilidad de muchas discusiones de izquierda. En este fundamental terreno político, los intelectuales –particularmente los profesionales– cargan con buena parte de la responsabilidad: el *pensamiento crítico* no está a la altura de la potencialidad de cambio del momento. No lo están las universidades, que siguen siendo caja de resonancia del pensamiento conservador desde sus mismos planes y programas de estudio, sus criterios de evaluación-pertinencia, las relaciones laborales y sus déficit democráticos más allá de las formas de gobierno. Empero, no menos dañino es el antiintelectualismo de muchos dirigentes de izquierda, cuyo pragmatismo es presa fácil de las ideas de la derecha, siempre presentadas como “un traje a la medida” para las necesidades del momento.

6. La izquierda necesaria y el partido

La izquierda necesaria es mucho más que el partido, pero éste está llamado a cumplir un importante papel en la construcción de la izquierda necesaria. Como voluntad colectiva organizada el partido es un *instrumento* político –no un fin– fundamental para construir una visión nacional y estratégica, para contribuir con los procesos de organización y conciencia popular, impulsar las luchas sin suplantárselas y contribuir a su articulación.

Los partidos que dicen representar el proyecto de izquierda están lejos de ser este instrumento en la mayoría de los países, pero la necesidad del partido es irrecusable. En consecuencia, el rescate del proyecto de izquierda debe comenzar en el partido mismo. La diferencia con otros períodos de nuestra historia es que las exigencias son ineludibles y los tiempos mucho más cortos, tanto por las necesidades mayoritarias como por la ofensiva del capital; son estas responsabilidades las que interpelan la razón de existencia misma de los partidos que se autodenominan de izquierda. La

unidad política tiene que ser replanteada pues sigue pendiente la unidad de todas las expresiones populares, que es prioritaria también para ganar gobiernos, y para imprimirles un rumbo transformador.

En este sentido es que cambia la relación necesaria entre el partido y el gobierno. Ésta viene discutiéndose desde que se conquistaron los primeros gobiernos municipales. Los gobiernos siempre han reclamado autonomía a nombre de la eficiencia de la gestión para no estar férreamente sometidos a las decisiones partidarias y sus tiempos. A la máxima de “gobernar para todos” se le atribuía un contenido implícito pues se daba por supuesto que el gobierno encarnaba el programa de transformación a favor de las mayorías. Esto no ha sido así en todos los casos y puede serlo aún menos en varios. Y más que la autonomía del gobierno respecto al partido, lo que ha ocurrido es que el partido ha sido disciplinado por el gobierno. Esto es problemático, pues está demostrado que, en varios países, no es la eficacia de gestión la cuestionada sino su dirección.

Por lo que el partido debe recuperar su función estratégica y la efectiva representación política de los intereses populares; al no hacerlo vuelve a acusar crisis de representación. Desde esa transformación propia debe también influir sobre el gobierno para que reintegre la eficiencia de la gestión en la eficacia en el cumplimiento de los objetivos; de manera directa, pero también promoviendo la ampliación de las instancias de mediación en las que se expresan los intereses mayoritarios. Y para que éstos se expresen, debe promover la más amplia organización independiente de la sociedad y contribuir a la maduración de su conciencia, que es crítica por definición.

Las señaladas no son tareas novedosas para un partido de izquierda. Pero han sido abandonadas o nunca asumidas al convertir al partido en un mero instrumento electoral.

7. Entre el ser y el deber ser, un balance abierto

Las experiencias de gobiernos nacionales de estos años arrojan luces y sombras respecto a su voluntad o capacidad para generar el cambio: con ya demostrada decisión en unos países (Cuba y Venezuela), con signos alentadores (Bolivia), con signos contradictorios (Uruguay), con posibilidades

inesperadas (Ecuador), para empezar a gestar (Nicaragua) y elocuentes alejamientos (Brasil).

A menos que se acepte que los símbolos históricos de izquierda pierdan todo sentido hasta que no representen nada para nuestros pueblos, hay que decir con claridad que por sus definiciones o realizaciones actuales no todos son gobiernos “de izquierda” y algunos no es seguro que *lleguen a ser de izquierda*.

Asumir, como lo hacemos, que son procesos de y en construcción, que están en distintos momentos, no significa aceptar que “el movimiento lo es todo”; es decisiva su dirección.

La derecha, por lo pronto, ha puesto todos sus recursos económicos, políticos, militares y simbólicos para definir esa dirección. Por eso digo que la realización de los objetivos de izquierda está en disputa: hoy por hoy los está disputando la derecha. Queda por saber si las fuerzas que aspiran a la igualdad y a la emancipación humana los disputarán efectivamente. Por esto el balance está abierto.

No consentir el optimismo ciego ni el pesimismo resignado es una opción política, y al mismo tiempo es una definición intelectual. Porque más allá del pesimismo de la razón que pueda asomarse, riguroso será el análisis que reconozca que en América Latina el árbol de la vida es sorprendentemente frondoso.

Los desafíos del pensamiento crítico (2007)*

Me siento muy honrada por esta invitación, que me permite participar de esta manera en la celebración del aniversario de CLACSO.

Cuarenta años de CLACSO, cuarenta años de América Latina. Es el tiempo estudiado por la hoy llamada historia reciente, que se ha centrado en la búsqueda de memoria y verdad sobre este período latinoamericano. Y creo que efectivamente habría que incorporar, como un aspecto destacado de su estudio, qué ha pasado con las ciencias sociales y los intelectuales, cuál ha sido su papel en esta historia reciente, con tantas sombras y, también, con maravillosas luces.

Estos cuarenta años ya son más que los “treinta dorados” de la posguerra, que desde el capitalismo central dieron fisonomía a buena parte del “siglo XX corto” y a su producción intelectual. ¿Qué han significado estos cuarenta años, trágicos, en América Latina? No se puede hacer un balance lineal, pero me parece que, esquemáticamente, podríamos decirlo así: hace cuarenta años, las ciencias sociales lograron colocarse en su tiempo, anticipando tendencias; ahora están, todavía, detrás de su tiempo. Desde luego, hay excepciones con extraordinarios aportes. Pero, en conjunto, las ciencias sociales no están a la altura de las necesidades de estos tiempos.

Hace cuatro décadas, en América Latina maduró una fundamental ruptura epistemológica respecto al pensamiento dominante, un verdadero aporte de nuestra región para las ciencias sociales, porque aportó significativamente al conocimiento del funcionamiento del sistema

* Conferencia en el 40º aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Bogotá, 25 de octubre de 2007. Publicada en *Periferias, Revista de Ciencias Sociales* Año 11, núm.15, Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Segundo semestre 2007; en *Contexto Latinoamericano* núm. 8, México, Ocean Sur, 2008; y en *Cuadernos de Nuestra América* núm. 41, Vol. XXI, La Habana, Centro de Estudios sobre América, enero-junio 2008.

mundial. Me refiero a lo que, con imprecisión, se denomina teoría de la dependencia, que tuvo antecedentes fundamentales, dos décadas antes, en la obra del maestro de todos nosotros: Sergio Bagú.

El tiempo ya transcurrido nos ha ofrecido muchos elementos de comprobación teórico-histórica, lo que en términos biográficos no deja de ser impactante.

Cuando en 1969 Ruy Mauro Marini publicó *Dialéctica de la Dependencia*, fue denostado por “excesos exogenistas”, por mirar nuestra región prioritariamente desde su lugar en la reproducción del sistema mundial. De eso ya había sido acusado Bagú en la década de los cuarenta, en pleno desarrollismo, por su libro *Economía de la sociedad colonial*, que tuvo que esperar cincuenta años para volver a ser publicado. En el caso de Ruy Mauro, fue cuestionado, particularmente, en aquellos países donde existían o todavía sobrevivían elementos de un Estado de Bienestar, porque parecía un delirio teoricista hablar de la *sobreexplotación*, de que fuera posible que en economías dependientes de exportación llegara a ser cada vez más irrelevante el ingreso de los productores, importando sólo el de los compradores en el centro del sistema, y que el precio de la fuerza de trabajo en nuestra región fuera a disminuir hasta llegar a estar por debajo de los niveles de subsistencia. Y así ocurrió. Del mismo modo que había ocurrido en los cuarenta, a fines de los sesenta estas elaboraciones teóricas tenían implicaciones políticas.

En la década de los noventa se pagó un precio muy alto, en términos políticos e ideológicos, por haber desechado el análisis teórico que abrevaba en las profundidades del proceso histórico, en la configuración del sistema mundial y en su reproducción, y por no haber sabido analizar mejor las coyunturas como parte de ese movimiento de más larga duración, de sus tendencias.

Hoy estamos en una América Latina nueva. ¡Vaya si lo es!, recorrida por un espíritu bolivariano y martiano, y vuelve a plantearse el problema del socialismo como necesidad histórica, como imprescindible horizonte de cambio. Por todo esto, existe la percepción de que este es, también, el tiempo del pensamiento crítico.

Sin embargo, creo que corresponde preguntarse: ¿qué tan crítico es el pensamiento crítico, hoy?, y ¿de qué se habla cuando se dice “pensamiento crítico”?

Por pensamiento crítico suele aludirse al rechazo al neoliberalismo por sus efectos devastadores de vidas y países. Este rechazo da cuenta de un estado social y político, y sin duda anímico, de sentido crítico, pero que no necesariamente implica el triunfo de la crítica en la producción de conocimiento. Porque en este ámbito, lo crítico no se refiere solamente al cuestionamiento moral, sino también, y fundamentalmente, a la capacidad de develar lo encubierto.

Decía que, en el presente, las ciencias sociales están, todavía, detrás de su tiempo. Esto que vivimos en América Latina, el torrente de energía social movilizada, que sacude, interpela, reclama con vehemencia por cambios, no se expresa de manera correlativa en los ámbitos de producción del conocimiento, en las instituciones académicas, en los programas de estudio, en la formación teórica. En ellos siguen cristalizadas las concepciones que dieron justificación al orden social que hoy se cuestiona en las calles, en los llanos y montañas. Es verdad que nuestras instituciones se han hecho mucho más receptivas a las temáticas que han levantado, con sus luchas, los diversos sujetos sociales populares. Pero esas temáticas, que alimentan foros y coloquios de gran valor, no tienen una expresión epistémica equivalente. Todavía hay una disociación profunda entre el auditorio y el aula, e incluso, entre la intención del investigador y sus fundamentos analíticos.

Los nuevos tiempos latinoamericanos no son, aún, de contrahegemonía efectiva. El pensamiento conservador de los dominantes todavía sigue demarcando el terreno conceptual desde donde se discute el presente y, lo que es muy grave, desde donde se están pensando las alternativas.

Es que los tiempos actuales son de confusión. Porque se dice, y se cree, que el capitalismo latinoamericano se estaría moviendo, por un ajuste de sus propios engranajes, a corregir los excesos del neoliberalismo e ingresando a un estadio posliberal. El movimiento pendular estaría confirmándose en las urnas. Todo un alivio... y un desconcierto, porque los latinoamericanos no sabemos mucho de suaves oscilaciones, sino de violentas trepidaciones.

Los voceros de la teoría pendular nos han tomado de la mano para transitar desde el desprestigiado “pensamiento único neoliberal” a la “era progresista”, a la alternativa posliberal que encarnaría el espíritu crítico del presente. Con metamorfosis discursivas han reconquistado legitimidad.

Con el beneplácito de muchos intelectuales, la clase dominante ha logrado imponer la interpretación de la historia del capitalismo como un

constante movimiento pendular de ajustes y reequilibrios, de sucesivas correcciones de anomalías o excesos que lo devuelven a sus equilibrios, y a su normalidad como “progreso”. En esta lógica, las oscilaciones pendulares siempre son cambio para regresar, es decir, siempre se está dentro del capitalismo. Después de cinco siglos, con un breve lapso de coexistencia con otro sistema, esta proclamada capacidad de reajuste y reequilibrio del capitalismo lo hace parecer con renovadas posibilidades para enmendarse, y no como un sistema histórico senil.

Ese movimiento pendular explicaría que se pasara del mercantilismo del siglo XVIII al liberalismo económico en el siglo XIX; que con una oscilación en sentido contrario se pasara, desde finales del siglo XIX, del liberalismo económico al proteccionismo, que habría durado hasta la década de los setenta del siglo XX; que en esa década de 1970 se pasara del proteccionismo al neoliberalismo, y que desde finales de la década de 1990 se estaría entrando a un nuevo posliberalismo para corregir los excesos del neoliberalismo.

Cada uno de estos movimientos habría sido la respuesta necesaria y, por lo tanto realista –de lo cual derivaría su moralidad– para corregir excesos y reestablecer la salud del sistema; habrían sido todas, por lo tanto, reformas inevitables.

Al devolverle la salud al sistema, cada una de ellas fue en su momento la alternativa “progresista”, precisamente por “necesaria”, “moral” e “inevitable”. Aunque, en algunos casos, se haya tratado de una “medicina amarga”.

En efecto, en la lógica del péndulo, el neoliberalismo ya no es el fin de la historia – eso ya lo admitieron– pero se reafirma al capitalismo como historia sin fin.

Ahora bien: desde aquella década de 1860, cuando la crítica marxista al capitalismo y su objetivo político para superarlo van acrecentando su influencia, los ideólogos del capitalismo agregan, a la teoría del péndulo, el juego de oposición en tríadas. Porque para preservar al capitalismo, además de tener que cuestionar una modalidad de reproducción que lo estaba desequilibrando, necesitaban al mismo tiempo enfrentar al marxismo que quería destruirlo.

Frente a los dos factores de desestabilización, la corrección burguesa se presenta como la “tercera posición”. Cada momento de crisis real o potencial del sistema cuenta con su tercera vía: la solución *razonable* frente a los dos extremos desestabilizadores. La lógica de la tríada hace aparecer

al “nuevo tercero” como el “centro progresista”, el que permite superar el estancamiento y retomar el camino del progreso.

Cada tercera vía burguesa, para imponerse, desarrolla intensos debates al interior mismo de las clases dominantes para convencerlas de la necesidad de ese cambio, y desde luego hacia el resto de la sociedad para construir un nuevo consenso. Cuando este consenso aún no se concreta, la *batalla de ideas* entre los dominantes parece enfrentar, como si se tratara de enemigos, a quienes son igualmente defensores de la preservación del capitalismo. Los argumentos a favor del cambio de estrategia adoptan, por momentos, un dramatismo tal, que sus promotores quedan mimetizados como acérrimos opositores de las fuerzas que dominan y de sus métodos, pudiéndoseles confundir con la oposición de los dominados. El reclamo por *cambios* y contra el *statu quo* les confiere a sus promotores, invariablemente, un aura progresista. Son “los progresistas”, no importando el contenido particular del cambio, ni que su alternativa sea una reacción para conservar al capitalismo. Es decir, una respuesta *conservadora* al margen de las adhesiones doctrinarias en cada momento.

Una vez impuesto el nuevo mecanismo de reproducción capitalista, las ideas *normativas* (deber ser) de los “combatientes progresistas” en turno se presentan como *racionalización descriptiva* (de lo que es); son socializadas como límite de lo real y lo posible; y de este modo son entronizadas como ideas dominantes, las renovadas ideas dominantes.

Todas las tríadas formuladas desde el capitalismo tienen en común el rechazo al marxismo, en eso todos los *nuevos progresistas* estuvieron siempre de acuerdo. Desde la década de 1920, el anti-liberalismo se presentó como el opuesto simultáneo al *laissez faire* y al *marxismo-comunismo*, oponiendo a ambos un capitalismo con intervención del Estado y reformas sociales con fines de control político; sus diversas versiones ideológicas coincidieron en establecer como sujeto ideal del “nuevo centro” al “socialismo responsable”, fuera del tipo social-liberal o socialdemócrata. En las décadas de los treinta y los cuarenta, buscando recuperar su prestigio, el liberalismo se presentó como el opuesto simultáneo al *totalitarismo fascista* y al *totalitarismo comunista*, como una tercera posición libertaria y democrática y, por lo mismo, progresista; desde 1945 Estados Unidos se adjudicó la encarnación del anti-totalitarismo. A partir de la década de 1970, el neo-liberalismo impuso su hegemonía presentándose como el opuesto simultáneo a las dos “perver-

siones colectivistas”: el *Estado capitalista de Bienestar* y el *comunismo*, a los que se oponía como la única alternativa modernizadora. La versión para América Latina era contra el *populismo burgués* y contra el *comunismo*. Esa vez sí que se presentó como “una medicina amarga pero necesaria”. Ni modo, el progreso a veces tiene que doler... Por eso la de ahora, la tercera vía posliberal, se presenta como bálsamo para los magullones neoliberales. Y al mismo tiempo, contra la “irresponsabilidad populista”.

Qué tan dulce o tan amarga fue cada nueva tercera vía para conservar al capitalismo, dependió de la fase histórica del capitalismo. Porque sucede que, lo que la teoría del péndulo no dice, es que cada movimiento de ajuste y corrección generado por el propio sistema (siempre presionado por las contradicciones sociales) se hizo para lograr mayores ganancias –ese es el progreso–. Y que con cada cambio de mecanismos de reproducción hubo un cambio cualitativo en una mayor concentración y centralización del capital, no un punto de retorno. Los distintos grados de concentración y centralización del capital producen contradicciones de naturaleza e intensidad distintas, y cambia también la capacidad del sistema para absorberlas.

En su fase industrial y de expansión, cuando la ampliación del consumo era funcional a la ampliación de la producción y de la acumulación, los márgenes para una mayor distribución eran mayores. Y desde luego, mucho más, tratándose del centro del sistema, receptor de excedentes de su periferia colonial y dependiente.

Muy distinto es cuando se trata del capitalismo especulativo y rentista, saqueador neocolonial en la periferia ultradependiente. Las contradicciones actuales son tan profundas que resultan incurables, y la medicina tendrá que ser bien amarga. Esto explica que cada nuevo reajuste capitalista tenga que ser cada vez más conservador. Y menores serán los márgenes para variar en los medios de su reproducción.

Cuando la inestabilidad social y política se torna peligrosa, cuando entra en crisis la gobernabilidad, como ha ocurrido en estos años, las alternativas del propio sistema no pueden ser sino simples ajustes tácticos para reforzar el control político. Y esta es, sin lugar a dudas, la naturaleza de la tercera vía posliberal actual: una estrategia política para recuperar control y legitimidad.

Para presentarla como superación de una época, pero sin modificar lo que en ella ha producido tantos rechazos, requiere de una intensa batalla

de ideas. Aquí es donde tenemos que preguntarnos sobre el papel de los intelectuales en general, y de las ciencias sociales en particular.

En los últimos tiempos, y por razones bien loables, cada vez que se escucha la frase “batalla de ideas” se asocia inmediatamente con “pensamiento crítico”. Pero desde hace mucho que los ideólogos de la clase dominante hablan de “batalla de ideas”, así denominan a sus estrategias ideológicas.

Digo bien: “estrategias”. Efectivamente, racionales en su diseño, con sujetos concretos que las ejecutan. Cuando hablamos de estrategias ideológicas surgen inmediatamente las acusaciones de estar padeciendo de “paranoicas teorías conspirativas”.

No hay tiempo ahora para discutir sobre la relación que existe, en la ideología dominante, entre los aspectos inconscientes que se derivan de la posición y el interés de clase, por un lado, y los aspectos conscientes para mantener la dominación, por otro, que establecen diferencias entre la clase en general y sus ideólogos en particular. Pero podemos remitirnos a experiencias bastante conocidas de estrategias que, incluso remando a contracorriente, llegaron a imponer ciertas ideas como las nuevas ideas hegemónicas. Es la experiencia de la Sociedad Mont Pélerin, cuya eficacia estratégica está más que comprobada.

Hayek, su creador y mentor, decía a finales de los años cincuenta, que la batalla de ideas, más precisamente la lucha de ideas (*struggle of ideas*), consiste en generar “cierta idea coherente del mundo en el que se quiere vivir [...] a través de un conjunto de ideas abstractas y generales”. Para que las ideas abstractas y generales incidan en la acción política, es decir, que “hagan políticamente posible lo que parece imposible”, tienen que llegar a ser “de propiedad común, a través de la obra de historiadores, publicistas, maestros, escritores e intelectuales”. Es –dice– un proceso lento de difusión que tarda a veces más de una generación, que no se da “como expansión en un solo plano, sino como una lenta filtración desde la cúspide de una pirámide hacia la base”. Pero esas nuevas ideas “no llegan a la base en su estado de generalidad”, sino que llegarán a conocerse “sólo a través de su aplicación a casos concretos y particulares”¹.

1 Friedrich von Hayek, “Poscriptum”, en *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, 1959.

Por eso Hayek no quería que la Sociedad Mont Pélerin creciera demasiado en el número de miembros, quería que fuera la cúspide de la pirámide, el cónclave de “los mejores talentos para la empresa intelectual de gestar una nueva versión del liberalismo”.

Como se observa, en esa pirámide, las instituciones académicas, los historiadores, publicistas, maestros, escritores e intelectuales –repetiendo el listado de Hayek– se sitúan entre la mitad inferior y la base, como difusores de ideas simplificadas que, ya falsificadas al ser encubiertos sus verdaderos objetivos, se transforman en sentido común, es decir, que se ven como la única representación de casos concretos y prácticos, como él dice. Es entonces cuando la estrategia ideológica triunfa como hegemonía.

Bien. Sucede que esos difusores de ideas simplificadas y falsificadas son los interlocutores habituales del llamado pensamiento crítico. El pensamiento que se define como crítico lo hace como antagonista de esas ideas. Pero al construir su argumentación con referencia a la simplificación y falsificación de las ideas abstractas y generales que dieron forma y justifican al nuevo mundo en el que se vive o se quiere vivir, (sigo usando los términos de Hayek), repito: al no enfrentar aquellas ideas fundamentales, no están haciendo verdadera crítica.

“Los neoliberales dicen...” ¿Quiénes lo dicen? ¿En verdad los ideólogos neoliberales piensan eso que es divulgado como pensamiento neoliberal?

He aquí el papel del discurso como medio para encubrir, para falsificar, y que es tomado como referente del antagonismo supuestamente crítico.

El arsenal discursivo utilizado por la tercera vía posliberal para presentarse como anti-neoliberal utiliza a conciencia esos recursos, precisamente para que su crítica al neoliberalismo no sea tal, pero lo parezca. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente para poder reconstruir con precisión historiográfica la estrategia ideológica posliberal, que está en curso, pero la investigación permite identificar recursos analíticos y discursivos, lugares habituales de encuentro de la cúspide posliberal, por ejemplo, Princeton. También aparecen sujetos, nombres, como Fernando Henrique Cardoso, Enrique Iglesias, Joseph Stiglitz y hasta Carlos Slim, por nombrar sólo algunos.

Tomemos algunos de los ejes del argumento posliberal para verlo con mayor claridad: “El neoliberalismo fracasó porque no resolvió la pobreza”. Pero esos nunca fueron los objetivos del neoliberalismo, sino

elevant las ganancias. Claro, sus divulgadores decían que era para crecer y así resolver la pobreza. “El neoliberalismo es *laissez faire*, fundamentalismo de mercado, Estado mínimo, por lo tanto, derecha es antiestatismo, izquierda es estatismo”. Y, en consecuencia, el neoinstitucionalismo es la tercera vía progresista. Pero el neoliberalismo nunca ha sido Estado mínimo sino un Estado intensamente interventor al servicio del capital aunque se desentendiera de lo social; ni ha sido planteado como ausencia de instituciones. El discurso del “no-Estado” fue planteado por los muchachos de Chicago, los *arditi*, las fuerzas de choque ideológico contra el Estado de Bienestar. Pero la *reaganomics friedmaniana* nunca fue Estado mínimo, fue el activo Estado del gran capital.

Hayek, quien además fue el que bautizó como “neoliberal” al proyecto con que se impondrá el interés del capital sin restricciones, decía en 1959: “El debate no es si debe haber una intervención racional de planificación en la vida económica, sino cuál tipo de planificación [...] El funcionamiento de la competencia no sólo exige una adecuada organización de ciertas instituciones como el dinero, los mercados y los canales de información –algunas de las cuales nunca pueden ser provistas adecuadamente por la empresa privada–, sino que depende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal apropiado, de un sistema legal dirigido, a la vez, a preservar la competencia y a lograr que ésta opere de la manera más beneficiosa posible. No es en modo alguno suficiente que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y de la libertad de contrato; mucho depende de la definición precisa del derecho de propiedad, según se aplique a diferentes cosas”.

Son prácticamente las mismas palabras de Douglass North, con las que los neoinstitucionalistas del Banco Mundial, en la época de Stiglitz, presentan su célebre *Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional* como el programa posliberal que reclama más Estado para el crecimiento y la equidad. Más Estado para dar seguridad al capital, más Estado para eliminar los obstáculos a la inversión y a la apropiación de ganancias, los famosos “costos de transacción”. Y políticas sociales focalizadas, ni más ni menos que el neoliberalismo, pero con un mayor gasto público en ellas. Sólo que ese mayor gasto público, financiado con sistemas fiscales regresivos basados en los impuestos que pagan los asalariados y los consumidores pobres, (no el capital, pues sería un costo de transacción negativo), ese gasto público es transferido a las empresas privadas que son

las que proveen esos servicios. De modo que los pobres financian las políticas focalizadas para los extremadamente pobres, y las empresas ganan con ese servicio. El resultado es que disminuye la extremísima pobreza, pero aumentan las ganancias y hay mayor concentración del ingreso. Estos han sido siempre los objetivos del neoliberalismo.

Pero como “neoliberalismo” era “Estado mínimo”, ese “más Estado” es la superación del neoliberalismo, y sin caer en las perversiones del populismo con sus irresponsables derechos universales... Es decir: la tercera vía. Y si además se parte del supuesto falso de que derecha es antiestatismo e izquierda estatismo, el neoinstitucionalismo es el camino intermedio, el nuevo centro, el nuevo progresismo y, hasta donde nos descuidemos, la nueva izquierda.

El señuelo de este nuevo progresismo es que se opone al discurso ideologizado de la competencia perfecta, pero para volver a Hayek. A aquella concepción amplia del mundo deseable para superar al capitalismo de la posguerra. La de Hayek es una concepción filosófica, económica, social, política, cultural incluso, que él no quería que se le calificara como conservadora porque decía que era una propuesta para el progreso. Pero que es profundamente conservadora.

Podríamos continuar con ejemplos de cómo se construye una alternativa falsa, falseando el objeto al que supuestamente se le hace oposición, con lo cual la hegemonía se sigue ejerciendo pero bajo la forma de pensamiento crítico.

Esto opera, además, porque la lógica de la tríada conduce a la terrible conclusión de que el “enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Con lo cual, basta con que alguien hable mal del neoliberalismo para considerarlo una inspiración.

Esta es una de las perversiones de la tercera vía posliberal, que dice oponerse al neoliberalismo pero utilizando los argumentos del neoconservadurismo, que disocian a la sociedad burguesa del capitalismo. Porque el neoconservadurismo critica al individualismo y al consumismo, pero no se los atribuye al desenfreno de la acumulación capitalista, sino a la pérdida de valores tradicionales, a la irresponsabilidad familiar y social provocada por el Estado de Bienestar, por el sindicalismo, y hasta por la laicidad. Es así que estos nuevos progresistas, dizque anti-neoliberales porque abrevan en el neoconservadurismo, se llevan bien con los valores

conservadores de la Iglesia; les echan discursos contra el consumismo a los que están en extrema pobreza, como si esa fuera la causa de su miseria; justifican la disminución de la responsabilidad social del Estado con un discurso de la corresponsabilidad privada, y hasta de la “paternidad responsable”. Son conservadores, fanáticos buscadores del orden, de la seguridad de la propiedad, entre otras razones, porque no pueden prescindir del individualismo posesivo que da oxígeno a la acumulación capitalista, con todos los efectos de ruptura de la cohesión social que conlleva.

Tal como están planteadas, son falsas sus oposiciones, falsas las opciones, falsas sus alternativas. Y en ninguna está instalada la crítica, ni puede reconocerse en ellas el pensamiento crítico. Porque el capitalismo ya no da lugar a tríadas ni a terceras posiciones, porque sus opciones de “reajustes pendulares” son cada vez menores, si no es que nulas, porque sus contradicciones son cada vez más profundas e incurables.

Y este es uno de los desafíos más importantes para el pensamiento crítico, que no es oponerse a tal o cual política, sino entender y explicar dónde estamos.

Es muy difícil pensarse en una posición liminar de la crisis de un sistema histórico. Y es muy duro tener que pensarlo en la periferia dependiente de ese sistema, destinada a hacerse cargo de los mayores costos de la crisis, que se exhibirá con todo su rigor. Tal vez por esta misma razón, las ciencias sociales latinoamericanas podrían dar cuenta con mayor precisión de la complejidad de este tiempo histórico y sus efectivas alternativas.

Siempre y cuando, claro está, las ciencias sociales fueran capaces de desprenderse de la base de la pirámide adonde las asignan las clases dominantes para su batalla de ideas, y recuperar las alturas que permiten ver horizontes más amplios. Tienen que liberarse del papel de vulgarizadoras y divulgadoras de las ofensivas ideológicas del poder, tienen que hacer rupturas epistemológicas y liberarse de las fantasías conservadoras de los equilibrios capitalistas o de las armonías sociales imposibles.

Para que esto ocurra, el “tercero” siempre excluido tiene que volver a ser reconocido y estudiado. Aunque debe decirse que, por más invisibilizado que se lo quiera, sigue gozando de buena salud en tanto capacidad de analizar las contradicciones capitalistas, porque apunta directamente a su origen: a la concentración y centralización de la propiedad, basada en la expropiación del trabajo ajeno y de las fuentes de vida colectivas. Como teoría en

permanente construcción, el marxismo tiene que enriquecerse y recrearse con el estudio concreto de la realidad concreta y sus tendencias, haciéndose cargo de las incertidumbres que dependen de la voluntad y capacidad de acción de los distintos grupos sociales que disputan o disputarán el devenir de la humanidad.

Y desde luego, un desafío para el pensamiento crítico es no permitir que se falsifique la alternativa “del socialismo del siglo XXI”, que no sea convertido en un cliché al que se le puedan asignar contenidos distintos y antagónicos, neutralizándolo. Un aparente proyecto alternativo encarnación del pensamiento crítico, que sea discurso moral pero no anticapitalista, no es más que burda farsa de los socialismos de comienzos del siglo XIX.

Llama la atención el vendaval discursivo “neo-socialista” que, justamente cuando los pueblos están generando fuerza política e institucional, convoca a que la burguesía protagonice el desarrollo de las fuerzas productivas para que, recién en un segundo momento, quién sabe cuándo, se inicie la verdadera transformación socialista que transfiera el poder económico a la sociedad y construya poder político popular. Porque el neo-desarrollismo es parte de la estrategia de la tercera vía posliberal, que en ancas del gran capital hoy se despliega con toda su fuerza neocolonialista.

En la falsificación de lo verdaderamente alternativo del “socialismo del siglo XXI” podría estar engendrándose otro ámbito de la hegemonía dominante con ropaje de pensamiento crítico.

En suma, el pensamiento que se pretenda o aspire a ser crítico, se tiene que mirar críticamente, y para ello tiene que mirarse en el espejo de la capacidad hegemónica de las clases dominantes.

El debate actual: posliberalismo o anticapitalismo (2009)*

La actualidad de Rosa Luxemburgo

Rosa Luxemburgo tenía razón. Sus cuestionamientos tienen hoy una estremecedora vigencia, pues colocan las grandes preguntas que deben hacerse. La discusión con Bernstein no era táctica. Cuando así se malentendió, como ocurrió en América Latina, se regaron las semillas de la confusión, de las que cosechó y sigue cosechando la derecha.

Rosa miraba más allá de su tiempo, porque pensaba en la larga duración, única temporalidad con la que puede analizarse un sistema histórico. Anticipó el camino que recorrería el sistema capitalista hacia el caos y la barbarie, que sin eufemismos ni catastrofismos hoy ha llegado a poner en riesgo la sobrevivencia de la humanidad y del planeta. Y argumentó sobre la necesidad histórica del socialismo para impedirlo, porque la barbarie actual es de factura humana.

Pero debían pasar varios años para demostrar su verdad. No los ciento diez que nos unen con su libro *Reforma o revolución*, menos. La barbarie no ha comenzado apenas. Porque la euforia que tenía Bernstein en el inicio de la *belle époque* en 1896 terminaría abruptamente en 1913. Vendría la época de la guerra total, como la caracterizó Hobsbawm: un *continuum* de 1914 a 1945 de destrucción humana –dos guerras mundiales, crisis del 29, nazi-fascismo– más de 50 millones de muertos; y de “destrucción creativa” de fuerzas productivas, como decía fríamente Schumpeter. Para que de esas cenizas, carne y dolor, ya purificado por el fuego, emergiera el capitalismo

* Publicado en: Germán Rodas (Coord.), *América Latina hoy ¿reforma o revolución?*, México, Ocean Sur, agosto 2009; en Jairo Estrada Álvarez (Comp.), *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*, Espacio Crítico Ediciones, Bogotá, septiembre 2009; y *Anales* núm. 368, Revista de la Universidad Central del Ecuador, Quito, marzo 2010.

“dorado” que pondría en práctica el programa de reforma social, pensado por Bernstein sobre el dominio bélico de las potencias imperialistas.

Cuando Bernstein murió, en 1932, aunque fue un año antes de que el nazismo triunfara en su patria, no era el mejor momento en ese camino lineal y ascendente de desarrollo que a él lo deslumbraba, sino el de la Gran Depresión. No sé si en su lecho de muerte reconoció lo que había negado contundentemente: las crisis capitalistas. Tuvo razón en que el capitalismo podía reformarse. Pero los años dorados fueron treinta en el centro del sistema, y ya han pasado cuarenta años en los que Bernstein no habría podido explicarles a los europeos por qué bajo su programa de reformas la propiedad del capital no se democratizó sino que se concentró en grados que ni siquiera Rosa imaginaba; por qué regresó el desempleo y el deterioro del ingreso de la clase media; por qué los socialistas liberales a los que él instruyó ideológicamente han perdido más veces las elecciones que los fulgurantes tiempos en que llegaron a gobernar. Quién sabe cómo les explicaría ahora esta nueva gran depresión, que según los expertos del sistema es más rápida en su caída que la de 1929; y que si bien no es condición suficiente para el “derrumbe” del capitalismo, sí es un momento de *colapso*, que esos mismos expertos no saben aún cuánto tiempo durará.

Pasado el tiempo para la verificación histórica de sus respectivas afirmaciones, Rosa tuvo razón en su debate con Bernstein. Pero el socialliberalismo –que Bernstein no creó pero al que le dio una argumentación “de izquierda” con su “revisión del marxismo”– goza de sorprendente salud, y paradójicamente en la izquierda latinoamericana. El logro no es sólo suyo, porque muchos otros ideólogos del capitalismo han trabajado sistemáticamente para actualizarlo e imponerlo como pensamiento “progresista”. Y porque a esos logros ideológicos del sistema, incluso cuando está en crisis, han abonado varios “marxismos”.

Las fundamentales críticas de Rosa Luxemburgo siguen vigentes como preguntas que aún deben ser respondidas. No, quizás, a partir del binomio contradictorio de “reforma o revolución” –que vulgarizado ha inducido a muchos equívocos– sino como “posliberalismo o anticapitalismo”.

No era un debate táctico

Rosa inicia la introducción de su *Reforma o revolución* diciendo enfáticamente que no contrapone la revolución social, la transformación del orden existente, a las reformas sociales, a la lucha diaria por las reformas, por el mejoramiento de la condición de los trabajadores dentro del sistema social y por las instituciones democráticas. Y añade: “Entre las reformas sociales y la revolución existe para la socialdemocracia un lazo indisoluble: la lucha por las reformas es el medio; la revolución social, su fin”¹. Bernstein, a la inversa, renuncia a la transformación social, y hace de las reformas sociales su fin, dice Rosa. No era una discusión sobre medios, sino sobre fines.

El santo y seña del reformismo pragmático fue planteado por Bernstein en 1898, en el artículo “Socialdemocracia y revolución en la sociedad” de la serie *Problemas del socialismo*: “Reconozco abiertamente que para mí tiene muy poco sentido e interés lo que comúnmente se entiende como ‘meta del socialismo’. Sea lo que fuere, esta meta no significa nada para mí y en cambio el movimiento lo es todo. Y por tal entiendo tanto el movimiento general de la sociedad, es decir, el progreso social, como la agitación política y económica y la organización que conduce a este progreso”².

Si no hay un fin, preguntaba Gramsci, ¿hacia dónde se camina? Estaba planteado el tema, de gran actualidad, de si cualesquiera reformas conducen a los objetivos buscados de transformar la realidad en beneficio de los explotados y oprimidos³. Porque, agrega Gramsci, si el *reformismo* establece como único método de acción política aquel en el que el progreso, el desarrollo histórico, resulta de la dialéctica de conservación-innovación,

1 Rosa Luxemburgo, *Reforma o revolución* (1899), “Introducción”. México, Grijalbo, 1967, p. 9.

2 Eduard Bernstein, *Problemas del socialismo*, en el libro compilado por José Aricó titulado *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*, que incluye otros escritos de Bernstein. México, Siglo XXI Editores, 1982, p.75. De octubre de 1896 a finales de 1898, Bernstein publicó una serie de artículos titulada *Problemas del socialismo*. Las críticas que suscitó lo llevaron a exponer con más amplitud esas ideas en el libro *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*, publicado el 14 de marzo de 1899, que es su texto más conocido.

3 Esa interrogante fundamental atraviesa nuestro libro: Beatriz Stolowicz (Coord.), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Bogotá, Ediciones Aurora, noviembre 2007.

¿qué se conserva y qué se cambia si no hay un fin hacia donde se busca llegar? ⁴.

Es que el binomio reforma/revolución implica desde su formulación más abstracta un conflicto, o al menos una tensión entre: a) un cambio de forma (re-forma) que no altera los elementos constitutivos, y sus relaciones, que dan permanencia o continuidad a una estructura o sistema; b) la destrucción-reconstrucción de esos elementos constitutivos y de sus relaciones, que dan lugar a una nueva estructura o sistema.

Decía Rosa, con razón, que: “...en cada período histórico la lucha por las reformas se lleva a cabo solamente dentro del marco de la forma social creada por la última revolución. He aquí el meollo del problema”⁵. Es decir, que las reformas operan en el marco del cambio estructural producido anteriormente. Por ello, hay re-formas que son necesarias precisamente para mantener estable una estructura o sistema, para perpetuarla. También es verdad que ciertas re-formas pueden producir su debilitamiento o inestabilidad si modifican la función o situación de uno o varios elementos respecto a los otros. Es así que hay reformas que sin alcanzar a modificar la estructura o sistema pueden tener una potencialidad revolucionaria: todas aquellas que acrecientan el poder social, económico, político y cultural de los dominados tienen esa potencialidad revolucionaria, pero en tanto ese poder acrecentado se dirija a cambiar el orden dominante existente. Como también es cierto que toda revolución permanece y avanza con reformas. Sólo el análisis histórico-concreto puede dar respuesta a esas distintas posibilidades.

Debe decirse, sin embargo, que en la formulación de Bernstein de que “el movimiento lo es todo” estaba implicado un fin. Eso es así en todo pragmatismo, que nunca es neutro. El fin de Bernstein no era el socialismo –que para él “no significa nada”– sino el de conservar al capitalismo, al que admiraba como fuerza de “desarrollo”. El “movimiento” es el desarrollo del capitalismo con sus eventuales reformas. Como sabía que los capitalistas condicionan la redistribución del excedente a mantener inal-

4 Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel* (edición crítica en 6 tomos), México, Ediciones Era-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1999. Tomo 4. El término *reformismo*, dice Gramsci, es el nombre que el “lenguaje moderno” da a ese concepto que anteriormente se calificaba como moderacionismo político. p.205.

5 R. Luxemburgo, *Reforma o revolución*, *op. cit.*, p.89.

terada su ganancia, con pleno respeto a esos condicionamientos capitalistas planteaba que el eje del programa de la socialdemocracia debía ser el de actuar a favor del “crecimiento económico”, del “crecimiento de la producción y la productividad”⁶. En ese objetivo fundamenta la conciliación de clases. El sindicato, dice, es un necesario “órgano intermedio de la democracia”, y es “socialista” porque promueve el bienestar general y no sólo el interés de sus miembros. Tiene que ser “responsable”, por eso la socialdemocracia no promueve una política que “abotague el sentimiento de responsabilidad social [convirtiendo a] la población en pordioseros”⁷. El sindicato es útil porque disciplina las demandas obreras en beneficio del crecimiento económico: “los trabajadores saben muy bien hasta dónde pueden llevar sus reivindicaciones”. Saben –continúa– que “Un aumento de los salarios que lleve a un aumento de los precios no significa, en determinadas circunstancias, una ventaja para la colectividad, sino que más bien acarrea efectos más dañinos que beneficiosos”⁸. Y han aprendido, dice Bernstein citando a los fabianos Sidney y Beatrice Webb, que la democracia industrial (en la que los trabajadores adoptan como propio el interés del capital) les exige también “renunciar al democratismo doctrinario”, es decir, “al mandato imperativo, a los funcionarios no remunerados, a órganos centrales sin poder, para ganar eficacia”⁹. La tarea de la socialdemocracia es mantener el orden¹⁰.

Bernstein había adherido a la doctrina liberal, y su inspiración eran los profesores de economía neoclásicos en boga. Es con esos argumentos neoclásicos que formula la “revisión” de la teoría de Marx y Engels. Decía que era necesario hacer correcciones a la teoría para hacerla avanzar “desde el punto donde ellos la dejaron”, y de ese modo superar los “errores de la socialdemocracia alemana”. Se presentaba como un *renovador* de las ideas de Marx, que tenían enorme prestigio en la Segunda Internacional. Para tener credibilidad y hacer más efectiva su influencia, utilizó como

6 E. Bernstein, “Prefacio al décimo millar” de *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*, en *op. cit.*, p.101.

7 E. Bernstein, *Problemas del socialismo*, *op. cit.*, p.46.

8 E. Bernstein, *Premisas del socialismo*, *op. cit.*, pp. 214 y 215.

9 *Premisas del socialismo*, *op. cit.*, p. 230.

10 Dice Bernstein: “El socialista no puede valorar satisfactoriamente la actual emigración del campo a la ciudad que concentra las masas de trabajadores, siembra la rebelión y promueve la emancipación política”, *Premisas del socialismo*, *op. cit.*, p. 211.

principio de autoridad su antigua amistad con Engels. Pero comenzó a publicar sus críticas revisionistas en 1896, pocos meses después de la muerte de Engels, que ya no podía responderle. Bernstein admitió que la espera para publicarlas había sido deliberada¹¹. Rosa Luxemburgo asumió la tarea.

Siguiendo a los neoclásicos desde su postulado de equilibrio de mercado, Bernstein negó la validez de la teoría del valor de Marx, y desde allí negó la explotación, negó la tendencia a la concentración del capital, negó la contradicción entre producción y realización del plusvalor y la inherente tendencia a las crisis; los monopolios y los cárteles eran para él una superior organización “socializada” de la producción que garantizaría el desarrollo (“crecimiento”) capitalista constante y en ascenso, y que junto a la expansión del sistema bancario darían al capitalismo una capacidad ilimitada de adaptación y corrección de desequilibrios; la “ampliación” de la propiedad capitalista mostraba la vocación distributiva del capitalismo, de modo que la socialdemocracia debía favorecer ese crecimiento y acelerar esas tendencias virtuosas presionando desde los sindicatos y el parlamento por reformas, para impedir los excesos que pudieran cometer algunos miopes industriales individualistas. Asimismo, la socialdemocracia debía acompañar las acciones para expandir internacionalmente ese crecimiento (guerra e imperialismo). Eso era el “socialismo”.

En 1930, el italiano Carlo Rosselli mantenía esa argumentación sobre la potencia virtuosa del capitalismo -¡en medio de la Gran Depresión!- y reconocía el papel precursor de Bernstein. Pero decía Rosselli que el Socialismo Liberal debía dar un paso adelante respecto a Bernstein, quien había quedado atrapado tratando de fundamentarlo como una renovación del marxismo cuando en realidad era liberalismo; y que lo que correspondía era liberar al socialismo de las “escorias del materialismo histórico incrustadas en él”¹².

11 E. Bernstein, “Prefacio a la primera edición” de *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*, *op. cit.*, p. 99.

12 Carlo Rosselli, *Socialismo liberal* (1930), México, Editores Mexicanos Unidos, 1977, pp. 108-112. El socialliberal y anticomunista Carlo Rosselli fue opositor a Mussolini. Fue el gran mentor de Norberto Bobbio (véase la entrevista a Norberto Bobbio de Luiz Carlos Bresser-Pereira: “Bobbio defiende compromiso entre liberalismo e socialismo”, publicada en *Folha de Sao Paulo, Mais!*, el 5 de diciembre de 1994).

El capitalismo se reforma

Bernstein era una expresión exitosa del constante empeño de los ideólogos del capitalismo por influir en el pensamiento socialista mediante el falseamiento del marxismo, que observamos hasta nuestros días. Pese a los intentos por hacerlo desaparecer, su fuerza explicativa del capitalismo nunca pudo ser negada. Una forma de inutilizarlo en su potencia crítica, teórica y política ha sido tergiversar las ideas de Marx para ridiculizarlas como positivistas, mecanicistas, mesiánicas, utópicas, etcétera. Otra forma, como la que inició Bernstein, es una burda pero no siempre evidente fusión de las ideas de Marx con la teoría económica burguesa en una suerte de *marxismo neoclásico*, que tuvo diversas expresiones en la socialdemocracia de mediados del siglo XX, y que reaparece bajo nuevas formas en el autodenominado *marxismo analítico* desde la década de 1980. Hay que cuidarse también de los repentinos *redescubrimientos* de Marx –como ocurre actualmente tras el estallido de la crisis capitalista– puestos al servicio de los ajustes buscados por el capitalismo para perpetuarse, que hacen un uso a modo de Marx para aparecer como posturas “alternativas” sin salirse del sistema.

Gramsci conceptualizó estas estrategias ideológicas dominantes como revolución pasiva, y más expresivamente como restauración positiva, en la cual identifica tres aspectos: a) la transformación del capitalismo con nuevas formas de reproducción del capital; b) la apropiación por parte de la clase dominante de aspectos del programa de los dominados despojándolo de sus objetivos antiburgueses, y c) el papel de los intelectuales del sistema para extender su hegemonía sobre los intelectuales que representan un proyecto antagónico.

Bernstein era producto e instrumento de la revolución pasiva con que el capitalismo enfrentó su crisis general de 1873. Para lo cual, el gran capital debió poner fin a la era de librecompetencia que comenzó en 1850-60. Y que, con la redistribución del poder colonial, con el proteccionismo y la organización empresarial que impulsaron la expansión imperialista, desde 1896 le permitió pasar rápidamente de una fase de depresión a otra de gran prosperidad: “*la belle époque*”, interrumpida por la primera guerra. El gran capital negó al liberalismo económico en aras de su “progreso”. Pero era una prosperidad que no todos disfrutaban de la misma manera; para la clase obrera, las fases de depresión y auge tuvieron efectos distintos pero ninguno

la benefició: eran pobres. Esto explica el aumento de las tensiones sociales con algunos estallidos antes de 1913; la existencia de un sindicalismo cada vez más numeroso y activo que se formó en los años de depresión; y que a finales de la década de 1880 ya hubiera importantes partidos socialdemócratas en casi todos los países, que crearon la Internacional Socialista (la Segunda Internacional) en 1889, en el centenario de la Revolución Francesa. Entre sus objetivos inmediatos estaba la lucha por la jornada de 8 horas; convocó a una jornada internacional de lucha con suspensión del trabajo, que se concretó con bastante éxito el 1 de mayo de 1890, el primer Primero de Mayo. Sobre todo después de la revolución en Rusia en 1905, la burguesía entendió que la estabilidad de su expansión exigía atender algunas de esas demandas, al tiempo de intensificar la ofensiva ideológica para alejar al movimiento obrero y socialista de sus ideas anticapitalistas y revolucionarias. Debe tenerse presente que las reformas sociales fueron llevadas a cabo por gobiernos conservadores, no por los liberales, como un medio para salir de la crisis e integrar a los trabajadores en sus planes expansivos, incluidos los preparativos bélicos que estallaron en 1914¹³.

El capitalismo se reformaba para perpetuarse. Por eso, en el aforismo “el movimiento lo es todo” estaba matizada una dirección prefigurada por las clases dominantes. Era un cambio de la organización capitalista necesaria, pero no espontánea, como pretendió Karl Polanyi en *La gran transformación*¹⁴, libro en el cual se exhibe como un ideólogo orgánico del social-conservadurismo y del imperialismo, no obstante que su crítica moral a los efectos del liberalismo económico es contundente. Pero el triunfo y consolidación del programa reformista de la socialdemocracia tuvo que pasar primero por *la gran destrucción*.

Y el capitalismo volvió a reformarse, para perpetuarse, en la nueva crisis general de 1973-75; esta vez en dirección contraria, reestructurándose bajo las premisas del neoliberalismo. Ya a mediados de la década de los noventa, durante las crisis financieras de 1995 y 1997, y en un entorno de creciente ingobernabilidad –de pérdida de eficacia de la dominación–, en

13 Un acucioso estudio de este período se encuentra en Eric Hobsbawm, *La era del imperio (1875-1914)*, Barcelona, Editorial Labor, 1989.

14 Karl Polanyi. *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo* (1944), México, Fondo de Cultura Económica, 2003. Su tesis de que el antiliberalismo fue un movimiento pendular espontáneo es sintetizada en la afirmación: “El *laissez-faire* se planeó; la planeación no”, p.196.

los círculos oficiales capitalistas se advertía sobre la necesidad de iniciar un nuevo movimiento “pendular” para perpetuarse: el *posliberal*. Desde entonces comenzó una nueva revolución pasiva de apariencia *progresista*, que ha buscado neutralizar los rechazos al capitalismo e incidir en los contenidos de las reclamadas *alternativas*. La crisis general del capitalismo desde 2008 –que no es ajena a esos cambios posliberales– es un terreno aún más propicio para reformismos oficiales que se apropien discursivamente de los reclamos populares de cambio e influyan sobre la izquierda. Lo que está por verse es cuánto puede seguir reformándose el capitalismo y de qué manera, como comentaré más adelante.

El capitalismo se re-forma, pero esto no significa que las reformas burguesas sean, siempre, en una dirección que pueda empalmar con las aspiraciones populares y con la “reforma social”, aunque se hagan para recuperar la estabilidad de su dominio. En esos casos, la revolución pasiva es mucho más perversa porque no se apropia de partes del programa de las clases subalternas, como veía Gramsci en aquellos años, sino que se apropia de su lenguaje solamente, que vaciado de los contenidos que le asignan las clases subalternas se usa para legitimar reformas antipopulares.

Esta expropiación-falsificación del lenguaje es posible tanto por la “explicación” que los ideólogos del capitalismo dan a su “vocación reformista”, como por el lugar que ocupa la idea de reforma en el imaginario popular, que asimila reforma en el capitalismo a reforma social.

Como ya he señalado en otro lugar¹⁵, las clases dominantes han “teorizado” la historia del capitalismo como un constante movimiento pendular de ajustes y reequilibrios, de sucesivas correcciones de anomalías o excesos que lo devuelven a sus equilibrios y a su normalidad como “progreso”. Las oscilaciones pendulares siempre son cambio para regresar, siempre se está dentro del capitalismo. Cada uno de estos movimientos habría sido la respuesta necesaria y, por lo tanto realista –de lo cual derivaría su moralidad-, para corregir excesos y restablecer la salud del sistema; habrían sido todas, por lo tanto, reformas *inevitables* (o “espontáneas”: como los librecambistas atribuían al *laissez faire*, y como en sentido contrario Karl Polanyi atribuyó al proteccionismo). Al devolverle la salud al sistema,

15 Retomo aquí algunos fragmentos de lo dicho en “Los desafíos del pensamiento crítico” (en este volumen).

cada una de esas reformas habría sido en su momento la alternativa “progresista”, precisamente por “necesaria”, “moral” e “inevitable”. Desde la década de 1860, cuando la crítica marxista al capitalismo y su objetivo político para superarlo van acrecentando su influencia, los ideólogos del capitalismo agregan, a la teoría del péndulo, el juego de oposición en tríadas. Porque para preservar al capitalismo, además de tener que cuestionar una modalidad de reproducción que lo estaba desequilibrando, necesitaban al mismo tiempo enfrentar al marxismo que quería destruirlo. Frente a los dos factores de desestabilización, la corrección burguesa se presenta como la “tercera posición”. Cada momento de crisis real o potencial del sistema cuenta con su tercera vía: la solución **razonable** frente a los dos extremos desestabilizadores. La lógica de la tríada hace aparecer al “nuevo tercero” como el “centro progresista”, el que permite superar el estancamiento y retomar el camino del progreso. Cada tercera vía burguesa, para imponerse, desarrolla intensos debates al interior de las clases dominantes para convencerlas de la necesidad de ese cambio, y desde luego dirige ese debate hacia el resto de la sociedad para construir un nuevo consenso en torno a los objetivos dominantes.

La simplicidad de esa **explicación** hace aparecer como lo esencial de cada movimiento **pendular** a la “desaparición” o “reaparición” del Estado como “agente económico”. Este argumento nace de la doctrina liberal, que establece una distinción ontológica entre mercado y Estado que, en palabras de Gramsci, “de distinción metodológica es convertida en distinción orgánica y presentada como tal”¹⁶. La dicotomía entre mercado y Estado presupone su exterioridad: el Estado como “agente económico” es un ente distinto y externo al mercado sea en una relación de complementariedad o de contradicción. Debe consignarse, por lo demás, que esa formulación dicotómica entre mercado y Estado ha persistido porque da razón de ser, correlativamente, a la existencia autónoma de la Economía y de la Ciencia Política como disciplinas académicas.

La explicación pendular de la historia del capitalismo y sus reformas con “menos” o “más Estado” ha tenido como eje del debate doctrinario en la clase dominante la defensa o crítica del **laissez faire**. La retórica doctrinaria del **laissez faire** parte del supuesto de un **no-Estado** o **Estado mínimo** porque

16 A. Gramsci, **Cuadernos de la cárcel**, Tomo 5, *op. cit.*, pp. 40-41.

sólo admite la función jurídico-coercitiva del Estado, como una actividad institucional externa al mercado, que por ello es “libre”. Sucede que el Estado es un “agente económico” también mediante las acciones legislativas, jurídicas y coercitivas, que son constitutivas de las modalidades de creación de riqueza, de su realización y apropiación. El discurso doctrinario del *laissez faire* ha sido siempre un recurso ideológico-político para eliminar las trabas estatales a la imposición irrestricta de los objetivos del capital, un recurso discursivo de los *arditi* de la burguesía. Pero los neoliberales, como Hayek, siempre han reconocido la imprescindible intervención del Estado “para la competencia”¹⁷. En su cruzada contra las funciones sociales del Estado capitalista de bienestar conquistadas por las presiones populares, los economistas liberales caracterizaron al Estado como “agente económico” sólo en cuanto productor-proveedor directo de determinados bienes y servicios, lo que rechazaron en tanto transfería parte del excedente a los no propietarios. La reestructura neoliberal del capitalismo condujo a que el Estado abandonara aquella función y ese propósito, pero no significa que haya dejado de ser un “agente económico”: el Estado en el neoliberalismo es un activo agente económico también para la “redistribución del ingreso” sólo que transfiriéndolo de los de menor ingreso a los de mayor ingreso, utilizando para ello instrumentos impositivos, mediante precios y tarifas, en la asignación del gasto público, con intervenciones de promoción y financiamiento directos al capital, y con mecanismos económicos y extraeconómicos de disciplinamiento y despojo a los trabajadores. La reestructura neoliberal del capitalismo implica la “privatización” del Estado pues convierte al interés minoritario del capital en interés general (“público”), incluso cuando no se modifica el estatus jurídico de “propiedad estatal” de sus organismos o empresas. Esta fusión público-privado (capitalista) en los fines del Estado es el origen del descomunal patrimonialismo estatal burgués en el neoliberalismo, que no se trata de mera “corrupción” (ni que pueda ser superada con mera “transparencia”).

17 Ya desde *Camino de servidumbre* (1944), decía Friedrich von Hayek: “La cuestión de si el Estado debe o no debe ‘actuar’ o ‘interferir’ plantea una alternativa completamente falsa, y la expresión *laissez faire* describe de manera muy ambigua y equívoca los principios sobre los que se basa una política liberal. Por lo demás, no hay Estado que no tenga que actuar, y toda acción del Estado interfiere con una cosa o con otra”. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p.113.

No son movimientos que dan por resultado “más” o “menos” Estado. Los “ajustes pendulares” del capitalismo tienen lugar, en realidad, para contender con la contradicción inherente a un sistema que tiene como objetivo y motor la ganancia, cuya obsesión de crear-expropiar y realizar plusvalor es la que sustenta la producción y circulación ampliadas y no la creación de valores de uso en función de necesidades sociales. El desajuste entre la producción-expropiación de plusvalor, por un lado, y su realización, por el otro, es el que conduce a las crisis de sobreproducción de plusvalor. De ahí que los movimientos de “reajuste” se propongan durante las crisis capitalistas.

Contra la falsificación que se ha hecho de Marx como un *teórico del desarrollo* capitalista, admirable por su incesante desarrollo de las fuerzas productivas, él consideraba al capitalismo como una “fuerza destructiva” de todo lo que lo limita, por lo tanto “revolucionaria”, que derriba todas las barreras que se le presentan: la naturaleza, los territorios, las necesidades humanas, las leyes, las costumbres. “Por primera vez, la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil; cesa de reconocérsele como poder para sí; incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece sólo como artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producción”. E irónicamente lo reafirmaba así: “*Hence the great civilising influence of capital*”. Pero esas barreras no son superadas realmente –continúa– porque con su expansión universal los capitales vuelven a ponerlas, con nuevas contradicciones: “La universalidad a la que tiende sin cesar, encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cierta etapa del desarrollo del capital harán que se le reconozca a él como la barrera mayor para esa tendencia”. La tendencia a las crisis de sobreproducción es consustancial a la naturaleza del capital a “saltarse las barreras”, porque necesita constantemente “plustrabajo”, “plusproductividad” y “plusconsumo”. Pero el plusconsumo está en contradicción con el plustrabajo que crea plusvalor: el capitalista ve a los otros asalariados como consumidores, pero con los suyos busca reducir el trabajo necesario y con ello su fondo de consumo. El capital rompe permanentemente “las proporciones” por la “coerción a que lo somete el capital ajeno”, es decir, la competencia. El consumo insuficiente del plusproducto significa que esas fuerzas productivas son superfluas. Por eso, la tendencia expansiva del capital es un constante “poner y sacar fuerzas productivas”: la “tendencia universal” del capital es a ponerlas, del

lado de la oferta (libre cambio), y ésta se enfrenta a la “limitación particular” del consumo insuficiente del plusproducto, que busca sacar fuerzas productivas, “ponerles un freno con barreras externas y artificiales, por medio de las costumbres, leyes, etc.” (o *regulaciones*, como se dice actualmente). Pero el capital busca romper nuevamente esas barreras y vuelve a crear fuerzas productivas superfluas (desvalorización), y una vez más tiene que enfrentarse a una “disciplina que le resulta insoportable, ni más ni menos que las corporaciones”. Por eso, dice Marx: “en contra de lo que aducen los economistas, el capital no es la forma absoluta del desarrollo de las fuerzas productivas”. En la crisis general de sobreproducción, –que “tiene lugar con respecto a la valorización, *not else*”– la contradicción fundamental se da entre el capital industrial y el capital de préstamo: “entre el capital tal cual se introduce directamente en el proceso de producción, y el capital tal cual se presenta como dinero, de manera autónoma (relativamente) y al margen de ese proceso”, entre los cuales también se rompen las proporciones¹⁸.

En ese conflicto entre “poner y sacar plusvalor” se dan contradicciones entre el interés individual del capitalista que pugna por “ponerlo”, y quienes buscan preservar al capitalismo como tal y para ello plantean restricciones o regulaciones, buscando que el Estado represente el interés general de la clase. Esas regulaciones no hacen al Estado menos capitalista o menos conservador. Cuando criticando al *laissez faire* (que ni los neoliberales de verdad esgrimen), los *posliberales* apelan a “más Estado”, aclaran que no es un Estado “más grande” como productor-proveedor de bienes y servicios que fuera a redistribuirlos a los de menor ingreso, sino “más eficaz para fortalecer al sector privado”, reclamándole mayor efectividad para dar seguridad económica, jurídica y política a la acumulación capitalista y a la estabilidad del sistema, lo que desde luego favorece la concentración y la centralización del capital.

Sin embargo, la teoría del péndulo hace aparecer las reformas como un permanente movimiento de retorno a un mismo punto de equilibrio. Oculta que en cada movimiento de “ajuste y corrección” para lograr mayores ganancias (ese es “el progreso”) hubo un cambio cualitativo en una mayor concentración y centralización del capital, no un punto de

18 Karl Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, Tomo I, México, Siglo XXI Editores, 1971 (primera edición en castellano), pp. 362-367 y 402.

retorno. Los distintos grados de concentración y centralización del capital producen contradicciones de naturaleza e intensidad distintas, y cambia también la capacidad del sistema para enfrentarlas o absorberlas. No es una oscilación con sucesivos (“post”) movimientos que se repiten (“neo”), aunque es constante el objetivo de la ganancia y la conservación del sistema. Y aunque los ideólogos capitalistas recurran con muy poca originalidad a los argumentos previos para justificar las *reiteraciones pendulares*.

El “ajuste pendular” requiere de la modificación de las relaciones de poder existentes para poder llevarse a cabo, y las profundiza tras su concreción, lo que para el capitalismo supone una dialéctica propia de reforma/revolución. Empero, la disciplina económica caracteriza a cada una de esas reformas como un cambio de “instrumentos de política económica”, como si se tratara exclusivamente de asuntos técnicos, lo que otorga a los ideólogos del capitalismo un amplio margen de maniobra política, discursiva e ideológica.

El *librecambio* se ha impuesto tanto en el siglo XIX como en el XX con represión y conservadurismo político (tras 1848 y en la década de 1970), porque ese “poner y realizar plusvalor” exige debilitar la fuerza social y política del trabajo frente al capital. La reestructuración neoliberal se impuso con una *contrarrevolución* social y política, y se estabilizó con *reformas*: recuérdese que en la década de 1990 desde el FMI se habló de una “revolución silenciosa” que se llevaba a cabo con la “reforma estructural”, la “reforma del Estado”, etcétera.

Por su parte, la reforma capitalista ha convergido con la reforma social sólo cuando ésta ha sido útil para la acumulación y cuando ha tenido un papel político preventivo –es decir: conservador más allá de los perfiles doctrinarios de quienes la propusieran–, en lo que ha contado la lucidez de ciertos ideólogos para asumir la dimensión política de la estabilización del sistema.

John Maynard Keynes escribió El *fin del laissez faire*¹⁹ en 1926, tras la primera huelga general (*The Great Strike*) en la historia de Gran Bretaña, de nueve días en solidaridad con la huelga de los mineros, para criticar la miopía de los “capitanes de la industria” y sus economistas, cuestionar las vacilaciones de los reformadores “anti *laissez faire*” y para advertir al mismo

19 John Maynard Keynes, *The end of laissez-faire*, Hogarth Press, julio 1926. Publicada por la Von Mises Foundation en su página electrónica.

tiempo contra el riesgo de que avanzaran las posiciones socialistas. Siendo un liberal partidario del libre comercio y un abierto opositor a la izquierda y a la igualdad social, defendía un *camino intermedio* en el que el Estado debía cumplir un papel complementario al mercado contribuyendo al éxito de la empresa privada. Dos décadas después, entre 1942 y 1946, cuando la URSS emergía triunfante de la segunda guerra mundial y con un enorme prestigio en Occidente, el economista conservador Joseph Schumpeter –que tenía discrepancias teóricas con Keynes– llamaba a salvar al capitalismo con una democracia de élites que lo impermeabilizara de las demandas e ideas igualitaristas, y que fuera “administrado” por un “socialismo responsable”²⁰ no antagónico con el capitalismo, que absorbiera conflictos mediante algunas reformas sociales. Aclarando que si bien podía interferir su desenvolvimiento económico en el corto plazo con políticas de distribución del ingreso, sería en el largo plazo un factor de control social y antídoto contra las revoluciones anticapitalistas. En una fase de expansión del capitalismo industrial, ese reformismo social conservador era compatible con la acumulación y necesario para hacer frente a las luchas y presiones populares.

Por eso, es correcto que en el imaginario popular se identifique la reforma social con sus luchas y conquistas. El problema radica en suponer que toda alusión a la reforma hecha por los ideólogos burgueses sea invariablemente a favor de los intereses populares, lo que da una enorme ventaja a los dominantes para apropiarse del lenguaje y símbolos de los dominados.

En América Latina, en efecto, la idea de reforma fue asociada a cambios radicales, pues en la primera mitad del siglo XX las reformas sociales se lograron como parte de las luchas antioligárquicas protagonizadas por las clases populares en alianza con sectores medios (la Reforma Universitaria de 1918 es expresiva de ello). El reformismo social avanzó allí donde la burguesía latinoamericana que se desarrolló conduciendo políticamente el desplazamiento de la oligarquía del Estado, lo hizo también enfrentada a las presiones imperialistas o sorteando esas presiones en el contexto de la Gran Depresión y las guerras. Esa burguesía fue proclive a las reformas sociales para reafirmar su propio papel económico y su función dirigente, y con ello se convirtió en burguesía nacional, no por su origen geográfico sino porque

20 Joseph A. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942, con un capítulo agregado en 1946), Barcelona, Ediciones Orbis, 1983, pp. 454-466.

asumía que su desarrollo estaba vinculado al de las clases no propietarias como productoras y consumidoras, para crearse un mercado interno. Aunque no se anuló la lucha de clases, en varios países la concertación política con la burguesía se dio en torno a un nacionalismo no anticapitalista, que marcó diferencias con el antiimperialismo de las fuerzas comunistas y socialistas revolucionarias. A partir de la década de 1950, la reactivación del mercado mundial bajo la nueva hegemonía imperialista de Estados Unidos canceló en su “patio trasero” latinoamericano los espacios de autonomía relativa de la burguesía nacional, cuya existencia y expansión dependió de su creciente subordinación económica y política al capital imperialista, agotando su ideología reformista e intensificando su papel de gendarme.

La idea de *reforma* pasó entonces a pertenecer exclusivamente a la semántica popular. Las luchas para preservar las reformas sociales conquistadas, o para avanzar en otras nuevas, intensificaron un antiimperialismo con mayor contenido anticapitalista, asociado, como necesidad, con la revolución emancipadora, con el potente estímulo de la Revolución Cubana. Ese era un objetivo compartido por todas las vertientes de la izquierda, pero que fueron diferenciándose en la definición de las formas de lucha para alcanzarlo.

Cuando se convirtió en un debate táctico

Mientras que en su origen el debate sobre “reforma o revolución” en el movimiento socialista europeo no era táctico, no era de medios sino de fines, el que se dio en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, entre quienes compartían los fines, se convirtió en un debate táctico de una trágica esterilidad. Pletórico de reduccionismos y falsas dicotomías, tuvo efectos perdurables en las dificultades analíticas de la izquierda, que fueron convenientemente explotadas por la derecha.

En la década de 1960, la línea divisoria no pasaba por diferencias sobre la posibilidad de construir el socialismo en el seno del capitalismo dependiente por medio de reformas, o la necesidad de superar al capitalismo revolucionando todos sus cimientos, sino por las “vías de la revolución”. De ser ésta una discusión táctica obligatoriamente acotada a las circunstancias histórico-concretas de cada país, fue convertida en una supuesta definición

estratégica y hasta ética de carácter general. En muy pocos países se logró zanjar las diferencias y avanzar en una sólida unidad de izquierda, lo que en la mayoría tuvo efectos negativos en la capacidad para enfrentar la contrarrevolución capitalista de las décadas de los setenta y ochenta.

Esas limitaciones analíticas tuvieron efectos perdurables para enfrentar la fase de estabilización de las transformaciones regresivas dominantes, en la que la derecha incorporó el vocablo “reforma” en sus estrategias conservadoras. Muy significativamente, en la década de 1990, cuando el ascenso de las luchas populares contra el neoliberalismo se expresa en avances electorales y en la conquista de importantes espacios institucionales en parlamentos y gobiernos locales por la izquierda latinoamericana, en ésta aparecen confrontadas posturas que corresponden esencialmente a las que enfrentaron a Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein. Y se proyectan al nuevo siglo cuando la izquierda conquista gobiernos nacionales.

Tras la derrota electoral de la revolución sandinista después de una sangrienta contrarrevolución y el fin de la dictadura de Pinochet mediante elecciones, ambos en 1990; de la derrota de Sendero Luminoso en Perú por el gobierno de Fujimori; así como de las negociaciones de paz en Guatemala y entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno derechista de Arena en El Salvador en 1992, que completaron el cuadro de “transiciones a la democracia”, la derecha proclamó eufórica la resolución definitiva de aquel debate de los sesenta en América Latina, y no pocos izquierdistas así lo entendieron. La derecha tendió una trampa a la izquierda explotando sus errores analíticos.

La utopía desarmada de Jorge G. Castañeda (1993)²¹ fue un instrumento para ello. Con ese sugerente título, si bien en un sentido aludía al “desarme” ideológico de la “utopía” de izquierda por el desmoronamiento del “socialismo real”, más literalmente se regodeaba con el “fracaso” de la lucha armada y con la conversión de los antiguos guerrilleros en pacíficos demócratas y hasta en prósperos empresarios; y que habiendo superado su infantilismo anterior admitían la *teoría de los dos demonios* que explica la brutal contrarrevolución de los setenta y ochenta como respuesta lógica del sistema a las acciones armadas. El parteaguas entre la “vieja” y esa “nueva

21 Jorge G. Castañeda, *La utopía desarmada. Intrigas, dilema y promesas de la izquierda en América Latina*, México, Joaquín Mortiz, 1993.

izquierda democrática” quedaba confirmado como regla por las excepciones de la revolución cubana y de las fuerzas insurgentes colombianas, cuyas respectivas caída y derrota vaticinaba inminentes. Estos argumentos gozaron de aceptación entre numerosos segmentos de la izquierda durante la década de los noventa hasta que, en el nuevo siglo, el inédito proceso bolivariano en Venezuela cambió los términos del debate “reforma o revolución”. Y además Castañeda dejó de ser citado cuando se exhibió como prohombre de Estados Unidos, no tan sólo de la Tercera Vía neodemócrata representada por William Clinton sino del gobierno de George W. Bush, desde su cargo de canciller mexicano (2000-2003) en la presidencia de Vicente Fox.

En la década de los noventa, el debate reforma/revolución en América Latina era sobre fines pero todavía encubierto por una discusión sobre medios. Dada ya por descartada la cuestión de las vías, la discusión sobre los objetivos también estaba “resuelta” por la autoexclusión de la “revolución” tras el derrumbe del “socialismo real” que había sido su “materialización”. Desaparecido el “modelo” como meta, en los términos de Bernstein parecían evidenciarse tanto los errores de las *premisas* del socialismo revolucionario, como la validez de las *tareas* para promover la reforma del capitalismo para moralizarlo, en lo que *el movimiento lo sería todo*. El término pragmatismo entró en el vocabulario virtuoso de la izquierda latinoamericana, como sinónimo de incrementalismo realista en un capitalismo “nuevo” que se había renovado con la “era del conocimiento”²² que, se decía, había modificado las condiciones económicas y sociales en las que se basaban las *premisas* del socialismo revolucionario decimonónico, y había encontrado mecanismos adaptativos irreversibles. Paradójicamente, muchos de los neo-bersteinianos²³ –conscientes o *de facto*– reivindicaban también a Rosa Luxemburgo, pero en sus debates con Lenin respecto a los problemas de la

22 Los ideólogos de la derecha exaltaron los nuevos conocimientos como el único factor productivo dinámico, no agotable, que internamente desplaza la pugna por la distribución de la renta con la concertación colectiva como intercambio de conocimientos entre “agentes” (entre ellos los trabajadores); y que externamente desplaza la pugna en torno a la distribución de la renta proveniente de los recursos naturales con el esfuerzo por incrementar la competitividad, la productividad y la modernización tecnológica. Así lo planteaba el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, en su libro *Reflexiones sobre el desarrollo económico. Hacia un nuevo consenso latinoamericano*, Washington DC, Banco Interamericano de Desarrollo, 1992.

23 Los neo-bersteinianos deslindan de la postura belicista de Bernstein calificándola como una desviación de derecha, pero adoptan su revisionismo con sus consecuencias prácticas de aceptación del capitalismo reformable.

democracia en el socialismo soviético, con una racionalización *a posteriori* del estalinismo. Así, sólo quedaba como opción el “socialismo liberal”.

Las nuevas adhesiones liberales se argumentaron como rechazo a las vulgarizaciones del marxismo y a las fallidas críticas que se les hicieron desde la anterior “nueva izquierda”²⁴, pero expresaban fundamentalmente la influencia de los ideólogos del capitalismo, que lograron imponer sus “explicaciones” sobre aquellos errores y “llenar esos vacíos” con sus propias “alternativas”.

El actual estallido de la crisis general del capitalismo parecería reconducir el debate al demostrar, una vez más, la falsedad de los postulados de Bernstein sobre la capacidad permanente del capitalismo para desarrollarse conjurando sus crisis, pero aún dista mucho de cuestionar sus conclusiones sobre las “tareas de la socialdemocracia”. Peor aún, la crisis actual está dando nuevos bríos y auditorios a los promotores de las reformas del capitalismo con algunas regulaciones, que sintonizan discursivamente con la izquierda que proclama el fin del neoliberalismo, al que responsabilizan de los excesos y corrupción del capitalismo (al que, de todas maneras, los posliberales le asignan superioridad sobre “el ineficiente socialismo real” para proveer “bienes materiales y libertad”).

El posliberalismo

La crisis que estalla en 2008 ha puesto a la orden del día la discusión sistémica sobre la necesidad de “reforma” del capitalismo para volver a su punto de equilibrio.

Algunos, desde el campo crítico, han declarado que el neoliberalismo está muerto. Pese al colapso no se piensa en el derrumbe, y domina la idea del necesario ingreso a un post-neoliberalismo, aunque no se sepa en qué

24 El embrollo taxonómico es correlativo a los reduccionismos analíticos. Anteriormente, se autodenominaron “nueva izquierda” quienes a partir del tema de las vías rompieron con los partidos comunistas por considerarlos la “vieja izquierda reformista”, aunque compartían el objetivo anticapitalista. En la década de los noventa, por el contrario, la “nueva izquierda” es la que renuncia a la revolución (“violenta”) y se hace “democrática” (“pacífica”), integrándose pragmáticamente a las reglas del juego institucional del sistema; además del reduccionismo de lo democrático a lo institucional, se presupone la inviabilidad del anticapitalismo. Sobre todo después del levantamiento zapatista

consiste eso posterior. La incertidumbre es inevitable porque dependerá de decisiones y relaciones de poder. Pero la dificultad para pensar el futuro en cuanto a direcciones posibles y optar por tratar de recorrer alguna, tiene que ver con la falta de claridad sobre lo que está agotado. No hay acuerdo sobre qué es el neoliberalismo: si es la fase histórica actual del capitalismo pese a lo restrictivo de su denominación, o si sólo es un conjunto de instrumentos de políticas económicas que podrían modelarse en combinaciones distintas a las actuales. La meta y el camino quedan así confundidos entre sí. Entre las muchas interrogantes y tesis que admite esta discusión hoy día, adelanto aquí tres que me parecen significativas y que están vinculadas entre sí: a) ¿La idea misma de pos-neoliberalismo denota una superación de lo que, si no claramente definido, al menos se vive como neoliberalismo?; b) ¿Puede ser superado el neoliberalismo con regulaciones al capital especulativo –visible responsable de la crisis– y favoreciendo al capital productivo de la “economía real”?; c) ¿Puede haber anti-neoliberalismo o estrategias posliberales sin anticapitalismo?

Lo que revela la dificultad actual para caracterizar al neoliberalismo es la enorme influencia que ha tenido la prolongada ofensiva ideológica de los dominantes para imponer el terreno de análisis, al haber definido qué debía y debe entenderse por “neoliberalismo”, y cuáles eran y son las alternativas “posliberales”.

Y esto viene ocurriendo desde hace más de diez años, desde las crisis financieras de 1995 y 1997. Ya desde entonces fueron acremente cuestionados los tecnócratas y se reclamó por “más política” y por una intervención regulatoria del Estado; se promovieron *políticas públicas* porque el mercado es “imperfecto”; con caminos “intermedios” o terceras vías: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”; se desarrollaron programas de atención a la pobreza y todo se hacía para “generar empleo”. Más: el “nuevo Consenso Posliberal” fue oficializado en la Segunda Cumbre de las Américas de 1998 en Santiago de Chile, durante la presidencia de William Clinton, como la estrategia “progresista” para América Latina, para

en 1994, aparece otra denominación de “nueva izquierda” en la “izquierda social”, caracterizada en ocasiones por la diversidad de sujetos “no clasistas” que la componen (indígenas, mujeres, ambientalistas, defensores de derechos humanos, etc.), o por el ámbito y naturaleza de su accionar como basismo y rechazo a los partidos y a las instituciones políticas estatales; en esta denominación de “nueva izquierda”, en algunos casos esos dos tipos de rasgos coinciden con el anticapitalismo y en otros no.

“ir más allá del Consenso de Washington”. Los éxitos de ese *progresismo* explican en alguna medida la crisis actual, aunque las responsabilidades son siempre de “otros”. Pero hoy vuelven a aparecer muchas de aquellas ideas en las discusiones sobre “alternativas posneoliberales”.

No hay espacio suficiente para describir aquí el proceso de gestación y ejecución del Consenso Posliberal, una estrategia articulada entre los centros del poder capitalista –países, empresas transnacionales, instituciones financieras internacionales– y las élites económicas, políticas e intelectuales de América Latina, para lo cual remito a algunos trabajos de mi autoría.* Este proceso demuestra que las “reformas posliberales” se impulsaron para reforzar políticamente a los beneficiarios del denominado Consenso de Washington pese a que se hicieron para “ir más allá” de él. Era una estrategia política para hacer frente a la crisis de gobernabilidad (de la estabilidad de la dominación) que emergía en la segunda mitad de los noventa por el ascenso de los rechazos y resistencias populares en América Latina al neoliberalismo; la crisis financiera de México en 1995, que se extendió a Brasil y Argentina, así como la que estalló en Asia en 1997, configuraban un contexto de mayor inestabilidad económica que agregaba riesgos políticos al capital transnacional en la región. La estrategia incluye una intensa ofensiva ideológica de la derecha para recuperar influencia política y para incidir en los debates sobre “alternativas al neoliberalismo”, de modo de hacerlas inocuas para el capitalismo. Esa estrategia posliberal ha pasado por distintos momentos y énfasis, y es evidente que sigue operando refrescada por la crisis de 2008.

La gestación del “nuevo consenso posliberal” comienza claramente en 1996, en el que se multiplican los espacios de elaboración de la élite política, empresarial e intelectual latinoamericana con sus pares europeos y estadounidenses. El “nuevo consenso” cobra relevancia pública desde el Banco Mundial en 1997, tras la llegada de Joseph Stiglitz como Vicepresidente y Economista Jefe del Banco, tras dejar el cargo de Jefe de Asesores Económicos del presidente Clinton. Stiglitz es un ideólogo de la Tercera Vía con la que se impulsó la expansión global de Estados Unidos en los noventa. La publicación por el Banco Mundial del *Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación* impacta como el primer manifiesto “antineoliberal” contrario a lo que Soros denominó fundamentalismo de

* Se han suprimido las referencias, contenidas ya en este volumen.

mercado pocos meses después. En septiembre de 1998, el BM publica el todavía más impactante *Más allá del Consenso de Washington. La hora de la reforma institucional*²⁵, dedicado específicamente a América Latina. Sus autores son Guillermo Perry, Economista Jefe para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y Shahid Javed Burki, vicepresidente de esa comisión. El propósito de estos documentos resulta más nítido a la luz de un texto de noviembre de 1996, mucho menos conocido, elaborado también por Perry y Javed Burki, titulado *La larga marcha*²⁶.

En éste se dice que la euforia por el crecimiento económico que hubo hasta 1993 había terminado con la crisis financiera de 1995, que contenía el riesgo de la salida neta de capitales de América Latina porque no contaban con las seguridades requeridas en los derechos de propiedad. Las reformas de comienzos de los noventa se habían hecho para atraer capital extranjero; pero debían hacerse otras complementarias para retenerlo. Éstas no eran contrarias sino continuación de las primeras. El Estado debía “regular y supervisar” para ofrecer las garantías para un “sano mercado financiero” que no afectara la confianza en la apertura comercial. Para evitar *corridos* bancarios eran necesarios seguros estatales, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro que México había implementado recuperando la estabilidad (que por cierto le costó más de 100 mil millones de dólares al país) y medidas para extender la penetración del mercado financiero. Para “proteger” al país de la inestabilidad financiera internacional se necesitaba ampliar el financiamiento interno con la privatización de los fondos de pensiones y seguros. Para asegurar la inversión extranjera en infraestructura y en servicios públicos y sociales, que contribuiría a mantener la necesaria disciplina fiscal, debían reformarse los marcos regulatorios para ampliar la inversión privada y crear fondos estatales de manejo de riesgos. Es decir, que las “regulaciones financieras” se reclaman para fortalecer al capital financiero.

Esa asociación público-privada en infraestructura y en servicios públicos y sociales liberaría al gobierno de ser el proveedor exclusivo o

25 Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, *Más allá del Consenso de Washington. La hora de la reforma institucional*. Washington DC, Banco Mundial, septiembre de 1998.

26 Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry, *The Long March: A Reform Agenda for Latin America and the Caribbean in the Next Decade*, Washington DC, The World Bank, August 1997.

principal, pero el nuevo papel del Estado “en la regulación de la provisión y en garantizar que los proveedores privados no abandonen a los pobres” será un papel “más exigente” que el de proveedor. Sería el ingreso a una época de “posprivatización”, en la que la provisión la harán los privados, “que lo hacen mejor”, con el financiamiento público y sin que esa infraestructura y servicios perdieran el estatus jurídico estatal. Esta es una de las características del *Estado social de derecho* consagrado por la Constitución de 1991 en Colombia, en cuya elaboración había participado Guillermo Perry como miembro de la Asamblea Constituyente, quien posteriormente fue ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Samper hasta 1995, cuando pasó al Banco Mundial.

Conviene retener esta idea de asociaciones público-privadas como “posprivatización” porque, supuestamente alejada de la obsesión privatizadora neoliberal, es uno de los ejes del social-liberalismo: desarrollar políticas sociales focalizadas con financiamiento público, con lo que se transfieren inmensas sumas del fondo de consumo de los trabajadores y de los consumidores pobres –vía impuestos al salario, impuestos indirectos y tarifas– al capital que provee los servicios para los extremadamente pobres. Políticas socialliberales que favorecen una mayor concentración del capital, al mismo tiempo que legitiman a los gobiernos y les crean una base social clientelar y desorganizada políticamente.

Para retener al capital externo, continúa *La larga marcha*, habría que avanzar prioritariamente en la reforma del mercado laboral (mayor flexibilización y disminución de costos para el capital); en la reforma jurídica y administrativa que garantizara e hiciera más eficientes los derechos de propiedad del capital; en políticas de atención a la pobreza para reducir la inestabilidad social; en reformas educativas que generaran “capital humano”²⁷. Y de manera muy importante, en políticas de titulación de tierras para introducirlas al mercado inmobiliario, sin decir obviamente que eso favorecerá la apropiación legal de los recursos naturales. Como concepción general de la acción del Estado, Perry y Burki indican que la descentralización es positiva para reducir las presiones sobre el gobierno

27 El “capital humano” alude, en la teoría neoclásica, sólo a aquellas habilidades que posee el “factor trabajo” que al mercado le interesa emplear. Tanto los neoliberales como los socialliberales asignan al Estado la función de financiarlas (educación, salud), pero sólo las que interesan al mercado pues de lo contrario ese es un “costo de oportunidad”

central, pero que éste debe concentrar más las decisiones económicas fundamentales, sin someterlas al sistema político, máxime en condiciones de ingobernabilidad.

En el Informe del BM de 1997, que se realiza bajo la dirección general de Joseph Stiglitz, se plantea que la benéfica globalización aún no ha concluido, y se da la señal de alarma de que la necesaria apertura económica está en riesgo por posibles reacciones de varios países ante la crisis financiera. Movido por esta preocupación es que afirma que “La oscilación del péndulo hacia el Estado minimalista de los ochenta ha ido demasiado lejos”²⁸. Es responsabilidad del Estado evitar esos peligros mediante un nuevo papel regulatorio con reformas de segunda generación, en las mismas líneas temáticas planteadas por *La larga marcha*. Las acciones deben contemplar las circunstancias políticas de cada país para eludir eficazmente los obstáculos, por lo que deben ser hechas “a la medida” de cada uno, y no de manera uniforme como las han recomendado los tecnócratas del FMI. Esa es la crítica principal que se le hace: en el *cómo*, y no en el *qué*.

En *Más allá del Consenso de Washington*, Perry y Burki sólo mencionan su documento anterior, pero significativamente no incluyen en éste su apología al capital financiero ni demás recomendaciones económicas de aquél, sino que despliegan una potente retórica responsabilizando a los “gobiernos malos” por el síndrome de ilegalidad que no garantiza plenamente la propiedad (déficit legales, burocratismo e ineficacia judicial); la información es insuficiente (transparencia), como también lo es la confiabilidad de la burocracia media y baja (corrupción); persisten las imposiciones de los intereses creados (patrimonialismos particularistas) que se oponen al interés general; los políticos no garantizan sus compromisos porque los subordinan a los vaivenes de los tiempos electorales (clientelismo). Estos altos costos de transacción desalientan la inversión, se debilita el crecimiento, la pobreza no se resuelve. Los gobiernos deberán ser

desperdiciado. La “equidad” liberal o socialliberal, la “igualdad de oportunidades”, consiste en que todos tengan acceso a esas habilidades mínimas, y a partir de ahí dejando librados al desempeño de los individuos en el mercado cuáles sean los resultados en bienestar que alcancen. Con la “posprivatización” posliberal, la “igualdad de oportunidades” es un lucrativo negocio para el capital.

28 Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación*, p. 26.

reformados, para lo cual se necesita “fortalecer a la sociedad civil”, típico eufemismo para referirse a los empresarios, además de las señaladas organizaciones no gubernamentales, algunas incluso promovidas por el BM. Muchos de los críticos del neoliberalismo en América Latina se identificaron con ese diagnóstico, *hecho a la medida* por la derecha para conducir las críticas de los dominados. Pero lo fundamental del documento son sus recomendaciones para manejar los obstáculos políticos a las reformas: la modificación de la *velocidad y secuencia* de las reformas para legitimarlas; acciones para conquistar indecisos y para neutralizar oponentes; el papel de la política y del sistema político para aceitar las reformas. Se trata de un manual táctico conservador pero “crítico” del “Consenso de Washington”.

El ir “más allá” (*beyond*) no es *contra*, sino corregir lo necesario para continuar con las reformas de primera generación identificadas como “neoliberales”. Estos posliberales críticos del “mercado perfecto” –supuesto neoclásico que ni siquiera Hayek compartía²⁹– señalan las “imperfecciones” del mercado (costos de transacción, información imperfecta, etc.) precisamente para corregirlas, no para negar al mercado, esto es, al dominio del capital. Para ello apelan al Estado y a la política, en eso consiste su Nueva Economía Política neoinstitucionalista.

Su gran éxito ideológico fue reducir el neoliberalismo a su focalización en el “Consenso de Washington”, por un lado; y a presentarlo como una imposición “externa”, por otro. Pero el cuestionamiento posliberal al decálogo de políticas del “Consenso de Washington” se limitó a su déficit de “regulación financiera”, además en los términos en que la entendían, no a las otras políticas. Por su parte, al “exteriorizar” al neoliberalismo se exculpa a la gran burguesía latinoamericana –con sus respectivas escalas relativas a cada país– y se oculta la fusión de sus intereses en esa clase mundial para una reproducción capitalista que acrecienta las ganancias con múltiples mecanismos de expropiación. Y se hace pasar por alto que las “externas” instituciones financieras internacionales tienen en sus puestos directivos, mandos medios y asesores a latinoamericanos. La “exteriorización” incluye personalizar como responsable del neoliberalismo al FMI, en tanto que los posliberales Banco Mundial y BID se autoeximen.

29 Véase: F. Hayek, “La competencia como proceso de descubrimiento”, en *Estudios Públicos* núm. 50, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, otoño 1993, pp. 5-21.

Esas focalización y exteriorización no se habían hecho en la primera mitad de la década de 1990. De hecho, hasta 1996, salvo contadas excepciones no se hablaba del “Consenso de Washington”, y la ejecución de esas políticas había sido justificada como una necesidad *realista* de América Latina emanada de los efectos de la “década perdida”: estancamiento en el crecimiento, descapitalización por deuda y empobrecimiento. Que se los atribuían al recesivo “monetarismo de *laissez faire*” (aunque nunca fue ausencia de intervención estatal), que era el modo como se definió al neoliberalismo en las décadas de los setenta y ochenta, siempre a partir de los instrumentos de política económica.

Contra aquel “monetarismo de *laissez faire*”, a comienzos de la década de 1990 los ideólogos del capitalismo promovieron un “nuevo consenso” para el “crecimiento” y para “resolver la pobreza”. La “reforma estructural” era para producir para la exportación (nótese que era un consenso para lo “productivo”), que dada la descapitalización por la deuda debía financiarse con capital externo; para que éste no migrara a los ex países socialistas, se le debía atraer con apertura y liberalización; hasta que el crecimiento produjera la derrama de riqueza a toda la sociedad, así como para mantener el sano equilibrio fiscal y el control de la inflación, la pobreza sería atendida con los recursos obtenidos de las privatizaciones y con la intervención del Estado con políticas públicas focalizadas (equidad socialliberal); el Estado tenía una función de promoción (subsidiaria) que cumplir, para lo cual debía reformarse. Ese “nuevo consenso” de la primera mitad de la década de 1990 era contrario al *laissez faire* y al *populismo*. En tanto que era formulado para corregir los efectos del “neoliberalismo” de los años setenta y ochenta, aunque parezca absurdo, el que después fue oficialmente denominado Consenso de Washington habría sido, ateniéndonos literalmente a los discursos, el primer “posliberalismo”.

En la promoción de ese nuevo consenso como respuesta necesaria y realista de América Latina, el ex canciller uruguayo y presidente del BID desde 1988, Enrique V. Iglesias, decía en 1992 que:

...estas respuestas no se originan unilateralmente en las instituciones bancarias estadounidenses ni en los organismos financieros internacionales, sino en una combinación –en proporciones discutibles– entre sus recomendaciones y los esfuerzos de modernización económica y de apertura externa realizados en distintas etapas por los propios países latinoameri-

canos. Lo que es más, tampoco [Consenso de Washington] se trata de una denominación generalmente aceptada, sino de un título afortunado puesto a este conjunto de prescripciones por una institución y por un autor perteneciente a ella. Se trata, con todo, de un nombre apropiado para identificar fácilmente el conjunto de medidas propuesto en los últimos años a los países latinoamericanos. Parecería más apropiado concluir en que estas medidas se han ido gestando en respuesta a la gradual formación de un consenso político y económico latinoamericano. En el fondo, el “Consenso de Washington”, más que un conjunto de ideas y prescripciones nuevas, representa la recuperación de la fuerte influencia que siempre ejerció en nuestros países el “mainstream economics” frente a las alternativas planteadas por la teoría latinoamericana del desarrollo.³⁰

Iglesias, del posliberal BID en la segunda mitad de los noventa, antes se congratulaba porque la afortunada coincidencia entre la respuesta endógena latinoamericana y las recomendaciones externas la haría más viable. Eso mismo defiende John Williamson: dice que acuñó la frase para sintetizar lo expresado por latinoamericanos en un seminario en Washington en noviembre de 1989³¹ y que –aclaró años después– tenía por objetivo sensibilizar a la nueva administración de Estados Unidos sobre el proceso de reforma en marcha en América Latina. Dígase que fue tan eficaz la sensibilización, que plasmó poco después (1990) en la *Iniciativa para las Américas* del presidente George H. Bush (padre) para crear un área de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. Williamson rechazó que se le adjudicara la paternidad nominal del neoliberalismo³². Y ya en plan

30 E. Iglesias, *Reflexiones sobre el desarrollo económico. Hacia un nuevo consenso latinoamericano*, op. cit., p. 56.

31 John Williamson, "What the Washington Consensus Means by Policy Reforms?" en J. Williamson (ed.), *Latin American Adjustment: How Much has Happened*, Washington DC, The Institute for International Economics, 1990. En éste se refiere a los diez temas de política económica sobre los que había consenso: 1) disciplina presupuestaria; 2) cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); 3) reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; 4) liberalización de los tipos de interés; 5) búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; 6) liberalización comercial; 7) apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 8) privatizaciones; 9) desregulaciones; 10) garantía de los derechos de propiedad.

32 Williamson no estaba de acuerdo con que se interpretara “que las reformas de liberalización económica de las dos décadas pasadas fueron impuestas por las instituciones de Washington, en lugar de haber sido el resultado de un proceso de convergencia intelectual, que es lo que yo creo que subyace a las reformas [...] y en el que participó también el Banco Mundial”. Decía molestarle que el “término haya sido

autocrítico se lamentó de que, en la formulación del decálogo, él no hubiera tenido más cuidado en atender a los tiempos y recaudos con que debían hacerse las reformas para evitar crisis financieras³³, pero sólo eso.

Como se ve, en el terreno discursivo los estrategias capitalistas no son dogmáticos: cambian de argumentos, critican lo que antes propusieron cuando son inocultables sus efectos negativos y generan problemas políticos, y ofrecen “ahora sí” la “nueva oportunidad histórica” de cambio. De consenso en consenso. Estas constantes metamorfosis discursivas para dirigir desde el sistema las críticas al neoliberalismo son posibles porque explotan el carácter contestatario de buena parte del *pensamiento crítico*: que contesta a los asertos sistémicos atrapado en su terreno discursivo y en su iniciativa ideológica.

Volviendo a las “reformas de segunda generación” para ir “más allá del Consenso de Washington”, éstas habrían sido, siguiendo la secuencia, el segundo posliberalismo. Pero tras un lustro de implementación, fue cuestionado por los que lo promovieron. En el nuevo siglo, para responder a la expansión de las movilizaciones mundiales contra la globalización y a las crisis sociales y políticas que estallan en América Latina, los posliberales dicen que las reformas a las reformas estuvieron mal hechas o incompletas y que resultaron en un “neoliberalismo plus”. Entonces para conquistar auditorios se solidarizan con el *malestar en la globalización* (Stiglitz *dixit*), y se introducen al élan anti-globalización adjetivándola como “globalización neoliberal” por el peso decisivo del capital financiero, que sigue produciendo convulsiones. Así, “neoliberalismo” es ahora sólo especulación, que se la achaca a la irresponsabilidad de los “malos ejecutivos”, resguardando la credibilidad del capital.

Y tras esa crítica posliberal al posliberalismo, se abre paso una nueva fase de posliberalismo: la “superación del neoliberalismo” vendrá con contrarrestar la especulación financiera con mayor inversión “productiva”.

investido de un significado que es notablemente diferente del que yo pretendí y que hoy sea usado como sinónimo de lo que a menudo se llama ‘neoliberalismo’ en América Latina, o lo que George Soros (1998) ha llamado ‘fundamentalismo de mercado’. En: “What Should the World Bank Think about the Washington Consensus”, Washington DC, *The World Bank Research Observer*, vol.15, no.2 (August 2000), pp. 251-252.

33 J. Williamson, “Did the Washington Consensus Fail?”, conferencia del 6 de noviembre de 2002 publicada en la página electrónica del Peterson Institute for International Economics.

El posliberalismo se manifiesta ahora como un “neodesarrollismo”, opuesto también al *laissez faire* y al *populismo*.

El neodesarrollismo posliberal

El neodesarrollismo está orientado a la inversión en infraestructura en energéticos y explotaciones hídricas, en minería, en monocultivos genéticamente modificados, y en un sistema multimodal de comunicaciones y transportes para abaratar la extracción de aquellos productos y de otras formas de biodiversidad desde la región.

Donde no son políticamente factibles las privatizaciones de territorios y recursos naturales, bajo la lógica de la “posprivatización” se promueven “asociaciones” del Estado con las inversiones privadas del capital trasnacional –incluidas las empresas *translatinas*, como las ha denominado la CEPAL– en las que el Estado financia una parte de la inversión; o “asociaciones” en las que el Estado transfiere la explotación y comercialización de los recursos naturales con la *enajenación del uso*, por la que cobra impuestos, pero sin haber sido enajenada su propiedad legal. Algunas “asociaciones” del Estado con capital externo se hacen con esas empresas formalmente estatales pero bajo control privado, por lo que ese tipo de asociación “pública-pública” seguirá estando en alguna de las modalidades anteriores.

El nuevo posliberalismo neodesarrollista tiene dos polos de hegemonía regional: Brasil, que impulsa en el año 2000 la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica (IIRSA); y México que oficializa en 2002 el Plan Puebla Panamá (proyectado años antes, y rebautizado recientemente como Proyecto Mesoamérica), vanguardizado por Carlos Slim con su Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).

La inversión en infraestructura es de valorización más lenta. Permite “sacar plusvalor” del mercado. Pone a salvo a una parte del capital de los riesgos especulativos y de su rápida desvalorización. Es una estrategia de acumulación a más largo plazo pero de ganancias seguras por la “asociación” con el Estado.

Esa inversión que se hace en América Latina no está dirigida a resolver necesidades sociales; genera poco empleo por su alta tecnificación; y es una estrategia neocolonialista de *acumulación por desposesión*, como

la denomina David Harvey³⁴, en cuanto una “acumulación originaria” permanente de control territorial y saqueo, para abatir al capital sus costos en energéticos, materias primas, agua y biodiversidad, recursos además escasos. Y que se lleva a cabo de manera simultánea con la brutal desposesión de la fuerza de trabajo latinoamericana. El intervencionismo militar es un instrumento de esta acumulación por desposesión.

Esas inversiones productivas del gran capital son vistas por varios de los nuevos gobiernos nacionales de izquierda como una “alternativa progresista” al neoliberalismo –entendido como especulación financiera– y como *locomotora* del desarrollo nacional. Mientras en algunos casos se adoptan posturas más confrontativas contra las instituciones financieras y contra la ilegítima deuda externa, se otorga seguridad jurídica a esas inversiones incluso con leyes específicas, como en el caso de la minería a cielo abierto.

El posliberalismo neodesarrollista separa las aguas entre un “capital malo” (financiero) y un “capital bueno” (bienes y servicios de la “economía real”); entre los cuales no habría conexión (no obstante la evidencia empírica de su fusión y de que el capital “productivo” se dedica también a funciones financieras); y atribuye al primero los “excesos” de la globalización. Esto es comúnmente aceptado entre segmentos del llamado pensamiento crítico.

Un documentado estudio de Orlando Caputo sostiene la tesis contraria: “En América Latina, el capital productivo y el capital financiero, a través de las transnacionales, actúan en forma conjunta y potenciada”. Con datos contruidos a partir de informes oficiales, Caputo muestra que esto ocurre desde la década de 1990 y que, significativamente, se acentúa desde 1996. “[E]l pago de renta bajo la forma de utilidades y dividendos de la IED más las rentas remesadas por las inversiones en cartera equivale e incluso superan el pago de intereses. En 2004, las utilidades y dividendos de las IED representan un 38%, un 18% corresponde a remesas de las inversiones en cartera, sumando ambas un 56%, comparado con un 42% correspondiente a los intereses de la deuda externa”. Dice que entre utilidades, intereses, amortizaciones y depreciaciones del capital extranjero y otras salidas de capital de América Latina, salen aproximadamente 230 mil millones de dólares anuales. Y concluye que en América Latina “La relación entre el

34 David Harvey, *El nuevo imperialismo* (2003), Madrid, Ediciones Akal, 2004.

capital y el trabajo es la predominante en las últimas décadas y no la relación entre capitales”³⁵.

Cuánto de esa inmensa masa de dinero ha ido a nutrir al “casino” especulativo y su inflamamiento como capital ficticio, que estalla en la crisis de 2008, pero cuyo origen es la expropiación de valor a los asalariados y consumidores pobres latinoamericanos, además del valor expropiado neocolonialmente a los países como tales. Esto ratifica la significación del posliberalismo como estrategia conservadora capitalista con sus tres soportes: neoinstitucionalismo, socialliberalismo y neodesarrollismo.

Posliberalismo o anticapitalismo

La revolución pasiva posliberal es visible en varias de las formulaciones de izquierda sobre las alternativas al neoliberalismo.

Más recientemente, en el campo de izquierda aparecen audaces planteos en el sentido de que el neodesarrollismo podría ser la versión “realista” de un “Socialismo del Siglo XXI”. Algunas justificaciones al neodesarrollismo se hacen a nombre de Marx, argumentando que: a) es el camino para el desarrollo de las fuerzas productivas; b) es un objetivo pendiente en América Latina y ello corresponde al aserto de Marx en el Prólogo de 1859 de que ninguna sociedad desaparece antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que pueda contener, y c) puesto que el “estatismo socialista” se desbarrancó junto con la URSS, las asociaciones público-privadas son la manera de hacer madurar a la sociedad hacia el socialismo³⁶.

En cuanto a las dos primeras afirmaciones, no es la primera vez –así lo han hecho Schumpeter y seguidores suyos como Douglass North– que se presenta a Marx como un *teórico del desarrollo* capitalista invocando el críptico Prólogo a la *Contribución a la crítica de la economía política* de 1859. Obra en la que Marx pensaba sintetizar sus estudios económicos de 1857 y 1858, que dejó inconclusa y retomó en la elaboración de *El Capital*. Esos estudios económicos fueron publicados como los *Grundrisse* por primera

35 Orlando Caputo Leiva, “El capital productivo y el capital financiero en la economía mundial y en América Latina”, 2007, verso.

36 Véase, entre otros, del uruguayo Gonzalo Pereira, “A Marx y Engels, lo que es de Marx y Engels” (2008) en *La onda digital* (www.laondadigital.com)

vez en Moscú durante la guerra, entre 1939 y 1941, y tras varias ediciones europeas en los cincuenta y sesenta se publicó en castellano en 1971. Como se ha mostrado más arriba, nada autoriza a caracterizar a Marx como un “desarrollista”. En cuanto a la tercera afirmación, tomando en cuenta que las inversiones privadas de esos montos sólo puede hacerlas el gran capital, no requiere de réplicas adicionales a lo argumentado en este trabajo. Lo cual no significa que esté suficientemente discutido el problema del Estado en el socialismo, como Estado ampliado en y de una nueva sociedad, y no sólo como aparato; y lo que ello significa en la superación de la dicotomía liberal Estado-mercado y en el replanteo de la relación público-privado.

Al mismo tiempo, se formula un “socialismo realista de la era posneoliberal” que defiende el socialliberalismo con una argumentación marxista “renovada”. El socialismo es definido así: “‘Socialismo’ significa focalizar en los individuos peor colocados en la escala social, hacerlos ‘subir’, por así decirlo: invertir el concepto de óptimo de Pareto con vista a evitar que se profundice la desigualdad social –un concepto que se aproxima a lo que John Rawls llamó el ‘principio de diferencia’”³⁷. Dígase que este postulado³⁸, formulado de manera abstracta como toda la filosofía política del socialliberal Rawls, bajo la apariencia de ser una concepción de igualdad en la diversidad, se llena de contenido en su obra como una justificación de la acumulación capitalista: al producir crecimiento, su ausencia perjudicaría a los menos aventajados.

La argumentación “marxista renovada” es sustentada en una *mirada realista de los cambios en el mundo del trabajo*, según la cual se ha llegado al “fin de la relación salarial”, y con ello habría desaparecido la explotación porque

37 Fernando Haddad, “Introducción” al libro de Tarso Genro y otros autores: *O mundo real. Socialismo na era pós-neoliberal*, Porto Alegre, L&PM Editores, octubre de 2008, p.15. Haddad es ministro de Educación del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desde 2005.

38 El “principio de diferencia” consiste en que: “Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos”. Es así que: “Mientras que la distribución del ingreso y de las riquezas no necesita ser igual, no obstante tiene que ser ventajosa para todos, y al mismo tiempo los puestos de autoridad y mando tienen que ser accesibles para todos”. Este principio de diferencia se formula también con la fórmula del *maximin*: las desigualdades son benéficas si, en ausencia de ellas, los menos aventajados estarían peor. John Rawls, *Teoría de la justicia* (1971), México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 68. Véase también: *Justicia como equidad. Una reformulación*, de octubre de 2000.

ya no es central la relación trabajo vivo/trabajo muerto (FT/maquinaria) industrial, que hace que se pase del “obrero productor” al “trabajador consumidor” (representado con la universalización de los celulares); la explotación desaparece pero se mantiene un control total del capital sobre la subjetividad y las prácticas (biopoder) de los individuos, convertidos en productores autónomos en red. De acuerdo con esta formulación, el conflicto con el capital se dirime sólo en el mercado como dominación; y por eso el objetivo socialista de reducir la desigualdad se lleva a cabo con las políticas sociales para reducir la desigualdad de género, étnica, educativa y de manera focalizada para hacer “subir” a los más desventajados en sus ingresos; así como acciones para crear una nueva hegemonía cultural.

Este socialismo es concebido, además, como: “un ‘movimiento’ por ‘dentro’ y por ‘fuera’ del Estado –de sucesivas transformaciones que obstruyen la reproducción de las desigualdades y amplían las condiciones de igualdad”, que no está pensado en relación con algún “modo de producción determinado”³⁹. Sin embargo, es visible que la base material de ese socialismo realista está pensada desde el neodesarrollismo. En este movimiento que lo es todo, el incrementalismo democrático liberal-republicano no parece encontrar ningún límite en la reacción del capital para preservar su poder, es una acumulación democrática sin sobresaltos.

Dígase, en primer lugar, que esa formulación “marxista renovada” se sustenta en una mirada eurocéntrica, enfocada principalmente a la clase media profesional o técnica, que de ser empleada asalariada por el Estado pasa a la condición de *empresario individual* que vende de manera *independiente su producto de la era del conocimiento*, y que constituye la *nueva sociedad civil* de la Tercera Vía. Esa “desaparición” de la relación salarial, en buena medida por la relocalización productiva a la periferia –en ésta con agudizados rasgos expropiatorios que llegan a la relación esclavista– tampoco ha desaparecido de Europa, tal y como estamos viendo en las huelgas y ocupación de empresas en 2009. Mirando hacia América Latina, desde luego que ha cambiado la morfología del mundo del trabajo. La flexibilización laboral en el mercado de trabajo formal elimina las regulaciones jurídicas y contractuales sobre la relación trabajo-salario hacia

39 Tarso Genro, “É possível combinar democracia e socialismo?”, en *O Mundo real. Socialismo na era pós-neoliberal, op. cit.*, p. 20. Tarso Genro es ministro de Justicia de Brasil desde 2007.

un “resultado” individual por productividad; salario, tiempo de trabajo y demás condiciones laborales son precarizadas con la excusa ventajosa del desempleo; se elimina la negociación colectiva hacia una subordinada negociación individual del trabajador con el empresario; en algunos casos se terceriza la relación laboral a otras empresas, y en otros el trabajador es obligado a constituirse como una empresa individual que vende sus servicios a la empresa capitalista. La relación salarial no desaparece. En el sector informal también hay empresarios capitalistas y trabajadores. En todas estas formas de relación salarial, la esencia de la explotación en cuanto a la relación entre *trabajo necesario y plus-trabajo apropiado privadamente*, no sólo no desaparece sino que se intensifica. Y en el caso de los trabajadores informales convertidos en “empresarios” (micro, autoempleo), aunque la relación asalariada formal que supone ciertas reglamentaciones desaparece, se mantiene la condición asalariada sustantiva del no propietario, que supone obtener el ingreso con la venta del trabajo propio.

Pese a todas las críticas morales que estos “socialismos posliberales” le hacen al capitalismo por opresivo, por generar cultura individualista y enajenación, sus propuestas de reformas realistas no están en la dirección de superar al capitalismo sino de administrarlo.

Una vez más, la discusión actual no es de medios sino de fines, sobre la dirección hacia donde caminar. Reformulada como *posliberalismo o anticapitalismo*, apunta precisamente a exhibir el objetivo de las “reformas posliberales” de perpetuar al capitalismo realmente existente, y de que sólo reduciendo el poder del capital se puede superar al neoliberalismo.

En el seno de la izquierda anticapitalista también se está hablando de “posneoliberalismo”. En principio parece tan sólo una desafortunada utilización del mismo término que ha acuñado la derecha desde hace tiempo, pero no es ajena del todo a ciertas caracterizaciones del neoliberalismo que he discutido en este trabajo.

Desde luego, aunque esté claro hacia dónde quiere caminarse, para recorrer el camino que debilita el poder del capital, que no es lineal y tiene obstáculos a vencer, es necesario acrecentar la fuerza de los explotados y dominados, que el capitalismo en su modalidad histórica neoliberal redujo violentamente. Acrecentarla en términos económicos, sociales, políticos, institucionales y culturales. Lo que, en América Latina, está intrínsecamente entrelazado con el antimperialismo, pero no solamente.

La discusión posliberalismo/anticapitalismo no alude principalmente a los hitos del camino que pasan por una eventual sucesión gradual de acciones para ir desmontando las políticas económicas neo(pos)liberales, que está condicionada por la correlación de fuerzas existente, que no siempre permite hacer lo deseable en los tiempos requeridos. Pero debe tenerse claro que con una dirección equivocada, esas acciones no aseguran que la correlación de fuerzas se modifique a favor de los pueblos, y menos si se convierte la necesidad en virtud. Nunca hubo una relación de fuerzas continentales más favorable para enfrentar la destrucción imperialista. Iniciativas como el Alba son fundamentales, pero tampoco están libres de las ya analizadas concepciones posliberales de la derecha en la izquierda, o de las que surjan desde el sistema en el nuevo contexto de crisis general del capitalismo.

En este nuevo contexto cabe interrogarse si el capitalismo podría reformarse. No es descartable, pero no parece muy factible que pueda volver a converger con la reforma social como en sus “años dorados”, más allá de los discursos del momento. Hasta ahora, el reclamo por “regulación financiera” está pensado de la misma manera que hace diez años, dirigida a reforzar al gran capital parasitario, tanto financiero como productivo, que sigue imponiéndose como interés general de la clase.* Es posible que en el centro del sistema, si las presiones políticas son contundentes, aumente el gasto social para medidas compensatorias. Pero nunca debe olvidarse que las reformas en el centro del sistema se han sustentado exprimiendo a la periferia dependiente.

En América Latina, es muy previsible que con la crisis la burguesía se radicalice conservadoramente, apuntando a mayor represión contra las luchas populares o, con una táctica más política, con “pactos por el empleo” con más flexibilización, precariedad y disminución de los ingresos, explotando los temores de los trabajadores.

* Al finalizar este año 2011, y tras los sucesivos rescates al capital financiero y contracción de los gastos sociales en el centro capitalista, ya casi nadie se acuerda de la retórica “antineoliberal” del presidente Obama y de varios líderes europeos en 2008 y 2009. Pero aquella retórica entusiasmó incluso a varios “analistas” de izquierda. Sin embargo, permanece el argumento “progresista” (que desde hace más de diez años vienen planteando los “posliberales” de segunda y tercera generación) de que con regular al capital especulativo se puede llegar a un “capitalismo en serio”. Éste sería, insisten, el *neodesarrollismo transnacional*, no obstante que sus “logros” están en la base de la inmensa masa de ganancias introducida al “casino” especulativo

Esta radicalización conservadora incluye la desestabilización de los gobiernos de izquierda y centroizquierda. Que podrían seguir ganando elecciones en el corto plazo porque los pueblos saben que, aunque algunas de esas experiencias sean insatisfactorias, han sido mejores que bajo gobiernos de derecha. Pero a mediano plazo eso deberá seguir demostrándose. En las nuevas condiciones, no se podrán mantener los niveles de compensación social con la que algunos gobiernos han ido administrando la crisis y conservado una base social, a menos que los gobiernos utilicen el poder estatal que poseen para reducir el poder del capital: recuperar soberanía sobre los recursos naturales y sobre sus condiciones financieras; ampliar las áreas sociales de la economía; modificar las “reglas del juego” capitalistas hacia el trabajo; acrecentar el poder social y político de los dominados. Esto implica admitir el conflicto de clases como necesidad, hasta para la permanencia de los gobiernos de izquierda mediante elecciones.

En nuestra región, es notable la extensión de las luchas populares por la defensa territorial y los recursos naturales. Aunque todavía dispersas, tienen una profunda esencia anticapitalista porque resisten al gran capital imperialista, y también porque confrontan la dimensión energética, ambiental y alimentaria de la crisis civilizatoria del capitalismo. No tienen igual extensión las luchas contra la explotación de los trabajadores, formales e informales, regulares y precarios. No se trata solamente de luchar para impedir la salida de riqueza social de nuestros países, sino también de enfrentar la concentración interna del capital, que ningún régimen fiscal progresivo resuelve efectivamente a menos que se modifique la relación del trabajo y el capital. Para avanzar, es evidente que el neodesarrollismo y el socialliberalismo no son las alternativas de la izquierda aunque se autodenominen socialistas.

La crisis ha puesto la larga duración del análisis del sistema histórico capitalista en tiempo mucho más corto, y hasta episódico en lo que refiere a los problemas del poder y de la construcción del sujeto popular que lo hace posible. En las preguntas actuales han “vuelto” Marx y Rosa, pero también Lenin. Las respuestas a aquellas preguntas son más claras hoy, porque no estamos ante el capitalismo en maduración sino en senilidad. Pero éste no está derrotado, no renuncia a defender los privilegios, y aunque tiene poco margen para reformas que absorban las contradicciones que genera, todavía conserva una desproporcionada capacidad de

dirección ideológica. Las exigencias son hoy mayores porque está en juego la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, y ese derrotero debe ser efectivamente disputado.

COLECCIÓN  movimiento

Impreso en
Editorial Itaca, México D.F.
Piraña 16 Colonia Del Mar
Del. Tláhuac México D.F.
58405452

blog: <http://editorial-itaca.blogspot.com/>

Facebook: Editorial Itaca

Twitter: @editorial_itaca

Mil ejemplares

Noviembre de 2012

Oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorriente de lo aceptado. La conocida afirmación de Marx de que las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad, es menos tautológica de lo que parece y más difícil de demostrar de lo que se cree. Ideas que parecen obvias, lógicas, naturales, expresadas con palabras que todos usan para nombrar lo que "es". Un léxico que legitima la semántica que los poderosos socializan como sentido común, y que predetermina desde dónde se piensa la realidad, incluso para cuestionarla. Las ideas dominantes arraigan a través de procesos sociales que hacen "creíble" el modo como se les nombra, y condicionan las conductas. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas. No para descalificar a los oprimidos y sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores.

Con frecuencia esta árida responsabilidad intelectual y política se confunde con el pesimismo. El conocimiento no es pesimista ni optimista, persigue la objetividad. El pesimismo o el optimismo son el modo como hacemos frente a sus consecuencias prácticas, resignándonos a ellas o buscando superarlas. El empeño por estar a contracorriente de la hegemonía conservadora es, a su manera, una forma de lucha por la emancipación. Y es nuestra aspiración.

Espacio crítico Ediciones

COLECCIÓN  movimiento



9 786074 778373